

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

**El Fuero de Extranjería en España.. Volumen I,
Introducción**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Joaquín Blanco Ande

DIRECTOR:

Fernando María Castilla Maiz

Madrid, 2015

Rd. 175.447

TE
1631

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

FACULTAD DE DERECHO



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5317373019

INTRODUCCION AL FUERO DE EXTRANJERIA

VOLUMEN I



Tesis doctoral: "EL FUERO DE EXTRANJERIA
EN ESPAÑA",

por JOAQUIN BLANCO ANDE

Director de la Tesis: Dr. D. FERNANDO M^a

CASTIELLA MAIZ

Septiembre de 1.975.

70959962
1

P R E F A C I O

En el contexto internacional cada día más interdependiente, la temática de la extranjería debe ofrecer especial sugestión e interés a todos. Un pueblo que como el español acepta bien "a los que a su lado se establecen, y que se mezcla hasta fundirse con ellos, no puede tener rigor con los extranjeros, antes al contrario, debe dejarles franco el camino, sin oponerles dificultades, ni resistencias" (1), de ahí que en España, la problemática de la extranjería adquiere especial significación, si bien con acuñación prioritaria para el político, el sociólogo y el jurista.

Si para Francisco de Vitoria, es el hombre un "ser sociable por naturaleza y esta sociabilidad humana lleva como anejo inevitable la existencia del derecho de comunicación, es decir, de la libertad de cada ser humano para desplazarse de un lugar a otro" (2), no es menos cierto, a nuestro entender, que dicho "ius communicationis" vivifica y desarrolla la traslación de extraneum de uno a otro país, o por mejor decir, la presencia de extranjeros en un territorio es un trasunto fiel de la operatividad de —

(1) ARJONA COLOMA, Miguel. "Nueva Enciclopedia Jurídica", 1958 (voz extranjero)

aquel derecho. En el marco del presente trabajo, pretendemos aportar nuestro grano de arena, poniendo de relieve, sin trasnochados chauvinismos, el apoyo y trato favorable que la extranjería ha obtenido en nuestra geografía. Tutela que se ha diversificado en numerosos privilegios de todo tipo, y que en las páginas siguientes aglutinaremos en el haz integrador del Fuero de Extranjería. Si "el pueblo español, en vez de autóctono, cosa que no pretendió jamás, es por el contrario, hijo y resultado de la Historia, mezcla de casi todos los elementos étnicos que forman la especie humana, y su territorio, morada y domicilio de extranjeros" (3), no cabe duda que una nación así, proclive a aceptar "extraneums" y soldarse con ellos, tenía - por fuerza que dictar una legislación generosa - quizás pródiga - hacia - el foráneo.

Mediante el Fuero de Extranjería, España, no sólo instauró una vía excepcional de administración de justicia para el extranjero creando jueces conservadores o privativos para el mismo, sino que les rodeó además - de tal cúmulo de privilegios personales, fiscales, mercantiles, etc. etc. que bien pudiera decirse - hipérboles aparte - que nuestra nación hizo dejación en algunas ocasiones de su facultad soberana de igualar a regnico-

(2) HERRERO Y RUBIO, A.- "Historia del Derecho de Gentes", Valladolid, 1955. pág. 63.

(3) CONDE Y LUQUE, R.- "Oficios del Derecho Internacional Privado", Madrid, 1901, pág. 443

las y foráneos, confiriendo a éstos últimos, unos privilegios de los que - no gozaban ni siquiera los primeros. De ahí la trascendencia según nuestra óptica, de hacer aflotar a la superficie doctrinal actual, - arrancándola de las páginas de la Historia - una institución jurídica enraizada en nuestro ordenamiento jurídico cerca de tres siglos, y en cuya composición figuran editamentos, de Derecho Internacional Público y Privado, Historia del Derecho, Derecho Procesal, vislumbrándose incluso en su contexto, esencias y repercusiones de Derecho Político. Por eso mismo, llamé más poderosamente la atención, al autor de estas líneas, que pese al recio afinamiento - del Fuero de Extranjería en nuestra normativa, y que pese a la multiplicidad de disposiciones de todo tipo y rango, que lo han regulado, escaseen - hasta extremos inverosímiles y paradójicos, textos, que lo analicen y glosen con devoción y profundidad.

La articulación del Fuero de Extranjería en nuestro ordenamiento jurídico y su posterior desarrollo, sólo puede entenderse adecuadamente, si no hacemos abstracción del inveterado talante hospitalario del español hacia el extranjero. En relación con este último aspecto, bien puede sostenerse que "el pueblo español es un pueblo esencialmente cosmopolita. Su - gran tendencia de asimilación hizo que se fundiese con las diferentes razas que ocuparon su territorio. Los españoles - sigue diciendo - reciben bien y sin prevenciones a los extranjeros que vienen a habitar en el país; se mezclan con ellos, mediante los matrimonios y dan nuevo vigor a su ra-

za" (4); por ello no es extraño que respecto a la consideración jurídica de los extranjeros en la vida mercantil española se observa que "la legislación española se ha producido siempre en este punto con la inmensa amplitud humana que caracteriza en todo momento al espíritu de nuestra Patria" (5). El trato del regnicola hacia el extranjero, se ha conformado - y se acomoda hoy en día - al criterio de Fray Francisco de Vitoria, - cuando manifestaba en su obra, de Los Indios nuevamente hallados, que "Todas las naciones consideran inhumano recibir mal, sin causa justa, a huéspedes y peregrinos, salvo que obren mal, al llegar a tierra ajena" (6). Se ha reiterado que el ciudadano español "trata sin prevención al extranjero, y se mezcla con él" (7), es más, en ese sentido, entendemos que sólo motivaciones religiosas distanciaron en su día a católicos, judíos y moros.

(4) ARJONA COLOMO, M. "Derecho Internacional Privado", Parte especial, Madrid, 1949, pág. 91.

(5) SIMARRO PUIG; "Consideración jurídica de los extranjeros en la vida mercantil española" (Publicaciones del Colegio Notarial de Barcelona. Cursillo del año 1941). Barcelona, 1942. pág. 206.

(6) GONZALEZ HONTORIA, M.: "Tratado de Derecho Internacional Público", Vol II, pág. 343.

(7) ORUE, J. Ramón: "Manual de Derecho Internacional Público", Madrid, - 1928, pág. 153.

En consecuencia es oportuno recordar que razas y pueblos como los celtas, fenicios, griegos, francos, árabes y bereberes, arios o semitas, han ocupado nuestro territorio con carácter permanente; se lo apropiaron por la fuerza de las armas las más de las veces, convirtiéndolo - de facto primero, de iure después -, en su morada.

La expansión del fenómeno, sociológico, llamado extranjería en la época actual se debe a que "desaparecieron los exclusivismos de los antiguos tiempos y se estableció el cosmopolitismo de las modernas sociedades" (8), fenómeno umbilicalmente unido al mejoramiento asombroso de las técnicas del transporte, que ha permitido un trasvase urgente de extraneums a otros espacios geográficos. De ahí la afirmación de que incuestionablemente "es un hecho actual, el aumento constante de la afluencia extranjera en nuestra Patria. Tal contingencia, en sí, no ofrece interés para el derecho, por lo menos de una manera directa; pero cuando el elemento extranjero no se limita a "pasar", cuando se incrusta en la vida nacional y establece relaciones jurídicas, patrimoniales, familiares y sucesorias, el Derecho debe entenderlas debidamente, dictando las normas necesarias que regulan esta intervención extranjera en la vida pública española" (9).

(8) PLANAS SUAREZ, S.; "Los extranjeros en Venezuela" (su condición ante el derecho público y privado de la república), 2ª edición, Lisboa, 1917, pág. 1.

(9) GIL MENDOZA, R.: "Síntesis de la legislación española sobre extranjeros", Rev. de D. Notarial, Año X, núms. XXXVII-XXXVIII (Julio/Diciembre 1962), pág. 11.

El elevado número de foráneos que entran y permanecen en nuestro país no representa un espectáculo "ex novo" para nuestra geografía; ya en 1863, un anónimo internacionalista, escribía que "la concurrencia de extranjeros a nuestro país es ya muy considerable, según lo demuestran, con la irrefutable lógica de los números, los censos de población formados por el gobierno en los últimos años, y naturalmente será mayor cada día por consecuencia de la civilización, ante la cual van desapareciendo las barreras que separan los Estados de Europa, por el incesante y progresivo desarrollo del comercio y de la navegación, por el progreso sucesivo de la industria y la minería, y hasta por el efecto de los trastornos y revoluciones políticas de las naciones, tan frecuentes, por desgracia en nuestra época y tan ocasionadas a la emigración de los que figuran en ellas". (10).

Con un criterio temporal restringido puede aceptarse que en la época moderna, la población de todas las naciones estaba formada, "no sólo por los autóctonos, sino también por los extranjeros que en número muy crecido, en general, habitan los distintos países del globo" (11); Semejante afirmación es dable, a nuestro juicio, extenderla a la Edad Media, y por supuesto a la Edad Contemporánea, donde la facilidad de traslación por

(10) J.L.F.; "El fuero de Extranjería", (Rev. Gen. de Leg. y Jurisp.) Año 11. Tomo XXII, Madrid, 1863, pág. 27.

(11) PLANAS SUAREZ, S.: "Tratado de Derecho Internacional Público". Vol. I Madrid, pág. 1.

la sorprendente evolución de los medios de transporte ha posibilitado, un mundo al alcance de todos, configurándolo en la práctica como más pequeño. Se admite en esta hora por la communis opinio de que los pueblos no obtienen el mayor grado de su desarrollo espiritual y material, sino a través del intercambio de culturas, ideas, tecnología y energías, entre los hombres de las diferentes razas.

Se reconoce en los Estados civilizados actuales que el hombre es un ser con derechos intangibles, que es preciso tutelar en las recíprocas relaciones sociales. De aquí se infiere, "que todo individuo, sin distinción de nacionalidad, halla en nuestros días, protección para su persona y sus bienes, en todas partes a donde se extiende la acción del Derecho Internacional" (12); de tal suerte que la irrupción del hombre en un suelo extraño ha conllevado tradicionalmente una situación de anomalía comunitaria, que ha demandado respuestas y tratamientos acordes con aquel fenómeno. Y es que en definitiva, el hombre es "titular de derechos internacionales que deben ser respetados en cualquier lugar donde se encuentra. Y ello debe ser así, porque el hombre es en sí mismo un núcleo centrífugo de intereses que al mismo tiempo se proyectan en el mundo circundante" (13). A nuestro modo

(12) TORRES CAMPOS, M.: "Elementos de Derecho Internacional Público", 3ª edición, Madrid, 1912. pág. 128.

(13) TOMAS ORTIZ DE LA TORRE, J.A.; "El régimen jurídico de Extranjería en la España del siglo XVIII y la participación del extranjero en la industria nacional" (tesis doctoral) Univ. Complutense, F. de Derecho, Madrid, 1972, pág. 1.

de vez, es insoslayable que dentro de la función estatal y el interés de vinculaciones intercomunitarias, debe tener especial acogida la protección y tutela del hombre, simplemente por devenir sujeto de derechos en razón de su condición humana, independientemente de su nacionalidad, lo que nos lleva consecuentemente a amparar la extranjería, toda vez que a tenor de aquel criterio, el individuo merece ser salvaguardado, sin discriminaciones por razón de su ciudadanía.

Estimamos que están vigentes todavía hoy en día, una afirmación, - pronunciada en la primera mitad del siglo XIX, respecto del Fuero de Extranjería "que cada día sea mayor la necesidad de su estudio, de parte de los que intervienen en la administración de justicia, para poder ocurrir a las necesidades y exigencias continuas de la práctica y a los frecuentes y repetidos conflictos de jurisdicción que ocasiona" (14)

No quisiera antes de concluir este prólogo, preterir una sugerencia, ni silenciar un constante estímulo. La sugerencia relativa a la génesis de esta tesis, vino dada por la honda motivación que en mi ánimo produjo la - certera visión de mi querido Maestro, Dr. D. Fernando M^a Castiella Maiz, - ilustre catedrático e internacionalista, inagotable orientador y patrocinador de este trabajo. El estímulo permanente - en forma de consejos y atinadas ideas -, que en el diario tejer y destejer del mismo, he venido reci-

(14) J.L.F.; op. cit. pág. 27.

biendo primordialmente, deberá ser atribuido tanto al Director de este Trabajo, como a los renombrados Profesores Díez de Velasco y Gibert. Si algo de positivo puede espigarse en las páginas siguientes, habrá de ser acreditado en el buen quehacer impulsor y coordinador de todos ellos. Gratitud y reconocimiento a mis mentores, y mi grato recuerdo tanto a los funcionarios de los Seminarios de Derecho Internacional Público y Privado, Derecho Procesal e Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, como a los de Derecho Internacional Público de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la misma Alma Mater, extensivo también a los funcionarios de la Biblioteca General de la Universidad Compostelana, y a los de la Biblioteca Nacional, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Instituto Francisco de Vitoria e Instituto de Estudios Sindicales, Archivo Histórico Militar, por la paciencia con que han soportado tanto mis reiteradas demandas de textos, como mis periódicas visitas dedicadas a la investigación y documentación.

PARTE PRIMERA

VOLUMEN PRIMERO

INTRODUCCION AL FUERO DE EXTRANJERIA

TITULO I

INTRODUCCION AL FUERO DE EXTRANJERIA

CAPITULO I

SIGNIFICACION, GENESIS Y BENEFICIARIOS DEL FUERO DE EXTRANJERIA

SECCION 1ª

1. Significación del Fuero de Extranjería. Introducción. - La expresión - Fuero de Extranjería no es unívoca, sino equívoca, de ahí que se presente ambigua ante el exégeta. ¿Qué significado, encierra pues, dicha frase? Una clarificación de la temática obliga a deslindar previamente, por separado, las acepciones de "Fuero", "Extranjero" y "Extranjería", y una vez delimitados dichos vocablos, autoriza a dar una definición global del conjunto.
- 1.1. Etimología, acepciones y concepto de Fuero. - La palabra castellana - "Fuero", tiene fuerte raigambre en nuestro idioma; recuérdese a este respecto su uso durante la Edad Media, como símbolo de privilegio legal de una ciudad o de una persona, o simplemente como rótulo de un conjunto de leyes, o expresión de lo que hoy se entiende por poder jurisdiccional. Fuero, como vocablo a secas, proviene del latín "forum", esto es, tribunal, de ahí que entre las numerosas acepciones - que nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, recoge, sea precisamente esta última, una de ellas. No obstante, para

un enfoque más metódico, que pretendemos alcanzar a lo largo del presente trabajo, creemos preferible cargar el acento en varias acepciones, que aglutine aquel primer cuerpo depurador de nuestra lengua, a saber: Ley o Código dados para un municipio durante la Edad Media. "Jurisdicción o poder". "Aquel de que gozan unas personas para llevar sus causas a ciertos Tribunales por - privilegio del cuerpo de que son individuos", asimismo "estar o quedar sujeto al de un juez determinado" (1)

La voz Fuero "tiene distintas acepciones, bastando decir que generalmente, se usa en el de reunión o agregado de los privilegios que se conceden a cierta clase de personas, bien que algunas veces se emplea también en el de jurisdicción y potestad de juzgar" (2). Como duplicado culto, Fuero es equivalente a "Foro", "jurisdicción para sentenciar causas", "los tribunales" y por alusión al "foro o plaza de los romanos" (3). El término Fuero "se divide en ordinario y especial o privilegiado. Fuero ordinario, es el que gozan todos los ciudadanos; y también es el poder de conocer de todas las causas - civiles y criminales en general, exceptuándose sólo las que correspondan a juzgados especiales. Fuero especial o privilegiado, es la reunión de exencio

(1) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid, 1970, Voz Fuero, pág. 640.

(2) BACARDI, A.; "Nuevo Colón o Tratado de Derecho Militar de España y sus Indias", Tomo I, Barcelona, 1864, pág. 1.

(3) Diccionario de Ciencias Sociales, Madrid, 1975. voz Fuero, pág. 922. (colab. Blasco Quintana, J.)

nes concedidas a determinada clase de personas, y también el poder de conocer de las causas civiles y criminales relativas a ciertas personas que las leyes han sustraído de la jurisdicción ordinaria" (4). Por otro lado, Fuero, según la ley 32, título II, Partida 6ª, es "el lugar donde se celebra el juicio, o donde se administra justicia; pero en el sentido en que nosotros lo tomamos, es la Autoridad o Tribunal, a cuya jurisdicción está sujeta la persona contra quien se procede gubernativa o criminalmente. También se entiende, por fuero, el conjunto de privilegios o prerrogativas, que el Estado concede a determinadas instituciones" (5).

- 1.2. Etimología, acepciones y concepto de extranjero. - La expresión "extranjería" se deriva del vocablo "extranjero", de ahí que no debamos dar un concepto de aquella, sin antes ocuparnos del significado de este último. La palabra extranjero hiende sus raíces en la francesa y provenzal "estrangier", proviniendo ésta última del latín "extraenarius", de extraneus, extraño.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (edición 1970) nos lega dos claras acepciones de lo que entiende por extranjero. Acepción primera, de extranjero: "Que es o viene de país de otra soberanía". Acepción "Natural de una nación respecto a los naturales de cualquier otra" (6).

(4) BACARDI, A., op. cit. pág. 1.

(5) GRACIA Y HERNANDEZ, JOAQUIN. "Justicia militar, nociones teórico prácticas de toda clase de procedimientos judiciales", Tomo I, Madrid, 1898, pág. 17.

(6) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, (19 edición, Madrid 1970). Voz Extranjero, pág. 600.

La Nueva Enciclopedia Jurídica Española (F. Seix) emite los dos - siguientes significados del extranjero. "Natural de una nación con respecto a los nacidos en cualquier otra" y "que es o viene de país de distinta denominación de aquella en que se le da este nombre" (7)

Coinciden como es obvio, casi con las mismas palabras, las dos - acepciones que nos aportan nuestro Diccionario de la Real Academia de la Lengua y la Enciclopedia Jurídica Española, solo levísimos detalles de - matiz, las diferencias, pero el fondo es el mismo. Extranjero para noso- tros, será y por exclusión, "aquel que no pertenece "de facto, ni de iu- re" al censo de nacionales, del país donde habita".

Para Esteban Ferrater, extranjeros serán "Los súbditos de un Es- tado, mientras se hallan en otro y no adquieren naturalización en él, se llaman extranjeros" (8).

Según "Harry Estill Moore (Diccionario de Sociología, México, B. Aires, 1949) se puede definir el extranjero, como: 1º) Persona que vive en determinada comunidad y que por consiguiente, acepta hasta cierto punto, la vida del lugar, pero a quien no se le confiere status como miembro del grupo propio por sus elementos originarios. 2º) Individuo que acepta esa ausencia de identificación con el grupo en cuyo seno vive, y que, por

(7) Nueva Enciclopedia Jurídica, (F. Seix), voz extranjero. Tomo IX. Barce- lona, 1958, pág. 403.

(8) FERRATER, E.: "Código de Derecho Internacional", Tomo II, Barcelona, 1947. pág. 232.

eso, se siente libre ante las formas más sutiles de control en él dominantes".

(9)

Sáenz de Hermúa, señala que es extranjero, "el transeúnte que viene de paso a estos reinos sin ánimo de permanecer en él" (10). Sánchez de las Matas recoge una definición diferente de la anterior, extranjero es "el que no ha na cido en territorio español, ni es hijo de padre o madre españoles, ni ha gana do carta de naturaleza" (11).

El barón Leopoldo de Neumann, aclara que "se llama súbditos temporales, en un sentido más estrecho, a los extranjeros que residen más o menos tiempo en un Estado sin contraer con él vínculos políticos y a los que poseen inmue bles en su territorio". (12)

Lucio M. Moreno Quintana por su parte dice que son extranjeros "los in dividuos pertenecientes a distinta población que la del Estado en cuyo terri torio se hallan" (13)

(9) Diccionario de Ciencias Sociales, Instituto de Est. Políticos, Madrid, 1975. (Voz extranjero), Coleb. Montserrat Zapater, O. pág. 857).

(10) SAENZ DE HERMUA; Diccionario Recopilador de los Puntos de Derecho resuel tos en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia desde 1838 hasta fin de Dic. 1885, Tomo I (voz extranjero) pág. 184.

(11) SANCHEZ DE LAS MATAS, E. Novísimo Diccionario de Legislación y Jurispru dencia, Madrid, 1883, (voz extranjero), pág. 144.

(12) NEUMANN, Leopoldo; Derecho Internacional Público, (Traducción de Aniceto Sela), Madrid, pág. 60.

(13) MORENO QUINTANA, L.M.; Tratado de Derecho Internacional, Edit. Sudameri cana, 1963, Vol. I, pág. 254.

M. Díez de Velasco Vallejo precisa que "para determinar quienes son extranjeros para un Estado en concreto se recurre a un criterio de exclusión. En principio se consideran Extranjeros a todos aquellos que no son nacionales del país. Este concepto también es válido, para los países que asimilan al extranjero con el apátrida, o persona sin nacionalidad "(14).

Planas Suárez, afirma que "dícese del extranjero el individuo que no es ciudadano o nacional del Estado en que se encuentra, o como escribe Conde y Luque, son los individuos sometidos simultáneamente a más de una soberanía, por su persona, por sus bienes, o por sus actos" (15).

Para Lucas Fernández, extranjero es, desde el punto de vista español, "toda persona que no ostenta la nacionalidad española"(16).

Joaquín Thomas, precisa que "al igual que en muchas legislaciones no se encuentra en la española una definición stricto sensu de la condición de extranjero; su determinación se encuentra, en forma negativa en el artículo 17 del Código Civil, que enumera (completado por los artículos 18 y 19) quienes son españoles, sobreentendiéndose que serán extranjeros

(14) DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M.: Instituciones de Derecho internacional Público, Tomo I, pág. 313. (edit. Tecnos)

(15) PLANAS SUAREZ, S.: Tratado de Derecho Internacional Público. Vol. I. Hijos de Reus editores, Madrid, pág. 1.

(16) LUCAS FERNANDEZ, F.: "La contratación en España por Extranjeros. Principales problemas que plantea", Rev. de Derecho Privado. 1973. Pág. 53.

todos los individuos no comprendidos en los casos taxativamente enunciados" (17).

Castro y Bravo, puntualiza que extranjero "es el extraño a la comunidad nacional" (18). A idéntica conclusión llega Castán Tobeñas (19). Asimismo en el Diccionario Enciclopédico Durvan, se insertan dos acepciones parejas a la anterior; por un lado, extranjero "es el que viene de país de otra soberanía" y de otra parte es "el natural de una nación con respecto a los naturales de cualquier otra (20). En el Diccionario Espasa-Calpe, al examinar el concepto de extranjero desde la óptica jurídica, destaca que "se llama así al súbdito de un Estado con relación a los de otro, constituyendo por tanto, una condición relativa y recíproca". (21)

Bonet Correa, subraya que salvo la referencia a las personas consideradas como extranjeros en el Real Decreto de Extranjería de 1852, en "el resto del ordenamiento español no se encuadra una definición concreta y precisa de quien es extranjero", y añade "su determinación se hace

(17) THOMAS, Joaquín: El extranjero ante el Derecho Público Español. Rev. de Información Jurídica nº 90, Nov. 1956, pág. 1273.

(18) CASTRO Y BRAVO, F.: Derecho Civil de España II, parte 1ª, Madrid, 1952, pág. 372.

(19) CASTAN TOBEÑAS, J.: Derecho Civil Español, Común y Foral. I, 2, 1956 pág. 262.

(20) Diccionario Enciclopédico Durvan, (voz extranjero), 1972. pág. 174.

(21) Diccionario Espasa Calpe, (voz extranjero), pág. 1565.

de un modo negativo, es decir, por contraposición a los que se tienen por nacionales (arts. 17, 18 y 19 del C. Civil), sobreentendiéndose que serán extranjeros todas aquellas personas no comprendidas en los casos taxativamente enunciados (22)

Con carácter general podemos afirmar "que la condición del extranjero en los tiempos antiguos es la condición del inferior o del enemigo. Como inferior se le desprecia y se evita su contacto con el aislamiento; como enemigo se le combate y, venciendo por la fuerza, se le esclaviza y se le pone a su servicio. Los pueblos teocráticos siguen el primer camino; y los pueblos comerciantes y conquistadores, el segundo". (23)

- 1.3. Acepciones y Concepto de Extranjería.— Teniendo presente lo anterior, no es extraño que el ya mentado Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos configure la Extranjería, como "Calidad y Condición que por las leyes corresponden al extranjero residente en un país, mientras no es tá naturalizado en él", o con un enfoque más normativo, nos la define como: "Sistema o conjunto de normas reguladoras de la condición, los actos y los intereses de los extranjeros en un país" (24).

(22) BONET CORREA, Los Extranjeros en el ordenamiento jurídico español, Rev. General de Legislación y Jurisprudencia, Nº 218, Año 1965, pág. 372.

(23) Nueva Enciclopedia Jurídica, (F. Seix), Tomo IX, pág. 419-420.

(24) op. cit. pág. 600.

La primera acepción de la Extranjería, de nuestro diccionario lin
guístico, es recogida prácticamente "ad podem litterae" por la Enciclopedi
a Jurídica Española" (25), ¿qué razón hallamos en el orden de acepcion
es establecido por el Diccionario para fijar el concepto de Extranjería?
¿Por qué la Enciclopedia Jurídica Española, subraya la 1ª acepción, y preti
ere, la segunda?

Creemos que no es casual el orden de colocación de acepciones, en
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a fin de delimi
tar la noción de Extranjería. Como tampoco, es fruto del azar, el que
la Enciclopedia Jurídica Española, recoja la 1ª acepción y no la segunda.

El quid de la cuestión estriba a nuestro modo de ver en que la prime
ra noción, es una acepción subjetiva, de mayor rango y entidad que la -
segunda, que es eminentemente fría legalista y objetiva.

La primera pone especial énfasis en la persona, en el "status" del
sujeto al que se refiere Ortega, la segunda, centra la definición en el -
conjunto de disposiciones que se proyectan hacia el extranjero, quedando
éste por ende, en un segundo plano. No tiene, pues, nada de "extraño", -valga
la redundancia conceptual -, que exista ese orden de prioridad en la -
formulación de aquellas acepciones por parte del Diccionario de la Real -

(25) op. cit. pág. 545.

Academia de la Lengua Española y esa especial consideración de la primera, en la Enciclopedia Jurídica Española.

Extranjería es: "La calidad y condición que por las leyes corresponden al extranjero residente en un país extraño al suyo, mientras no se naturaliza en él" (26)

Toda la evolución histórica en el concepto de extranjería, descansa en la oposición que los particulares y egoístas intereses de los pueblos presenta a la libre comunicación interestatal" (27)

Para el prof. Díez de Velasco, es preciso constatar que "recientemente, la doctrina y la práctica internacionales están en evolución respecto a la extranjería". Y agrega a continuación "En lo que se refiere a los derechos individuales de los extranjeros, se intenta superar la dicotomía nacional-extranjero al considerarse que los derechos que les amparan tienen su base, en unos y otros, en la condición humana, y por tanto deben ser iguales" (28)

El Derecho de Extranjería, "es comparable a un árbol, cuyas raíces se afincan en el Derecho Político, pero cuyo follaje se extiende sobre todas las disciplinas jurídicas. En efecto, la razón de ser de la extranje-

(26) Enciclopedia Jurídica Española, (voz extranjería) pág. 545.

(27) ORUE, J.: Ramón: "Manual de Derecho Internacional Público", Madrid, Madrid, 1928, pág. 124.

(28) DIEZ DE VELASCO; op. cit. pág. 314.

ría radica en la oposición jurídica entre nacional y extranjero, que plasma, dentro del Derecho interno, en el Derecho Político. Las diferentes ramificaciones, en cambio, que la posposición del extranjero engendra, pueden alcanzar cualquier materia jurídica" (29)

- 1.4. Acepciones y concepto del fuero de Extranjería.-- Existe una opinión generalizada de calificar al R.D. de 17 de noviembre de 1.852 como sinónimo de Fuero de Extranjería; no obstante esta usual calificación, entendemos que aquella expresión no debe quedar enmarcada exclusivamente por el R.D. de referencia, pese a que en su contexto se contemple dicho cauce judicial de los extraneum. Al admitir esa calificación, con idéntico razonamiento habría que denominar Fuero de Extranjería al cúmulo de Capítulos, Reales Cédulas y Tratados que lo han reconocido y amparado con anterioridad a la citada Disposición Real de 1852. A nuestro juicio, el vocablo "Fuero de Extranjería", no es unívoco, sino equivoco; caben dos acepciones del mismo, una amplia y otra estricta.

Por ello, a la vista de las consideraciones anteriores, en definitiva, el significado de Fuero de Extranjería, será, - según nuestra óptica - en una acepción lata: Norma con privilegio concedida al extraneum - mientras no se naturaliza en el país en que se reside. En una acepción -

(29) GOLDSCHMIDT, W.: "Sistema y Filosofía del Derecho Internacional Privado", Tomo I, (Barcelona, 1948) pág. 269-70)

stricto sensu, será Jurisdictio especial otorgada al extranjero residente en un determinado Estado. A lo largo de esta tesis, tendremos oportunidad de voslumbrar bajo la rúbrica de la normativa española relativa al Fuero de Extranjería, las dos acepciones, lata y estricta, que acabamos de esbozar.

SECCION 2ª - GENESIS DEL FUERO DE EXTRANJERIA

2.1. Introducción.- Según nuestra óptica, las instituciones jurídicas en cualquier sociedad política no surgen por generación espontánea; son por el contrario fruto de un lento proceso de elaboración en el que de una realidad fáctica concreta se desemboca - por convencimiento, del propio legislador unas veces, otras por conveniencias socio-políticas- en una nueva figura del Derecho, que aglutina las aspiraciones populares dentro del molde normativo de la parcela jurídica. El Fuero de Extranjería como singular vía de administración de justicia de los extranjeros en España, no es a nuestro entender, una excepción de aquella tesis. Su gestación es compleja, se materializa, no sólo en función de un acto de voluntad gracioso de nuestros monarcas, -tan peculiar de la época -, ni se obtiene exclusivamente por el artilugio de la reiterada presión diplomática, o surge ex novo como concesión política a cambio de contraprestaciones de otras potencias; en su alumbramiento, influyen dichos condicionamientos, sumados a -

les del talante hospitalario y generoso del pueblo español hacia todo lo extranjero - constante histórica de nuestra conducta -, la dejadez o débil maniobrabilidad dialéctica de algunos políticos al discutir las cláusulas de un Tratado, y la situación - en algunos casos - de fragilidad política frente a nuestro interlocutor, o simplemente como medio de favorecer el comercio español con otros países al amparo de la atracción que ejercía la Casa de Contratación de Sevilla, dispensando a los mercaderes que nos visitaban, un trato especial de favor en materia jurisdiccional, comercial, fiscal y personal. En ese cúmulo de inspiraciones - con predominio de unas u otras, según las circunstancias históricas - radica a nuestro modo de ver la aparición del Fuero de Extranjería.

En el decurso histórico de nuestro Fuero de Extranjería, hay que distinguir dos etapas, claramente diferenciadas, según el órgano encargado de instrumentarlo. Una primera, fue la que arranca en 1.607 fecha de su creación por Felipe III, y concluye en 1.759, cuando desaparece la figura del Juez Conservador según R.D. de 21 de diciembre de 1759, en la que aplica la ley, un juez privativo, procedente de la administración de justicia ordinaria. Y un segundo estadio que aflora a partir de 1760 y culmina con el Decreto de Unificación jurídica de 6 de diciembre de 1868, - derogador de aquel Fuero -, en el que imparten justicia como sucedáneos del Juez Conservador, los Gobernadores de plazas marítimas o los capitanes generales de los demás puertos -según los casos - en primera instancia, y co

mo recurso in extremis la vía del Tribunal Supremo de Guerra, Marina y Extranjería. El matiz que separa esas dos fases, arranca de la distinta procedencia del órgano encargado de administrar justicia. En la primera, el iudex conservador - denominación que desaparece en la segunda -, es un Juez que proviene de la vía ordinaria judicial, para impartir una jurisdicción excepcionalizada. El tránsito es de un cauce ordinario, a una vía singular de la administración de justicia. En la segunda, es un juez excepcional, sustraído del Fuero Militar, quien se erige en árbitro de una justicia asimismo peculiarizada. En ambos casos, la procedencia del iudex no desnaturaliza el carácter de Fuero privilegiado de la extranjería. Ni el juez de la jurisdicción ordinaria, por su origen, convierte el Fuero de Extranjería en rama inmersa en aquella, -porque su cualidad de juez conservador prima por encima de cualquier otra consideración - ni la autoridad militar por el hecho personal de serlo, confiere a su jurisdicción exclusiva sobre la extranjería - sello castrense. El extranjero en suma que recurre a partir de 1760, al Fuero de Extranjería, no impetra "per se" el auxilio del Fuero Militar, que no le corresponde, sino la ayuda de una jurisdicción privilegiada civil, servida por militares. La confusión personal del cargo puede hacer creer al exégeta poco metódico, que en el segundo estadio, estamos en presencia de un Fuero Castrense orientado hacia el extraneum, cuando a nuestro juicio la realidad fué bien distinta. El Fuero Militar proyectaba su jurisdicción hacia personas ligadas a la Milicia Española, pero no podía

por ende adscribir a su auctoritas a unos extranjeros ajenos totalmente a la misma.

Otra nota característica del Fuero que glosamos, es la de representar una institución conservadora; me explico, la misma nace con la Casa de Austria, se mantiene con la Casa Borbónica, y se extingue en el período revolucionario de 1.868. Su ciclo vital por tanto le otorga aquel significado. Piénsese que desde un punto de vista romántico o espiritual, la figura se engarza perfectamente con la idea monárquica -- o conservadora --, de mantenimiento de fueros especiales, y resulta extraña en regímenes revolucionarios de corte popular, en que prevalecen criterios de oposición a la pluralidad de jurisdicciones.

2.2. Aparición del fuero. -- No existe unanimidad en la doctrina científica en cuanto al señalamiento de una fecha concreta, para delimitar el nacimiento del Fuero de Extranjería en España.

El Fuero de Extranjería "tiene su origen en la figura del llamado juez conservador de extranjeros, institución que nacida como jurisdicción privilegiada de carácter particular y excepcional, termina por generalizarse, - convirtiéndose en régimen común, aplicable a todos los extranjeros. Aunque no cabe precisar fechas concretas, puede decirse que este proceso de formación del Fuero de Extranjería, está ya en marcha a comienzos del siglo XVII y se presenta consolidado en el primer tercio del siglo XVII aproximadamen

te alrededor del año 1727" (30)

Apunta otro historiador que "en la edad Moderna existen los Jueces conservadores. Se nombran en favor de los comerciantes hanseáticos de Sevilla a principios del siglo XVII. Se extiende después a franceses e ingleses. Estos por el Tratado de los Pirineos, lo consiguen en la Corte (1663), después de haber ejercido en función el Consejo de Guerra" (31)

Por su parte, cierto autor, alega que "pretenden algunos que el Fuero de Extranjería tuvo principio en España por el Tratado de Munster de 1648, por el cual el Sr. D. Felipe IV concedió multitud de exenciones y privilegios a los súbditos de los Estados Generales de las Provincias Unidas, pero sí bien es cierto que aquella generalidad de concesiones sirvió posteriormente como de modelo para pactos con otras potencias, y que de allí mismo pudo deducirse, como una ampliación, el Fuero de Extranjería, también lo es que en el tratado de Munster nada se pactó directa y expresamente sobre este particular" (32). La opinión de Riquelme sustentadora de que el Tratado de Munster de 1648 no concertó directamente el Fuero de Extranjería, con los -

(30) PECOURT GARCIA, E.: "Estudios de Derecho Internacional Público y Privado", (Homenaje al Profesor Luis Sela Samfíl). Una institución singular en la Historia del Derecho Internacional Privado Español: El Fuero de Extranjería, Universidad de Oviedo, Vol. II, pág. 884.

(31) GIBERT, Rafael: "L'Etranger", (Recueils de la Société Jean Bodin). Bruxelles, 1958, Vol. X. "La Condición de los extranjeros en el antiguo derecho español", pág. 194.

naturales de las provincias Unidas de los Países Bajos, encuentra su apoyo en el art. 16 del citado pacto, en el que sólo implícitamente, y por vía de remisión analógica aplica aquel Fuero, otorgado en 1607, a los Hanseáticos.

Riquelme se cree en la necesidad de justificar más adecuadamente la aseveración anterior, - precisando su postura acerca de la génesis del Fuero de la Extranjería - y desarrolla su planteamiento precedente, con este enfoque: "La primera vez que hubo de pactarse expresamente y con alguna solemnidad fué en el Tratado de 1667 con la Gran Bretaña. Allí y en los siguientes Tratados, se principió a dar fuerza a una concesión privada hecha por el Sr. D. Felipe IV en 1645 en favor de algunos ingleses residentes en Andalucía, con motivo de servicios, harto mezquinos en verdad, si se comparan con la importancia y trascendencia de la concesión que motivaron". (33)

Como génesis del Fuero se señala por algún comentarista anónimo que "se encuentra en las inmunidades que Carlos V y Felipe II concedieron a las ciudades hanseáticas, y en los famosos privilegios que después concedió Felippe III a éstos últimos el 28 de abril de 1607" (34)

(32) RIQUELME, A.: "Elementos de Derecho Público Internacional". T.I. Madrid

(33) Ibid, op. cit. pág. 377-8.

1,849. Pág. 377.

(34) A. "El Faro Nacional" (Revista de Jurisprudencia, de Administración, de Tribunales y de Instrucción Pública), Año 3º, nº 212 (24 de julio de 1853) "El Fuero de Extranjería", pág. 90.

Comenzó el Fuero de Extranjería, "por un privilegio concedido en tiempo de Felipe IV a los ingleses, según Real Cédula de Noviembre de 1645, sancionado en diferentes convenios con Inglaterra y extendido a otros países - por la Cláusula de "nación más favorecida" (35). A idéntica conclusión llega Pecourt al afirmar "según opinión dominante que ha llegado hasta nuestros días, la aparición de la institución del Juez conservador de extranjeros, - origen inmediata de la del Fuero de Extranjería, se remonta a 1645, fecha en que el monarca Felipe IV, entre otros privilegios, otorgó a ciertos ingleses residentes en Andalucía, el de tener un Juez especial, ante el que habrían de pasar y seguirse todas las causas y pleitos de súbditos ingleses, así en aquellas que fueren reos convenidos, como en las que fuesen actores (36).

Coincidente con la argumentación anterior, un autor anónimo de 1853, opina que "Hacia mediados del siglo XVII, o sea, en el año de 1645, época - en que la España conservaba aún la memoria de sus pasadas grandezas, fué - cuando por primera vez se concedió a los súbditos ingleses residentes en varios de Andalucía, el derecho de tener un conservador para conocer de sus - negocios civiles y criminales. (37).

Alejandro de Bacardi, nos expone su teoría acerca del origen del Fue

(35) ORUE, José Ramón de: "Manual de Derecho Internacional Público", Madrid, 1928, pág. 159.

(36) Op. cit. pág. 884-5.

(37) Op. cit. pág. 90.

ro de Extranjería, cargando el acento tanto en la circunstancia de haberes dispensado ex novo a los británicos, como en la de "haberse catalogado impropiaamente aquella jurisdicción como militar", sin preterir su criterio de "la gran ventaja que ofrecía a los extranjeros, el disponer a su favor de una jurisdicción militar, sustitutiva del Juez Conservador." (38)

Toda disposición legal que inaugura nuevos privilegios concita un - período previo de creación del clima adecuado, sin cuya existencia no tendría razón de ser aquella. Ese ambiente propicio para la implantación de nuestro Fuero de Extranjería, comenzó a germinarse - a nuestro entender - en las postrimerías del siglo XVI, y no concluiría hasta pasado el primer tercio del siglo XIX. Un minucioso estudio y examen de los Tratados, Convenios, Capítulos, hechos por los Reyes, Príncipes y pueblos de España desde antes del establecimiento de la Monarquía gótica hasta el reinado de Isabel II, nos compele a considerar que el Fuero de Extranjería en España, tuvo una vigencia y duración de 261 años, esto es, desde la concesión por Felipe III a las Hanseáticos verificada en los Capítulos de 28 de Septiembre de 1607 hasta la derogación de aquel Fuero, en virtud del Decreto de Unificación - jurisdiccional de 6 de diciembre de 1868.

Para nosotros, el Fuero surge, no ya por las Reales Cédulas de Felipe

(38) "Nuevo Colón o Tratado del Derecho Militar de España y sus Indias",
(38) Tomo I. Barcelonal, 1864, pág. 27-28.

IV de 1645 (19 de marzo, 26 de junio y 9 de noviembre), como sostienen Orde y Pecourt (39), ni por el Tratado de 23 de mayo de 1667, ajustado con Inglaterra, según afirma Riquelme (40), sino por los Capítulos de Felipe III de 28 de Septiembre de 1607, otorgados a las Ciudades Hanseáticas, como in tentaremos probar al analizarlos más adelante.

2.3. Interrelación del Fuero de Extranjería y el Juez Conservador.— No deben confundirse ambas figuras jurídicas, pese a la gran interrelación existente entre ambos. El Fuero de Extranjería nace a través del Juez Conservador pero no hay identidad de conceptos. El Fuero de Extranjería es la causa, el iudex protector, el simple efecto. El Fuero es la institución permanente; el privilegio de utilización de una nueva vía de administración de justicia. El Juez conservador es el órgano encargado de hacer operativo aquel privilegio, el instrumento creado para que el Fuero tenga virtualidad jurídica. Por otro lado, el Fuero es un derecho, un privilegio, dirigido hacia ciertos extraneum. El Juez es una secuela de ese derecho. Al nombrar como Juez conservador de los ingleses en Andalucía, a D. Francisco Vergara, por Real Cédula de 26 de junio de 1.645, no se confiere un derecho a los británicos con su nombramiento. El derecho existía previamente a la designación, esta no es más que un trasunto fiel de la instauración del Fuero.

(39) op. cit. pág. 159. y Op. cit. pág. 885. respectivamente.

(40) op. cit. pág. 377.

SECCION 3ª

3. Ratio Essendi de la Creación del Fuero de Extranjería.- ¿Por qué se creó el privilegio jurisdiccional en el reinado de Felipe III, de la instauración del Fuero y no en el de sus antecesores? Estimamos que existen varias y poderosas razones que lo explican y justifican.

3.1. 1ª ratio.- Debilitamiento político de España en el contexto europeo.

El Fuero de extranjería como privilegio dispensado a súbditos extranjeros, entrada a fortiori una cierta situación de debilidad del país que lo concede frente al Estado a cuyos súbditos se le otorga. Esta posición inferior de la Nación concedente, no se daba en España en la época de Carlos V, o de Felipe II; en las que no existía el Fuero de extranjería, sino - según nuestra óptica -, en la línea descendente de gran potencia que se inicia precisamente con Felipe III, en beneficio de Gran Bretaña que comienza a serlo en el orden naval y consecuentemente en el militar. Pese a todo, la España de Felipe III y Felipe IV, aún representaba un imperio, con peso específico en el concierto político mundial.

3.2. 2ª Ratio.- Política de Atracción de mercaderes extranjeros impulso-

res del tráfico comercial.- El Fuero de Extranjería va ligado a las relaciones comerciales sostenidas con súbditos extranjeros. En el siglo XVIII, "artesanos holandeses e irlandeses enseñaron el arte de -

fabricar lienzo finos y viñadores experimentados de Borgoña, Champaña, y Burdeos, el de hacer buen vino" (41). Como recuerda, Desdevises du Dezert, "En Cádiz se han establecido unas importantes colonias de franceses, ingleses e italianos". El mismo autor añade que en "1772, había en Cádiz 79 casas francesas de comercio al por mayor; en 1790, 237 negociantes franceses del puerto ofrece una contribución de 334,000 reales para fines patrióticos. En 1791 hay aquí 8.734 extranjeros (2.701 franceses, 5.018 italianos, 351 portugueses, 272 ingleses e irlandeses, 277 alemanes y flamencos, 115 hamburgueses, suecos y polacos" (42).

Es en el siglo XVII, cuando los hanseáticos y los ingleses despliegan una intensa actividad mercantil, que les lleva entre otras áreas geográficas, a la península ibérica, y concretamente con sus productos en los puertos de Málaga, Cádiz, Sevilla, Sanlúcar..., lo que lleva aparejado, que muchos de ellos se establezcan y fijen su residencia en aquella región meridional. El movimiento impulsor que aquellos aportaron al tráfico mercantil español, propició el dispensarles ciertos privilegios, entre los que sobresale de modo singular el Fuero de Extran-

(41) WARD, B.: "Proyecto económico en que se promueven varias providencias dirigidas a promover intereses de España con los medios y fondos necesarios para su planificación", Madrid, 1782, pág. 43..

(42) DESDEVISES DU DEZERT: "La société espagnole au XVIII siècle". Paris, 1925, pág. 319 y 184.

jaría. Otro autor recuerda que "los dos centros en que los extranjeros prefieren establecer su residencia, son Cádiz y Madrid; Cádiz, el puerto internacional en el cual todas las naciones tienen representantes y agentes para organizar el comercio con las Indias, y Madrid, donde la corte y la aristocracia son un imán para los artesanos hábiles y expertos en las industrias de lujo". (43).

3.3. 3ª Ratio. Política de nuevos ingresos para el Erario público. - No son los aspectos económicos individualmente considerados, los que fuerzan exclusivamente la implantación del Fuero por muy mermadas que estuviesen las arcas del Estado como consecuencia de las continuas guerras sostenidas por España en el siglo XVII. Aunque fué necesario arbitrar fórmulas que nutriesen aquellas, y una de ellas, va a ser precisamente la concesión del Fuero, este no nació por estrictas razones crematísticas.

Se otorgó Juez conservador a los súbditos Hanseáticos e ingleses no para obtener, previamente una cantidad alzada por dicha concesión, - recordemos a este respecto, que si bien, la primera Disposición Real, en la que aparece - a nuestro entender -, reconocida la figura del Juez Conservador para los súbditos británicos, esto es, la Real Cédula de - Felipe IV de 19 de marzo de 1645, nos dice que "por dicha merced -paga

(43) SARRAILLH, Jean: "La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII", pág. 332. Méjico, 1957.

rán los súbditos británicos - el derecho de la media anata, que importó 85.155 maravedís en plata, el cual habrán de satisfacer en la misma cantidad de quince en quince años perpetuamente" (44); prevalecía por ende el deseo de paz y concordia de España hacia Inglaterra, con prioridad absoluta sobre razones estrictamente pecuniarias.

No contradice el carácter generoso de la concesión y la correspondencia existente entre el privilegio jurisdiccional y el precio, que en la misma Real Cédula, se subraya con este tenor que, "llegado el caso de cumplirse - el plazo de pago - no habéis poder usar de esta merced sin que primero coste haber satisfecho este derecho". (45). No es que no existiese en definitiva, fuero, sin pago anticipado; lo que se pretendía era que la concesión regia, que aparejaba gastos en el mantenimiento de esos órganos de justicia, no representase una carga al erario público español. Tenían que ser grandes y sustanciosas las ventajas de la jurisdicción de extranjería - en aquella época - para que los comerciantes ingleses, accedieran de motu proprio, a satisfacer una cifra tan sustancial a las arcas españolas. Dejando a un lado, el análisis de los beneficios derivados de la "jurisdictio" especial del Juez Conservador objeto de estudio en otra parte de esta tesis, no podemos preterir aquí, ad exemplum, como en la Real Cédula de 9 de noviembre

(44) CANTILLO, A.: "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y Comercio"; Madrid, 1843, pág. 140.

(45) Op. cit. pág. 140.

de 1645 de Felipe IV, entre otros beneficios económicos y personales - dispensados a los comerciantes ingleses, se les conf erían los siguientes:

a) Exención del pago de los "derechos de las sisas de los servi—
cios de millones", que se imponían a la venta de "bacallao" seco y -
frescal, sardina, arenque, salmones y otros géneros de pescado fresco
y salado". (apartado 2º R.C. 9-11-1645) (46). Se les exigían por los
jueces y los arrendadores de los citados derechos, el abono de descien
tos maravedís por cada quintal de "bacallao".

b) Privilegio de "no mostrar las mercaderías - a los arrendadores
de los derechos - y de no ser visitados por aquellos, para inspeccionar
las mismas, estando en sus domicilios" (Apartado 3º R.C. 9-11-1645) (47)

c) Privilegio por el que "los ministros del contrabando y el almo
jarifazgo debían visitar los navios procedentes de Inglaterra, Irlanda
y Escocia, dentro del plazo de tercero día, y poner guardas en las na
ves, ni cobrar ningún "derecho" por la visita" (Apartado 4º R. Cédula
de 9 de noviembre de 1645) (48).

d) Privilegio de "exención de responsabilidad ante los ministros

(46) CANTILLO, A.: op. cit. pág. 142.

(47) op. cit. pág. 143.

(48) op. cit. pág. 143.

del contrabando, por las mercaderías existentes en las naves, y no inscritas en los libros de sobordo, siempre que los maestros exhiban dichos libros dentro del tercero día de entrada del buque en puerto" (Apartado 5º, R. Cédula de 9 de noviembre de 1645) (49).

e) Privilegio de "llevar dinero en las naves - para comprar velas, cables, áncoras, y otros bastimentos necesarios - hasta la cantidad de tres reales de a ocho por cada tonelada y navío, sin que fuesen molestados por ellos por los jueces de sacas y otros ministros". (Apartado 6º R. Cédula de 9 de noviembre de 1645). (50).

f) Privilegio de "no prestar declaración - conforme a la normativa existente - de la manteca, baqueta y otras mercaderías, que traían en las naves, así como el precio y las personas a quienes se las vendían" (Apartado 7º de R. Cédula de 9-11-1645) (51).

g) Privilegio de "estabilidad y vigencia de los contratos de arrendamiento de las casas donde moraban y guardaban sus mercaderías" (Apartado 8º de R. Cédula de 9-11-1645) (52).

Como se puede apreciar, no debe asombrar el montante de la contraprestación económica sufragada por los comerciantes ingleses a fin

(49) op. cit. pág. 143

(50) op. cit. pág. 143.

(51) op. cit. pág. 144.

(52) op. cit. pág. 144.

de obtener el fuero de extranjería, cuando este ~~men~~ción aparte del fuero jurisdiccional en sí-les otorgaba indudables beneficios fiscales y económicos; así como auténticos privilegios personales y sólidas garantías jurídicas. Teniendo en cuenta que la obligación de pago, de los 85.155 maravedíes en plata, a cargo de aquellos, se constreñía a efectuarlo de quince en quince años, no es aventurado suponer, - habida cuenta del intenso tráfico de mercaderías por los puertos de Sevilla, Sanlúcar, Cádiz y Málaga - que los súbditos del Reino Unido obtenían en el mismo período, unas ganancias globales que muy posiblemente rebasaran la mentada cifra. El fiel de la balanza, creemos que se inclinaba - desde el punto de vista económico - a favor de los súbditos ingleses, y eso que no podemos valorar numéricamente las ventajas de poseer una jurisdicción especial, esto es, un juez conservador pagado asimismo por ellos. La Real Cédula de Felipe IV de 19 de 1645 en su último inciso, determina en ese sentido que los comerciantes ingleses "también han de pagar el juez conservador que nombraren del salario o ayuda de costa que gozase por la dicha ocupación antes de gozar de ella". (53). No hay duda, que sin merma del gran prestigio y objetividad de nuestros jueces, dentro y fuera de nuestras fronteras -, por su tradicional y equitativa forma de aplicar la justicia, el abono de dichos honorarios por parte

(53) op. cit. pág. 140.

de los súbditos británicos, contribuiría a hacer más humanitaria - en su favor - la aplicación práctica del ejercicio de juzgar, sin que por otra parte, quepa la más mínima sospecha de parcialidad, por el hecho de quella retribución. No era un soborno, que no sería ni admitido en todo caso por el juzgador, ni siquiera contemplado y reconocido por la aludida Real Cédula, sino pura y simplemente, la instauración de una - jurisdicción singular de carácter privilegiado creada en función de una nacionalidad determinada y que para mayor tranquilidad de sus beneficiarios era sufragada por los mismos. No podía existir recelo por parte de los ingleses juzgados. Eran jueces españoles, que percibían sus emolumentos de ambas partes, en el supuesto de litigios entre británicos conciudadanos, lo cual eliminaba recelos y acrecentaba la objetividad del juzgador. Para el caso de litigios entre súbditos ingleses y - españoles, la Real Cédula de 9 de noviembre de 1645, en su inciso 1º, ha venido a aclarar lo preceptuado en la anterior de 19 de marzo, al - disponer que solo entendería el juez conservador de la litis, cuando - "los primeros fueran civil o criminalmente reos convenidos, y no cuando fueran actores demandantes" (54). La circunstancia de no entrar en juego el privilegio jurisdiccional en el supuesto de ser demandado un español, y sí cuando lo fuese un inglés, comportaba esa nota de humani

(54) op. cit. pág. 142.

tarismo a favor del foráneo, que no podía dejar de ser beneficiosa, eliminando al propio tiempo, todo posible recelo por su parte. Es lógico - considerar, que si un súbdito inglés demandaba a un español, entraba en juego la jurisdicción ordinaria, para que el recelo no surgiese por parte del español, sometido a una jurisdicción especial costeada por su - oponente. En las varias opciones, el fiel de la balanza quedaba en el - mismo centro de la equidad y la justicia, sin detrimento para nadie. Esas dos Reales Cédulas, contribuían de un lado a aumentar el Tesoro Público Español, beneficiaban por otra parte de modo singular, fiscal y económicamente a los comerciantes ingleses, e implantaban una jurisdicción excepcional que redundaba en una justicia más humanitaria y personalizada.

SECCION 4ª

4. Naciones y sujetos beneficiarios y excluidos.

4.1. Introducción.- El Fuero de Extranjería nace - según analizamos en el - epígrafe 2 - como un derecho singular que se otorga por Felipe III con carácter privilegiado y exclusivo a los Hanseáticos en 1607. Con posterioridad en 1645 se confiere a los ingleses, idéntica facultad por Felipe IV. En ambos casos, dicha concesión se verifica mediante capítulos en el primer Caso y tres Reales Cédulas en el 2º, pero no a través de

Tratados. El primer Tratado en que se pacta dicha institución es el celebrado en Munster el 1/11 de septiembre de 1647, publicado en Hamburgo el 12 de agosto de 1650, y ajustado con las ciudades Hanseáticas, por el que se confirma la vigencia del Fuero conferido a éstas por los Capítulos de 1607.

4.2. Naciones beneficiarias.— Llama la atención que los sujetos beneficiarios del disfrute del Fuero lo sean a título muy particular; o bien inicialmente devienen usufructuarios por directa concesión regia, o adquieren más tarde aquella condición a través de la fórmula solemne de un Tratado. En todo caso, predomina en los siglos XVII y XVIII, el criterio de conferir el Fuero, nación por nación, caso por caso.

Riquelme, que estima que el Fuero de extranjería nació como una "concesión especial hecha a los ingleses establecidos en Andalucía" y se confirmó más tarde por estipulaciones y tratados solemnes" (55). Añade dicho autor que: "el principio adoptado con sobrada ligereza e indeterminación, y no sin consecuencias posteriores harto perjudiciales para la España, de pactar con algunas potencias la concesión de considerar a sus súbditos como los de la más privilegiada y favorecida. hubo de hacer extensivo a los franceses, el privilegio del Juez conservador

(55) RIQUELME, A.; "Elementos de Derecho Público Internacional". Tomo I Madrid, 1849, pág. 377.

concedido a los ingleses, pues en el pacto de familia de 15 de agosto de 1761, ya se hicieron extensivos a esta potencia los tratados de 1667, - 1713 y 1715 celebrados con Inglaterra (56).

Otro autor anónimo, nos da la siguiente relación de países beneficiarios del Fuero: "Francia por el Convenio de 2 de Enero de 1768; Portugal, por los de 10 de febrero de 1763, y 24 de Marzo de 1.768; a los Países Bajos por los de 13 de julio y 9 de diciembre de 1713; a Dinamarca por el Tratado de 1742; a Cerdeña por el de Italia de 1752; al reino de las dos Sicilias por el celebrado con el duque de Saboya 13 de julio de 1713 y el pacto de familia de 1766, alcanzando así a todas estas naciones el privilegio de nación más favorecida, por la lamentable facilidad con que se ha procedido entre nosotros en esta clase de concesiones" (57). Relación muy similar, nos la facilita Nómez de Arenas cuando manifiesta que el Fuero de Extranjería lo obtuvieron los ingleses en 1713 y 1750, los franceses en 1669 y 1768, los portugueses en 1763 y 1768, los napolitanos en 1713, los alemanes en 1725, y los daneses en 1742 y 1752" (58)

(56) RIQUELME, A.: op, cit. pág. 378, 379.

(57) "El Fuero de Extranjería", El Faro Nacional (Revista de Jurisprudencia, de Administración de Tribunales y de Instrucción Pública) Año 3º, Nº 212, 24 de julio de 1853, pág. 91.

(58) Nómez de Arenas, Issac. "Bases y motivos de Tratado de Justicia para la nueva Ordenanza Militar". Madrid, 1856, pág. 95.

Alejandro de Bacardi, agrega, por su parte, algunos otros súbditos, a la anterior relación: "los alemanes por el art. 3. del Tratado de 30 de abril de 1725 y arts. 30 y 47 de 1 de mayo del mismo año; los chilenos por el art. 10 del Tratado de 25 de abril de 1.845; los uruguayos por el art. 14 del Tratado de 26 de marzo de 1846. Las demás naciones le gozan sin poder fundar este beneficio en ningún pacto de derecho internacional" (59).

Riquelme, ahondando en el tema, señala que "a través de la cláusula de nación más favorecida, Portugal estipuló en sus Tratados de 10 de febrero de 1763 y 24 de marzo de 1769, que serían extensivos a los portugueses, los Tratados suscritos con Inglaterra en 1667 y 1713. Y - por último Holanda, Suecia, Dinamarca, Nápoles, Austria, Parma, Toscana y Cerdeña, obtuvieron por Tratados sucesivos el derecho de ser considerados como la nación más favorecida. (60)

La cuestión de la vigencia de los Tratados otorgados por España en el siglo XVIII, en los que reconocía el Fuero de Extranjería, mediante la concesión de la cláusula de nación más favorecida, se planteó - con ocasión de las guerras napoleónicas con España y otros países eu-

(59) BACARDI, A.: "Nuevo Colón o Tratado de Derecho Militar de España y sus Indias", Tomo I, Barcelona, 1864, Pág. 28.

(60) RIQUELME, A: "Elementos de Derecho Público Internacional", Tomo I, Madrid, 1849, pág. 379.

ropeos. A este respecto, se ha manifestado por algún comentarista, que "ni puede decirse que las guerras generales ocurridas al principio de este siglo, y que tuvieron su término en 1814, hayan venido a dejar sin efecto los tratados existentes; porque las prácticas establecidas en ellos continúan en uso, existiendo además convenios explícitos celebrados en época reciente, y en los cuales se ha restablecido la fuerza de los anteriores tratados. Tales, son, por ejemplo, los de 14 de enero de 1809, y 5 de julio de 1814, con Inglaterra; el de París de 23 de - Abril de 1814 con Francia; el de Londres de 14 de octubre del mismo - año, con Dinamarca; el de Estocolmo de 19 de marzo de 1813; con Suecia el de Basilea, de 20 de enero de 1814, con Prusia y varios otros celebrados en este siglo con Portugal" (61)

4.3. Ensanchamiento de la "jurisdictio personae" del Fuero de Extranjería.-

El régimen de jurisdicción privilegiada contenida en los otorgamientos reales de 1645, de alcance particular y rango excepcional, vino a convertirse, empero, a la vuelta de pocos años, en régimen general o común aplicable, pues, a todos los extranjeros. A ello contribuyeron definitivamente dos especies de circunstancias: de orden externo o internacional unas, las otras localizables en el contexto mismo del sistema espa

(61) A. op. cit. pág. 91.

ñol político-jurídico-administrativo de la época". (62). De un lado, -
 añade, Pecourt, en efecto, "el proceso generalizador de aquella primi-
 tiva jurisdicción de excepción se estimula como consecuencia de lo que
 podríamos llamar su progresiva internacionalización convencional. Así
 los privilegios concedidos por Felipe IV en 1645, se consagraron expre
samente como régimen aplicable a los súbditos ingleses en España, pri-
 mero en el Tratado Hispano-Británico de 23 de mayo de 1667, y luego,
 ya en el reinado de Felipe V, en el de Utrech, de 9 de diciembre de -
 1713, confirmándose, además, por el Monarca español, en el tratado de
 14 de diciembre de 1715, el convenio hecho por los comerciantes ingles
 ses con los Magistrados de Santander el año de 1700. Por la vía de la
 cláusula de la nación más favorecida esta inernacionalización conven-
 cional se generalizó de modo automático" (63).

A este sentimiento jurídico de ensanchamiento de la base reci-
 piendaria del Fuero se refiere algún jurista, "no son sólo las naciones
 - concesionarias - del Fuero de Extranjería ya por tratado especial, -
 ya por extensión de la cláusula de "nación más favorecida", las que -

(62) PECOURT GARCIA, E: "Una institución singular en la Historia del
 Derecho Internacional Privado español: El Fuero de Extranjería"
 (Estudios de Derecho internacional Público y Privado. Homenaje
 al Prof. Luis Sela Sampil). Universidad de Oviedo, Vol. II, pág.
 887.

(63) PECOURT, E.: op. cit. pág. 887.

real y verdaderamente la disfrutaban. Un sentimiento de delicadeza bien es tudlada y de decoro y dignidad nacional ha hecho creer que debía conce— derse graciosamente a los súbditos de los países con quienes no ha media— do ninguna suerte de convenio, lo mismo que se ha otorgado a otros en — virtud de un tratado, así para que no pudiesen notarse enojosas preferen— cias respecto a los súbditos de determinados países, sino porque los in— convenientes del Fuero existirían siempre con la concesión hecha en fa— vor del mayor número de naciones extrañas". (64)

Pero no "fueron tan sólo factores externos o de índole interna— cional los que llevaron a esta generalización y consolidación del Fuero de Extranjería. Aquellos podían explicar por sí solos la reclamación de dicho Fuero y su aplicación en una determinada coyuntura histórica, o — mejor histórica-política; pero tal generalización, y sobre todo, su vi— gencia a lo largo de más de dos centurias, no habría sido posible sin — la concurrencia de circunstancias internas particularmente favorables". (65). Los factores internos a los que alude Pecourt, son de índole ju— risdiccional, esto es, el exagerado pluralismo de órganos judiciales privilegiados. Añade dicho profesor: "En la época en la que el Fuero de Extranjería se consolida, dicho mal — el fatal abuso de los fueros pri—

(64) A. op. cit. pág. 91.

(65) PECOURT, E.— op. cit. pág. 888.

villegiados - se halla en pleno auge (66). No puede extrañar, pues, que colocado como uno más entre los múltiples fueros privilegiados existentes, - y acaso con más justificación que muchos de ellos - el de extranjería se aceptará sin protesta, ni escándalo" (67) Como argumentación legal, que apoya dicha tesis, el mismo autor agrega, "dos disposiciones se acostumbra a citar como fundamento legal de la generalización apuntada: la dictada por Felipe V en Madrid el 7 de julio de 1727, recogida luego como Ley V del Título XI de la Novísima Recopilación, y el Decreto de Carlos III de 1 de Febrero de 1765, que pasó a ser la Ley VI del mismo Título y libro de la Novísima Recopilación. Si el tenor literal del primero de los textos aludidos podría interpretarse con alcance restringido en cuanto a los extranjeros beneficiados por el mismo, es evidente que el segundo declara de aplicación general o común -

(66) Recoge como ejemplo, PECOURT, la cita de fueros que recoge R.L. DOU en su obra: "Instituciones del Derecho Público General de España", Tomo II, pág. 47... "En el año 1800, un autor de la época recoge como vigentes, entre otros muchos el fuero de la Orden de Montesa, el Fuero de los Caballeros de la Orden de Malta, el Fuero Militar, el Fuero de la Cruzada, el Fuero de los espolios y vacantes, el Fuero de los Grandes de España, el Fuero de la servidumbre real, el Fuero de los guardias de corps, el fuero de Regimientos de Reales Guardias, el Fuero de la Real Brigada de Carabineros, el Fuero de Artillería, el Fuero de los Regimientos Suizos, el Fuero de las milicias, el Fuero de los Inválidos, el Fuero de la marina, el Fuero de los Maestranteros, el Fuero de los nobles, el fuero escolar, etc.".

(67) PECOURT, E.: op. cit. pág. 889.

el beneficio de la jurisdicción de extranjería". (68).

Dentro del marco de los factores internos a los que alude Pecourt podríamos incardinarle el del desconocimiento del contenido del derecho internacional en la España del siglo XIX; que desemboca en un uso inmoderado del Fuero de Extranjería en casos que jurídicamente no deberían tener acceso al mismo. A esta causa de origen interno, parece hacer referencia Riquelme, al señalar: "La falta de conocimiento sobre el derecho internacional positivo, hizo que muchos creyesen que este fuero de extranjería se extendía a todos los extranjeros indistintamente, y la necesidad de uniformar en cuanto fuese posible este ramo de la administración de justicia, hubo de inclinar a su vez el gobierno a tolerar este error, viniendo a resultar que en la práctica generalmente admitida hoy en España, todo extranjero goza el Fuero privilegiado de extranjería" (69)

4.4. Etapas en la concesión del Fuero de Extranjería. - Entendemos que es forzoso delimitar cuatro etapas, en lo tocante a acotar las naciones beneficiarias o excluidas del Fuero de Extranjería, a saber:

1ª - Etapas en la concesión del Fuero de Extranjería. Siglo XVII. - En esta -

(68) PECOURT, E: op. cit. pág. 889.

(69) RIQUELME, A: op. cit. pág. 379.

fase sólo son beneficiarios, los Hamseáticos, (1607, 1647), los ingleses (1645, 1665, 1667), los naturales de las Provincias Unidas de los Países Bajos (1648) y portugueses (1668).

En este período el Fuero se aplica primordialmente por concesión directa, bien a través de Capítulos, Reales Cédulas, o Tratados. Prevalece el carácter de concesión, sobre el de pacto o Tratado.

2ª - Etapa de consolidación del Fuero de Extranjería. Siglo XVIII.-
Funciona con carácter predominante la aplicación del Fuero de Extranjería en virtud de la remisión de la cláusula de nación más favorecida. El otorgamiento del privilegio jurisdiccional no se confiere pues de modo directo, sino indirectamente. Su otorgamiento nace a resultas de un convenio.

Así lo reciben los franceses (1761), portugueses (1768), holandeses (1713), austríacos (1725), daneses (1742), sardos (1752), napolitanos (1713 y 1761), turcos (1782), tunecinos (1791), libios (1784), - etc. etc. ...

3ª - Etapa de restablecimiento del Fuero. 1ª mitad del siglo XIX.-
Como consecuencia de las guerras napoleónicas, se plantea el dilema de si jurídicamente habrá de mantenerse la vigencia de los Tratados suscritos con otras potencias con anterioridad a 1814, fecha en que concluyeron aquellas. Se consolida la opinión de que es oportuno restablecer la fuerza de los Tratados anteriores - pues el uso no ha decaído - en

que se autoriza el Fuero de Extranjería a ciertas naciones. Así se "res-
tablece la vigencia del Fuero para los ingleses por los tratados de -
1809 y 1814, para los franceses por el de 1814, para los daneses por el
del 1814, para los suecos por el de 1813 y para los prusianos por el de
1814" (70).

4ª - Etapa de reestructuración del Fuero. Real Decreto de 17 de no-
viembre de 1852. - Esta disposición en sus arts. 30 y 31 no limitó la -
aplicación del Fuero de Extranjería en virtud de la posesión de distin-
ta nacionalidad. Basta ser extranjero - a secas - para gozar de aquel
privilegio. No hubo discriminación por razón de ciudadanía para el le-
gislator español. Desaparece el carácter de privilegio del fuero en or-
den a la titularidad de ciertos pasaportes. Todos los extraneum - según
aquellos preceptos - eran iguales ante el Fuero de Extranjería.

A este talante legal, hace referencia, algún cometrarista, cuan-
do afirma: "Gozan del fuero de extranjería llamado también militar, los
extranjeros que, ya en el concepto de transeúntes, o bien como domicilia-
dos, se hallan inscritos en las matrículas de los Gobiernos de provin-
cia y en las de los Cónsules respectivos de sus naciones: ley 3ª, tít.
11, lib. 6ª de la Nov. Recop. y Real Decreto de 17 de noviembre de -
1852" (71)

(70) A. op. cit. pág. 91

(71) J.L.F.: El Fuero de Extranjería (Rev. Gen. de Leg. y Jurisp.)
Tomo XXII. Madrid, 1863. pág. 27.

Gozan también del mismo fuero los Cónsules de las otras provincias porque no pasan de ser unos meros agentes y protectores de las personas - de su nación, para solicitar que se les haga justicia ley 6ª y nota 3ª, tit. 11, lib. 6ª de la Nov. Recop.

Aquel uniformismo ante el Fuero, obliga a formularse esta interrogante. ¿Todos, absolutamente todos los extranjeros, tenían derecho a disfrutar de las ventajas de dicho privilegio jurisdiccional, conforme al criterio del R.D. de 1852? La respuesta exige abrir un nuevo epígrafe.

- 4.5. Naciones excluidas del Fuero de Extranjería.- Como quiera que el R. Decreto de 1852 no excluye del goce del Fuero a ningún país, habrá que tener presente lo relativo a las relaciones diplomáticas con ciertas naciones para acotar quienes están sustraídos de aquella jurisdicción. "No deben disfrutar del Fuero de Extranjería los súbditos de aquellos países que no han reconocido todavía a S.M. la Reina Isabel II como Reina constitucional y legítima de las Españas. En este caso, sólo se encuentra — Rusia, y por consiguiente, no es aplicable a sus súbditos residentes en España el beneficio del Fuero " (72). El mismo autor cree asimismo que estaban excluidas del Fuero "los Estados Unidos de Méjico en virtud del tratado de 28 de diciembre de 1836 en que se reconoció la independencia

(72) A. op. cit. pág. 92.

de aquella república separada de España, y también Marruecos en virtud de pactos especiales celebrados en el mismo (73).

Para Riquelme quedaban extramuros del Fuero con anterioridad al R.D. de 1852 - su afirmación data de 1849 -, "la confederación germánica, Rusia, Prusia, y Estados Unidos de América" (74)

SECCION 5ª

5. Matriculación de la extranjería.

5.5. Trascendencia de la matriculación.- La regulación de la matrícula de extranjeros, tuvo extraordinaria importancia, habida cuenta que si según opinión de Antonio Riquelme, "sólo los extranjeros transeúntes gozaban del Fuero de Extranjería" (75) era necesario delimitar quienes tenían tal carácter o eran avecindados, a fin de conocer quienes eran o no aforados. Por otro lado, a nuestro entender razones de estadística, control administrativo, y de orden público, hacían aconsejable reglamentar la inscripción de los extraneum en nuestro suelo, con el objeto de - tener un conocimiento mínimo indispensable de la naturaleza, carácter, y domiciliación de dichos no-regnicolas. No debe interpretarse en todo caso la institución de la matrícula, como perjudicial para los intereses

(74) RIQUELME, A.: op. cit. pág. 379.

(75) RIQUELME, A. Op. cit. pág. 380.

de la extranjería en España, nada más lejos de la realidad, las pequeñas molestias que toda inscripción en un registro comporta - secuela de toda actividad burócrata - quedaban paliadas por las ventajas que dicha matriculación implicaba. En este sentido, se expresa José Ramón de Orúe, cuando afirma que "además de la institución de los jueces conservadores en la Novísima Recopilación, para cuidar de los intereses extranjeros, establécese por vez primera su matrícula o inscripción en un registro especial; se renueva esta disposición por Carlos IV en 1791, en vista de que las inscripciones hasta entonces efectuadas eran en su mayoría inexactas. (76).

Con mayor radicalidad que Riquelme, un autor anónimo, exterioriza con significativa rúbrica, "la necesidad de la inscripción en la matrícula de extranjeros para que los mismos puedan gozar del Fuero de Extranjería" (77). No habrá otra disyuntiva según ese criterio, o matriculación para ser aforado, o no matriculación con imposibilidad para acudir a aquella vía de administración de justicia privilegiada. Es trascendente por ende, el análisis y comentario de la normativa relativa a esta matteria, porque en definitiva, lo que está en juego era el goce o no de — aquel Fuero.

(76) ORUE, J. Ramón. "Manual de Derecho Internacional Público", Madrid, 1928, pág. 159.

(77) J.L.F. "El Fuero de lExtranjería", (Rev.Gen. de Leg. y Jurisp. Año 1863. Tomo XXII, pág. 39.

Deviniendo diversa "la condición y siendo diferentes los derechos y deberes de los extranjeros, según sean transeúntes o domiciliados, dándose muchas veces a cuál de estas clases correspondían, y siendo además posible que ellos guiados por su interés personal, afirmasen hallarse en la que les ofrecía más ventaja para cada caso particular; con el fin de evitar tales dudas, así como los inconvenientes y los perjuicios que debían dar por resultado, se previno por Real Orden de 5 de enero de 1754, y por Cédula de 28 de junio de 1764, que los gobernadores o comandantes militares formasen anualmente una lista o matrícula de todos los extranjeros existentes en sus distritos con distinción de transeúntes y domiciliados. Las leyes, 8, 9 y 10 y sus notas del tit. 11, libro 6º de la Nov. Recop., han reproducido el precepto de la Real Orden y Cédula citadas, fijando los particulares que debían contener las matrículas, cuya afirmación con arreglo a lo prevenido por las expresadas leyes, se ha mandado de nuevo llevar a efecto por la Real Orden de 11 de agosto de 1837" (78).

Alejandro de Bacardi, corrobora lo apuntado anteriormente, cuando manifiesta "del hecho de gozar Fuero distinto los extranjeros según obtengan la cualidad de transeúntes o la de avecindados, resulta la necesidad de fijar con toda exactitud cuales pertenezcan a una clase y -

(78) J.L.F.- op. cit. pág. 39 y sig.

cuales a otra. Al efecto pues de esclarecer este punto se han dictado varias disposiciones de que pasamos a hacer la debida mención. Extranjeros transeúntes son, los que vienen a España sin ánimo de permanecer en ella según así lo sienta la nota 13, tit. 11, lib. 6, Nov. Recop. y la Real Orden de 11 de agosto de 1837". (79)

Por otra parte la resolución de 8 de marzo de 1716 sobre los extranjeros que deben regularse transeúntes o vecindados, inserta en la Novísima Recopilación como Ley 3ª, título 11, libro 6, ya decía: "Debe considerarse por vecino en primer lugar cualquier extranjero que obtiene privilegio de naturaleza; el que nace en estos reinos; el que en ellos se convierte a nuestra Sta. Fe Católica; el que viviendo sobre sí, establece su domicilio; el que pide y obtiene vecindad en algún pueblo; el que se casa con mujer natural de estos reinos, y habita domiciliado en ellos, y si es mujer extranjera que casare con hombre natural, por el mismo hecho se hace del fuero y domicilio de su marido; el que se arraiga comprando y adquiriendo bienes raíces y posesiones; el que siendo oficial viene a morar y ejercer su oficio; y del mismo modo el que mora y ejerce oficios mecánicos, o tiene tienda en que venda por menor; el que tiene oficios mecánicos, o tiene tienda en que venda

(79) BACARDI, A. "Nuevo Colón o Tratado del Derecho Militar de España y sus Indias." Tomo. Año 1864. pág. 28 y 29.

por menor; el que tiene oficios de consejo públicos, honoríficos, o -
 cargos de cualquier género que sólo puedan usar los naturales; el que
 goza de los pastos y comodidades que son propias de los vecinos; el que
 mora diez años con casa poblada en estos reinos y lo mismo en todos los
 demás casos en que conforme a derecho común, Reales Ordenes y Leyes ad-
 quiere naturaleza o vecindad el extranjero, y que según ellas está -
 obligado a las mismas cargas que los naturales, por la legal y funda-
 mental razón de comunicar de sus utilidades siendo todas estas legítima-
 mente naturales, y estando obligados a contribuir como ellos". (80)

Esta preocupación de inscribir fehacientemente la distinta cali-
 dad de radicación de los extranjeros en España, se contempla en la Ley
 8, Tít. 11, Libro 6 de la Novísima Recopilación, cuando dice: "Convi-
 niendo para la más exacta ejecución de las mismas leyes; y para el -
 bien y tranquilidad del Estado, se averigua con claridad y sintergiver-
 sación la calidad de tales extranjeros que haya en estos reinos, dis-
 tinguiendo los transeúntes de los domiciliados, para que se guarden -
 unos y otros, los fueros y concesiones que comprenden". (81). Como pue-
 de apreciarse se insiste en matizar la variada situación de permanen-
 cia o provisionalidad de la residencia del extraneum a efectos de que

(80) "Códigos Españoles concordados y anotados". Tomo 8º, Novísima Re-
 copilación de las Leyes de España, Madrid, 1850, La publicidad,
 Tomo II, Libro VI, pág. 255-6.

(81) op. cit. pág. 259.

lo ampare o no el Fuero de Extranjería.

En la Ley 9, Tít. 11, Libro 6, de la Nov. Recop. se inserta a este respecto una Instrucción para hacer las matrículas de los extranjeros de la que extrapolamos los siguientes párrafos más relevantes referentes a este epígrafe: "Así, hecho los tales extranjeros de ambos sexos que consten matriculados, declararán formalmente ser su ánimo permanecer o no como avecindados y súbditos del Rey nuestro Señor, y lo firmarán (inciso 4º) (82). En el inciso 5º referido a los extranjeros avecindados se determina: "Los extranjeros que estén avecindados, o quieran avecindarse, deben ser católicos, y unos y otros han de hacer ante la respectiva justicia el juramento en la forma siguiente: "que jura observar la Religión Católica, y guardar fidelidad a ella, y al Rey Nuestro Señor, y quiere ser su vasallo, sujetándose a las leyes y prácticas de estos reinos, renunciando como renuncia a todo fuero de extranjería y a toda relación, unión y dependencia del país en que nació" (83). Como puede apreciarse, la adquisición de la vecindad en España, comportaba entre otras renunciaciones la de poder disfrutar del Fuero de Extranjería, sometándose por ende a la jurisdicción común. Y en el inciso 7º se generaliza que incluso los extranjeros transeúntes, no pueden ejercer ciertas profesiones liberales, ni -

(82) op. cit. pág. 260.

(83) op. cit. pág. 260.

artes, ni oficios mecánicos - so pena de que en el plazo de 15 días o de 60 días salgan fuera de la corte o de España, respectivamente - salvo que renuncien en el plazo de 15 días al Fuero de Extranjería, tomen vecindad o efectúen el juramento anteriormente aludido.

En la Real Cédula de 2 de septiembre de 1791, se dicta como punto 2 y 3º este texto: "que el extranjero que declare residir en España como avecindado, y por consecuencia en la clase de súbdito, haga el juramento de tal, y prometa fidelidad a la Religión Católica, al Rey y a las Leyes: renuncie al fuero, privilegios y protección de extranjería, y ofrezca no mantener dependencia, relación, ni sujeción al país de su naturaleza". Como explicación a dicho tenor, se añadió: "en dicho juramente a nadie se perjudica, y ya está declarado que no comprende las relaciones o correspondencia doméstica, de familia o parentela, ni las económicas de bienes o comercio, pudiendo mantenerlas todas el extranjero avecindado". (84)

Por Real Orden de 11 de Agosto de 1837, se mandó de nuevo, recuer da Alejandro de Bacardi "llevar a efecto la formación de matrículas de to dos los extranjeros existentes en España, con expresión de domiciliados y transeúntes, según se halle dispuesto en las citadas leyes, y se ordenó el propio tiempo que a todo extranjero que viniese a España se le dé por la autoridad que haya de reconocerles el pasaporte, un billete en el cual

(84) BACARDI, A. op. cit. pág. 32.

conste el nombre y apellido, profesión y si viene con la calidad de transeúnte, a fin de que se presente con él a la autoridad municipal del pueblo en que haya de residir para los efectos correspondientes" (85).

En el R.D. de Extranjería de 17 de noviembre de 1852, se ratifica toda la cautela que con respecto a la matriculación de extranjeros se había regulado en el siglo XVIII. Así en el art. 9 del mismo se confirma que "En los Gobiernos civiles de todas las provincias se formarán y llevarán matrículas o registros en que se asienten los nombres y circunstancias de los extranjeros que residiesen o viniesen a residir en el Reino, con la separación de las dos clases de transeúntes y de domiciliados" (86).

Por su fuera poco, se establece otra matriculación complementaria y paralela a aquella, cuando se preceptúa en el art. 10: "En los consulados de todas las naciones extranjeras establecidos en España, se formarán y llevarán matrículas o registros de los súbditos de la nación respectiva. Estas matrículas han de confrontarse con las de los Gobiernos Civiles, — pues sólo cuando estén conformes con aquellas, y arregladas a las formas prescritas en España, podrán surtir efectos legales en España". (87). —

Aquel ordenamiento de matriculación complementario resalta en el —

(85) op. cit. pág. 34 y 35.

(86) Enciclopedia Jurídica Española, (F. Seix), Voz extranjería, pág. 548.

(87) Op. cit. pág. 548. (Este precepto es similar al 9º de la Ley de Extranjería de Ultramar de 1870)

art. 11: "Las matrículas de los Gobiernos Civiles y las de los Cónsules - Extranjeros, se confrontarán anualmente" (88)

Si bien el R.D. de 1852, no hace depender explícitamente el disfrute del Fuero de Extranjería, del cumplimiento del requisito de la inscripción o matriculación por extraneum, como la normativa anteriormente mencionada de la Novísima Recopilación, no es menos cierto que el art. 12 - del mismo, parece hacernos llegar implícitamente a la misma conclusión, cuando impone que: "No tendrán derecho a ser considerados como extranjeros en ningún concepto legal, aquellos que no se hallen inscritos en la clase de transeúntes o de domiciliados en las matrículas de los gobiernos de las provincias y de los Cónsules de sus respectivas naciones. Las inscripciones se renovarán en el caso de pasar el extranjero de la clase de transeúnte a la de domiciliado" (89). Por ende, si un extranjero no está inscrito en las matrículas de los Gobiernos Civiles de las provincias y en los Consulados, no podía ser catalogado como extranjero en concepto legal español", y en definitiva, no podía tener acceso al Fuero de Extranjería. En resumidas cuentas, el resultado práctico es el mismo. Hay derecho al Fuero si se está matriculado, se está desahogado, si no hay ins—

(88) op. cit. pág. 548.

(89) op. cit. pág. 548. (Este precepto es concordante con el art. 7. de la Ley de Extranjería de Ultramar de 1870).

cripción. De ahí la trascendencia e interrelación que existió entre la matriculación y Fuero de Extranjería - que destacamos al iniciar este ~~apí~~grafe-, no sólo en el siglo XVIII, sino a mediados del siglo XIX, y dentro de la última disposición que reguló ordenadamente aquel privilegio en nuestra patria.

Todavía con posterioridad al Real Decreto de 1852, y pese a no subsistir el Fuero de Extranjería desde la vigencia del Real Decreto de Unificación Jurídica de 1868, se mantuvo el criterio de exigir el cumplimiento de la matriculación a los extranjeros, como medida "ad cautelaum", de conocimiento de los extraneum en nuestro país. A este respecto, conviene recordar, que Raventós Noguer, nos señala en 1.926, que: "En los Gobiernos civiles de todas las provincias existen unos registros de extranjeros donde se inscriben por separado los transeúntes y los domiciliados. Registros que deben también llevarse ante los Consulados de todas las naciones extranjeras establecidos en España. Los extranjeros residentes en nuestro país han de cumplir con la obligación legal de solicitar su inscripción en dichos Registros, como medio indispensable para tener derecho a la protección y amparo del Poder Nacional y para residir libremente en el Reino" (90)

(90) RAVENTÓS NOGUER, M.: "Situación Jurídica de los extranjeros en España", Rev. Crítica de D. Inmobiliario, 1926, pág. 573-4.

Destaca Raventós que "la importancia de estos registros es muy — grande, así, la presentación del certificado de hallarse inscrita una — persona en el registro de extranjeros del Gobierno Civil de la provincia en que resida es la forma de acreditar legalmente su cualidad de extranjero. Sin embargo, el Tribunal Supremo niega que un extranjero pierda su condición por no estar inscrito como tal en el Gobierno Civil de la provincia donde viva. Doctrina a nuestro modo de ver, muy conforme con nuestra legislación, dado que la cualidad de español no se adquiere por la — simple residencia en territorio del Reino" (91).

Desde el punto de vista jurisprudencial, la relevancia de la matrícula de extranjeros tanto en los Registros del Gobierno de la provincia, como de los Consulados, se infiere, del hecho de constituir ambas inscripciones, requisito sine qua non para el disfrute de la jurisdicción excepcional de la extranjería. Este tenor es recogido por una sentencia que precisaba "para gozar del Fuero de Extranjería es necesario la doble inscripción en los dos Registros del Gobierno de la provincia y del consulado respectivo". Sentencia de 3 de Julio de 1.868. (92)

(91) Ibid. op. cit. pág. 574.

(92) PANTOJA, J. M^a.: "Repertorio de Jurisprudencia Civil Española". Tomo I, (Voz fuero de Extranjería), pág. 700.



CAPITULO II

AMBITO DE EXTENSION Y VIGENCIA DEL FUERO DE EXTRANJERIA

SECCION 1ª

1. Extensión del Fuero de Extranjería.

1.1. Introducción. - Respecto a la rúbrica que encabeza estas líneas, es preciso abrir un interrogante, formulándonos la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por la extensión del Fuero de Extranjería?. De una parte, se hace referencia con ese vocablo, a si la jurisdicción del Juez Conservador aglutina sólo pleitos civiles, o también a las causas criminales de los aforados. Asimismo nos obliga a considerar cuál fué el alcance geográfico y personal de aquella jurisdicción. Por ende, es oportuno hacer la siguiente ordenación:

- A) Extensión de la jurisdicción del Fuero de Extranjería *ratione materiae*.
- B) Extensión de la jurisdicción del Fuero de Extranjería *ratione territoriae*.
- C) Extensión de la jurisdicción del Fuero de Extranjería *ratione personae*.

Veamos la primera:

1.2. Extensión de la Jurisdictio ratione materiae.— Conviene analizar si históricamente, se ha mantenido la misma tónica en nuestro ordenamiento jurídico. Para ello nos parece conveniente detenernos en la glosa de aquella normativa sobre el Fuero de Extranjería que estimamos más representativa y singular. Comencemos por estudiar el criterio sustentado en los Capítulos de Felipe III de 1.607.

a) Capítulos de Felipe III de 28 de Septiembre de 1.607.

En el apartado 28 de los citados Capítulos concedidos graciosamente por nuestro Rey Felipe III a los naturales de la Hansa Teutónica, se establece que la jurisdicción del Juez Conservador privativo de aquellos, abarca tanto las causas civiles, como criminales en que aquellos pudieran hallarse involucrados. Está claro que el criterio fijador de la competencia de aquel iudex no es restrictivo, sino que por el contrario engloba las dos grandes parcelas jurídicas, que hemos reseñado. No hay limitaciones a ese respecto.

b) Reales Cédulas de 1645. (19 de Marzo. 26 de Junio y 9 de noviembre).

1.— Real Cédula de 19 de Marzo de 1.645.— Veamos en primer lugar, lo dispuesto en la Real Cédula de 19 de Marzo de 1645. Dentro del contexto de la misma, entresacamos un párrafo que es esclarecedor al efecto de delimitar la amplitud de la jurisdicción del juez conservador, "y no ante otro juez alguno privativamente en primera instan

cia hayan de pasar y seguirse todas las causas y pleitos que sobre lo referido, y cualquiera causa y parte de ello se hicieren y causaren, y la ejecución y castigo de los inobedientes (93). Si bien el concepto de causa ha variado sustancialmente desde el siglo XVII al XX, toda vez que en el primero se confundía el significado causa (hoy circunscrito a la esfera penal) con el del pleito civil no es menos cierto que en aquel inciso, al hacerse referencia "a todas las causas y pleitos", parece inferirse que la expresión abarcaba los litigios civiles, lo mismo que los penales, lo cual consecuentemente hace proyectar la jurisdicción del juez conservador de los ingleses, tanto a la esfera penal, como a la civil, sin restricciones, ni cortapisas de ningún género, toda vez que en la misma Real Cédula citada, se nos dice que los ingleses que tenían acceso a aquel juez, lo eran tanto los que aparecían a título de reos convenidos, como los que fueren actores.

- 2.- Real Cédula de 26 de Junio de 1.645.- En la Real Cédula de Felipe IV de 26 de Junio de 1645, en su apartado 2º, se confiere al Juez conservador de los comerciantes ingleses radicados en Andalucía, la competencia de conocer "de todas las causas civiles y criminales, en que

(93) CANTILLO, A.: "Tratados, Convenios y Declaraciones de Comercio, desde el año 1700 hasta el día", Madrid, 1843, pág. 139.

aquellos mercaderes fueren reos convenidos" (94). Se insiste por ello tanto en el criterio sustentado en los Capítulos de 1607 dictados para la Hansa Teutónica, como en lo dispuesto en la Real Cédula precedente de 19 de marzo, esto es, de extender la jurisdicción de aquel iudex, tanto en los pleitos viviles, como en las causas criminales. No hay restricciones al respecto; se exige en primer lugar, que aquellos súbditos británicos apareciesen en su condición de "reos convenidos", para que no se diesen condiciones de incompetencia de su Juez privativo. El texto es contundente al respecto: "ante vos (el juez conservador de los ingleses D. Francisco Medrano) y no ante otro Juez alguno, en primera instancia hayan de pasar y seguirse todas las causas y pleitos que sobre esto y cualquier cosa y parte de ello se hicieren y causaren, y conocer asimismo de todas las causas civiles y criminales en que fuesen reconvenidos que contra ellos se intentaren". (95) Este inciso parece querer indicar que la jurisdicción del Juez Conservador de los británicos sólo incluía la parcela penal, cuando el súbdito inglés aparecía en la causa en su condición de "reo convenido". Sin embargo en otro párrafo de la aludida Real Cédula, se obtiene una conclusión más amplia, que no implica limitación de aquella jurisdic

(94) CANTILLO, A.: op. cit. pág. 141.

(95) CANTILLO, A.: op. cit. pág. 141.

ción; así se nos dice: "y ante él (el juez conservador) hayan de pasar cualesquier pleitos y causas que tocaren a los dichos ingleses o a otros cualesquier personas de cualquier calidad que sean" (96). Resulta evidente, que la jurisdicción de dicho iudex, comprendía tanto la vía penal, como la civil, sin cortapisas ni restricciones de ningún género.

- 3.- Real Cédula de 9 de Noviembre de 1.645.- Por lo que atañe a la Real Cédula de 9 de noviembre de 1645, - promulgada asimismo por Felipe - IV - se ampara y tutela el privilegio de los comerciantes británicos a gozar del Fuero de Extranjería, con su Órgano instrumental, del - Juez Conservador, tanto en las causas civiles, como en las criminales y tanto si fuesen actores como reos, siempre y cuando en la litis interviniesen únicamente súbditos de aquel Reino. En este caso concreto, la jurisdicción del juez, abarcaba no sólo la parcela civil, sino también la penal, incluso en el supuesto de que los litigantes, ingleses actuasen como demandantes o demandados. El único requisito que se imponía al respecto, era de que los intervinientes en la litis ostentasen nacionalidad inglesa. Incluso la competencia del Juez conservador se extendía a todo tipo de litigios civiles y penales, sustanciados entre ingleses y súbditos de otra nacionalidad, cuando los —

(96) CANTILLO, A.: op. cit. pág. 141.

primeros aparecían en la litis en calidad de reos convenidos. El texto fué el siguiente: "Y por la presente quiero y es mi voluntad y declaro, que cuando los pleitos fueren entre los de vuestra nación, ora seáis actores, ora reos, y las causas fueren civiles o criminales, - habéis de gozar solamente del dicho privilegio y sus calidades; y - cuando los dichos pleitos fueren con españoles o con otras personas de diferentes naciones, el juez conservador haya de conocer y conozca solamente de las causas en que fuéredes civil o criminalmente - reos convenidos y no cuando fuéredes actores demandantes" (97).

En los litigios entre ingleses la jurisdicción del Fuero de les acoge y ampara cualquiera que sea el carácter con que intervengan las partes. No hay ninguna limitación en ese sentido. Por el contrario, si el pleito lo es entre británicos y otros nacionales, para que la jurisdicción del iudex privativo, se extienda a la esfera criminal, es equisito sine qua non, que en todo caso el súbdito de la Gran Bretaña intervenga como reo convenido, pues en otro caso, si es actor, no puede acudir a la vía del Fuero de Extranjería, y tendría que acogerse a la vía ordinaria de administración de justicia española.

No hay duda de que esta Real Cédula si bien aplicó el Fuero de Extranjería a los ingleses tanto en pleitos civiles como en causas

(97) CANTILLO, A.: op. cit. pág. 142.

criminales, no es menos cierto que fué más restrictiva que las disposiciones precedentes al exigir en los pleitos con otros súbditos, que aquellos actuaran como reos convenidos.

c) Extensión de la Jurisdictio por razón de la materia en el Tratado otorgado en Munster el 1/11 de Septiembre de 1647 entre España y las Ciudades Hanseáticas.-

En el privilegio nº 11 de este Tratado se pactó: "Iten concede su Majestad , que no pueden ser presos (los Hamseáticos), ni detenidos, por caso que sea de Crimen o Civil, sino por un Juez particular, el cuál su Majestad nombrará, para que conozca de sus causas" (98). Resulta obvio, que la extensión de aquella Jurisdictio del Juez Conservador de los Hamseáticas, aglutinaba supuestos civiles y causas criminales. Resulta también evidente que, a diferencia de la Real Cédula de 9 de noviembre de 1645, no se pone limitaciones a dicha competencia judicial.

El Fuero de Extranjería en suma, protege a los Hamseáticos en España, en los campos civil y penal, independientemente que aquellos súbditos intervengan como actores o demandados; a tenor del trabajo que encabeza estas líneas. Hubo pues un retorno al criterio amplio de extender la jurisdictio del Fuero de Extranjería con similares características al

(98) ABREU Y BERTODANO, J.A.: "Colección de los tratados de Paz, Alianza, Neutralidad, Garantía, Protección... hechos por los Pueblos, Reyes y Príncipes de España desde antes del establecimiento de la Monarquía Gótica hasta el feliz reinado del Rey N.S. D. Pheplipe V". Reinado del Sr. Rey Phelipe IV, año 1740, pág. 59.

sustentado en los Capítulos de Felipe III para los Hanseáticos de 1607, y en las Reales Cédulas de Felipe IV para los ingleses de 19 de marzo y 26 de julio de 1.645.

d) Extensión de la jurisdictio ratione materiae en el Tratado de Madrid de 23 de mayo de 1667, ajustado entre España e Inglaterra. - En dicho pacto en su apartado 9º, "se da por vigentes y reproducidas en el mismo, lo concedido por Felipe IV en las Reales Cédulas de 19 de marzo, 26 de junio y 9 de noviembre de 1645". (99). En consecuencia damos por transcrito aquí los comentarios que verificamos a aquellas disposiciones, sin más añadidura que la de subrayar como en la época de Carlos II, se aplicaba al mismo criterio respecto de la extensión del Fuero de Extranjería, que en el reinado de su padre Felipe IV, y básicamente igual que en el de su abuelo Felipe III.

e) Extensión de la jurisdictio ratione materiae en los Capítulos de Privilegios de 12 de septiembre de 1700 otorgados a los ingleses por la Villa de Santander. -

En el apartado VI de estos Capítulos, se reconoce el Juez Conservador de los británicos en Santander, competencia para entender de "las causas, pleitos y negocios, que ocurrieren, según y como le tienen los comerciantes de la ciudad de Sevilla (100). Como quiera que las Reales Cédulas

(99) CANTILLO, A.: op. cit. pág. 130.

(100) ABREU Y BERTODANO, J.A.: op. cit. (Reinado de Felipe V), pág. 685.

las de 1645, estaban en vigor por lo dispuesto en el Tratado de 1667 con Inglaterra, el cual a su vez no habrá sido derogado al tiempo de conceder se los siguientes Capítulos, tendremos que convenir que regía en materia de la extensión del Fuero de Extranjería, el mismo criterio determinado - en aquellas Reales disposiciones.

f) Extensión de la jurisdicción ratione materiae en el Real Decreto de Extranjería de 17 de noviembre de 1852.

En el Real Decreto de Extranjería de 1852, se establece en el Art. 30 que los gobernadores de las plazas marítimas o los capitanes generales en los demás puntos - como sucedáneos del antiguo juez conservador de la extranjería - conocerán primera instancia "de los pleitos y causas contra los extranjeros domiciliados y transeúntes" (101). En las instancias sucesivas, el órgano judicial competente sería el Tribunal Supremo de Guerra y Marina y Extranjería. Como puede inferirse del texto de aquel precepto, la jurisdicción del Fuero de los extraneum abarca con criterio generoso, no sólo los pleitos civiles, sino también las causas penales, y lo mismo comprende a los extranjeros domiciliados, como a los transeúntes. La única restricción que se impuso fué la derivada del carácter pasivo de aquel Fuero, reconocida en el inciso 1º del Art. 31, de dicho R.D. de 1852, esto es, que sólo gozarían de la citada administración de

(101) Enciclopedia Jurídica Española, voz extranjería, pág. 549.

justicia extraordinaria, los extranjeros que actuasen en los pleitos o - causas como demandados o denunciados, nunca los que interviniesen como actores. Robustece dicha interpretación la frase del Artículo 30 "los pleitos y causas contra los extranjeros", que permite aplicar exclusivamente el Fuero de extranjería a los extraneum no actores. El criterio que prevaleció fué similar al impuesto en su día por la Real Cédula de 9 de noviembre de 1645 de Felipe IV a los ingleses. La diferencia entre ambas - disposiciones, radicó en que en la primera sólo se exigía al inglés para ser amparado por el Fuero, que actuase como demandado en sus pleitos y - causas con otros nacionales (102), por el contrario si bien en el R.D. de 1852, el Fuero no se aplica cuando el extranjero actúa como actor, no se distingue entre pleitos y causas suscitadas entre extraneum exclusivamente, o mixtos, entre extranjeros y regnicolas.

1.3. Extensión de la Jurisdictio ratióne territoriae.- Contemplemos la normativa más interesante en esta temática:

a) Extensión de la jurisdictio ratióne territoriae en los Capítulos de Felipe III a los Hanseáticos de 28 de Septiembre de 1607.

La amplitud de la competencia geográfica del iudex de la Hamsa Teutóniica en la ciudad de Sevilla se proyectaba "más allá de las murallas de di-

(102) Nota.- En los pleitos y causas entre ingleses gozaban del Fuero de Extranjería, incluso aunque interviniesen como demandantes.

cha ciudad y alcanzaba hasta seis leguas a partir de aquellas". (103). Por analogía debemos aplicar el mismo criterio para otras villas y ciudades - donde pudiera designarse un juez conservador para los Hanseáticos. De este tema trataremos más adelante al glosar los Capítulos que sirven de rúbrica a éstas líneas. Los Capítulos de Felipe III aludidos, sólo hacen referencia al Juez - de la Hansa- de Sevilla, lo cual si bien presupone que sólo en aquella ciudad debían de radicar mercaderes hanseáticos, dicha su posición no excluye que dichos comerciantes pudieran ampliar su tráfico a otras villas del Reino de Andalucía, también importantes desde el punto de vista marítimo-mercantil, como Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Málaga, etc. etc., lo que obviamente obligaría a mantener solución similar en materia de la extensión geográfica del nuevo iudex que pudiera nombrarse.

b) Extensión de la Jurisdictio racione territoriae en las Reales Cédulas de Felipe IV de 19 de Marzo, 26 de junio y 9 de Noviembre de 1645.

- 1.- Real Cédula de 19 de marzo de 1645. - No se regula expresamente en esta Real Cédula, la extensión por razón de territorio que debía de tener la jurisdicción del juez conservador de los ingleses en - España. Cabe aplicar aquí "mutatis mutandi" lo manifestado en el - epígrafe precedente respecto del iudex de los Hanseáticos; en con-

(103) ABREU Y BERTODANO, J.A.: op. cit. (Reinado de Felipe III), apart. 21, pág. 379.

secuencia la jurisdicción de aquel órgano de justicia debía geográficamente abarcar todas las Litis planteadas dentro de un radio de seis leguas a contar desde las últimas casas de cada villa. La R. Cédula que analizamos fija una limitación general relativa a la figura de aquel Juez privativo, cuando textualmente determina: "hayáis de tener un Juez Conservador para la Andalucía, principalmente, para las ciudades de Sevilla, Málaga, Cádiz y Sanlúcar de Barrameda" (104). Quiere decir todo ello, que en principio, la institución del Juez Conservador de los británicos en España, no ejercía su "auctoritas" fuera del reino de Andalucía. Su jurisdicción por imperativo legal, quedaba circunscrita a desempeñarla precisamente dentro de aquel territorio. En otros términos, no existía aquel ente judicial, no se podía aplicar el Fuero de Extranjería a los ingleses, fuera del territorio andaluz.

- 2.- Reales Cédulas de 26 de junio y 9 de noviembre de 1645.- Al no regularse explícitamente la extensión de la jurisdicción del Juez privativo de los ingleses, damos aquí por reproducido lo manifestado en el epígrafe anterior. Subsiste la limitación de actuación del iudex conservador de los súbditos británicos a la región andaluza. A título particular no se imponen restricciones a la compe-

(104) CANTILLO, A.: op. cit. pág. 139.

tencia de aquella vía excepcional de administración de justicia, lo cual implícitamente debe entenderse de que subsistía la limitación territorial de las seis leguas, regulada por los Capítulos de Privilegios de 1607.

c) Extensión de la Jurisdictio racione territoriae en el Tratado de 23 de Mayo de 1667 entre España e Inglaterra.

En el presente Tratado no se regula en ninguno de sus preceptos la extensión geográfica de la jurisdicción de los jueces conservadores en España. Rige en este punto todo lo expuesto al comentar las Reales Cédulas de Felipe III de 1645, que preceden a este epígrafe, y que confirma el Art. 9 del Tratado de 1667, cuando se nos dice: "Las cuales Cédulas - (19 de marzo, 26 de Junio y 9 de noviembre de 1645) manda su Majestad Católica que se ratifiquen y que se admitan y confirmen como parte principal de este Tratado" (106)

d) Extensión de la jurisdictio racione territoriae en los Capítulos de Santander de 12 de septiembre de 1700.-

En los capítulos de Privilegios que la villa de Santander dispensó en 1700 a los ingleses, no se reguló la competencia geográfica del iudex privativo de aquellos, pero la jurisdicción de dichos órganos debía tener el mismo alcance que en la época de Felipe III y Felipe IV por la

(106) CANTILLO, A.: op. cit. pág. 130.

remisión que se hace en el apartado VI, cuando se otorga que los ingleses de Santander gozarán del juez conservador en dicha villa, "como le tienen los comerciantes de la Ciudad de Sevilla y otros puertos de aquella Costa" (106): Resulta evidente que los santanderinos conferían los mismos privilegios a los ingleses en su villa, que los que aquellos venían gozando en el Reino de Andalucía desde 1645. Aquella remisión con similitud de privilegios para los británicos, tanto radicasen en Santander como en la región andaluza, debía conllevar idéntico parangón para la función y competencia del Juez conservador en uno o en otro lugar. En consecuencia la competencia geográfica del Juez conservador en Santander abarcaría dicha Villa y seis leguas a la redonda.

e) Extensión de la Jurisdictio ratione territoriae en el Real Decreto de Extranjería de 17 de Noviembre de 1852.

En el art. del R.D. de 1852, no se determinan límites territoriales a la competencia de los gobernadores de las plazas marítimas ni a la de los Capitanes Generales. ¿Cuál será la extensión de la jurisdicción del Fuero de Extranjería instrumentado por aquellos órganos? A nuestro juicio su competencia geográfica hecha excepción del supuesto en que corresponde a unos u otros, esto es, a los gobernadores militares de las plazas marítimas si en ellas no reside el Capitán General, o a éste en el caso contra

(106) ABREU Y BERTODANO, J.A.: op. cit. pág. 685. (Tomo del Reinado de Felipe V).

rio, no debe en puridad delimitarse por el mismo criterio de la competencia del Fuero militar. Como quiera que aquellas autoridades militares, - aplican el Fuero de Extranjería, no en función de su condición militar, sino como sucedáneos del Juez conservador de los extraneum (107), ante el silencio de la ley, había de aplicarse el uso o costumbre del lugar, y tener presente como precedente normativo que en el siglo XVII fué norma de general aplicación para los Hamseáticos, el conceder una competencia territorial a su iudex de seis leguas a la redonda de la villa donde administrasen justicia, sistema que debió respetarse en el Fuero de Extranjería para con los ingleses como una consuetudo inveterata. Este régimen mutatis mutandi debía considerarse vigente a la sazón en 1.852.

- 1.4. Extensión de la Jurisdictio ratione personae. - Durante el reinado de Felipe III el Fuero de Extranjería nace - según vimos al tratar del origen del mismo - en 1607 con carácter exclusivo para los naturales de la Hamse Teutónica. La restricción es puramente nacional, sólo los súbditos Hamseáticos tienen acceso a aquel Fuero. Más tarde en 1645, siendo rey Felipe IV, mediante Reales Cédulas de 19 de marzo, 26 de junio y 9 de noviembre, se confiere igual merced a la nación inglesa. Por Tratado de Munster de Paz y Comercio de 30 de enero de 1648, se concede el Fuero a los naturales de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Siendo monarca de Es

(107) Nota.- Dicha argumentación es estudiada detenidamente en el Capítulo dedicado a los órganos instrumentales del Fuero de Extranjería.

paña el último rey de la Casa de Austria, Carlos II, se confiere a los - portugueses la misma posibilidad de tener entrada en aquella vía, que los ingleses, mediante el Tratado de Paz de 13 de Febrero de 1668. En el rei- nado de Carlos III, introducida ya la dinastía borbónica en España - por el Tercer Pacto de Familia con Francia ajustado al 15 de agosto de 1761, se hace extensivo a los franceses el cauce del Fuero. Con respecto al go- ce del Fuero de Extranjería por otros súbditos, en virtud de la aplica- ción de la cláusula de nación más favorecida, inserta en los respectivos Tratados, lo hemos expuesto con mayor minuciosidad, en este Capítulo al estudiar cuáles con las naciones beneficiarias de aquel privilegio juris- diccional.

Sólo nos resta apuntar que el distinto trato ante el Fuero que los extranjeros reciben en España según tengan o no cierta nacionalidad, que les permita disponer o no de su propio iudex privativo, desaparece con el Real Decreto de Extranjería de 1852, por el que la posibilidad de impetrar justicia ante la jurisdicción de extranjería, se otorga a cualquier súbdito no regnícola, independientemente de su nacionalidad. Con esta última - normativa no hay ya castas de extranjeros ante el Fuero de Extranjería, - todos, absolutamente todos son iguales ante el proceso civil y penal espa- ñol. Se quiebran - en aras de una justicia igualitaria para todo tipo de extraneum -, las normas privilegiadas para unos extranjeros y se impone una regla general, en la que el común denominador es la absoluta igual-

dad de todos ante la Ley.

A la vista de la normativa que ha quedado reseñada, y con carácter general, sin distinción de matices históricos, podemos formularnos las siguientes interrogantes:

1º) ¿El Fuero de Extranjería tuvo una extensión o aplicación meramente civil, o también criminal?

2º) ¿El Fuero de Extranjería tuvo una extensión simplemente activa o también pasiva?

3º) ¿El Fuero de Extranjería se aplicaba en la América española?

1.5. ¿El Fuero de Extranjería fue solo civil o también criminal?. - Por un lado

un autor anónimo nos recuerda: "Respecto a si el Fuero es civil o criminal, ha habido entre nosotros diversidad de pareceres y encontradas opiniones, ya porque la Real Cédula de 24 de Octubre de 1.782, que es la ley 8ª tít. XXXVI, libro XII de la Novísima Recopilación, abolió el fuero criminal privilegiado de los extranjeros a consecuencia de la falta de reciprocidad en otros países, que se manifestó en alguna ocasión muy marcadamente; ya porque en 1821, el señor conde de Ofalia para probar la existencia del Fuero de Extranjería, que entonces abolieron las Cortes, procedió - siempre bajo el concepto de que era puramente civil. Estos respetables antecedentes, y en especial el primero, contra el cual no se ha promulgado después ninguna ley, ni ordenanza comunicada a los tribunales de justicia, ha hecho nacer, y sostenido entre muchos, la opinión de que el fue

ro de extranjería no tiene aplicación alguna a los negocios criminales".
(108).

Coincide con idéntico criterio, Antonio Riquelme, cuando señala, que "sobre si el fuero de extranjería debe considerarse extensivo al con-
ci-miento de las causas criminales, se han suscitado dudas en varias oca-
siones, sosteniendo la opinión contraria, personas muy respetables, entre
ellas el distinguido diplomático Conde de Ofalia" (109).

La R. Cédula de 24 de Octubre de 1782, que es la Ley 8ª título -
XXXVI, libro XII de la Novísima Recopilación, es en la que se apoyan algu-
nos comentaristas como Riquelme y el propio Conde Ofalia para eludir el
desafuero de los extraneum en los delitos contra el orden público estable-
cia lo siguiente: "He venido en mandar que todas las justicias de mis rei-
nos y señoríos en sus respectivas jurisdicciones, procedan contra los ex-
tranjeros transeúntes o domiciliados de cualquier nción, que delinquieren
o infringieren los bandos públicos". (110)

En el contexto de esa normativa parece inferirse que la jurisdic-
ción común española entendía de los delitos de orden público que cometie-
sen los extranjeros - sin distinción de nacionalidades, ni de la variada

(108) A. "El Faro Nacional" (Rev. de Jurisp. y Admón de Tribunales y de
Instrucción Pública) Nº 213, 28 de julio de 1853, pág. 97.

(109) RIQUELME, A. "Elementos de Derecho Público Internacional", Tomo I.
pág. 383, año 1849.

(110) RIQUELME, A. op. cit. pág. 384.

condición de domiciliación de los mismos- haciéndoles inviable a aquellos su acceso al Fuero de Extranjería. Ahora bien, ¿procede dar una interpretación amplia a dicho texto, de tal suerte, que el concepto de orden público abarque todo lo relativo a la cuestión penal? A nuestro juicio, y con el máximo respeto para la opinión de los ilustres juristas, que sentaron una tesis contraria a la operatividad del Fuero en materia penal, entendemos que la no aplicación del mismo en la cuestión específica del orden público, no debe en buena exégesis literal - y aún espiritual - implicar que fuesen desaforados los extranjeros que incurriesen en conductas penales, no constitutivas de infracciones, del orden público. Al fin y a la postre, el orden público no es más que una parcela muy concreta - dentro del anchuroso campo del derecho penal, y por ende, "donde la ley no distingue, no podemos nosotros distinguir", según reza el viejo aforismo jurídico, máxima que mantiene todo su vigor - o debe mantenerlo - en cuestiones de hermenéutica. Otra argumentación favorable a la vigencia del Fuero de Extranjería en materia penal, se deduce de las glosas que hemos verificado a los Capítulos, Reales Cédulas, Tratados y Reales Decretos de los siglos XVII, XVIII y XIX, que hemos reseñado en las páginas precedentes, donde con abrumadora insistencia, a distintos súbditos no regnicolas, se les confirió un juez conservador, instrumento operativo, de su Fuero de extranjería, tanto en las cuestiones civiles, como - en las causas criminales. Por muy hipérbolico que se nos antoje aquel -

privilegio jurisdiccional, no debemos restarle parte de su contenido propio, reduciéndolo a la esfera jurisdiccional de las partes.

A esta conclusión, en definitiva, llega Antonio Riquelme, de que el Fuero tenía virtualidad en la temática civil y penal, cuando nos dice: "Pero aún suponiendo que este desafuero no se limitase sólo a los delitos contra los bandos públicos de policía y buen gobierno, sino que se extendiese a todas las causas criminales como los fueros que se suponían derogados por esta ley, fueron robustecidos por Tratados posteriores a la misma ley, claro es que la ley a su vez debería quedar derogada por estos Tratados" (111). Lo que en otras palabras comporta que el Fuero englobase asimismo las causas criminales.

1.6. ¿El Fuero de Extranjería fue sólo activo o pasivo? → En cuanto a sí, el carácter del fuero civil es activo o pasivo, no cabe a nuestro juicio, cuestión alguna, y conviene dejarlo así consignado para evitar todo género de dudas sobre este punto. Aún prescindiendo de aquel principio de derecho de que el actor ha de seguir el fuero del demandado, que no podría dejar de tener aplicación al presente caso, tenemos en la práctica el mismo hecho fundamental que dió origen en España a la existencia del fuero de extranjería, o sea la Real Cédula de 9 de noviembre de 1645, expedida a consecuencia de la reclamación de la Audiencia de Sevilla con—

(111) RIQUELME, A.: op. cit. pág. 384.

tra las de 19 de marzo y 26 de junio del mismo año, en que se concedía a los ingleses fuero activo y pasivo; por cuya Real Cédula se limitó el privilegio del fuero, cuando los súbditos ingleses litigasen con españoles, a los casos en que fuesen reos o demandados. Y esto mismo se expresa también de un modo terminante en el art. 31 del R. Decreto de Extranjería de 17 de Noviembre de 1852 en el cual se declara que este fuero es meramente pasivo.

Para Antonio Riquelme, esta cuestión viene solucionada por lo dis- puesto en la Real Cédula de 9 de noviembre de 1645: "En el contexto de es ta Real Cédula se parte del principio de que los ingleses pueden tener en España pleitos entre sí con otros extranjeros y aún con los mismos españoles, y que en unos casos y en otros puedenser demandantes o demandados. Por consiguiente, se admiten los casos de que el extranjero puedan demandar al regnícola, y que los extranjeros puedan reciprocamente demandarse ante los tribunales españoles, y en estos casos se declara que el fuero del juez conservador sólo es pasivo y que alcanza tanto a lo civil como a lo criminal" (112)

Ahora bien, creemos oportuno matizar que el Fuero de extranjería tuvo carácter activo y pasivo en los pleitos entre ciertos extranjeros en España; es decir, el extraneum aforado, tanto si actuaba como actor, como

(112) RIQUELME, A.: op. cit. pág. 381.

de demandado, lo protegía aquella jurisdicción privativa suya; por el contrario en los pleitos entre españoles y no regnicolas, el extranjero con derecho a fuero sólo podía buscar aquel amparo procesal si intervenía en los pleitos o causas como demandado o reo convenido.

- 1.7. ¿El Fuero de Extranjería tuvo vigencia en América Española?. - Entendamos que dicho privilegio sólo se dispensó a los extraneum, que se establecían o radicaban en la metrópoli, pero nunca a aquellos que pudieran avacindar se en nuestras colonias de ultramar, toda vez que se mantuvo una postura restrictiva de afincamiento de aquellos en nuestras posesiones americanas, motivada para prevenir el daño o competencia que a nuestro tráfico mercantil, pudiera representar la presencia de aquellos, incrementada por razones de cautela política.

A este respecto, llega a idéntica conclusión, Alejandro de Bacardi, cuando afirma: "las antiguas leyes de Indias no les permitían a los extranjeros pasar a ellas, ni aún siendo clérigos o religiosos, ni ejercer el comercio, ni ser oficiales de la armada, artilleros, pilotos o marineros, ni entrar en los castillos aunque fueran llevados como presos; más este rigor caducó por otras resoluciones posteriores. Pero cuando se estipuló el Fuero de Extranjería, se hallaba vigente la primitiva prohibición, y por lo mismo en Reales Cédulas de 17 de febrero de 1801, y de 18 de Febrero de - 1803 se declaró que no era extensivo en Ultramar. Sin embargo, en la práctica los Tribunales se le concedieron a los extranjeros transeúntes, has-

ta que por Real Cédula, digo, Orden de 12 de Octubre de 1844, reiterada en 2 de julio de 1847, fué extinguido absolutamente" (113). Los casos muy - aislados de concesión del Fuero a algunos extranjeros residentes provisionalmente en nuestras colonias de América, no descirtúan aquella afirma—ción de que con carácter general el susodicho privilegio no tuvo aplica—ción permanente y ordenada en la América española.

José Ramón de Orde, coincide con aquel juicio, cuando señala que "Habiéndose prohibido en el descubrimiento de América, ejercer a los extranjeros el comercio con las Indias, Novísima Recopilación, leyes 1ª y 2ª, título 11, libro VI, y preocupados los monarcas de los siglos XVII y XVIII con las guerras, se consiguió su alejamiento del Nuevo Mundo; pero con la marcha de españoles a América, se consiguieron efectos contrarios pues el comercio de la península queda en poder de extranjeros, que gozan otra vez de privilegios superiores a los nacionales en tiempos de Felipe IV y Felipe V, garantizadno a los extranjeros el ejercicio de profesiones e industrias (Ley 10, título 2, Libro VI; Novísima Recopilación) eximién—doles de gravámenes fiscales (Novísima Recopilación, Ley 3ª, título 11, Libro VI)" (114).

(113) BACARDI, A. "Nuevo Colón o Tratado del Derecho Militar de España y sus Indias". Tomo I, 1864, pág. 36 6 37.

(114) ORUE, J.R.: Manual de Derecho Internacional Público: 1928, pág. 159.

- 1.8. ¿El Fuero de Extranjería se aplicaba sólo a los extranjeros transeúntes o también a los avecindados?. - Antonio Riquelme, se pregunta a qué clase de extranjeros se le puede aplicar la legislación especial de - extranjería, a lo que responde que "sólo les alcanza a aquellos que - con arreglo a las leyes de España, están en la categoría de transeúntes, porque son - dice - los que conservan su calidad de tales extranjeros" (115).

Entendemos - discrepando de la manifestación anterior -, que - las disposiciones legales, así como los Convenios y Tratados Internacionales, relativos a dicha materia, no discriminan, ni autorizan a - pensar, que el susodicho fuero deba aplicarse con carácter de exclusividad a los extranjeros transeúntes, sino que por lo contrario engloban asimismo a los extranjeros domiciliados. Veamos los fundamentos legales en que apoyamos dicha conclusión y en los que se reconoce el Fuero de Extranjería independientemente a su mayor o menor domiciliación. Por una parte, la Ordenanza de Felipe IV de 4 de Octubre de 1624, por la que se instituyó, y firmó un Consulado y Compañía con título de Alrantazgo, a fin de aplicarlo en materia comercial a los naturales de las provincias obedientes de Flandes, y sus descendientes residentes

(115) RIQUELME, A. "Elementos de Derecho Público español", Tomo I, - 1849, pág. 380.

en España, y particularmente los congregados en la Hermandad y Capilla de San Andrés de la Ciudad de Sevilla con título de la Nación Flamenca y Alemania; y asimismo a los de las Dos Naciones, que residen en los - dichos Países Obedientes de Flandes, o en Alemania, y tratan, y contra tan en los Reinos de España, y Estados Obedientes, y demás provincias Septentrionales, no distingue al respecto, sino que les concede la jurisdicción privilegiada, de carácter civil, y criminal que tiene y usa la casa de la Contratación de las Indias, tanto a los extranjeros y des cendientes residentes en España, como incluso a los extranjeros citados no ubicados en esta. La Ordenanza no mantiene un criterio restrictivo, en ese sentido, sino incluso amplificador para los extranjeros que per manecen en sus territorios.

En la Real Cédula de Felipe IV de 19 de marzo de 1645, se conce den privilegios y un juez conservador a los ingleses que "residieren en la Andalucía" (116), - corroborada por las de 26 de Junio de 1645 y 9 de noviembre de 1645 -, verbo que debemos interpretar como referente a los extranjeros domiciliados y no a los simples transeúntes, deducción a la que hay que llegar consecuentemente, a tenor del texto y espíritu que alienta en aquellas.

(116) CANTILLO, A. op, cit. pág. 137.

En el Tratado ajustado entre España y las Ciudades Hanseáticas de 26 de Enero de 1648 (publicado en Hamburgo a 12 de agosto de 1650) si bien en el apartado 26, se habla de "los naturales de la Hamsa, que por causa del Comercio, van, vienen, están y contratan en estos reinos" (117) a efectos de que no sean juzgados, ni condenados, sino ante el Juez Especial que se les diere, lo cual parece hacer referencia al extranjero con condición de provisionalidad en España, es decir, el caso del transeúnte, veda el acceder definitivamente a esa exégesis, lo dispuesto en el apartado 33 del mentado tratado, al señalar que "cuando - acaso alguno de estos privilegios hubiere necesidad, de alguna interpretación, sea siempre en favor de los Hanseáticos" (118), privilegios jurisdiccionales que debemos aplicar consiguientemente tanto al Hanseático transeúnte, como al domiciliado.

En el Tratado de paz, alianza y comercio ajustado en Madrid entre España y Gran Bretaña el 23 de Mayo de 1667, en su apartado 9º, se conceden a los súbditos del Serenísimo Rey de ésta última - sin más - distinción ni concreción - los mismos privilegios otorgados a los naturales de las provincias unidas de los Países Bajos por el Tratado de Munster de 1648, y en el apartado 9º se confiere a los súbditos de la Gran Bretaña - sin limitaciones - las franquezas y ventajas que en su

(117) ABREU Y BERTODANO, J.A. op. cit. (Reinado de Felipe IV) pág.61

(118) ABREU Y BERTODANO, op. cit. pág. 62.

día las Reales Cédulas de Felipe IV de 19 de marzo, 26 de Junio y 9 de noviembre dispensaron a los comerciantes ingleses residentes en Andalucía, añadiendo dicho inciso "cuyo favor se entenderá lo más que se pueda, a uso y beneficio de todos y cada uno de los súbditos de la Gran Bretaña, que habitan o comercian en cualquier paraje de los dominios del rey católico" (119), términos en los que debemos interpolar los status del inglés domiciliado y transeúnte.

El Tratado de Paz entre España y Portugal de 13 de Febrero de 1668, en su inciso 4º, manifiesta que los "vasallos y Moradores" de una y otra parte, tendrán recíprocamente las mismas libertades y privilegios concedidos a los súbditos ingleses por los Tratados de 1630 y 1667" (120). Los términos amplios de "Moradores y Vasallos" y la remisión a dichos Tratados, autorizan a pensar que en dicho tratamiento singular figuran por derecho propio los portugueses domiciliados.

En los Capítulos ajustados por la Justicia, Ayuntamiento y Vecindario de la Villa de Santander con diferentes comerciantes ingleses el día 12 de Septiembre de 1700, se les reconocieron a éstos últimos todos "los Privilegios, exenciones y libertades que por Capítulos, -

(119) CANTILLO, A, op. cit. pág. 130.

(120) ABREU Y BERTODANO, op. cit. (reinado de Carlos II) pág. 306.

Acuerdos y Tratados, concertados anteriormente con Inglaterra se otorgaban a los súbditos de la Nación inglesa - incluido el tratamiento especial para los que residían en Sevilla, Cádiz, Málaga y Puertos de Andalucía - así como los que se concedieron en su día a los naturales de las Villas y Ciudades Hanseáticas y Provincias Unidas de los Países Bajos" (121). Y no se debe preterir que dichas concesiones privilegiadas lo fueron en orden a que los comerciantes de referencia, avecindados en la Villa de Bilbao, "mudasen su trato, comercio y residencia a la villa de Santander" (122), lo cual entraña un carácter de permanencia incompatible con la acepción del transeúnte.

En el Tratado de Comercio entre España y Gran Bretaña de 13 de julio de 1713, se insiste en la Memoria presentada por ésta última Nación, en la necesidad de ratificar los 40 artículos del Tratado de - 1667, así como en la proporción 3ª, se urge por los mismos en la conveniencia de que los ingleses "puedan establecer libremente sus casas de negocios en los puertos y lugares de comercio de Vizcaya y Guipúzcoa, del mismo modo que las han tenido en Andalucía, y a tenor de las Reales Cédulas de Felipe IV de 19 de Marzo, 26 de Junio y 9 de noviembre de 1645" (123), y ya hemos visto, tanto en aquel Tratado, como en

(121) ABREU Y BERTODANO, op. cit. (Tomo reinado Felipe V) pág. 684.

(122) op. cit. pág. 684.

(123) CANTILLO, op. cit. pág. 116.

estas Reales disposiciones, que priva a mayor abundamiento el fuero de extranjería, para el foráneo domiciliado.

El Tratado de comercio y amistad otorgado en el Congreso de — Utrech entre las coronas de España y Gran Bretaña el 9 de diciembre de 1.713, - "por el que se ratifica el Tratado de 1667 y las Reales Cédulas de 1645" (124) reseñadas en el apartado anterior, que se insertan en el mismo - confiere los privilegios de jurisdicción especial, y - económicos consiguientes a los súbditos de la Reina Ana, sin dejar - fuera los domiciliados, matización corroborada por las Reales Cédulas y Tratado, ratificados y que le sirven de fundamento.

Por el Tratado de paz y amistad concertado entre España y los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos, en el Congreso de Utrech el 26 de junio de 1714, se reitera en los artículos 4º, 5º, 9º, 11º a 14º, 16º, 17º, 20º, 23º, 24º, 25º, 28º, 29º, los términos de "súbditos de una y otra parte", a los efectos correspondientes de goce de los privilegios que en aquel se determinan, lo cual dá pié para englobar como beneficiarios de dichos privilegios, tanto a los foráneos transeúntes, como a los domiciliados. El artículo 34 del citado Tratado, específico, a mayor abundamiento entre otros derechos de los súbditos de las partes contratantes, el de ir, frecuentar, re-

(124) CANTILLO, op. cit. pág. 127.

sidir y traficar en las tierras del otro, lo que implica en los dos - últimos infinitivos, un status permanente de domiciliación - por el - foráneo - bien alejado de un simple contacto mercantil circunstancial que podría tener un transeúnte. Tesis que corrobora el artículo 36 del mismo Acuerdo de paz, cuando autoriza a que recíprocamente los súbditos de España y los Países Bajos, puedan disponer en caso de guerra mútua de un año y un día - a contar desde el rompimiento de hostilida- des-, para abandonar el país extraño, con sus efectos, bienes y muebles o venderlos. Un mero transeúnte no suele por la transitoriedad de su poder, adquirir bienes, ni muebles, en el país que visita, dicho - concepto se amalgama mejor con el extranjero residente - de carácter más fijo -, el cual los necesita para el mejor acomodo de su hacienda y al uso no le importuna el invertir en un territorio - al que no - pertenece como nacional, pero en el que se ha integrado físicamente - desarrollando una actividad que beneficia en definitiva a turios y - troyanos.

En el tratado concluido en Madrid el 14 de Diciembre de 1715 entre España y Gran Bretaña, "se ratifican los de 1667 y el de Utrech de 9 de Diciembre de 1713, entre ambas naciones" (125), y al hacer referencia a los beneficios otorgados los confiere a los "vasallos in-

(125) CANTILLO, op.cit. pág. 171.

gleses", a tenor de los artículos 1º, 3º, 4º y 5º del mismo, sin efectuar más distinciones en cuanto a la transitoriedad no de su domiciliación; quiere ello decir ad exemplum, que los ingleses domiciliados gozarían de fuero especial al igual que los simples transeúntes, pues donde la ley no distingue, - según el aforismo - no debemos nosotros distinguir o restringir.

Y por el Tratado de 24 de Marzo de 1778 otorgado con Portugal, (Art. 8º) se toma como norma los artículos 3º y 4º del Tratado - suscrito en la misma nación -, de 13 de Febrero de 1668, confiriéndose por este último a los "vasallos y moradores recíprocos", las mismas libertades y privilegios dispensados por España a los súbditos ingleses por el Tratado de 23 de Mayo de 1667. También aquí el fuero de - Extranjería se aplicaría por ende a los portugueses, sin discriminaciones ordenadas a una mayor o menor domiciliación.

A nuestro modo de ver, nuestra jurisdicción especial, se aplicaba - conforme los textos citados -, invariablemente a los foráneos, sin matizar su competencia en función de que se fuese transeúnte, más al bien contrario, la bondad y generosidad de aquellos, abrían un abanico de posibilidades, en los que cabían todos, transeúntes y residentes-domiciliados, aunque a primera vista parece que estuviesen pensados más para éstos últimos, que para los primeros.

Corroborar dicho criterio, la última disposición legal que se -

dicta en España, ofreciendo - una vez más - la jurisdicción especial - militar de extranjería, a los foráneos domiciliados y transeúntes, es to es, nos referimos al artículo 30 del R.D. de 17 de noviembre de - 1852. En dicho precepto, taxativamente se determina que se les concede la indicada "jurisdicción" singular a los extranjeros - sin distinción de nacionalidades- bien sean "domiciliados, o bien a los transeúntes" (126); esta última matización se desprende de la separación de ambos conceptos mediante la conjunción disyuntiva y, al decir "domiciliados y transeúntes". Dicho Real Decreto no restringe sino que, por el contrario, concede el fuero privilegiado con carácter general -, sin limitaciones en función de la nacionalidad, ni del mayor o menor grado de domiciliación en nuestra patria.

Sustenta opinión contraria Rafael Gibert, al afirmar que "los extranjeros avecindados y arraigados están sujetos a la jurisdicción ordinaria", mientras que el Fuero de Extranjería sólo comprende "la jurisdicción civil entre los extranjeros transeúntes, y también los - pleitos mixtos, cuando el extranjero es demandado". (127).

El criterio de nuestra jurisprudencia ha fluctuado respecto del

(126) Enciclopedia Jurídica Española, Voz extranjería, pág. 549.

(127) GIBERT, R. "La condición de los extranjeros en el antiguo derecho español", Recueils de la Société Jean Bodin, "L' étranger", Vol. X, Bruxelles, 1958, pág. 195.

del campo operativo del Fuero de Extranjería según las distintas épocas. Así se dice "nuestra legislación sólo concede el Fuero de Extranjería a los extranjeros transeúntes o domiciliados en España", S. de 17 de Octubre de 1853 (128). Criterio amplio - coincidente con nuestra opinión - que abarca tanto a los transeúntes como a los avecindados. Por el contrario en la misma obra de José M^a Pantoja, se recoge esta sentencia con una visión más reducida que la anterior, al destacar que - "el fuero de Extranjería no corresponde a los extranjeros avecindados sino sólo a los transeúntes que vienen a estos Reinos de paso, sin ánimo de permanecer en ellos, en conformidad a la Ley 5^a tit. 11, libro 6^o de la Novísima Recopilación S. de 3 de Julio de 1868. (129)

SECCION 2^a

2. Supuestos de desafuero.- Ha preocupado a nuestra doctrina científica - en especial del siglo XIX - la delimitación del campo de operatividad del Fuero de Extranjería, así como los posibles casos de excepción del mismo. No debe resultarnos extraña tal preocupación, habida cuenta que del distinto ámbito de actuación de aquel, se infieren procesalmente competencias variadas, según la temática sea o no aforada.

(128) PANTOJA, J.M^a. "Repertorio de la Jurisprudencia civil española," Tomo I, Madrid, 1886. Pág. 699. (Voz fuero Extranjería)

(129) op. cit. pág. 700

Sobre si los extranjeros, pueden ser desaforados hay diversidad de opiniones. Creen algunos que este fuero de extranjería es "tan personal, que en ningún caso cabe el desafuero; otros consideran que el Fuero de los extranjeros es el militar, y por consiguiente suponen - como parte del fuero, el desafuero en los casos en que las leyes militares lo establecen" (130).

Uno "de los puntos que más se habían cuestionado hasta ahora - en esta materia, era el de si el fuero de extranjería debía extenderse a todos los negocios y causas de las personas a quien compete, o si de esta regla general habran de recoñecerse como justas y legítimas algunas excepciones. La exageración, y aún nos atrevemos a decir, la sinrazón, llegó en esta parte a tal extremo, que se proclamó la subsistencia del Fuero, como cualidad personal del aforado para cuantos negocios pudieran suscitarse contra el mismo en le orden civil y criminal, sin que . pudiese desaforársele por motivo, ni pretexto alguno". (131)

Coincide Riquelme con el autor anónimo anterior, - que identifica su personalidad con la letra A.-, al estimar que el ámbito del Fue

(130) RIQUELME, A. "Elementos de Derecho Público Internacional", Tomo I, Madrid, 1849, pág. 385.

(131) A. "El Fuero de Extranjería" (El Faro Nacional, Rev.de Jurisp.de Admón de Tribunales y de Instrucción Pública) Año 3º, Vº 212 (24 de julio de 1853) pág. 98.

ro no es tan absoluto, como para que no se le puedan extraer materias que no deben englobar en su contexto, así nos dice: "El Fuero de Extranjería por muy personal que sea, no deja de estar sujeto a aquellas modificaciones que exigen las circunstancias y la organización interior del Estado, porque ninguna nación puede ser obligada a cumplir las estipulaciones, que el tiempo y las circunstancias hacen incompatibles con la administración pública" (132)

Que el Fuero no podía generalizarse a todos los casos de litigios, y causas de la extranjería, esa opinión predominante. En este sentido, "no participaron, sin embargo, los jurisconsultos y los hombres entendidos en esta opinión, que con tanto calor profesaban y sostenían los diplomáticos. Fácilmente ocurrieron a su consideración algunos casos, en que no entraba ni podía entrar en el interés de las naciones conservar ileso y subsistente el Fuero de Extranjería" (133)

En el art. 31 del Real Decreto de Extranjería de 17 de noviembre de 1852, se determina desde el punto de vista legal, los casos en que los extranjeros no podían acogerse al Fuero de Extranjería, a saber:

- a) En los delitos de contrabando.— Pecourt García, añade en es

(132) RIQUELME, A. op. cit. pág. 385.

(133) A. op. cit. pág. 98.

te punto: "Ya la Real Cédula de 8 de marzo de 1716 había dispuesto, en efecto, que los jueces conservadores deberían conocer de todos los litigios y causas, excepto las que tocasen a las rentas y derechos reales. El precepto se reiteró en la Real Cédula de 7 de julio de 1727 y posteriormente lo confirmó el Real Decreto de 21 de diciembre de 1759" (134). En este mismo sentido, un autor anónimo, recuerda que "en tales delitos su conocimiento habrá sido reservado ya a los Tribunales de Hacienda, por las Reales Ordenes de 21 de diciembre de 1759, 1 de diciembre de 1761, y 14 de marzo 1801" (135).

b) En los juicios que procedan de operaciones mercantiles.—A este respecto conviene recordar que la Ley 15, Título 1º, Partida 1ª y la Ley 15, Título 14, Partida 3ª, regularon que los extraneos que otorgaron contratos en España quedarían sujetos a la ley española por lo que atañe a los efectos jurídicos de su pacto.

Un comentarista agrega en este sentido, "la necesidad de dar a los asuntos mercantiles cierta actividad y rapidez, es la que ha hecho nacer los tribunales de comercio, y la que invistió desde luego de

(134) PECOURT GARCIA, E. "Una institución singular en la Historia del Derecho Privado Internacional español. El Fuero de Extranjería, Univ. de Oviedo, 1970, Homenaje al Prof. Sela Samfíl, pág. 891.

(135) J.L.F. "El Fuero de Extranjería", Rev. Gen. de Leg. y Jurisp. Año 1863, Tomo XXII, pág. 34.

una jurisdicción universal para conocer en los asuntos del ramo, sin -
 excepción de clases, ni de personas. Hace ya cerca de un siglo que di-
 ferentes Reales Ordenes y disposiciones dictadas desde 1759 a 1761 de-
 clararon su jurisdicción exclusiva para conocer de esta clase de nego-
 cios, aún siendo los interesados en ellos extranjeros transeúntes, y re-
 cientemente, por el Art. 20 del Código de Comercio, se estableció que
 todos los extranjeros quedasen sujetos a la legislación y a los tribuna-
 les del Reino, en el hecho de comerciar en el territorio español" (136)

A idéntica conclusión, llega Riquelme cuando afirma: "el art. 20 del
 C. Comercio, promulgado sin oposición de nadie, como no podía menos de
 ser, establece que todo extranjero en el hecho de celebrar actos mer-
 cantiles en territorio español, se sujeta a los tribunales y a la le-
 gislación del reino en este ramo" (137). Criterio coincidente lo sos-
 tienen otros comentaristas (138).

El desaforamiento de la temática mercantil es justificada con
 argumentación convincente por algún autor de esta manera: "cuán grande
 sería el trastorno en los intereses comerciales del país, y cuántos per-
 juicios no habría que deflorar a cada momento, si los extranjeros, que
 en mayor número aún que los naturales ejercen el comercio en España, -

(136) A. "El Fuero de Extranjería", op. cit. pág. 99.

(137) RIQUELME, A. op. cit. pág. 387.

(138) J.L.F. op. cit. pág. 34 y 35.

podieran sustraerse, alegando su fuero, al sistema de enjuiciamiento - pronto y expedito establecido en los tribunales de comercio. Entonces podría decirse que las excepciones superaban a la regla general, y pudiera haberse excusado la reforma de este interesante ramo de nuestra legislación, destinado a no tener efecto en su aplicación al mayor número de personas" (139)

c) En los delitos de sedición y los demás que deben ser juzgados con arreglo a la Ley de 17 de abril de 1821.- En dicha Ley se determina en su Art. 14, que "en las causas de esta Ley no habrá lugar a competencia alguna, fuera de la que pudiera suscitarse entre las jurisdicciones ordinaria y militar, según los límites que se señalan".

Algún autor, supone que "los reos complicados en ellas han tenido por objeto hostilizar al gobierno y atentar contra la seguridad interior del Estado, ¿cómo es posible que pudiese nación alguna, sin mengua de su misma dignidad y prestigio, consentir que los extranjeros criminales fuesen juzgados por sus tribunales propios, en lugar de aplicárseles de una manera extraordinaria y urgente la acción de la Ley que condena y reprime sus excesos?" (140). Análoga opinión sienta Riquelme al manifestar: "ontra aquella disposición de - de 1821 -, en vano se alegaría lo pacto den los convenios con otras potencias, porque los ca-

(139) A. El Fuero de Extranjería", op. cit. pág. 99.

(140) A. El Fuero de Extranjería", op. cit. pág. 99.

sos a los que la Ley se refiere, suponen un estado de hostilidad abierta entre los súbditos y el gobierno, y en tal situación la propia defensa autoriza para toda clase de medidas excepcionales, tanto con respecto a los extranjeros, como a los nacionales". (141)

d) En los delitos cometidos a bordo y en alta mar y en los juicios de presas. - Las motivaciones para sustraer del fuero tales actividades delictuales, son varias. Para Riquelme, se apoyan "porque no pudiéndose fallar estos casos sino por las leyes y ordenanzas de marina, que son las únicas que tratan de ellos, sería altamente chocante que un juez militar juzgase por una legislación que no siendo la suya le es completamente desconocida" (142). Para otros autores "aquellos delitos no pueden quedar sometidos al fuero común de extranjería. Su mismo carácter los coloca en una situación excepcional, que los pone fuera del dominio de sus jueces naturales, Así lo han reconocido tácitamente los representantes de las potencias extranjeras, y así está consignado en las ordenanzas marítimas". (143).

e) En las causa por tráfico de negros. - Un tráfico tan odioso que ya en el siglo XIX, comenzó a ser mal visto, como consecuencias de

(141) RIQUELME, A.: op. cit. pág. 388.

(142) RIQUELME, A.: op. cit. pág. 388.

(143) A. "El Fuero de Extranjería", op. cit. pág. 99.

las nuevas corrientes ideológicas inspiradas en el sentido de igualdad entre todos los hombres que vino a apuntar la Revolución Francesa, debía de excluir del beneficio y privilegio del Fuero de Extranjería a todos los que aún comerciaban en actividad tan reprobable. Pecourt García, razona dicha exclusión en el art. 7 del Tratado Hispano-británico de 1835, que determinaba: "para proceder con el menor retardo y perjuicios posibles a la adjudicación de los buques que sean detenidos... se establecerán, tan luego como sea practicable, dos tribunales mixtos de justicia... Estos tribunales, cuyas sentencias serán sin apelación, juzgarán las causas que se les sometan con arreglo a las estipulaciones del presente Tratado, y de conformidad con los reglamentos e instrucciones que son anejas a él, y se consideren parte integrante del mismo" (144). Abunda en similar razonamiento, cuando afirma: "en el tráfico de negros el desafuero de los delincuentes se halla expresa y terminantemente establecido en varios tratados" (145).

f) En los juicios de faltas.— En que según el Código penal, no lo gozan los españoles de ninguna condición, ni estado. En todos estos casos, serán competentes para juzgar a los expresados extranjeros los Tribunales y jueces establecidos respectivamente por las leyes.

(144) PECOURT GARCIA, E. op. cit. pág. 892.

(145) A. "El Fuero de Extranjería", op. cit. pág. 99.

Autores como Riquelme (146), Pecourt (147), al estudiar los - casos de desafuero, silencian dentro de los comentarios el Art. 31 del Real Decreto de 1852, - el supuesto de los juicios de faltas. Dicha omisión en puridad exgética obliga a considerar que dichos juristas, o bien subsimiéndolos implícitamente dentro del Fuero, no estiman conveniente formular comentarios al respecto. Dos suposiciones tropazarán con el - literal del Art. 31, del citado R. Decreto de 1852, que taxativamente aparta aquellos juicios del cauce del Fuero de Extranjería.

En lo referente a considerar las causas criminales como materia desaforada, se estudia esta temática en la Sección anterior a esta intitulada "Extensión del Fuero de Extranjería". Aquí únicamente nos cabe añadir, como argumentos legales en contra de la inserción de la materia criminal en el contexto del Fuero, el Texto de la Real Cédula de 24 de Octubre de 1782, y el de la Real Orden de 24 de Mayo de 1801 como - texto a favor, el de la Real Orden de 3 de febrero de 1845, que considera vigente el Fuero de Extranjería, por no haber sufrido derogación alguna las disposiciones vigentes sobre el mencionado Fuero.

Para Pecourt García, "puede considerarse mayoritaria la opinión que negaba el alcance del Fuero privilegiado de extranjería a las causas

(146) RIQUELME, A, op. cit. pág. 388.

(147) PECOURT, E. op. cit. pág. 892.

criminales, y cita como ejemplo la obra de G. Goyena y L. Aguirre "Febrero, o librería de Jueces, Abogados y Escribanos, comprensiva de los códigos civil, criminal y administrativo...", VI, 1842, pág. 26, ep. 4692" (148)

SECCION 3ª

3. Tipología de Privilegios de los extranjeros en España.

3.1. Origen. - Al estudiar la génesis del Fuero de Extranjería en el epígrafe 2 del Capítulo I, ya vimos como ciertos autores, como Riquelme, aluden al Tratado de 1667 concertado con Inglaterra como el origen solemne, de aquel Fuero; otros estudiosos del tema, como Pecourt García, estiman por su parte que el nacimiento de aquel cauce excepcional de administración de justicia, ha de simultanearse con el alumbramiento de la institución del Juez conservador de extranjeros, que tuvo lugar, - según la óptica de este autor - en los Tratados ajustados con los británicos en 1645.

Para nosotros, la amplia gama de Privilegios que se confieren a los extranjeros en España, varía en función de los distintos compromisos político-diplomáticos que es menester ajustar en un concreto momento

(148) PECOURT, E. op. cit. pág. 893.

to histórico, o bien en atención al distinto grado de favoritismo hacia los extraneum que contribuyan a fortalecer el comercio y desarrollar nuestra industria, tan necesitada en la Edad Moderna de mejorar sus métodos y perfeccionar sus técnicas de producción. A este respecto, B. Eard, partidario de la introducción de extranjeros útiles en España nos dice: "aprenderán nuestros españoles a perfeccionar su labranza en todas sus ramas, a fabricar con más primor y economía, a dar sus frutos aquella perfección que el arte y la industria añade a su natural buena calidad". Artesanos holandeses e irlandeses enseñarán el arte de fabricar lienzos finos y viñadores experimentados de Borgoña, Champaña y Burdeos, el de hacer buen vino". (149)

3.2. Etapas. - Creemos oportuno hacer referencia a tres etapas que acotamos dentro de nuestra normativa - en materia de concesión de privilegios a los extranjeros -, que pueden destacarse como hitos dignos de tenerse en cuenta, a saber:

3.2.1. 1ª etapa. Período inicial del Fuero. - Según los Capítulos de Privilegios otorgados por Felipe III en 1607 a los Hanseáticos - que estudiaremos más detenidamente en Capítulo posterior - se concedieron

(149) WARD, B. "Proyecto económico en que se promueven varias providencias dirigidas a promover los intereses de España con los medios y fondos necesarios para su planificación", Madrid, 1782, pág. 43 y 63.

en dicha forma, los siguientes Privilegios, garantías y derechos a los naturales de la Hansa Teutónica en nuestra patria:

- a) El Fuero de Extranjería, aplicado por un Juez conservador - (ap. 18), por primera vez en nuestra Patria.
- b) Derecho a una justicia rápida y ágil (Ap. 25)
- c) Garantías en la detención y prisión (ap. 24)
- d) Beneficio de la cosa juzgada en las Citis (ap. 27)
- e) Derecho de designación de Cónsul y tutela de éste (ap. 43 y 44),
- f) Derecho de construcción de casas y tiendas (ap. 28)
- g) Exoneración del servicio militar (ap. 29)
- h) Exención del pago de tributos (ap. 29)
- i) Inmunidad temporal de personas y bienes ante el "casus bello" (ap. 27)

No podemos preterir un sucinto comentario a la relación de Privilegios que acabamos de extrapolar. A nuestro modo de ver, el peso específico de los mencionados derechos singulares, tienen tal consistencia que sobrepasaron en mucho a las contraprestaciones, que los Hanseáticos, en forma de colaboración mercantil y signos de amistad, pudieron devolver como justa contrapartida en beneficio de los intereses españoles. Existió ahí un explícito quijotismo político hispano.

Dentro de esta misma etapa inicial del Fuero de Extranjería, de

bemos situar a las Reales Cédulas de 19 de Marzo, 26 de Junio y 9 de -
Noviembre de 1645, conferidas por Felipe Iv a los ingleses, en las que
se instrumentaron los siguientes Privilegios en beneficio de los súbd
tos británicos, y que estudiamos conjuntamente por considerar que las
tres están íntimamente interrelacionadas:

- a) Disfrute de un iudex privativo y conservador, como órganos -
sustantivo de su Fuero de Extranjería.
- b) Exención de cargas concejiles.
- c) Liberalidad en materia religiosa.
- d) Benevolencia respecto de la exhibición de sus libros de co-
mercio.
- e) Exención del pago de los "derechos de las sisas por los ser-
vicios de millones".
- f) Exención del pago de los guardas colocadas en los navíos in
gleses.
- g) Derecho a llevar dinero en los navíos para comprar utillaje.
- h) Privilegio a ser inspeccionadas sus mercaderías en sus casas.
- i) Privilegio de exigir inspección de sus navíos en plazo de ter
cero día.
- j) Exención de responsabilidad por mercaderías importadas mos-
trando los libros de sobordo dentro de tercero día.

k) Privilegio de no declaración de precio de venta, ni nombre -
del comprador.

l) Derecho de alquiler de casas (150)

Antonio Riquelme, por su parte, subraya que los privilegios per
sonales concedidos a los ingleses en el tratado de 1667, que son hoy -
la base de los que disfrutaban los demás extranjeros, son los siguientes:

"Libertad de cargas concejiles.

Libertad de préstamos y donativos.

Que no se tomen sus géneros para el ejército.

Que no se les prenda cuando no paguen los derechos de los géné
ros, sino que se persigan sus mercancías.

Que no se les arranquen sus libros de cuentas, sino que sólo se
les obligue a exhibirlos.

Y que tengan un juez conservador" (151)

En líneas generales, haciendo balance de los beneficios dispen
sados en primeras etapas, se robustecen y amplían en el caso inglés, -
los conferidos a los Hamseáticos, como signo inequívoco de afianzamiento
del status del extranjero.

(150) CANTILLO, A: "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y Comercio", Madrid, 1843, pág. 137, y sig.

(151) RIQUELME, A. "Elementos de D. Público Internacional", Madrid, -
1849, Tomo I, pág. 328.

3.2.2. 2ª Etapa.— En la ley 1ª, título 11, libro 6 de la Novísima Recopilación, se dispensan a los extraneum los Privilegios que a continuación señalamos.

a) Los avecindados estén declarados por seis años libres de pagar alcabalas y de las cargas concejiles del lugar donde moran.

b) Los avecindados tienen derecho a los pastos y demás comodidades vecinales, si llevan diez años de residencia en España por casa pobladas o sólo seis si están casados con españolas.

De otro lado en la Ley 3ª, título 11, Libro 6 de la Novísima Recopilación se exonera a los extranjeros transeúntes de "los oficios concejiles, depositarias, receptarias y curadurías, custodia de panes, viñas y montes, de levass y milicias y de las cargas, fechos o servicios — personales" (152)

Es preciso resaltar que las leyes 3ª y 8ª, título 11, libro 6 de la Novísima Recopilación mantuvieron para los transeúntes, los mismos privilegios otorgados para los ingleses en las Reales Cédulas de Felipe IV del 1645, ya mencionadas; toda vez que a los avecindados se les asemejó a los regnicólas en materia de fueros y obligaciones. Con posterioridad, y en concordancia con este último trato, las RR.OO. de 6 de julio

(152) "Los Códigos españoles concordados y anotados", Tomo VIII. Novísima Recopilación de las leyes de España, Tomo II. Madrid, 1850. Pág. 256.

de 1815 y 10 de abril de 1817, determinaron que todos los comerciantes extranjeros radicados en España - y por lo tanto avecindados - satisfacieren las mismas contribuciones ordinarias y extraordinarias que los españoles, quedando apartados de las exenciones conferidas a los simples transeúntes. Esta política fiscal se reiteró por R.O. de 30 de octubre de 1815, en la que se subrayó, que la exoneración de cargas e impuestos sólo abarcase a los transeúntes extranjeros.

3.2.3. 3ª etapa.- Configuramos este período con la normativa coherente y ordenada del Real Decreto de Extranjería de 17 de noviembre de 1852 (153). Dentro de dicho texto, hallamos los siguientes privilegios:

a) El Fuero de Extranjería instrumentado a través de la jurisdictio en 1ª instancia de los gobernadores de las plazas marítimas y los Capitanes Generales, (para estudio más meticulous véase el Capítulo II del Título II trabajo donde se estudian ambas instituciones), y en la apelación mediante la actuación del Tribunal de Guerra, Marina y Extranjería (art. 20).

b) El ejercicio de comercio al por mayor y menor concedido a los extranjeros domiciliados (art. 19)

c) El ejercicio de comercio al por mayor otorgado a los extran-

(153) Enciclopedia Jurídica Española, Barcelona, 1958, págs. 547 y sig.

jeros transeúntes (art. 20).

d) El "ius communicationis" por todo el territorio nacional (art. 7).

e) El derecho de ejercicio de la actividad industrial (art. 18)

f) El derecho de posesión y adquisición de bienes inmuebles — (art. 18).

g) El privilegio de exoneración de cargas concejiles (art. 23).

h) El privilegio de exención del pago de contribuciones extraor
dinarias conferido a los extranjeros transeúntes (art. 22).

i) El privilegio de exención del servicio militar (art. 24).

j) La exención de la aplicación del canon de aubana (art. 28)

Si parangonamos estos Privilegios de esta 3ª etapa, con los re
señados en las dos precedentes, podemos deducir que el R.O. de Extran
jería de 1852, no hace sino articular ordenadamente y con coherencia,
lo que en la primera mitad del siglo XVII, se otorgó a Hanseáticos y
Británicos. En este sentido 150 años de Historia no comportaron una sus
tancial mejora en la condición jurídica del extraneum en España; la jus
tificación puede encontrarse en la circunstancia de que en la primera
mitad del siglo XVII se concedieron tales privilegios a los extraneum,
— anteriormente citados —, que difícilmente podrían ser incrementados
con posterioridad, aumentando el quantum y calidad de los mismos.

Lo que nos resulta incuestionable en las tres etapas es la intención de nuestros gobernantes de atraerse a los extranjeros con una política de captación, a base de exoneraciones y bonificaciones fiscales en materia mercantil, concesiones de fuero excepcional en sus Citis - con impartición de justicia por su propio juez privativo-, garantías jurídicas de carácter general, etc...

B. Ward proclive a la misma política inmigratoria, nos enumera las ventajas que es preciso dispensar a los inmigrantes, así como los privilegios que deben serles otorgados (154). Campomanes, influenciado por Ward, "solicita que se incorpore a España a extranjeros útiles, dándoles buena acogida, lo que contribuirá a la repoblación de regiones abandonadas y se mejorarán las industrias de nuestro reino". (155). Para Jean Serrailh, es menester observar ante todo que "los dos centros en que los extranjeros prefieren establecer su residencia en España son Cádiz y Madrid" (156), y lo justifica del siguiente modo, Cádiz, atrae al extranjero, "por ser puerto internacional en el cual todas las naciones tienen representantes y agentes para organizar el co

(154) WARD, B. "Proyecto económico", págs. 65-66.

(155) Disc. educ. pop. t.1., pág. 18.

(156) SERRAILH, Jean., "La España ilustrada de la 2ª mitad del siglo XVIII", Fondo de Cultura económica, México, 1957, (Trad. de Antonio Latorre), pág. 332.

mercio con las Indias", Y Madrid, a su vez, porque la corte y la aristocracia son un amén para los artesanos hábiles y expertos en industria de lujo" (157). Y agrega: "en Cádiz se han establecido unas importantes colonias de franceses, ingleses e italianos, que contribuyen a dar a la ciudad ese aspecto delicioso y acogedor que tanto impresionó a Laborde" (158).

Para un autor anónimo, el Fuero de Extranjería "es un Privilegio concedido únicamente a los que vienen a estos reinos, por lo que cabe deducir las siguientes consecuencias: 1ª) que dicho Fuero es renuncia no está prohibida por la ley, y que puede por tanto, someterse bien sea tácita, bien expresamente, a favor de los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria, pero no de otra especial, en virtud de lo prescrito en los Arts. 3º y 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2ª) Que no pueden gozar de dicho Fuero, las empresas establecidas en el extranjero para los negocios que tengan en nuestra nación.

3ª) Y finalmente que en las demandas sobre bienes de extranjeros debe tenerse en consideración el Fuero de estos y no el de sus apoderados o representantes, cualquiera que sea el que a los últimos corresponda". (159)

(157) WARD, B, op. cit. pág. 332.

(158) Ibid. op. cit. pág. 332.

(159) J.L.F., "El Fuero de Extranjería", en Rev. Gen. de Legisl. y Jurisp. Madrid, 1863, Tomo XXII, pág. 42-3.

En definitiva, podemos llegar a la conclusión de que, dentro de la temática de la tipología de privilegios dirigidos a beneficiar al -extraneum, desde 1607 a 1852, - período que hemos acotado en las tres etapas que dejamos reseñadas -, el Fuero de Extranjería constituye per se, la piedra angular de todos los demás privilegios, que lo complementan y enriquecen, lo que no obsta para éstos tengan a su vez relevancia y peso específico: propios.

SECCION 4ª.

4. Período de vigencia del Fuero de Extranjería.

4.1. Introducción.- El presente rótulo nos obliga a formularnos la siguiente consideración. ¿Estuvo vigente el Fuero de Extranjería desde su aparición en 1607 hasta la época actual? Aquella rúbrica y en interrogante nos plantea la delimitación previa, de acotar tres etapas históricas, a fin de dar respuesta adecuada a dicha problemática, a saber:

1ª etapa.- Fase anterior al Real Decreto de 17 de noviembre de 1852, (Final del siglo XVIII y 1ª mitad del siglo XIX)

2ª etapa.- Fase comprensiva desde 17 de noviembre de 1852 a 6 de diciembre de 1868.

3ª etapa.- Fase comprensiva desde 6 de noviembre de 1868 hasta la época actual.

Deliberadamente no aludimos a la virtualidad del Fuero en los si glos XVIII y 1ª mitad del XVIII, por estimar que en dichos siglos no - hay contundentes disposiciones que atenten contra la vigencia del mismo ni discrepancias ideológicas reseñables, que presupongan la inoperancia de aquel. Es a partir del siglo XIX cuando aparecen las primeras disposiciones que ponen en entredicho su vigor, recogidas por algún sector doctrinal, como luego veremos.

A) 1ª etapa. (Final del siglo XVIII y 1ª mitad del siglo XIX).

Fase anterior al R.D. de 17 de noviembre de 1852.

Según Núñez de Arenas, "en 1782 se derogó justamente el Fuero de Extranjería y vuelto a resucitar, por esa falta de estabilidad - que acompaña desgraciadamente a todas nuestras leyes; por una especial tonró a derogarse - de nuevo - en 1821" (160). Dicha tesis se amparaba en lo dispuesto por la ley 8ª, título 36, libro 12, de la Novísima Recopilación, que es una Real Orden de Carlos III de 24 de octubre en - 1782, cuyo tenor decía: "Habiendo llegado a mi Real noticia, que en di ferentes países Extranjeros, cuando algunos de mis vasallos, así Soldados como paisanos, transeúntes o domiciliados en ellos, delinquen contra sus leyes y bandos públicos se les forman procesos por las Justi—cias Ordinarias, sentenciándolos o imponiéndoles las penas convenientes,

(160) NUÑEZ DE ARENAS, Isaac. "Bases y motivos del Tratado de Justicia para la Nueva Ordenanza Militar", Madrid, 1856, pág. 96.

fué servido manifestar a mi Consejo la regla de reciprocidad que estimaba conveniente se estableciese en estos mis reinos en los casos que - ocurriesen con los Extranjeros, transeúntes y residentes en ellos, y - habiéndome hecho presente su parecer, con lo expuesto por mis fiscales en consulta de 1.^º de esta mes, conforme a él, he venido en mandar: Que todas las Justicias de estos mis Reinos y Señoríos en sus respectivas Jurisdicciones siguiendo la regla de reciprocidad, procedan contra los Extranjeros, transeúntes o domiciliados de cualquier Nación, que delinquieren o infringieren los bandos públicos; formándoles causa e imponiéndoles las penas correspondientes, conforme a las leyes del Reino, Reales pragmáticas y bandos públicos, del mismo modo que se ejecuta, con los naturales de estos mis Reinos sin permitir que se forme sobre ello competencia alguna" (161). Asimismo, se debe aceptar como textos legales de 1.^ª mitad del siglo XIX que derogan el Fuero de Extranjería los siguientes: 1.^º) el art. 248, de la Constitución de 1.812, y cuyo Título 5 tiene fuerza de ley; 2.^º) la ley de 16 de septiembre de 1839, que declara que no haya más que un fuero para toda clase de personas; 3.^º) el Decreto de las Cortes de 14 de marzo de 1821, que consideró abolido para siempre el Fuero militar de extranjería, señalando por ende,

(161) COLON DE LARREATEGUI, F. "Juzgados Militares de España y sus Indias". Tomo II. Madrid, 1817. Pág. 53-4.

que los extraneum - excepción hecha del cuerpo diplomático - quedaban en adelante sujetos a la jurisdicción ordinaria, 4º) la Constitución - de 1837, 5º) la Orden del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1843, dirigida a la Audiencia de Barcelona, advirtiéndole tuviese en cuenta que no - existía más que un sólo fuero para toda clase de personas, y que únicamente los militares deben gozar fuero particular en los términos prevenidos en la Ordenanza, 6º) el art. 7 del Código Penal antiguo, que ordenaba que "los delitos de los extranjeros se juzgan por este Código".

Como argumento legal a favor de la vigencia del Fuero se recuerda por algún autor, que la Real Orden de 3 de febrero de 1845, declaró subsistente el Fuero de Extranjería, "por no haber sufrido hasta ahora derogación alguna las disposiciones vigentes sobre el mencionado Fuero" (162). Dicha Real Orden, "se vé desarrollada en cuantas competencias se promueven en materia de extranjería, y victoriosa la Orden del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1843, pues como éste mismo está encargado de resolverlas sin ninguna intervención de la jurisdicción militar, las decide constantemente en favor de la ordinaria" (163).

(162) PECOURT GARCIA, E. "Una institución singular en la Historia del Derecho Internacional Privado español. El Fuero de Extranjería". (Estudios de Derecho Internacional Público y Privado, Homenaje al Prof. L. Sela Campil) Vol. II, Universidad de Oviedo, pág. 894.

(163) BACARDI, A. "Nuevo Colón o tratado de Derecho militar de España y sus Indias", Barcelona, 1864, pág. 36.

Riquelme afirma rotundamente en 1849 - fecha de publicación de su Tomo I - que aquella jurisdicción excepcional mantiene toda su fuerza y vigor, con estos términos: "La derogación del fuero de extranjería, que algunos suponen fundándose en el artículo 248 de la Constitución - política del año 1812 y en lo prevenido por la de 1837, la juzgamos inexacta, porque a pesar de estas disposiciones, los juzgados militares y sus fueros siempre se han conservado y con ellos el derecho de juzgar en los negocios de extranjeros. Pero hoy con más motivo debe desaparecer toda duda sobre este particular, porque el artículo 4º de la Constitución vigente de 1845, tiene la conveniente elasticidad para que pueda caber el fuero de extranjería, pues que se limite a determinar que unos mismos códigos regirán en toda la monarquía, y el 67 deja para las leyes especiales el fijar los tribunales que ha de haber y sus facultades. De suerte, que entre tanto que no se publiquen nuevos códigos que hagan imposible este fuero, su observancia es forzosa, porque por lo - menos está prevenida en la legislación vigente de España, la que no está en oposición con la ley política del Estado" (164).

Otros autores, sostienen asimismo en 1863, el criterio afirmativo de la subsistencia del Fuero de Extranjería en base a los siguientes argumentos:

(164) RIQUELME, A. "Elementos de Derecho Público Internacional". Tomo I Madrid, 1849, pág. 389-390.

1ª) "La Revolución política y la Constitución vigente (1845), no han derogado el Fuero de Extranjería.

2ª) El art. 5 de la Constitución de 1837 modificó—si no derogó—lo dispuesto por el art. 248 de la Constitución de 1812, que establecía un sólo fuero para toda clase de personas en los negocios civiles y criminales, excepción hecha de los militares según el art. 250.

3ª) Que el Fuero regía en 1821, se infiere de la gestión del Gobierno y la aprobación de las Cortes de 1821, de su abolición, dictando la ley de 15 de marzo del mismo año, en este sentido.

4ª) El art. 4 de la Constitución de 1837, si bien establecía un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, - criterio negativo de la existencia de una jurisdicción especial - no excluía lo convenido en los Tratados para los extranjeros; y respetaba por ende la existencia de aquel Fuero.

5ª) El art. 67 de la Constitución de 1845, señalaba que "las bases determinarán los tribunales y juzgados que ha de haber", etc. etc. lo que prueba que cabe en el espíritu de la ley, la existencia de un fuero de privilegiado con sus condiciones y tribunales especiales".

(165)

(165) A. "El Fuero de Extranjería" (El Faro Nacional, Rev. de Jurisp. de Admón. de Tribunales y de Instrucción Pública) Año 3º, Nº 212 24 de julio de 1853, pág. 91..

Riquelme, agrega por su parte en el mismo sentido: "Tampoco se opone a la existencia del Fuero de Extranjería el nuevo código penal, pues aunque en su art. 7º se dice que los delitos de los extranjeros se juzgan por este código, lo que esto significa que estos delitos se penan por esta ley, pero no que se hayan de juzgar por otros jueces que los militares, lo cual se encuentra confirmado por la Real Orden aclaratoria de 22 de septiembre de 1848; pues en la regla 14ª del art. 2º se declara, que"no obstante cualquier indicación que se haga en el código sobre diversidad de fueros, no se entiende por ello prejuzgada ni resuelta cuestión alguna en este punto, debiendo por lo mismo atenerse se los tribunales a la legislación actual, hasta que terminantemente se decida otra cosa" (166)

Otro razonamiento en pro de la operatividad del Fuero antes del 17 de noviembre de 1852, nos lo da la propia creación del Real Decreto de Extranjería de la misma fecha. Si no hubiese conciencia de su existencia no se publicaría aquel, articulando ordenadamente aquel privilegio jurisdiccional. En este sentido, según comentarista, apunta que "El Real Decreto de 17 de noviembre de 1852, es también otra prueba de que se refuta subsistente el Fuero de Extranjería". Y añade a continuación: "es tan indudable la existencia del Fuero, como notoria la utilidad que

(166) RIQUELME, A, op. cit. pág.390.

de su supresión se seguiría a la causa pública, sin que por esto se infiriese un verdadero perjuicio a los extranjeros, que hoy lo disfrutaban, y mucho menos a los que hubieren de disfrutarlo en lo sucesivo". (167)

Perp se añaden más datos afirmativos sobre la vigencia del fuero en esta etapa, concretamente, la existencia de Tratados reconocedores de aquel cauce de administración de justicia con anterioridad al R.D. de 1852. A este respecto, Riquelme afirma: "Después de la guerra de la independencia la España restableció sus relaciones con las demás potencias en el estado que tenían antes de 1792, y como en esta época existía el fuero de extranjería, aunque hayan caducado las estipulaciones que ueran eficaces en aquel tiempo, ha debido subsistir este fuero como todos aquellos privilegios de que estaban en posesión los extranjeros residentes en España en aquella época. Además que el fuero de extranjería procede de los tratados con la Inglaterra, y esta potencia los restableció terminantemente el fin de la guerra de la independencia" (168)

Podría esgrimirse dialécticamente en contra de la existencia legal del Fuero, que no existía a la razón el trato de reciprocidad para con los españoles residentes en el extranjero los cuales en caso de litigio se verían sometidos a la jurisdicción común u ordinaria, lo que so-

(167) A. op. cit. pág. 100.

(168) RIQUELME, A. op. cit. pág. 390-1

lía implicar en cierto modo una especie de derogación tácita de aquel privilegio. Frente a esa tesis - de corte pragmático - Riquelme, niega que el Fuero hubiese quedado anulado, y manifiesta: "Si cuando se otorgaron estos privilegios, se hubiera pactado la reciprocidad, habría derecho para negarlos el día que se negasen a los españoles; pero otorgados desde el principio sin esta condición, el argumento pierde su fuerza" (169) Entendemos con dicho internacionalista, que el cauce de la jurisdicción de extranjería, no sólo estaba vigente con anterioridad 1852, desde la óptica de la normativa escrita, sino también desde el ángulo del uso o costumbre, - normativa no escrita -, entendida como otra fuente del derecho. Existía una toma de conciencia en los extraneum radicados en España, de tener acceso por consuetudo inveterata, avalada por multitud de Tratados, al disfrute de una vía judicial de carácter privativa y extraordinaria.

En resumen, en esta primera fase, prevalece la opinio iuris de que el Fuero está vigente, sin más limitación que la existente para aquellos extraneum que por razón de su nacionalidad, no ha pactado la sociedad política a la que pertenecen un Tratado que les confiere derecho al goce de aquella institución tan peculiar, y singularizada.

(169) Ibid. op. cit. pág. 391.

B) 2ª etapa. Fase comprensiva desde el 17 de noviembre de 1852 al 6 de diciembre de 1868.

El reconocimiento expreso que el R.D. de 17 de noviembre de 1852, verifica de la jurisdicción de extranjería, en los arts. 30 y 31, quiebra cualquier propósito negador de la existencia del Fuero. Ni el sentido literal, ni el espiritual de aquellos preceptos, autorizan - otra exégesis a nuestro entender. En consecuencia aquel cauce de admnistración de justicia, mantuvo su fuerza y vigor desde aquella fecha hasta la promulgación del Decreto de Unificación Jurídica de 6 de diciembre de 1868, la Diferencia con la etapa anterior se basa, en que si bien en las dos, el Fuero está vigente, en la primera, el reconocimiento de su virtualidad jurídica, tiene una proyección más popular y doctrinal, que legal - piénsese que la fuerza de muchos Tratados reconocedores del Fuero, podía y debía estar capitidisminuida como consecuencia de los efectos diplomáticos de la guerra de indeendencia española y por otro lado, en la segunda, el Fuero tutela a todo extranjero sin matización, ni discriminación por razón de nacionalidades. En la etapa precedente no todo extraneum por el hecho de serlo, está emparado por el Fuero de Extranjería, para estarlo, es preciso, que la nación a la que pertenece haya obtenido mediante un Tratado con España, aquel privilegio para sus súbditos. En la fase presente basta con no ser reg

nícola para gozar de la jurisdicción de extranjería. Algún comentarista admite alguna excepción a esta generalización del R.D. de 1852, argumentando, que "quedan fuera del marco del Fuero, Rusia - por no reconocer S.M. La Reina Isabel II como Reina constitucional y legítima de las Españas - a Méjico - en virtud del Tratado de 28 de diciembre de 1836 y a Marruecos". (170). Para un estudio más detenido en esta materia (171).

Se ha afirmado que por "Real Orden expedida por el Ministerio de la Guerra el 8 de agosto de 1864, aclarando la validez del Real Decreto de Extranjería de 1852, se preceptúa que dicho Decreto no puede modificar los Tratados Internacionales vigentes, puesto que para modificar éstos, es indispensable el mútuo consentimiento de las altas partes contratantes" (172)

C) 3ª etapa: Fase comprensiva desde el 6 de diciembre de 1866 - hasta la época presente.

El Real Decreto de Unificación Jurídica de 6 de diciembre de 1868, dictado en pleno período revolucionario, pretendió si reduciendo la numerosa gama de jurisdicciones especiales. Por lo que toca al fuero de Extranjería, no hay duda que lo suprimió en virtud de los términos

(170) A. op. cit. pág. 92.

(171) Véase Capítulo I, Sección 4ª, "Naciones y sujetos beneficiarios" de esta tesis.

(172) CASTRO Y CASALEIZ, A. "Estudios de Derecho Internacional Privado. Conflictos de nacionalidad". Madrid, pág. 93.

en que se desenvuelve. La doctrina española se pronuncia unánime en ese sentido. Mija de la Muela dice a este respecto: "Subsiste el Fuero hasta la ley de unificación de 1868" (173). Análogo texto, descubrimos en Rafael Gibert, cuando escribe: "El Fuero de Extranjería fué suprimido en 1868", (174). En el diccionario Espasa-Calpe, se recuerda en idéntico sentido: "En España se dicta el R.D. de 17 de noviembre de 1.852, llamado de Extranjería, en el que se estableció el Fuero de Extranjería para los extranjeros domiciliados y transeúntes. Este Real Decreto, fué derogado por el Decreto-Ley de Unificación de Fueros del 6 de diciembre de 1868, que restablece, en este particular, la igualdad entre españoles y extranjeros ratificada en la Constitución de 1878, y en el Código Civil, y que constituye hoy el principio fundamental de la doctrina legal española sobre extranjería". (175).

Arjona Coloma, señala que "disposiciones fragmentarias posteriores - el R.D. de 1852 - han afectado de tal modo la vigencia de ese Decreto, que puede virtualmente considerarse como indirectamente derogado en muchas de sus partes" (176).

(173) MIAJA DE LA MUELA, A. "Derecho Intern.Privado". Tomo II, 1963. Pág. 142

(174) GIBERT, R. "La Condición de los extranjeros en el antiguo derecho español". L'Etranger, Recueils de la Société Jean Bodin, Vol. X. Bruxelles, 1958, pág. 195.

(175) Espasa-Calpe, voz "Extranjería", pág. 1564.

(176) ARJONA COLOMA, M. "Derecho Internacional Privado", Parte Especial. Madrid, 1949, pág. 110.

Y agrega seguidamente "disposiciones legales derogan restricciones que pesaban sobre los extranjeros. Baste citar el artículo 51 de La Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice: "La jurisdicción ordinaria será la única competente para conocer de los negocios civiles que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros". (177). Derogando este artículo las disposiciones limitativas contenidas en los artículos 28 y 33 del Decreto de Extranjería.

Pecourt apunta en esa orientación que: "La desaparición del Fuero de Extranjería, sólo se produjo al quedar abolidos, con carácter general, todos los fueros privilegiados y especiales. Esto es lo que dispuso en efecto, el Decreto de 8 de diciembre de 1868" (178). Y añade a continuación: "Aunque nada se decía específicamente en la Exposición de Motivos, a propósito del Fuero de Extranjería, se apuntaba, sin embargo, que entre los negocios de que hoy conoce esta jurisdicción militar -hay algunos que por su naturaleza son propios de la ordinaria" (179)

(177) Ibid, op. cit. pág. 110.

(178) PECOURT GARCIA, E. "Una institución singular en la Historia del Derecho Internacional Privado Español: El Fuero de Extranjería". Estudios de Derecho Internacional Público y Privado, (Homenaje al Prof. Luis Sala Sampil). Vol. II, pág. 898-9.

(179) PECOURT GARCIA, E. op. cit. pág. 899.

SECCION 5ª5. Tendencia de supresión del Fuero de Extranjería.

5.1. Antecedentes. - La abrogación del Fuero de Extranjería simultánea con el período revolucionario en que se dicta, fué fruto de una lenta maduración doctrinal, consciente de que su mantenimiento atentaba de un lado, a la propia soberanía nacional -coaccionada a sostener privilegios hacia los extranjeros, de los que no disfrutaban muchos nacionales - y de otro, en que se estaba vedando la tan deseada unidad de jurisdicciones. Un intento serio de supresión legal del Fuero fué el originado por el Decreto de 14 de marzo de 1921, que declaró abolido para siempre el Fuero Militar de Extranjería.

Como señala un internacionalista, el Fuero de Extranjería "se incluye en una ordenación sensiblemente condicionada por el medio histórico-político, Y el mismo autor, justifica su afirmación anterior, - con estas palabras: "su significación privilegiada fué más bien impuesta desde fuera" (180): Es decir, "por lo que se refiere a su primera época, la constitución y desarrollo del Fuero de Extranjería estuvo en función de las presiones diplomáticas o convencionales, llevadas a cabo por las entonces Potencias dominantes" (181).

(180) Ibid. op. cit. pág. 900.

(181) Ibid. op. cit. pág. 900.

Pecourt termina diciendo en este inciso, - corroborando su opinión del nacimiento condicionado por el exterior, del Fuero -, "de este modo, pues, los asuntos de orden privado suscitados en España, por ciudadanos extranjeros, llegaron a convertirse en asuntos de Cancillería, de tal forma que, en este como en otros tantos aspectos, no regia en realidad, un auténtico derecho de extranjería español, sino más bien la circunstancial reacción política del Ministerio de Estado ante la reclamación del Gobierno extranjero de turno". (182)

Si se acepta el planteamiento anterior, no cabe duda, de que la guerra de independencia española, surgida en 1808, con su exaltación de los valores nacionales, comportó una ruptura de la penetración de las presiones diplomáticas tendentes a consolidar unos privilegios jurisdiccionales en favor de los extranjeros que el decir de Pecourt "al menos en algunos aspectos - implicaban - una condición superior a la otorgada a los mismos españoles" (183) Esta toma de conciencia del sentido patriótico, independista, nacido y desarrollado durante la lucha frente a Napoleón, debió concitar dentro de nuestra parcela diplomática una mayor impermeabilidad a las presiones extranjeras relativas al sostenimiento de la jurisdicción de extranjería; a lo largo de la 1ª mi

(182) Ibid. op. cit. pág. 900.

(183) Ibid. op. cit. pág. 900

tad del siglo XIX. Por otra parte, dentro del campo jurídico, se arraigó la creencia - propiciada por el momento histórico revolucionario que se vivía - de que en sentido estricto de justicia, imponía en el contexto de la administración de justicia española, reducir al máximo los - privilegios personales en materia de Fueros. Nació por ende, un clima jurídico, apasionado, defensor a ultranza de la unidad de jurisdicciones.

5.2. La Unificación Jurídica. - Durante esta 1ª mitad del siglo XIX, se produjo un movimiento de avance de la competencia de la jurisdicción ordinaria, ensanchando su campo de actuación en detrimento del área de las jurisdicciones especiales. A este ensanchamiento del campo de operatividad de la primera, hace referencia Alonso y Colmenares, cuando manifiesta: "Las jurisdicciones especiales quedaron en 1.836, reducidas a la eclesiástica, a la militar de guerra y Marina, a la de Rentas o Hacienda Pública, de Comercio, de Minas, de Correos, Caminos y Canales, y de Maestrazgos y Encomiendas. Todas las demás, de cualquier clase y denominación, no autorizadas legalmente, se refundieron en la jurisdicción real ordinaria" (184). Aunque no lo aclare aquel autor el Fuero de Extranjería, estaba inserto - en aquella fecha -, dentro del marco del Fuero Militar de Guerra y Marina, pero como empuje unificador de la juris-

(184) ALONSO Y COLMENARES, E. "Jurisdicciones especiales". Tomo I. Madrid, 1884, pág.

dicción ordinario era ya irreversible, aquel privilegio caería 32 años después, subsumido en esta jurisdicción general.

A este respecto, agrega Alonso y Colmenares: "La incesante y ruda lucha sostenida contra la jurisdicción ordinaria por todas las especiales y privilegiadas, no conservadas por la ley fundamental de 1812, se mantenía viva y ardorosa a la publicación del Estatuto Real, que no se ocupó de Fueros, ni de Tribunales, ni de administración de justicia en sus diversos ramos; más la constitución de 1837, calcada en la de Cádiz, dispuso como ella, que unos mismos Códigos, rigiesen en toda la Monarquía, y no se estableciese más que un solo Fuero para todos los españoles en los juicios comunes civiles y criminales, así como que — nadie pudiera ser procesado, ni sentenciado, sino por el Juez o Tribunal competente y en virtud de Leyes anteriores al delito y en la forma que estas prescribiesen, lo cual se consignó en la Constitución de — 1845, y principalmente en la de 1.869, que reprodujo todos los conceptos de las de 1812 y 1837, lo mismo que la de 1876. (185)

No resultó fácil, no obstante, para la jurisdicción ordinaria, el enfrentamiento con las jurisdicciones especiales, porque en cualquier época a la supresión de privilegios se oponen obstáculos por parte de sus beneficiarios. Por ello la unificación no pudo ser total.

(185) Ibid. op. cit. pág. 23.

Ya a principios del siglo XVIII, se plantea una problemática similar apuntada por AGUILAR NAVARRO, que señala que "Felipe V no tuvo éxito en la pretendida unificación jurídica. Ciertamente se elimina la extranjería entre los súbditos de los distintos reinos peninsulares, pero persiste la subsistencia de un derecho común (el real castellano recopilado y la legislación de Partidas) y la variedad de Derecho Forales (aragonés, balear, catalán, navarro). La promulgación de la Novísima Recopilación no varía la situación"^A (186).

Puede decirse, que "la ofensiva contra el Fuero de Extranjería, no fué más que un aspecto reflejo de la general comprendida contra el régimen de fueros privilegiados. De este sabor constitucionalista, tal ofensiva se apunta ya con tono vigoroso en 1812: "Una de las principales causas de la mala administración de justicia entre nosotros - se decía en el Discurso Preliminar leído al presentarse en las Cortes al Proyecto de Constitución de 1812- es el fatal abuso de los fueros privilegiados introducidos para la ruina de la libertad civil y oprobio de nuestra antigua y sabia Constitución (187).

A la unificación jurídica de España se tendió no solo "tratando de - que las mismas leyes rigiesen en todo el territorio, sino también que unas

(186) AGUILAR NAVARRO, M. "Derecho Internacional Público". Vol. I. Tomo II. Parte 1ª. Universidad de Madrid. 1974. (F. de Derecho) pág. 48.

(187) PECOURT, op. cit. pág. 893.

mismas situaciones o relaciones fuesen reguladas conforme a un mismo y único ordenamiento. Es decir, pretendiendo suprimir los sistemas privilegiados o de excepción, también llamados fueros, aunque la palabra se empleaba aquí en una acepción distinta porque se regían en determinadas cuestiones los nobles, los eclesiásticos y los militares. En este sentido, todas las Constituciones españolas proclamaron el principio de la existencia de un solo fuero para todos los españoles en los negocios o juicios comunes, civiles y criminales. La situación fué consumada por el Decreto de Unificación de Fueros de 6 de diciembre de 1868 (189). En igual sentido, se ha apuntado que la historia de los innumerables conflictos y competencias que ha producido el Fuero de Extranjería, bastaría para pensar en su supresión, si ya nuestras leyes políticas no hubiesen sancionado el principio de que había uno solo en España, excepto para los Eclesiásticos y Militares". (189). Es más, dice - Sánchez de las Matas "la unificación de Fueros y supresión de juzgados especiales, que establece aquel Decreto, se extendió a las provincias de ultramar por otro de 1º de febrero de 1868" (190).

(188) GARCIA GALLO, A. "Manual de Historia del Derecho", Tomo I, 1.959. Pág. 121.

(189) NUÑEZ DE LAS ARENAS, Issac. "Bases y motivos del Tratado de Justicia para la Nueva Ordenanza Militar", Madrid, 1856.

(190) SANCHEZ DE LAS MATAS, E. "Novísimo Diccionario de Legislación y Jurisprudencia" Madrid, 1883. Pág. 156.

5.3. Derogación del Fuero de Extranjería. Decreto de 6 de diciembre de 1868.

El Decreto de 6 de diciembre de 1868, en el artículo 1, (inciso 6º) del Título I "De la refundición de los Fueros Especiales en el ordinario", abroga e el Fuero de Extranjería al determinar, que desde la publicación del citado Decreto, la jurisdicción ordinaria será la única competente para conocer - "de los negocios civiles y causas originales de los extranjeros domicilia- dos o transeúntes". El carácter terminante de la rúbrica del Título I, con su espíritu restrictivo, de un lado, y por otra parte, la nitidez con que se pronuncia el art. 1 (inciso 6º), no dejan lugar a dudas, que la juris- dicción excepcional de administración de justicia para los extranjeros que dó anulada en España en virtud de aquel Decreto. En cuanto a la fórmula de rogatoria de disposiciones anteriores, que contradigan al Decreto de 1868, el art. 30 es tajante: "Se derogan todas las leyes, reglamentos y órdenes anteriores, en cuanto se opongan al presente Decreto". A la vista de esta redacción es obvio que el Decreto de Unificación Jurídica derogó entre - otros el R.D. de Extranjería de 1852.

Concordante con el texto y espíritu que se respira en el Decreto de Unificación Jurídica de 6 de diciembre de 1868, el artículo 267 de la Ley Orgánica de 15 de ~~septiembre~~ septiembre de 1870, establece que: "la Jurisdicción ordi- naria será la competente para conocer de los negocios civiles que se susci- ten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre espa- ñoles y extranjeros". Si bien en este precepto sólo se hace referencia a la

parcela civil, el paralelismo con el Decreto de 1868 no puede ser mayor.

Queda bien sentado y remachado que en la esfera civil no hay fuero de Extranjería. Como quiera que no se aludía a la parcela criminal en aquel texto, y podrían surgir suspicacias a ese respecto, el art. 269, de la citada Ley Org. de 1870, sentencia para dicha esfera el mismo criterio que - para la civil: "Corresponderá a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las causas criminales, cualquiera que sea la penalidad señalada por las leyes, sin más excepciones que las que se establecen en esta ley". El imperium de la jurisdicción ordinaria es absoluto en los órdenes civil y criminal, sin más restricciones que las admitidas por la Ley Orgánica de 1870. El Criterio de Unificación de Fueros, seguía manteniendo toda su fuerza y vigor. Pero aún se remacha adecuadamente esta tendencia cuando en el art. 329 de la misma ley, se manifiesta: "La jurisdicción ordinaria será la competente, con exclusión de toda otra, para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto a ella, aún cuando los demás sean aforados". La autoridad de la jurisdicción ordinaria es avasalladora a este respecto; devora el terreno a las jurisdicciones especiales, que ven debilitarse su campo de actuación ante el empuje implacable de la jurisdicción común.

Por otra parte el art. 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881, determina que "La Jurisdicción ordinaria será la única competente para conocer de los negocios civiles que se suscitan en territorio

español, entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros".

Dicho texto es idéntico al regulado por el art. 267 de la Ley Orgánica de 15 de septiembre de 1870. Quiere decir todo ello que en 1881 se mantenía el mismo criterio en cuanto a la unificación jurídica, que 11 años atrás. El rumbo jurídico-político en ese contexto no había sufrido variaciones.

En el orden penal, la ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, guardó estrecha concordancia con lo regulado en su homónima del campo civil; el art. 10 estableció a este respecto: "Corresponderá a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las causas y juicios criminales con excepción de los casos reservados por las leyes al Senado, a los Tribunales de Guerra y Marina, y a las Autoridades Administrativas o de policía". Existe un gran paralelismo entre dicho precepto y art. 269 de la Ley Orgánica de 1870. El propósito del legislador de valorar en primer plano a la jurisdicción ordinaria por encima de las especiales, resalta en el art. 11 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882: "El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables personas sujetas a la jurisdicción ordinaria y otras aforadas, corresponderá a la ordinaria, salvo las excepciones consignadas expresamente en las leyes respecto a la competencia de otra jurisdicción". Con idéntica terminología que el art. 329 de la Ley Orgánica de 1870, el art. 16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, manifiesta que: "La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de los delitos conexos, siempre que alguno esté

sujeto a ella aún cuando los demás sean aprobados."

Del examen de lo expuesto, habrá que inferir consecuentemente que que desde 1868 a 1882, el criterio que prevaleció en materia jurisdiccional fué el de reducción de jurisdicciones especiales, con tendencias hacia la tan deseada unificación jurídica que sólo de forma parcial se obtuvo con el Decreto de 1868. "Se mantienen como excepciones de la jurisdicción ordinaria, que es, por punto general, la competente para todos los negocios civiles y criminales, las jurisdicciones especiales siguientes:

1ª. La eclesiástica ordinaria y sus derivaciones en el orden privilegiado ó exento que, según el Concordato de 1851, son la del Pro-Capellán mayor de S.M. la Castrense, la de las Cuatro Ordenes Militares de Santiago Calatrava, Alcántara y Montesa, la de los Prelados regulares y la del Nuncio Apostólico pro tempore en la iglesia y Hospital de los Italianos de esta corte.

2ª. La de Guerra y Marina, con las de Artillería, Ingenieros y las demás expresadas en las leyes de sus respectivos fueros.

3ª. La contencioso-administrativa (191)

Es preciso puntualizar que, la jurisdicción especial de Guerra y Matina a la que aludía como subsistente Alonso y Colmenares en el nº 2 anterior, no englobaba, el Fuero de Extranjería ya desvinculado de la misma,

(191) ALONSO Y COLMENARES, ". "Jurisdicciones especiales", Tomo I. Año 1884 pág, 75.

y extinguido, por el Decreto de Unificación de 1868.

Como afirma Pecourt, "Quedaba así cerrado definitivamente el ciclo vital del Fuero de Extranjería, con una fórmula, que reiterada en toda una serie de disposiciones posteriores, iba a ejercer una influencia sustancial en el régimen español de la competencia judicial internacional". (192)

Existió en este punto, respecto del poder derogatorio del D. 6 de - Diciembre de 1868, tocante al Fuero de Extranjería, un general consenso. Sánchez de las Matas, en este sentido, indicaba: "Por Decreto de 6 de diciembre de 1868, sobre unificación de Fueros, conocen los tribunales ordinarios de todos aquellos delitos que antes estaban sometidos única y exclusivamente a las jurisdicciones especiales, eclesiásticas, militar, de comercio y hacienda; y tanto es así, que los delitos comunes perpetrados por los eclesiásticos, militares y aforados de guerra, compete hoy a la jurisdicción ordinaria". Por este mismo Decreto que tiene fuerza de Ley según - las Cortes Constituyentes, promulgado en 20 de junio de 1869, han quedado suprimidos los Tribunales especiales de Hacienda, Comercio, Guerra, etc..." (193)

(192) PECOURT GARCIA, E. op. cit. pág. 899.

(193) SANCHEZ DE LAS MATAS, E. "Novísima Diccionario de Legislación y Jurisprudencia", Madrid, 1883. (Voz fuero) Pág. 156.

TITULO II

EL FUERO DE EXTRANJERIA DENTRO DEL CONTEXTO DE LA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA ESPAÑOLA

CAPITULO I

EL FUERO Y EL PODER JURISDICCIONAL

SECCION 1ª

1. El extraneum y la administración de justicia. Introducción.

En el contexto de la doctrina científica contemporánea resalta una -
communis opinio proclive a reconocer a toda sociedad política, facultad so-
berana tanto para dictar leyes, como para juzgar dentro de su territorio a
todos los residentes en el marco geográfico de aquella, cualesquiera que -
sea su origen y nacionalidad. Rige, pues, en esta materia - según ese crite-
rio - una aplicación estricta del viejo principio de la territorialidad de
las leyes. En consecuencia, todo individuo por el hecho de habitar provisio-
nal o permanentemente en un país, queda sujeto al imperium que emana del or-
den establecido en el mismo, es decir, "el aspecto interior de la soberanía
del Estado consiste en que su poder público domina como absoluto y responsa-
ble dueño en el territorio nacional. A más de la facultad de gobernarlo con
independencia, tiene derecho a determinar por leyes propias las relaciones -
jurídicas que en el mismo nazcan o se desarrollen, y de exigir su cumplimen-

to por medio de los tribunales que él para juzgarlas intuyere" (193 bis). En todo caso, se reconoce que la impartición de justicia constituye uno de "los poderes fundamentales del Estado y constituye para él al propio tiempo un derecho y un deber. Crea con este fin los tribunales, determina su competencia y les señala formas de enjuiciar sus decisiones. Sin ello no sería posible la vida social, y la doctrina y la práctica convienen en que es la "lex fori" la llamada a aplicarse exclusivamente en tales casos". (194)

Hase afirmado, que "el poder de juzgar, munus iudicandi, o sea la administración de la justicia ha sido donde los tiempos más remotos, atribución peculiar de los Reyes. Desempeñaron esas sublimes funciones, ora por sí, ora asociados de los tribunales o jueces en quienes las delegaron, ora por medio de éstos, reservando en sí la jurisdicción suprema y el recurso a su real persona" (195).

Es menester precisar, que de la soberanía territorial se derivan derechos fundamentales al Estado, entre los que pueden espigarse "el de legislar y extender la acción de sus leyes a todo el territorio que ocupa; de suerte que cuando éstas se refieren particularmente a las personas, esa fa-

(193 bis) MARQUES DE OLIVART; Tratado de Derecho Internacional Público, 1903 pág. 278.

(194) ARJONA COLOMO, M. Derecho Intern. Privado. Parte Especial. Madrid, 1949 pág. 403.

(195) CASANOVA, ANTONINO. La Justicia con sus encantos encomios que siempre se le tributaron". Rev. Sen. de Leg. y Junip. Año XI. Tomo XXII. Madrid 1863. pág. 11.

cultad de mandar, y de dictarlas en lo que se llama imperio" (196). En definitiva, un extraneum que quiere mantener su extranjería en el país que le acoge" no tiene más derechos que los que las leyes de ese país le otorgan, y está sometido a ellas" (197).

La aplicación de las leyes por los Tribunales en toda comunidad política, no puede quedar sujeta a restricciones por cuestión de distinta nacionalidad de los sujetos beneficiarios. También "el administrar justicia al foráneo es otro de los principios que no están sujetos a la reciprocidad. La justicia hija del cielo, se impone a la conciencia humana, sin consideración a países, ni circunstancias. Lo mismo que la idea de Dios, de quien es emanación directa, la justicia está por encima de la nacionalidad, y ni el amor a la patria, ni el estímulo de las más justificadas represalias, podrían ser nunca motivo honrado y bastante para cometer una injusticia o para denegar el amparo de los Tribunales" (198).

1.1 Sumisión del foráneo a la jurisdicción territorial.

El extranjero por el hecho de ingresar en el ámbito soberano del Estado, queda automáticamente bajo la potestad territorial del país en que se halle, "aunque continúe subordinado al mismo tiempo, a la supremacía personal de su Estado patrio, salvo que forme parte de la clase de personas que

(196) PLANAS SUAREZ, S.; Tratado de Derecho Internacional Público, Vol. I
Madrid, pág. 100.

gozan de la denominada extraterritorialidad. Queda sometido, pues, a la - jurisdicción del Estado territorial, ante la cual es responsable de todos los actos que en él cometa. Debe obediencia y lealtad al Estado territorial durante todo el tiempo de su residencia" (199).

"El imperium se proyecta a todos los habitantes del Estado, ya sean nacionales o extrangeun, porque éstos, al adentrarse en sus límites geográ- ficos, acatan su ordenamiento jurídico, cualquiera que sea, "en virtud del aforismo antiguo romano, qui in territorio meo est, aliam meus subditos est, admitido por todos los publicistas modernos y confirmado por la práctica - de todos los Estados civilizados" (200). Y es que en definitiva, "cada Es- tado ejerce las funciones propias de toda sociedad política sin injerencia alguna extraña, y por lo tanto, legisla, juzga, ejecuta y resuelve los con- flictos entre sus poderes, dentro de los límites que el Derecho Internacio- nal debe fijar" (201).

(197) SARMIENTO, D.F.: "Condición del extranjero en América". B. Aires, - 1928, pág. 69.

(198) BRAVO, E.: "Derecho Internacional Privado vigente en España". Tomo - II. Madrid, 1886, pág. 5

(199) OPPENHEIM, L.: "Tratado de Derecho Internacional Público", Tomo I, - Vol. II, (Edit. Bosch). 1961, pág. 250-1.

(200) PLANAS SUAREZ, S.: op. cit. pág. 100-1.

(201) SELA Y SAMPIL, A.: "Derecho Internacional", (Manuales Soler), pág. - 44.

La buena entente de la comunidad internacional comporta tutelar a todo ser humano con independencia de su ciudadanía, y en este sentido, "en el estado de paz, y de relaciones más o menos cordiales con otras naciones, - el hacer justicia a los extranjeros, es un deber tan imperioso y palmario como el hacerla a los naturales. El jefe militar en las batallas, o en frente de las hostilidades enemigas, puede hacer, quizá contra su voluntad, lo que la - fuerza avasalladora de las circunstancias le imponga: el Juez en su Tribunal, no puede hacer sino justicia" (202). Si el súbdito extranjero ha de - plegarse a la jurisdicción territorial, el Estado que le acoge tiene asimismo el deber de protegerle mediante sus Tribunales y su ordenamiento jurídico. Y es que "aunque una nación pueda desentenderse y no querer conocer de las cuestiones judiciales entre extranjeros residentes, es innegable - que tiene el derecho de hacerlo, y esta es una regla sin excepción. Por su puesto que la legislación local señalará la competencia de los Tribunales". (203).

De ahí que "si el Derecho de un Estado y los actos de su jurisdicción se dirigen por regla general a los ciudadanos, también se aplican a los ex

(202) BRAVO, E.: op. cit. pág. 5-6

(203) ACOSTA, C.: "Estudios de Derecho Internacional", pág. 34.

tranjeros en varias relaciones jurídicas"(204). La sociedad política no puede quedar indiferente ante la permanencia del foráneo en su territorio, la interdependencia de las naciones entre sí, le compele a destacar no sólo una política de hostilidad y animadversión hacia aquél, sino a adoptar una política dirigida a su amparo y protección. Sólo en circunstancias excepcionales de ruptura de hostilidades entre Estados, puede quedar lesionado aquel talante de común aceptación internacional. Otro aspecto distinto es lo relativo a la mayor o menor dureza en el sistema inmigratorio. Una vez admitido en su seno territorial, "es misión del Estado la de asegurar el orden en su territorio, protegiendo a los habitantes y procurar la observancia de la ley, castigando las infracciones que de la misma se cometen" (215).

1.2 Igualdad de trato con el nacional.

El foráneo por el simple hecho de constituir un Ser Humano, merece paridad de trato con el nacional. Los extranjeros deben aceptar todas las cargas que las leyes y la autoridad estatal imponen a los cives, "están por consiguiente obligados a la defensa del Estado, sino es contra su pro-

(204) SELA Y SAMPIL, A.: op. cit. pág. 44.

(215) MARQUES DE OLIVART: op. cit. pág. 281.

pia patria. Pero es necesario que el peso de los servicios y gravámenes de esta especie se reparta en una proporción equitativa entre los ciudadanos y los extranjeros, y que no haya exenciones o preferencias odiosas entre las diversas naciones" (216). Por ende, habrá que convenir que la primera obligación del extraneum en el país que lo admite, será la de someterse — tácita o expresamente al imperio de su jurisdicción, y ello porque "no se ha dudado nunca que los extranjeros están sometidos a las leyes penales, y consiguientemente, a la jurisdicción criminal de los Tribunales locales" (217). Los extraneum, "al entrar en los límites territoriales de un Estado, se someten, ipso facto, a su jurisdicción, del mismo modo que los nacionales, porque así como el Estado les brinda la protección de sus leyes para su personas y propiedades, ellos por una natural reciprocidad, están sometidos, como expone el notable profesor de Tolosa, Mr. Merignhac, a las leyes que tienen por objeto el funcionamiento normal de la sociedad que les da hospitalidad" (218).

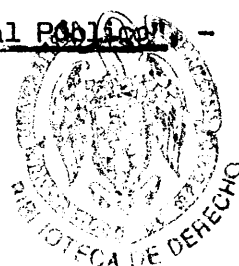
Puede concretarse, que "la competencia legislativa y jurisdiccional para castigar los delitos, corresponde, salvo algunas excepciones, al Estado en cuyo territorio se han cometido, *forum delicti commisi*", (219), por

(216) PANDO, J. M^a: "Elementos del Derecho Internacional", 2ª edición, Madrid, 1852, pág. 167.

(217) GONZALEZ HONTORIA, M.: "Tratado de Derecho Internacional Público", Vol. I, 1928, pág. 371.

(218) PLANAS SUAREZ, S.: op. cit. pág. 102.

(219) SELA Y SAMPIL, S.: op. cit. pág. 45.



ello consecuentemente, y "en tesis general, el extranjero queda absolutamente sometido a la jurisdicción y leyes del territorio que habite, sean mejor o peor concebidas que las de su país, y a los Tribunales que las interpretan y administran la justicia civil y criminal, no teniendo otros — derechos que los del natural, a cuya situación se asimila" (220).

Ahora bien, una cosa es admitir a los extranjeros como actores en — una litis y otra muy diferente aceptarlos en idéntico plano que a los nacionales, "el ideal jurídico consiste, desde luego, en aquella igualdad — de condiciones, en lo que al acceso a la Justicia se refiere. A este efecto, establece el Instituto de Derecho Internacional, en su sesión de Zurich de 1877, que el extranjero será admitido a la Justicia en las mismas condiciones que el nacional" (221) Sin embargo, la realidad muestra en ciertos Estados discriminaciones referentes al extranjero, sobre todo en lo relativo al beneficio de pobreza y a la fianza en arraigo; en definitiva, — "la competencia de las autoridades y la forma de proceder ante ellas se rigen por la ley del país donde se entabla la demanda, sea cualquiera la ley bajo cuyo imperio pasaron los hechos de que se deriva" (222), o lo que es

(220) GONZALEZ HONTORIA, M.: op. cit. pág. 377.

(221) ARJONA COLOMO, M.: op. cit. pág. 405.

(222) FOELIX: "Tratado de Derecho Internacional Privado", 3ª edición corregida por Carlos Demaigeat). Trad. por los directores de la Rev. — Gen. de Leg. y Jurisp. Tomo I, Madrid. 1860.

lo mismo, "la competencia de los tribunales y la forma de la sustanciación o procedimiento se determinan por la ley del país donde se entabla la demanda, cualquiera que de otra parte, sea la legislación bajo la cual hayan pasado los actos en que aquella se funda". (223).

Es razonable que todo Estado, en definitiva venga obligado a reconocer a "los extranjeros una protección de carácter judicial a fin de que — puedan obtener de los tribunales la justicia que se debe a cada uno, y que constituye la garantía de toda clase de derechos" (224). Corolario de lo anterior, es que "o Poder Judiciario de qualquer pais tem competencia para processar e julgar qualquer causa, nada importando a nacionalidade, ou o domicilio, des partes, o que o fato a ser julgado haja ocorrido no estrangeiro" (225).

Por ende, si admitimos que son jurídicamente iguales todos los Estados y disfrutando como deben disfrutar, del libre, pacífico y armónico ejercicio de sus respectivas potestades, hay que admitir "la igualdad civil, — y en cierto modo, la igualdad política de racionales y extranjeros. Deben — disfrutar unos y otros de los mismos derechos civiles, y deben tener igual protección en cuanto se refiere a ciertos derechos políticos" (226).

(223) BERRATER, E.: "Código de Derecho Internacional", Tomo II, Barcelona, 1847, pág. 263.

(224) DIENA, J.: "Derecho Internacional Público". (trad. de Trías de Bes), Barcelona, 1948, pág. 280.

(225) CASTRO, A.: "Direito Internacional Privado", Vol. II, Rio de Janeiro, 1956, pág. 253.

(226) BUSTAMANTE Y SIRVEN, A.S.: "El Orden Público", (Estudio de Derecho — Internacional Privado), La Habana, 1893, pág. 70.

1.3 Recíproco respeto internacional.

La soberanía nacional de cualquier Estado, al imponerse al foráneo - en materia legislativa y judicial, debe ser objeto de recíproca aceptación por las demás sociedades políticas. En este tenor, "los actos jurisdiccionales de una sociedad política sobre los foráneos que en ella residen, "dededen ser respetados por las otras naciones, porque al poner el pié en el territorio de un estado extranjero, contraemos, según se ha dicho, la obligación de someternos a sus leyes, y por consiguiente, a las reglas que — tiene establecidas para la administración de justicia" (227). Por ello, en lo referente a la impartición de la justicia, se van adoptando "resoluciones de carácter cada vez más amplio, con la recíproca asistencia internacional y con los convenios relativos a las jurisdicciones en Oriente. Respecto a lo que se refiere al gravísimo vejamen, por el cual se vería obligado el extranjero a anticipar el pago de los gastos del juicio, se ha resuelto en muchos países con arreglo a justicia" (228).

El foráneo, evidentemente puede ser castigado en el Estado de su residencia provisional por crímenes o delitos que haya realizado en el terriri

(227) BELLO, A.: "Derecho Internacional", Caracas, pág. 124.

(228) FIORE; P.: "Tratado de Derecho Internacional Público", Tomo I, 1894. pág. 92.

torio del mismo. Por ello, en materia criminal, como en materia civil, "el poder legislativo y el poder judicial de cada nación terminan en la frontera del territorio, y no pueden extender sus efectos al extranjero; pero estos poderes se extienden sobre todos los individuos que se encuentran en el territorio, sean regnícolas o extranjeros, así como por los hechos perpetrados por los unos o por otros" (229).

La función jurisdiccional de la soberanía territorial concerniente a los extranjeros, "se ejerce lo mismo que respecto de los ciudadanos, mientras dichos extranjeros permanezcan en el territorio del Estado. Estos son considerados, en efecto, como súbditos temporales" (230). Puede reconocerse al lado de una soberanía nacional e independiente, capaz de dictar leyes y de administrar justicia con absoluto libre albedrío, sin más hipoteca, que el bien común y el espíritu de justicia, respectivamente, una servidumbre internacional, que impone a toda sociedad política, la obligación moral -y jurídica- de establecer una ordenación jurídica con un standard mínimo de protección al extraneum. Sólo así, podrá coexistir un mutuo consenso entre los Estados en materia de legislación tutelar del extranjero.

(229) FOELIX: op. cit. Tomo II. Madrid, 1961, pág. 221.

(230) FIORE, P.: op. cit. pág. 343.

De ahí que, "la situación respectiva de los Estados, su propia personalidad en la comunidad internacional, han hecho indispensable determinar a los individuos que componen cada una de las agrupaciones, con un carácter especialísimo que se adquiere o se pierde con sujeción a determinadas condiciones" (231). Del trato jurídico que se dé a esas agrupaciones integradas por foráneos, insertas en el marco de cualquier país, dependerá el recíproco respeto que la comunidad internacional otorgará a su legislación de extranjería, con carácter general, y a su administración de justicia, en particular.

1.4 La comparecencia en juicio del extraneum.

Los Estados, como eslabones de la comunidad internacional, no sólo - deben acatar la validez de los derechos legalmente adquiridos, "sino también colocarlos bajo la protección de los tribunales. El derecho de comparecer en juicio debe ser igual para los nacionales y para los extranjeros, aún — cuando esta igualdad no hubiese sido expresamente estipulada por medio de acuerdos internacionales" (232). Es indudable, que si se confiere a todo - foráneo — simplemente por el hecho de serlo— igual protección jurídica que

(231) ALCORTA, Amancio: "Curso de Derecho Internacional Privado", Tomo 1º. 2ª edición. Buenos Aires, 1927, pág. 272.

(232) MARTENS, F. de: "Tratado de Derecho Internacional", Vol. II, pág. - 349.

a un nacional, para que esa tutela no quede en mera plasmación teórica, necesita cobrar operatividad mediante la facultad de poder comparecer ante los Tribunales.

Si bien en todo Estado de Derecho, es lógico que "el ciudadano que se pone bajo la jurisdicción de otro, ya sea como visitante transitorio, o como residente más o menos permanente, no puede hacer reclamaciones para que se le permita disfrutar de una situación especial" (233). Ahora bien, "si se les causa un perjuicio, consideran que para lograr la reparación correspondiente deben dirigirse a los mismos tribunales e invocar la misma ley que los nacionales del país" (234).

En el marco español relativo al libre acceso del extraneum a los Tri bunales, nuestra doctrina procesal más reciente distingue la capacidad para ser parte y la capacidad para comparecer en juicio. Así la "primera, co rresponde a la capacidad jurídica del Derecho Civil, por ello es innegable que corresponde al extranjero, quien puede ser parte en un proceso ante cualquier Tribunal español, siempre que éste sea competente para entender en el asunto. La capacidad para comparecer en juicio es atribuida por el artículo 2º, párrafo 1º de la ley de Enjuiciamiento civil a los que se en-

7

(233) FENWICK, Charles G.: "Derecho Internacional", (trad. Mª Eugenia I. Fischman). B. Aires, 1963, pág. 313.

(234) FENWICK, Charles G.: op. cit. pág. 313.

cuentren en la plenitud de derechos civiles. Las restricciones que en este aspecto, puedan afectar al extranjero no suponen esa falta de plenitud, que en nuestro Derecho es suplida por los mecanismos de representación, — asistencia o autorización, ninguno de los cuales precisa el extranjero mayor de edad para comparecer en juicio" (235).

1.5 El extranjero ante el proceso.

Si un foráneo considera que ha sido perjudicado en sus intereses, es decir, si sus derechos resultan conculcados tiene abierta la vía de los — tribunales del país "para lograr la reparación correspondiente, en las mis mas condiciones que si fuera ciudadano" (236). Ese acceso ante la administración de justicia, solo puede instrumentarse mediante el acto procesal — de la comparecencia en juicio. Desde nuestra óptica nacional actual, "los Tribunales españoles, son en principio, competentes, para entender en los litigios entre españoles, entre español y extranjero o entre extranjeros que se susciten en España" (237).

En la misma dirección apuntada en las líneas precedentes, se sostiene que los Tribunales españoles tienen competencia para entender del cum—

(235) MIAJA DE LA MUELA, A.: "Derecho Internacional Privado", Tomo II, Parte especial. Madrid, 1953, pág. 157.

(236) FENWICK, Ch. de: op. cit. pág. 313.

(237) MIAJA DE LA MUELA, A.: op. cit. pág. 157.

plimiento de las obligaciones contraídas en España o fuera de España por extranjeros, "siempre que sean a favor de súbditos españoles. Los extranjeros tienen derecho a que por los Tribunales españoles, se les administre justicia con arreglo a las leyes, en las demandas que entable para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en España o que deban cumplirse en España, o cuando versen sobre bienes sitos en territorio español"/238). Por eso, "los extranjeros, incluso los residentes fuera de España, pueden acudir a la justicia española en demanda de la protección necesaria, y — pueden solicitar y obtener el beneficio de pobreza para litigar ante nuestros Tribunales" (239), y el mismo autor añade que aquellos "son por expresa declaración de la ley, los competentes para juzgar de todos los negocios civiles que se susciten en territorio español, sea entre nacionales, extranjeros, o nacionales y extranjeros, aunque éstos se hallen avecindados fuera de España y sus bienes se encuentren en el país respectivo")240).

El Derecho Internacional común "obliga a los Estados a poner a disposición de los extranjeros en tiempo de paz, la vía judicial. Los extranjeros han de tener la posibilidad de presentar una demanda o tener el derecho

(238) TORRES CAMPOS, M.: "Principios de Derecho Internacional Privado", - Madrid, 1883, pág. 281.

(239) RAVENTOS NOGUER, M.: "Situación jurídica de los extranjeros en España", Rev. Crit. de D. Inmobiliario, Madrid, 1926, pág. 576.

(240) RAVENTOS NOGUER, M.: op. cit. pág. 576.

de servirse, como demandados o acusados, de los medios de defensa corrientes en los Estados civilizados" (241). En el marco jurídico español, nuestra iurisdicción, resulta competente, en cuanto al lugar, para todos los — contratos que se susciten en territorio español, y "en cuanto a la materia, los Tribunales españoles son incompetentes para acciones reales referentes a inmuebles sitos fuera de España. Si los negocios civiles se suscitan, en cambio, entre extranjeros o entre españoles y extranjeros, la situación es dudosa" (242).

A contrario sensu, "Les juges de France sont tenus de faire droit au delinquant lorsqu'il leur est proposé de la part d'un étranger traduir devant eux par un autre étranger". (243). En la misma línea, F. de Martens, señala que "algunos jurisconsultos franceses, como por ejemplo, Demolombe y Ferand-Girand, sostienen que los tribunales franceses han sido creados — para administrar justicia a los súbditos de Francia, pero no a los extranjeros" (244).

1.6 La protección penal del extraneum.

Si conforme a lo desarrollado en el epígrafe anterior, todo foráneo

(241) VERDROSS, Alfred: "Derecho Internacional Público", Madrid (edit. — Aguilar), 1972, pág. 294.

(242) GOLDSCHMIDT, Werner: "Sistema y Filosofía del Derecho Internacional Privado". Tomo I, Barcelona, 1948, pág. 349-50.

(243) GAND: "Code des étrangers", París, 1853, pág. 131.

(244) MARTENS, F.: Vol. II, op. cit. pág. 350.

tiene derecho a impetrar el auxilio de la justicia en el país donde es acogido, esa tutela tiene especial aplicación en el marco procesal penal. Como afirma un autor, "la justicia penal de un Estado, no se aplica más que a las infracciones cometidas en su territorio por nacionales y extranjeros, o por sus nacionales en el extranjero, o aún por un extranjero fuera del país, si se trata de atentados contra su existencia, su crédito o su constitución" (245). Con carácter general, podemos subrayar que "los Estados, finalmente, están obligados a proteger a los extranjeros contra ataques delictivos, teniendo que castigar las ofensas a la vida, la libertad, la propiedad y el honor de los extranjeros y adoptar las disposiciones de policía necesarias" (246), esa protección a juicio del citado internacionalista, se opera mediante "medidas preventivas y medidas represivas". En cuanto a las primeras "añade Verdross- "por regla general, un Estado cumplirá este deber si protege a los extranjeros de la misma manera que a los nacionales. Entre las medidas represivas exigibles figura la imposición de una pena correspondiente a la gravedad de la acción, siendo insuficiente una mera pena ficticia, por oponerse al principio de la buena fé" (247).

(245) NEUMANN, Barón Leopoldo: "Internacional Público", (trad. de Aniceto Sela), Madrid, pág. 66.

(246) VERDROSS, Alfred: "Derecho Internacional Público", Edit. Aguilar, - 1972, pág. 294.

(247) VERDROSS, A.fred: op. cit. pág. 294.

En este orden de cosas, "lo primero que debe procurarse para promover un litigio o para abrir un procedimiento de oficio, es averiguar qué Juez o Tribunal debe conocer, a fin de no invadir la jurisdicción de otro Juez, y evitar reclamaciones y contiendas, siempre perjudiciales y dañosas para la buena administración de justicia" (248). Esa selección de jurisdicción es hoy tanto más fácil ejercitarla cuanto que en materia criminal, el extraneum está sometido -lo mismo que en las restantes parcelas jurídicas- a la misma jurisdicción ordinaria que el regnícola.

Dentro de la competencia en materia penal, "la elección de la jurisdicción es ante todo un asunto de procedimiento criminal, pero es al mismo tiempo una cuestión de Derecho Internacional criminal: porque según que el crimen se someta a los tribunales de tal o cual Estado, así será castigado con tal o cual pena, y por consiguiente, de esta cuestión de competencia depende en parte, el efecto de las legislaciones criminales (249). Ahora bien para tutelar penalmente al extraneum es preciso que se les administre justicia, y para su fiel cumplimiento "ha establecido la ley un procedimiento que se llama pleito o juicio, que es discusión legal entre actor y reo ante Juez competente, para que lo decida con su sentencia" (250).

(248) ALONSO Y COLMENARES, E.: "Jurisdicciones especiales", Tomo I, Madrid, 1884, pág. 9

(249) MARTENS, F. de: "Tratado de Derecho Internacional". Vol. III. Madrid, pág. 26.

(250) URGELLES, Pedro: "Tratado elemental de procesos militares", Madrid, 1854, pág. 11.

Sección 2ª.-

1.El Fuero de Extranjería y el sistema de Capitulaciones.

1.1.- INTRODUCCION.

A nuestro juicio, existe una concomitancia acusada entre lo que representó el Fuero de Extranjería en España, y el sistema de Capitulaciones practicado en Turquía y ciertos países de Asia y Africa. En ambos casos, se conferían a los extraneum un haz de privilegios, entre los que sobresalían los de orden jurisdiccional. La nota diferencial esencialmente, sería dada por la circunstancia de que mientras en España los extranjeros eran juzgados por su iudex privativo con arreglo a la legislación española, los extranjeros en los países de Capitulaciones, lo eran a tenor de sus propias leyes nacionales. Esa semejanza que esbozamos en líneas precedentes nos obliga a profundizar en el tema de las Capitulaciones en los países no cristianos, delimitar su concepto, precisar su contenido y áreas de expansión, y fijar las analogías y diferencias con nuestro Fuero de Extranjería.

1.2.- Aceptaciones y concepto de las Capitulaciones.

Para Díaz Lorda, el vocablo capitulaciones, tiene dos acepciones. - La primera, hace referencia "a los convenios concluidos con los países de civilización rudimentaria, para proteger a los extranjeros y agentes

consulares que radican en los citados países". La segunda, significa — "los convenios militares relativos a la rendición de fuerzas armadas, — bien en playa sitiada o en campo libre" (251). Al primer significado — alude Hildebrando Accioly, cuando señala "a los privilegios o garantías concedidos a extranjeros en ciertos Estados, y entre los cuales sobresa lía el derecho de subordinación exclusiva a la jurisdicción extraterritorial del Estado de origen, dióse el nombre de capitulaciones, que tambien se utilizaba para definir los mismos tratados o convenios por los que tales prerrogativas se concedían a extranjeros" (252). Coincidiendo con esta última acepción, se puntualiza, que las capitulaciones son "tratados celebrados por algunas potencias con príncipes musulmanes, en virtud de los cuales estos conceden privilegios especiales a los Cónsules y súbditos de dichas potencias, sin reciprocidad (253). Charles Bouseay, destaca ante todo que el régimen de capitulaciones implica "otra restricción o la competencia territorial" (de cada Estado). Y añade más adelante "en los países llamados de capitulaciones, los extranjeros quedaban ~~excluidos~~excluidos, casi totalmente, de la competencia del Estado territorial y — sometidos, en gran parte, a la competencia de su Estado de origen"(254).

(251) DIAZ LOPDA, J.: Derecho Internacional Público en paz y en guerra, Madrid, 1949, pág. 299.

(252) ACCIOLY, Hildebrando: Tratado de Derecho Internacional Público, — Madrid, 1958, I. pág. 261.

(253) ANTOKOLETZ, Daniel: Derecho Internacional Público en tiempo de paz, Tomo III. Buenos Aires, 1928. pág. 429.

Para disipar dudas al respecto, Daniel Antokoletz, precisa que "no debe confundirse el régimen de Capitulaciones, con la Capitulación o rendición militar, aunque algunos autores creen que ambas instituciones tienen un mismo origen etimológico, y consideran las Capitulaciones como una especie de rendición del Islam al Cristianismo" (255).

Díaz Cisneros entiende que las capitulaciones "consisten en la concesión de atribuciones judiciales a los Cónsules de las grandes potencias europeas, facultades aún más extensas que las de los agentes diplomáticos modernos" (256).

Para Podestá Costa "en algunos países de civilización oriental, la soberanía fué restringida por medio de ciertos tratados, conocidos con el nombre de capitulaciones, según los cuales aquéllos se obligaron a asegurar a los nacionales de la contraparte, determinados derechos, tales como la libertad de establecimiento, de comercio, de circulación y de cultos, la inviolabilidad del Concilio, la exención de impuestos personales, y especialmente la exención de jurisdicción local, tanto civil como comercial y penal, y a la vez admitir que las referidas personas quedarán regidas por las leyes de su nacionalidad y bajo la jurisdicción del

(255) Op. cit. pág. 429

(256) DIAZ CISNEROS, César: Derecho Internacional Público, T. II. Buenos Aires, 1955, pág. 95.

cónsul respectivo". (257)

1.3.- Antecedentes de las Capitulaciones.

El régimen de las Capitulaciones tiene precedentes históricos notables. "Già al tempo dello Crociate i principe cristiani del Regno di Gerusalemme, avevano concesso alle grandi repubbliche commerciali: Genova, Venezia, Firenze e Marsiglia, che avevano contribuito col loro aiuto al successo di queste imprese, numerosi privilegi, tra qui il diritto di stabilire delle colonie commerciali autonome nei Paesi d'Oriente, in quartieri di loro proprietà, con libertà di commercio ad esenzione da diritti di dogana. Queste concessioni avvenivano mediante carte di protezione, di cui la prima risale al 1098, accordata alla città di Genova dal principe di Antiochia, un'altra nel 1123 a favore della repubblica di Venezia, ed una terza nel 1136 a Marsiglia" (258).

Este régimen "tuvo origen en el siglo XII en ciertas ciudades de Levante -los países berberiscos y del Asia Menor- al reconocer a los comerciantes de las repúblicas italianas (Venecia, Génova, Pisa, Florencia, etc...) el derecho de residir en determinados barrios, y el de de-

(257) PODESTA COSTA, L. A.: "Derecho Internacional Público". T. I. Buenos Aires, 1955. pág. 86.

(258) FERRARA, Francesco: Manuale di Diritto Consolare, Padova, pág. 233.

signar por sí mismos cónsules, con la misión de dirimir como árbitros, las divergencias que entre ellos se produjeran" (259). Y el mismo autor prosigue "el régimen de Capitulaciones se difundió desde fines del siglo XVI" (260). En idéntico sentido se pronuncian otros internacionalistas "dicha costumbre, muy conocida desde la Edad Media en los países — berberiscos y en el Asia Menor, persistió en la época moderna, sobre todo en el Imperio otomano, donde el carácter religioso de la legislación mahometana suministraba motivos especiales para que se mantuviera la subordinación de los residentes extranjeros a las leyes de los países propios" (261).

Para Pelissier du Rausas, las capitulaciones tienen su génesis "en la Edad Media, y en sus comienzos, tuvo aplicación en los principados cristianos fundados por las Cruzadas, donde los extranjeros obtuvieron el permiso de fundar colonias o barrios con instituciones y magistrados propios: sistema que se conservó en los países ocupados por los otomanos" (262).

Charles Rousseau, estima que el sistema capitular "se introdujo pri

(259) PODESTA COSTA, op. cit. pág. 86-7

(260) Op. cit. pág. 87.

(261) ACCIOLY, H: op. cit. pág. 261.

(262) PELISSIER DU RAUSAS. Le regime des Capitulations dans l'Empire - Ottoman, 1902, T. I, pág. 5.

meramente en Turquía". Ello se explica por tres razones: "a) una, de orden religioso, consecuencia de la concepción musulmana de que todos los infieles, cualquiera que sea su nacionalidad, se hallan fuera del ámbito de aplicación de la ley del Profeta; b) otra, de orden económico, motivada por la costumbre, que en la Edad Media habían adquirido las ciudades mercantiles del Mediterráneo, de negociar con los califas y los sultanes estatutos particulares, que les reconocían libertad de comercio, exención de impuestos, nombramiento de cónsules, etc.,, y c) otra, de orden jurídico, debida a la influencia del sistema de la personalidad de las leyes, cuya expresión positiva fueron, precisamente, las capitulaciones" (263).

Daniel Antokoletz subraya que: "las primeras Capitulaciones contractuales fueron pactadas por Francisco I de Francia con el Sultán Solimán el Magnífico en 1535; renovadas por el Tratado de 29 de abril de 1601 y Protocolos de 1868 y 1873. En virtud de estas Capitulaciones, Francia - ejerce el protectorado religioso en el Oriente y en los Santos Lugares. Hasta hace un par de años, la colectividad francesa en Turquía era gobernada por tres poderes: los diputados, la asamblea general y los Cónsules; éstos gozaban de todos los privilegios de los Agentes Diplomáticos, mas

(263) ROUSSEAU, Charles: op. cit. pág. 233.

el derecho de administrar justicia en materia civil, comercial y criminal" (264).

Prosiguiendo con su teoría del origen de las Capitulaciones paralela a la de Charles Rousseau-, Podestá Costa agrega que "implantada la dominación turca en el Asia Menor, el Norte de Africa y los Balcanes, sucedía que el derecho local, puesto que se basaba en la confesión religiosa, no era prácticamente aplicable a los no musulmanes para regir sus relaciones personales, de familia y sucesorias" (265)

Díaz Cisneros comparte los criterios anteriormente mencionados de la génesis no cristiana de las Capitulaciones, al determinar que las mismas "se iniciaron en los países no cristianos en la Edad Media"(266). En este sentido, su tesis es semejante a las de Podestá Costa y Pelli-ssier du Rausas, que anteceden a estas líneas.

Entendemos que los regímenes de Capitulaciones, con su deterioro del principio de soberanía nacional, al insertar en el marco de la administración de justicia territorial, un juez extranjero (el Cónsul), que aplicaba a sus connacionales, sus propias leyes personales, desarrollaban su operatividad a través de ese "ex novo" Órgano judicial. En otras

(264) ANTOKOLETZ, Daniel: Op. cit. pág. 429.

(265) PODESTA COSTA: op. cit. pág. 87.

(266) DIAZ CISNEROS: op. cit. pág. 95.

palabras, no puede desglosarse del sistema de Capitulaciones, la institución del Cónsul, incardinada en los mismos, como piedra angular de la administración de justicia de los foráneos. De ahí, que si existe una interdependencia entre los Tratados capitulares y el agente Consular, como instrumento de aquél, es preciso analizar y estudiar, el concepto, funciones y régimen de los Cónsules en los países sujetos a las citadas Capitulaciones, porque al verificarlo estaremos en condiciones óptimas para profundizar en la problemática de aquéllas. A esta interrelación de ambas instituciones, parece referirse el Marqués de Olivart, cuando indicaba en 1927 "la jurisdicción consular y el régimen de capitulaciones en los países no cristianos, queda de día en día reducido a más escasos y reducidos límites, quedando sólo en Persia, temporalmente Siam, y con respecto a poquísimas Potencias, en las dos zonas de Marruecos" (267).

1.4.- Interrelación del sistema de Capitulaciones y la constitución consular.-

Instrumentación de las Capitulaciones: El Cónsul.

Los Pactos o Capitulaciones suscritos entre países cristianos y no cristianos, se han instrumentado a través del principio medieval de las leyes personales (la ley nacional acompaña a la persona, cualquiera que

(267) OLIVART, Marqués de: El Derecho Internacional Público en los últimos 25 años (1903-1927). Tomo I, Madrid, 1927, pág. 377.

sea el territorio donde vada a residir y de un iudez foráneo, juzgador de las litis suscitadas entre sus connacionales, en territorio no cristiano. Ese iudez característico del sistema capitular, es el Cónsul. De tengámonos en esta figura.

1.5.- Concepto.

"La institución consular, en su primera fase, fué más bien una institución de Derecho interior, pues los jueces o cónsules, en las varias ciudades donde existían, eran funcionarios encargados de fomentar el desarrollo del comercio y de intervenir en las cuestiones surgidas entre comerciantes" (268). Más adelante, agrega el mismo autor "los consulados, vinieron a ser institución de Derecho internacional, es decir, los consulados en el exterior, no fueron otra cosa, sino los Tribunales de comercio de cada ciudad trasladados a territorio extranjero, allí donde las necesidades del comercio respectivo demandaban su presencia" (269).

Como dice Antokoletz "la condición jurídica de los Cónsules en los países sujetos a Capitulaciones, es excepcional. La diferencia de costumbre, de religión y de civilización, ha hecho que en estos países, los --

(268) ALLUE SALVADOR: La condición jurídica de los Cónsules, Zaragoza, 1909, pág. 5.

(269) ALLUE SALVADOR: op. cit. pág. 6.

Cónsules de algunas potencias sean tratados como Agentes Diplomáticos y hayan conservado atribuciones judiciales" (270).

Para Gestoso y Acosta, el Cónsul "es un funcionario público representante del Estado que tiene por misión el velar en el extranjero por los intereses del comercio de su país y proteger a sus connacionales" (271). Esta definición, aunque válida para la institución consular en general, no es precisa por lo que atañe a la significación del Cónsul en países de capitulaciones en los que sus atribuciones resultan ampliadas especialmente en materia judicial. El mismo internacionalista añade "las prerrogativas e inmunidades de los Cónsules extranjeros en Oriente, son mucho más importantes y extensas que las que tienen sus compañeros en los países cristianos: constituyen un régimen completamente excepcional, que reposa a la vez en estipulaciones convencionales (capitulaciones) y en usos que han adquirido fuerza de ley" (272).

Los Cónsules en aquellos países no cristianos, desempeñaban una labor realmente trascendente "su jurisdicción consular era para los ciudadanos como la prolongación de la jurisdicción de su propio soberano"

(270) Op. cit. pág. 429.

(271) GESTOSO Y ACOSTA: "Curso Elemental de Derecho Internacional Público". Vol. I. Valencia, 1907, pág. 361.

(272) Op. cit. pág. 375.

no en tierra extraña" (273). La aludida interrelación entre el sistema de capitulaciones y la figura del Cónsul, resulta evidente en el pensamiento de Charles Rousseau "el régimen de capitulaciones descansaba en la no ingerencia de las autoridades otomanas en las relaciones de los extranjeros, quienes quedaban sujetos a la autoridad de sus Cónsules" (274). Dicha conexión nace de la circunstancia de que el Cónsul es el ente encargado de hacer operativas las capitulaciones; sin su presencia, éstas quedarían reducidas a simples pactos interestatales, sin mayor interés público que el de cualquier tratado ordinario de paz y comercio. La institucionalización del Cónsul-juez en las capitulaciones, convierte a éstas en un tratado sin génesis, robustece la posición del Cónsul al atribuirle funciones judiciales y aplica en plenas Edades Moderna y Contemporánea, el principio -del medievo- de la personalidad de las leyes, abriendo brecha en la soberanía jurisdiccional de toda comunidad política.

A esa identificación del Cónsul con los sistemas capitulares se refiere Max Sorensen, cuando apunta "a medida que fué creciendo el comercio internacional, las responsabilidades del Cónsul aumentaron, espe-

(274) ROUSSEAU, Charles: Op. cit. pág. 233.

(273) HERNANDEZ-BRETON, A.: Atribuciones y prerrogativas de los Cónsules, Venezuela, 1951, pág. 22.

cialmente como resultado de los llamados tratados de capitulación, celebrados por países europeos con el Imperio Otomano en la Edad Media" -- (275). La trabazón de ambas instituciones fué plena.

1.6.- Origen de la institución consular.

Como quiera que hemos esbozado una incuestionable ligazón entre las capitulaciones y el Cónsul, en el epígrafe anterior, parece coherente -- que analizada la primera institución, hagamos lo mismo a posteriori con la segunda, para decantar sus puntos de contacto e interrelaciones.

Para el prof. Díez de Velasco "la institución consular es muy antigua, y encontramos precedentes en los proxenes de la Grecia Antigua, -- que ofrecen analogías con los Cónsules honorarios de nuestra época" -- (276); en igual sentido, Max Sorensen "históricamente la institución consular es más antigua que la de la misión diplomática permanente. Las ciudades-Estados griegas, ya tenían unos funcionarios --los proxeni-- encargados de las funciones consulares" (277). Criterio similar mantiene Hernández-Bretón "si nos remontamos a los orígenes de dicha institución, nos parece encontrar algunas analogías en aquellas magistraturas que ve

(275) SORENSEN, Max: Op. cit. pág. 404.

(276) Instituciones de Derecho Internacional Público, Tomo I, Edit. Tecnos, Madrid, pág. 381.

(277) SORENSEN, Max: Manual de Derecho Internacional Público, Méjico, -- Fondo de Cultura Económica, pág. 404.

laban en Grecia y Roma, por los intereses y ventajas de los extranjeros dentro de esas naciones" (278).

Frente a esa opinión de encontrar similitudes de la figura del Cónsul, en órganos creados en la antigua Grecia y el imperio romano, espi- gamos tests diferentes, "la institución de los cónsules, cuyo origen al- gún autor fundándose en simples analogías, ha querido encontrar en los proxeni de la antigua Grecia y en los patronos que existían en Roma, — surge y se desenvuelve a partir de la Edad Media" 279). Actitud parale- la defiende Gestoso y Acosta "desde la más remota antigüedad, los pue- blos civilizados han procurado establecer funcionarios encargados de la protección del comercio internacional. Pero el origen más próximo de — los modernos consulados, hemos de buscarlo en la Edad Media y principal- mente después de las Cruzadas y del desenvolvimiento del comercio entre los puertos franceses e italianos del Mediterráneo y los del Extremo — Oriente" (280).

Veamos cuáles eran aquellos precedentes remotos de los Cónsules en Grecia. La proxenia helena, "aparece en un principio como institución — nacida de la generosidad de algunos ciudadanos que se ofrecían espontá-

(278) HERNANDEZ IBRETON, A.: Atribuciones y prerrogativas de los Cónsu- les, Maracaibo, 1951, pág. 17.

(279) DIENA, Julio: Derecho Internacional Público, (trad. de J.M. Trias de Bes). Barcelona, 1948, pág. 375.

(280) GESTOSO Y ACOSTA, Luis: Curso Elemental de Derecho Internacional Público, Vol. I, Valencia, 1907, páf= 360.

neamente para proteger y representar a determinados extranjeros" (281).
 ¿Bastan esos matices para configurar la proxenia como un atisbo del Con-
sulado? Entendemos que no es suficiente. Allíé Salvador, se pronuncia
 con igual tenor "entre los proxenes griegos y los cónsules modernos, —
 existen indudables analogías, pero también muchas diferencias. Unos y
 otros tienen de común, el ser magistrados instituidos para la protección
 de los extranjeros y garantía de sus derechos. Pero también, es eviden-
 te que la condición jurídica de los proxenes era radicalmente distinta
 a la de los cónsules, pues si bien disfrutaban de aquellas prerrogati-
 vas inherentes a su cualidad de funcionarios públicos, carecían de los
 múltiples privilegios que hoy prodean a los Cónsules" (282).

Por lo que atañe a entes precursores romanos de los cónsules, pode-
 mos citar los siguientes: El Hospitium, el Patronato, los Recuperatores
 y el Pretor peregrinus. Allíé Salvador nos da las siguientes definicio-
 nes de dichos órganos. El Hospitium consistía "en un convenio celebrado
 entre un ciudadano romano y un extranjero, en virtud del cual se esta-
 blecía entre ambos una protección recíproca y temporal extensiva única-
 mente a determinado número de asuntos". El Patronato "era una relación

(281) ALLUE SALVADOR, M.: La condición jurídica de los Cónsules. Ensayo
 histórico-crítico. Zaragoza, 1909, pág. 19

(282) ALLUE SALVADOR, M: Op. cit. pág. 20-21.

jurídica por la que un extranjero, en concepto de cliente, se sometía a un ciudadano romano, que se denominaba en tal concepto, patrono". Los Recuperadores "eran verdaderos jueces internacionales, encargados de juzgar las cuestiones suscitadas entre ciudadanos romanos y extranjeros de aquellos países que habían celebrado tratados con Roma, en los cuales se estipulaba dicha protección o bien para resolver las cuestiones surgidas entre extranjeros únicamente". El Practor peregrinus "estaba encargado de resolver las cuestiones entre ciudadanos romanos y extranjeros, o bien entre estos últimos recíprocamente" (283). A nuestro entender, ni en el Hospitium, ni en el Patronato, se da una entera coincidencia con el órgano Consular moderno, éste último no pacta un Convenio recíproco de mutua protección con el connacional como ocurría en el Hospitium, tampoco se da la relación jurídica de patrono-cliente típica - del Patronato, encontramos las características peculiares de la función consular con capitulaciones, que nos obligan a catalogarlos como atis- bos remotos de ésta, al igual que los proxenes griegos.

Sin embargo, los antecedentes directos de la institución consular en el régimen de capitulaciones, está en la Edad Media. Julio Diena - - afirma en este sentido "cuando especialmente por efecto de las Cruzadas,

(283) Op. cit. pág. 23-25.

los pueblos de Occidente, se pusieron en contacto con los de Oriente, - se establecieron entre ellos importantes relaciones comerciales en especial por obra de los comerciantes que provenían de las ciudades marítimas de Europa, bañadas por el Mediterráneo, los cuales lograron obtener en los países de oriente algunos privilegios" (284). Dentro de dichos privilegios, debemos destacar según el mismo autor "los de ser regidos por sus propias leyes, y hacer juzgar sus controversias por persona experta, que en general era elegida por ellos y llamada Cónsul de los Comerciantes u otra denominación análoga" (285). Con igual tenor Díez de Velasco, subraya "pero es en la Edad Media cuando la institución consular adquiere un amplio desarrollo. El principio de la personalidad de las leyes, vigente en aquella época influye en los orígenes de la institución" (286).

Allóe Salvador destaca como "entre los países que primeramente establecieron representantes consulares suyos en el extranjero, se encuentran las Repúblicas italianas". Y el mismo autor, añade "Ya en 991 se concluyó el primer tratado de comercio entre Venecia y el Imperio Bizantino, y según él, los litigios entre venecianos residentes en el territorio del Imperio, eran sometidos a un juez imperial, que juzgaba según

(284) DIENA, Julio: Op. cit. pág. 375.

(285) Op. cit. pág. 375.

(286) Op. cit. pág. 381-2.

el derecho de los venezianos. Poco después se les concedió que el juez fuera un compatriota suyo" (287). A esa aplicación del derecho extranjero, se refiere Hernández-Bretón "en los comienzos de la Edad Media, - basados en el principio de la personalidad del derecho, según el cual - cada individuo debía someterse a las leyes de su propia raza, se creyó natural que los extranjeros fueran gobernados de acuerdo con las propias leyes de su país de origen" (288).

Existieron ciertos "privilegios que lograron obtener en los países de Oriente, algunos comerciantes que provenían de las ciudades marítimas de Europa bañadas por el Mediterráneo" (289), dichos privilegios - son según otro internacionalista "el obtener ciertas autonomías, y entre ellas la de tener unos Magistrados especiales. Las relaciones comerciales del Imperio Bizantino y los países de Occidente, y las de éstos con los países musulmanes en esta época, traen como consecuencia la concesión a los comerciantes occidentales de un cierto estatuto privilegiado. Dentro de éste tiene su cabida la designación de Jueces especiales que en el siglo XII toman el nombre de Cónsules" (290).

(287) Op. cit. pág. 32.

(288) Op. cit. pág. 18.

(289) DIENA, Julio. Op. cit. pág. 375.

(290) DIEZ DE VELASCO: Op. cit. pág. 382.

4En todo caso, "a medida que fué creciendo el comercio internacional, las responsabilidades del Cónsul aumentaron, especialmente como resultado de los llamados Tratados de capitulación, celebrados por países europeos con el Imperio otomano en la Edad Media" (291). En igual sentido "las funciones de los Cónsules van ensanchándose en época posterior hacia la protección de los intereses de su Estado de origen y de los nacionales de éste, llegando en el siglo XVI a ejercer una cierta representación oficial del Estado" (292). En esa línea Hernández-Bretón, estima que "Inglaterra no comenzó a desarrollar la institución consular, sino ya bien entrado el siglo XV" (293).

Para Julio Diena "cuando Turquía, después de haber conquistado el Asia Menor en los siglos XIII y XIV, penetró en el siglo XV en Europa, apoderándose de Constantinopla en 1453, los privilegios de los comerciantes occidentales lejos de ser suprimidos, fueron reconocidos y ampliados. Tuvo esto lugar, porque los musulmanes no querían ponerse en contacto con los cristianos, y porque su ordenamiento civil tenía una base religiosa; por tanto, aceptaron de buen grado, que los cristianos habitasen barrios separados, estuvieran sometidos a sus leyes y gober-

(291) SORENSEN, Max: Op. cit. pág. 404.

(292) DIEZ DE VELASCO: Op. cit. pág. 382.

(293) HERNANDEZ-BRETON, Op. cit. pág. 21.

nados por sus magistrados" (294).

1.7.- Privilegios y funciones de los Cónsules en los países de capitulaciones.

"Il est unanimement reconnu que le consul établi en pays de Capitulations, investi de pouvoirs de juridiction, a droit aux immunités et privilèges accordés aux agents diplomatiques" (295). El ámbito de atribuciones de los Cónsules ha variado según las Edades (Media, Moderna y Contemporánea) y según los países en que ejercían su actividad, tuviesen o no concedidas Capitulaciones. Veamos la primera cuestión. Una exposición más clara de la rúbrica que encabeza estas líneas, nos compelerá a distinguir a priori dos etapas, en el status y cometido de los Cónsules en la Edad Media y en la Edad Moderna. Por lo que concierne a la Edad Media "en un principio, la competencia de dichos Cónsules se refería únicamente a los asuntos mercantiles, pero después fué adquiriendo poco a poco mayor extensión. Convirtiéndose dichos Cónsules en jueces de todas las cuestiones civiles que surgían entre los miembros de las factorías, y hasta entendían en los asuntos criminales. Con el tiem

(294) DIENA, Julio,: Op. cit. pág. 376-7.

(295) BOUFFANAIS, Pierre: Les consuls en temps de guerres et de troubles. (these pour le doctorat), Paris, 1933, pág. 162.

PO uni6se a la jurisdicci6n consular el poder administrativo, y el juez c6nsul fu6 tambi6n jefe de policia, llegando a ser, por 6ltimo, el pro tector y representante de sus compatriotas ante la autoridad local" — (296). En lo tocante a la Edad Moderna, el mismo autor, precisa "Pero a partir del siglo XVIII, la justicia deja de ser una funci6n munici— pal para convertirse en una regalía soberana; la justicia se adminis— tra en cada paíz, lo mismo a los nacionales que a los extranjeros". Es to hizo que acabaran las atribuciones judiciales de que habían disfruta— do hasta entonces los c6nsules, quedando reducida su misi6n al fomento del comercio, protecci6n de sus nacionales y funciones administrativas como agentes que son de su Gobierno" (297).

Es incuestionable que existi6, pues, una clara expansi6n de las — funciones de los C6nsules en plena Edad Media. A esa política generali— zada de aumento de su competencia se refiere Julio Diena, cuando seña— la "La competencia de los c6nsules de los comerciantes, que originaria— mente se limitaba a los litigios relativos a su comercio, se extendió adem6s a la materia civil y penal y a6n adquirieron los c6nsules pode— res de car6cter administrativo, pues debían mantener el orden entre —

(296) ALLUE SALVADOR: Op. cit. pág. 45.

(297) Op. cit. pág. 51.

sus nacionales y protegerlos en caso oportuno" (298). El aludido inter nacionalista, sin embargo, matiza -coincidiendo con Allúe-, cómo en la Edad Media se produce una reacción en sentido contrario "En un principio los Cónsules, incluso en occidente, eran elegidos por los comerciantes, pero en el siglo XVI se extendió mucho el uso de que su nombramiento lo realizasen los Estados. Sin embargo, cuando el concepto de los derechos inherentes a la soberanía fué precisándose y encontrando aplicación práctica, el ejercicio de las funciones judiciales por parte de los cónsules apareció como incompatible con aquellos derechos. En el siglo XVII y todavía más en el siguiente, los cónsules de los países occidentales perdieron las extensas funciones judiciales que antes les correspondían" (299).

En cuanto a la segunda cuestión, es preciso puntualizar a prima facie, que la competencia de los Cónsules se incrementó de modo notable en los países de Africa, Oriente Medio y Lejano, donde regían las Capitulaciones. A este respecto "Mentre negli Stati occidentali i Consoli sono organi amministrativi dello Stato, con scarse attribuzioni giurisdizionali, una ben diversa posizione esse hanno avuto ed in qualche —

(298) DIENA, Julio: "Derecho Internacional Público". Barcelona, 1948, pág. 376.

(299) Op. cit. pág. 376.

luego ancora conservano in Oriente e nell'Estremo Oriente" (300). ¿Qué países se integraban dentro del marco de concedentes de los privilegios de las capitulaciones? Para Francisco Ferrara, esas naciones eran las siguientes: "Per questi passi fuori cristianità si intendevano l'Impero Ottomano con tutte le sue provincie e dipendenze, come l'Egitto e l'Asia Minore, oltre i Paesi della costa orientale dell'Africa, Algeria, Tunisia, Marocco e Tripolitania, e Paesi dell'Africa Orientale, come Etiopia, Zanzibar, Madagascar; infine gli Stati dell'Estremo Oriente: Cina, Giappone, Corea, Persia, Siam" (301).

Opinión análoga sustenta Riccardo Monaco: "In questi ultimi stati (-países de capitulaciones-) infatti la funzione consolare aveva la massima autonomia di fronte alle autorità locali; ad essa faceva capo anche l'esercizio della giurisdizione ed, in genere, un complesso di privilegi e di esenzioni per il console e per i suoi concittadini che non trovavano riscontro negli Stati di civiltà cristiana" (302).

Dentro de la amplia gama de funciones, que los internacionalistas nos detallan de los Cónsules en países de capitulaciones, preferimos -detenemos aquí, en su actividad judicial, por considerarla de mayor interés en esta tesis. Hernández-Bretón, distingue su jurisdicción ci-

(300) FERRARA, Francisco: "Manuale di Diritto Consolare". Padova. pág. 229.

(301) Op. cit. pág. 230.

(302) MONACO, Riccardo: Lezioni di Diritto Internazionale Público, Torino, pág. 268-9.

vil, dela penal, con este tenor: "La materia de los juicios civiles la formaban casi siempre las causas entre marinos y comerciantes que por lo común era la categoría más importante de los extranjeros" (303).

La jurisdicción penal era limitada y concebida según los diversos pactos y tratados entre los distintos Estados". Y añade a continuación "De este modo los Consulados constituían centros de refugio para los - extranjeros, y, en particular, para los europeos en tierras del Levante". Ello indicaba la máxima importancia que tenían los Cónsules en - aquél entonces: su jurisdicción consular era para los conciudadanos - como la prolongación de la jurisdicción de su propio soberano en tierra extraña" (304).

En análogo sentido, señala Max Sorensen, que los tratados reguladores de las Capitulaciones "confirieron a los cónsules jurisdicción civil y criminal sobre sus nacionales residentes enTurquía, o que viajaran por dicho país". Y añade a renglón seguido "el establecimiento de misiones diplomáticas permanentes -en los siglos XVIII y XIX- llevaron a la autoridad a un eclipse transitorio; pero con la expansión del comercio, el movimiento marítimo y los viajes que siguió a la Revolución

(303) HERNANDEZ-BRETON: Op. cit. pág. 22.

(304) Op. cit. pág. 22.

industrial, la apertura de China y Japón y el establecimiento de regímenes extraterritoriales en esos países, los servicios consulares volvieron a tomar importancia" (305).

Para Marques Guedes, la jurisdição de los Cónsules nos países de capitulações, puede resumirse de este modo "En todos los países onde os cidadãos portugueses, por prácticas incontestadas, capitulações on tratados vigentes, forem insentos da jurisdição, os Cónsules, como presidentes de respectivo tribunal consular, excrearão sobre eles, jurisdição civil, comercial e criminal, em harmonia com os tratados e a legislação portuguesa em vigor" (306).

Según Daniel Antokoletz "un Cónsul con Capitulaciones es un verdadero Agente diplomático, con todas las prerrogativas de éste". Más la trascendencia de su función, sobresale a juicio de aquel autor, porque "ninguno de los connacionales del Cónsul puede ser detenido por la autoridad local sin darle aviso previo, ni expulsado sin su consentimiento". No se agota ahí sin embargo, el contenido de su gestión "el cónsul -si gue diciendo Antokoletz- celebra matrimonios, y tiene imperio judicial, no sólo sobre sus nacionales, sino también en los asuntos entre éstos

(305) SORENSEN, Max: Op. cit. pág. 404.

(306) MARQUES GUEDES, Armando: Direito Internacional Público, Tomo II, Lisboa, 1936, pág. 265.

y los indígenas. En materia penal y correccional, si el reo y la víctima pertenecen ambos a la nacionalidad del Cónsul, éste es competente; si la víctima es un súbdito local, la autoridad indígena puede intervenir con asistencia del Cónsul" (307).

Los privilegios e inmunidades de los cónsules extranjeros en Oriente, son mucho más trascendentes y significativas que las que tienen sus homónimos en los países cristianos: "constituyen un régimen completamente excepcional, que reposa a la vez en estipulaciones convencionales (capitulaciones) y en usos que han adquirido fuera de la ley" (308). La competencia judicial de la institución consular apunta Gestoso y Acosta, aparece "en las capitulaciones concluidas en diversas épocas con la Sublime Puerta, que conservan y conceden a los cónsules un derecho absoluto de jurisdicción sobre sus nacionales que continúan sujetos a las leyes de la patria, tanto en lo civil como en lo criminal" (309).

Según Y.A. Korovin "el trabajo de los Cónsules de algunos Estados en los países colonizados y dependientes, en los que el régimen de capitulaciones y la jurisdicción consular formaban parte integrante de la —

(307) ANTOKOLETZ, Daniel: Derecho Internacional Público en tiempo de paz, Tomo III, B. Aires, 1928, pág. 430.

(308) GESTOSO Y ACOSTA, Luis: Op.cit. pág. 375.

(309) GESTOSO Y ACOSTA, Luis: Curso Elemental de Derecho Internacional Público, Vol. I, Valencia, 1907, pág. 375.

institución consular, tenía unas características muy peculiares" (310). Es más, añade el citado autor "en estos Estados dependientes, les asista el derecho de entender de las cuestiones civiles y penales, que — pudieran dirimirse entre sus nacionales. Gozaban de inmunidad diplomática y tenían su propio servicio postal. Con ello, los cónsules en — aquellos países contaban con amplios poderes que les facilitaban la — intervención en los asuntos internos de los Estados dependientes y el ejercicio de su influencia sobre las cuestiones de política internacional o interna" (311).

El prof. Díez de Velasco afirma que "las funciones de los Cónsules van ensanchándose en época posterior —al siglo XII— hacia la protección de los intereses de su Estado de origen y de los nacionales de éste, — llegando en el siglo XVI a ejercer una cierta representación oficial del Estado" (312). Coincidiendo con el criterio de Max Sørensen, apuntado en párrafos anteriores, sigue diciendo "a partir del siglo XVIII, con el ensanchamiento y afirmación del poder estatal, las funciones — consulares en lo relativo al ejercicio de la jurisdicción civil y penal desaparecen en la mayor parte de los casos. Por el contrario, sus

(310) Y.A. KOROVIN: (trad. Juan Villalba), Derecho Internacional Público, México, D.F., 1963, pág. 315.

(311) Ibid. Op. cit. pág. 315.

(312) DIEZ DE VELASCO VALLEJO: Instituciones de Derecho Internacional Público, Tomo I, Edit. Tecnos, Madrid, pág. 382.

funciones comerciales y en materia de navegación se amplían, y como — consecuencia de la Revolución industrial, aumentan su importancia" — (313).

"Dans les pays hors chretienté les consuls ont des prerrogatives et des attributions speciales. Ces prerrogatives et ces attributions leur ont été d'abord reconnues, soit en vertu de conventions appelées capitulations, soit en vertu d'usages ayant acquis force de lois, dans les Echelles du Levant et dans les Etats de Barbarie" (314). Sigue — afirmando René Foignet "entre les attributions générales que nous avons fait connaître, les consuls ont, dans les pays, hors chretienté, des attributions spéciales de police et de jurisdiction sur leurs nationaux" (315).

En 1927, el Marqués de Olivart, señalaba que "la jurisdicción consular y el régimen de capitulaciones en los países no cristianos queda de día en día reducido a más escasos y reducidos límites, quedando sólo en Persia, temporalmente en Siam, y con respecto a poquísimas Potencias, en las dos zonas de Marruecos" (316).

(313) DIEZ DE VELASCO VALLEJO: Op. cit. pág. 382.

(314) FOIGNET, René: "Manuel Elementaire de Droit International Public", Paris, 1895, pág. 188.

(315) FOIGNET, René: "Manuel Elementaire de Droit International Public", Paris, 1895, pág. 188-9.

(316) MARQUES DE OLIVART: El Derecho Internacional Público en los últimos 25 años (1903-1927). Tomo I, Madrid, 1927, pág. 377.

Yactong Tchen, sostiene que "les tentatives de suppression de la juris diction consulaire en Turquie doivent être recherchées dès la première moitié du dix-neuvième siècle. En 1839, le Sultan avait déjà entamé - des reformes judiciaires et modernisé sa législation, par le Hatti-Schêrif de Gulhané, en vue de préparer le terrain favorable pour ses - revendications judiciaires. En effect, cette charte garantissait aux étrangers infidèles les mêmes droits qu'aux sujets ottomans, promettait à tous les habitants de l'Empire une securité parfaite de quelque religion ou nationalité qu'ils fussent" (317).

Maluquer y Salvador inserta respecto a "la jurisdicción consular española en lo judicial respecto de los Consulados de Levante y costas de Berberia, el Decreto de 29 de septiembre de 1848" -publicado en la Gaceta de Madrid el 4 de octubre de 1848-. El art. 2 de dicho Decreto configura a nuestro Cónsul en aquellos territorios como un genuino index al preceptuar "cuando procedan como jueces de 1ª instancia, dictarán sus providencias definitivas, o que tengan fuerza de tales, con acuerdo de asesor, siendo posible: en otro caso, se acompañarán con dos adjuntos elegidos entre los súbditos españoles" (318). Resulta eviden-

(317) YAOTONG TCHEN: De la disparition de la jurisdiction consulaire dans certains pays d'Orient. Vol. I, Paris, 1932, pág. 97-98.

(318) MALUQUER Y SALVADOR; M.: "Derecho Consular español". Madrid, — 1899. pág. 832.

te tras la lectura de ese texto, que el Cónsul español en las Costas - de Levante y Berberia, tenía plenas atribuciones judiciales, deviniendo su figura un híbrido de Cónsul-Juez.

Las funciones judiciales de los Cónsules en Turquía, desaparecen - al mismo tiempo que el régimen de capitulaciones que las instauró, en virtud de la Conferencia de Lausana de 1922. Para Yaotong Thcen, "la - victoire inattendue des Turcs contre les Helléniques en 1922 exerça - une influence morale très considérable sur l'attitude des puissances - alliés, en ce qui concerne la renonciation définitive des capitulations et aboutit enfin à la fameuse conférence de Lausanne en date du 21 Novembre 1922" (319). La justificación que el delegado otomano dió en aquella conferencia, de la abolición de las capitulaciones por la - sola voluntad de su país, se apoyó en que "en effet, les capitulations sont essentiellement des actes unilatéraux. Pour qu'un acte puisse être considéré comme synalagmatique, il faut avant tout qu'il comporte des engagements réciproques" (320). Evidentemente los turcos no recibían el mismo trato en las naciones beneficiadas de las Capitulaciones, que los súbditos de éstas en el territorio otomano. Era en todo -

(319) YAOTON THCEN: Op. cit. pág. 114-5.

(320) Op. cit. pág. 117.

el sistema capitular turco una concesión graciosa de éstos.

1.8.- El Fuero de Extranjería no es un mero sucedáneo "sui generis español" del régimen de Capitulaciones.

1.9.- Introducción.

Un análisis somero del Fuero de Extranjería, así como de los regímenes de Capitulaciones, ofrece a primera vista ciertas concomitancias entre ambos sistemas, que podrían inducirnos a considerar subsumido al primero en los segundos. Sin embargo, un detenido estudio de aquellas instituciones, nos lleva a un diferente razonamiento y conclusión. En primer lugar, son más numerosas y contundentes las diferencias existentes en aquellas instituciones que su precaria y reducida analogía.

1.10.- Analogías y diferencias entre el Fuero de Extranjería y las Capitulaciones.

- a) Analogías: Si bien "a prima facie", tanto el Fuero, como las Capitulaciones, implican la vigencia de una vía excepcional de administración de justicia, apartada del cauce del juzgador común u ordinario, no es menos cierto que se pueden espigar matices y peculiaridades - propias en cada una de ellas, que les confieren un contenido netamente independiente.

b) Diferencias:

1º) Por razón del origen.- Las Capitulaciones tienen su origen - en "la Edad Media, y en sus comienzos, tuvo aplicación en los principados cristianos fundados por las Cruzadas" (321). El Fuero de Extranjería tiene su precedente inmediato en ciertos privilegios e inmunidades concedidas por "Carlos V y Felipe II a las ciudades hamseáticas" (322), y su origen data -según nuestra tesis- de 1607, en plena Edad Moderna, en virtud de los Capítulos de Felipe III de 28 de septiembre de 1607, otorgados para súbditos de aquella procedencia radicados en España.

2º) Por razón de la aplicación personal o territorial de las leyes.- En los países con Capitulaciones rige el principio de la personalidad de las leyes, esto es, cada extranjero queda sujeto a sus propias leyes nacionales; por el contrario en España el "extraneum" con derecho a Fuero está sometido a la ley territorial española, he bha abstracción de su legislación privativa.

3º) Por razón del órgano encargado de proteger al extraneum.-

En el sistema de Capitulaciones, el ente que ampara y protege al ex

(321) PELISSIER DU RAUSAS: Op. cit. pág. 5.

(322) A.: "El Fuero de Extranjería", (El Faro Nacional, Rev. de Jurisp. de Admón, de Tribunales y de Instrucción Pública), Año 3º, nº 212, (24 de julio de 1853), pág. 90.

tranjero en un representante diplomático, que actúa en ocasiones como juez (323), mientras que en el Fuero de Extranjería, el foráneo es tutelado y juzgado por un genuino iudex, cuyo manto protector — tiene como límite máximo la función de administrar justicia.

4º) Por razón de la nacionalidad del ente tutelar.— El órgano — encargado de la tutela de la extranjería en comunidades con trata— dos de capitulaciones, es un representante diplomático, un Cónsul, — que comparte la misma nacionalidad de los tutelados, o por mejor — decir, forma parte de la misma extranjería a la que tiene que pro— teger, Por ello mientras el Cónsul en capitulaciones, es otro "ex— traneum" más —aunque cualificado por su rango diplomático— el juez conservador en España no ostenta la misma nacionalidad que las per— sonas extranjeras a las que debe de juzgar.

5º) Por razón geográfica.— Las Capitulaciones fueron concedidas por países de Oriente Próximo, Asia y Africa prioritariamente en fa— vor de sociedades políticas europeas o americanas; por el contrario, en el Fuero de Extranjería, es una nación netamente europea, como — España, quien si bien confiere aquel privilegio con carácter primor

(323) Nota: Véase epígrafe siguiente: 1.6.

dial a países del mismo continente, por virtud de "la cláusula de nación más favorecida" inserta en algunos tratados, también benefició a países del cercano Oriente, como Turquía (1782), o africanos, como, Sibia (1784), y Túnez (1791). La diferencia pues, es clara, según la posición geográfica del país concedente.

Hechas dichas consideraciones, entendemos, que el Fuero de Extranjería, guarda un cierto paralelismo con los sistemas de Capitulaciones, no obstante como forma privilegiada de administración de justicia no es un mero sucedáneo o equivalente de aquél régimen, - con peculiaridades ajustadas a nuestro ordenamiento jurídico. Dada la coetaneidad durante varios siglos de ambos sistemas, no tiene nada de sorprendente, el que se descubran ciertas analogías y exista un cierto trasvase de contenido entre ambas instituciones, sin que ello comporte una absoluta identificación de las mismas. Existió — una evidente interrelación — a nuestro juicio — entre el Fuero de Extranjería y el sistema de Capitulaciones, pero no una simbiosis. La diferencia no se limitó sólo al nombre. El Fuero español generó características propias, reseñadas en el Título I y en el presente.

1.11.- El Juez Conservador: un pseudo Cónsul de Capitulaciones.

A prima facie, parece inferirse que el Juez Conservador de la ex-

trangería en España, como instrumento de aplicación del Fuero de igual nombre, entrañaba, conforme a lo analizado en el epígrafe anterior, una situación equivalente a la de un Cónsul en países con capitulaciones. Al glosar este epígrafe, partimos de la base de que las posibles analogías que puedan hallarse respecto del Juez Conservador -del Fuero - de Extranjería en España- y los Cónsules, habrán de referirse en todo caso, el supuesto del "Cónsul sui géneris" radicado en país con sistema de Capitulaciones, habida cuenta que dicho órgano tiene unos matices especiales y sobre todo unas atribuciones peculiares que lo separan notablemente de sus homónimos, acreditados en países cristianos o carentes de capitulaciones.

La similitud mayor que de ambas figuras, pueda aparecer ante los ojos del exégeta, se deriva de la realidad fáctica y jurídica, de que el Cónsul en países de Capitulaciones, ejerce funciones judiciales, - tanto en materia civil, como en la penal, hasta el extremo de que a — juicio de algún internacionalista, son "Jueces especiales que en el siglo XII, toman el nombre de Cónsules" (324). Ahora bien, a nuestro modo de ver, como quiera que dicho Cónsul-Juez, al lado de una actividad

(324) DIEZ DE VELASCO, M.: Op. cit. pág. 382.

jurisdiccional clara y reconocida, desempeña otras facultades no judiciales, de corte estrictamente diplomático y de representante de una sociedad política foránea, su calidad de iudex palidece ante aquellas otras facetas y resulta capitidisminuida. Será en todo caso un híbrido de juez y diplomático. Distinto nos parece el enfoque que ha de merecer la figura del Juez Conservador en España de los extranjeros. En nuestro país, el Juez Conservador en principio, es un iudex perteneciente a la jurisdicción ordinaria, al que nombre nuestro soberano. — Así en los Capítulos de Privilegios conferidos por Felipe III a los Hanseáticos el 28 de septiembre de 1607, en los que a nuestro juicio se otorga por vez primera el Fuero de Extranjería, se dice que los naturales de la Hansa, "no pueden ser presos, citados, condenados, ni juzgados... sino solamente por aquel especial Conservador y Juez que les daremos" (325). Dichas diferencias se acentúan, según nuestra óptica, a partir del siglo XVIII, en que "la jurisdicción civil y penal — de los Cónsules en Capitulaciones — desaparece en la mayor parte de los casos y por el contrario, sus funciones comerciales y en materia de navegación se amplían" (326), lo que excluye su condición de juez —

(325) ABREU Y BERTODANO, "Colección de los Tratados de Paz, Alianza, hechos por los Pueblos, Reyes y Príncipes de España...", Parte 1ª, Reinado del Sr. Rey D. Felipe III. Año MDCCXL. Apartado 18, pág. 378.

(326) DIEZ DE VELASCO, M.: Op. cit. pág. 382.

desde aquel siglo.

Por ello entendemos que los Cónsules en Capitulaciones son por — esencia Agentes diplomáticos, que a mayor abundamiento ejercitan funciones judiciales, cuando se impetra su jurisdicción, pero sin que aquella condición primera quede desnaturalizada. Los jueces privativos o protectores en España de los extranjeros en cambio, son iudex por encima de cualquier otra consideración, sin que tengan más facultades o atribuciones que las estrictamente judiciales.

Existen además otras diferencias entre dichos entes. El Cónsul en Capitulaciones, es ante todo un agente diplomático que actúa esporádicamente de Juez y puede incluso llegar a no ejercer como tal, si dentro de su competencia no surgen litigios entre sus connacionales. El Juez Conservador en España es un juez ordinario, que es designado para llevar asuntos civiles o criminales de la extranjería.

Por otra parte, mientras que el Cónsul -en Capitulaciones- es "designado por sus propios compatriotas con la misión de dirimir como árbitros las divergencias que entre ellos se produjeran" (327), el Juez Conservador es nombrado por el Rey "aquel especial Conservador y Juez

(327) PODESTA COSTA, L.A.: "Derecho Internacional Público", B. Aires, 1955, pág. 87.

que les daremos" (328) -texto dado por Felipe III en los Capítulos de Privilegios para la Hansa Teutónica el 28 de septiembre de 1607- "y - para que en todo tiempo esta merced os sea cierta y segura, hayáis de tener un juez conservador para la Andalucía" (329) -texto conferido - por Felipe IV a los ingleses en Real Cédula de 18 de marzo de 1645-.

De ahí que consideremos que los Cónsules en Capitulaciones, en -- cuanto se refiere estrictamente a su actividad judicial, actuaban como jueces protectores -o conservadores- de sus connacionales, y a la inversa, éstos últimos iudex en cuanto que administraban justicia a determinados extraneum se comportaban en cierto modo como un representante de dichos súbditos, o por mejor decir, devenían pseudo Cónsules --de Capitulaciones- de la extranjería a la que tutelaban. Esta conexión de dichas figuras -en lo relativo a la función judicial- justificaba una vez más, que las instituciones del campo jurídico, internacional no actúan como líquidos en tubos de ensayo, sino en vasos comunicantes, esto es, que se da su interacción y se produce el intercambio conceptual y estructural de las mismas. No hay en definitiva, compartimientos estancos entre las instituciones supranacionales.

(328) ABREU Y BERTODANO: Op. cit. pág. 378.

(329) CANTILLO, A.: "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y Comercio", Madrid, 1843, pág. 139.

Que el Cónsul extranjero en España tenía competencia en materia - de extranjería, aparte de la de los Gobernadores Militares y Capitanes Generales -sucesores del Juez Conservador- se infiere de lo dispuesto en la Orden de 2 de Abril de 1768, por la que, se reconoce a favor del Consulado el conocimiento de una causa de un extranjero.

Orden de 2 de Abril de 68 declarando á favor del consulado el conocimiento de una causa de un extranjero.

"Enterado el Rey de la competencia suscitada entre V.E. y el consulado de esa ciudad con motivo de haber querido V.E. atraer á su juzgado, por el recurso que hizo D. Diego Roberto, el conocimiento de la demanda que se le puso ante el consulado á Tomas Venzon, ingles, para que que devolviese las cantidades que habia percibido de varios sugetos - con quienes ajustó conducirlos á Cádiz en su balandra nombrada la Gracia, y no tuvo efecto por haber naufragado en ese puerto; ha resuelto S.M. que sin embargo de la providencia que dió el Consejo de Guerra - declarando á favor de la jurisdicción de V.E. el conocimiento de dicha causa, pertenece al consulado, por tratarse en ella de asunto privado y peculiar de su instituto con arreglo á sus ordenanzas; y que lo prevenido en estas debe observarse en todos los casos que ocurran en

adelante en cuanto al ejercicio de la jurisdicción del consulado. Lo que participo á V.E. de Orden de S.M. para su inteligencia y cumplimiento. Madrid 2 de Abril de 1768.- Juan Gregorio Munisin.- Señor Conde de Flegnies, comandante general de Guipúzcoa" (330).

(330) COLON DE LARRIATEGUI, F.: "Juzgados Militares de España y sus Indias". Madrid 1817. Tomo II, pág. 157.

CAPITULO II

ORGANOS INSTRUMENTALES DEL FUERO DE EXTRANJERIA

SECCION 1ª.- Jurisdicción Civil del Fuero de Extranjería.

1. Organo competente en 1ª instancia: El Juez Conservador.

Introducción.- A tenor del estudio de nuestro ordenamiento jurídico, podemos acotar dos periodos históricos, según el órgano encargado de administrar justicia al extraneum con derecho al Fuero de Extranjería. De una parte - y como apuntamos anteriormente al hablar de la génesis del Fuero de Extranjería- tenemos una primera fase civil, servida por jueces conservadores procedentes de la jurisdicción ordinaria a los que se encomiendan atiendan aquella vía - excepcional para extranjeros. De otro lado, surge un segundo ciclo militar en el que citado Fuero es impartido, bien por los gobernadores de las plazas marítimas, bien por los Capitanes Generales, según los casos; con apelación siempre al Tribunal Supremo de Guerra, Marina y Extranjería.

Comencemos por analizar la primera fase.

1.1. El Juez Conservador como iudex privativo.

Concepto.- La institución jurídica del juez conservador tan peculiar en España, no debe ser catalogada como una figura firme y estable dentro del con

texto de nuestro sistema judicial, sino como un ante transitorio, alumbra do con carácter de privilegio por nuestros Reyes, a fin de atender una ca suística concreta.

El sistema de "conservadores no fué una institución general, en cu yo caso hubiera tenido reglas fijas y uniformes; sino una práctica, aunque bastante frecuente, casuística y de privilegio; y en cada Real carta, o con cesión, habían de buscarse la autoridad, el fin y las atribuciones" (331) apurando aún más el perfil del citado iudex. "Unas veces las funciones de los conservadores eran de inspección y protección, aunque restricta, co rreccional, limitada a evitar, castigar y reprimir las injurias y ofensas manifiestas o notorias, y entonces dichos funcionarios se denominaban con servadores". (332).

Como puede apreciarse, Arrazola, Gómez de la Serna y Manresa y Nava rro, insertan la figura del juez conservador, dentro del campo jurisdiccio nal, no les basta para configurarlo de aquel modo, el que el juez desempe ñe únicamente funciones de inspección y protección inmersas en la parcela admi nistrativa. El iudex conservador nace para juzgar, por encima de cual quier consideración. En un primer plano, juzga, corrige y sanciona, de for MA secundaria, protege y tutela.

(331) LORENZO ARRAZOLA, PEDRO GOMEZ DE LA SERNA y J.M. MANRESA Y NAVARRO. "Enc iclopedia española de Derecho y administración". Tomo XII, pág. 664.

(332) Ibid, op. cit. pág. 664.

Los mismos autores distinguían entre jueces conservadores y jueces privativos, de esta manera: "El uso autorizó que se llamasen jueces conservadores y jueces protectores, algunos jueces privativos; pero con impropiedad, pues tenían la plena jurisdicción civil y criminal que un verdadero tribunal o juez de primera instancia; tales eran los jueces protectores de extranjeros, esto es, los capitanes generales con su auditor, y entre otros, el juez protector del Canal de Castilla, que en tal concepto y con tal amplitud ejercía una y otra jurisdicción en más de 400 pueblos". (333)

No encontramos tal inexactitud en la equiparación de dichas expresiones de jueces conservadores y jueces privativos. Un juez de extranjeros en España, era según nuestra óptica, conservador, en tanto en cuanto ejerce jurisdicción castigando infracciones de leyes, con una característica correccional en su actividad sancionadora; es asimismo juez privativo, toda vez que su campo de actuación viene delimitado o circunscrito, por una determinada parcela de extranjeros, peculiar y propio de unos, extraño para otros.

1.2. Antecedentes históricos del juez conservador.

Como atisbos históricos de este iudex, fuera de España, encontramos en la antigüedad romana, la de los "Recuperatores" y la del "Pretor peregrinus". Los recuperatores "eran verdaderos jueces internacionales, encar

(333) ARRAZOLA L. y otros. op. cit. pág. 664.

gados de juzgar las cuestiones suscitadas entre ciudadanos romanos y extranjeros de aquellos países que habían celebrado Tratados con Roma, en los cuales se estipulaba dicha protección o bien para resolver las cuestiones surgidas entre extranjeros únicamente" (334). Por lo que atañe al Pretor Peregrinus "eran los encargados de resolver las cuestiones entre ciudadanos romanos y extranjeros o bien entre éstos últimos recíprocamente; vino a satisfacer una necesidad suscitada más intensamente a medida que se extendían y multiplicaban las relaciones del Estado romano con los demás pueblos". (33))

Podemos espigar otros precedentes dentro del tráfico mercantil floreciente de las ciudades Hanseáticas; dice un autor que en éstas "se hicieron conceder la exención de la jurisdicción local, estableciendo magistrados especiales, que llevaron el nombre de Oldermann, ya que no son otros - que los que llamamos con el término de Cónsules" (335)

Encontramos distintas figuras históricas de iudez en España en las que se pueden hallar ciertos atisbos de semejanza con el juez conservador. Ya en la época visigoda se vislumbran precedentes. Así nos recuerda un historiador "según la opinión dominante, en los primeros tiempos del establecimiento de los visigodos en las Galias y en España, godos y romanos, ha—

(334) ALLUE SALVADOR, M. "La condición jurídica de los Cónsules". Ensayo histórico-crítico, Zaragoza 1909, pág. 24.

(335) op. cit. pág. 25.

(336) HERNANDEZ-BRETON, A. "Atribuciones y prerrogativas de los Cónsules". Venezuela 1951, pág. 20.

brian estado bajo la jurisdicción de sus propios órganos jurisdiccionales, distinción que desaparecería según unos en el siglo VI (Zeumer, Torres), y según otros, a mediados del siglo VII (Bethmann-Hollweg, Pérez Pujol, Von Halban)". (337). A fin de delimitar dicha manifestación Luis G. deValdeavellano, agrega "así, en la España visigoda, los hispano-romanos habrían seguido en un principio bajo la jurisdicción de los rectores provincias o de los comités civitatum que fueron sustituyendo, a aquellos, y en cuanto a los godos, sus jueces ordinarios serían en los primeros tiempos, los jefes de los grupos de población comprensivos de una unidad militar, en la que se incluían no sólo a los guerreros, sino sus familias". (338). La principal dificultad para encajar certeramente dichos precedentes en la figura del juez conservador de la Edad Moderna, se encuentra en la circunstancia de que aquellos iudex de los hispano-romanos y de los godos, eran por encima de cualquier otra consideración, jueces ordinarios y no excepcionales como aquel.

Todavía pueden espigarse otros atisbos de entes precursores del juez conservador. Se puede situar también, como precedente remoto del juez conservador en España, la de principios del siglo XII. En aquella época convivían

(337) VALDEAVELLANO, LUIS G. de, "Curso de Historia de las Instituciones Españolas, desde los orígenes del final de la Edad Media". Rev. de Occidente, pág. 210.

(338) op. cit. pág. 210.

en ciertas ciudades españolas, francos y españoles, lo que justificó que ciertos fueros municipales concedieran a los distintos habitantes, jueces propios, elegidos por ellos, para juzgar a sus respectivos nacionales. En este sentido, se manifiesta Moisés García Rives: "La facultad de que los franceses o extranjeros tuviesen su juez independiente y por separado del de los castellanos, probablemente obedecía el deseo de evitar entre los habitantes de distintas nacionalidades de origen todo asomo de sospecha de parcialidad, si un juez castellano había de juzgar a los franceses o un juez francés a los castellanos" (339).

Es más, para evitar situaciones de intensidad en la Administración de Justicia, añade el mismo autor "todavía en el Fuero de Sahagún fué más duradera la concesión, porque en tiempo de Alfonso VI había dos merinos, - uno franco y otro castellano; en el fuero de la misma población de 1152, dado por Alfonso VII, se establece también dos merinos: *Maiores Sancti Facundisint duo, unus Castellanus et alter Francus*"...., que tenían que ser vasallos del Abad, vecinos y con casa en Sahagún, "... et intrent per manum abogatis et auctoritate Concilii", teniendo atribuciones, tanto en materia civil como en la criminal, y la dualidad subsiste hasta el Rey Sabio, que en su fuero de 1255 decía: "Mendamos que en S. Fagund aia un merino non mas

(339) GARCIA RIVES, M. "Condición jurídica de los extranjeros en Castilla y León desde el fuero de León (1020) al Código de las Partidas". Tesis doctoral. Madrid 1920. Pág.40.

et este merino prenda, et recabde, et faga oficio de merino, et faga iusticia segund que juzgaren los alcaldes de S. Fagund" (340).

No hay duda que tal dualidad en la impartición de justicia, tenía sus ventajas; la más trascendente quizás, sería la garantía de imparcialidad o de justicia humanitaria - según la óptica con que se contemple - que el nombramiento del juez por los judíos juzgados representaba ante sus ojos. Esta posibilidad de designación de jueces por los correspondientes nacionales debería ser tan normal, como corriente era en aquel siglo hallar extranjeros - de distintas procedencias - en múltiples villas de nuestro suelo,

Por otra parte, se ha advertido "que las funciones de jueces, alcaldes y merinos se confunden muchas veces, hasta el punto de ser idénticas" (341), y en esa línea "también tuvieron su juez los francos de Toledo, y - alguna otra población, como Illescas, donde, por ser gascones todos sus pobladores, se les reconoció, como era natural, el derecho de nombrar de entre ellos jueces y alcaldes; pero en ningún fuero aparece dispuesto - y si así hubiera sido, se habría dicho - que tales jueces hubieran de juzgar - atendiéndose a otros preceptos que los contenidos en los mismos fueros comunes a españoles y extranjeros, Así, pues, los preceptos eran los mismos;

(340) Ibid. op. cit. pág. 40.

(341) Ibid. op. cit. pág. 41.

el juez los aplicaba, distinto" (342)

El apoyo jurídico para fundamentar aquella consideración, la encontramos en el Fuero de Sahagún de 1152 dado por Alfonso VII, en el que se establecen con un carácter permanente dos jueces en la villa, uno para entender en las litis-civiles y criminales - de los castellanos y otro para los Francos. En este juez último de Francos, se dan las características - de un típico juez conservador en España, a saber:

- 1) Es un juez de extranjeros.
- 2) Es ante con jurisdicción civil y criminal.
- 3) Es un juez privativo de ciertos nacionales.

Ni en el Fuero de Logroño de 1095, ni en el de Belorado de 1116 - dado por Alfonso I el Batallador, ámbos dirigidos también para pobladores francos y castellanos - encontramos una regulación tan coherente y ordenada respecto a ese juez del pueblo franco, como en el de Sahagún ya aludido, que constituye a nuestro entender el primer fuero que recoge de un modo claro y terminante la institución ex mero del juez conservador en nuestra patria. Otro precedente surge a nuestro modo de ver, en la siguiente afirmación de otro historiador: "En la Edad Media las comunidades mora y judía tienen jueces propios, que aplican su derecho. Desde fines del siglo XIV en las peticiones de Cortes y en el derecho regio se advierte una ten-

(342) Ibid. op. cit. pág.

dencia contraria a la existencia de estos jueces. En 1419, una ley castellana los suprime y encomienda a los jueces cristianos que en las causas de aquellas respeten sus respectivas costumbres" (343).

- 1.3. Funciones.- "En cuanto jurisdicción especial, la de extranjería estuvo - en principio en manos de los ya citados jueces conservadores, que se nombraban de acuerdo con la Ley V del Tit. XI del Libro VI de la Novísima Recopilación (res. 7 de junio de 1727) correspondiendo el conocimiento de - las apelaciones contras las decisiones de aquellos al Consejo de Guerra de Justicia. Desaparecida la figura del juez conservador, una Real Orden de 26 de agosto de 1758 encargó del conocimiento de las causas de extranjeros a los Gobernadores militares, entendiéndose esto en defecto de la existencía en el territorio de Capitanía General ejercer tal jurisdicción (Reales Ordenes de 21 de Mayo de 1760, 1 de diciembre de 1761 y 15 de septiembre de 1775)(344).

La citada Orden de 26 de Agosto de 1758, concediendo a los gobernadores militares el conocimiento de las causas de extranjeros transeúntes determinaba: "El Rey ha resuelto, a consulta del Consejo de Guerra, que en

(343) GIBERT, RAFAEL. "La condición de los españoles en el antiguo derecho español". L'etranger. (Recueils de la Societé Jean Bodin) Bruxelles, 1958, pág. 194.

(344) PECOURT GARCIA, E. "Una institución singular en la Historia del Derecho internacional Privado Español: El Fuero de Extranjería" (Estudios de Derecho Internacional Público y Privado. Homenaje al Profesor L. Sala Sampil). Univers. de Oviedo. Vol.II, 1970, pág.889-0.

todas las causas que se suscitasen en el juzgado de V.E. en que intervengan como interesados extranjeros transeúntes en estos reinos, se entiende su conocimiento en calidad de jueces militares, correspondiendo su decisión en segunda instancia al expresado Consejo de Guerra, aunque las mencionadas causas sean formadas por de olicito comercio ó contrabando a la plaza de Gibraltar u otras partes de estos dominios, conforme a lo capitulado en los tratados de paces, especialmente en la de Utrech, Lo que participo a V.E. de orden de S.M. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde &c. S. Ildefonso 25 de agosto de 1758, D. Sebastián de Eslava. Al Capitán General de Andalucía D. Juan de Villalba" (345). Como puede inferirse de la lectura de la Orden de 26 de agosto de 1758, transcrita, al adjudicar a los jueces militares competencia en todas las causas en que estuviesen involucrados los extranjeros transeúntes, implicaba la abolición de la jurisdicción de los iudex conservadores, o en otras palabras, al travase de la jurisdicción civil a la castrense, en materia del fuero de Extranjería.

De otra parte, la jurisdicción de los jueces conservadores de extranjeros aparece clarísima en la cédula que Felipe V dicta en el año 1716:

"Por cuanto los Cónsules y hombres de negocios de tal nación, me han representado, que siempre en aquella ciudad ha tenido su nación Juez conservador, hasta que se declaró la última guerra y respecto de ne

(345) COLON DE LARREATEGUI, F. "La citada orden de 25 de agosto de 1758. Madrid, 1817, Tomo II, pág. 156.

cesitar los ingleses, Franceses u Holandeses de Juez conservador, para que en sus negocios y dependencias tengan a quién recurrir, en conformidad del tratado de paces celebrado en Utrech; suplicándome, que en esta consideración tenga por bien de nombrarles Juez Conservador, y que lo sea uno de los Alcaldes u Oidores (de tal parte); y habiendo condescendido en esta instancia: por tanto, atendiendo a las partes buenas de integridad e inteligencia que concurren en vos F. Alcalde u Oidor de la Chancillería o Audiencia (de tal parte), en virtud de la presente os elijo y nombro por Juez conservador de la Nación (de tal parte) en la referida ciudad (de tal), y se ordene y mando, que veáis los tratados de paces ajustados entre esta Corona y aquellos estados, y hagáis guardar y cumplir lo estipulado en ellos, bien entendido, que unicamente habéis de conocer y conozcais de los litigios que hubiere y resultaren entre sujetos de la propia Nación (de tal parte), siendo comerciantes transeúntes, que habitan, vienen y van a estos Reynos a comerciar por mayor, y no de los avecindados y arraigados en España; aunque el privilegio que concede a aquellos no ha de trascender a estos por ningún motivo, causa o razón que se ofrezcan, respecto de las dependencias y litigios de los que están avecindados y arraigados en mis dominios tienen otra naturaleza, y - deben seguir precisamente las mismas reglas que mis vasallos y súbdi

tos sin diferencia alguna..." (346)

Un Real Decreto de 7 de julio de 1727, obliga al Consejo de Guerra al conocimiento de esta Real Cédula.

La jurisdicción, pues, de los Jueces conservadores de extranjeros no suponía un régimen de capitulaciones, pero sí como ha señalado BONFILS un parecido con el "praetor peregrinus" encargado en Roma de aplicar a las relaciones de la contratación extrarrromanas o mixtas el "ius gentium".

La normativa reguladora del fuero de extranjería fué en su primera época muy confusa y controvertida. Parece claro que su alcance era meramente pasivo, si bien por lo que se refiere a su aplicación *ratione personae* no llegó a fijarse una normatividad clara y coherente. De modo particular se reiteraron disposiciones para precisar el concepto de extranjero transeúnte frente al de extranjero avecindado, ya que sólo a la categoría de transeúnte se reconocía el privilegio del fuero. Por una corruptela, el fuero de extranjería comenzó aplicándose en Ultramar, hasta que fue totalmente prohibido para dichos territorios por la Real Orden de 12 de Octubre de 1844, reiterada en 2 de julio de 1847". (347)

(346) TOMAS ORTIZ DE LA TORRE, J.A. "El régimen jurídico de Extranjería en la España del siglo XVIII y la participación del extranjero en la industria nacional" (tesis doctoral). Fac. de Derecho, Madrid, 1972. Pág. 54-5.

(347) PECOURT GARCIA, E. op. cit. 890 y 891.

Que los extranjeros gozaron de un juez conservador en España, es al go que está totalmente de acuerdo en nuestra doctrina, sin embargo, ciertos autores no matizaron a la hora de distinguir distintas ciudadanías de extran jeros para tener acceso a dicho iudex. Los extranjeros transeúntes "tienen juez conservador que conoce en primera instancia con las apelaciones al - Consejo Supremo de Guerra, y que en caso de no tener dicho juez nombrado por S. M. pertenecen estas personas a la jurisdicción del capitán o coman— dante general de la provincia, en que se halle el extranjero con apelación al mismo Consejo" (348).

En todo caso, "los jueces que ejercen la jurisdicción de extranje— ría, en su origen fueron los jueces conservadores, pero habiendo caducado la institución del juez conservador, pasó al ejercicio de esta jurisdicción a los gobernadores militares de las plazas marítimas en virtud del real dec reto de 21 de diciembre de 1759, y de las reales órdenes de 21 de mayo de 1760, de 1º de diciembre de 1772, 15 de septiembre de 1775 y 15 de mayo de 1781. Pero aunque estas reales disposiciones solo se hace mención de los go— bernadores de Cádiz y aún del Ferrol, por la doctrina contenida en ellas y sancionada por la práctica casi general y constante, ha venido a estable— cerse que los juzgados de primera instancia en esta jurisdicción están a - cargo de los gobernadores militares de las plazas marítimas con los aseso—

(348) LAZARO DE DOU Y BASSOLE, RAMON. "Instituciones de Derecho Público ge— neral de España". Tomo II, Madrid, 1800.

res del gobierno militar, cuando en las plazas no residan los capitanes generales, exceptuando la de Cádiz, a cuyo gobernador corresponde particular y privativamente en todo caso, según la citada real orden del año de 1781 y en los demás puntos fuera de aquella plaza a los capitanes generales". (349).

Con idéntico criterio se pronuncia otros comentaristas. (350). Con anterioridad a la publicación del Real Decreto de 17 de noviembre de 1852, conocían en primera instancia de los negocios judiciales contra los extranjeros, a quienes correspondía el fuero de extranjería, los jueces conservadores, nombrados al efecto con arreglo a lo prevenido por la Ley 5ª tit. 11 lib. 6ª de la Novísima Recopilación; a falta de ellos, los Capitanes Generales, y fuera de los parajes de la residencia de éstos y sin su dependencia, los Gobernadores militares, con apelación de todos ellos el Supremo - Consejo de la Guerra (hoy ATribunal Supremo de la Guerra y Marina): Reales órdenes de 26 de agosto de 1758, 1ª de diciembre de 1761, 15 de septiembre de 1775, y 19 de diciembre de 1778, y art. 7ª del Real Decreto de 31 de julio de 1835.

También Arjona Colomo, considera al juez conservador, como auténti-

(349) RIQUELME, A. "Elementos de Derecho Público Internacional", Tomo I, Madrid, 1849, pág. 388-9.

(350) Nota. Véase J.L.F. "El Fuero de extranjería" Rev. Gen. y Jurisp. Año XI, Tomo XXIII, pág. 32.

ca jurisdicción singularizada del extranjero en España, "la benevolencia tradicional en España respecto al estado civil de los extranjeros, se convirtió en el siglo XVII en verdadera parcialidad, colocándolos en una situación privilegiada. Tal era, desde el punto de vista de la jurisdicción el haberse establecido, primero, en el Derecho privado interior y para beneficio de los ingleses (1645), y después, en el internacional, por obra de los Tratados, una especial, llamada Jueces conservadores de los extranjeros, verdadero fuero privilegiado de extranjería, que los arrancaba, - cuando eran demandados, a la competencia común en la mayor parte de los - asuntos civiles" (351)

Por lo que atañe a la desaparición de la figura del juez conservador, algún autor anónimo, llega a idéntica respuesta que Antonio Riquelme. "En cuanto a la manera como se ejerce hoy la jurisdicción de extranjería, y a los tribunales y juzgados establecidos para conocer de los negocios de esta rama, nos bastará decir que, suprimidos los jueces conservadores al poco tiempo de su institución, puesto que, por decreto de 12 de diciembre de 1761 pasó su jurisdicción en Andalucía al gobernador de la plaza de Cádiz, y confirmando este precepto así respecto del gobernador de Cádiz como del Fernol, por las reales disposiciones de 15 de diciembre de 1775 y 15 de marzo de 1781, se ha venido ejerciendo en primera instancia por los

(351) ARJONA COLOMO, M. "Derecho internacional Privado", Parte especial. Madrid, 1949, pág. 405.

gobernadores de las plazas marítimas con los asesores del gobierno militar y los capitanes generales de los demás puntos, merced a la analogía que — guarda este fuero con el militar, siendo su superior en otros tiempos el Consejo Supremo de la Guerra, y hoy el Tribunal Supremo de Guerra y Marina que le reemplazó, conforme a lo que se convino en el art. 15 del Tratado — de Utrech y en otros, y a los dispuesto en los reales Decretos de 7 de abril de 1834, y 31 de julio de 1.835". (352), a la dependencia de los Tribunales inferiores respecto de los superiores, el orden y los trámites de sustanciación de los cauces, y las circunstancias que han de concurrir para que las sentencias adquieran el carácter de ejecutorias, se observan — las prescripciones del derecho común.

En todo caso, la figura de dicho juez protector, se nos presenta — a juicio de algunos autores — con estas características: "En un principio el respeto y el prodigio lucían más que la autoridad; y las conservadurías eran algo más que un nombre; después fueron decreciendo en autoridad y atribuciones. Tal era su estado al final del siglo anterior después, como era consiguiente, sistematizado en forma de régimen judicial, establecidos los juzgados de primera instancia, cesaron en un todo los jueces conservadores"

(353)

(352) A. "El Fuero de Extranjería" (Faro Nacional, añ 3º, nº 213, 28 de julio de 1.853, Revista de Jurisprudencia, de Administración de Tribunales y de Instrucción Pública, pág. 99.

(353) LORENZO ARRAZOLA, GOMEZ DE LA SERNA y MANRESA Y NAVARRO) Op. cit.pág. 665.

Ordene la Ley V, libro VI, título XI de la Novísima Recopilación - (dictada por Felipe V el 7 de julio de 1727). "Por cuanto los Cónsules y hombres de negocios (de tal nación) me han representado, que siempre en aquella ciudad he tenido su Nación Juez conservador, hasta que se declaró la última guerra; y respecto de necesitar los INgleses, Franceses y Holandeses de Juez Conservador, para que en sus negocios y dependencias tengan a quién recurrir en conformidad del tratado de paces celebrado en Utrech; suplicándome, que en esta consideración tenga por bien de nombrarles Juez conservador, y que lo sea uno de los alcaldes y Oidores (de tal parte); y habiendo condescendido en esta instancia: por tanto, atendiendo a las buenas partes de integridad e inteligencia, que concurren en voz F. Alcalde y Oidor de la Chancillería o Audiencia (de tal parte) en la referida ciudad (de tal), y es ordeno y mando, que veáis los tratados de paces ajustados entre esta Corona y aquellos estados, y hagáis guardar y cumplir lo es tipulado en ellos: bien entendido, que unicamente habéis de conocer y conozcáis de los litigios que hubiere y resultaron entre sujetos de la propia Nación (de tal parte), siendo comerciantes transeúntes, que habitan, van y vienen a estos Reynos a comerciar por mayor, y no de los avecindados y arragaydores en España; porque el privilegio que concede a aquellos no ha de trascender estos por ningún motivo, causa o razón que se ofrezcan, respecto de que las dependencias y litigios de los que están avecindados y arraygados en mis dominios tienen otra naturaleza, y deben seguir precisa-

mente las mismas reglas que mis vasallos y súbditos sin diferencia alguna"

(354)

Se deducen de dicho texto, las siguientes conclusiones, respecto -
del juez conservador:

- 1º - El juez conservador tiene un auténtico monopolio en su facultad de juzgar a los extranjeros con derecho a Fuero de Extranjería.
- 2º - Su competencia se proyecta únicamente a los extranjeros transeúntes, con acceso a su jurisdicción. Quedan excluidos de su campo de actuación los extranjeros avecindados.
- 3º - Obligación de estudiar los tratados de Paz ajustados entre España y el beneficiario del Fuero de Extranjería - a cuyos nacionales - extiende su jurisdicción el juez conservador- así como la de guardar y hacer cumplir lo estipulado en aquéllos.

En dicha Ley de Felipe V se agrega más adelante: "porque mi ánimo es, hayáis de conocer en todos los litigios, quando sean entre los mismos comerciantes (de tal parte) actores y reos; y así mismo en lo que fueren reos convenidos por otro cualquiera: y es doy y concedo plena facultad y comisión, con inhábición de los de mi Consejo, Audiencias, Chancillerías,

(354) Los Códigos Españoles, concordados y anotados. Tomo 8º. Novísima Recopilación de las Leyes de España (Libros V, VI, y VII) Madrid, 1850. La Publicidad p. 257.

Corregidores, Alcaldes mayores y demás justicias de cualquier calidad que sean, sin que puedan intrometerse en el uso y ejercicio de esta comisión en la primera instancia, ni por vía de exceso, recurso, apelación ni en otra forma alguna, porque a todos los inhiho y he por inhibidos del conocimiento de tales causas, y los declaro por Jueces incompetentes, sin que pro ningún caso se pueda formar competencia en manera alguna contra el uso y el ejercicio de esta comisión; y que vos solamente conozcais de todas las causas que se hubieran movido y movieren entre los comerciantes transeúntes que residieren en la expresada ciudad(de tal), procediendo vos en ella en primera instancia conforme a derecho; y que las apelaciones que se interpusieren, las otorguéis para mi Consejo de Guerra de Justicia, donde se han deseguir y determinar en definitiva, excepto los que tocaren a mis rentas y derechos Reales, por tener estas sus Tribunales destinados" (355)

Del citado inciso, infiérense esta exégesis. De un lado el juez conservador juzga a los extranjeros transeúntes, tanto si son actores y demandados, cuando la litis se circunscribe a aquellos. Por otra parte, también proyecta su auctoritas sobre el extraneum transeúnte, cuando éste es reo exclusivamente, en este caso es demandado por un regnicola. A mayor abundamiento cabe decir que la competencia de aquel iudex queda acotada dentro

(355) Ley V, Libro VI, título XI de la Novísima Recopilación, "Los Códigos Españoles concordados y anotados". Madrid, 1850. La Publicidad, pág. 257.

de la primera instancia, toda vez que la 2ª o apelación, debe dirigirse - inexcusablemente al Consejo de Guerra de Justicia. Dicho órgano judicial representa por ende el primer escalón de la administración de justicia española vertido a través del Fuero de Extranjería.

Puede quizás delimitarse en el siglo XVII y principios del siglo - XVIII, la época de esplendor del juez conservador; en el 2º tercio de éste último siglo comienza a palidecer la figura, para desaparecer como consecuencia del Real Decreto de 21 de diciembre de 1759 y la Real Orden de 26 de Agosto de 1768, que introduce en su lugar a los Gobernadores militares de las plazas marítimas. Rafael Gibert, sustenta un criterio diferente en cuanto a la fecha de aquel traspaso de competencia, al afirmar, que "en 1835, se suprimen los Conservadores: la primera instancia pasó a los Gobernadores militares" (356).

El tránsito de la jurisdicción del juez conservador - fase civil - a la de los gobernadores militares y capitales generales - fase militar - no fué nítida, toda vez que hubo casos en que se mantuvo la competencia - del iudex privativo en detrimento de los órganos castrenses citados y viceversa. Se ha recordado en aquel sentido, que "Los extranjeros transeúntes gozan también al fuero de guerra, a no ser la nación de que sea el ex

(356) GIBERT, RAFAEL. "La Condición de los extranjeros en el antiguo derecho español". Recueils de la Société Jean Bodin. Vol. X. Bruxelles, 1958, pág. 195.

tranjero tenga nombrado por el Rey Juez conservador, en cuyo caso este co
nocerá de sus causas. Quisose suscitar recientemente competencia entre los
Tribunales militares, y los Jefes Políticos, pero por Real Orden de 12 de
abril de 1838 se previno de nuevo, que gozaban el fuero de guerra, y depend
dían de la jurisdicción militar". (357).

(357) AVECILLA, PABLO. "Legislación Militar de España". Tomo I. Madrid,
pág. 8.

Sección 2ª - Jurisdicción militar del Fuero de Extranjería,

1. Introducción.- La circunstancia histórica de que desde la 2ª mitad del siglo XVIII, el Fuero de Extranjería fuese atendido por órganos militares, no debe constreñirnos por aplicación de una exégesis literal simplista, a catalogar el citado Fuero como un Fuero militar, y ello es así, porque el primero nace "de los tratados y éste último de las ordenanzas. El Fuero militar, en su más lata expresión, es la suma de privilegios y consideraciones sociales que la ley ha querido conceder a una clase distinguida de la sociedad, y de los que despoja a los individuos que por sus actos dejan de merecerlos. Pero esta razón no es aplicable a los extranjeros, porque sus fueros emanan de concesiones especiales que no tienen la limitación del desafuero, y por tanto se deben cumplir mientras no sean incompatibles con la situación interior del Estado" (358). Es más, si se aceptase el criterio de la confusión o subsunción del Fuero de Extranjería, como Fuero castrense, "los extranjeros disfrutarían de todas las exenciones y privilegios concedidos a los militares, y no estaría aquel, reducido como está, a que el extranjero en vez de ser juzgado por los tribunales ordinarios, lo sea por los militares, en representación del juez conservador" (359)

(358) RIQUELME, A. "Elementos de Derecho Público Internacional". Tomo I. Madrid, 1849, pág. 386.

(359) Ibid. op. cit. pág. 386.

Ahora bien, dentro del cuadro orgánico de la Justicia Militar anterior a la revolución de 1868, se suele incardinar el Fuero de Extranjería. No obstante, algún autor distingue dos tipos de Fuero Militar, "El Fuero - Militar común o general, con sus dos ramas, la militar propiamente dicha, y la criminal, y el Fuero Militar privilegiado, especial o privativo," en el que se integra el de los Alabarderos, el de Artillería e Ingenieros, el Vicariato castrense y el de Extranjería" (360).

Según la Ley 1ª, título IV, Partida 3ª, Juez "es la persona que tiene autoridad o jurisdicción, recibida del Estado para administrar justicia. Por consiguiente, Jueces Militares son los encargados de conocer de los - cauces criminales y expedientes de esta jurisdicción, ya instruyéndolos, - ya fallándolos con arreglo a las leyes" (361). En esta fase de implantación de jueces y Tribunales castrenses como sucedáneos del juez conservador correspondiente a la jurisdicción civil - nos toca examinar la composición y funciones de los Gobernadores Militares, Capitanes Generales y el Tribunal Supremo de Guerra, Marina y Extranjería.

Atendiendo a la mayor o menor estabilidad en el ejercicio de las - funciones judiciales por parte de los órganos castrenses, pueden dividirse

(360) ALMIRANTE, JOSE. "Diccionario Militar, etimológico, histórico y tecnológico. Madrid, 1869, pág. 738.

(361) GRACIA Y HERNANDEZ, JCAQUIN. "Justicia Militar, nociones teórico-prácticas de toda clase de procedimientos judiciales", Tomo I, Madrid, 1898, pág. 29.

éstos, en "permanentes y accidentales". Son jueces militares permanentes, - los que tienen jurisdicción fija y constante, y la ejercen por razón de las funciones de su cargo, durante el tiempo que lo desempeñan. De esta clase son los Consejeros del Consejo Supremo de Guerra y Marina, los Capitanes - Generales del Distrito (hoy Región) y en campaña, el General en Jefe del - Ejército, con la plenitud de sus funciones o atribuciones judiciales, ayudados por su Auditor de Guerra respectivo, que les ilustra en los puntos - de Derecho" (362). Por el contrario, sin gozar de esa permanencia, existen los jueces militares occidentales que "son los que nombra la autoridad militar, para ejercer la jurisdicción, limitada sólo al asunto para que son llamados, cesando en ella, en el momento que los han terminado". (363)

2. Organos competentes en 1ª instancia:

A) Los Gobernadores Militares.

2.1. Concepto.- Hase definido la figura de gobernador militar como "el encargado del mando y gobierno de una plaza o fuerte, Los gobernadores obtienen sus plazas por nombramiento real, pero antes de entrar en posesión deben jurar en manos del capitán general defender la plaza hasta el último momento y no entregarla a ningún enemigo del rey, de cuyo juramento debe dar fé el escribano sin exigir por ello derecho alguno a tenor de la orden del regente de 17 de agosto de 1841, En caso de ausencia o vacante son sustitui

(362) Ibid, op. cit. pág. 28-30.

(363) Ibid, op. cit. pág. 30.

dos por los sergentos mayores de plaza según la declarado en orden de 23 de marzo de 1843, expedida al efecto de aclarar diversas dudas ocurridas sobre el particular. Habiéndose suscitado nuevamente otras en 1846 se de cidió en los propios términos por real orden de 22 de octubre de aquel - alo aclarada en 8 de diciembre del mismo. En Filipinas debe observarse - para la sucesión de mando de los gobernadores el reglamento hecho en 30 diciembre en Manila aprobado por real orden de 28 de agosto de 1847 cir- culada por gracia y justicia en 6 de septiembre" (364).

2.2. Antecedentes históricos.

¿Qué antecedentes se pueden hallar de esta figura en España? Sin - pretender agotar toda esta temática, en la que podrían buscarse multitud de órganos militares con somilares funciones, en la España romana nos llama poderosamente la atención una institución que a nuestro juicio bien pudiera constituir el antecedente más remoto del gobernador militar; esto, es, la de los gobernadores provinciales, que atesoraban por otra parte, facultades jurisdiccionales, tanto en la vertiente civil, como en la criminal. Autorizados historiadores nos perfilan muy certeramente dicho goberandor provincial, caracterizándolo esencialmente por su derecho a im- partir justicia.

(364) BACARDI, ALEJANDRO. "Nuevo Colón o Tratado del Derecho Militar de - España y sus Indias". Tomo I, Barcelonal864. Pág. 331 y 332.

Los gobernadores provinciales fueron "los jueces ordinarios en cada provincia, investidos de jurisdicción civil y criminal, y asistidos de un Consejo (Consilium) de veinte miembros; bajo el Imperio, juzgaban en nombre del Emperador y de sus fallos podía apelarse al príncipe. El Gobernador provincial delegaba a veces sus funciones judiciales en legados y así, en la provincial senatorial de la Bética, administraba justicia un legatus propraetore y en las imperiales lo hacían varios legati iuridici. A partir de la época de César, España se dividió en distritos judiciales o "conventos" (conventi iuridici), cuyos límites coincidían con las regiones naturales y que fueron en número de catorce. El gobernador acudía periódicamente a la capital de cada conventus y administraba justicia a los habitantes del distrito" (365)

Dicho precedente tiene pues alrededor de 2.000 años de existencia con respecto a la época actual y más 1.750 años en relación al gobernador militar, o nuevo iudex de la extranjería en España, sucedáneo del primitivo juez conservador.

Pero hurgando en las instituciones medievales españolas, se presentan a los ojos del estudioso, órganos que atesoren así mismo funciones de de variada índole, gubernativas, económicas, financieras y judiciales, que

(365) VALDEAVELLANO, LUIS G. DE: "Curso de Historia de las Instituciones Españolas" (De los Orígenes al final de la Edad Media). Revista de Occidente, Madrid, pág. 156.

nos conducen a parangonarle en ciertos aspectos al gobernador militar, como iudex de la extranjería radicada en este Reino. Nos referimos a la figura del Merino Mayor, que comenzó a desplegar su actividad en la primera mitad del siglo XIII, en los reinos de Castilla, León y Galicia. Su descripción nos la da Luis G. Valdeavellano de esta manera: "A principios — del siglo XIII, los "Merinos Mayores", y los demás "Merinos eran oficiales públicos a los que se atribuían en sus distritos funciones gubernativas, económicas y financieras, pero sobre todo, judiciales y, al advenimiento en 1230 de Fernando III como Rey no sólo de Castilla sino también de León, cada uno de los Reinos sometidos a su potestad regia constituyó, bajo la autoridad de un "Merino Mayor", una extensa circunscripción administrativa y judicial o "Merindad Mayor". Así ya en 1231, no solamente había un "Merino Mayor" de Castilla (Maior Merinus in Castella), sino un "Merino Mayor de León" (Maior Merinus in) y un "Merino Mayor de Galicia" (Maior Merinus in Gallecia), como oficiales públicos de superior categoría con autoridad y jurisdicción delegada del Monarca. Estos Merinos Mayores, o gobernadores de grandes distritos, eran nombrados por el Rey y estaban investidos de potestad judicial por delegación del Monarca, en cuanto "Merino", según las "Partidas", "quiere dezir tanto como ome que ha mayoría para fazer justicia sobre algún logar señalado" (Part. II,9,23). Al "Merino Mayor" le correspondía especialmente velar por el cumplimiento y ejecución del derecho en su distrito o, como se dice en el "espéculo" de

Alfonso el Sabio, le incumbía hacer cumplir "por fecho lo que otros juzgan" (Espéculo, IV, 3, Introducción)" (366)

La única nota que le distancia a nuestro juicio de forma radical, del gobernador militar que glosemos, es la de no estar revestido de manera clara y explícita de mando militar, pues a renglón seguido de su función judicial, predomina una cualificación esencialmente gubernativa, pero no castrense.

2.3. El Gobernador Militar como Juez protector de extranjeros.

La doctrina española del siglo XIX representa una communis opinio a este respecto, el gobernador militar, según esa óptica, es un nuevo juez conservador de la extranjería. Alejandro de Bacardí, nos recuerda a este tenor: "los gobernadores militares en los puntos en que no haya capitania general deben conocer en primera instancia y con apelación el Tribunal Supremo de Guerra y Marina de todas las causas en que los extranjeros transeúntes gocen fuera, lo que se declaró de real orden en vista de consulta del Consejo de la Guerra de 21 de mayo de 1760 mandándose que las causas de extranjeros transeúntes se evacuen por los gobernadores militares y con apelación al Consejo e independencia de los capitanes generales, a excepción de los parajes en que residan estos gajes, en cuyo caso deben ellos conocer con inhibición del gobernador, confirman estos principios las reales ordenes de 1º de diciembre de 1761, y 15 de septiembre de 1775

(366) VALDEAVELLANO, LUIS G. DE. Op. cit. 507.

dirigidas al gobernador de Cádiz, y la de 19 de diciembre de 1778 en que se mandó al gobernador del Ferrol evacuara por sí una causa de esta naturaleza en que quería introducirse el capitán general de Galicia" (367)

A idéntica conclusión llega Severo Aguirre, cuando al estudiar conológicamente las Reales disposiciones, vinculadas al Vocablo Causa, nos señala que "por Real Orden de 26 de agosto de 1758, se reencarga el conocimiento de las causas de extranjeros transeúntes a los gobernadores militares" (368).

Existen más criterios coincidentes con aquella confirmación judicial del gobernador militar.

En "la actualidad, y a virtud de lo dispuesto por el art. 30 del - Decreto de 17 de noviembre de 1852, corresponde conocer en primera instancia de los asuntos judiciales contra extranjeros, a los gobernadores de - las plazas marítimas y a los Capitanes Generales en los demás puntos y en las segundas y demás instancias sucesivas el Tribunal Supremo de Guerra y Marina y extranjería (369).

(367) op. cit. pág. 338.

(368) AGUIRRE, SEVERO. "Prontuario Alfabético y cronológico por orden de materias de las Instrucciones, Ordenanzas, Reglamentos, Pragmáticas y demás Resoluciones no recopiladas, que han de observarse para la administración de justicia y gobierno en los pueblos del Reino", (Co rrección de Joseph Garriga), Tomo I, Madrid 1799, pág. 103.

(369) J.L.F. "El Fuero de Extranjería". Rev. Gen. de Leg. y Jurisp. Tomo XXIII, 1863, pág. 32.

Pero no se agotaba la competencia de los gobernadores militares, con impartir en primera instancia su jurisdicción a través del Fuero de Extranjería; sus facultades se extendían al conocimiento, inspección y control de todo lo relacionado con las embarcaciones extranjeras surtas en puertos españoles. Es muy atinada a este tenor, la remisión que Alejandro Baccardi nos hace a la Real Orden de 24 de agosto de 1759: "Los Gobernadores que lo sean de plazas situadas en puntos marítimos como jueces de extranjería tienen jurisdicción sobre las embarcaciones extranjeras que fondeen en el puerto para proceder a su reconocimiento sin cuyo permiso nadie puede ejecutarlo, según lo resuelto en Real Orden de 24 de agosto de 1759, con motivo de una urca holandesa que sospechando trajeses pertrachos para mahometanos mandó el director general de la armada, fuese reconocida, conducta que desaprobó S.M. declarando que debió el director general de la armada, sin pasar a dar providencia, comunicar la especie al gobernador de la plaza a quien correspondía este conocimiento por estar la embarcación fondeada en ella" (370).

La jurisprudencia española de la segunda mitad del siglo XIX, se pronuncia insistentemente en el sentido apuntado, esto es, de resaltar la característica de juez de primera instancia de los gobernadores militares de las plazas marítimas, en todo lo tocante al Fuero de Extranjería, com-

(370) BACARDI, A. Op. cit. pág. 339.

partiendo, eso sí, aquella función, con los Capitanes Generales, según — ciertos supuestos que estudiaremos en el epígrafe siguiente, Así se recoge que "Los Gobernadores de las plazas marítimas, y los Capitanes Generales en los demás puntos, son los jueces competentes para conocer en primera — instancia de los pleitos y causas contra los extranjeros domiciliados y — transeúntes.— S. de 16 de enero de 1860: G. de 20: C.R., t. 5º, p.697: C.L. 1860, p. 22" (371)

Encontramos un perfecto paralelismo en el criterio de nuestra doctrina científica, y nuestra normativa, en esta temática. La Real Orden de 1 de diciembre de 1761 ordenando al gobernador de Cádiz conozca de las causas de extranjeros transeúntes, es esclarecedora al respecto: "Habiendo dado cuenta al Rey de las tres dudas que V.E. propone en representación de 28 de octubre próximo pasado, ha resuelto S.M. que todas las causas de extranjeros transeúntes en estos dominios, ya intervengan en ellas como actores o reos, corresponde a V.E. su conocimiento como gobernador militar con las apelaciones en segunda instancia al consejo de guerra, a reserva de las que se trate de comercio ilícito y de contrabando las que tiene S.M. resuelto en 21 de diciembre de 1759 deben conocer el superintendente general de la real hacienda y sus subdelegados; y en esta inteligencia y para el curso de las mencionadas causas y en las demás que son por su naturale

(371) PANTOJA, J.Mª. "Repertorio de la Jurisprudencia Civil Española", Tomo II (años 1838-1882). Madrid, 1887, Pág. 91.

za del fuero militar, debe V.E. actuarlas ante el escribano de guerra y no otro alguno; pero podrá V.E. asesorarse parassu curso y determinación con el abogado que sea de su satisfacción y distinción de aquellas en que conoce como regidor y subdelegado del intendente de Sevilla, en que indispensablemente se ha de asesorar con los alcaldes mayores, arreglándose a lo mandado en el artículo 5 de la instrucción de intendentes del año de 1749.

(372).

Existe incluso en la jurisdicción del gobernador militar una especie de explícita prolongación de funciones, cuando no exista un comandante general residente en la plaza, donde aquel ejerce mando, en otras palabras, la actividad judicial del gobernador militar invade el terreno del comandante general, cuando éste no simultanea su residencia con aquel. A esa conclusión se llega tras la lectura del segundo apartado de la Real Orden de 1 de diciembre de 1761: "Ultimamente ha declarado S.M. que aunque las causas de presas corresponden a los comandantes generales, teniendo consideración a no residieren esa plaza el del reino de Andalucía, debe V.E. conocer de las que ocurrieren en ese puerto, para que de ese modo, no se esperimente retardo en las prontas providencias que piden delicadeza de sus asuntos; y manda S.M. que en el caso de hallarse en otroz juzgados algunas causas de las que van declaradas, corresponden a V.E. como juez militar, -

(37.) RIQUELME, A. "Apéndice al Derecho Internacional de España", Tomo II. Madrid 1849, pág. 315.

las evoque al suyo por los medios prevenidos por derecho, reintegrando en la propia forma a la escribanía de guerra de todas las que se hallen extraviadas y sojuzgadas por la jurisdicción real ordinaria, en donde se man- tendrán por inventario". (373).

Lo que no hay duda, es que los extranjeros con categoría de tran-
señtes, estaban sometidos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII,-
tanto a la jurisdicción del juez conservador -, como a la castrense, se-
gún los casos así se ha acotado que aquellos "tienen también el fuero de
guerra en todas las causas, exceptuándose únicamente las de ilícito comer-
cio o contrabando, que pertenecen a los respectivos tribunales de hacien-
da, y las de naufragio sujetas al tribunal de los intendentes de marina",
(374) añadiéndose a continuación que en las demás causas están sometidos
"a los gobernadores y jefes militares, a no ser que sea nación de donde sea
el extranjero transeñte tenga nombrado por el Rey juez-conservador, en cu-
yo caso conocerá éste de todas sus causas, con apelación siempre al Supre-
mo Consejo de Guerra" (375)

2.4. Funciones.- Suele reconocerse como competencia de los gobernadores mili-

(373) RIQUELME, A. "Apéndice al Derecho Internacional de España". Tomo II.
Madrid, 1849, pág. 315.

(374) COLON DE LARREATEGUI, FELIX. "Juzgados Militares de España y sus In-
dias", Madrid, 1817, pág. 25.

(375) Ibid, op. cit. pág. 26.

tares, en su calidad de jueces castrenses, la de "conocer en primera instancia de todas las causas en que intervengan extranjeros transeúntes, no teniendo jueces conservadores, según R.O. de 26 de agosto de 1758" (376). Su función tenía carácter de subsidiariedad, es decir, su auctoritas nacía desde el preciso instante en que faltaba la figura del iudex civil. Por otra parte, se determinó "también otra Real Orden de 21 de mayo de 1760, que - causas de extranjeros transeúntes se evacuan por los gobernadores militares con apelación al Consejo, y sin dependencia de los Capitanes Generales, a excepción de los parajes en que residen estos jefes, en cuyo caso deberán ellos conocer con inhibición del gobernador, a tenor de las Reales Ordenes de 1º de diciembre de 1761 y 15 de septiembre de 1775" (377), dichas disposiciones Reales, fueron "comunicadas al gobernador de Cádiz y Capitán General de Andalucía" (378), con posterioridad se dictó "Real Resolución de 19 de diciembre de 1772, por la que se previno también al gobernador del Ferrol que evacuara por sí una causa de esta naturaleza, en que quería introducirse el Capitán General de Galicia" (379)

(376) AVECILLA, PABLO. "Legislación militar de España", Tomo I. Madrid (2ª edición) pág. 61.

(377) AVECILLA, PABLO. "Legislación militar de España", Tomo I (2ª edición) Madrid, pág. 61.

(378) COLON DE LAPREATEGUI, FELIX. "Juzgados Militares de España y sus Indias", Tomo II (3ª edición). Madrid, 1817. Pág. 156.

(379) Ibid. op. cit. pág. 156.

A mayor abundamiento, el ámbito de su jurisdicción de los gobernadores militares, abarcaba todo lo relativo "a las embarcaciones extranjeras que fondean en el puerto, pero el reconocimiento de ellas, sin cuyo permiso nadie puede ejecutarlo, por inferirse así del texto de la Real Orden - de 24 de agosto de 1759" (380).

Es menester tener presente, que respecto de la jurisdicción sobre los extraneum transeúntes, asignada a los gobernadores militares, se desgafaron "posteriormente las causas de comercio, que pertenecen en primera instancia a los consulados respectivos, según los trámites prevenidos en el Código de Comercio" (381), y el mismo autor agrega más adelante "suelen a veces suscitarse mil competencias entre los gobernadores y demás jefes militares, y los cónsules extranjeros en los puertos. Por regla general es preciso tener presente que los cónsules no pueden ejercer acto alguno de jurisdicción, como está prevenido en Real Orden de 7 de diciembre de 1787, y que los cónsules, en fin, son sólo unos meros agentes de las personas de su nación para solicitar justicia" (382).

En resumen, habrá que convenir que la sustitución del juez protector civil, por los órganos militares -- gobernadores militares y Capitanes

(380) AVECILLA, PABLO. "Legislación militar de España", Tomo I, Madrid, pág. 61.

(381) Ibid. op. cit. pág. 62.

(382) Ibid. op. cit. pág. 64.

Generales no dejó de plantear problemas de competencia entre los primeros y los segundos, e incluso entre los propios órganos militares, en razón - del distinto criterio personal de interpretación de las normas sobre el - fuero de extranjería. Algunos autores de manuales militares, han critica- do ducho trasvase de competencias de la civil a la castrense, por entender que el Fuero de Extranjería "concedido en tiempos de otra organización ad- ministrativa y judicial, en fuente de privilegios que no dispensa en el - día. Concretada ahora a la simple jurisdicción militar que no puede tener- se por más eficaz, ni por mejor organizada que la civil, no hay méritos pa- ra esa distinción que ni les favorece ni deja de ser perpetuo germen de - choques y disturbios. Cualesquiera que sean el alcance y significado que - demos al futuro, si lo consideramos favor; no es justo deparar a los extran- jeros, el que no se depara a los naturales; mucho menos no guardándose con los españoles ese miramiento en país alguno. Si le consideramos perjuicio tampoco es equitativo hacer a los extranjeros de peor condición que a los naturales; mucho más no irrogándonoslo a nosotros en las demás naciones". (383).

Ahora bien, ¿qué posición ocupaba la jurisdicción de los gobernadores militares con respecto a la de los Capitanes Generales? Para alguno "los -

(383) NUÑEZ DE ARENAS, ISAAC. "Bases y Motivos en que funda la reforma - del Tratado de Justicia para la nueva Ordenanza Militar", Madrid, 1856, pág. 94-6.

juzgados subalternos de los Gobiernos o Comendancias militares son meras delegaciones de las Capitanías Generales, compuestas del Gobernador con un Asesor Letrado y un Escribano, para entender en las primeras diligencias de causas criminales o fallecimiento de aforados. En asuntos graves, la persecución compete al Juzgado de la Capitanía General; en los leves y sumarios, los Gobernadores resuelven con dictamen del Asesor" (384). Debe - ello interpretarse como prueba inequívoca de que el Gobernador Militar a efectos de fuero - que es el que aquí no interesa-, atendía exclusivamente las cuestiones de mero trámite, diligencias previas y asuntos de menor importancia, compitiendo los restantes a la superior jerarquía de los Capitanes Generales. El Gobernador Militar en esa línea de jurisdicción, actuaría como mandatario del Capitán General y subordinado suyo. Esta sumisión jerárquica incuestionable, si se infiere del hecho de que "los gobernadores de plaza y los Comandantes de armas, dependen de los de provincia y de los Capitanes Generales" (385), si bien "teniendo también facultad para disponer la formación de sumarios por infracciones de las órdenes de la plaza y diligencias sumarias en asuntos relacionados con el servicio, pero dando cuenta a la autoridad superior del distrito, (art. 2, tít. 4º, trat. 8º de las Ordenanzas)" (386).

(384) ALMIRANTE, JOSE. "Diccionario Militar etimológico, histórico, tecnológico", Madrid, 1869, pág. 739.

(385) LOPEZ Y NOVELLA, JULIAN. "Novísimo Manual de Procedimiento jurídico-militares", Madrid, 1876, pág. 230.

(386) Ibid. op. cit. pág. 230.

B) Los Capitanes Generales.

3.1. Introducción.— Para Martínez y Pérez, "los Capitanes Generales en las capitales de distrito y los gobernadores militares en los demás puntos" (387) entienden la primera instancia con recurso de alzada ante el Tribunal Supremo de Guerra, Marina y Extranjería, de las causas que se sustancien contra los extranjeros en España, en virtud a la aplicación del Fuero de Extranjería. Estamos por ende, en presencia de un órgano militar dual, que actúa siempre en materia de Fuero de Extranjería, con facultad jurisdiccional limitada a la primera instancia.

Hase afirmado, que "la jurisdicción militar residen en los Capitanes Generales de distrito, o en los Generales en Jefe de los ejércitos de operaciones" (388). En este trabajo, corresponde analizar la jurisdicción citada en primer lugar, en este sentido, "tienen a su inmediación un Auditor de Guerra, un abogado en concepto de Fiscal y un Escribano, que bajo su presidencia componen el Juzgado, los Auditores y Fiscales son de real nombramiento, disfrutando aquellos, asimilación o consideración de Coronel en lo militar, y de Magistrador de Audiencia en lo civil. Entienden principalmente las Auditorías de Guerra en causas civiles o criminales de Aforados,

(387) MARTINEZ Y PEREZ, FRANCISCO. "Compendio de procedimientos militares", Coruña, 1867, pág. 180.

(388) ALMIRANTE, JOSE. "Diccionario militar etimológico, histórico, tecnológico", Madrid, 1869, pág. 739.

que a su vez no disfrutaban Fuero especial, y que naturalmente no envuelvan desafuero o conexión con el servicio activo, que deban juzgarse en Consejo de Guerra" (389). Para López y Novella, la composición de los juzgados de las Capitanías Generales, era la siguiente: "El Capitán General, el Auditor y Promotor fiscal, de nombramiento superior, Escribano de guerra y Alguacil, que nombraba el primero en virtud de las facultades que le concede la Ordenanza y Real Orden de 18 de septiembre de 1852, con tal de que aquel fuese Notario del reino con título oficial, (Real Orden de 23 de marzo de 1854)" (390).

2.2. Los Capitanes Generales como jueces protectores de extranjeros.

Las Reales Ordenes de 21 de mayo de 1760, 1 de diciembre de 1761 y 15 de septiembre de 1775, establecieron que "donde hubiere Capitanes Generales conozcan con inhibición de los Gobernadores de las causas de extranjeros transeúntes, con las apelaciones al Consejo de Guerra" (391). Ambos órganos, gobernadores de las plazas marítimas y Capitanes Generales, usufructúan según aquella normativa -, la primera instancia de las causas de extranjería, con absoluto monopolio sobre cualquier otro ente jurisdiccional. En idéntico sentido se pronuncia la sentencia de 16 de enero de 1860,

(389) op. cit. pág. 739.

(390) LOPEZ Y NOVELLA, JULIAN, "Novísimo Manual de Procedimientos jurídico-militares", Madrid, 1876, pág. 223-4.

(391) SEVERO AGUIRRE, op. cit. pág. 104.

cuando dice: "Los Gobernadores de las plazas marítimas y los Capitanes Generales en los demás puntos, son los Jueces competentes para conocer en primera instancia de los pleitos y causas contra los extranjeros domiciliados" (392). Ahora bien, - como ya afirmábamos al estudiar la figura de los gobernadores militares -, existe una clara tendencia legal de favorecer la competencia jurisdiccional sobre la extranjería, en beneficio de aquel órgano, y en detrimento de los Capitanes Generales. Así resulta de lo dispuesto en la Real Orden de 15 de septiembre de 1775, dictada al objeto de que el Capitán General de Andalucía, no se mezcle en las causas de extranjeros que correspondan al Gobernador de Cádiz, y dirigida al capitán general de Andalucía, Sr. Marqués de Vaumart.

Esta teoría legal partidaria de una jurisdicción expansionista de los gobernadores militares en materia del Fuero de Extranjería, se tutela

Real Orden de 15 de septiembre de 1.775.

En la citada disposición se determinaba que "En vista de carta de V.E. de 1 de este mes, y de la que recibo con fecha 8 del mismo, concerniente a la respuesta, que el gobernador de Cádiz ha dado a la orden que V.M. le comunicó con motivo de pasar a aquella ciudad el auditor de esa capitania general e inventariar indistintamente todas las causas

(392) PANTOJA, JOSÉ M^{te} op. cit. pág. 91.

A ultranza, aún en los supuestos de confusión de aquellos cargos en una - misma persona, A este respecto, conviene tener presente lo establecido en la Real Orden de 15 de mayo de 1781, alumbrada a fin de que el juzgado de extranjeros de Cádiz atendido por el gobernador de aquella plaza, se conservase no obstante separado, pese a haberse unido la Capitanía General y el gobierno.

civiles y criminales contenciosas, correspondientes a la jurisdicción militar en fuerza de la aprobación que mereció V.E. en real orden de 16 de mayo de este año, debo de cirle, que si V.E. la lee con reflexión, verá que esta so lo se limita a las causas puramente militares detenidas por morosidad o competencias de jurisdicciones, y de ningún modo es extensiva a las de los extranjeros transeúntes cuyo conocimiento por real resolución de 1^a de diciembre de 1761 es privativo del juzgado del gobernador de Cádiz, sin que después acá la haya el rey derogado; en cuya inteligencia mandará V.E. a su auditor sobresea en tomar conocimiento alguno de las causas de esta naturaleza, debiéndose observar sobre este particular la práctica anterior interin S.M. no resuelva lo contrario. Particípeme a V.E. de la —

No se autoriza por ende, el que la simbiosis de cargos, lleve aparejado la unidad de jurisdicción sobre la extranjería. El Sr. Conde de - O'Reilly, capitán General de Andalucía y al propio tiempo gobernador de - Cádiz, no podía entender de las causas de extranjería, sino exclusivamente en función de su condición de gobernador de Cádiz, pero nunca en razón de su status de capitán general de la región andaluza. Al juzgar a los extranjeros con derecho a fuero, lo verificaba únicamente como gobernador - de aquella plaza marítima, despojándose - o desligándose - absolutamente de su autoridad de capitán general. El texto de aquella R.O. no autoriza

misma real orden para su noticia y gobierno" (393).

Real Orden de 15 de mayo de 1781 .

"Habiendo acudido al consejo de guerra el auditor de ese ejército D. Antonio Olivares pidiendo su determinación sobre corresponder a su empleo conocer de las causas de — extranjeros transeúntes que corrían en esa plaza después de haberse unido al gobierno de ella a la capitanía general de Andalucía en la persona de V.E. y establecido allí su residencia, deduciendo fundamentos para la práctica de

(393) RIQUELME, A. op. cit. Tomo II, pág. 316.

otra hermenéutica, cuando ordena que el Capitán General de Andalucía actúe en "las causas de extranjeros transeúntes, como tal gobernador", agregando para reafirmar aquel criterio, "que debe asesorarse en su función con el - letrado que tenía su antecesor". Queda bien claro a nuestro entender, que se mantuvo en el contexto de interrelación de aquellos cargos, una política de mayor apoyo a la jurisdicción del gobernador militar, que a la atribuida a los Capitanes Generales.

lo que comunmente se observa en otras capitanías generales, y de lo que también previenen las reales ordenanzas; ya se atiende al respeto de Capitán General o al de gobernador de Cádiz; y habiendo consultado el mismo tribunal lo que ha estimado justo en el asunto, con presencia de todo, y considerando el rey que el juzgado de las causas de esta clase le tiene cometido particular y privativamente al gobernador de Cádiz, que constituye total diferencia de lo que sucede en las demás capitanías generales, y que V.E. ejerce y desempeña ambos encargos, según la naturaleza de cada uno y con la distinción debida de sus asuntos; se ha servido resolver, sin variar el orden con que está establecido este juzgado atendiendo a su autoridad en la conservación

El artículo 5 del R.D. de 31 de julio de 1835 establece que "los - extranjeros transeúntes gozan del Fuero Militar; así es, que no teniendo jueces conservadores con arreglo a los tratados de paces, deben conocer - de sus causas en primera instancia los gobernadores militares, sin dependencia de los capitanes generales, a excepción de los capitales en que re siden estos jefes, en cuyo caso deben conocer con inhibición del gobernador, procediendo la apelación de las providencias de unos y otros para ante el Tribunal Supremo de Guerra y Marina.

de ministros que sean propios de él; como si fuese separado, y al concepto que merecen a S.M. la actividad, celo e integridad de V.E. por ahora como tal gobernador con el le trado que tenía su antecesor, y por su falta o enfermedad con el que sea de su satisfacción; y que en los demás negocios relativos a la jurisdicción militar, los actúe y determina V.E. con el auditor". (394).

(394) RIQUELME, A. op. cit. Tomo II, pág.317.

SECCION 3ª - Órgano competente en la 2ª instancia: El Tribunal Supremo de Guerra, Marina y Extranjería.

1. Evolución histórica.

Los límites a que debe ajustarse este trabajo, nos impide recoger toda la evolución histórica de este Alto Tribunal, obligándonos a centrar su perfil y estructura en los aspectos más importantes del mismo. Por otro lado, es preciso tener presente que su denominación no ha sido siempre la misma, "unas veces ha sido llamado Tribunal Supremo de la Guerra, o de Guerra y Marina, y otras veces Consejo Supremo de una u otra, o de ambas jurisdicciones, como hoy se denomina, siendo más procedente la denominación de Consejo que la de Tribunal, puesto que reúne, a la vez que las funciones de justicia, las de Cuerpo consultivo en los ramos de Guerra y de Marina" (395).

En todo caso, estamos en presencia del órgano judicial castrense de mayor entidad y jerarquía; la más alta instancia contra la que no caben otros recursos, el "más condecorado tribunal de los aforados de guerra, tanto en los negocios de instrucción gubernativa, como en los contenciosos entre partes, cuyos fallos son inapelables y se ejecutarían por su propia naturaleza" (396)

(395) BENITO E INFANTE, SANTIAGO. "Tribunales Militares y Jurisdicción gubernativa, disciplinaria y administrativa en el Ejército", Madrid, 1886. Pág. 54.

(396) AVECILLA, PABLO. "Legislación militar de España", Tomo II. Madrid, pág. 1.

Alejandro de Bacardi, ha puntualizado que "muchos historiadores pretenden que el Consejo de Guerra tiene la misma antigüedad que el Reino de Castilla, excepto Rodrigo Méndez de Silva y Alonso Núñez de Castro, que por lo que toca al de la Guerra se le dan desde el rey don Pelayo, que murió en 737. Bien que lo más seguro, es, que en los primitivos tiempos había en Castilla un solo Consejo o Junta compuesta de Grandes del Reino o como entonces se llamaban de Ricos Hommes, el cual entendía en todos los diversos negocios del Estado como lo convencen los distintos nombres que se le daban, a saber: Consejo del Rey, Consejo de Estado, Consejo Supremo, Consejo de España, Consejo Real, Consejo de la Cámara, Consejo de Castilla, Consejo Secreto, Consejo de S.M. De esta única y primitiva corporación parece data el Consejo Supremo de la Guerra tal como ha llegado a estos últimos tiempos" (397). Ahora bien, desde la óptica de corporación estrictamente castrense, su implantación parece arrancar "de fines del siglo XVI, en cuya época se le había agregado por incidencia la jurisdicción militar pues vemos en la Real Cédula de 21 de mayo de 1584, que Felipe II se la quitó remitiéndola al conocimiento de los Alcaldes de Casa y Corte" (398)

(397) BACARDI, ALEJANDRO, "Nuevo Colón o Tratado de Derecho Militar de España y sus Indias", Tomo I, Barcelona, 1864. pág. 187-8.

(398) Ibid, op. cit. pág. 188.

Félix Colón de Larreátegui, afirmó en 1817 que "el Consejo de - Estado y el de Guerra, aunque divididos, formaron siempre un cuerpo y ce lebraron sus sesiones en una misma pieza, que en lo antiguo les estaba señalada en el palacio del Rey, como uno y otro lo expusieron así: el de Estado en consulta de 28 de noviembre de 1682 al Señor D. Carlos II, y declarado anteriormente por el Señor D. Felipe IV en decreto expedido el de Guerra en 25 de de septiembre de 1632: que los Consejeros de Estado lo eran también de Guerra, sin otro requisito más que por serlo de Estado" (399), dicha yuxtaposición se quebró a principios del siglo XVIII, a juicio del mismo autor, al destacar que "subsistió su concu— rrencia a una misma sala hasta el año de 1718, en que dejó de formarse el de Estados quedando en el de Guerra la expedición y conocimiento de mucha parte de los negocios correspondientes a aquel, que subsisten en el día" (400); como argumento favorable a la existencia de la citada - unificación de Consejos, alude el mismo autor a ciertos "testimonios - que subsisten actualmente en la pieza que al presente ocupa el de Guerra, como es una salvadora y tintero de plata, que se hallan con la dis tinguida particularidad de tener grabadas estas palabras: Consejo de Es tado y Guerra, y Hacienda y Cámara, prueba evidente de que se trababan

(399) COLON DE LARREATEGUI, FELIX. "Juzgados Militares de España y sus Indias. Tomo II, Madrid, 1817. Pág. 1.

(400) Ibid. op. cit. pág. 1.

en este Consejo todas las materias concernientes a dicha inscripción y - de que componían los dos un Consejo" (401) es más, como prueba robustecedora de aquel juicio, agrega Colón de Larreategui, que incluso "los porteros que actualmente sirven el Consejo de Guerra, son los mismos que — promiscuamente asistían con el Estado; y con esta denominación los nombra todavía el Rey" (402)

Fecha trascendente desde el punto de vista evolutivo, conciernente al Consejo Supremo de Guerra, es la de 11 de diciembre de 1598, en - que "el señor Don Felipe III, revocó la orden de 21 de mayo de 1594, mandando que el Consejo volviese a conocer las causas - anejas a la jurisdicción militar- y que dirigiera la sustanciación una persona de letras y que se viesan luego en el Consejo con asistencia y voto de este letrado. Este fué el primer decreto que dió entrada al Consejo a los asesores letrados, y en su consecuencia se nombró uno en cãase de propietario y - otro de interino" (403), más adelante, agrega el mismo autor, "por decreto de 17 de diciembre de 1647 se redujo a cuatro el número de consejeros, y se permitió a los que lo eran de Estado el concurrir al de la Guerra, siempre que lo tuviesen a bien, lo que vino a confirmarse por Real Orden de 17 de julio de 1791, por lo que toca al número de Consejeros" (404)

(401) Ibid. op. cit. pág. 1-2

(402) Ibid. op. cit. pág. 2.

(403) BACARDI, A. op. cit. pág. 188

(404) Ibid. op. cit. pág. 188.

1.2. Composición. - A lo largo de los siglos XVI y XVII, se dictaron varias - disposiciones Reales, relativas a la Composición del Consejo de Guerra, si bien no tiene mayor interés en recogerlas, así como por no hacer demasiado extenso este epígrafe. Destacamos sin embargo a comienzos del - siglo XVIII una Resolución Real del Señor D. Felipe V de 23 de abril - de 1714, por la que el primer monarca de la dinastía borbónica, "se sirvió dar nueva planta al Consejo, del mismo modo que se reglaron los demás Consejos y Tribunales de Castilla, Indias, Ordenes y Hacienda, y - mandó se compusiera de dieciséis Ministros, seis militares, de los cuales el más antiguo había de ser siempre cabo y decano del Consejo, los otros seis togados y de éstos, ql uno decano en ausencia del que nombró el Rey por cabo y decano del Consejo, un fiscal, dos abogados generales y un secretario un jefe. Los militares se habrán de elegir de los capitanes generales de provincia, y en defecto de éstos de los tenientes generales, entrando a serlo por ausencia de cualquiera de los primeros, el más antiguo teniente general que se hallase en la corte" (405)

El rey don Carlos III mediante Real Cédula de 4 de noviembre de 1773, modificó la relación de consejeros y estructura del Consejo Supremo de Guerra, ordenando fuese integrado por "veinte consejeros, diez - natos y los otros diez de continúa asistencia, dos fiscales, uno militar

(405) COLON DE LARREATEGUI, FELIX. op. cit. pág. 6-7.

y otro togado y un secretario" (406), dicha estructuración se mantuvo - vigente con ligeras variaciones, el 1 de marzo de 1812, "enq ue las Cortes deseosas de llevar a cabo su obra reformadora a esta institución, crearon un Tribunal especial de Guerra y Marina para los negocios contencioso-militares; más a poco tiempo de esta reforma una parte de la - administración militar y su justicia sobre todo empezaron a resentirse, principiando desde entonces el período de confusión y de incertidumbre en que nos encontramos" (407). Vuelto a España el rey Fernando VII, "restableció de nuevo el Consejo de la Guerra, por Real decreto de 16 de junio de 1.814, mandando se formara de diez generales del Ejército de Tierra, cuatro de Mar, dos intendentes del Ejército y Marina, cinco togados dos fiscales militares y dos secretarios para las dos ramas. Con estos Ministros, se dividía el Consejo en tres Salas, una de Gobierno, compuesta de los generales, intendente, fiscal militar y secretario de ejército otra también de gobierno independiente de la primera, con dos generales intendente fiscal militar y secretario del ramo de marina y otra de Justicia, compuesta de cinco ministros y un fiscal togado." (408).

El Consejo Supremo de la Guerra, desaparece con tal denominación mediante el Real Decreto de 24 de marzo de 1834, por virtud del cual se

(406) BACARDI, ALEJANDRO, op. cit. pág. 190.

(407) BACARDI, A. op. cit. pág. 192-3.

(408) Ibid. op. cit. pág. 193-4.

creó en su lugar el Tribunal Supremo de Guerra, Marina y Extranjería, en el que se dice: "oído el dictamen del Consejo de Gobierno y del de Ministros, he venido en decretar lo siguiente en nombre de mi muy cara y augusta hija Doña Isabel II:

Art. 1. Queda suprimido el Consejo Supremo de la Guerra.

Art. 2. En su lugar, instituyo un Tribunal Supremo de Guerra, y Marina y de Extranjería" (469)

En cuanto se refiere a la nueva planta del Tribunal Supremo de Guerra, Marina y Extranjería, según el artículo 4 del E.D. de 24 de marzo de 1834, se determina que "Este Tribunal se compondrá de un Presidente y dos Salas; una compuesta de ocho vocales; cinco de ellos generales del ejército, y tres generales de marina, y dos fiscales militares, uno del ejército y otro de marina; otra sala compuesta por seis ministros togados, tres por guerra y tres por marina, y dos fiscales de la misma clase; uno por guerra y otro por marina" (410).

Según José Almirante, "el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, "quedó compuesto por un Presidente y Vicepresidente, ordinariamente Tenientes Generales; de dos Salas, una de Gobierno, y otra de Justicia, aquella con cinco Generales del Ejército, dos de la Armada, un Ministro

(409) AVECILLA, Pablo. "Legislación Militar de España". Tomo I. Madrid, pág. 2.

(410) Ibid. op. cit. pág. 2.

político-militar y un letrado Asesor; esta con seis y luego ocho, Ministros togados; en ambas puede haber cierta número de Ministros Suplentes" (411), no se agota ahí la relación de miembros de aquel Alto Tribunal, puede añadirse en ese sentido, "dos fiscalías, una Militar y otra togada, una Secretaría, un Archivo, y una Escribanía de Cámara, completan el Tribunal Supremo que tiene el tratamiento de Alteza y de Muy Poderoso Señor, por escrito. Sus empleados de todas clases son político-militares; no concurren en corporación a ningún auto público; ejerce la jurisdicción militar y es uno de los altos Cuerpos Consultivos del Estado" (412).

- 1.3. Funciones.— Una de las competencias del Consejo Supremo, en el siglo XVIII, fué la de entender en materia de extranjería de todas las causas en que los extranjeros transeúntes intervengan como interesados, si - bien "por Real Orden de 29 de agosto de 1758, comunicada a los Capitanes Generales se comprendieren también las de ilícito comercio, o contrabando; se exceptuaron posteriormente del conocimiento de la jurisdicción militar por el Real Decreto expedido el 21 de diciembre de 1959, por el cual se previene que aunque los delincuentes sean extranjeros - transeúntes sean juzgados por los respectivos tribunales de hacienda, a

(411) ALMIRANTE, JOSE. "Diccionario Militar etimológico, histórico y tecnológico. Madrid, 1869. pág. 739.

(412) Ibid, op. cit. pág. 739.

excepción cuando el contrabando fuese de armas y municiones, en cuyo - caso toca su conocimiento a la jurisdicción de guerra" (413)

Confirmóse en el año siguiente, la facultad de entender de las - causas de contrabando por parte del Consejo Supremo, cuando aquel "sea de armas, municiones y pertrechos de guerra, con arreglo a la Real Cédula de 21 de diciembre de 1759" (414).

Ya entrando el siglo XIX, por el Real Decreto de 15 de junio de 1815 y Cédula de 17 de febrero de 1816, "corroboró S.M. a este supremo Tribunal la plena facultad y jurisdicción que desde su creación ha tenido que conocer y decidir de la universalidad de las causas civiles y criminales que de cualquier modo pertenezcan al fuero de Guerra, y a to das las clases de que se componen las tropas de mar y tierra" (415)

Con posterioridad, en el trascendente Real Decreto de 31 de julio de 1835, en su artículo 7, se determina que el Tribunal Supremo de Guerra y Marina "asimismo, conocerá su consulta, grado de apelación y sú- plica, según la naturaleza y circunstancias de los pleitos, causas y de más asuntos contenciosos del fuero de guerra, marina y extranjería, de los cuales conocen en primera instancia los señores capitanes y comandan

(413) COLON DE LARREATEGUI, F. op. cit. pág. 52-3.

(414) COLON DE LARREATEGUI, F. op. cit. pág. 56.

(415) BACARDI, A. op. cit. pág. 286 y sig.

tes generales de las provincias, departamentos y apostaderos, los gobernadores de plazas, o coroneles de milicias provinciales, con acuerdo de sus auditores o asesores, ejerciendo todas las funciones de tribunal supremo de la milicia de tierra y mar; y respecto de los juzgados de la guardia real, de los cuerpos de ingenieros y artillería, prece- diendo mi real determinación, según sus ordenanzas y aclaramientos pos- teriores" (416)

En definitiva, el Tribunal Supremo de Guerra, Marina y Extran- jería, conocía en última instancia de las apelaciones contra los fallos de los Gobernadores militares y los Capitanes Generales en lo tocante a la extranjería, tanto en los litigios civiles, como en las causas — criminales en que aquellos pudieron estar involucrados; infiriéndose del texto del R.D. de 1835, que no se limitaba la jurisdicción de aquel Al to Tribunal a las litis en que interviniesen los extranjeros con la - cualificación de transeúntes, pues la redacción del art. 7 de aquella Disposición Real, no es restrictiva, y en su amplitud terminológica, - tienen cabida - e nuestro entender - los extraneum vecindados o resi- dentes con cierta permanencia en nuestro suelo.

No cabe duda, que la concesión al Tribunal Supremo de Guerra, Ma rina y Extranjería, del entendimiento en última instancia de las cau-

(416) AVECILLA, PABLO, op.cit. pág. 9.

sas o litis en que interviniesen extranjeros, era una garantía más en el contexto de la administración de justicia, dirigida al no regnicola. Por otro lado, el reservar el más alto Tribunal Castrense, la facultad de decidir sin ulterior recurso, aquellos pleitos, no sólo implicaba una nueva opción para los contendientes, sino que también, dada la experiencia y preparación de los miembros de aquel prestigioso órgano, comportaba — desde la óptica de las partes, la tranquilidad y esperanza de que el fallo sería el más ajustado a Derecho.

CAPITULO III

CONCLUSIONES

- 1ª.- A Prima facie, no puede captarse adecuadamente la singular idiosin^{crasia} de nuestro Fuero de Extranjería, si hacemos abstracción del inveterado talante hospitalario y generoso del pueblo español hacia el foráneo.
- 2ª.- La expresión Fuero de extranjería resulta exegéticamente equívoca, toda vez que de la misma pueden extraerse - a nuestro juicio- dos acepciones, una amplia y otra restringida. Es una acepción lata, - equivaldría a "Norma con privilegio concedida al extraneum, mientras no se naturaliza en el país en que reside", y en su significac^{ión} estricta, será "Jurisdictio especial otorgada al extranjero residente en un determinado "Estado".
- 3ª.- La instauración del Fuero de Extranjería en España tuvo lugar, a - nuestro entender, mediante la dispensación por Felipe III de los Ca^pitulos de 28 de septiembre de 1607 dirigidos a los Hanseáticos - avecindados en España, y a los que entre otras categoría de Privi^{legios} se les acuñó un Juez privativo.

- 4ª.- El Fuero de Extranjería se articuló ab initio en los citados Capítulos de 1607, mediante la figura del Juez Conservador, órgano encargado de hacer operativa aquella jurisdicción de tipo excepcional.
- 5ª.- La ratio essendi del alumbramiento del Fuero de Extranjería en España encontró apoyatura en varias causas interrelacionadas, a saber, el debilitamiento político de la España del siglo XVII en el contexto europeo, en el afán de captación de mercaderes extranjeros - impulsores del tráfico mercantil, así como en la acuciante necesidad de incrementar los ingresos del Erario público español.
- 6ª.- En el decurso histórico de nuestro Fuero de Extranjería, es preciso deslindar dos fases, netamente diferenciadas según el ente obligado a instrumentarlo. Una etapa, estrictamente civil, servida con monopolio por jueces conservadores, que nace el 28 de septiembre de 1607, merced a los Olvidados Capítulos de Felipe III y concluye con la desaparición de aquel iudex, a tenor del R.D. de 21 de Diciembre de 1759; y otra etapa, de talante castrense, que nace precisamente con este Real Decreto, por el que se convierten en sucesores del Juez Conservador, los gobernadores de plazas marítimas y los Capitanes Generales, y que culmina con el Decreto de Unificación jurídica de 6 de Diciembre de 1868. Su ciclo vital fue pues de 261 años.

- 7ª.- El extranjero residente en España desde 1760 a 1868, cuando utiliza el privilegio del Fuero de Extranjería, y acude ante el Gobernador de plaza marítima o el Capitán General, no impertra per ser el auxilio de un Fuero Militar, - que no le corresponde - sino la ayuda de una jurisdicción civil excepcional, servida por militares.
- 8ª.- El Fuero de Extranjería constituye una institución fuertemente soldada a la forma monárquica del Estado, tradicional en España. Nace con la Casa de Austria, se mantiene con la Dinastía Borbónica y se extingue por el contrario en 1868, en pleno período revolucionario.
- 9ª.- Mediante el Fuero de Extranjería, la nación española, no sólo implantó un cauce ex novo de administración de justicia para los extraneum, dotándoles de jueces privativos o protectores, sino que también les rodeó además de tal cúmulo de privilegios personales fiscales, mercantiles, etc. etc... que bien pudiera decirse que - existió casi una obsesión por tutelar más graciosamente al foráneo, que al regnicola.
- 10ª.- Existió una evidente concatenación entre el Fuero de Extranjería y la figura del Juez Conservador que lo articulaba; no obstante, no hubo identidad de conceptos. Mientras el primero es la causa, el segundo, por ende, es su simple efecto. El Fuero es un derecho

un privilegio, proyectado hacia ciertos extraneum, el iudex, por - el contrario, fué una mera secuela de aquel derecho. En suma, si el Fuero entrañaba la institución permanente, y la facultad de - utilizar una nueva vía de administración de justicia, el Juez - protector se creó como ente instrumental para que aquel tuviera virtualidad jurídica.

11ª.- Si bien el ámbito personal del Fuero se circunscribió en su origen en 1607, a las naturales de las Ciudades Hanseáticas; con posterioridad se amplió su disfrute a los ingleses, holandeses, austríacos, daneses, franceses, portugueses, suecos, napolitanos, etc. etc.... en virtud de los Tratados concertados con las naciones - respectivas. La política concesionaria del Fuero mediante Pactos bilaterales, se extingue por la fuerza expansiva derivada de la promulgación del Real Decreto de 17 de Noviembre de 1852, en cuyo contexto se autoriza el disfrute de aquel a cualquier extraneum, independientemente de su nacionalidad.

12ª.- En el interregno del siglo XIX el beneficio del Pueblo va indistintamente unido al requisito de la matriculación de la extranjería, esto es, sin inscripción previa del foráneo en los Registros del Gobierno de la provincia en que reside y en el Consulado respectivo, no hay acceso al goce de aquel privilegio jurisdiccional.

13ª.- Con carácter general, puede afirmarse, que el Fuero de Extranjería, se aplicaba *ratione materiae*, tanto en los pleitos civiles, como - en las causas criminales, en que intervenían como demandados o denunciados, los extranjeros y como actores los españoles. En consecuencia, el extraneum estaba incapacitado para incoar el procedimiento del Fuero, en una litis con un regnicola, si intervenía - como actor.

14ª.- El ámbito *ratione territoriae* de la jurisdicción del Juez Conservador, alcanzaba durante el siglo XVII un área geográfica de seis leguas a la redonda de la villa donde actuaba dicho iudex; *mutatis mutandi* debe aceptarse igual extensión para la iurisdicció de los Gobernadores Militares y Capitanes Generales, toda vez que éstos - actuaban más bien como sucedáneos del citado iudex, que como órganos de la jurisdicción castrense.

15ª.- El ámbito *ratione personae* del Fuero de Extranjería desde 1607 hasta el Real Decreto de 17 de noviembre de 1852, fué variable en función de los Capítulos o de los Pactos Internacionales otorgados; a partir de dicha fecha, el mismo se concede a cualquier extraneum, con independencia de su nacionalidad.

16ª.- El Fuero de Extranjería se aplicaba no sólo a los pleitos civiles,

sino también a las causas criminales.

- 17ª.- El Fuero de Extranjería fué activo o pasivo, según los casos. Activo en los pleitos entre extranjeros, en cuanto beneficiaba al extraneum tanto fuere actor o demandado. Pasivo en los litigios con españoles, es decir, cuando el foráneo actuaba solamente como demandado o reo convenido.
- 18ª.- El Fuero de Extranjería tuvo absolutamente carácter metropolitano no regía para los extranjeros domiciliados en América española.
- 19ª.- El Fuero de Extranjería amparaba tanto a los extranjeros transeúntes, como a los domiciliados en España, según reiterada normativa; el propio R.D. de Extranjería de 1852 confirma que aquel Fuero se confiere a los "domiciliados y transeúntes". Estaban por ende, excluidos los avecindados.
- 20ª.- Como supuestos de desafuero en los que no se aplicaba el privilegio de Extranjería, pueden citarse los delitos de contrabando, los juicios procedentes de operaciones mercantiles, los de sedición, en los cometidos a bordo en alta mar y juicios de presas, en las causas por tráfico de negros y en los juicios de faltas.
- 21ª.- El Fuero de Extranjería no puede ser catalogado simplistamente,-

como un mero sucedáneo del sistema de Capitulaciones, aunque ambas Instituciones, coincidan en representar un cauce excepcional de la administración de justicia.

22ª.- El Fuero de Extranjería se diferencia esencialmente de las Capitulaciones, en que en éstas el ente que ampara al extraneum se ca caracteriza por ser un representante diplomático, que comparte la nacionalidad de sus tutelados, mientras que en el primero, el foráneo es juzgado - y protegido - por un iudex con ciudadanía espa ñola.

23ª.- Funcionalmente el Fuero de Extranjería, se hace operativo a través de un auténtico juez, las Capitulaciones, se articulan mediante la actuación de una simbiosis de Cónsul-Juez.

24ª.- El Juez Conservador español - y privativo de la extranjería - desarrolló su actividad como un pseudó: Cónsul en régimen de Capitulaciones, sin llegarse a la identificación de figuras.

25ª.- El Juez Conservador en España y los Cónsules en países con capitulaciones, si bien paralelamente tenían recíprocas atribuciones ju diciales, se diferenciaban, en que el primero nacía para juzgar - por encima de cualquier consideración -; corregía y sancionaba; sólo de forma secundaria, protegía y tutelaba. Por el contrario,

el Cónsul prioritariamente representaba y amparaba diplomáticamente; en segundo plano, sólo administraba justicia.

26ª.- El Juez español de la Extranjería, actuaba bipolarmente, como iudex conservador y privativo. Era Conservador en tanto en cuanto - ejercía jurisdicción castigando infracciones de leyes, con una característica correccional en su actividad sancionadora. Era privativo, toda vez que su campo de actuación venía circunscrito al principio del Fuero por una determinada categoría de extranjeros.

27ª.- El iudex conservador - civil o militar - ejercía con absoluto monopolio su facultad de juzgar a la extranjería. Su munus iudicandi, no tenía rival.

28ª.- La iurisdictio del Juez Conservador acotábase dentro de una primera instancia, toda vez que el segundo impulso o apelación, enmarcábase en la competencia del Consejo de Guerra de Justicia.

29ª.- La época de esplendor del Juez conservador civil comprende la 2ª mitad del siglo XVII y mitad del siglo XVIII. Palidece la figura como consecuencia del Real Decreto de 21 de diciembre de 1759, y Real Orden de 26 de agosto de 1768, que introduce como sucedáneo suyo a los Gobernadores de las plazas marítimas.

- 30ª.- El tránsito de la jurisdicción civil de extranjería, a la castrense, no fué nítido, habida cuenta que existieron casos de mantenimiento de ambas competencias.
- 31ª.- El Fuero de Extranjería que en sus comienzos privilegió solo a — ciertos foráneos, protege después genéricamente a toda extraneum, igualándolos, con independencia de su nacionalidad, y haciendo caso omiso de la existencia o no de Tratados Bilaterales que los amparase, en virtud del Real Decreto de 17 de noviembre de 1852.
- 32ª.- El Fuero de Extranjería como jurisdicción excepcional, se extingue a tenor del Decreto de Unificación Jurídica de 5 de diciembre de 1868.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- A.- "El Fuero de Extranjería" en "El Faro Nacional", año 3º, nº 196, domingo 29 de mayo de 1853, Revista de Jurisprudencia, de Administración, de Tribunales y de Instrucción Pública. Madrid, 1853.
- 2.- A.- "El Fuero de Extranjería" en "El Faro Nacional", año 3º, nº - 212, domingo 24 de julio de 1853. Revista de Jurisprudencia, de Administración, de Tribunales y de Instrucción Pública, Madrid, 1853.
- 3.- A.- "El Fuero de Extranjería" en "El Faro Nacional", año 3º, nº 213 jueves 28 de julio de 1853, Revista de Jurisprudencia, de Administración, de Tribunales y de Instrucción Pública, Madrid, 1853.
- 4.- ABREU Y BERTODANO, José Antonio.- "Colección de los Tratados de Paz, alianza desde antes del establecimiento de la monarquía Gothica hasta el feliz reinado del rey Felipe V", Madrid, 1740, (Reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 12 Vol.
- 5.- ACCIOLY, Hildebrando.- "Tratado de Derecho Internacional Público", Madrid, 1958, I.
- 6.- ACOSTA, Cecilio.- "Estudios de Derecho Internacional".
- 7.- AGO, Roberto.- "Lezioni di Diritto Internazionale Private", Milán,

1948.

- 8.- AGUILAR NAVARRO, M.- "Derecho Internacional Público", Madrid, 1954.
- 9.- AGUILAR NAVARRO, M.- "Derecho Internacional Privado", Vol. I. Tomo II, Facultad de Derecho, 1974.
- 10.- AGUIRRE, Severo.- "Prontuario alfabético y cronológico por orden de materias de las instrucciones, ordenanzas que han de observarse para la administración de justicia y gobierno en los pueblos del Reino" (3ª Impresión corregida y aumentada por D. José Garriga) Tomo I, Madrid 1799.
- 11.- ALBONICO VALENZUELA, Fernando.- "Derecho Internacional Privado Chileno" Editorial Jurídica de Chile, 1958.
- 12.- ALCORTA, Amancio.- "Curso de Derecho Internacional Privado", Tomo I. Buenos Aires, 1927.
- 13.- ALFONSIN, Quintín.- "Teoría del Derecho Privado Internacional", Montevideo, 1955.
- 14.- ALMIRANTE, José.- "Diccionario Militar etimológico, histórico y tecnológico"; Madrid, 1869.
- 15.- ALONSO Y COLMENARES, Eduardo.- "Jurisdicciones especiales", Tomo I,

- 16.- ALLUE SALVADOR, M. "La condición jurídica de los Cónsules", Zaragoza, 1909.
- 17.- ANTKOLETZ, Daniel.- "Derecho internacional Público en tiempo de paz" Tomo III, Buenos Aires, 1928.
- 18.- ANZILOTTI, D. "Studi critici di Diritto Internazionale Privato", 1898.
- 19.- ARRAZOLA, GOMEZ DE LA SERNA y MANRESA NAVARRO.- "Enciclopedia española de Derecho y Administración" o Nuevo Teatro Universal de la legislación de España y de las Indias. Tomo XII, Madrid, 1870.
- 20.- ARJONA COLOMO, Miguel.- "Derecho Internacional Privado", Madrid, 1949, Parte especial.
- 21.- ARJONA COLOMO, M.- Voz "Extranjero". Nueva Enciclopedia Jurídica (F. Laix), IX, Barcelona, 1958.
- 22.- ARMINSON, P.- "Precis de Droit International Privé".- Paris, 1931.
- 23.- AUDINET, Eugenio.- "Principios de Derecho Internacional Privado", - trad. de Moreno Barutell. Tomo I. Madrid. Edit. La España Moderna.- Sin fecha.
- 24.- AVECILLA, Pablo.- "Legislación Militar de España".- Tomo I. Madrid, (sin fecha)

- 25.- AZNAR SANCHEZ, Juan. "La extranjería en la doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado", Madrid, 1974.
- 26.- BACARDI, ALEJANDRO. "Nuevo Colón o Tratado del Derecho Militar de España y sus Indias", Tomo I, Barcelona 1864.
- 27.- BALLADORE PALLIERI, G. "Diritto Internazionale Privato", Milán 1950.
- 28.- BARBASAN LAGUERUELA, Castro.- "Derecho Internacional", Madrid, 1916.
- 29.- BARTIN, E.- "Principes de Droit International Privé", Paris, 1932.
- 30.- BATIFFOL, Henri.- "Droit International Privé", Tomo I, Paris, 1970.
- 31.- BELLO, Andrés.- "Derecho Internacional" (Caracas), 1959.
- 32.- BENITO INFANTE, S.- "Teoría práctica de procedimientos militares". Pamplona, 1880.
- 33.- BENITO INFANTE, Santiago.- "Tribunales Militares y jurisdicciones - gubernativa, disciplinaria y administrativa en el ejército"; Madrid 1886.
- 34.- BETTI, E.- "Problemática del Diritto Internazionale", Milano, 1956.
- 35.- BONET CORREA, J.- "Los extranjeros en el ordenamiento jurídico español" (Rev. general de legislación y jurisprudencia) Nº 218, 1965.

- 36.- BOUFFANAIS, Pierre.- "Les consuls en temps de guerres et de troubles"
(tesis doctoral) París, 1933.
- 37.- BRAVO, Emilio.- "Derecho Internacional Privado vigente en España", -
Tomo I. Madrid 1886).
- 38.- BRAVO, Emilio.- "Derecho Internacional Privado", Madrid, 1886, Tomo
II.
- 39.- BUSTAMANTE y SIRVEN (Antonio S. de).- "El orden público". Estudio
de Derecho Internacional Privado. (La Habana, 1893).
- 40.- BUSTAMANTE, Antonio S. de.- "Tratado de Derecho Internacional Privado". Tomo I (La Habana 1896).
- 41.- BUSTAMANTE, Antonio S. de - "Programas de Derecho Internacional Público y Privado".- Madrid, 1891.
- 42.- CANTILLO, A. "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y Comercio"
Madrid, 1843.
- 43.- CASANOVA, Antonino.- "La justicia con sus encantos".- Revista General
de Legislación y Jurisprudencia. Tomo XXII, Madrid, 1863.
- 44.- CASTELLS de ORTEGA, A.- "Proyecto de Reglamento de los Tribunales Mi
litares"; Madrid, 1851.

- 45.- CASTRO, Amílcar de.- "Direito Internacional Privado", Vol. II. Rio de Janeiro, 1956.
- 46.- CASTRO Y CASALEIZ, A.- "Conflictos de nacionalidad".- Estudios de Derecho Internacional Privado. Madrid, 1900.
- 47.- CAVAGLIERI, Arrigo.- "Lezioni di Diritto Internazionale Privato", Napoli, 1933.
- 48.- CODIGOS ESPAÑOLES CONCORDADOS Y ANOTADOS.- "Tomo VIII. Novísima Recopilación de las leyes de España", (Tomo II, libros V, VI y VII) Madrid, 1850, La Publicidad.
- 49.- COLON DE LARREATEGUI, F.- "Juzgados Militares de España y sus Indias" 1817, Tomo I.
- 50.- COLON DE LARREATEGUI, Félix.- "Juzgados Militares de España y sus Indias", Tomo II, Madrid, 1817.
- 51.- CONDE Y LUQUE, Rafael.- "De la condición jurídica del extranjero en la edad Media". (Rev. Gen. de Leg. y Jurisp. Tomo 98. Año 49, 1901)
- 52.- CONDE Y LUQUE, Rafael.- "Historia jurídica del extranjero en España hasta la conquista árabe". (Rev. de los Tribunales y de legislación universal, Madrid, 1895.)

- 53.- CONDE Y LUQUE, Rafael.- "Oficios del Derecho Internacional Privado", Madrid, 1901.
- 54.- CORNEJO, Andrés.- "Apéndice al Diccionario histórico y forense del Derecho real de España", Tomo II, Madrid, 1784.
- 55.- DELBEZ, Louis.- "Les principes généraux de Droit International Public", 1964.
- 56.- DELBEZ, Luis.- "Manuel de Droit International Public".
- 57.- DEMANGEAT, Charles.- "Histoire de la condition civile des étrangers en France", Paris, 1844.
- 58.- DESDEVISES DU DEZERT.- "La société espagnole au XVIII siècle". Paris, 1925.
- 59.- DESPAGNET, Frantz.- "Cours de Droit International Public", Paris, 1910.
- 60.- DIAZ CISNEROS, César.- "Derecho Internacional Público".- Buenos Aires, 1955.
- 61.- DIAZ LORDA, J.- "Derecho Internacional en Paz y en Guerra", Madrid, 1949.

- 62.- DIAZ VELA.- Ramón.- "Informe sobre el Fuero Militar en lo civil",
Madrid, 1859.
- 63.- DICCIONARIO de Ciencias Sociales, Instituto de Estudios Políticos.-
Madrid, 1975.
- 64.- DICCIONARIO Enciclopédico Durvan, 1972.
- 65.- DICCIONARIO Espasa-Calpe,
- 66.- DICCIONARIO de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid, 1970.
- 67.- DIENA, Julio.- "Derecho Internacional Público".- (Trad. de Trías de
Bes).- Barcelona 1948.
- 68.- DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M.- "Curso de Derecho Internacional Públi
co", Edit. Tecnos. Madrid, 1963.
- 69.- DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M.- "Instituciones de Derecho Internacional
Público", Edit. Tecnos, Madrid, 1973.
- 70.- DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M.- "Prácticas de Derecho Internacional Pri
vado" Edit. Tecnos. Madrid, 1969.
- 71.- DOVE, Emil.- "Los grandes problemas del Derecho Internacional". Edit.
Bosch, 1947.

- 72.- ENCICLOPEDIA JURIDICA ESPAÑOLA. Tomo XV. F. Seix, 2ª Edición. Barcelona.
- 73.- ENGELS, Federico.- "El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado".- Edit. Ayuso, 1972.
- 74.- FARRERA, Celestino.- "El Derecho Internacional en la Antigüedad y en la Edad Media", Caracas, 1927.
- 75.- FAUCHILLE, Paul.- "Traité de Droit International Public", Paris, 1952 Tomo I (Première Partie).
- 76.- FENWICK, Charles G.- "Derecho Internacional".- Trad. Mª. Eugenia I. de Fischman. Buenos Aires, 1963.
- 77.- FERNANDEZ PRIDA.- "Estudio de Derecho Internacional Público y Privado" 1901.
- 78.- FERRARA, Francesco.- "Manuale di Diritto Consolare". Padova, 1936.
- 79.- FERRATER, Esteban.- "Código de Derecho Internacional" o sea colección metódica de los tratados de Paz, amistad y comercio entre España y las demás naciones. Tomo II. Barcelona, 1847.
- 80.- FERRERO, R.- "Derecho Internacional", 1966.

- 81.- FIGUERAS Y GRAU, M.- "Idea del proceso militar". Madrid, 1775.
82. FIORE, Pasquale.- "Derecho Internacional Privado". Tomo I, Madrid, -
1889.
- 83.- FIORE, Pasquale.- "Tratado de Derecho Internacional Público", Tomo I
1894, Madrid (Edit. Góngora).
- 84.- FIORE, Pasquale.- "Tratado de Derecho Internacional Público", Tomo II.
Madrid, 1894. (Edit. Góngora).
- 85.- FOELIX.- "Tratado de Derecho Internacional Privado" o del conflicto
de las leyes de diferentes naciones en materia de Derecho Privado,
Tomo I, Madrid, 1860.
- 86.- FOELIX.- "Tratado de Derecho Internacional Privado", o del conflicto
de las leyes de diferentes naciones en materia de Derecho Privado,
Tomo II, Madrid, 1861.
- 87.- FOIGNET, René.- "Manuel Elementaire de Droit International Public".-
Paris 1895.
- 88.- FUENTES LOJO, Juan V.- "Los extranjeros ante la ley de arrendamien-
tos urbanos" (Foro Gallego, Revista Legislativa y jurisprudencia)
Año X, Nº 83, 1952.

- 89.- GALO SANCHEZ.- "Curso de Historia del Derecho".- (Edit. Reus, 1952)
- 90.- GAND, M.- "CODE DES ETRANGERS" ou "Etat civil et politigne en France des etrangers de tout rang et de toute condition". (1853).
- 91.- GARCIA ALVAREZ Y GARCIA PEREZ.- "Derecho Internacional Público", Toledo, 1909.
- 92.- GARCIA GALLO, Alfonso.- "Manual de Historia del Derecho español", Tomo I, Madrid, 1959.
- 93.- GARCIA FOYENA, y J. AGUIRRE.- "Febrero, o librería de jueces, abogados y escribanos, comprensiva de los Códigos civil, criminal y administrativa, tanto en la parte teórica, como en la práctica, con arreglo en un todo a la legislación hoy vigente", Madrid, 1842.
- 94.- GARCIA RIVES, Moisés.- "Condición jurídica de los extranjeros en Castilla y León desde el Fuero de León (1020) al Código de las Partidas. (Madrid 1920, tesis doctoral).
- 95.- GESTOSO Y ACOSTA.- "Curso elemental de Derecho Internacional Público", (Vol. I, 1907, Valencia).
- 96.- GIBERT, Rafael.- "La condición de los extranjeros en el antiguo derecho español" (Recueils de la société Jean Bodin, Vol. X, L'etran-

ger) Bruxelles, 1958.

- 97.- GOLDSCHMIDT, W.- "Estudios iusprivatistas internacionales", Rosario, 1969.
- 98.- GOLDSCHMIDT, Werner.- "Sistema y Filosofía del Derecho Internacional Privado" (Bosch, Casa Editorial), 1948, Barcelona.
- 99.- GONZALEZ HONTORIA, Manuel.- "Tratado de Derecho Internacional P^ublico", 8Vol. I, 1928.
- 100.- GONZALEZ HONTORIA, Manuel.- "Tratado de Derecho Internacional P^ublico (Vol. II, 1928).
- 101.- GRACIA Y HERNANDEZ, Joaquín.- "Nociones teórico prácticas de toda - clase de procedimientos judiciales"; Madrid, 1898.
- 102.- HERNANDEZ BRETON, A.- "Atribuciones y prerrogativas de los Cónsules", Venezuela, 1951.
- 103.- HERRERA MENDOZA, Lorenzo.- "Estudios sobre Derecho Internacional Privado y temas conexos", Caracas, 1960.
- 104.- HERRERO Y RUBIO, Alejandro.- "Historia del Derecho de gentes", (Valladolid, 1959).

- 105.- IGLESIAS, Juan.- "Instituciones de Derecho Romano". (Edit. Ariel).
- 106.- JANER, Florencio.- "Tratados de España", Documentos Internacionales del Reinado de Doña Isabel II, desde 1848 a 1868. Madrid 1869.
- 107.- J.L.G.- "ElFuero de Extranjería" (Revista General de Legislación y Jurisprudencia) Tomo XXII. Madrid, 1863.
- 108.- KOROVIN, Y.A.- "Derecho Internacional Público". (Trad. J. Villalba).
- 109.- LASALA LLANAS, M.- "Conciliación, Justicia y Jurisprudencia Internacionales".
- 110.- LASALA LLANAS, M.- "Sistema español de Derecho Civil Internacional e Interregional". Edito. Revista de Derecho privado. Madrid, (sin fecha).
- 111.- LASTRES, F.- "De l'expulsion des étrangers en Espagne". Trad. par M. d' Ardenne de Tizac. París, 1910.
- 112.- LAZARO DE DOU, Ramón.- "Instituciones del Derecho Público General de España con noticia del particular de Cataluña". Tomo II, Madrid 1800.
- 113.- LOBE, G.- "Gide aux droite civile et commerciaux des étrangers en

Espagne", París, 1837.

- 114.- LOPEZ DE LA CUESTA, Julián.- "Novísimo Compendio de Juzgados Militares de Colón", Madrid, 1845.
- 115.- LOPEZ Y NOVELLA, Julián.- "Novísimo Manual de Procedimientos Jurídico Militares", Madrid, 1876.
- 116.- LOPEZ SANCHEZ.- "Elementos de Derecho Internacional Público". (Vol. I, 1866) (Vol. II, 1877).
- 117.- LUCAS FERNANDEZ, F.- "La contratación en España por extranjeros, principales problemas que plantea". (Rev. Der. Priv. 1973).
- 118.- MACHADO VILLELA, C.- "Tratado elemental teórico práctico de Direito Internacional Privado", Coimbra, 1922.
- 119.- MALAQUER Y SALVADOR, Miguel.- "Derecho Consular español", Madrid, 1899.
- 120.- MARQUES GUEDES, A.- "Direito Internacional Público", Tomo II. Lisboa, 1936.
- 121.- MARQUES DE LOZOYA, "Historia de España", (Edit. Salvat)
- 122.- MARQUES DE OLIVART.- "Colección de los Tratados, Convenios y Documentos Internacionales celebrados desde el Reinado de has

ta nuestros días". Tomo VI, Madrid, 1895.

123.- MARQUES DE OLIVART.- "El Derecho internacional Público en los últimos 25 años". Tomo I; Madrid, 1927.

124.- MARQUES DE OLIVART.- "Manual de Derecho Internacional Público y Privado", Madrid, 1886.

125.- MARQUES DE OLIVART.- "Tratado de Derecho Internacional Público", 1903.

126.- MARTENS, F. de.- "Tratado de Derecho Internacional" (Madrid, Vol. I.) La España Moderna, (sin fecha)

127.- MARTENS, F. de.- "Tratado de D. Internacional" (Vol. II.- La España Moderna (sin fecha).

128.- MARTENS, F. de.- "Tratado de Derecho Internacional", (Madrid, vol. III). La España Moderna, (sin fecha).

129.- MARTINEZ Y PEREZ, Francisco.- "Compendio de procedimientos militares", La Coruña, 1867.

130.- MAYR, Robert von.- "Historia del Derecho Romano", vol. II.

131.- MEYNIAL, ED.- "Derecho Romano", trabajo inserto en el volumen "El

legado de la Edad Media" (Universidad de Oxford) Ediciones Pegaso
1944.

132.- MIAJA DE LA MUELA.- "Derecho Internacional Privado", Tomo II, Ma-
drid, 1963.

133.- MIAJA DE LA MUELA.- "Introducción al Derecho Internacional Público"
Madrid, 1968.

134.- MILLAN DE PRIEGO, "Los Extranjeros en España", Madrid, 1917.

135.- MIRANDA JUNCO, Agustín.- "Leyes coloniales", Madrid, 1945.

136.- MOMMSEN, Theodor.- "Historia de Roma" (edit. Aguilar, 1956).

137.- MONACO, Riccardo.- "Lezioni di Diritto Internazionale Público". To-
rino.

138.- MORENO QUINTANA, Lucio M.- "Tratado de Derecho Internacional" (Edit.
Sudamericana) 1963. Vol, I.

139.- NEUMANN, Barón Leopoldo de.- "Derecho Internacional Público Moderno"
(Traducción de Aniceto Sala), Madrid. La España Moderna (sin fecha).

140.- NUÑEZ DE ARENAS, Isaac.- "Bases y motivos del Tratado de Justicia
para la nueva ordenanza militar", Madrid, 1866.

- 141.- NUSSBAUM, Arthur.- "Historia del Derecho Internacional". (Edit. Revista de D. Privado), Madrid, (sin fecha).
- 142.- OGAYAR AYLLON.- "Los españoles y extranjeros" (Revista General de Legislación y jurisprudencia, 1965, Nº 218).
- 143.- OPPENHEIM, L.- "Tratado de Derecho Internacional Público". (edit. Bosch, 1961), Tomo I, Vol. II.
- 144.- ORUE Y ARREGUI, José Ramón de.- "Manual de Derecho Internacional Público", 1928.
- 145.- ORUE Y ARREGUI, J.R.- "Derecho Internacional Público".- Edit. Reus, 1927.
- 146.- OTTOLENGUI GIUSEPPE.- "Lezioni di Diritto Internazionale Pubblico". Torino.
- 147.- OYA, Francisco de.- "Promptuario del Consejo de Guerra y Jurisdicción Militar", Madrid, 1738.
- 148.- OYA, Francisco de.- "Tratado de las leyes penales de la Milicia española, procesos y consejos de Guerra"; Madrid, 1732.
- 149.- PANDO, José M^a de.- Elementos del Derecho Internacional. " Madrid, 1852.

- 150.- PANTOJA, José M^a.- "Repertorio de la jurisprudencia civil española"
Tomo I, Madrid 1886.
- 151.- PANTOJA, José M.- "Repertorio de la Jurisprudencia Civil Española"
Tomo II, 1838-1882, Madrid, 1887.
- 152.- PEES-BARBA MARTINEZ.- "Textos Básicos sobre Derechos Humanos".
- 153.- PECOURT GARCIA, Enrique.- "Una institución singular en la historia
del Derecho Internacional Privado Español": El Fuero de Extranjería"
Homenaje al Prof. Sela Sempil. Universidad de Oviedo, 1970, Tomo II.
- 154.- POESTA COSTA, L.A.- "Derecho Internacional Público". Buenos Aires,
1955.I.
- 155.- PLANAS SUAREZ, Simón.- "Condición legal de los extranjeros en Guatema
la", Madrid, 1919.
- 156.- PLANAS SUAREZ, Simón.- "Los extranjeros en Venezuela, su condición,
ante el derecho público y privado de la república", Lisboa, 1917.
- 157.- PLANAS SUAREZ, S.- "Tratado de Derecho Internacional Público" (Vol.
I, Hijos de Reus). Madrid, 1916.
- 158.- PRIMER SECRETARIO DE LEGACION.- "Nacionalidad, naturalización y ciud
adanía" (1878).

- 159.- RAVENTOS NOGUER, Manuel.- "Situación Jurídica de los Extranjeros en España" (Revista crítica de Derecho Inmobiliario 1926)
- 160.- RENOUVIN, Pierre.- "Historia de las Relaciones Internacionales". Edit. Aguilar, 1969.
- 161.- MERLE, Marcel.- "La vida internacional". Edit. Tecnos, 1965.
- 162.- RETORTILLO, A.- "Vocabulario del Derecho Internacional Público", 1910.
- 163.- RIGAUX, Francois.- "Droit International Privé", Bruxelles, 1968.
- 164.- RIQUELME, Antonio.- Apéndice al Derecho Internacional de España.- Tomo II, Madrid, 1849.
- 165.- RIQUELME, Antonio.- "Elementos de Derecho Público Internacional", Madrid, 1849.
- 166.- ROLIN, Alfreric.- "Principes du Droit International Privé", Tomo I, Paris, 1897.
- 167.- ROMERO DEL PRADO, Victor N.- "Derecho Internacional Privado", Tomo I, Córdoba 1961.
- 168.- ROUSSEAU, Charles.- "Derecho Internacional Público" (Edit. Ariel, 1966).

- 169.- SCHULZ, Fritz.- "Derecho Romano Clásico" (Edit. Bosch, 1960)
- 170.- SAENZ HERMUA Y ESPINOSA, Pedro.- "Diccionario Recopilador de los puntos de Derecho", resueltos en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia desde 1838 hasta fin de diciembre de 1885, Tomo I.
- 171.- SANCHEZ DE BUSTAMANTE Y SIRVEN, Antonio.- "Derecho internacional Privado" Habana, Tomo I, 1931.
- 172.- SANCHEZ DE LAS MATAS, Epifanio.- "Novísimo Diccionario de Legislación y Jurisprudencia"; Madrid, 1883.
- 173.- SARMIENTO, D.F.- "Condición del Extranjero en América".- Buenos Aires.- 1928.
- 174.- SARRAILH, Jean.- "La España Ilustrada de la 2ª mitad del siglo XVIII" Méjico, 1957.
- 175.- SELA Y SAMPIL, Aniceto.- "Derecho internacional". Barcelona. (Sucesores de Manuel Soler, Editores) (sin fecha).
- 176.- SIMARRO PUIG.- "Consideración jurídica de los extranjeros en la vida mercantil española" (Publicaciones del Colegio Notarial de Barcelona, 1942).
- 177.- SIMO SANTONJA, Vicente L.- "Estatuto de los extranjeros en el anti

guo derecho valenciano".

178.- SORENSEN, MAX.- "Manual del Derecho Internacional Público". Méjico.

179.- STRUVE, Vasilio.- "Historia de la Antigua Grecia" (Edit. Edaf. 1974)

Vol. II,

180.- SURVILLE, F.- "Cours Elementaire de Droit International Privé". Pa
ris, 1925.

181.- TENORIO, Oscar.- "Direito Internacional Privado", Vol. I. 1962.

182.- THOMAS, Joaquín.- "El extranjero ante el derecho público español"

"Revista de Información Jurídica" Noviembre 1950, Nº 90.

183.- TOMAS ORTIZ DE LA TORRE, José Antonio.- "El régimen jurídico de Ex
tranjería en la España del siglo XVIII y la participación del ex—
tranjero en la industria nacional". Tesis doctoral. Fac. de derecho.
Madrid, 1972.

184.- TORRES CAMPOS, Manuel.- "Principios de Derecho Internacional Priva
do". (Madrid 1883).

185.- TORRES CAMPOS, Manuel.- "Elementos de Derecho Internacional Públi
co" (Madrid, 1912).

- 186.- TRIAS DE BES.- "La condición jurídica del extranjero en España", Rev. General de Legislación y jurisprudencia, 1921, Tomo 139, año 69.
- 187.- TRUYOL SERRA.- "Fundamentos de Derecho Internacional Público", Madrid, 1970, Edit. Tecnos.
- 188.- TRUYOL SERRA, Antonio.- "Los Derechos Humanos", Edit. Tecnos.
- 189.- URGELLES, Pedro.- "Tratado Elemental de Procesos Militares", Madrid, 1854.
- 190.- VALDEAVELLANO, Luis G. de.- "Curso de Historia de las Instituciones Españolas" (De los Orígenes al final de la Edad Media) Rev. de Occidente, Madrid, 1973.
- 191.- VALDEAVELLANO, Luis G. de.- "Historia de España". II Vol. Rev. de Occidente, Madrid, 1973.
- 192.- VERDROSS, Alfred.- "Derecho internacional Público" (Edit. Aguilar, 1972)
- 193.- VERPLAETSE, Julián G.- "Derecho Internacional Privado" (Madrid 1954)
- 194.- WARD, B.- "Proyecto económico en que se promueven varias providencias dirigidas a promover los intereses de España con los medios y fondos necesarios para su planificación". Madrid, 1782.

- 195.- YANGUAS MESSIA, José de.- "Derecho internacional Privado", Parte -
General. (Editorial Reus, 1958).
- 196.- YAOTONG TCHEN.- De la disparition de la juridiction consulaire dans
certains pays d'Orient. Paris, 1932. I.

INDICE DE MATERIAS Y AUTORES

A

A (autor anónimo) 28, 42, 80, 96
99, 100, 101, 102, 119, 186,
210.

ANREU Y BERTODANO, J.A. 69, 70, 73
76, 88, 89, 90, 190, 192.

ACCIOLY, H. 157, 160.

ACOSTA, C. 142.

AGUILAR NAVARRO, M. 131.

AGUIRRE, P. 223, 233.

ALCORTA, A. 149.

ALMIRANTE, J. 217, 231, 232, 246.

ALONSO Y COLMENARES, 129, 136, 155

ALLICE, M. 164, 169, 175, 198

ANTOKOLETZ, D. 157, 162, 180.

APRAZOLA, 196, 197, 210.

ARJONA, M. 2, 5, 125, 139, 145,
209.

AVECILLA, P. 215, 228, 229, 239, 245,
248.

B

BACARDI, A. 13, 14, 30, 43, 55, 58,
85, 117, 219, 224, 240, 242, 244,
247.

BELLO, A. 147.

BENITO, S. 239.

BONET CORREA, E. 19.

BOUFFANUIS, P. 174.

BRAVO, E. 141, 142.

BUSTAMANTE, A. 146.

C

CANTILLO, A. 35, 36, 65, 66, 67, 68,
70, 74, 75, 87, 89, 90, 91, 92, -
108, 192.

CAPITANES GENERALES:

- Introducción, 232.

- Como jueces protectores de extranjeros, 233.

CAPITULACIONES,

- Aceptaciones, 156
- Concepto, 156
- Antecedentes, 159
- Su instrumentación, 163.

CASANOVA, A. 135.

CASTAN TOBEÑAS, 18.

CASTRO, AMILCAR. 146.

CASTRO Y BRAVO, 18.

CASTRO Y CASALEIS, A. 124

COLON DE LARREATEGUI, F. 116, 144
204, 227, 228, 241, 243, 247.

CONSUL (en Capitulaciones)

- Concepto, 164.
- Origen, 167.
- Privilegios, 174.

D

DESAFUERO; 95.

DESDEVISES DU DEZERT, 33

DÍAZ GIGNEROS, C. 158, 162

DÍAZ LORDA, J. 157.

DICCIONARIO DE CIENCIAS SOCIALES, 13,
16.

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DURVAN, 18.

DICCIONARIO ESPASA-CALPE, 18, 125.

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE
LA LENGUA ESPAÑOLA, 13, 14.

DIENA, J. 146. 168, 171, 172, 174, 176.

DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, M. 17, 21, 167,
172, 173, 181, 182, 189, 190.

E

ENCICLOPEDIA JURÍDICA ESPAÑOLA, 15, 19,
21, 59, 71, 94, 110.

EXTRANJERÍA:

- Aceptaciones, 19.
- Concepto, 19.
- Matriculación, 52.

EXTRANJERO:

- Aceptaciones, 14.
- Concepto, 14

Etimología, 14.

F

FENWICK, CH. 150, 151.

FERRARA, F. 159, 177.

FERRATER, E. 15, 146.

FIGURE, P. 147, 148.

FOELIX, 145, 148.

FOIGNET, R. 182.

FUERO:

- Aceptaciones, 12.
- Ambito,
- Concepto,
- Etimología,
- Génesis,

FUERO DE EXTRANJERIA:

- Aceptaciones, 22.
- Beneficiarios, 40, 41
- Excluidos, 51.
- Concepto, 22.
- Derogación, 127, 133.
- Etapas de concesión:
 - 1ª etapa, 48.

- 2ª etapa, 49

- 3ª etapa, 49

4ª etapa, 50

- Extensión:

- ratione materiae, 64

- ratione territoriae, 72

- ratione personae, 77.

- Génesis, 23, 26.

- Vigencia:

- 1ª etapa, 115.

- 2ª etapa, 123.

- 3ª etapa, 124.

G

GAND, M. 153.

GARCIA GALLO, A. 132.

GARCIA RIVES, M. 200

GESTOSO Y ACOSTA, 165, 168, 180.

GIBERT, R. 27, 94, 125, 203, 214.

GIL MENDOZA. 6.

GOBERNADOR MILITAR:

- Concepto, 218.

- Antecedentes, 219.

- Protector de extranjeros, 222.

- Funciones, 227.

GOLDSCHMIDT, W. 22, 153.

GONZALEZ HONTORIA, S, 144, 145.

GRACIA Y HERNANDEZ, J. 14, 217.

H

HERNANDEZ BRETON, A. 166, 168, ,
173, 178.

HERRERO RUBIO, A. 3.

I

IGLESIA, J.

J

J.L.F. 7, 9, 50, 53, 54, 98, 99,
113, 208, 223.

JUEZ CONSERVADOR:

- Introducción, 195.
- Como iudex privativo, 195.
- Antecedentes históricos, 197
- Funciones, 203.
- Como pseudo cónsul, de Capi-
tulaciones, 188.

JURISDICCION CIVIL (Del Fuero), 195

JURISDICCION MILITAR (Del Fuero), 216.

K

KOROVIN, Y.A. 181.

L

LASALA LLANAS, M.

LAZARO DE DAN, R. 207.

LOPEZ G. NOVELLA, J. 231, 233.

LUCAS FERNANDEZ, F, 17.

M

MALUQUER, M. 183.

MARQUES QUEDES, A. 179.

MARQUES DE OLIVART, 139, 143, 163, 182

MARTENS, F. 149, 153, 155.

MARTINEZ Y PEREZ, F. 232.

MIAJA DE LA MUELA, 125, 151.

MONACO, R. 177.

MORENO QUINTANA, L. 16.

N

NEUMANN, L. 16, 154.

NOVISIMA RECOPTILACION, 56, 109,
212, 213.

MUÑEZ DE ARENAS, I. 42, 115, 132,
230.

O

OPPENHEIM, L. 141.

ORUE, J.R. 5, 21, 29, 53, 85

P

PANDO, J. M^a. 144

PANTOJA, J.M^a. 62, 95, 225, 231.

PECOURT GARCIA, E. 27, 45, 46,
47, 48, 98, 102, 103, 104,
117, 126, 131, 137, 203, 206

PELISSIER DU RAUSAS, 160, 186.

PODESTA COSTA, L.A. 159, 160, 162
191.

PLANAS SUAREZ, S. 6, 7, 17, 140, 141,
144.

PRIVILEGIOS (Del F. de Extranjeria) 104.

R

RAVENTOS NOGUER, M. 61, 152.

RIGUELME, A. 28, 41, 42, 43, 48, 52, 80,
82, 83, 86, 96, 97, 99, 101, 103, 108
118, 120, 121, 208, 216, 226, 227, 236
238.

ROUSSEAU, CH. 161, 166.

S

SAENZ DE HERMUA, P. 16.

SANCHEZ DE BUSTAMANTE, A.

SANCHEZ DE LAS MATAS, E. 16, 132, 137.

SARMIENTO, D.F. 141.

SARRAILH, J. 34, 112.

SELA Y SAMPIL, A. 141, 143, 144.

SIMARRO PUIG, S.

SIMO SANTONJA, V.L.

SORENSEN, M. 167, 173, 179.

V

VALDEAVELLANO, L.G. 199, 220, 222.

VENDROSS, A. 153, 154.

I

THOMAS, J. 18.

TOMAS ORTIZ, J.A. 8, 206

TORRES CAMPOS, M. 8, 152.

W

WARD, B. 22, 105, 112, 113.

TRIBUNAL SUPREMO, de GUERRA,

MARINA Y EXTRANJERIA.

- Evolución histórica, 239.

- Composición, 243.

- Funciones, 246.

Y

YAOTONG TCHEN, 183, 184.

U

UNIFICACION JURIDICA, 129

URGELLES, P. 155.

S U M A R I O

	<u>Páginas</u>
P R E F A C I O	2

P A R T E P R I M E R A

T I T U L O I

I N T R O D U C C I O N A L F U E R O D E E X T R A N J E R I A

C A P I T U L O I

Significación, génesis y beneficiarios del Fuero de Extranjería;

Sección 1ª - 1. Significación del Fuero de Extranjería. Introducción.

- 1.1. Etimología, concepto y acepciones de Fuero.
- 1.2. Etimología, concepto y acepciones de extranjero.
- 1.3. Acepciones y concepto de extranjería.
- 1.4. Acepciones y concepto del Fuero de Extranjería.

12

Sección 2ª - 2. Génesis del Fuero de Extranjería.

- 2.1. Introducción.
- 2.2. Aparición del Fuero.
- 2.3. Interrelación del Fuero de Extranjería y el Juez conservador.

23

Sección 3ª -- 3. Ratio essendi del Fuero de Extran-
jería.

- 3.1. 1ª ratio. Debilitamiento polí-
tico de España en el contexto
europeo.
- 3.2. 2ª ratio. Política de atracción
de mercaderes extranjeros, im-
pulsores del tráfico comercial.
- 3.3. 3ª ratio. Política de captación
de nuevos ingresos para el Era-
rio Público.

32

Sección 4ª -- Naciones y sujetos beneficiarios y excluf
dos.

- 4.1. Introducción.
- 4.2. Naciones y sujetos beneficiarios.
- 4.3. Ensanchamiento de la jurisdicción
personae del Fuero de Extranjería.
- 4.4. Etapas en la concesión del Fuero
de Extranjería:
 - 1ª. Etapa inicial del Fuero de Ex-
tranjería. Siglo XVII.
 - 2ª. Etapa de consolidación del --
Fuero. Siglo XVIII.
 - 3ª. Etapa de restablecimiento del
Fuero. 1ª mitad siglo XIX.
 - 4ª. Etapa de reestructuración del
Fuero. Real Decreto de 17 de
noviembre de 1.852.

40

Sección 5ª - 5. Matriculación de la Extranjería.

5.1. Trascendencia de la matriculación.	52
---	----

CAPITULO II

Ambito de extensión y vigencia del Fuero de Extranjería.

Sección 1ª - 1. Extensión del Fuero de Extranjería.

- 1.1. Introducción.
- 1.2. Extensión de la jurisdicción --
ratione materiae.
 - a) Capítulos de Felipe III de 28
de septiembre de 1607.
 - b) Reales Cédulas de Felipe IV de
1645 (19 de marzo, 16 de junio
y 9 de noviembre)
 - c) Tratado de Münster de 1/11 de
septiembre de 1.647.
 - d) Tratado de Madrid de 23 de mayo
de 1.667.
 - e) Capítulos de Privilegios de la
villa de Santander de 12 de Sep-
tiembre de 1.700.
 - f) Real Decreto de Extranjería de
17 de noviembre de 1.852.
- 1.3. Extensión de la jurisdicción ratione
territoriae.

- a) Capítulos de Felipe II de 1607.
- b) Reales Cédulas de Felipe IV de 1645 (19 de marzo, 26 de junio y 9 de noviembre).
- c) Tratado de Münster 1/11 de septiembre de 1647 entre España y la Liga Hanseática.
- d) Tratados de 23 de mayo de 1667.
- e) Capítulos de Santander de 12 de septiembre de 1700.
- f) Real Decreto de Extranjería de 17 de noviembre de 1852.

1.4. Extensión de la jurisdicción *ratione personarum*.

1.5. ¿El Fuero de Extranjería fue sólo civil o también criminal?

1.6. ¿El Fuero de Extranjería fue sólo activo o pasivo?

1.7. ¿El Fuero de Extranjería tuvo vigencia en América española?

1.8. ¿El Fuero de Extranjería es aplicable sólo a los extranjeros transitorios o también a los *avecindados*? . . . 63

Sección 2ª - 2. Supuestos de Desafuero. 95

Sección 3ª - 3. Tipología de Privilegios. 104

Sección 4ª - 4. Periodo de vigencia del Fuero de Extran

jería. Introducción.

- a) 1ª etapa. Fase anterior al Real Decreto de 17 de noviembre de 1.852.
- b) 2ª etapa. Fase comprensiva desde 17 de noviembre de 1852 a 6 de diciembre de 1868.
- c) 3ª etapa. Fase comprensiva desde 6 de diciembre de 1868, hasta la época actual. 114

Sección 5ª - 5. Tendencia de supresión del Fuero de Extranjería.

- 5.1. Antecedentes.
- 5.2. La unificación jurídica.
- 5.3. Derogación del Fuero de Extranjería.

Decreto de 6 de diciembre de 1868.. 127

TITULO II

EL FUERO DE EXTRANJERIA DENTRO DEL CONTEXTO DE LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA ESPAÑOLA.

CAPITULO I

El fuero y el poder jurisdiccional

Sección 1ª - 1. El extraneum y la administración.

Introducción.

- 1.1. Sumisión del foráneo a la jurisdicción territorial.
- 1.2. Igualdad de trato con el nacional.
- 1.3. Recíproco respeto internacional.
- 1.4. La comparecencia en juicio del extraneum.
- 1.5. El extranjero ante el proceso.
- 1.6. La protección penal del extraneum. . 138

Sección 2ª - 1. El Fuero de Extranjería y el Sistema de Capitulaciones.

- 1.1. Introducción.
- 1.2. Aceptaciones y concepto de las Capitulaciones.
- 1.3. Antecedentes de las Capitulaciones.
- 1.4. Interrelación del sistema de Capitulaciones y la institución con-

ular. Instrumentación de las

Capitulaciones: El Cónsul,

1.5. Concepto.

1.6. Origen de la institución consular.

1.7. Privilegios y funciones de los
Cónsules en los países de Capitu-
laciones.

1.8. El Fuero de Extranjería no es un
mero sucedáneo sui géneris espa-
pol del régimen de Capitulacio-
nes.

1.9. Introducción.

1.10. Analogías y diferencias entre el
Fuero de Extranjería y las Capitu-
laciones.

1.11. El Juez Conservador: Un pseudo -
Cónsul de Capitulaciones. 156

CAPITULO EI

Organos instrumentales del Fuero de Extranjeria;

Sección 1ª - Jurisdicción civil del Fuero de Extran- jeria,

1. Organo competente en 1ª Instancia;

El Juez Conservador. Introducción.

1.1. El Juez Conservador como iudex
privativo. Concepto.

- 1.2. Antecedentes históricos del Juez
Conservador.

1.3. Funciones. 195

Sección 2ª - Jurisdicción militar del Fuero de Extran-
jería.

1. Introducción.

2. Organos competentes en 1ª instancia.

A) Los gobernadores militares;

2.1. Concepto.

2.2. Antecedentes históricos.

2.3. El Gobernador militar como Juez
protector de Extranjeros.

2.4. Funciones.

B) Los Capitanes Generales;

3.1. Introducción.

3.2. Los Capitanes Generales como jue
ces protectores de extranjeros. . 216

Sección 3ª - Organo competente en la 2ª Instancia;
El Tribunal Supremo de Guerra, Marina
y Extranjería.

1. Evolución histórica.

1.2. Composición

1.3. Funciones. 239

CAPITULO III

<u>CONCLUSIONES</u>	250
BIBLIOGRAFIA	260
INDICE DE MATERIA Y AUTORES.	283
SUMARIO	I.

— — — — —

RJ. 175. 448



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5317380412

TE
1631

PARTE SEGUNDA

VOLUMEN SEGUNDO

ANALISIS SISTEMATICO DE LA NORMATIVA SOBRE EL

FUERO DE EXTRANJERIA



Tesis Doctoral: "EL FUERO DE EXTRANJERIA
EN ESPAÑA"

Por: JOAQUIN BLANCO ANDE

Director de la Tesis: Dr. D. FERNANDO M^a
CASTIELLA MAIZ.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

ADVERTENCIA PRELIMINAR

En este volumen, se recoge por orden cronológico, la normativa a nuestro juicio más trascendente relativa al Fuero de Extranjería. Para simplificar la labor del estudioso, se sistematiza la misma, acompañada de un breve análisis y juicio crítico. La recopilación que como fondo documental, se aporta en el volumen tercero, nos obliga - a fin de no - ser reiterativos - a ser parcos en el presente.

EL FUERO DE EXTRANJERIA EN ESPAÑA

DURANTE LA DINASTIA DE LA

CASA DE AUSTRIA

REINADO DE FELIPE III

(1598 - 1621)

INSTAURACION DEL FUERO DE EXTRANJERIA EN LOS CAPITULOS DE
PRIVILEGIOS CONCEDIDOS POR FELIPE III PARA LA HANSA TEUTO
NICA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1607. (1)

1. Introducción.— Un estudio detenido de los presentes Capítulos, nos obliga a considerar que los Privilegios dispensados a los naturales de las Ciudades Confederadas de la Hansa Teutónica en los dominios de Portugal, confirmados y ampliados por Su Majestad Católica para Andalucía y demás — reinos de Castilla fueron otorgados no sólo en función de la lealtad y sig nos de amistad de aquellos su relación con los intereses españoles, sino — también por la generosidad española. En el encabezamiento del texto de los aludidos Capítulos, se nos dice con aquel tenor "Y habiendo oído, y trata- do grata y benévolamente a estos Embajadores — de la Hansa Teutónica —, — acordándonos de los tiempos pasados, cuan preclaramente ha merecido siempre , con nosotros y nuestros Reinos, la HANSA TEUTONICA, habiendo desde que se comenzó el Comercio entre nosotros, permanecido siempre en lealtad y corres pondencia, comunicándonos no solamente las utilidades de sus mercaderías, sino que también ha empleado su vida, y derramado su sangre, no solo una —

(1) ABREU Y BERTODANO, J.A. "Colección de los Tratados de la Paz, Alianza, Neutralidad... hechos por los pueblos, Reyes y Príncipes de España des de dentro del establecimiento de la Monarquía Gothica hasta el feliz reinado de N.S.D. Felipe V (Reinado del Sr. Rey D. Felipe III. Parte I.) Madrid, año MDCCXL, pág. 375, a 382.

vez, por la seguridad de nuestros Reinos y así acordándonos de todo esto, hemos juzgado, que habiendo cumplido ellos por su parte, no hemos de ser tardos en ser agradecidos" (2)

Lo más trascendente de los derechos conferidos por Felipe III a los Hanseáticos, en la presente concesión graciosa, es sin duda la dispensación del Fuero de Extranjería a aquellos súbditos.

En el contexto de los Capítulos de 28 de septiembre de 1607, podemos acotar la siguiente teoría de privilegios, comenzando por el análisis del Fuero de Extranjería en su acepción estricta - como singular privilegio jurisdiccional- que se instaura en los apartados 18 al 27, 42 y 43 de los mismos.

2. EL FUERO DE EXTRANJERIA STRICTU SENSU.

JURISDICCION PRIVILEGIADA DE LOS HANSEATICOS.

2.1. Creación del Juez Conservador de los Hanseáticos. - En el apartado 18 de los Capítulos se confiere a los Hanseáticos, el privilegio de sólo poder ser presos, citados, condenados, y juzgados en causas civiles y criminales por un Juez especial conservador que se crea exclusivamente para ellos.

Sólo en materia relativa al canon de la Alcavala, los Hanseáticos no gozarán de fuero propio, y quedarán sometidos a la jurisdicción general del Te

(2) Ibid. op. cit. pág. 375.

sorero Mayor del Reino". Iten aprovamos, queremos y concedemos, los Hanseáticos, que por razón del Comercio ván y vienen, o se detiene y habitan en nuestro reino, no puedan ser presos, citados, condenados, ni juzgados en ninguna Causa Civil, ni Criminal por ningún Magistrado, o Juez, sino solamente por aquel especial Conservador y Juez, que les daremos, pero en las Causas tocantes á nuestra Alcavala, podrá conocer, y Juzgar el Tesorero Mayor de nuestro Reyno" (3).

La jurisdicción personal del Hanseático se extiende a que solo su Juez Conservador, puede registrar sus tiendas y visitar -- inspeccionar -- mejor dicho --, sus casas. Excepto en el supuesto de que algún malhechor pretendiere buscar asilo en las mismas, podía el Ministro de Justicia, que le siguiere, efectuar el requerimiento oportuno. "Iten aprovamos, que remos, y concedemos, que no sea lícito á ningún Magistrado, ó Juez de cual quiera dignidad -- ó preeminencia que sea, sino solamente á su Conservador y Juez propio, visitar sus Casas, ni registrar sus Tiendas; pero en caso, que algún malhechor, huyendo del delito, se acogiere a ellas, podrá reque rirlas el Ministro de Justicia, que le siguiere" (4). A mayor abundamiento, aún en el caso de que el Tesorero Mayor del Reino, tuviese indicios -- bastantes de que en las casas y tiendas de los Hanseáticos, existen mer caderías escondidas que no pagaron la Alcavala, no podía girar visita de

(3) Ibid. op. cit. pág. 378.

(4) Ibid, op. cit. pág. 378, (ap. 19)

inspección en aquellas, por estar reservado este derecho al Juez Conservador acompañado de Notario público, quienes expondrán posteriormente al Tesorero el resultado de su investigación: "Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que cuando el Tesorero Mayor de nuestro Reyno deseara visitar las Casas, y Tiendas de los Hanseáticos, por tener indicios bastantes de que en ellas ay mercadurias escondidas, de que se paga Alcavala, y que - las han esimido de ella; lo que pueda hacer solamente su propio Juez, enviando algunos de los suyos con el Notario Público, para hazer la visita y averiguación, y después lo refieran al Tesorero y assi a nadie le sea lícito hazerlo sin el Notario, y sin la voluntad de su Conservador" (5)

Como puede inferirse del contenido de esa normativa, la protección jurídica de la intimidad de su hogar, y la reserva de sus negocios, queda tutelada al máximo, sin intromisiones extrañas a su fuero personal.

- 2.2. Extensión de la Jurisdicción. - La extensión de la jurisdicción territorial que se otorga al Juez Conservador en la ciudad de Sevilla, tanto en las causas civiles y criminales, se proyecta más allá de las murallas de aquella, y se amplía hasta seis leguas alrededor, bien sean los Hanseáticos actores, bien reos. (Apartado 21). No se alude cual sería la competencia territorial del Juez Conservador en los demás territorios del Reino de -

(5) Ibid. op. cit. pág. 378. (ap. 20)

Castilla o en las restantes poblaciones de Andalucía, analógicamente debemos inferir que el alcance geográfico de su jurisdicción, alcanzaría una extensión de 6 leguas de radio, a contar desde las murallas de la respectiva ciudad: "Iten, aprovamos, queremos, y concedemos que el Juez (que especial hemos dicho les daremos) juzgue en qualquiera Causa Civil, y Criminal, no solamente dentro de los muros de nuestra Ciudad de Sevilla, sino también fuera de ellos, seis leguas alrededor, ora sean los Hanseáticos autores, ora Reos; exceptos solamente las personas privilegiadas, si con ellas se travare alguna controversia, ó pleyto; porque en este caso, si las personas privilegiadas padecieren las partes de Reos, podrán parecer delante de su Juez" (6)

- 2.3. Recurso de Apelación.- Se arbitró un sistema singular de recurso en alzada. Contra las sentencias en primera instancia del Juez Conservador, en los litigios entre Hanscáticos, podía el perjudicado apelar a la Hansa Teutónica. Cuando sólo uno de los litigantes era Hanseático, el recurso de alzada debía ejercitarse ante el Consejo Civil de Sevilla "Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que la Sentencia dada por su Juez, si los Litigantes fueren ambos Hanseáticos, pueda la parte vencida llevar, y apelar della á la Hansa Teutónica; pero si el pleyto fuere decidido entre -

(6) Ibid. op. cit. pág. 379. (ap. 21)

Hanseático, y otro Subdito de nuestro Reyno, ó Extrangero, se pueda apelar á nuestro Consejo Civil de Sevilla" (7)

A fin de reducir los supuestos de apelaciones sin apoyatura justa y de escasa repercusión económica, autorizando solamente aquellas en que la cantidad juzgada superase los cien ducados: "Item aprobamos, queremos, y concedemos, que no sea lícito apelar de simple Interlocutoria, ni tampoco de la Sentencia definitiva; sino es que la suma juzgada excediere de cien ducados". (8).

- 2.4. Justicia rápida.— La agilidad procesal en los litigios en que intervienen Hanseáticos se les reconoce ampliamente de esta forma: "Item aprobamos, queremos y concedemos, que las Causas de los Hanseáticos se despachen aprisa, y no se alarguen cosa ninguna" (9). Si la celeridad en todo proceso es una constante perseguida en toda normativa procesal y no siempre lograda-, no tiene nada de extraño que se impartiere asimismo ese beneficio a los Hanseáticos, y que se insistiese sobre ese punto con esta terminología: "Item aprovamos, queremos, y concedemos, que en aquel caso, en que la Sentencia passare por apelación á nuestro Consejo Real, el Presidente de nuestro Consejo, ó Gobernador cometa toda la Causa á dos letrados, y si fuere

(7) Ibid, op. cit. ap. 23, pág. 379.

(8) Ibid. op. cit. ap. 23, pág. 379.

(9) Ibid. op. cit. ap. 25, pág. 379.

necesario, á tres; y á lo sumo, á cuatro: los quales no solamente examinen diligentemente la Sentencia definitiva, sino también todas las interlocutorias de la primera instancia; y después ellos mismos pronuncien definitivamente lo que fuere de derecho; y de este juicio ninguna pueda más apelar".

(10)

2.5. Garantías en la detención y prisión.— La conducción del preso Hanseático sólo podía efectuarla su Juez Conservador sin que tuvieran atribuciones a tal efecto los restantes órganos de la jurisdicción común. Su ingreso en prisión debía verificarse únicamente por causa urgente y grande. Los beneficios y garantías jurídicas concedidas, decían así: "Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que cuando por algún delito fuere necesario llevarlos a la Cárcel, en este caso su mismo Juez los lleve á ella; y si la causa fuere tal, que aya lugar de tomar fianzas, las admita siempre el Juez sin dificultad, y no se proceda a prisión sin grande, y urgente causa"

(11).

2.6. Cosa juzgada.— La ejecución de la cosa juzgada recaía en el Juez Conservador de los Hanseáticos, tanto si la litis había sido instruida por él, como si lo hubiere sido por el Tesorero - en las causas de Alcavala - o -

(10) Ibid. op. cit. ap. 24, pág. 379.

(11) Ibid. op. cit. ap. 26. pág. 379.

bien por los jueces de Apelaciones, (apartado 27), qué duda cabe que el - conferir al Juez Conservador la ejecución de la litis, en la que eran par te los Hanseáticos, en todos los supuestos que podían ofrecerse, indepen- dientemente que aquella fuese o no instruida por él, creaba una enorme se guridad y confianza jurídica en sus beneficios. El embargo de los navios y bienes de los Hanseáticos se prohibía con estos términos: "Item aprove- mos, queremos, y concedemos, que los Hanseáticos, sus Navios, ni bienes no padezcan embargos en nuestros Reynos, y mucho menos represallas; sino que los delitos tengan sus autores, y se castiguen por la vía del derecho, y uno por otro no pague el delito" (12)

- 2.7. Sanción por vulneración del Fuero de Extranjería.- La posible vulneración de los Privilegios otorgados en estos Capítulos, se sancionaba con multa de cien ducados, que debía de cobrar precisamente el Juez conservador de los Hanseáticos distribuyéndose su importe de esta manera, la cuarta par- te se ofrecía al Descubridor y el resto para los pobres (Apartado 42). Era rigurosa la multa por lo elevado de su importe, lo que debía producir un gran impacto inhibitorio entre los posibles quebrantadores de los Privile- gios aludidos. Era una pena más bien con carácter preventivo, que represivo.

(12) Ibid. op. cit. apartado 38, pág. 381.

3. EL FUERO DE EXTRANJERIA LATO SENSU. JURISDICTIO COMPLEMENTARIA.

3.1. El Cónsul.

La figura singularísima del Juez Conservador para los Hanseáticos quedaba complementada, con la del Cónsul, que la propia HANSA podía elegir, y que tenía por función la de velar para que se cumpliesen los Privilegios, Pactos y Transacciones que se referían a aquellos. La circunstancia de que la elección del Cónsul quedase circunscrita con carácter de monopolio al libre albedrío de la HANSA, robustecía la confianza de los Hanseáticos en su persona y en su "savoir faire", y confería a su gestión tutora una gran trascendencia y utilidad. En los Capítulos de Privilegios se configuraba la presencia del Cónsul y se ordenaba su actividad tutelar, de esta forma: "Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que pueda la Hansa constituir un Cónsul, o más en nuestro Reyno, par que juntamente con - el Conservador, y Juez, que se les diere, haga que se les guarden sus Privilegios, y firmemente se tengan sus Pactos, y Transacciones, y así, qualquiera que la Hansa eligiere, y nombrare no solamente le confirmaremos de buena gana, sino que también le autorizaremos, para que lo estimen nuestros oficiales, y Ministros, y con tanto mayor fruto exerza su oficio (13) "Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que pueda la Hansa enviar alguno

(13) Ibid. op. cit. ap. 43. pág. 381, 2.

de los suyos á nuestro Palacio, que le requente siempre y cuide también de que se observen los Privilegios á los Hanseáticos, y los pactos de - los conciertos se les cumplan" (14). La proximidad del cónsul al Rey de España, por el hecho de poder visitar periódicamente su palacio, reconocido en el apartado 44, tiene a nuestro modo de ver, una importancia decisiva en todo lo que pudiera redundar en beneficio de los Hanseáticos, toda vez que se preocuparía el Cónsul de proteger y defender los intereses de éstos, ante el mismo Monarca español, sin necesidad de acudir ante otras instancias inferiores.

3.2. Protección del Comercio Hanseático: La Lonja.- La creación de una residencia y Lonja para los Hanseáticos viene reconocida en el apartado 45, con claridad meridiana, así: "Iten, aprobamos, queremos, y concedemos, que pueda la Hansa edificar en nuestra ciudad de Sevilla una Casa Pública, o Residencia para que florezca más la mercadería, y tengan Lonja, conforme la tienen en otros Reynos, para que les dáremos sitio acomodado; y no los dexaremos de ayudar en sus gastos, y con mayores privilegios, si fuere necesario, haciéndolo lo más comodamente que se pudiere". (15).

Com buen sentido, se prohíbe gozar de los privilegios dispensados en estos Capítulos a aquellas ciudades Teutónicas que no quisieren contri

(14) Ibid. op. cit. ap. 44. pág. 382.

(15) Ibid. op. cit. ap. 45. pág. 382.

buir a los gastos que hubiere satisfecho la Hansa para su obtención. En este sentido el apartado 46, manifiesta que: "Iten aprobamos, queremos, y concedemos, que si acaso por esta gracia deste nuestro concierto, y comunicación de comercio hubiere hecho, ó hiziere algunos gastos la Hansa Teutónica, en que algunas ciudades no quisieren tener parte; que estas mismas Ciudades no sean partícipes destos Privilegios hasta que igualmente hubieren satisfecho los gastos". (16).

4. PRIVILEGIOS DEL IUS COMMUNICATIONIS

Resultó claro el propósito de Felipe III de extender los Privilegios, concedidos a los súbditos de las ciudades Confederadas de la HANSA TEUTONICA, que en principio se limitaban a los dominios de Portugal, y - que por estos Capítulos se amplían a las relaciones comerciales con los Reinos de Castilla y Andalucía a cambio de una justa correspondencia de lealtad por parte de los beneficiarios con respecto a nuestra patria.

El derecho de libre tránsito y arribada a puertos españoles es - reconocido en el apartado 1º de los Capítulos, con los siguientes términos: "Primeramente aprobamos, queremos y concedemos, que los Hanseáticos puedan arribar á todos los puertos del dicho nuestro Reyno, Riveras, y - Distritos, libre y seguramente, sin Pasaporte, ó otra Licencia general, ó

(16) Ibid, op. cit. ap. 46, pág. 382.

especial en los Navios, así propios, como arrendados, y cualquier bienes, y mercaderías de todo género, y detenerse en ellos lo que les pareciere, y salir de ellos cuando quisieren" (17)

5. PRIVILEGIOS DE COMERCIO Y ADUANA.

Entresacamos como privilegios de carácter aduanero y administrativo los que se recogen en los apartados 2 y 3 de los Capítulos, con el texto que transcribimos seguidamente: "Iten aprovamos, queremos y concedemos, que de aquí adelante, ningunos soldados visiten los Navios de los Hanseáticos, y si acaso el Tesorero Mayor de nuestro Reyno, ó los mismos Alcavaleros quisieren embiar algunas Guardias á los Navios, aya de ser a su costa, sin que permitan, que saque, ni pidan cosa alguna á los Hanseáticos. (18).

Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que nuestros ministros, no les saquen las mercaderías de sus Navios; sino que primero requieran a los Maestros de los Navios, y Dueños de las mercaderías, las descarguen; y si acaso se hallaren en la Ciudad, tres horas antes". (19).

Asi mismo, llama la atención el trato que se dispensa a los Hanseáticos que vinieren á Sevilla, y a los demás lugares marítimos - no se habla para nada de las villas y pueblos del Reino de Castilla para los que el -

(17) Ibid. op. cit. pág. 376.

(18) Ibid. op. cit. pág. 376.

(19) Ibid. op. cit. pág. 376.

apartado 7 confiere la exención del pago de la Alcavala en los supuestos que el mismo prevé y cuyo tenor literal reproducimos: "Juntamente aprovamos, queremos, y concedemos que los Hanseáticos, que vinieren a Sevilla, y á los demás Lugares Marítimos, no paguen ninguna Alcavala de la comida ni bebida, ni sus vestidos, fundas, ni cubiertas de sus mercaderías". (20)

Los tantos por ciento en concepto de Alcavala y de Almojarifazgo, se reducían al 8º y 5% respectivamente, lo que da idea del trato benevólulo que en materia aduanera recibían los Hanseáticos; su composición se consagra en el apartado 8 de los Capitulares que comentamos; su texto dice así: "Iten aprovamos, queremos y concedemos, que de las mercaderías que truxeren (que arriba no se han expuesto) paguen ocho por ciento en nombre de Alcavala, y cinco por ciento en nombre de Almojarifazgo, y sobre esto no se les pida cosa alguna" (21).

Los apartados 31 y 32 ratifican el trato generoso al Hanseático con el siguiente texto: "Iten aprovamos, queremos y concedemos, que sea lícito á los Hanseáticos, llevar sus mercaderías que huvieren traído, y aún no vendido, pagada una vez la Alcavala, conforme al tenor de los Privillegios, fuera del Reyno otra vez á su casa, ó adonde quisieren, sin ningún embarazo". (22).

(20) Ibid. op. cit. pág. 377.

(21) Ibid, op. cit. pág. 377.

(22) Ibid. op. cit. pág. 377.

"Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que paguen tan solamente el cinco por ciento al Almojarifazgo de las mercaderías compradas en nuestro Reyno, y que los Hanseáticos hubieren de sacar, exceto de los Olores, de que no se acostumbra pagar cosa alguna". (23).

Ante la posibilidad de que los Hanseáticos pudieran ser lesionados en sus intereses, por una valoración exagerada del precio de sus mercaderías, que echase por tierra el beneficio de serles aplicado unos porcentajes bajos en concepto de Alcavala y de Almojarifazgo, se les ampara en los apartados 9 y 11, en unos términos que no dejan lugar a dudas respecto de la intención generosa de nuestra Patria hacia ellos; se les concede a los Hanseáticos que: "Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que nuestros Tesoreros, ó arrendadores no precien en más las mercaderías de los Hanseáticos, que en realidad de verdad valen; y que los mismos arrendadores, ó nuestros Tesoreros estén obligados á recibir en pago de la Alcavala las mercaderías tassadas, y pagar a los dueños dellas lo que sobrare (23 bis) "Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que los mismos Hanseáticos pongan precio á sus mercaderías y nos precise otro ninguno; y les sea lícito comprar en lo menos que pudieren, y vender en quanto más pudieren" (24)

El derecho de los Hanseáticos de labrar moneda en nuestro Reino

(23) Ibid. op. cit. pág. 380.

(23 bis) Ibid. op. cit. pág. 377.

(24) Ibid. op. cit. pág. 377)

de su oro y plata, se recoge en el apartado 17 de los Capítulos advirtiendo que "siempre sean despachados antes que otros en la Casa de la Moneda"
(25)

6. LA CLAUSULA "IN DUBIO PRO HANSEATICO".

El principio o aforismo in dubio reo o pro operario, tan caracteristicas en el derecho penal o en el laboral, se consagró mutatis mutandi, a favor del Hanseático en el apartado 47, de esta suerte: "Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que si fuere menester hacer, alguna interpretación de estos Privilegios, que siempre la interpretación se haga benignamente por los Hanseáticos, y de ninguna manera contra ellos" (26). Para cargar más el acento en la concesión de estos privilegios, en el apartado último de los mismos, se solemniza su otorgamiento con un léxico formalista que deja bien sentado cuál era la intención de su autor. El texto dice así: "Y así todos los sobredichos Capítulos de Privilegios, cada uno, y de por sí, aprobamos, confirmamos, y de nuevo concedemos á las Ciudades Confederadas de la Hansa Teutónica y á todos, y cada uno de sus súbditos, Ciudadanos y Vecinos, y á los dependientes de ellas, en nuestra Castilla, y Reynos para que perpetuamente de ellas, en nuestra Castilla, y Reynos para que perpetuamente

(25) Ibid, op. cit. pág. 378.

(26) Ibid. op. cit. ep. 47. pág. 382.



petuamente los posean y gocen, y prometemos con palabra Real, de que nosotros, y nuestros Sucesores los observaremos firmemente, ora tengamos - Paz, ora guerra, con los rebeldes en Flandes, no obstante las leyes de nuestro Reyno, Ordinaciones, Sanciones y qualesquiera Constituciones: para cuya fé, y Testimonio, pudimos á este nuestro Diploma, y le firmamos de - nuestra mano. Dado en Madrid, á 28 de septiembre de 1607 años". (27)

7. PRIVILEGIOS PERSONALES

- 7.1. Derecho de construcción de casas.- El libre ejercicio y disfrute de la libertad personal por parte de los Hanseáticos es determinada con variada fórmula. De un lado se les concede el derecho de edificar Casas y Tiendas, dentro y fuera de los Muros de Sevilla. El apartado 28 preceptúa que "Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que sea lícito á los Hanseáticos edificar Casas, y Tiendas dentro, y fuera de los Muros de nuestra Ciudad de Sevilla; y que de ninguna manera se les haga molestia en sus personas, ó mercaderías; ni sus Casas, Tiendas se embaracen con Huéspedes, o Cavalgaduras. (27 bis)

(27) Ibid. op. cit. ap. último. pág. 382.

(27 bis) Ibid. op. cit. ap. 28. pág. 379-80.

7.2. Exoneración del servicio militar y del pago de tributos.

De otra parte, se les respeta a los Hanseáticos, el total disfrute de su libertad personal, y la exención total de todo servicio o Milicia, así como de todo escote, pensión o Tributo, siendo inmunes a los - Oficios tanto Patrimoniales, como Personales. El apartado 29 impone esta fórmula: "Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que qualesquiera de las ciudades Hanseáticas, que vivieren en nuestro Reyno, sean totalmente libres, e inmunes de todos los oficios, así Patrimoniales, como Personales; y en especial del cargo de Tutela, y de todo Escoto, Pensión, y Tributo, tan ordinario como extraordinario; y también de todo servicio, y milicia, así en la Mar, como en la Tierra". (28).

Como puede apreciarse de la lectura de estos Capítulos, los Apartados engarzan a través de sus Textos, distintos Privilegios y Concesiones Reales, que integran un singular Estatuto Personal, en materia jurisdiccional (civil y penal), aduanera (fiscal), sucesoria, y de pleno reconocimiento del libre ejercicio de sus libertades. En los apartados 34, - 35 y 36 se consagra que: "Iten aprobamos, queremos, y concedemos, que puedan llevar sus mercaderías en los Navíos que quisieren" (29). "Iten aprobamos, queremos, y concedemos, que sea lícito á los Hanseáticos poder lle

(28) Ibid. op. cit. op. 29. pág. 380.

(29) Ibid. op. cit. op. 34, pág. 380.

var fuera de nuestro Reyno todo el Oro y Plata que hubieren juntado, pues toda moneda de Oro, y Plata la havrán amontonado, ó del Oro, y Plata, ó del Trigo, o de las Municiones Militares que huvieren vendido" (30).

"Iten aprobamos, queremos, y concedemos, que puedan llevar cambio del dinero, que no huvieren empleado". (31).

- 7.3. Inmunidad temporal de personas y bienes en caso de guerra. - Por último - para el supuesto de declaración de guerra entre España y las Ciudades Hanseáticas, se protegen los intereses de los naturales de las mismas, con esta declaración: "Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que cuando (lo que Dios no quiera) los Hanseáticos huvieran de salir del Reyno por ocasión de la Guerra, lo puedan hacer esto licitamente, así ellos, como sus agentes, y Ministros, con todos sus bienes, y mercaderías; pero de tal manera, que sean requeridos un año, y un día antes". (32). Debemos presumir por reciprocidad, que iguales garantías y plazos para abandonar el territorio, tendrían los españoles en las ciudades de la Hansa.

(30) Ibid. op. cit. ap. 35. pág. 380.

(31) Ibid. op. cit. ap. 36. pág. 380.

(32) Ibid. op.cit. ap. 37, pág. 380-1.

LEGISLACION COMPLEMENTARIA DE LOS CAPITULOS DE PRIVILEGIOS DE
FELIPE III CONCEDIDOS A LOS HANSEATICOS EL 28 DE SEPTIEMBRE DE
1607.

Transacción ajustada entre Felipe II y las Ciudades Hanseáticas el 7 de
Noviembre de 1607. (33)

1. Introducción. - El texto de la misma afecta a lo que entendemos por -
Fuero de Extranjería lato sensu, desarrollándolo y aclarándolo, abstrac-
ción hecha del concepto de Juez Conservador. La razón esencial de esta -
Transacción estuvo en la necesidad de fijar el modo de practicar los Pri-
vilegios de Comercio concedidos por los Capítulos de 28 de septiembre de
1607. No había transcurrido mes y medio desde el otorgamiento de los Ca-
pítulos de Privilegios concedidos por Felipe III a los súbditos de la -
Hansa Teutónica, cuando fué preciso complementar aquella Concesión Real,
con la transacción que vamos a comentar y al objeto de esclarecer las du-
das que podían presentarse en la aplicación de los Privilegios dispensa-
dos en septiembre de 1607. Coinciden ambos textos en subrayar como los Pri-
vilegios solicitados por los Hanseáticos para su goce en tierras del Rei

(33) ABREU Y BERTODANO, J.A. Op. cit. (Reinado del Sr. Rey. D. Felipe III
Parte I.) Madrid, MDCCXL. Pág. 383 a 390.

no de Castilla tiene su precedente en los Privilegios que los Reyes de Portugal les dispensaban en tierras de Portugal. Así en los Capítulos de 28 de septiembre de 1607, se nos dice en su encabezamiento: "Entre otros sus privilegios, que les concedieron los Reyes de Portugal, nuestros antecesores" (34). Y de otro lado, la Transacción de 7 de noviembre de 1607 se hace eco en sus primeros incisos, del origen portugués de los Privilegios que comenzarán a recibir los Hanseáticos en la península ibérica, y ratifica, con esta terminología, lo acordado en los Capítulos anteriores: "Item su Majestad confirma a los naturales de dichas Ciudades de la Confederación Hanseática de los Privilegios, que por los Serenísimos Reyes de Portugal, sus predecesores les fueron concedidos, en la forma que más particularmente se contiene en el Recaudi, que por uno de los Secretarios de aquel Consejo se les dará, para que puedan gozar de ellos los naturales de las dichas ciudades, conforme a lo Capitulado en esta Transacción, en los reinos de Portugal.

Así mismo, deseando complacer a las dichas Ciudades, su Majestad les ha concedido, y concede, algunos de los dichos Privilegios, para que puedan gozar de ellos en estos Reinos de Castilla, como se verá por el Recaudo, que de ellos se les dará" (35).

(34) ABREU Y BERTODANO, J.A. op. cit. pág. 375.

(35) Ibid. op. cit. pág. 383.

2.- Libertad de comercio reciproca.- El derecho de libertad del comercio reciproco entre españoles y hanseáticos, así como el de entrada con navíos en los Puertos, Senos, y distritos respectivos se desarrolla muy ampliamente en los primeros incisos de las Transacciones, con este tenor literal: "Y para que el corriente del Tratado, y Comercio de las dichas Ciudades se continúe con más facilidad, y abundante fruto de entrambas Partes, quitando los tropiezos, y embarazos, que de algunos años de esta parte se han ofrecido; se ha concertado, y concluído entre su Majestad, y los dichos Legados, que el Trato, y Comercio entre los Naturales Subditos, y Moradores de entrambas partes se continúa, y sea siempre libre á los súbditos de su Majestad en las dichas Ciudades, y á los Hanseáticos en todos, y cualesquiera de los reynos, y Señoríos de su Majestad donde hasta agora se les ha permitido, sin alterar en esta parte las costumbres y leyes, que se han guardado en tiempos pasados y que puedan entrar en todos los Puertos, Senos, y Distritos de los dichos Reynos, en los cuales en tiempos pasados solían entrar salva, y seguramente, sin que hayan de pedir salvocoducto, á otra licencia con sus Navíos, así cargados, como para cargar; meter mercancias, como no sea de las prohibidas por Leyes, y Ordenanzas expresas de estos Reynos, comprar y vender en ellos cuanto quisieren, y á los precios que lo pudieren concertar, tomar el mantenimiento necesario para su sustento, y viaje a precios justos atender el aderezo de sus Navíos, y partir de los dichos Puertos con sus

bienes, y mercancías, habiendo pagado los derechos, y tallas, según los estatutos de los Lugares y sus Privilegios, con la misma libertad, y ir á sus propias tierras, ó a las ajenas, como no sea á las de las Provincias Unidas de los Belgas, de la manera que quisieren, sin ponerles impedimento, ni ser compelidos a esperar fuera de los Puertos, así á la entrada, como á la salida. (36).

Destacamos los beneficios de que los Hanseáticos, pudiesen comprar y vender en los puertos españoles, cuanto quisieren, y a los precios que pudiesen concertar, sin limitaciones de ningún género, y en contrapartida la prohibición de que desde puertos españoles llevasen manufacturas españolas a las Provincias Unidas de los Belgas; esta restricción se justifica si pensamos en el estado de guerra intermitente entre España y estas provincias, que disculpaba que Felipe III vedase conceder Privilegios a extranjeros que beneficiaban con artículos hispanos a aquellos territorios rebeldes. Más adelante se insiste sobre este punto con esta política dura: "Iten se ha convenido, y concertado, que después de la confirmación de estos Capítulos las Ciudades Hanseáticas prohibirán por Edicto Público, que ninguno de sus súbditos, Moradores o Vasallos, transferirá, ni traerá a los Reynos y Señoríos de su Majestad, y de los Serenísimos Príncipes Alberto, y Isabel Clara Eugenia, Archiduques Austria, Duques

(36) Ibid. op. cit. pág. 384.

de Borgoña, en cualquier manera, directa ó indirecta, en propio nombre, ó en el ajeno, ni acomodará su nombre para trasferir, y trasportar á los dichos Reynos, y Señoríos ninguna Nao, ó Naos mercadurias, manufacturas, ó cualquier otra cosa de los Naturales, ó Moradores de las Provincias - Unidas, ni llevará ningún Mercader de las dichas Provincias Unidas á los dichos Reynos, y Señoríos de su Majestad, y Altezas, so pena de la indignación de los Magistrados y otras constituidas de derecho contra los menospreciados de sus mandatos" (37)

El respeto del libre albedrío del Hanseático en el ejercicio de su comercio, se les reconoció generosamente así: "Item, se ha concertado y concluido, que ninguno pueda tomar á los Hanseáticos, ni forzarlos á — vender sus mercancías contra su voluntad, ni ponerlas tasas en ellas, y si acaso su Majestad tuviere necesidad de alguna de las dichas provincias sus ministros, ni Oficiales no las tomen por fuerza, sino precediendo primero contrato, y concierto, y pagando al precio, que así se concertare, ó con voluntad, y satisfacción de los Dueños; y sin esto no sean obligados los vendedores á entregar las mercancías" (38). Seguidamente, abundando en ese extremo, se añade:

"Item se ha convenido, y concertado, que las mercancías que los

(37) Ibid. op. cit. pág. 385.

(38) Ibid. op. cit. pág. 384.

Naturales, Vecinos, y Moradores de las dichas Ciudades trajeren á estos Reynos, como no sean de las prohibidas, sean libres del derecho de Treinta por ciento, que de pocos años á esta parte se comenzó á cobrar, pagando tan solamente los derechos, y impuestos de antes de la imposición del derecho del Treinta por Ciento, excepto en las mercancías, en que por los Privilegios se les hace gracia, que en estos no han de pagar más de lo contenido en los dichos Privilegios; y su Majestad mandará, que cesen todas las imposiciones, y extorsiones de que sin justo título pareciere haber sido trabajados.

Item se ha convenido, que todo el dinero, que los dichos Manseáticos huvieren depositado en razón del derecho de Treinta por Ciento y no estuviere ya cobrado por el Fisco, se restituya luego, a sus dueños, y si en razón de esto han intervenido algunos fiadores, sean libres estos tales de la fianza" (39)

Existía una verdadera preocupación en España en impedir el comercio de productos españoles efectuado por los extranjeros beneficiarios de Privilegios, - y por tanto amigos nuestros, con los Rebeldes de los Países Bajos, cosa lógica y natural, en toda situación política, como era aquella, por ello no debe extrañarnos que se insistiera sobre ese extremo, de esta manera: "Item se ha convenido, y concertado, que para evitar los

(39) op. cit. pág. 385.

Pasaportes falsos, de que los Belgas de las Provincias Unidas se ha aprovechado para navegar á estos Reynos con título, y nombre fingido de Hanseáticos, contrahaciendo los sellos de algunas de las dichas ciudades, y tomando otros nombres; teniendo de aquí adelante un Contraseña Secreto los Magistrados de las dichas Ciudades, se seguirán, y cumplirán la forma, que los dichos sus Diputados han propuesto, y ofrecido en el Capítulo décimo de su primera respuesta dada a 28 de julio desde año de 1607" (40). Más adelante, puntualiza, siguiendo aquel tenor "que demás de los Pasaportes, y Registros que trajeren los Navíos, que partieren de los dichos Puertos, traigan Cartas de Aviso cerradas de la persona diputada por el Senado para el Consul, advirtiéndole de los Navíos que parten, quien son y lo que traen, para que por todas vías se cierre la puerta á los fraudes (41). Para el caso de que algún Hanseático, quebrantase la prohibición de comerciar con nuestros Rebeldes de los Países Bajos sus mercancías serían objeto de incautación, quedando la mitad para el Fisco de la Hansa, y la otra mitad, para los denunciadores.

Los términos de la prohibición de comercio, y la pena impuesta, dicen bien a las claras, cuál era la intención del autor del texto, cuyo tenor era: "Iten se ha concertado, y concluído, que las ciudades Han

(40) Ibid, op. cit. pág. 386.

(41) op. cit. pág. 386.

seáticas, después de la confirmación desta Capitulación, prohiban por -
 Edicto Público, que ninguno de sus naturales, S^{os}bditos, Moradores ni Va
sallos, lleve á Holanda, y Zelanda, ni á las demás Provincias Unida^d nin
 gunas mercancías de los Reynos y Señoríos de su Majestad y de los Sere-
 nísimos Archiduques, sino á solos los Puertos Hanseáticos, ó a otros Lu
gares, y Reynos amigos, ó neutrales, so pena de confiscación de todas -
 aquellas mercancías, que destos Reynos fueren llevadas por los Hanseáti
 cas á las dichas provincias; de tal manera, que la mitad de estas mercan
 cías, ó de su valor, sea para el Fisco de la Hansa; y la otra mitad se -
 dé á los Denunciadores, sacándose primero de ellas el derecho de Treinta
 por Ciento, y pagándolo á los Diputados de su Magestad, dando fé a las -
 provanzas legítimas hechas en España, y embiadas en auténtica forma á la
 Hansa" (42)

El uso y disfrute de las naves Hanseáticas por parte de nuestra Ar
mada, en caso de accidente o fuerza mayor, se recogió, pero con las si-
 guientes cautelas: "Iten se ha concluido, y concertado, que si alguna vez
 fuere menester valerse de las Naves de los Hanseáticos para el servicio
 de Su Magestad por algún accidente, ó en otra manera; su Magestad ordeⁿ
rá desde luego a los Generales de sus Armadas, y á todos los demás Minis
tros, y Oficiales, á quien tocare, que de aquí adelante no las detengan,

(42) Ibid. op. cit. pág. 387.

ni fueren a servir contra su voluntad de ninguna manera, si no fuere con consentimiento de los Mercaderes, y concentrándose con ellos en el precio y que celebrado el concierto sean tratados amigable y bonevolmente, y se les pague al tiempo concertado su estipendio, sin dilación; y mandará, que se cumpla así sin dar lugar á otra cosa en ningún tiempo" (43).

3. Restricción a las exportaciones españolas.— Sin embargo, peso a todo lo expuesto, se consintió en que los Hanseáticos pudieran seguir comerciando, con sus productos con las Provincias Rebeldes, y beneficiarse de la Neutralidad que mantenían con éstas. Lo que no se toleraba es que las Provincias Rebeldes se beneficiaren de la importación de productos españoles, verificada a través de terceros neutrales. La concesión decía así: "Y para que puedan los súbditos de entrambas partes recibir más abundantes frutos desta Capitulación; se ha concertado, y concluido, que su Majestad, y los Serenísimos Archiduques juntamente con las Ciudades Hanseáticas, unida, y separadamente, trabajarán, en que no se les cierre la entrada a los Hanseáticos por los Belgas de las Provincias Unidas, ni otros para los Puertos de Su Majestad, y de los Serenísimos Archiduques, sino que donde quiera, puedan gozar de la Casa y Privilegio que tienen en Amberes, y entren a tratar libremente, como más particularmente se ha tratado en los Actos de esta Legislación; y cuando las dichas Provincias

(43) Ibid. op. cit. pág. 388.



Unidas no se quisieren reducir a su justa petición, se usará de los remedios contenidos en los dichos Actos" (44).

4. Exención a los Hanseáticos del derecho del Treinta por Ciento.

Se articula este privilegio de importación de mercancías de Alemania y de los lugares septentrionales de Europa, por parte de los Hanseáticos, con una exención total del pago del canon conocido fiscalmente como del Treinta por Ciento, de esta manera: Y porque su Majestad no quiere, ni entiende, que se quite el derecho de Treinta por Ciento, para con los Reyes, Príncipes, y otras Ciudades Septentrionales, que no han convenido, ni capitulado sobre la forma del Trato, y Comercio, para excluir de estos Reinos a los de las Islas de Holanda y Zelanda, y las demás provincias Unidas contra su Majestad, como lo han hecho los Serenísimos Reyes de Francia, y Inglaterra, y la Hansa Teutónica; se declara, que solo los dichos Hanseáticos puedan traer las mercancías de Alemania, y de los lugares Septentrionales sus Vecinos, libres del Derecho del Treinta por ciento, por el tiempo, y en el entretanto, que los dichos Reyes, Príncipes y Repúblicas se convengan con su Majestad, como lo han hecho los dichos Reyes de Francia, y Inglaterra, y la dicha Hansa Teutónica, ó se reduzcan a la debida obediencia los Subditos de las dichas Islas de Holan-

(44) Ibid, op. cit. pág.

da, y Zelanda, y las demás Provincias Unidas, ó se tome acuerdo, y asiento con ellas de Paz, ó Tregua; con tal declaración, que haya de quedar, y quede en su fuerza, y vigor la concesión hecha á los Súbditos del de Reyes de Francia, y Inglaterra sobre el traer las mercancías de Alemania Superior, las cuales les será lícito traer á los Reynos de su Majestad, como les está concedido" (45).

5. Inmunidad personal y de bienes en caso de guerra.-- En cuanto a las garantías personales en caso de guerra entre España y las Ciudades Hanseáticas, se ratifica el plazo de un año y un día que se recoge en el apartado 37 de los Capítulos para la Hansa el 13 de septiembre del 1607, y durante cuyo interregno puedan abandonar el territorio enemigo con sus bienes sin sufrir daño, ni persecución alguna. El privilegio se exterioriza de este modo: "Iten se ha concluido, y asentado, que en caso de Guerra (lo que Dios no quiera) no corran los Súbditos de su Majestad, que se hallaren en el dominio de las Ciudades Hanseáticas, ni los Súbditos de ellas, quese hallaren en los Reynos, y Señoríos de su Majestad, detrimento, ni daño en sus personas, ni bienes, y que tener los unos, y los otros tiempo de año, y día, para poder retirarse con sus haciendas, sin que en ello se les ponga estorbo, ni impedimento alguno". (46).

(45) Ibid. op. cit. pág. 389.

(46) Ibid. op. cit. pág. 390.

CASA DE AUSTRIA

REINADO DE FELIPE IV

(1621 - 1665)

INSTAURACION DEL FUERO DE EXTRANJERIA DE LOS INGLESES.REAL CEDULA DE FELIPE IV DE 19 DE MARZO DE 1645 (47)

1. Introducción.— En el Preámbulo de esta Real Cédula parece hacerse referencia a los Privilegios y Exenciones otorgados por Felipe IV y Jacobo I de Inglaterra en el tratado de Paz, Alianza y Comercio suscrito el 18/28 de agosto de 1604, así como a otras disposiciones complementarias de los Reinos de Castilla y Portugal, en virtud de los términos que se recogen en su inciso primero, que dice: "Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, (siguen todos los títulos). Por cuanto por parte de vos Ricardo Antonio, cónsul de la nación inglesa, por voz y en nombre de los vasallos del rey de la Gran Bretaña, me ha sido hecha relación, que mediante las paces que en este y aquel reino están asentadas, residen y comercian en Andalucía, principalmente en las ciudades de Sevilla, Sanlúcar, Cádiz y Málaga, suplicándome sea servido de confirmaros los privilegios, exenciones y facultades que os competen así por los capítulos de dichas paces, como por las confirmaciones de ellas y otras mercedes e indultos que el rey mi señor, mi padre (que haya gloria), os dió, y otras cualesquiera —

(47) CANTILLO, A. "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y de Comercio, que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón desde el año 1700 hasta el día". Madrid, 1843 pág. 137 a 140. (Reinado de Felipe V)

que se os hayan dado por mis coronas de los mis reinos de Castilla y Portugal, mandando que se les guarden y cumplan en todo y por todo sin ninguna limitación, y a mayor abundamiento concedéroslos de nuevo con las - calidades, ampliaciones, condiciones y declaraciones que más os convengan poniendo penas a quien los contradijere, y no los guardare; y para que - se sepa los que son, se les dé copias de ellos, o como la mi merced fuese." (48).

La verdadera trascendencia de esta Real Cédula, radica a nuestro modo de ver en que se implanta por primera vez con carácter general en - España el Fuero de Extranjería para los súbditos británicos. La primera disposición en que se implanta en nuestra Patria una jurisdicción especial - el juez conservador - esto es, el Fuero de Extranjería, cronológicamente hablando, es con los Capítulos concedidos por Felipe III, a la HANSA TEUTONICA el 28 de septiembre de 1607; fueron, pues, según nuestra tesis, los naturales de la Hansa, los primeros recipientarios del Fuero de Extranjería en nuestro suelo patrio (49).

¿Cuál es la intención de Felipe III al dispensar los Privilegios que más adelante analizaremos? El propio Rey, hace insinuar en la citada

(48) Ibid, op. cit. pág. 1371.

(49) Nota. - Antonio Riquelme es su obra "Elementos de Derecho Público Internacional" sostiene la argumentación de que el Fuero de Extranjería se creó ex novo por la Real Cédula de Felipe III de 9 de noviembre de 1645. (Madrid, 1849)

Real Cédula, su pensamiento con este tenor: "(porque mi intención y voluntad deliberada es que todos los de la dicha nación gocéis y gocen de ellos sin ninguna limitación; con calidad que en el tiempo que residieren en la Andalucía los dichos ingleses, a vos ni a ellos no se os pueda encargar ningún oficio ni carga pública ni concejil, tutelas, caradurias, receptorías, tesorerías, aunque sean de alcabalas y millones, y otros servicios que toquen a mi real hacienda, ni tampoco se os puedan pedir prêstamos ni donativos ni que tomeis juros, ni sus rentas, caballos ni esclavos. Y por os hacer más merced, en conformidad con lo asentado en las paces quiero, y permito que podáis y puedan tratar y comerciar libremente y vender vuestras mercancías y frutos y comprar los de mis reinos y sacarlos de ellos, guardándose lo dispuesto por las leyes y pragmáticas que de esto hablan, y pagando a mi real hacienda los derechos que se debieren pagar: prohibiendo, como prohibo y mando, que no se os tomen por fuerza, ni se os saquen ningunas mercaderías, trigo ni cebada, aunque sea para apresto de mis armadas, flotas y galeones, ni por asentistas ni extranjeros, y los dichos privilegios hayan de ser, en cuanto al trigo y cebada, conforme a la tasa; y en cuanto a las demás cosas y mercaderías aquello en que os conviniéredes y concertáredes, sin sacarlas de vuestro poder hasta haberos pagado, y sin que por razón de ello se haya de dar lugar a que se os hagan molestias y vejaciones") (50)

(50) Ibid, op. cit. pág. 137-8

2. VIGENCIA DE LA ORDENANZA DE SEVILLA.

Se regula para los mercaderes ingleses que trafican por la Andalu
cía que ha de aplicárseles la Ordenanza de la ciudad de Sevilla, en lo -
 tocante a la introducción por aquellos de pescado seco y salado, disposi
ción que no puede ser más generosa, toda vez que la misma no establecía
 ninguna limitación en cuanto al precio de venta. Preferimos seguidamente
 insertar el apartado en que se les confiere los mentados Privilegios:
 ("Y porque muchos de vosotros tratáis traer a los puertos de Andalucia,
 ciudad de Sevilla y otras partes mucha cantidad de bacalao y otros gène-
 ros de pescado seco y salado, por ser los mantenimientos más necesarios
 que hay, y se os hacen muchas costas y vejaciones; quiero y mando que se
 os guarde la ordenanza de la ciudad de Sevilla, en que dispone que a los
 que entran con pescado seco y salado no se pueda poner postura, antes se
 les permitirá vender al precio que quisieren, sin que sea necesario mani
festarlo más que a los ministros que cobran mis rentas reales; y si los
 navíos en que se trajere dicho bacalo fueren grandes que no puedan subir
 río arriba y se ordenare en barcos, el juez del almirantazgo, ni otro al
guno no pueda poner en los dichos barcos guardas a costa de los dueños de
 ellos. Y asimismo mando que en caso de constar que el dicho pescado está
 podrido y no se puede gastar, se haya de quemar o echar al agua sin que
 por razón de esto se pueda hacer ni haga causa a los sueños o personas -
que lo vendieren, ni prenderlos, ni denunciarlos"). (51)
 (51) Ibid. op. cit. pág. 138.

Es curioso que se hable del juez del Almirantazgo, en primer lugar a cualquier otro órgano encargado de aplicar la ley, pero dicha anteposición, estimamos que no es casual, sino insertada con prioridad intencionalmente. Justificamos, tal aseveración - el texto fija esta orden "el Juez del Almirantazgo, ni otro alguno, no pueda poner en los dichos barcos guardas a costa de los dueños de ellos (52), no por puras razones de exégesis personal a la vista del orden de prelación indicado, claro y terminante, sino en función de las argumentaciones extensas que verificamos al analizar la Ordenanza de Felipe IV de 4 de Octubre de 1624 creadora de un Consulado con título de Almirantazgo y demás disposiciones Reales complementarias y concordantes con esa institución, que glosamos en páginas anteriores y que en aras de la brevedad y a fin de no ser reiterativos damos por reproducidas.

3. GARANTIAS JURIDICO-PROCESALES.

Como quiera que los comerciantes ingleses, podían ser objeto ante el administrador del almojarifazgo, de denuncias injustificadas o erróneas por impago de derechos y tarifas en materia de frutos y mercaderías que - llevaban aparejadas la detención de aquellos con el consiguiente descrédito y vejación, la Real Cédula dispuso en su favor, estas garantías jurídicas y procesales: ("Y porque el administrador de los almojarifazgos y

(52) Ibid. op. cit. pág. 138.

otros diferentes derechos que se cobran de los frutos y mercaderías, han -
 introducido cuando alguna se denuncia, al prender a la persona que se mues-
 tra parte, de que se sigue a los hombres de negocios mucho descrédito, cos-
 tas y vejaciones; es mi voluntad y mando, que en las dichas denunciaciones
 solo se proceda contra las mercaderías y no contra las personas, permitién-
 doles, como les permite, que puedan hacer y hagan sus defensas en las di-
 chas vejaciones, dando a los juramentos que hiciéredes en juicio y fuera
 de él la fé y crédito que se diera si fuerades españoles: sin que sobre es
 to recibáis vejaciones ni molestias, ni se os pueda hacer agravio alguno"
 (53)

4. LIBERALIDAD EN MATERIA RELIGIOSA.

La última parte del texto que encabeza estas líneas, merece una glo-
 sa aparte, y es que todavía en 1645, existía por Europa, un halo de dis-
 criminación religiosa, que algunos justificaban en aras de su fervor reli-
 gioso. Debemos de congratularnos que en España, y merced a dicha concesión
 regia de Felipe IV, se diese en aquella fecha, el mismo crédito al juramen-
 to de un comerciantes inglés-fuese o no católico romano - que al de un es
 pañol. El texto decía, "sin que sobre esto - los británicos - recibiesen
 vejaciones, ni molestias, ni se os pueda hacer agravio alguno (54). Para

(53) Ibid. op. cit. pág. 138.

(54) Ibid. op. cit. pág. .38.

apuntalar más ordenadamente ese talento generoso, la disposición Real, como vimos, prohíbe se pregunte a los comerciantes ingleses, en los pleitos en que intervengan, como partes o testigos, que declaren si son o no católicos romanos, circunstancia que debe ser irrelevante ante los ojos del juzgador, a efectos de impartir sana y objetiva justicia.

5. TRATO BENEVOLO EN MATERIA DE LIBROS DE COMERCIO.

Como quiera que en algunas causas, se les obligaba a los citados súbditos a aportar los libros de sus negocios, recibiendo vejaciones por ese concepto, la Real Cédula salió en defensa de aquellos, relevándoles - de dicha exigencia, con esta fórmula: "Y porque para justificación de algunas causas, los jueces y justicias pretenden que los mercaderes exhiban los libros de sus contrataciones y sobre ello reciben vejaciones y agravios; quiero y mando que los libros de los mercaderes de la dicha nación no se saquen de su poder por ninguna causa que sea, sino que los tengan de manifiesto en sus casas para sacar la partida que se señalare, sin pedirles otras, ni poderles sacar otros papeles ninguno, so pena que el que contraviere a ello será castigado conforme a derecho". (55).

Se arbitró un moderno sistema - hoy tan en uso - de sacar copia de de dichos libros, sin necesidad de aportar los originales al pleito, con

(55) Ibid. op. cit. pág. 138.

el consiguiente peligro de extravío o deterioro.

Abundando en la dispensa de excensiones y privilegios, Felipe IV, determinó: "Y porque asimismo los mercaderes despachan las mercaderías en la aduana de la ciudad de Sevilla de todos los derechos, que por ser muchos se hace una hoja y esta va firmada y rubricada de todos los minis tros y se queda en poder del alcaide de la aduana, porque en su virtud - deja salir las mercaderías que van en fardos, pacas, baules y cajas, y des pués de haberlas sacada y puéstolas en su casa en sus almacenes, el guarda mayor de la aduana y los ministros del medio por ciento os visitan - las casas y la ropa, haciendolos molestias y vejaciones, pidiéndolos tener por haberlos dejado en poder de dicho alcaide de la aduana; prohibo y man do que no se puedan visitar las casas de los dichos mercaderes, ni pedirles ni pidan los despachos que no quedan en su poder, con que esto se ha ya de entender y entienda en las casas que están de los muros adentro de la dicha ciudad; y porque se sepa los que sois de la dicha nación inglesa, se os haya de dar copias de los dichos privilegios y exenciones que os tocaren y os estuvieren concedidos así por los capítulos de las dichas paces, como en otra cualquier manera" (56).

(56) Ibid. op. cit. pág. 138.

6. El Fuero de Extranjería estricto sensu.

CREACION DE JURISDICCION PROPIA: El Juez conservador.

En primer lugar transcribiremos el apartado de la Cédula de Felipe IV, en que se instruirá para los súbditos ingleses, una jurisdicción excepcional y propia, por estimar que el comentario en este caso es preferible hacerlo a posteriori: "Y para que en todo tiempo esta merced os sea cierta y segura, hayáis de tener un juez conservador para la Andalucía, principalmente para las dichas ciudades de Sevilla, Málaga, Cádiz y Sanlúcar de Barrameda, a quien yo haya de dar comisión bastante para la guarda y cumplimiento de los dichos privilegios, libertades y exenciones; el cual haya de apremiar y compeler a todas y cualesquier personas, de cualquier suerte y calidad que sean que tocaren a la dicha nación, así en aquella en que fueren reos convenidos, como en las que fueren actores, aunque las personas que los convinieren y que de ellos fueren convenidos tengan cualesquier jueces privativos, así por asiento o contrato que hayan hecho, como por preeminencias e inmunidades que tengan, porque de las dichas causas solo ha de conocer privativamente el dicho juez conservador, y no otro juez ni tribunal alguno, aunque sea por la vía de escuso, ni de injusticia notoria, o en otra cualquier manera o forma. y el dicho juez conservador por ahora lo sea el doctor don Francisco Vergara, juez de la mi audiencia de los grados de la ciudad de Sevilla, el tiempo que asistiere a ella, y por su ausencia el licenciado don Francisco Medrano, juez —

de la misma audiencia: el cual para los negocios y pleitos que se ofrecieren en las dichas ciudades de Málaga y Cádiz y en Sanlúcar haya de subdelegar su conservaduría en la persona que por la dicha nación se le propusiere para que los sustancie hasta la conclusión y se los remita para determinarlos; y de lo que él determinare se haya de apelar al mi consejo y no para otro tribunal alguno" (57).

6.1. Competencia geográfica.

Destacaremos primero, que la competencia del iudex de los comerciantes ingleses, se extiende exclusivamente al Reino de Andalucía. Dicha figura fué creada de modo primordial - el texto utiliza el término "principalmente" - para las ciudades de Sevilla, Málaga, Cádiz y Sanlúcar de Barrameda. Quiere decir todo ello, que no habría pleito entre un mercader inglés y un regnícola fuera de aquella región, debería sustanciarse por la jurisdicción ordinaria, sin intromisión del fuero singular.

Se justifica esta restricción de jurisdiccionalidad, en el hecho de que en aquella época el comercio inglés con España se desarrollaba predominantemente en los puertos andaluces. Eran muy pocos los mercaderes - ingleses que traficaban en el interior de Castilla.

6.2. Función.- Distinguimos una trilogía de facultades, a saber:

(57) Ibid. op. cit. pág. 139.

- a) Ser custodio para "la guarda y cumplimiento de los privilegios, libertades y exenciones" (58), conferidos a los ingleses por la Cédula Real que glosamos.
- b) Poder "apremiar y compeler a todas y cualesquier personas, de cualquier suerte y calidad, que sean que tocaren a la nación inglesa" (59).
- c) Sustanciar causas en las que intervengan británicos, tanto "a título de reos convenidos, como en las que fueren actores". (60)

6.3. Monopolio en primera instancia.

La función judicial se ejercía por el juez conservador con auténtico monopolio, cuando en la litis aparecía un británico. Los términos de la Cédula no dejan lugar a dudas a este respecto, "porque de las dichas causas sólo ha de conocer privativamente el juez conservador, y no otro juez ni tribunal alguno". (61)

El carácter de primera instancia - al impetrar justicia - del juez conservador, se infiere de lo dispuesto así por Felipe IV, " y de lo que él determinare se haya de apelar al mi consejo, y no para otro tribunal -

(58) Ibid. op. cit. pág. 139.

(59) Ibid. op. cit. pág. 139.

(60) Ibid. op. cit. pág. 139.

(61) Ibid. op. cit. pág. 139.

alguno (62). La segunda instancia o alzada ante el fallo del iudex de los ingleses, debía interponerse al Tribunal o Consejo de la Corte.

Recordamos como en los Capítulos de Privilegios conferidos por Felipe III a la HANSA TEUTONICA el 28 de septiembre de 1607, en su apartado 21, se determinaba que la competencia del juez conservador de los Hanseáticos, de la ciudad de Sevilla, alcanzaba hasta seis leguas más allá de las murallas de la ciudad hispalense. Las apelaciones de las litis entre Hanseático y español, se verificaban ante el Consejo Civil de Sevilla - (apartado 22) y las de las causas exclusivas entre Hanseáticos debían dirigirse a la HANSA TEUTONICA.

6.4. Jurisdicción retribuida.

Frente al sistema de administración de justicia sostenida económicamente por el Estado, -habitual en un mundo que la configura como uno de los tres poderes independientes, tal como los concibió Montesquieu - en la Real Cédula de Felipe IV, se arbitra una función judicial a cargo del juez conservador retribuida, pero a cargo del beneficiario de aquella, en este caso el comerciante inglés. En el último inciso de aquella concepción regia, se ordena "y también ha de pagar el juez conservador que nombraren, del salario o ayuda de costa, que gozare por la dicha ocupación, antes de go-

(62) Ibid. op. cit. pág. 139.

zar de ella (63). Es previo el pago de los honorarios del iudex, como se puede impetrar justicia. El abono de "la ayuda de costa", tenía carácter de requisito sine qua non para poder acudir y comparecer ante el juez - conservador.

Pero no concluyen ahí los pagos que debían realizar los mercaderes de las Islas Británicas, a fin de gozar de una jurisdicción propia y privilegiada. Además de sufragar "el salario" del juez conservador, tenían que abonar a la Corona en concepto de derecho de la media anata, la suma de 85.155 maravedís, en plata, montante que se aportaría periódicamente cada quince años, y a priori, para disfrutar de dicha jurisdicción. El último inciso fija ambos pagos en esta forma: "Y de esta mi cédula de tomar la razón Jerónimo de Canencia, mi contador de cuentas de mi contaduría - mayor de ellas, mi secretario de la media anata a cuyo cargo está la cuenta y razón de este derecho: y declaro que de esta merced habéis pagado el derecho de la media anata, que importa 85.155 maravedís en plata, el cual habéis de pagar hasta en la misma cantidad de quince en quince años perpetuamente: y llegando el caso de cumplirse no habéis de poder usar de esta merced sin que primero conste haber satisfecho este derecho; y también ha de pagar el juez conservador que nombraren por la dicha ocupación, antes de gozar de ella; de que ha de constar por certificación de la conta

(63) Ibid, op. cit. pág. 140.

duría de este derecho" (64).

No cabe alarmar al estudioso, la contemplación de los mentados abonos económicos a cargo del comerciante inglés afincado en la Andalucía; ya expusimos con anterioridad (65), como frente a los privilegios y exenciones fiscales que le otorgaba la Cédula Real, unido a una administración de justicia rápida y humanitaria, debía considerarse rentable el pago de aquellos canon, máxime cuando obtenía saneados beneficios con el tráfico de su negocio.

6.5. Vigencia y fuerza de la Cédula Real.

Para rubricar más ostensiblemente la fuerza y validez de la Cédula Real de Felipe IV, - objeto de este análisis -, se impuso en la misma por nuestro Monarca: "Y encargo al serenísimo príncipe don Baltasar Carlos, mi muy caro y amado hijo; y mando a los infantes, prelados, duques, marqueses, condes, ricos, hombres, comendadores y subcomendadores, alcaides de los castillos y casas-fuertes y llanas y a los de mi consejo, presidentes, oidores de las mis audiencias, alcaides, y alguaciles de la mía casa y corte y chancillerías, y a todos los corregidores, asistentes, gobernadores, alcaides mayores y ordinarios, y a todos cualesquier jueces y —

(64) Ibid. op. cit. pág. 140.

(65) Véase la INTRODUCCIÓN de esta R. Cédula de 19 de marzo de 1.645.

justicias de estos mis reinos y señoríos, que os guarden y cumplan, y -
hagan guardar y cumplir esta mi carta, y la merced que por ella os hago,
y contra su tenor y forma no vayan ni pasen ahora ni en ningún tiempo, ni
por ninguna manera, perpetuamente para siempre jamás, ni consientan ni -
den lugar a que se os limite ni suspenda en todo en parte todo ello, no
embargante cualesquiera leyes o pragmáticas de estos dichos mis reinos y
señoríos, ordenanzas, estilo, uso y costumbre de las dichas ciudades de
Sevilla, Cádiz, Málaga y Sanlúcar, y todo lo demás que haya o pueda haber
en contrario; con lo cual, para en cuanto a esto toca y por esta vez ha-
biéndolo aquí por inserto e incorporado, como si de verbo ad verbum aquí
lo fuese, dispenso, y lo abrogo y derogo, caso y anulo, y doy por ninguno
y de ningún valor ni efecto, quedando en su fuerza y vigor para lo demás
adelante". (66).

Subrayaremos el párrafo que dice "y hagan guardar y cumplir esta
mi carta y la merced que por ella os hago, y contra su tenor y forma no
vayan ni pasen ahora ni en ningún tiempo, ni por ninguna manera, perpe-
tuamente para siempre jamás". Resalta el propósito de mantener con firme-
za dichos privilegios y jurisdicción excepcional de los mercaderes br
tánicos, en atención a cumplir fielmente el deseo del rey Felipe IV de -
abrir una nueva vía judicial para aquellos súbditos expresados en España.

(66) Ibid, pp. cit. pág. 140.

REAL CEDULA DE FELIPE IV DE 26 DE JUNIO DE 1645 DE CONFIR-
MACION Y DESARROLLO DEL FUERO DE EXTRANJERIA CONCEDIDO A
LOS INGLESES EL 26 DE JUNIO de 1645. (67)

1. INTRODUCCION

Esta Real Cédula va dirigida en primer término al licenciado Don - Francisco Madrano, juez de la audiencia de Sevilla, el cual en la Cédula Real anterior de 19 de marzo, había sido designado juez conservador de - los ingleses para la Andalucía, principalmente para las ciudades de Sevilla, Málaga, Cádiz, y Sanlúcar de Barrameda, como sustituto - para el caso de ausencia del titular DON FRANCISCO VERGARA, Juez de la misma audiencia, al objeto de que conozca cuáles son las atribuciones que le confiere su Majestad Felipe IV; en segundo lugar, se dirige a los comerciantes ingleses beneficiarios directos de los privilegios que aquella les otorga; en tercer lugar se proyecta a todos los órganos de la Administración, en especial a los encargados de aplicar las Leyes, y por último al público en general. En el preámbulo de aquella, que constituye el primer inciso, parece que Felipe IV justifica su benevolencia y generosidad, en la concesión de privilegios importantes a los mercaderes ingleses, con la contra-

(67) CANTILLO, A. op. cit. pág. 140 a 142.

prestación por parte de estos últimos de dos mil quinientos ducados de plata. Se determina en el mismo: "Licenciado D. Francisco Medrano, Juez de la mi audiencia de grados de Sevilla: saber que por una mi carta y provisión de 19 de marzo de este año hice merced a Ricarte Antonio, cónsul de la nación inglesa y a los vasallos del rey de Inglaterra que residen y comercian en el Andalucía, principalmente en esa ciudad y en la de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda de los privilegios, exenciones y facultades que les competen, así por los capítulos de las paces, como por las confirmaciones y otras mercedes e indultos que el rey mi señor, mi padre (que haya gloria) les dió, y contotras calidades, condiciones, preeminencias y ampliaciones en la dicha provisión declaradas por haber ofrecido servirme con dos mil y quinientos ducados de plata, según más largo en ella, a que me refiero, se contiene". (68)

2. EL FUERO DE EXTRANJERIA STRICTO SENSU.

2.2. El Juez Conservador: Función.

En el apartado 2º de la Cédula Real, se establecen las siguientes - atribuciones del iudex de los comerciantes ingleses:

1º) Vigilar el cumplimiento y guarda de los Privilegios, libertades

(68) Ibid. op. cit. pág. 140-1.

exenciones"(69) conferidos a los comerciantes ingleses, por la Cédula de 19 de marzo de 1645, y la presente.

- 2º) "Conocer de todas las causas civiles y criminales, en que los comerciantes ingleses fueren reos convenidos, que contra ellos se intentaren". (70)
- 3º) Sustanciar "cualesquier pleitos y causas que tocaren a los dichos ingleses". (71)
- 4º) Sustanciar los pleitos y causas que tocaren a otras cualesquier personas de cualquier calidad que sean, en que los comerciantes ingleses fueren reos convenidos, como en los que fueren - actores". (72)
- 5º) "Subdelegar para las ciudades de Cádiz, Málaga, y Sanlúcar de Barrameda, parte de sus funciones en la persona que la "nación inglesa" propusiese para sustanciar hasta su conclusión" (73) los pleitos y causas que se ventilasen en aquellas".
- 6º) Determinar los pleitos y causas que se habían sustanciado, por su delegado en Cádiz, Málaga y Sanlúcar" (74)

(69) Ibid. op. cit. pág. 141.

(70) Ibid. op. cit. pág. 141.

(71) Ibid, op. cit. pág. 141.

(72) Ibid, op. cit. pág. 141.

(73) Ibid. op. cit. pág. 141.

(74) Ibid. op. cit. pág. 141.

El inciso 2º que glosamos, actualmente, manifiesta: "Una de las - condiciones con que les hice esta merced fue, que les había de nombrar y conceder un juez conservador para la Andalucía, principalmente para las dichas dos ciudades y Sanlúcar de Barrameda, a quién se haya de dar comi sión bastante para la guarda, y cumplimiento de los dichos privilegios libertades y exenciones, el cual pueda conocer de todas las causas civiles y criminales, en que fueren reos convenidos, que contra ellos se intentaren y ante él hayan de pasar cualesquier pleitos y causas, que to ca ren a los dichos ingleses o a otras cualesquier personas de cualquier ca lidad que sean, así en aquellos en que fueren reos convenidos, que ~~con~~ tra ellos se intentaren y ante él hayan de pasar cualesquier pleitos y causas, que tocaren a los dichos ingleses o a otras cualesquier personas de cualquier calidad que sean, así en aquellos en que fueren reos convenidos como en los que fueren actores, aunque las personas que los conviniere tengan cualquier juecos privativos, así por asientos o contratos que hayan hecho, como por preeminencia o inmunidad que tengan; porque de las dichas causas solo ha de conocer privativamente el dicho juez conser vador y no otro juez ni tribunal alguno, aunque sea por vía de esceso o en otra cualquier forma o manera; y que para los negocios o pleitos que se ofrecieren en las dichas ciudades de Cádiz y Málaga y en Sanlúcar haya de subdelegar su comisión en la persona que por la dicha nación se le

propusiere para que las sustancia hasta la conclusión y la remita para de-
terminar; y de lo que el dicho juez determinare se ha de apelar para el -
mi consejo, y no para otro tribunal alguno; y que por ahora lo seais vos
por el tiempo que asistiéredes en esa audiencia, y por vuestra ausencia y
después de vos el que señalare la dicha nación en la dicha ciudad de Sevi-
lla". (75).

El análisis de los incisos 3º y 4º de la Cédula Real, nos obliga
a efectuar estas consideraciones. Felipe IV reitera su propósito de con-
fiar la custodia de los privilegios expresados, al juez conservador, DON
FRANCISCOMEDRANO, con las siguientes palabras: "Y porque mi voluntad es . .
que todo ello se les guarde y cumpla en la forma que les está ofrecido,
he tenido por bien de encargaros, como por la presente os encargo, la pro-
tección y amparo de esto, y os mando vedis la dicha provisión y las cali-
dades, preeminencias y ampliaciones en ella contenidas, y todo ello lo ha-
cer, guardar y cumplir en la forma, según y de la manera que en la dicha
provisión y en esta mi cédula se declara, sin consentir ni dar lugar a que
en todo ni en parte se les pueda poner ni ponga duda ni dificultad alguna"
(76).

De otra parte, nuestro Rey, insiste sobre la jurisdicción exclusi-

(75) Ibid. op. cit. pág. 141.

(76) Ibid. op. cit. pág. 141.

va del juez conservador, en los pleitos y causas, más arriba reseñados, con términos claros y precisos, que no permiten la ingerencia de otros jueces y tribunales en el conocimiento de aquellos. Su intención se desarrolló en esta manera: "y ante vos y no ante otro juez alguno, en primera instancia hayan de pasar y seguirse todas las causas y pleitos que sobre esto y cualquier cosa y parte de ellos se hicieren y causaren, y conocer asimismo de todas las causas civiles y criminales en que fuesen reconvenidos que contra ellos se intentaren; y ante vos han de pasar cualquier pleitos y causas que tocaren a los dichos ingleses entre cualos quier personas de cualquier calidad que sean, y la ejecución y castigo de los inobedientes: porque mi voluntad es que el conocimiento y determi nación de todo lo contenido en la dicha provisión y en esta mi cédula de ampliación, privativamente os haya de tocar y toque, procediendo en todo contra los que fueren culpados, ejecutando en ellos las penas que hallaredes por derecho, sin que ningunos tribunales, audiencias ni chancillerías, ni otros ningunos jueces, justicias de los mis reinos y señoríos de la co rona de Castilla, de cualesquier calidades que sean, se puedan entrometer ni entrometan enello, ni en el uso y ejercicio de la ju dis tr ic ción privati va de la dicha primera instancia, que por esta mi cédula es doy por vía de escuso, apelación u otro recurso, en manera alguna; a los cuales y a cada uno de ello inhibo y he por inhibidos de su conocimiento, y los declaro por jueces incompetentes de él, que para todo y cada cosa y parte -

de ello os doy el poder más cumplido y la comisión más amplia que por de
recho se requiere y es necesaria con sus incidencias y dependencias, an
xidades y conexidades". (77).

La facultad de subdelegar por parte de Don Francisco Medrano, a -
otro "juez conservador" para las ciudades de Cádiz, Málaga y Sanlúcar, se
le reconoce si bien se recorta su apoderamiento en un doble sentido, de
un lado la facultad de propuesta del sustituto no recae en el juez conserv
vador de Sevilla, sino en los componentes de la nación inglesas en la mism
ma urbe y de otra parte, la facultad del apoderado en lo tocante a administr
trar justicia, se concreta a sustanciar los pleitos hasta su conclusión,
pero quedando atribuido al juez conservador de la ciudad hispalense, el
"detener los pleitos remitidos por aquel, en la forma que le pareciere y
viere que conviene para la seguridad de dicha provisión". (78)

Termina la Cédula derogando cuantas disposiciones se opusieren a -
la misma, con fórmula anulatoria contundente.

Ambos extremos, se explicitan así: "que después de vos, la dicha -
nación inglesa de la dicha ciudad de Sevilla ha de poder nombrar en la dici
cha comisión uno de los jueces de esa audiencia, el que eligiere la dicha
nación. Y mando a los de mi consejo de la cámara que presentándose ante -

(77) Ibid. op. cit. pág. 141.

(78) Ibid. op. cit. pág. 142.

ellos el nombramiento suyo, llegado el caso de vacar la dicha comisión - por promoción o vacación vuestra o en otra manera, la despachen por ordinaria al que fuere nombrado en ella, en la forma, según y como en esta mi cédula se dispone. Y para que mejor se cumpla todo lo contenido en la dicha provisión y en esta mi cédula os doy facultad, poder y autoridad para que podáis subdelegar y subdeleguéis esta comisión para los negocios y pleitos que se ofrecieren en las dichas ciudades de Cádiz, Málaga y Sanlúcar, en la persona que por la dicha nación propusiere, para que sustancie hasta la conclusión y los remita para detenerlos en la forma que os pareciese y vieredes que conviene para la seguridad de la dicha provisión y que todo se guarde en la forma que por ella se dispone y manda, no embargante cualesquier leyes y pragmáticas de los dichos mis reinos y señorios, ordenanzas, estilo, uso y costumbre, y otra cualquiera cosa que haya o pueda haber en contrario, todo lo cual para en cuanto a esto toca y por esta vez dispenso, abrogo y derogo; caso, anulo y doy por ninguno y de ningún valor y efecto; quedando en su fuerza y vigor para en lo demás adelante. Fecha en Zaragoza a 26 de junio de 1645 años.- Yo el Rey.- Por mandado .i. del Rey nuestro Señor.- Antonio Carnero". (78).

(79) Ibid. op. cit. pág. 142.

REAL CEDULA DE FELIPE IV PARA LOS MERCADERES INGLESSES DE
9 DE NOVIEMBRE DE 1645, DE CONFIRMACION Y DESARROLLO DEL
FUERO DE EXTRANJERIA (80)

1. INTRODUCCION

Antonio Riquelme sostiene la tesis de que el Fuero de Extranjería nace en España precisamente con esta Cédula Real, si bien se pacta por vez primera solemnemente en el "Tratado de 1667 con Gran Bretaña" (81). Por nuestra parte, estimamos que con anterioridad a esta disposición regia, se implanta dicha jurisdicción privilegiada para los naturales de la HANSA TEUTONICA, en virtud de los Capítulos de Privilegios conferidos por Felipe III el 28 de septiembre de 1607, y nace el Fuero de Extranjería para los británicos a tenor de la Real Cédula de Felipe IV el 19 de marzo de 1645.

El análisis que verificamos anteriormente al comentar dichas concesiones reales, nos releva ahora de exponer los argumentos en que apoyamos aquella aseveración.

En el Preámbulo de esta Cédula Real, después de hacerse alusión a

(80) CANTILLO, A. op. cit. pág. 142 a 144.

(81) RIQUELME, A. Elementos de Derecho Público Internacional. Madrid, 1849
Tomo I, pág. 377.

las dos anteriores de 19 de marzo y 16 de junio, en las que tiene su arran que la presente, se reconoce el retraso en aplicar las mismas por parte — del fiscal de la Audiencia de Sevilla D. Juan de Villalba, encargado al — efecto, — en noviembre de 1645 no se cumplían aquellas Cédulas Reales, pese a tener en su poder la última desde el día 15 de julio —, con lo que se irrogaban serios perjuicios a los beneficiarios de las mismas, de ahí el que se pretendiese corregir y subsanar esas demoras burocráticas con — la Cédula que glosamos.

Así mismo se recoge en aquel, la renuncia de los mercaderes ingle ses a gozar de la jurisdicción privilegiada del juez conservador en las litis con súbditos de otros países, reservándose la aceptación de aquella día en los supuestos de pleitos entre nacionales de las islas británicas. Se alude a continuación a la contraprestación de aquellos comerciantes a la corona de España, para el caso de guerra, que ascendía a la suma de — mil quinientos ducados en plata doble. El texto del Preámbulo es este: "Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León (siguen todos los títulos), por cuando por una mi carta y provisión de 19 de marzo de este año hice merced a vos los vasallos del rey de la Gran Bretaña, que residís en el Andalucía, de aprobar y confirmar los privilegios, cédulas y franquezas que os están concedidas por las coronas de Castilla y Portu gal, y mandé que se os guardasen y cumpliesen los capítulos de las paces hechas entre mi corona y la de Inglaterra; y por otra mi cédula de 16 de

junio del mismo año os nombré juez conservador para que conociese de todas las causas civiles y criminales, así en las que fuéredes actores demandantes como en las de reos convenidos, y con otras calidades, ampliaciones y preeminencias en las dichas provisión y cédula contenidas, según en ellas (a que me refiero) se contiene; y ahora por vuestra parte me ha sido hecha relación, que habiendo presentado la última cédula en el acuerdo de la audicencia de los grados de la ciudad de Sevilla, se mandó dar traslado al licenciado Don Juan de Villalba, mi fiscal de ella, y le tiene en su poder desde 15 de julio sin haber respondido hasta ahora, con lo cual se ha embarazado y detenido el uso y cumplimiento de las dichas provisión y cédula y se os causa grave perjuicio y daño; y aunque según lo dispuesto por ellas el juez conservador podrá conocer de todas las causas civiles y criminales, así siendo actores como reos, con cualquiera persona, que tratasedes, vuestro intento es gozar solamente del dicho privilegio y juez conservador, cuando los pleitos fueren entre los de vuestra nación, ora seáis actores, ora reos, y las causas quier sean civiles o quier criminales; y cuando los pleitos fueren con españoles o con otras personas de diferentes naciones, el conservador ha de conocer tan solamente las causas en que fueredes civil o criminalmente reos convenidos, y no cuando fuéredes actores demandantes: suplicándome que porque en esta parte os habéis apartado y desistido del dicho privilegio ante Alonso de Alarcón, sea servido de declararlo así con las condiciones, ampliaciones y -

preeminencias, y las calidades que más os convengan y fueren necesarias - para mayor fuerza de lo referido, o como la mi merced fuese: y porque para las ocasiones que tengo de guerras habeis ofrecido servirme con mil y quinientos ducados en plata doble, pagados a ciertos plazos, lo he tenido por bien" (82).

En el cuerpo de está cédula, hallamos inmersos los siguientes Privilegios:

2. PRIVILEGIOS JURISDICCIONALES: EL FUERO DE EXTRANJERIA STRICTO SENSU.

El Juez Conservador.

Se reconoce y confirma el derecho de los mercaderes de Inglaterra, a gozar del Fuero del Juez conservador en las causas tanto civiles como - criminales, tanto fuesen actores como reos, siempre y cuando en la litis mediasen solamente súbditos de aquella procedencia. También podían ser be neficiarios de aquella jurisdicción aún en los casos de litigios o penales con otros nacionales, en el supuesto de que interviniesen en los mismos - en calidad de reos convenidos. El apartado 1º lo consagra así: ("Y por la presente quiero y es mi voluntad y declaro: que cuando los pleitos fueren entre los de vuestra nación, ora seáis actores, ora reos, y las causas fuere ren civiles o criminales, habéis de gozar solamente del dicho privilegio

(82) CANTILLO, A. op. cit. pág. 142.

y sus calidades; y cuando los dichos pleitos fueren con españoles o con otras personas de diferentes naciones, el juez conservador haya de conocer y conozca solamente de las causas en que fuéredes civil o criminalmente reos convenidos, y no cuando fuéredes actores demandantes" (83)

3. EL FUERO DE EXTRANJERIA LATO SENSU.

A) Privilegios económicos

Se contemplan en la Cédula Real, tres distintos beneficios económicos, a favor de los mercaderes ingleses, que para mayor comprensión, desglosamos de la siguiente manera:

- A) Exención del pago de los "derechos de las sisas de los servicios de millones" (84) Dicho canon gravaba a las ventas de bacalao seco y frescal, sardina, arenque, salmones y otros géneros de pescado fresco y salado. El beneficio era realmente importante, pues con ello, quedaban exonerados los británicos de pagar por aquel concepto, la suma de doscientos maravedís por cada quintal de bacalao que introdujesen en los puertos andaluces. La obligación de pago de aquel canon se trasladó de las arcas de los comerciantes ingleses al cargo exclusivo del bolsillo -

(83) Ibid. op. cit. pág. 142.

(84) Ibid. op. cit. pág. 142.

del consumidor español. Se regula este privilegio en el inciso 2º de la Cédula, con este tenor: "Y porque los derechos de las sisas de los servicios de millones, que se impusieron en el ba calao seco y frescal, sardina, arenque y salmones y otros gêne ros de pescado fresco y salado se mandó que se cobrase de los que lo consumen; y los arrendadores de estos derechos, y los — jueces que conocen de estas causas os hacen grandes agravios, y os obligan a que pagueis doscientos maravedís de cada quíntal de bacalao, y de los otros géneros al respecto que están — concedidos; y en llegando los navíos a los puertos de Málaga, Cádiz y Sanlúcar os obligan a que declaréis la cantidad de pes cado que traéis, haciéndose cargo de todo por mayor, y obligandoos a la paga, como por maravedises de mi haber, y a los cuatro meses os apremian a la satisfacción de lo que monta, lo cual es injusto, porque lo que compran estos géneros y los consumen son clérigos, ffailles, monjas y otras personas que tienen privilegios y hábitos, alcaldes mayores, veinte y cueros y jurados; por cuya causa los arrendadores de estos derechos no quieren co brarlos de ellos, y los cobran de vosotros por entero, sin considerar la cantidad que os hurtan, la que se pudre, y gastáis en vuestro sustento, demás de que sobre querarlo cobrar vosotros de tales personas, os maltratan, y no lo pagan: quiero y mando

que este derecho se cobre de los compradores y consumidores, y los arrendadores pongan persona por su cuenta que lo cobre, como se hace en la renta de la alcabala y almojarifazgo, con tanto que hayáis de ser obligados como yo os obligo, a que hayáis de registrar y registreis todos los dichos géneros de pescado referido, como tenéis obligación, conforme a los despachos generales, sin que de esto se pueda exceder en manera alguna".

(85).

- B) Exención del pago de los guardas colocados en los navios ingleses. Se establece esta exoneración en el inciso 4º, el cual lo recoge así: "Mando a los dichos ministros, así del contrabando como del almojarifazgo, y a cada uno y a cualquiera de ellos, que dentro de tercero día hayan de hacer y hagan la dicha visita, sin ponerles guardas, ni llevar derecho por esto; y si las pusieren sea a costa del almojarifazgo mayor y almirantazgo, - pues vosotros no debéis cosa alguna. Y cuando vinieren a dichos puertos de Málaga, Cádiz, y Sanlúcar cualesquier navios con mantenimientos o mercaderías, al tiempo de la visita y de la descarga, ni en otro alguno, en la forma referida, mando también que los jueces y ministros del contrabando y almirantazgo ni -

(85) Ibid. op. cit. pág. 142-3.

otro alguno, no puedan poner ni pongan en ellos guardas a costa de los maestros o dueños, ni sobre esto se os hagan molestias a los unos ni a los otros, que es en conformidad de lo dispuesto en los capítulos 4º de la institución del dicho almirantazgo, - por el cual se hace designación en efectos tocantes a él para la satisfacción de las guardas y ministros suyos, y en el 8º de las paces, en que se manda que los vasallos de un rey en el territorio del otro sean tratados como los mismos naturales, en - cuyos navíos nunca se han puesto guardas a costa de los maestros ni dueños de ellos" (86). La referencia que se hace a los capítulos por los que se instituyó el Almirantazgo corrobora nuestra afirmación de la interrelación existente entre la entidad - mentada y el Fuero de Extranjería de los ingleses, así como justifica el que hayamos incluido entre la legislación preparatoria de la creación de aquél, las disposiciones de Felipe IV, glosadas con anterioridad, y relativas a dicho Almirantazgo.

C) Derecho a llevar en los navíos dinero para compra de utillaje,

Era sumamente importante este privilegio. La prohibición de transportar dinero en los navíos extranjeros que recalaban en los - puertos españoles, irrogaba serios trastornos a la navegación.

(86) Ibid. op. cit. pág. 143.

Pensemos en la necesidad de reparar periódicamente las naves de vela en aquella época, circunstancia que no se podía realizar sin abonar el correspondiente servicio. Y meditemos que - la vulneración de aquella normativa podía llevar aparejado un ppsible encauzamiento. El levantamiento de aquella prohibi- ción se reguló en el inciso 6º de la Cédula, con estas palabras: "Y porque así mismo los jueces de sacas y otros ministros os - hacen muchas molestias y vejaciones si hallan en los navíos dinero, y es fuerza que los maestros tengan cantidad, conforme las toneladas, para comprar velas, cables, áncoras, y otros - bastimentos necesarios; doy licencia y permisión para que ha- biendo primero hecho registros, como se acostumbra, ante el - juez que conoce de estas causas, cada navío pueda tener tres reales de a ocho por cada tonelada para el dicho efecto, y no para otro alguno, sin que se pueda hacer ni haga causa alguna por ello". (87)

Como se vé, la única limitación que se recogió fue la de no so- brepasar en dinero transportado en buques, la de tres reales - de a ocho por cada tonelada, y con la exclusiva finalidad depor- tado para comprar velas, cables, áncoras y otros bastimentos -

(87) Ibid. op. cit. pág. 143-4.

necesarios", autoriza a pensar que se podía llevar dinero en -
 las naves inglesas, con amplitud de criterio de compra, sin —
 que las autoridades aduaneras y marítimas españolas cercenasen
 aquella libertad de transporte y entrada que les reconoció Fe-
 lipe IV.

B) Privilegios personales.— Se consagran éstos:

- A) Privilegio a no ser inspeccionadas sus mercaderías en sus hoga-
 res. Se confiere este derecho sin más requisito que el de estar
 en su casa el comerciante inglés. Lo autoriza de este modo el
 inciso 3º de la Cédula Real:

"Y porque de las visitas que os hacen los arrendadores se os -
 siguen grandes molestias, quiero y mando que en las ciudades -
 de Málaga, Sanlúcar y Cádiz, se os guarde y cumple el privile-
 gio de no poder visitarse las mercaderías estando en vuestras
 casas, que es en la forma que está dispuesto y mandado por di-
 cha provisión de 19 de marzo de este año, y es lo mismo que se
 concedió a los que residen en la ciudad de Sevilla; y asimismo
 mando que la dicha visita no la pueda hacer ningún arrendador,
 pués en la aduana dejáis pagados todos los derechos; y esto se
 os guarde y cumpla inviolablemente" (88)

(88) Ibid. op. cit. pág. 143.

B) Privilegio de exigir ser inspeccionados sus navíos en plazo de
tercero día. (89)

C) Exención de responsabilidad tocante a las mercaderías importa
das. Bastaba mostrar los libros de só bordo los maestros dentro
del tercero día.

Se fija este privilegio en el insiso 5º. Dice así: "Y porque también los ministros del contrabando en los dichos puertos - luego que los navíos dan fondo piden a los maestros los libros de sobordo, y así en ellos no se hallan escritas las mercaderías que os vienen asignadas, os hacen causa por ello, aunque tengáis los conocimientos que los maestros han dado de haberlas recibido para entregarlas según su consignación, en lo cual re cibís notorio agravio, porque el mejor instrumento que podéis tener son los conocimientos de los maestros, porque por ellos los apremiais por justicia a que os entreguen las mercaderías; y si los maestros por descuido o por malicia no llas escriben en los dichos libros de sobordo, no es justo que se ejecute la pena en los dueños de las mercaderías, sino en los maestros y navíos, y ejecutándose en esta forma, los libros de sobordo —

(89) Apartado 4º. Pág. 143.

siempre estarán justificados: en cuanto a esto es mi voluntad y declaro, que los maestros cumplan con exhibir los libros de sobordo a los tres días de como hayan entrado en los dichos - puertos, y mando que por esta causa mostrando los dueños de - las mercaderías los conocimientos, no se es pueda hacer ni ha ga causa ni molestia alguna" (90)

- D) Privilegio de no declarar el precio de venta, ni el nombre del comprador. Este derecho quedó amparado de forma terminante en el inciso 7º que estableció para la ciudad de Sevilla:
- "Y porque también los fieles ejecutores de la dicha ciudad de Sevilla os hacen molestias, vejaciones y causas, diciendo que es de ordenanza manifestéis la manteca, baqueta, y otras merca derías y mantenimientos, y que declaréis los precios a que ven déis y a que personas, por lo cual ha dos años que no se trae manteca a la dicha ciudad, y la ordenanza no debe hablar con el extranjero que trae sus mercaderías y mantenimientos por al ta mar, sino con los regatones que van a comprarlas a los puer tos y las traen a la dicha ciudad para ganar en ellas; declaro no tener obligación a hacer las dichas manifestaciones, ni por

(90) Ibid, op. cit, pág. 143.

ello se os pueda obligar a hacerlas, ni hacerseos causas; y si las hicieren mando se remitan al juez conservador, para que él las determine" (91)

C) Privilegio Arrendaticio.

Este derecho consistía en que el comerciante inglés podía vivir - en la casa alquilada, mientras estuviese vigente el arrendamiento, sin intromisión de ninguna otra persona, cualquiera que fuese su rango. En aquella época, ciertas personas tenían privilegio para ocupar casas alquiladas, en plena vigencia de la relación arrendaticia, desahuciendo - por tanto al inquilino. El inciso 8º de la Cédula protegió a los ingleses con su estabilidad hogareña y arrendaticia con esta fórmula.

"Porque muchas veces habiendo arrendado casas en que vivir y tener vuestras pescaderías, estándolas vendiendo, personas poderosas que tienen privilegio os las quitan antes de cumplir vuestros arrendamientos, por ser grandes y haberlas buscado donde está el comercio, y os obligan a mudar a las mercaderías, las cuales se os maltratan y hurtan; quiero y mando que durante el tiempo de vuestro arrendamiento no se os puedan quitar las dichas casas por ninguna persona, aunque sea juez y tenga privilegio particular" (92).

(91) Ibid. op. cit. pág. 144.

(92) Ibid, op. cit. pág. 194.

Y para concluir, se confiere en el último inciso, un importante beneficio jurídico, la retroactividad de la Cédula Real, a todas las causas que estuvieren pendientes de resolución, y figuraren como reos los comerciantes ingleses, a fin de su remisión a la jurisdicción del juez conservador. Privilegio que se aplicaba incluso a las litis comenzadas antes de la sanción real de la Cédula de Felipe IV de 19 de marzo de 1645. El apartado último lo determina así:

"Y para que todo ello sea cierto y seguro, mando al regente y — jueces de la mi audiencia de grados de la ciudad de Sevilla, alcaldes de la cuadra de ella y al mi asistente de la dicha ciudad y a su lugar teniente en el dicho oficio, y a los demás jueces y justicias de ella y de otras cualesquiera ciudades, villas y lugares de los mis reinos y señorios de la corona de Castilla a quien principal o incidentemente to-care todo lo aquí contenido, que todas las causas que estuvieren pendien-tas en que vosotros fuerdes reos, siendo de las calidades en esta mi carta de declaradas, provean y den orden se remitan luego al juez conser-vador que os tengo nombrado en el estado que estuvieren, aunque se hayan empezado antes o después de la dicha provisión de 19 de marzo de este — año, justamente con las dichas provisión y cédulas, sin embargo de haberse mandado por la dicha mi audiencia de grados dar traslado de ello al dicho mi fiscal, y sin poner en ello excusa, réplica, duda, ni dificultad alguna; a los cuales mando que no se entrometan ni puedan entro-

meter en cosa alguna tocante a lo contenido en las dichas provisión y -
 cédulas y en esta mi carta, sino que las guarden y cumplan y hagan guardar;
 cumplir y ejecutar en todo y por todo como en ella se contiene; y
 a cada uno en la parte que le tocare las hagan llevar y lleve a pura y
 debida ejecución con efecto, de manera que todo ello se cumpla, sin que
 sea necesario ocurrir más a mí sobre esto, no embargante cualesquiera
 leyes y pragmáticas de los mis reinos y señoríos, ordenanzas, estílos,
 uso y costumbre, y todo lo demás que haya o pueda haber en contrario;
 con lo cual para en cuanto a esto toca y por esta vez dispongo y lo abrogo
 y derego, caso y anulo y doy por de ningún valor y efecto, quedando -
 en su fuerza y vigor para en lo de adelante. Y de esta carta han de tomar
 la razón los contadores que la tienen de mi real hacienda, y declaro que
 de esta merced habéis pagado el derecho de la media anata. Dada en Va-
 lencia a 9 de noviembre de 1645 años". (93)

4. RESUMEN Y JUICIO CRÍTICO

El estudio conjunto de las tres Cédulas Reales de Felipe IV de -
 España de 1645 (19 de marzo, 26 de junio y 9 de noviembre), obliga al -
 exégeta a puntualizar lo siguiente: al no constituir un tratado interna-
 cional, en el que se pudiera hacer un balance cuantitativo y cualitati-

(93) Ibid. op. cit. pág. 144.

vo de los beneficios otorgados por dos estados soberanos, su examen ha de contemplarse a la luz de unas Concesiones regias, en las que no existe el aliciente jurídico - y menos moral - de obtener una razonable reciprocidad de trato de la otra parte. La variada índole de los Privilegios jurisdiccionales, personales, fiscales, mercantiles, etc. etc. dispensados a los mercaderes ingleses por nuestro Rey, no obtuvieron en aquella fecha el nacimiento en Inglaterra de una disposición similar.

Es incuestionable que al libre albedrío de Felipe IV, y a la desinteresada postura española, habrá que anotar en su haber, el haz de Privilegios de trascendencia histórica que se concedió con a los súbditos de la Gran Bretaña.

Tratado de Comercio entre España y las Ciudades Hanseáticas otorgado en Munster el 1/11 de septiembre de 1647, ratificado por S.M. Católica en Madrid el 26 de enero de 1648, y publicado en Hamburgo el 12 de agosto de 1650, (Simancas, original en latín), por el que se confirma el Fuero de Extranjería para los Hanseáticos. (94)

Es preciso glosar separadamente de un lado el Tratado de Munster de 1647 y la Ratificación de Felipe IV de 1648.

A.- El Tratado de Munster de 1/11 de Septiembre de 1647.— En el apartado I del Tratado celebrado en Munster el 1/11 de septiembre de 1647, se confirma la vigencia del Fuero de Extranjería concedido a los Hanseáticos por Felipe III en 1607, con el siguiente tenor: "Que los antiguos Privilegios, é Inmunidades, que han adquirido las Ciudades Hanseáticas en los Reynos, y Provincias de España, y principalmente el Tratado del año de 1607, con las Escrituras Anexas, que contienen los Privilegios, y la Real extensión de ellos, (cuyo tenor, que se insertará bajo la firma de los Embajadores de ambas partes - al fin del presente acuerdo, tendrá la fuerza de auténtico), concedidas, confirmadas, y enteramente renovadas por este mismo Tratado,

(94) ABREU Y BERTODANO, J.A. op. cit. (Reinado de Felipe IV, Parte VI. Año MDCCLI, pág. 49 a 69.

se observarán de aquí en adelante puntualmente, y con buena fé de -
 ambas partes, exceptuando aquellas cosas, que se derogaren por los
 Artículos siguientes, pero en primer lugar, que cesando las hostili-
 dades entre su Real Majestad, y las Provincias Unidas del País Bajo,
 ya sea por tregua o por Tratado de Paz, todo aquello que se reservó
 contra las dichas Provincias, sus Habitantes, y Súbditos en el dicho
 Tratado del año de 1607, etc. y de todo punto se extinga, durante la
 Paz y Tregua, y si en este caso se hubiera concedido a los súbditos
 de las dichas Provincias Unidas del País Bajo, por razón del comer-
 cio, y de aquellas cosas que pertenecen a la seguridad, y libertad
 del mismo, y alguna cosa más de lo que antiguamente competía, ó se
 concedió a los Hanseáticos, todo se entienda concedido a los Hanseá-
 ticos, en virtud de este Tratado" (95)

El origen de este Pacto obedeció primero a la oportunidad de res-
 tablecer el recíproco comercio entre España y las ciudades Hanseá-
 ticas a su normal desenvolvimiento, así en su Prólogo se expresó:
 "SEA NOTORIO A TODOS, que habiéndose representado muchas veces de -
 parte de las nobles Ciudades Hanseáticas, por medio de sus diputados
 expresos á los Embajadores Plenipotenciarios del Rey de las Españas
 para el Tratado de la Paz general, residentes en Munster de Westfalia

(95) Ibid. op. cit. apdo. I, pág. 52)

que el COMERCIO de dichas Ciudades, que con mútuo, y recíproco fruto, y utilidad había florecido en otro tiempo en los Reinos, Dominios, y Estados de S.M.C. se ha arruinado de algunos años a esta parte, por la injuria, e infelicidad de los tiempos, y por las calamidades de la Guerra, con muy grande menoscabo, así de los pueblos Españoles, como de los Hanseáticos. (96)

En segundo lugar, tuvo su ratio essendi en la conveniencia de mantener la neutralidad de los Hanseáticos, reconocida en el apartado III de esta manera: "Pero mientras subsistieren las hostilidades entre su Real Majestad y las Provincias Unidas del País bajo, é otros cualesquier enemigos, gozarán los Hanseáticos de la Neutralidad, que no se les niega por los Enemigos de S.M.; y por tanto, quedando salva todas las anteriores cosas concedidas á la Sociedad Hanseática, tendrá libre facultad para traficar en qualquier tiempo con las Provincias Unidas, y otros cualesquier Enemigos de su Real Majestad; ir y salir de sus Tierras, y conducir, y transportar mercaderías por — Tierra, y por Mar, excepto aquellas correspondientes al uso de la — Guerra, que provengan de los dominios de España" (.7)

En último término, sirvió este Tratado para rubricar los lazos de

(96) Ibid. op. cit. pág. 50.

(97) Ibid. op. cit. ap. III, pág. 54.

amistad entre las ciudades confederadas de la Hansa y nuestra patria. En el apartado IV se consolidan esos vínculos, con esta fórmula: "Las Ciudades Hanseáticas darán todas señales de amistad al Rey Católico y a sus Subditos, y Estados; y demás de esto todo apresto de Naves, y de las demás cosas que pertenecen á ellas, y á su reparo, según la costumbre del lugar; y será libre, y permitido á los Ministros de - S. M. C. comerciar en ellas, juntamente con todas las demás comodidades, que se concedieren a otro qualquier Príncipe, y Estado Neutral y Amigo en qualquier tiempo, y lugar" (98)

El ofrecimiento de amistad de los Hanseáticos hacia España, así como de mantenimiento de su neutralidad, en nuestra dura y larga guerra con las Provincias Rebeldes de los Países Bajos, - tan próximas geográficamente a aquellos -, determinó no sólo una confirmación por parte de Felipe IV de los Privilegios que en 1607 les otorgó su padre Felipe III, sino también una Ampliación de los mismos y que estudiamos seguidamente:

B.- Confirmación de Felipe IV de 26 de Enero de 1648.-

1.- Confirmación y ampliación de los Privilegios del Fuero de Extranjería.

En el Preámbulo de la misma, se hace una auténtica Exposición de

(98) Ibid, op. cit. ep. IV, pág. 54-5.

Motivos, de las razones que impulsaron a Felipe IV a confirmarles y ampliarles a los naturales de la Hansa Teutónica, sus sustanciosos privilegios. Dice aquel: "Por cuanto por parte de las Ciudades de la Confederación de la Hansa Teutónica, nos ha sido pedido, que demás de confirmarles los Privilegios, que los Serenísimos Reyes de Portugal, nuestros predecesores, concedieron y confirmaron á los Naturales de la dicha Hansa Teutónica de los Reinos, y Corona de Portugal fuésemos servidos de ampliarlos, y estenderlos a nuestros reinos de Castilla, representándonos la voluntad con que siempre acudieron al Trato, y Comercio, aventurando sus vidas, y haciendas, y conmutando sus utilidades en abundante, y honesta mercancía, permaneciendo desde su principio en perpetua observancia, teniendo consideración á ello, y por el amor que siempre hemos tenido á los Sábditos de la dicha Hansa, deseándoles todo bien, y aumento: Habiéndose visto en mi Consejo de Estado hemos acordado de concederles, como por la presente les concedemos a todos, y á cada uno de los Naturales de la Hansa Teutónica, las gracias, y privilegios siguientes".

(99).

Los variados y distintos Privilegios conferidos, podemos clasificarlos así:

1.1. Privilegio Jurisdiccional. EL FUERO DE EXTRANJERIA STRICTO SEN

SU. El Juez Conservador de los Hanseáticos.

a) Competencia por razón de la materia.— Este juez particular de los Hanseáticos, nombrado por Felipe IV para conocer y sustanciar las causas civiles o criminales en que aquellos pudieran estar involucrados, era el único competente para ordenar la detención y prisión de aquellos. El art. 11 lo determina así: "Item conoede Su Majestad, que no puedan ser presos, ni detenidos, por caso que sea - de crimen, ó Civil sino por un Juez particular, el cual su Majestad nombrará, para que conozca de las Causas (100). Complementa dicho precepto lo desarrollado en el art. 26, por el que se concreta que los naturales de la Hansa, no podían ser citados, juzgados, ni condenados, sino por su Juez propio. Este artículo lo especifica de este modo: "Item, que los naturales de la Hansa, que por causa del Comercio van, vienen, están, y contratan en estos Reynos, en ninguna causa civil, ni criminal, puedan ser citados, juzgados, ni condenados, sino ante el Juez especial que de les diere, exceptuando las - Causas que tocaren a los derechos Reales, y Aduanas, de las cuales han de conocer, y juzgar los Jueces, y Recaudadores de ellas". (101)

(100) Ibid, op. cit. pág. 59.

(101) Ibid. op. cit. pág. 61.

b) Competencia geográfica y en razón de la cuantía.- Se fija - la jurisdicción geográfica del Juez conservador de Sevilla con una - extensión que abarca dicha urbe y seis leguas a la redonda. Por razón de la cuantía se le marca el tope máximo de los diez mil maravedís. El artículo 15 lo precisa con el tenor siguiente: "Asimismo se les - concede, que su Juez lo sea en todas las causas civiles, y Crimina- les en la Ciudad de Sevilla, y seis leguas a la redonda, y tenga ju- risdicción hasta en cantidad de diez mil maravedís, sin que de él ha- ya apelación, ni agravio, excepto contra las personas privilegiadas; y en lo que fuere de ahí arriba se junte con dos Letrados, fulminada la causa, y la Sentencia en Definitiva" (102).

De otra parte, dicho Juez ejecuta la pena de cincuenta du- cados para los que no guardaren sus Privilegios. El precepto nº 20 concreta a este respecto: "Iten se les concede á los Hanseáticos, que su Juez pueda executar la pena de cincuenta ducados en todos los que no les guardaren sus Privilegios y que se apliquen á alguna obra pia; los que se pueden añadir, según su memoria" (103).

c) Competencia en materia sucesoria.- En España por su trato be- névolo y generoso hace todo lo extranjero, no se aplicó el tan odia- do derecho de aubana. Esta talente liberal se mantiene en esta Con-

(102) Ibid. op. cit. pág. 59-60.

(103) Ibid. op. cit. pág. 60.

firmación de Felipe IV, otorgando al Juez de los Hanseáticos, facultades para inventariar los bienes del fallecido - súbdito de la Hansa - y hacerles entrega a los legítimos herederos del caudal relicto.

d) Apelaciones.- Como garantía de la firmeza de las sentencias tanto interlocutorias, como definitivas, se restringe la posibilidad de apelación contra las mismas, si el importe que se ventilaba en la litis no excedía de cien ducados. El art. 27 acota aquella facultad con este texto: "Iten se les concede, que no sea lícito apelar de la simple Sentencia Interlocutoria, ni de la misma Definitiva, si no excediere la suma de cien ducados" (104)

1.2. EL FUERO DE EXTRANJERIA LATO SENSU.

Privilegios personales de los Hanseáticos.

Citaremos los más importantes:

A) Privilegio de libre entrada con sus naves en Puertos españoles.-

La facultad de recalar en los Puertos y Senos de nuestras - Costas, por parte de los naturales de la Hansa, se les reconoce ampliamente, tanto para sus naves, como para las mercancías que transportasen, sin más limitaciones que la de que

(104) Ibid. op. cit. pág. 61.

procediesen de Holanda, Zelanda, Provincias Rebeldes de los Países Bajos, o estuviesen prohibidas su importación. La misma libertad se recogió para detenerse en los puertos, o para la partida. El art. 21 lo ampara así: "Iten concede su Majestad, que los dichos Hanseáticos pueden entrar con sus Navíos, así propios, como alquilados, y todo género de mercancías, y cualesquier otros bienes, como no sean las dichas Naves, ni mercancías de las Islas de Holanda, y Zelanda, y Provincias Unidas, ni otras prohibidas, en todos los puertos Selos, y Distritos de estos dichos Reinos, donde en tiempos pasados han acostumbrado, y les ha sido lícito entrar seguramente, sin Salvoconducto, ó otra Licencia General, ó especial, y detenerse en los que les pareciere, y volver a navegar, cuando quisieren, guardando las costumbres, y Leyes de los tales Puertos". (105)

B) Privilegio de libre tránsito por territorio español.-

Con cierto casuismo se reconoce este derecho singular, - facultando a los Hanseáticos para viajar por nuestro Reino con caballos, mulas y carros, - en el artículo 24, cuando determina: "Iten, que pueden caminar por todo el Reyno en caba-

(105) Ibid, op. cit, pág. 60.

llos, mulas y carros." (106)

c) Privilegio de creación de Casas de Contratación.-

Se establece este derecho, en el art. 1, al configurarlo así:

"Primeramente les concedemos, que puedan tener en estos Reynos Casas de Contratación y que sean reservadas de Huéspedes y de otro impedimento". (107)

d) Privilegio de nombramiento de sus Cónsules.-

La facultad de nombramiento de Cónsules en nuestros Puertos no tenía más límites formales, que los de ser aprobados y autorizados por Felipe IV. El art. 2 lo concedía con este tenor: "Iten se les concede, que puedan nombrar en los Puertos de estos Reynos Cónsules de su Nación, los cuales su Majestad aprobará, y autorizará; y que sean tales, que servirán con la fidelidad que conviene, haciendo el juramento, que por la Tratación hecha con los dichos Diputados sobre el Comercio hoy día de la fecha de esta, está acordado para evitar los fraudes de los inobedientes, y demás inconvenientes, que hasta agora ha havido; y asimismo jure. de cumplir la Instrucción que ellos les dieren, aprobada por su Majestad".

(106) Ibid. op. cit. pág. 61.

(107) Ibid. op. cit. pág. 58.

(108)

E) Privilegio de tener Agentes en la Real Corte.

Se creó, con estas palabras: "Iten se les concede que puedan tener Agente propio en su Real Corte, para que haya en todo el buen orden, y correspondencia necesaria" (109)

F) Privilegio de no prestar servicio militar.

Este privilegio se cristalizó, con el texto que transcribimos seguidamente: "Iten, que no sean compolidos á servir por Mar, y por Tierra los Hanseáticos que residieren en - estos Reynos" (110)

G) Privilegio de aceptación voluntaria de cargos públicos.-

Se delimita este derecho con esta fórmula: "Iten quiere su Majestad, que los dichos Hanseáticos sean reservados de los Oficios públicos, y Curadurías, si no los quisieren de su voluntad". (111)

H) Privilegio a no ser embargados.

Este importante beneficio se extendía a ser inembargables las casas donde vivieran los Hanseáticos, sus bodegas y ca

(108) Ibid. op. cit. pág. 58.

(109) Ibid. op. cit. pág. 58, art. 3.

(110) Art. 5. op. cit. pág. 58

(111) Art. 4. op. cit. pág. 58.

ballerizas. Se acotó así: "Iten, que nadie les embargue, em barace, ni dé aposento, las casas en que viven, ó vivieren, bodegas, y caballerizas; y que puedan andar en bestia, mulas de freno, y sillas en todos estos Reynos" (112)

I) Privilegio a la intimidad hogareña.

Este derecho se recoge de este modo: "Asimismo quiere Su Ma jestad, y manda a las Justicias, que tengan particular cui dado con que sus Ministros no entren en las casas de los - Hanseáticos sin orden, y legítima corrisa" (113)

J) Privilegio a una justicia rápida.

Se concreta en el art. 20: "Iten, que las Causas de los Han seáticos se despachen con brevedad, y que no se vayan alar gando, con ninguna dilación, de día en día". (114)

K) Privilegio de no ser arrestados.

Este transcendente beneficio jurídico, se consagró generosa mente. Veámoslo: "Iten, que los Hanseáticos, y sus Naves, y Haciendas, no sean detenidos en nuestros Reynos por ningunos arrestos, y mucho menos sean agravados por ningunas represen taciones, sino los autores de los delitos, y sean convenidos por

(112) Art. 6. op. cit. pág. 58.

(113) Art. 16. op. cit. pág. 60.

(114) Ibid. op. cit. pág. 61

Vía Jurídica, y no paguen los unos los delitos de los otros" (115).

L) Privilegio en caso de naufragio.

Era normal en la Edad Moderna, en Europa, - y esta costumbre ha subsistido hasta el siglo XIX-, el provocar con ingeniosos artilugos caseros, falsas luces por las noches, a fin - de desorientar a las naves y consecuentemente obtener su - naufragio en las costas al objeto de apoderarse del utillaje y mercancías que aquellas pudieran transportar. Frente a este consuetudo inveterada, Felipe IV, dispuso a favor - del Hanseático: "Iten, que si en algún tiempo sucediere padecer naufragio alguno de los Hanseáticos en estos Reynos, y Señoríos, nadie se atribuya, ni tome de los bienes y mercancías, que se sacaren, y salvaren de tal naufragio, ni el Fisco Real, ni otro de los súbditos de Su Majestad; sino que cualquiera cosa que sea se déje, y restituya á los que han padecido el naufragio, ó á sus herederos". (116)

M) Privilegio de prorrateo de gastos entre los Hanseáticos.

Se confiere este beneficio con esta fórmula: "Iten, que si
acaso por razón de esta Confederación, y Unión del Comercio,

(115) Art. 30, op. cit. pág. 61.

(116) Ibid. op. cit. pág. 61, art. 31.

se hubieren hechos algunos gastos por la Hansa, ó en lo venidero se hubieren de hacer, de los cuales algunas ciudades quisieren escusarle, no sean partícipes las tales Ciudades de estos Privilegios, hasta que igualmente hayan participado en los mismos gastos" (117)

1.3. Privilegio de comercio.

Para todo mercader, independientemente de su nacionalidad y procedencia, es vital para su tráfico, poder ejercitarlo sin frenos, ni cortapisas. La libertad de negociación, de precio de venta, de elección de comprador, aparecen perfiladas claramente en los artículos 7, 24, y 25, de este modo singular: "Iten se les concede, que puedan — tratar y contratar libremente en estos Reynos; y que de la moneda de plata que trajeren de sus Provincias, y metieren en estos Reynos no paguen ningunos derechos (118) Negociar, contratar, comprar y vender en él libremente, así por sus personas, como por sus Agentes, y Factores, cualesquiera que sean, como á ellos les fuera más cómodo, y pareciera mejor, con que los dichos factores sean de los que su Majestad permite, que residan en sus Reynos" (119). "Itcn, que sea li-

(117) Art. 32. Ibid. op, cit. pág. 61.

(118) Art. 7. Ibid. op. cit. pág. 58-9.

(119) Art. 24. Ibid. op. cit. pág. 61

cito, a los Hanseáticos vender sus mercancías quando quiera, y a -
 quien quiera que quisieren, pagando los derechos; y de ninguna manera
 sean compelidos a vender contra su voluntad, assi las mercancías
 que fueren libres de derechos, como las otras". (120)

1.4. Privilegio de exégesis: La cláusula "In dubio pro Hanseático".

Este sustancioso beneficio de exégesis de la Concesión Real de Felipe IV, dirigido a tutelar más fuertemente a los naturales de la HANSA, se explicitó de esta manera: "Item, que quando acaso alguno de estos privilegios hubiere necesidad de alguna interpretación, sea siempre en favor de los Hanseáticos" (121)

Hoy son muy usuales las fórmulas de "in dubio pro reo" o "in -
 dubio pro operario", etc. etc.... pero es menester retrotraerse al siglo XVII, para percatarse de la importancia, que tenía en aquella época, el consagrar una fórmula de interpretación tan generosa.

1.3. Juicio crítico.

Sinsubjetivos partidismos, habrá que convenir, analizados punto por punto los Privilegios rescñados, que los beneficios conferidos a los Hanseáticos por Felipe IV eran de enorme trascendencia eco

(120) Art. 25. Ibid. op. cit. pág. 61.

(121) Art. 33. Ibid. op. cit. pág. 62.

nómica para el tráfico del comercio de aquellos y que a mayor abundamiento, las tutelas jurídico-procesales que les fueron otorgados implicaban un status singularizado de gran repercusión ante la administración de justicia española. Puede afirmarse sin infulas hiperbolizadoras que esta talente desprendido de España, contribuyó en buena medida a un fuerte desarrollo y expansión del comercio marítimo en Europa. Las facilidades otorgadas en materia de libertad de navegación, exenciones fiscales, jurisdicción excepcional y propia de los naturales de la Hansa, etc. son argumentos de peso al contar esa afirmación, que no pueden preterirse.

Tratado de paz y comercio entre España y los Estados Generales de las Provincias Unidas, ajustado en el Congreso de Munster de Westfalia de 30 de enero de 1.648 (122)

En este tratado se crea el Fuero de extranjería para los naturales de las provincias Unidas de los Países Bajos.

El presente Tratado consta de 79 artículos y un Preámbulo. Para una mas clara exposición del mismo vamos a esquematizar su contenido, deteniéndonos en sus aspectos mas interesantesx

1. Declaración de paz y reconocimiento de Soberanía.— "Primamente el dicho Sr. Rey declara y reconoce, que los dichos señores Estados generales de lps Países Bajos Unidos y las provincias de ellos respectivamente con todos sus países asociados, ciudades y tierras de su pertenencia son Estados, provincias y países libres y soberanos, sobre los cuales, ni sobre sus países, ciudades y tierras asociadas, como se ha expresado el dicho Sr. Rey no pretende nada; y que al presente o de aquí en adelante no pretenderá nunca cosa alguna para sí, sus herederos y sucesores y que en consecuencia de esto tiene á bien tratar con los dichos señores Estados, como lo hace al presente, una paz perpétua, con las condiciones

(122) RIQUELME, A. "Apéndice al derecho internacional de España", Tomo II Madrid 1849, pág. 27 a 49.

escritas y declaradas aquí abajo". (123)

Debemos destacar la frase, el dicho Sr. Rey Felipe IV de España no pretende nada, ni para sí, ni para sus herederos y sucesores, respecto de las provincias Unidas de los Países Bajos, que son Estados, - provincias, países libres y soberanos; Es natural que en un tratado de definitivo de Paz se proclame una declaración semejante, máxime cuando el mismo quiere romper con una tradición de cruentas guerras, y abrir un nuevo período de entendimiento y concordia.

2. Efectos de la Paz.-Podemos desglosar las secuelas de la Paz, con esta división.

- a) Cese de hostilidades.- "Es a saber, que la dicha paz será buena, - firme, fiel, é inviolable, y que en su consecuencia cesarán y se sus penderán todos los actos de hostilidad y de cualquier manera que sean, entre los dichos señores Rey y Estados Generales, así por mar y otras aguas, como por tierra en todos sus reinos, países, tierras y señorios, y para todos sus súbditos y habitantes de cualquier calidad o condición que sean, sin excepción de lugares ni de personas".
- b) Perdón de ofensas.- "Los súbditos y habitantes de los países de los dichos señores Rey y Estados, tendrán toda buena correspondencia y

(123) Art. 1. op. cit. pág. 28-9.

amistad, sin sentirse de las ofensas y daños que hubieren recibido en lo pasado: podrán también frecuentar y hacer mansión en los países uno de otro, y ejercer allí su tráfico y comercio con toda seguridad, así por mar y otras aguas, como por tierra". (124)

3. Concesión de Privilegios. - De muy variada índole, fueron los privilegios dispensados; unos tuvieron carácter recíproco para los súbditos respectivos, otros solamente se concedieron a los vasallos de una de las partes soberanas; en todo caso, es oportuno quebrar la monotonía del Articulado del Tratado - en aras de una glosa más comprensiva - a fin de presentar la siguiente ordenación de privilegios.

4. Privilegios jurisdiccionales. - Dentro del Tratado encontramos dos tipos de privilegios, a saber:

1. Fuero de Extranjería stricto sensu.

- a) La jurisdicción del Juez conservador. - Esta vía excepcional de administración de justicia, aparece reconocida - a nuestro entender - de una forma implícita y un tanto velada en el art. 16 del Tratado, cuando dice: "Las ciudades Ancestrales con todos sus ciudadanos, habitantes y países gozarán, en cuanto a la navegación y comercio en España y en los reinos y Estados de España, de todos y los mismos derechos, franquezas, inmunidades y privilegios

(124) art. 4. op. cit. pág. 29.

que por el presente tratado se conceden, ó de aquí en adelante se conc dieren, á favor y respecto de los s**ó**bditos y habitantes de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Y recíprocamente los dichos s**ó**bditos y habitantes de las Provincias Unidas de los Países Bajos gozarán de todos y los mismos derechos, franquezas inmunidades, privilegios y capitulaciones, así en cuanto al esta**ble**cimiento de los c**ón**sules en las ciudades capitales o m**ar**títimas de España, y otras partes donde fuere menester, como en cuan**to** a los mercaderes, factores, maestros de navíos, marineros ó - otros, del mismo modo que las dichas ciudades Anseáticas en gene**ral** ó en particular los han ob**te**nido y usado por lo pasado, ó ob**tu**vieren y usaren de aquí en adelante, para la seguridad, beneficio y ventaja de la navegación y comercio de las ciudades, mercaderes factores, encomenderos y otros dependientes de ellas". (125)

En la remisión que dicho precepto hace - a fin de aplicarlos a los s**ó**bditos de las Provincias Unidas de los Países Bajos - a los de re**chos**, franquezas, inmunidades, privilegios y capitulaciones, de que gozaban en España- en el pasado, presente o futuro - los Hanseáticos, está amparada la aplicación a los primeros del Fuero de Extranjería, o su trasunto fiel, el Juez Conservador. Habráse

(125) Art. 16. op. cit. pág. 33.

de tener presente en este apartado, lo que con anterioridad comentamos respecto de los Capítulos de Privilegios para la Hansa Teutónica otorgados por Felipe III el 28 de Septiembre de 1607, así como en el Tratado de Munster de 1/11 de Septiembre de 1647 ajustado con las ciudades Hanseáticas, en los que se contemplan con más minuciosidad la figura del iudex conservador de las naturales de la Hansa.

1.1. Fuero de Extranjería lato sensu.-

- b) La Jurisdictio Bipartita.- Esta jurisdicción se acordó con amplitud en el art. 21. "Se nombrarán de una y otra parte ciertos jueces, en número igual en forma de cámara imparitita, que tendrán asiento en las provincias del País Bajo y en aquellos lugares que convinieren; y esto por turnos, ya sea bajo la obediencia del uno ya sea bajo la del otro según se acordare de mútuo consentimiento: los cuales jueces nombrados por una y otra parte, conforme a la comisión e instrucción que se les dará, y sobre la cual harán juramento según cierto formulario que de una y otra parte se arreglará sobre este asunto. Atenderán al comercio de los habitantes de las dichas provincias de los Países Bajos, y á las cargas e imposiciones que se cobraren por una y otra parte sobre las mercaderías: y si los dichos jueces supieren que de una ó otra parte ó por ambas se hace algún exceso, le corregiran y moderarán.

Demás de estos los dichos jueces examinarán las cuestiones tocantes a la falta de ejecución del tratado, como también las contravenciones de él, que en su tiempo y lugar puedan sobrevenir así, en los países de la parte de acá, como en los reinos distantes, países, provincias, e islas de Europa y dispondrán de ellas sumariamente y de plano, y decidirán lo que hallaren convenir en conformidad del tratado; y las sentencias y disposiciones de estos jueces se ejecutarán por los jueces ordinarios del lugar en donde se hubiere hecho la contravención ó bien contra las personas que contravinieren según lo requieran las ocurrencias; y no podrán los dichos jueces ordinarios faltar a la referida ejecución ó dejarla de hacer, y de reparar las contravenciones en el término de seis meses después que hayan sido requeridos" (126).

La competencia de estos jueces, venia determinada por las siguientes materias:

1. Atender al comercio de los habitantes de las Provincias Unidas de los Países Bajos.
2. Atender a las cargas e imposiciones que se cobraran por una y otra parte sobre las mercaderías.
3. Vigilar el cumplimiento del Tratado y sus vulneraciones.

(126) Art. 21, op. cit. pág. 34-5.

4. Corregir y moderar los excesos de las imposiciones.
5. Disponer sumariamente en lo tocante a las contravenciones del Tratado.
6. Proponer a los jueces ordinarios la ejecución de sus sentencias.

¿La implantación de esta última vía jurisdiccional, hacia, hacia innecesario el mantenimiento del cauce del Juez conservador?

Estimamos que no, por ser dos canales de administración de justicia, distintos y separados en el territorio, la función y en la materia. El Juez Conservador entendía en Napaña en las causas civiles y criminales en que pudiesen estar involucrados, los mercados de las citadas Provincias de los Países Bajos residentes en nuestra patria. Los Jueces de la Cámara Bipartita, sin perjuicio de poder estar ubicados en aquellos territorios del País Bajo y otros oportunos, la adscripción de jurisdicción venía dada por el control del comercio de los habitantes de los Países Bajos Unidos, por la vigilancia de las imposiciones y cargas sobre las mercaderías y en lo tocante a mantener la integridad del Tratado; la 1ª era una vía civil y penal, la 2ª lo era mercantil, - fiscal y administrativa.

5. Privilegios personales. - Con carácter general, se estableció que: "Los

súbditos y habitantes de los países de los dichos señores Estados ten
drán también la misma seguridad y libertad en los países de dicho Sr.
Rey, que se concedió á los súbditos del Rey de la Gran Bretaña por el
último tratado de paz y artículos secretos hechos con el condestable
de Castilla" (127)

Debemos colegir que el último tratado de Paz, al que se refiere
aquel precepto, es el otorgado en Madrid el 15 de noviembre de 1630,
y cuyo tenor, daremos por reproducido en estas líneas, como anteceden
te directo.

Los variados beneficios personales que afloran en el Tratado, po
demos agruparlos con este orden:

- a) Privilegio de Libertad religiosa. "Los súbditos y habitantes de
los países de dicho señor Rey que vinieron á los países y tierras
de los dichos señores Estados, deberán, por lo que mira al ejerci
cio público de la religión, gobernarse y portarse con toda modes
tia, sin dar algún escándalo, de palabra o de hecho, ni proferir
algunas blasfemias, y lo mismo se hará y observará por los súbdi
tos y habitantes de los países de los dichos señores Estados, que
vinieren a las tierras de su dicha Majestad. (128)

Las únicas limitaciones recíprocas al libre ejercicio de la liber-

(127) Art. 17, op. cit. pág. 33.

(128) Art. 19, op. cit. pág. 34.

tad religiosa, fueron la de practicarla con toda modestia, no levantar escándalo de palabra o de hecho, ni el de proferir blasfemias. No pueden considerarse de excesivas para la época de fanatismo que solía imperar en ciertos países, sino todo lo contrario, ponderadas y equilibradas.

b) Privilegio marítimo de recabada.-- Viene consagrado en el artículo

23 que dice: "No se podrá abordar, entrar, ni detenerse en los puertos, abras, playas, y radas en los países de uno ó otro con navios y gente de guerra en número que pueda dar sospecha, sin pasaporte y licencia de aquel que mandará los dichos puertos, abras, playas y radas, sino es que sean arrojados por tempestad ó obligados por necesidad, y para evitar algunos peligros de mar". (129)

A contrario sensu, la arribada forzosa por causa de temporal de los buques de guerra de la otra parte, exoneraba de pedir licencia al gobernante de los puertos, objeto de la recabada.

c) Privilegio de inembargabilidad.-- Se recoge en el art. 20, "Los mercaderes, maestros de navios, pilotos, marineros, sus navios, mercaderías, géneros y otros bienes suyos, no podrán ser embargados ni confiscados en virtud de algún mandamiento general ó particular, ó por cualquier causa que sea de guerra ó otra, ni tampoco con pretext

(129) Art. 23. op. cit. pág. 35.

de querer servirse de ellos para la conservación y defensa del país; pero no se entiende comprender en esto lo embargos y confiscaciones de justicia por las vías ordinarias, a causa de deudas, propias obligaciones, y contratos válidos de aquellos á quienes se hubieren hecho los dichos embargos, en lo cual se procederá según se acostumbra por derecho y razón" (130).

- d) Derecho de recuperación de bienes. - Este trascendente privilegio personal, dañado con ocasión del posible *casus belli*, se tutela en el art. 24 del Tratado con este tenor: "Aquellos cuyos bienes se hubieren embargado, y confiscado con ocasión de la guerra ó sus herederos, ó los que tengan derecho gozarán de ellos y tomarán la posesión de su autoridad privada y en virtud del presente tratado, sin que necesiten recurrir a la justicia, no obstante todas incorporaciones al fisco, empeños, donaciones hechas, tratados, acuerdos y transacciones, con cualesquiera renunciaciones que se hayan puesto en dichas transacciones para excluir de alguna parte de dichos bienes á aquellos de quienes fueren, y todos y cada uno de los bienes y derechos que conforme al presente tratado serán ó deberán ser restituidos recíprocamente á sus primeros propietarios sin que sea necesario para ello obtener licencia particular, y por consiguiente los

(130) Art. 20, op. cit. pág. 34.

propietarios de las rentas que por parte de los fiscos fueren constituidas en lugar de los bienes vendidos, como también los de las rentas y acciones que están a cargo de los fiscos respectivamente, podrán disponer de la propiedad de ellas por venta ó de otra manera como de sus demás bienes propios" (131)

- e) Derecho de servirse de abogados y procuradores. - El extraneum como todo ser humano en general, no puede quedar indefenso en la litis, para ello es preciso que pueda acudir y obtener el auxilio de letrados y procuradores. Esta facultad inherente a la persona, tuteló de esta manera:

"Los súbditos y habitantes de los Países Bajos Unidos podrán en toda la extensión de las tierras de la obediencia de dicho señor Rey, servirse de los abogados, procuradores, notarios, agentes y ejecutores que les parezca, para lo cual también serán nombrados por los jueces ordinarios, cuando sea menester, y estos jueces sean requeridos; y recíprocamente los habitantes y súbditos de dicho señor Rey que vinieren a los países de los dichos señores Estados, gozarán de la misma asistencia (132).

- f) Derecho de retorno desde país neutral. - Los que durante la guerra se hubieren retirado á países neutrales, gozarán también del benefi

(131) Art. 24, op. cit. pág. 35.

(132) Art. 30, op. cit. pág. 37.

cio de este tratado, y podrán vivir en donde les pareciere, y asimismo volver á sus antiguos domicilios para habitar en ellos con toda seguridad, observando las leyes del país, sin que con motivo de la residencia que hicieren en cualquier lugar que sea, puedan embargarse sus bienes ni ellos ser privados de su goce (133)

- g) Privilegio de inaplicación del derecho de aubana.-- El odioso "droit d'aubaine", conocido en casi toda Europa, fué desconocido en España como suele sostener la doctrina científica, en base a la generosidad del pueblo español hacia el foráneo. En el presente Tratado se confirma - una vez más - su no aplicación, con este tenor del art. 62: "Los súbditos y habitantes de los países de los dichos señores Rey y Estados, de cualquier calidad y condición que sean se declaran por hábiles para sucederse unos a otros así por testamento como ab-intestato según las costumbres de los lugares: y si á algunos de ellos les hubieren caído anteriormente algunas sucesiones serán mantenidos y conservados en ellas" (134)

(133) Art. 52. op. cit. pág. 42-3.

(134) Art. 62. op. cit. pág. 43.

6. Privilegios de comercio.- Se sentó en esta maneteria, un principio general, representado por esta fórmula amplísima. "No podrán impedirse - la frecuentación, trato y comercio entre los súbditos respectivos; y - si sobrevinieren alguno impedimentos serán real y efectivamente quitados" (135)

7. Privilegios fiscales.- Podemos hacer esta subdivisión:

a) Igualdad fiscal.- "Los súbditos y habitantes de los dichos Señores Rey y Estados, que traficaren en los países uno de otro, no serán obligados a pagar mayores derechos ó imposiciones, que los propios súbditos respectivamente: de manera que los habitantes y súbditos de los Países Bajos Unidos serán y quedarán exentos de cierto veinte por ciento, ó de cualquier otra imposición menor ó mayor, que el Rey de España, durante la tregua de doce años ha cobrado, ó que de aquí en adelante, directa ó indirectamente quisiere cobrar de los habitantes y súbditos de los Países Bajos Unidos, o gravarlos más de lo que haría con sus propios súbditos". (136)

Como complemento de lo anterior, y circunscrito a las importaciones de sal, se estableció "La sal blanca cocida que viene de las provincias Unidas a las de su dicha Magestad, será recibida y admitida sin

(135) Art. 11 op. cit. pág. 32.

(136) Art. 8, op. cit. pág. 32.

ser gravada con mayores imposiciones que la sal gruesa, y de la misma manera se admitirá la sal de las provincias de su dicha Magestad en - las de los dichos señores Estados, y se venderá en ellos, sin que tam- poco pueda ser más gravada que la de los dichos señores Estados" (137)

- b) Franquicia de Peajes.- "Los súbditos de los dichos Señores Rey y Esta- dos gozarán respectivamente en los países uno de otro, de la antigua franquicia de Peages de que hubieren estado en posesión pacífica antes de comenzarse la guerra". (138)

8. Garantías de cumplimiento del Tratado.- Todo Tratado de paz que se instau- ra, tiene su ratio essendi en la creación de un clima de cordialidad y com- prensión entre partes antaño beligerantes; no tiene pues, nada de extraño, que en atención a mantener aquel espíritu, hayan de formularse en el pro- pio texto, declaraciones tendentes a consolidar la vigencia y operativi- dad del propio Pacto, mediante la instrumentación de una serie de garan- tías que incidan de forma radical en el cumplimiento del mismo. En este orden de cosas, se arbitraron las siguientes cautelas:

- a) Reparación del Daño.- "Si se hiciere alguna contravención al presen- te tratado por algunos particulares sin orden de los dichos señores - Rey o Estados, se reparará el daño en el mismo lugar en donde se hu-

(137) Art. 13. op.cit. pág. 32-3.

(138) Art. 10, op. cit. pág. 32.

biere hecho la contravención, si allí fueren aprehendidos ó bien en el de su domicilio, sin que puedan ser perseguidos en otra parte en sus cuerpos o bienes de cualquier manera que sea; y no será lícito llegar a las armas ó romper la paz por este motivo, sino qe que será permitido en caso de denegación manifiesta de justicia - valerse como es costumbre de letras de marca ó represalias" (139)

- b) Renuncia a leyes y costumbres contrarias. - "Demás de esto prometen no hacer cosa alguna contra ó en perjuicio del presente Tratado, ni permitir que se haga directa o indirectamente, y si se hiciere mandarla reparar sin dificultad ni dilación alguna: y se obligan reciprocamente á la observancia de todo lo referido, (/ el dicho Señor Rey por sí y sus sucesores) y para la firmeza de esta obligación renuncian todas las leyes, costumbres y otras cosas cualesquiera contrarias a esto". (140).
- c) Ratificación del Tratado. - "El presente tratado será ratificado y aprobado por los dichos señores Rey y Estados, y las letras de ratificación se entregarán de una y otra parte en buena y debida forma en el término de dos meses y si la dicha ratificación llegare antes, cesarán desde entonces todos los actos de hostilidad entre

(139) Art. 60. op. cit. pág. 43.

(140) Art. 76. op. cit. pág. 46.

partes sin esperar á que se cumpla el dicho término: en inteligencia, de que después de la conclusión y firma del presente tratado, no cesará la hostilidad de ambas partes sin que antes se entregue y cambie la ratificación del Rey de España en debida sustancia y - forma por la de los dichos señores Estados de las Provincias Unidas" (141).

- d) Publicidad del Tratado.- "Este tratado se publicará en todas aquellas partes donde corresponda, inmediatamente después que se hayan cambiado y entregado las ratificaciones de una y otra parte, y cesarán desde entonces todos los actos de hostilidad" (142)

No puede haber duda de que la fijación de esas cuatro garantías, venían a corroborar en el terreno práctico, un propósito de paz bien intencionado - de ambas comunidades políticas.

9. Juicio crítico.- No es preciso retorcer la exégesis de este Tratado, para llegar a una conclusión objetiva y coherente de la filosofía que priva en el mismo. Por una parte, - y arriba queda glosado- la nueva era de Paz Extraída a la luz, concitó un mútuo "do ut des" de privilegios y beneficios para ambos Estados, que desarrollase pragmáticamente, lo que en el puro plano teórico quedaba asentado en el Tratado. De otro

(141) Art. 77. op. cit. pág. 46.

(142) Art. 79, op. cit. pág. 46.

lado, como justo contrapunto, al equilibrio de ventajas recíprocas, - que se asignaron a los vasallos de cada Parte Pactante, sale a la su perficie del Tratado, como un iceberg de trascendencia superior a que pudiera resultar a primera vista el artículo 16 por el que se instaura - a nuestro entender - a favor de los súbditos de los Países Bajos Unidos el Juez conservador que se había dispensado a los Hanseáticos desde 1607, en virtud de los Capítulos de Privilegios concedidos por Felipe III. La apertura de una vía de administración de justicia en España privativa de los naturales de los Países Bajos Unidos, inclina el fiel de la balanza en el peso de ventajas y beneficios recíprocos entre España y aquellas provincias -- a favor del platillo de estas últimas en el sentido de que el acento de la generosidad en la concesión de Privilegios, en su quantum, y sobre todo en su elevada valoración intrínseca, ha de cargarse en el haber de la hidalga y altruista España; máxime cuando, como en este caso, los comerciantes españoles residentes en dichas Provincias Unidas, no recibieron por este Tratado, igualdad de trato jurisdiccional con la correspondiente creación de jueces propios, juzgadores de sus litis.

CASA DE AUSTRIA

CARLOS .II

(1665 - 1700)

Tratado de PaZ y Comercio entre España e Inglaterra ajustado
en Madrid el 17 de diciembre de 1665. (143)

1.- Introducción.— Está integrado el presente Tratado de 34 artículos, en los que se contemplan diversos y sustanciosos Privilegios. — Una exposición ordenada de éstos últimos, obliga al comentarista a buscar fórmulas esquemáticas, así como a crear clasificaciones, que engloben bajo un haz común, temas coherentes e interrelacionados, que hagan sustraer al lector de la lectura del articulado compacto de un tratado.

2.- Propósito del tratado.— "Primeramente que el serenísimo Rey de España y el serenísimo dey de Inglaterra hayan de cuidar que sus respectivos pueblos y súbditos se abstengan de aquí adelante de toda fuerza y agravio, y en caso que algún agravio ó injuria se haga por los dichos reyes ó por sus súbditos y pueblos en perjuicio de pueblos y súbditos del otro, ó bien contra de alguno de los artículos de este tratado, ó contra el derecho común, no por esto se podrán conceder cartas de represlia ó marca, ó contramarca, ni por el uno ni por el otro de los aliados, antes que se haya acudido y pedido justicia, según el coso ordinario —

(143) RIQUELME, A.: "Apéndice al Derecho Internacional de España", Tomo II. Madrid 1849. pág. 117 a 128.

de la ley, ante el juez ó jueces que le fueren de la parte que ofendió, y en caso que se hubiere negado hacer justicia, ó dilatádola más tiempo del que la causa pide, atendiendo á la distancia de la parte donde se han de hacer las pruebas, entonces la ha de pedir el poder supremo de los dichos Reyes, cuyos pueblos ó habitantes hubieren recibido el agravio, al dicho Rey donde la justicia (como dicho es) se hubiere negado ó dilatado, ó bien al tal poder que por las dichas partes respectivamente se señalare para - recibir las tales demandas, á fin que todas las dichas diferencias se puedan componer amigablemente ó por curso ordinario de la ley" (144).

Es congruente esa manifestación de no beligerancia de las partes - contratantes, habida cuenta de su inserción en un Tratado cuyo rótulo de definición es el de la Paz. Al conjunto de las nuevas relaciones diplomáticas, nacidas como fiel corolario, de la Paz confirmada, se ordenaron una gama de Privilegio de todo orden, derechos, inmunidades, etc., etc.... a favor de los súbditos de la otra parte, que en función de la nitidez de - exposición, clasificaremos así:

3.- CLASES DE PRIVILEGIOS: El Fuero de Extranjeria stricto sensu.

3.1. Privilegio Jurisdiccional. El iudex de los ingleses "Que las

(144) Art. 1, inciso 1º, op. cit. pág. 117.

concesiones, inmunidades y privilegios dados en tiempos pasados por trata
dos anteriores á los respectivos mercaderes y súbditos del dicho Rey de Es
paña y del dicho rey de Inglaterra, serán en todos renovados y tendrán to
da su fuerza y vigor; y que los súbditos de la corona de Inglaterra, tra-
tando ó viviendo en cualquiera de los reinos, gobiernos, islas, puertos
ó territorio del dicho Rey de España, tengan, usen y gocen todos los pri-
vilegios é inmunidades que dicho Rey ha concedido y confirmado á los mer-
caderes ingleses que residen en la Andalucía, por sus reales cédulas, sus
fechas en diez y nueve de marzo y nueve de noviembre de mil seiscientos -
cuarenta y cinco. Su Majestad católica por el presente, reconfirmando lo
mismo como una parte de este tratado entre las dos coronas, y á fin que -
sean manifiestos a todos, se consiente que dichas cédulas, en cuanto a la
entera sustancia de ellas, sean y se entiendan extendidas, no sólo a la -
Andalucía, sino á todos los reinos y señoríos de estos reinos de España,
pasándolas y transfiriéndolas al cuerpo de los presentes artículos en nom
bre y a favor de todos y cualesquier tratantes, residentes y vasallos de
la dicha corona de Inglaterra en dichos reinos y señoríos de España" (145).

Una ponderada hermenéutica de este texto precedente, nos incita a
formular las siguientes consideraciones:

(145) Art. 20.: Op. cit. pág. 124.

1ª) Al confirmar Carlos II a los ingleses todos los privilegios, e inmunidades que su antecesor Felipe IV les otorgó mediante las Reales Cédulas de 19 de marzo y 9 de noviembre de 1645, automáticamente les dispuso a aquellos, el privilegio del Juez conservador, que en éstas últimas se contempla. (146)

2ª) Que la aplicación de dichas Reales Cédulas, a los británicos, no se concretó a su primitivo encuadramiento geográfico -Andalucía-, sino por el propio Carlos II se extendió a todos los reinos y señoríos de España, con las ventajas inherentes al caso, de gozar de los generosos beneficios en cualquier punto de la geografía española.

3ª) La remisión que en este art. 20 se verifica a las Cédulas Reales de Felipe IV de 19 de marzo y 9 de noviembre de 1645, debe en buena - puridad exégetica proyectarse a la conferida por el mismo rey el 26 de junio del mismo año, toda vez que las tres, --instauradoras por concesión --graciosa de dicho monarca, del Fuero de Extranjería en España de los ingleses--, forman un haz indivisible de temática y contenido, como se infiere del estudio minucioso de las mismas, y como a mayor abundamiento resulta del examen tratado de 9 de diciembre de 1713 concertado con Inglaterra,

(146) NOTA: Véanse R.C. de 19 de marzo, 26 de Junio y 9 de noviembre de 1645.

en el que se recogen incorporadas al mismo como un bloque, como un solo - texto y confirmadas en aquel, punto por punto.

4ª) Ha de tenerse presente en este orden de cosas, el texto de las tres Cédulas Reales de Felipe IV de 19 de marzo, 26 de junio y 9 de noviembre de 1645, glosadas páginas arriba.

Se sigue expresando en el Tratado, "que el pueblo y súbditos de — una parte y otra tengan y gocen en los dominios, provincias y territorios de cada una tan amplios privilegios, seguridades y libertades como estan concedidos y permitidos por cualquiera de dichas partes al pueblo y súbditos del Rey cristianísimo, los Estados generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos, las ciudades anseáticas, ó de cualquier otro reino ó Estado forastero por sus respectivos tratados y reales cédulas, en la misma manera como si fueran parte del tratado presente, y expresados en él — con propiedad de palabras, de modo que los vasallos del serenísimo Rey de la Gran Bretaña podrán conducir y llevar á todos y cualesquier de los dominios del serenísimo Rey de España, cualesquier frutos y mercancías de la India Oriental, constando por testimonio de los diputados de la casa de — la compañía de la dicha India en Londres, de que son ó vinieron de sus conquistas, plantaciones ó factorías, en la propia forma ni mas ni menos ordenada á los vasallos de las dichas Provincias Unidas de los Países Bajos por dos cédulas reales de contrabando, sus fechas en veinte y siete de ju

nio y tres de julio del año de mil seiscientos sesenta y tres, publicadas en treinta de junio y cuatro de julio del dicho año; y asimismo se declara que todos los bienes, mercancías y navíos que se hubieren traído á los dominios del dicho señor Rey de la Gran Bretaña por presas, y fueren adjudicadas por tales, serán tenidas y estimadas por bienes de ingleses, como si fueran de su propia cosecha, en fuerza de este artículo veinte y uno, y por lo que toca á ambas Indias y otras partes cualesquiera respectivamente en todo, la corona de España concede al señor Rey de la Gran Bretaña y sus vasallos todo lo que tiene concedido á los señores Estados Unidos de los Países Bajos y los vasallos de ellos por su Tratado de Munster del año de mil seiscientos cuarenta y ocho, capítulo por capítulo y punto por punto, sin falta nada á ello" (147).

Como complemento de lo dispuesto en el Art. 20, se insertan al presente, -y confirman-, los tratados y Reales Cédulas, por las que se otorgan Privilegios y libertades a Francia, Provincias Unidas de los Países Bajos, Ciudades Hanseáticas, etc... y cuyo tenor ha de reproducirse en este lugar.

3.2.- El Fuero de Extranjería lato sensu. Privilegios personales.

(147) Art. 21.: Op. cit. pág. 124-5.

Dentro de esta temática, acotamos los siguientes:

a) Libertad de tránsito. "Los súbditos y moradores de los reinos y dominios de los serenísimos Reyes de España y de Inglaterra, respectivamente podrán con toda seguridad y libertad navegar y contratar en todos los reinos, Estados y países que estan ó estarán en paz, amistad ó neutralidad con el otro" (148). Se trata de una fórmula genérica, establecida sin limitaciones ni cortapisas. En el Tratado se añade a este respecto "Y no podrán ser turbados ó inquietados en aquella libertad por los navíos ó súbditos de los dichos señores Reyes respectivamente por causa de las hostilidades que hay ó podría haber despues entre el uno de ellos y los sobredichos reinos, países y Estados ó alguno de aquellos que estarán en amistad ó neutralidad con el otro" (149).

Para precaver los supuestos de naves con mercaderías de contrabando, el régimen que se impuso, evitó de un lado la confiscación del navío, —exagerada a todas luces—, y de otro conjuro el daño de las mercancías —prohibidas, mediante la denuncia e incautación pertinentes de las mismas. El tenor literal fué éste: "Y en caso que dentro de los dichos navíos respectivamente se hallen por el medio sobredicho algunas mercaderías de las declaradas aquí abajo de contrabando y vedadas, serán descargadas, denun-

(148) Art. 24.: Op. cit. pág. 125-6.

(149) Art. 25.: Op. cit. pág. 26.

ciadas y confiscadas ante los jueces del almirantazgo ó otros competentes, sin que por esta razón el navío y las demás mercancías libres y permitidas que se hallaren en el mismo navío puedan ser en ningun modo ni ocupadas ni confiscadas" (150).

b) Derecho de recalada.— "Que será lícito á los navíos del pueblo y súbditos de una y otra parte echar la áncora en la mar ó en cualquiera rada que pertenezca á una ó á otra de las partes, sin que sean obligados á entrar en el puerto; y si en caso que por tempestad, seguimiento de enemigos ó piratas, ó por cualquiera otra causa ó accidente que fueren forzados á entrar en las bahías ó puertos del uno ó del otro, les será lícito el volver á salir libremente cuando quisieren con sus navíos y bienes, con tal de que no rompan la escotilla, ni expongan nada á vender, y que cuando echaren la áncora ó entraren en el puerto en la forma dicha, no sean molestados ni visitados, y bastará que en este caso muestren sus pasaportes ó cartas de mar, las cuales vistas por los respectivos oficiales del dicho Rey de España y del dicho Rey de Inglaterra, podrán libremente dichos navíos volver a salir sin molestia alguna; pero en caso que haya sospecha de que llevan mercancías de contrabando á los enemigos del uno ó del otro, no solamente estarán obligados á mostrar sus pasaportes

y cartas de mar a los dichos oficiales sino también a dar cuenta de su - carga con especificación de ella, lo cual visto y reconocido que no van en dicho navío ó navíos mercancías de contrabando, podrán volver a salir libremente en la forma dicha" (151).

c) Privilegio de inmunidad.- "Que ni el dicho serenísimo señor -- Rey de España, ni el dicho serenísimo señor Rey de Inglaterra en virtud de cualesquiera mandato general ó particular, ó por otra cualquiera causa que sea, embargarán, detendrán, arrestarán ó se apoderarán para sus respec- tivas servicios de ningunos mercaderes, maestros de navíos, pilotos, ma- rineros, ni de sus navíos y mercancías, ni de otros bienes pertenecientes a ellos, ora sea de la una ó de la otra parte, que estuvieren en sus puer- tos ó aguas dulces, sino es en caso que el dicho Rey de España, ó dicho - Rey de Inglaterra, ó las respectivas partes á quien pertenecen los navíos sean primero avisados de ello y hubieren dado su consentimiento ó consen- timientos, con tal que por esto no sean excluidos los arrestos y embargos por vía ordinaria de la ley y justicia del dominio del uno ó del otro res- pectivamente" (152).

d) Derecho a portar armas.- "Que los mercaderes de ambas partes,-

(151) Art. 6.: Op. cit. pág. 119-120

(152) Art. 10. Op. cit. pág. 121.

sus factores, criados, como también el maestro de navío y su gente de mar podrán, tanto en su navegación por mar y otras aguas, así de ida y vuelta, como en los puertos de cada uno respectivamente, llevar y usar de todo género de armas ofensivas y defensivas, sin que sean compelidos á registrarlas y tambien en tierra puedan traer y usar armas para su defensa según las leyes, costumbre y uso del país" (153).

e) Derecho de posesión de cosas.— "Que los mercaderes de cada una de las dichas partes y sus factores, mayordomos y familias, negociantes y otros criados, gentes de mar, maestros de navíos y marineros, habiten segura y libremente en los dominios, provincias y territorios del uno y del otro, como también en sus puertos y tierras, y que el pueblo y súbditos de la una de las dichas partes puedan tener y haber en cualquiera — de los dominios y territorios de la otra sus propias casas para vivir en ellas, y sus magazenes para sus bienes y mercancías por el tiempo que — las tomaren, sin que nadie les dé impedimento en esto" (154).

Por un lado se habla de tener sus propias casas para vivir en ellas y sus almacenes para sus bienes y mercancías "lo cual es pie para inferir

(153) Art. 12.: Op. cit. pág. 122.

(154) Art. 17.: Op. cit. pág. 123.



que ese derecho otorgado era el de propiedad, pero a continuación se nos dice "por el tiempo que las tomasen", expresión que prejuzga una provisio nalidad incompatible con el sentido permanente de todo dominio, lo que conlleva consigo que el propósito del tratadista fué permitir a los súbditos de ambas naciones, el derecho de arrendamiento, pero no el de propiedad".

f) Derecho a servirse de abogados y procuradores.— Esta trascendente facultad, inherente a toda persona, se reguló de esta manera, "Los shabitantes y súbditos de una parte y otra podrán en todas partes de las tierras de la obediencia de dichos señores Reyes, valerse de los abogados, procuradores escribanos y solicitadores que mejor les pareciere, á lo cuál serán también cometidos por los jueces ordinarios cuando fuere ne cesario, y se les requiere, y será permitido a los súbditos y habitantes de una y otra parte en los lugares donde tuviesen su residencia, que los libros de su tráfico y correspondencia sean en la lengua que quisieren,— en español, inglés, flamenco ó otras, sin que por esto puedan ser molestados ni inquiridos con los demás concedido á cualquiera nación en el par ticular de dichos libros de su tráfico y correspondencia" (155).

(155) Art. 18.: Op. cit. pág. 123.

g) Derecho a tener Cónsules.— "Que los cónsules que de aquí adelante residieren en cualquiera parte de los dominios del dicho Rey de España y del dicho Rey de Inglaterra, para asistir y amparar al pueblo del uno y del otro, se nombren y se señalen de tiempo en tiempo por cada parte, y estando así nombrados, tengan el mismo poder y autoridad que cualquiera otros cónsules han tenido" (156).

h) Inaplicación del derecho de aubana.— Con carácter recíproco, — se defendieron los legítimos derechos de los herederos abintestato, impidiendo la práctica del tan odioso derecho de aubana. Las garantías estudiadas fueron éstas: "Que los bienes y haciendas de los pueblos y súbditos de ambas partes que murieron sin hacer testamento en l s dominios — del uno ó del otro, se deposite y se haga inventario de ellos, y juntamente de sus libros y papeles por el cónsul de la nación que fuere el difunto, y se pongan en la custodia de dos ó tres mercaderes nombrados por el dicho cónsul para el uso de los propietarios acreedores y herederos; y — en los casos que tocaren en los dominios del señor Rey de España á la — cruzada el nombrar dichos depositarios, lo haye de hacer como sean personas de la satisfacción del cónsul inglés" (157).

(156) Art. 19.: Op. cit. pág. 123.

(157) Art. 14.: Op. cit. pág. 122.

3.3.- Privilegios de comercio.— "Que el pueblo y súbditos respectivamente del uno en los dominios, territorios y provincias del otro, no hayan de ser compelidos a vender sus mercadurías por moneda de cobre ni por otro dinero, ni cosa alguna de la que quisieren, ni que (habiendo — vendido dichas mercancías) les puedan obligar á que reciban la paga en — otra especie de la que se hubiera ajustado por el acuerdo, no obstante — cualesquiera leyes ó estatutos en contrario" (158). Este tenor implica — un reconocimiento fehaciente de la intangibilidad de la voluntad de las partes, expresada en el contrato de compraventa mercantil, como fiel acatamiento del principio de que la "voluntas" de los contratantes es soberana y libre.

3.4.- Privilegios fiscales.— Se ordenan en esta temática el pago de unos derechos, con la fijación de unas garantías que impidan las exacciones abusivas. Deslindaremos ambos campos:

a) Pago de derechos.— "Item, se ha convenido en que las mercancías de Inglaterra, Escocia, Irlanda y sus dominios, puedan desde los mismos reinos y dominios venir libremente á España y á los demás reinos y señorios del serenísimo Rey de España, con los cuales el comercio está permi

(158) Art. 9.: Op. cit. pág. 121.

tido á otras naciones de bueno á bueno, pagando solamente los dacios y de rechos en la forma que esta sentado en el tratado entre las dos coronas del año de seiscientos treinta" (159). Habrá que tener presente, a fin de delimitar el montante de las tarifas a imponer, lo dispuesto en el — tratado de 1630.

b) Garantías Jurídicas.— Para cortar en ambos países, posibles — abusos que se pudieran originar por la actuación corrompida de algunos — funcionarios, se arbitraron dos tipos de medidas "ad cautelam".

1ª). Colocación en las aduanas de los graneros.— El Tratado lo — consagra así: "Y á fin que los oficiales y ministros de cualesquier ciudades, villas y lugares del uno ó del otro no puedan pedir ni tomar de — sus respectivos mercaderes y pueblos mayores tasas, derechos, estipen— dios, recompensas, presentes, ni otra cosa alguna que los que declara el artículo precedente y para que los dichos mercaderes y pueblos puedan lla na y claramente saber y conocer lo que esto es, se ha concertado y con— cluído, que en todas las aduanas públicas de cualesquiera ciudades, vi— llas y lugares, tanto en los dominios del serenísimo Rey de España como el serenísimo Rey de Inglaterra á donde se pagan los dichos derechos y — alcabalas respectivamente, se hayan de poner arancel ó aranceles por don

de conste claramente la certidumbre de cada uno de los dichos derechos - declarados en el artículo precedente, así por bienes que hubieren entrado, como por los que se hubieren sacado fuera o dentro de los países y - dominios del uno ó del otro" (160).

2ª) Imposición de sanciones a los infractores.- "El castigo que - se impartió a los vulneradores de la normativa fiscal consistió en su encarcelamiento por tres meses y en la multa del triplo del importe del dinero recibido. El tenor literal fué este "Y si algunos oficiales ó sus - diputados pidieren, recibieren o tomaren directa ó indirectamente, pública ó secretamente de alguno de los respectivos mercaderes ó pueblos alguna suma ó sumas de dinero, ó otra cualquier cosa por vía de tasas, derechos, presente, estipendio, recompensa y exacción que no fuere expresado en los dichos aranceles (aunque sea por vía de donativo voluntario) se - declarará que los dichos oficiales ó sus diputados que ofendieren en dicha manera y fueren convencidos de ello por juez competente del país á - donde cometieren la ofensa, hayan de ser encarcelados por tiempo de tres meses, y obligados á pagar tres veces el valor de dinero ó de otra cosa que hubieren recibido en la forma dicha, la mitad para el dicho Rey de España, ó dicho Rey de Inglaterra, y la otra mitad para el denunciador, lo

(160) Art. 3.: Op. cit. pág. 118. Inciso 1º.

cual se podrá pedir y demandar justamente y conforme á la ley delante de cualquier juez competente del país adonde dicha ofensa se hubiere cometido" (161).

Es evidente que la creación de dichas garantías, había de contribuir cumplidamente, a prevenir el florecimiento de aquellas prácticas corruptoras y de exacciones ilegales.

4.- Garantía de vigencia del Tratado.- "Demás de esto prometen — los serenísimos reyes precitados no hacer nada contra ni en perjuicio — del presente tratado, ni sufrir que se haga directa ni indirectamente; y que si se hiciere, lo harán reparar sin dificultad ni dilación alguna; y si obligan respectivamente á si mismo y a sus sucesores á la observancia de todo lo arriba dicho; y para que esta obligación sea válida, renuncian a cualesquiera leyes, costumbres, y cualesquier otras Cosas contrarias á ella" (162). Como medidas tendentes a mantener la operatividad del Tratado, ambas coronas, se autoimpusieron éstas:

a) No hacer nada en contra del mismo.

b) No permitir (sufrir) que se vulnerase aquel, ni directa, ni in directamente.

(161) Art. 3, inciso 2º, Op. cit. pág. 118.

(162) Art. 33, : Op. cit. pág. 127.

- c) Exigir la reparación oportuna en caso de quebrantamiento.
- d) Exigirse a sí mismo, como a sus sucesores la observancia del -
Pacto.
- e) Renunciación a cualesquiera leyes, costumbres y usos contra—
rios a dicho Tratado.

Esta claro el propósito de dichas monarquías de fortalecer la paz, a base de sostener la intangibilidad del Tratado que era el instrumento ad hoc, para mantener aquella.

5.- Juicio Crítico.— ¿Cuál de los dos Estados recibe en beneficio de sus súbditos, mayores privilegios y beneficios? En principio las ventajas se otorgaron con carácter recíproco para ambas comunidades políticas. No obstante, en aras de la probidad hermenéutica, no se debe preterir, que la concesión de una administración de justicia particular, privativa y excepcional, fué hechaaexclusivamente a favor de los mercaderes ingleses en España, y no viceversa, como ya apuntamos en el epígrafe 3,1 de este Tratado; por otro lado, la importancia de esta gracia, no puede ser silenciada, ni capitidisminuida, en el balance a realizar. De otra parte, el derecho de enterramiento en lugares decentes, sólo se arbitra para los vasallos británicos en el art. 13, cuando dice "Que se ordena—
rán lugares decentes para enterrar todos los cuerpos muertos de los natu

rales de Inglaterra que murieren en cualquiera de los dominios del serenísimo Rey de España"(163).

A la vista de esta consideración, en lasque al lado de beneficios mutuos, surgen privilegios de verdadera transcendencia político-administrativa a favor únicamente de los naturales de una de las partes pactantes, es obvio colegir y sentar la conclusión de que España fué más allá en su generosidad y desprendimiento que Inglaterra, ofreciendo-sin pedir trato similar- una vez más, el Fuero de Extranjería a los ingleses, como nueva vía de administrarles justicia a través de sus propios jueces.

(163) Art. 13.: Op. cit. pág. 122.

Tratado de Paz, Alianza y Comercio entre España e Inglaterra,
firmado el 23 de mayo de 1667. (164)

INTRODUCCION.— Este Pacto de las coronas española e inglesa consta de 40 artículos de paz, en los que se estudian en beneficio mutuo, diversos privilegios —que luego analizaremos— de jurisdicción civil y penal, de comercio, fiscales, de comunicación y tránsito, materia religiosa, etc. etc... los cuales se recogen con acusado tinte casuístico.

A prima facie, la ratio essendi de este Tratado, es la plasmación formal, solemne, del deseo de ambos países de mantener una paz duradera, incardinada en la mutua asistencia y cordialidad respectiva de los súbditos de aquellas potestades. Este anhelo de paz, se consagra con este tenor: "En primer lugar se ha acordado y convenido que entre la corona de España de una parte y la de la Gran Bretaña de otra, como entre las tierras, provincias, reinos, dominios y territorios pertenecientes á cualquiera de los sobredichos reyes ó que están bajo la obediencia del uno ó del otro, haya universal, buena, sincera, verdadera, firme y perfecta — amistad, paz y alianza perpétuamente duradera, la que se observará inviolablemente así por tierra como por mar y otras aguas; y que los súbditos

y pueblos de los sobredichos reyes y los habitantes de sus respectivos φ dominios, de cualquier grado ó condición que sean se ayudarán y asistirán mutuamente con todo género de actos de benevolencia y amistad" (165).

Podemos imaginar tal ansia de mejora de las relaciones diplomáticas y de todo orden, entre España e Inglaterra, que no satisfizo plenamente a los redactores del Pacto, la declaración anterior; su ilusión de paz, exigió una más extensa constatación escrita, que afloró de esta manera: "Ninguno de los sobredichos reyes, ni los habitantes, pueblos ó súbditos de sus dominios atentarán, harán ó procurarán que se haga con ningún pretexto, pública ó privadamente, en algún lugar, por mar ó por tierra, en los puertos ó en los rios cosa alguna que pueda ser en daño y detrimento de la otra parte; antes bien la una tratará á la otra con toda amistad y benevolencia" (166).

El fantasma de la guerra que azotó duramente a Europa durante el siglo XVII, parece estar presente en la memoria de los autores del Tratado, cuando se reseña que los monarcas españoles e ingleses cuidarán de que sus respectivos súbditos se abstengan de toda fuerza, agravio o violencia. El texto se acota así: "Los dichos reyes de España y de la Gran

(165) *Ibid.* Op. cit. pág. 128 (Art. 1).

(166) Art. 2, inciso 1º.: *Op. cit.* pág. 128.

Bretaña cuidarán de aquí adelante, en primer lugar, de que sus respectivos súbditos y pueblos se abstengan recíprocamente de toda fuerza, agravio y violencia, y que si aconteciere que tal vez se haga alguna injuria por uno de los mencionados reyes, ó sus pueblos, ó súbditos del otro, ó contra los artículos de esta alianza, ó contra la razón de justicia y equidad, no por eso se despacharán letras de represalia, marca ó contramarca por parte de uno y otro de los aliados, sin haber procurado y solicitado antes las vías ordinarias de derecho y justicia. Pero en caso de negarse ó diferirse este medio de derecho, aquel rey cuyos súbditos ó habitantes hubieren padecido el agravio, pedirá y estrechará con más eficacia que se administre justicia á aquel rey su aliado, ó a los comisarios que se nombraren por parte de ambos reyes: los cuales conocerán de las quejas y diferencias de esta naturaleza, y las compondrán por amigable transacción, ó á lo menos las terminarán conforme á derecho. Y si -- aun hubiere después dilación, y no se diere satisfacción alguna dentro de seis meses después de hecha la instancia, entonces se podrán conceder letras de represalia, marca ó contramarca á la parte agraviada" (167).

Como se observa, solamente se autoriza el libramiento de letras - de represalia, marca ó contramarca, a la parte perjudicada, cuando la --

(167) Ibid. Op. cit. pág. 128, Art. 3.

justicia no le hubiere dado ~~satisfacción~~ en el plazo de 6 meses a contar desde haberla impetrado. El Pacto es generoso en la concesión de Privilegios, de todo orden. Agrupémoslos de este modo:

1. Privilegio Jurisdiccional: "El Fuero de Extranjería stricto - sensu: El Juez Conservador."

La implantación de una vía singular en la administración de justicia, consistente en la creación de un cuerpo de Jueces con competencia - excluyente para juzgar a los súbditos extranjeros, benefició con singular relieve a los comerciantes ingleses radicados en España; pero no gozaron de idéntico trato jurídico los mercaderes españoles en las Islas - Británicas, toda vez que éstos últimos no tenían acceso más que a la vía ordinaria de la administración de justicia inglesa. Por eso en la exégesis del art. 38, debe inclinarse el fiel de la balanza a favor del lado inglés, habida cuenta que son muy superiores los Privilegios y beneficios concedidos a dichos nacionales respecto de los otorgados a los españoles como veremos luego. Dicho precepto se desenvuelve con esta temática: "Se ha convenido y concluido, que los pueblos y súbditos de uno y otro de los aliados tendrán y gozarán en sus respectivas tierras, mares, puertos, radas, playas, territorios y lugares cualesquiera, los mismos privilegios, - seguridades, libertades é inmunidades (asi por lo que toca á sus personas como á sus negocios) que se han concedido ó en adelante se concedie-

ren por cualquiera de los mencionados reyes al rey cristianísimo, á los estados generales de las provincias Unidas del País Bajo, á las ciudades Hanséáticas, ó a cualquier otro reino ó estado por sus tratados ó por cédulas reales con todos los requisitos y cláusulas de estas concesiones - que obran en su beneficio y favor de un modo y forman tan ámplia y eficaz, para hacer que produzca todo su efecto el contrato ajustado y ratificado, como si estuviesen puestas é insertas á la letra en el dicho tratado" (168).

Como quiera que ambas coronas confieren los mismos privilegios, se guridades, libertades e inmunidades a los súbditos de la otra parte, que los dispensados al presente o al futuro a los nacionales de Francia, Pro vincias obedientes del País Bajo, Ciudades Confederadas de la Hansa Teu- tónica o a cualquier otro estado, debemos inferir lógicamente que al ser España más generosa con dichas potencias y ciudades, -en el orden de crea ción de una jurisdicción especial para aquellos súbditos- que la Gran Bre- taña, la concesión recíproca de las ventajas adjudicadas a dichos países, se convierte en una gracia singular de la nación española a la inglesa. - No podía darse la reciprocidad desde el punto de vista pragmático, al ser muy superiores los beneficios donados por España a aquellos territorios,-

(168) Ibid. Op. cit. Art. 38, pág. 136.

frente a las ventajas inglesas.

1.1. El Juez Conservador.-- Damos por reproducido aquí, -en función de la remisión del artículo 38,- lo analizado y glosado en los Capítulos de Privilegios para la Hansa Teutónica el 28 de septiembre de 1607 y legislación concordante, así como lo dispuesto en el Tratado de Munster de Paz y Comercio con los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos de 30 de enero de 1648.

A mayor abundamiento en el art. 9º del Tratado presente, se reproduce la vigencia de las Reales Cédulas de Felipe IV de 19 de marzo, 26 - de junio y 9 de noviembre de 1645, instauradoras del Fuero de Extranjería, para los ingleses con su Juez Conservador. Su tenor es el siguiente: "Los súbditos del rey de la Gran Bretaña que entendieren en la negociación, compra y venta de cualesquiera mercaderías dentro de los dominios, gobiernos, islas ó territorios del rey de España, usarán y gozarán de todos aquellos privilegios y franquezas que el rey católico concedió y confirmó por Reales Cédulas ó órdenes de 19 de marzo, 26 de junio y 9 de noviembre del año de 1645 á favor de los comerciantes ingleses residentes - en Andalucía: las cuales cédulas manda su Majestad católica que se ratifiquen y que se admitan y confirmen como parte principal de este Tratado. Y para que conste a todos de ello, se ha concluido, que las referidas cédulas ó órdenes reales, en cuanto á la sustancia, fuerza y efecto de ellas

se comprendan y admitan en el número de estos artículos; cuyo favor se -
estenderá lo mas que se pueda á uso y beneficio de todos y cada uno de
los súbditos del Rey de la Gran Bretaña que habitan ó comercian en cual-
quier paraje de los dominios del rey católico" (169).

Como debe inferirse en buena hermenéutica, no existe reciprocidad
de trato en materia de administración de justicia entre súbditos españo-
les e ingleses, en dicho precepto. Hay una concesión regia -el juez con-
servador para los ingleses- que no tienen correspondencia en idéntico --
sentido hacia lo español en el orden jurisdiccional inglés.

Continúa pues la generosidad jurídica española hacia Inglaterra.
Damos por insertados los comentarios a dichas Reales Cédulas, en lo tocan-
te al iudex de los mercaderes ingleses y demás privilegios de comercio;-
máxime cuando en el artículo ya citado se nos dice "las cuáles Cédulas, -
manda su Majestad católica que se ratifiquen y que se admitan y confir-
men como parte principal de este Tratado" (170).

2.- El Fuero de Extranjería lato sensu.

2.1. Privilegios personales.- Dentro del Tratado hallamos los si-
guientes:

(169) Ibid. Op. cit. Art. 9, pág. 130.

(170) Ibid. Op. cit. Art. 9, pág. 130.

a) Privilegio de exención de inspección a los navíos ingleses.—

En el art. 10, inciso 1º, del citado Pacto, se reconoce con éstos términos: "Los navíos y cualesquiera otras embarcaciones pertenecientes al — rey de la Gran Bretaña ó á sus súbditos que dirijieren ó entraren en los dominios o puertos del rey de España, de ninguna manera serán visitados ó registrados por los ministros, jueces de contrabando ó otros cualesquiera de propia ó ajena autoridad; ni pasarán á bordo ó entrarán en los sobredichos navíos algunos soldados, hombres armados, oficiales ó particulares cualesquiera bajo el nombre de guardia ó con cualquiera otro pre— texto" (171).

Fijémonos bien, que dicha exención ampara a los buques británicos pero no a los españoles, Hay pues, concesión española, sin reciprocidad de la Gran Bretaña. La trascendencia del privilegio estriba en la imposibilidad material de controlar el contrabando de dichos buques por parte de las autoridades aduaneras españolas, cuya intervención no se autoriza, en beneficio del lado inglés.

b) Privilegio de portar armas.— Este derecho es extensivo tanto a los comerciantes ingleses y españoles, como a sus factores, criados, maestros y marineros, se confirió respecto de las armas defensivas y ofensi—

vas sin la menor obligación de registrarlas, como también llevar consigo, si les pareciere, armas cortas por tierra y usar de ellas para su defensa particular según la costumbre del país" (172).

c) Privilegio de libre residencia.— Este beneficio se reconoció con carácter recíproco a favor de los comerciantes de ambas naciones, extensivo a los maestros de navío, pilotos y marineros. La extensión de ese beneficio la tuteló el Tratado, con este tenor, "vivirán y residirán libre y seguramente en los reinos y territorios de ambos reyes y en sus — puertos y ríos" (173). Que duda cabe, que este derecho está íntimamente interrelacionado con el privilegio de comunicación y tránsito que más — adelante veremos.

d) Privilegio de uso de casas y lonjas.— Esta concesión es consecuencia insoslayable del carácter permanente y estable del tráfico de ciertos comerciantes, que necesitan ubicarse en un territorio de forma sedentaria para controlar y dirigir su actividad mercantil. El acuerdo internacional lo rubricó así: "Y asimismo los pueblos y súbditos de un rey usarán con toda libertad y seguridad, dentro de cualesquiera dominios y territorios del otro, de las casas y habitaciones propias de su alojamien-

(172) Art. 18, Ibid. Op. cit. pág. 133.

(173) Ibid. Op. cit. Art. 30, inciso 1º, pág. 135.

to, y de las lonjas y almacenes destinados a guardar sus géneros y mercancías; y las disfrutarán sin ningún impedimento por todo el tiempo que las hubieren alquilado ó ajustado" (174). Debemos hacer especial hincapié en el último párrafo, en la frase, "la disfrutarán sin ningún impedimento por todo el tiempo que las hubieren alquilado o ajustado", lo que corrobora el ánimo de las partes contratantes de conceder a los súbditos extranjeros residentes, la mayor garantía jurídica en materia de domiciliación y arrendamiento.

e) Privilegio de servirse de abogados y procuradores.— Se otorgó de este modo: "Los habitantes y súbditos de ambos aliados podrán servirse y valerse en todos los lugares de la obediencia de cualquiera de los dichos reyes de los abogados, procuradores, escribanos, agentes, ministros y otras personas que les pareciere más a propósito, á los cuales — también podrán encargar sus pleitos con consentimiento de los jueces ordinarios cuando sea necesario y la parte litigante lo pidiere" (17).

f) Privilegio de no exhibición de sus libros de cuentas.— En este orden, llama la atención la facilidad dispensada —mutuamente— de permitir a los extranjeros redactar sus libros de cuentas y correspondencia en lengua, española, inglesa, flamenca o en cualquier otra, ni se nos —

(174) Ibid. Op. cit. Art. 30, inciso 2º, pág. 135.

(175) Ibid. Op. cit. Art. 31, pág. 135.

oculta la importancia de sancionar la inembargabilidad o secuestro de - aquellos. El texto fué el siguiente: "Y no se les obligará á manifestar á ningunas personas sus registros ó libros de cuentas, ni á darles copia de ellos, si no es que puedan servir de prueba para evitar ó terminar algún pleito, ni tampoco serán detenidos de ninguna manera bajo el nombre de embargo ó secuestro, ni tomados violentamente á los dueños -- con ningún pretesto y también será lícito y enteramente permitido á los súbditos de ambas partes escribir y poner los libros de cuentas y correspondencia que tuvieran en lengua española, inglesa, flamenca ó otra - - cualquiera que más les acomodare; sin que por esto puedan ser molestados ni pesquisados; entendiéndose también concedido por ambas partes todo lo que en otro tiempo se ha concedido á cualquier otra nación tocante á los libros de cuentas, comercio y correspondencia" (176).

3.- Privilegios de comercio. Se establece una amplia gama de privilegios en el ámbito mercantil. Podemos clasificarlos de esta manera:

a) Privilegio de libertad de compra, venta y permuta de mercaderías. Este beneficio se protegió así: "Y asimismo entrar é introducirse en los puertos que les pareciere con sus navíos cargados ó vacíos y con

(176) Ibid. Op. cit. Art. 31, inciso 2º, pág. 135.

cualquier género de trasportes y luego que hayan entrado en ellos emplear se en la compra, venta y permuta de todo género de mercaderías hasta el valor y cantidad que quisieren: asimismo comprar al precio justo y corriente las vituallas y todo género de provisiones necesarias para la vida ó para el viaje; tratar del repato y apresto de sus embarcaciones y carruajes: mudar de lugar y salir libremente adonde les pareciere con sus navíos y otros carruajes, efectos, mercaderías y caudales, sea para volver a sus tierras ó para pasar a otra parte, sin que se les cause -- ninguna molestia, inquietud, ó impedimento, siempre que paguen sus respectivos derechos, alcabalas y aduanas, y sin perjuicio de las leyes y ordenanzas establecidas y observadas en los dominios y territorios de ambos reyes" (177).

b) Privilegio de exención de declaraciones.— Viene regulado con este tenor: "Será lícito y libre á los súbditos del Rey de la Gran Bretaña comerciar en España y demás tierras y dominios del rey católico, -- en donde anteriormente habían acostumbrado tener trato y comercio, así introduciendo como estrayendo mercaderías; e igualmente vender y sacar todo género de paños, mercancías y manufacturas traídas de las islas -- británicas, juntamente con las manufacturas, efectos, frutos y géneros

(177) Ibid. Op. cit. Art. 4, inciso, pág. 129.

procedentes de las islas, ciudades ó colonias del dominio del rey de la Gran Bretaña, y asimismo todos aquellos efectos que hubieren comprado - los factores ó apoderados de los referidos súbditos, así de la parte de acá como de la de allá del cabo de Buena Esperanza, sin la menor obligación de declarar o manifestar á qué personas ó a qué precio han vendido estas mercaderías ó géneros que tuvieran, y sin vejación ó molestias alguna por los yerros que suelen cometer los maestros de navío en orden o al registro de las mercancías ó efectos de esta naturaleza" (178).

c) Privilegio de importación de frutos y mercancías provenientes de las Indias.- Este sustancioso beneficio -sin carácter recíproco- fué desarrollado con esta fórmula: "Los súbditos y vasallos del serenísimo rey de la Gran Bretaña podrán llevar y conducir libremente cualesquiera frutos, géneros y mercancías de la India Oriental á cualesquiera dominios del serenísimo rey de las Españas, con tal que conste por testimonio de los diputados de la compañía de la dicha India Oriental en Londres, que los referidos frutos y mercaderías han sido traídas, ó son producciones de las conquistas, colonias ó factorías de ingleses en la misma forma y con el mismo privilegio y según el contesto, tenor y efecto

(178) Ibid. Op. cit. Art. 7 inciso 1º, pág. 128-130.

de las ordenanzas y concesiones que se despacharon á favor de los vasallos de las provincias unidas en los Países Bajos en las reales cédulas especidas acerca de los géneros prohibidos ó de contrabando en 27 de junio y 3 de julio del año de 1663, y publicadas en 30 de junio y 4 de julio de dicho año. Y por lo que mira a ambas Indias y á otras cualesquiera partes, quiere la corona de España, que todo lo que se concedió a — los estados generales de las provincias unidas de los Países Bajos por el tratado de Munster, celebrado en el año de 1648, se entienda concedido y otorgado al rey de la Gran Bretaña y a sus vasallos con la misma firmeza y ampliación como si estuviere aquí inserto capítulo por capítulo y punto por punto, sin omitir cosa alguna: observándose las mismas leyes á que están obligados y sujetos los súbditos de los dichos estados, y guardándose una recíproca amistad" (179).

En primer lugar, debemos destacar el carácter de concesión de la corona española a la inglesa en dicha normativa. En segundo lugar, la aplicación a esas importaciones o introducciones de los mismos privilegios que los dispensados a los vasallos de las provincias obedientes de los Países Bajos, mediante los Reales Cédulas de 27 de junio y 3 de julio de 1663. Y en último lugar, la Gracia Real, de conferir a los ingle

ANEXO

(179) Ibid. Op. cit. Art. 8, pág. 130.

ses el mismo trato que a los súbditos de aquellas provincias, otorgado a tenor del Tratado de Munster de 1648.

d) Privilegio de recibir como precio la especie pactada..- Frente a usos mercantiles, que dañaban la intangibilidad del acuerdo de compraventa, se estableció esta garantía de la seguridad del tráfico de comercio: "Que los súbditos, pueblos y habitantes de ambos reyes no sean obligados de ninguna manera á vender ó dar sus mercaderías por monedas de cobre ó vellón dentro de los dominios, territorios, provincias ó colonias del uno ó del otro; ni á trocarlas por dinero ó otros cualesquiera efectos contra su voluntad; ni a tomar el precio de lo vendido en otra especie que aquella que se hubiere ajustado, sin embargo de cualquier ley ó costumbre contraria á este artículo". (180).

4.- Privilegio de libre comunicación y tránsito..- Este ius comunicationis, verdadera piedra angular del derecho internacional público, aparece reseñado con un talante amplio y generoso, como se infiere de este texto : "Entre el rey de España y el rey de la Gran Bretaña, como entre sus respectivos súbditos, pueblos y habitantes, así por mar como por tierra y otras aguas, en todos y cualesquiera de sus reinos, domini—

(180) Ibid. Op. cit. Art. 29, pág. 135.

nios, territorios, provincias, islas, colonias, ciudades, villas, aldeas, puertos, rios, bahías, ensenadas, estrechos y corrientes de aguas, sujetos á la obediencia de cualquiera de los dos reyes en donde antes de — ahora acostumbró haber trato y comercio se concederá respectivamente libertad y facultad de negociar, hacer y ejercer todo género de tráfico;— de tal suerte que sin despacho de salvoconducto ó otra forma de licencia general ó especial, los pueblos y súbditos de ambas partes puedan libremente viajar y navegar así por tierra como por mar y aguas dulces á los reinos, provincias, dominios, ciudades, puertos, rios, canales, bahías, distritos y otros parajes sujetos á cualquiera de los dos aliados" (181).

Complemento de este derecho, es la facultad de anclar en las costas, bahías o radas de cualquiera de las naciones signatarias. Este derecho de libre recalada se acotó con esta temática: "Será permitido a los navíos de los pueblos y súbditos del uno ó del otro de los dos aliados surgir y anclar en las costas, bahías ó radas pertenecientes a cualesquiera de los dos, sin ser obligados de ninguna manera á entrar en el puerto inmediato; y en caso que algun navío se viera precisado a entrar en dicho — puerto, arrojado por temporal, por miedo de enemigos ó corsariosó por — cualquier otra contingencia, con tal que conste de no ir de ninguna ma-

(181) Ibid. Op. cit. Art. 4, inciso 1º, pág. 128-9.

nera destinado á puerto enemigo con mercaderías prohibidas, llamadas de contrabando (sobre lo cual no se procederá a no haber claros indicios): el expresado navío podrá salir del puerto cuando le pareciere y hacerse á la vela sin el menor impedimento; con la condición de que no se llegue á la carga que llevara, ni se descargue ó saque alguna parte de ella para venderla en el puerto" (182).

Para el caso de arribada forzosa por motivo de temporal en el su puesto de buques no bélicos, se autorizó su entrada en puerto siempre que su número no diese lugar a recelo, y cuando se tratase de naves de guerra, sólo se le pusieron límites a su aparición o recalada, cuando sobre pasasen la cifra de ocho o se detuviesen más tiempo del necesario.

Se consagra en definitiva el derecho de libertad de comercio y navegación, cuando se establece en el Tratado: "los súbditos y moradores de los reinos y dominios que respectivamente están bajo la obediencia de -- los serenísimos reyes de España y de la Gran Bretaña podrán navegar y comerciar con toda seguridad y libertad en todos los reinos, estados y países que estan en paz, amistad ó neutralidad con el un ó el otro de los dos" (183).

(182) Ibid. Op. cit. Art. 13, pág. 132.

(183) Ibid. Op. cit. Art. 21, pág. 134.

5.- Privilegio de igualdad fiscal que a los españoles.- Este sustancioso derecho de paridad fiscal de los ingleses con los españoles, - fué tutelado por la voluntad de Carlos II, Rey de España con este tenor: "Asímismo se ha acordado, que los géneros y mercaderías que los súbditos del Rey de la Gran Bretaña compraran en España ó en otros reinos ó dominios obedientes á dicho rey católico, y los cargaren en sus propios navíos, ó en otros prestados ó fletados, no estarán sujetos ni serán — gravados de ninguna manera con otros derechos, portazgos, diezmos, subsidios ó otras cargas que aquellas á que estan obligados en igual caso los mismos naturales y todos los demás extranjeros que comercian en los dichos parajes. Demas deesto, los comerciantes y súbditos sobredichos - en sus compras, ventas y contratos de sus mercaderías, así por lo tocante al precio como al pago de todos los derechos, tendrán y gozarán siempre de los mismos privilegios que los súbditos naturales" (184). En el mismo precepto no se da la reciprocidad de trato para los mercaderes españoles.

6.- Privilegio de Consulado.- El disfrute de la institución del Cónsul inglés -con la misma potestad y autoridad que la ejercida por — otros Consulados en España- encuentra su correspondencia, en la misma —

(184) Ibid. Op. cit. Art. 5, pág. 129.

posibilidad de tutela a favor de los súbditos españoles en las islas — británicas. No existe más cautela que la de verificar el rey el nombramiento del citado agente diplomático. El Tratado en este punto se expresa así: "El cónsul que de aquí adelante residiere en los dominios del rey de España para el auxilio y protección de los súbditos del rey de la Gran Bretaña, será nombrado por este mismo rey; y tendrá y ejercerá la misma potestad y autoridad para el cumplimiento de su empleo que haya tenido hasta aquí cualquier otro cónsul en los dominios del rey católico; y recíprocamente los cónsules de España residentes en Inglaterra gozarán de la misma autoridad que hasta aquí se ha permitido en dicho reino á los cónsules de cualquier otra nación" (185).

7.- Privilegio de exención del derecho de aubana.— Este enojoso derecho de los Estados de apropiarse de los bienes de los extranjeros — muertos en su territorio, —y que la generosa España no practicó— se consagra con carácter recíproco para las dos partes contratantes, con esta fórmula: "Que los caudales y bienes de los súbditos del uno de los dos reyes, que murieren en las tierras, países y dominios del otro, se guardarán intactos para los herederos ó demás sucesores por testamento ó — abintestado quedando salvo á cada uno su derecho privado y acción"(186).

(186) Ibid. Op. cit. Art. 27, pág. 134.

(186) Ibid. Op. cit. Art. 33, pág. 135.

En el artículo siguiente, se describe minuciosamente, el sistema de inventario de los bienes de los súbditos fallecidos en abintestado en el otro país, con las garantías jurídicas correspondientes. Este precepto lo reguló de esta manera: "Que los bienes y caudales de los súbditos — del rey de la Gran Bretaña juntamente con sus papeles, escrituras, libros de cuentas y cualquiera documentos, y se pondrán en manos de dos — ó tres comerciantes nombrados por el dicho cónsul ó ministro para entregarlos á los dueños, herederos ó acreedores; y ni el consejo de Cruzada, ni algun otro tribunal conocerá de los bienes de algun difunto ni se — mezclará en ellos, lo cual tambien se practicará en Inglaterra en igual caso con los súbditos del rey de España" (187).

8.- Privilegio de libertad religiosa.— Recíprocamente, España e Inglaterra, se comprometieron mediante este Tratado, a impedir cualquier vejación contra los súbditos de la otra nación , motivada por razones religiosas. No hubo más cortapisa a la libertad de creencias religiosas, — ni al ejercicio de aquellas, que las derivadas de la producción de escándalo público o de ofensa manifiesta. Este respeto a la religión del súbdito extranjero, se plasmó con este texto: "Para que los derechos y re-

(187) Ibid. Op. cit. Art. 34, pág. 135-6.

glamentos del comercio que se han establecido en tiempo de paz en favor de los comerciantes no queden infructuosos, lo cual sería muy de temer, si se causase alguna molestia por caso de religión á los súbditos del rey de la Gran Bretaña que van, vuelven y residen en los dominios y provincias del rey de España por razón de sus comercios u otros negocios; y para que estos se hagan sin el menor debate, y los comerciantes puedan estar con seguridad y tranquilidad, el mencionado rey de España cui dará y atenderá con mucha vigilancia á que no se cause ninguna molestia ni agravio contra las leyes del comercio, así por mar como por tierra, á los súbditos del rey de la Gran Bretaña; ni se les haga vejación, ni se les mueva disputa alguna con motivo ó pretesto de religión mientras no dieren algun escándalo público ó hagan alguna ofensa manifiesta; y el sobre dicho rey de la Gran Bretaña, por las mismas razones cuidará por su parte con igual vigilancia de que los súbditos del rey de España no sean molestados ni inquietados por causa de religión, contra las leyes del comercio; con tal que no cometan algun público escándalo ó ofensa" (188).

9.- Juicio Crítico.— Un exámen decapasionado de este Tratado y -

de los privilegios que en él se contienen; la aplicación por otro lado a los súbditos ingleses, no solo de las ventajas de todo orden que en aquel se les dispensan, sino sobre todo los beneficios otorgados en su día a los naturales de la Hansa Teutónica en los Capítulos de 28 de septiembre de 1607, así como los referidos a los vasallos de las provincias unidas de los Países Bajos concedidos por el Tratado de Munster de 30 de enero de 1648, -que debemos catalogar unidos a este Tratado- nos incita a considerar -sin interferencias de pasión patriótica- que fué -más generosa y desinteresada la postura española, que la inglesa. La cuantía e importancia de las concesiones hispanas supera muy en mucho, las conferidas en el mismo pacto internacional por la Gran Bretaña. Basta con examinar someramente los apartados anteriores.

Tratado de Paz entre España y Portugal (con la mediación -
de Carlos II de Inglaterra) ajustado en Lisboa a 13 de fe-
brero de 1668. (189).

INTRODUCCION

Está integrado este Tratado, por trece artículos, en los que se ordenan distintos privilegios, que ambas coronas conceden recíprocamente a los vasallos de la otra, como secuela de la Paz instaurada, bajo el patrocinio del rey inglés Carlos II.

Podemos hacer la siguiente clasificación aclaratoria:

1ª) Ratio essendi del Tratado: Instauración de la Paz.— Se proclama el establecimiento de una Paz "perpetua, buena, firma e inviolable", con este tenor: "Primeramente declaran los Señores Reyes Católicos, y de Portugal, que por el presente Tratado hacen, y establecen en sus nombres, de sus Coronas, y de sus vasallos, una Paz perpetua, buena, firma e inviolable, que comenzará desde el día de la publicación de este Tratado, (que se hará en el término de quince días) cesando desde luego todos los actos de hostilidad de cualquier manera que sean, entre sus Coronas, por Tierra, y por Mar, en todos sus Reynos, Señoríos, y Vasa—

(189) ABREU Y BERTODANO, J.A.: op. cit. (Reinado del Sr. Rey D. Carlos II. Parte I. Año MDCCLI, pág. 292 a 306.

llos de cualquier calidad, y condición que sean, sin excepción de lugares, ni de personas. Y se declara, que se dará el término de quince -- días para ratificar el Tratado, y el de otros quince para publicarle" (190).

Toda Paz, es creadora de un nuevo clima de relaciones entre dos Estados soberanos, produciendo un cúmulo de consecuencias o resultados, Veamos los efectos de ésta.

1.1. Efectos de la Paz. Se pueden aglutinar, --espigando el texto del Convenio-- siete variados efectos, a saber:

a) Devolución de prisioneros. "Todos los prisioneros de guerra, ó en odio de ella, de cualquier Nación que sean, serán puestos en libertad, sin dilación, ni embarazo alguno, así de una, como de otra parte, sin -- excepción de persona alguna, ni de razón, ó pretexto que se quiera alegar en contrarios, y esta libertad comenzará desde el día de la publicación en adelante" (191).

b) Restitución de haciendas. "Y los dos Reyes conceden perdon a unos, y á otros Vasallos en virtud de este Tratado, debiéndose restituir

(190) Ibid. Op. cit. pág. 304.

(191) Ibid. Op. cit. Art. VI, pág. 307.

las haciendas que estuvieren en el Fisco, y Corona á las personas á quienes, si no hubiera intervenido esta Guerra, havian de tocar, ó pertene- cer, para poder gozar de ellas libremente: pero los frutos, y réditos - de los dichos bienes hasta el día de la publicación de la Paz, quedarán á los que los huvieren poseído durante la Guerra" (192).

c) Reparación de daños. "Y si contra lo dispuesto en este Trata- do, algunos Habitantes, sin orden, ni mandato de sus respectivos Reyes, hicieren algun daño, se reparará, y castigará el daño que hicieren, sien- do aprehendidos los delincuentes; pero no será lícito por esta causa to- mar las armas, ni romper la paz y en caso de no hacerse justicia, se podrán dar Letras de Marca ó Represalias contra los delincuentes en la -- forma que se acostumbra" (193).

No se imponen más limitaciones al castigo y satisfacción del daño causado, que la de no contribuir a romper la paz y tomar las armas.

d) Promesas de Paz. "Prometen los sobredichos Señores Reyes Cató- lico, y de Portugal no hacer nada contra, ni en perjuicio de esta Paz, - ni consentir que se haga directa, ó indirectamente; y si acaso se hicie- re, repararlo sin ninguna delación. Y a la observancia de todo lo arri-

(192) Ibid. Op. cit. Art. VIII, inciso 2º, pág. 308.

(193) Ibid. Op. cit. Art. IX, pág. 308-9.

ba contenido se obligan para con el Señor Rey de la Gran Bretaña, como Mediador, y Fiador de esta Paz; y para firmeza de todo renuncian todas las Leyes, Costumbres, ó qualquiera cosa que haga en contrario" (194).

e) Renuncia a Leyes y costumbres contrarias a la Paz. Se proclama esta actitud en el último inciso del Art. XI del Tratado, cuando se dice: "y para firmeza de todo renuncian a todas las Leyes, Costumbres, o qualquiera cosa que haga en contrario" (195).

f) Ratificación de la Paz.— No sólo se plasmó lógicamente una corroboración de la Paz por parte de España y Portugal, como claramente se determina a continuación del art. 13 del tratado sino que la misma, fué consagrada como mayor garantía por el monarca británico, de esta forma: "Finalmente los presentes Artículos, y Paz en ellos contenida, serán — también ratificados, y aprobados por el Serenísimo Rey de la Gran Bretaña, como Mediador y Fiador de ella por cada una de las Partes, dentro de cuatro meses después de su ratificación" (196).

g) Publicidad.— De un lado, se reconoce la necesidad de publicar la Paz, dándola la mayor difusión; a este respecto se determinó: "Esta

(194) Ibid. Op. cit. Art. XI, pág. 309-310.

(195) Ibid. Op. cit. Art. XI, pág. 310.

(196) Ibid. Op. cit. Art. XIII, pág. 310.

Paz será publicada en todas las partes donde convenga, lo más breve que se pueda, después de la ratificación de estos Artículos por los Señores Reyes Católico, y de Portugal, y de haber sido entregados recíprocamente en la forma acostumbrada" (197).

Por otra parte, se fija como plazo de "vacatio" de la Paz, el de un año a partir de su publicación en España, a fin de que el conocimiento de la implantación de aquélla, pudiese llegar a los territorios más alejados. El tenor fué el siguiente: "Y por cuanto es necesario mucho tiempo para que se pueda publicar este Tratado en las partes más distantes de los Señoríos de uno y otro Rey, á fin de terminar entre ellos todos los actos de hostilidad; se ha acordado, que esta Paz comenzará en las dichas partes un año después de la publicación que de ella se hiciera en España; pero si el aviso de la Paz pudiese llegar antes á aquellos lugares, cesarán desde entonces todos los actos de hostilidad, se satisfará todo el daño que de él se originare" (198).

2.- Tipología de Privilegios.— Héllanse en este Pacto internacional distintos tipos de privilegios, que acotaremos —según su específica temática—, de este modo:

(197) Ibid. Op. cit. Art. XII, pág. 310.

(198) Ibid. Op. cit. Art. V, pág. 307.

2.1. El Fuero de Extranjería stricto sensu. Privilegio Jurisdiccional. El Juez Conservador.— Viene reconocido este cauce excepcional de la administración de justicia, en el art. IV del Tratado, cuando se exterioriza así: "Los dichos vasallos, y Moradores de una, y otra parte tendrán recíprocamente la misma seguridad, libertades, y privilegios, — que están concedidos á los Sábditos del Serenísimó Rey de la Gran Bretaña por el Tratado de 23 de Mayo de 1667, y otro del año de 1630, y en — lo que no se deroga por este Tratado, de la misma forma, y manera que — si todos aquellos Artículos, en razón del Comercio, é inmunidades tocan — tes á el, fuesen aquí expresamente declarados, sin excepción de artículo alguno, mudando totalmenteeel nombre en favor de Portugal. Y de estos — mismos privilegios usará la Nación Portuguesa en los Reinos de S.M. Católica, segun, y como lo practicaba en tiempo del Rey Don Sebastian" — (199).

Habida cuenta que por el precepto precedente, se estampa una remisión neta al Tratado ajustado por España e Inglaterra el 23 de Mayo de 1667, en el que se instrumenta una vez más, —la figura del Juez conservador para los ingleses— confirmando lo dispuesto en Reales Cédulas y — Tratados anteriores— cabe aquí, en aras de la brevedad, dar por reproducido lo que glosamos en aquel Tratado, tocante a dicha figura del iudex

(199) Ibid. Op. cit. Art. IV, pág. 306.

y su competencia.

2.2. El Fuero de Extranjería lato sensu. Privilegios personales.-

Bajo este epígrafe, creemos oportuno deslindar dos beneficios de índole acusadamente personal, a saber:

a) Privilegio de "ius communicationis". "Los Vasallos, y Moradores de las Tierras poseídas por uno, y otro Rey, tendrán toda buena correspondencia, y amistad, sin mostrar sentimiento de las ofensas, y daños pasados; y podrán comunicar, entrar, y frecuentar los límites de uno, y otro; y usar, y ejercer el comercio con toda seguridad, por Tierra, y - por Mar, en la forma, y manera que se usaba en tiempo del Rey Don Sebastian" (200).

b) Privilegio de exoneración del "Droit d'aubaine".- La no aplicación del odioso derecho de aubana, se proclama en el art. VIII inciso 1º, de modo implícito, con esta frase: "Todas las privaciones de herencias, y disposiciones hechas en odio de la guerra, se declaran por nulas, y como no sucedidas" (201).

2.3. Privilegio de Comercio.- Con carácter general se regula la

(200) Ibid. Op. cit. Art. III, pág. 306.

(201) Ibid. Op. cit. Art. VIII, pág. 308.

libertad de comercio, mediante esta fórmula: "Y para que esta Paz sea — mas bien observada, prometen respectivamente los dichos Reyes Católico, y de Portugal dar libre, y seguro paso por Mar, ó Rios navegables, contra la invasión de cualquiera Piratas, ó otros enemigos, que procurarán apresar, y castigar con rigor, dando toda libertad al Comercio" (262).

Juicio Crítico.— El texto de este Tratado ha de ser contemplado a la luz, del "animus" que le impregna, esto es, del ferviente deseo de España y Portugal de inaugurar un nuevo período de Paz y reconciliación, permanente, como se trasluce en el último apartado del mismo, que recoge la Ratificación del Rey lusitano Alonso VI, con estos términos: "Y por — cuanto el dicho Tratado de Paz ha sido aprobado, ratificado, y confirmado por los sobredichos Reyes de Portugal, y Castilla, y por el de la Gran Bretaña, como Mediador, y Fiador de él, y solemnemente publicado, así — en esta ciudad, como en la Villa de Madrid, y lo mismo se ha hecho en to do el Reino, y sus Conquistas; y deseando Yo, que se continúe y perpetúe de la misma manera por mí, y mis Sucesores en la Corona de estos Reynos; he tenido por bien aceptarlo, aprobarlo, ratificarlo, y confirmarlo, y — por esta mi carta Patente lo acepto, apruebo, ratifico, y confirmo; y pro meto en mi nombre, y en el de mis sucesores, y Reynos, observar, guardar,

(202) Ibid. Op. cit. Art. VII, pág. 307.

y hacer observar, guardar, y cumplir inviolablemente todas las cosas contenidas en él, sin permitir, que de ningún modo, ó por cualquier acontecimiento que haya, ó pueda haber, se contradiga, ó vaya contra él directa ó indirectamente; y si se huviere hecho, ó hiciere en alguna manera - cosa en contrario, mandarla reparar, sin dificultad, ó dilación alguna; castigar, y mandar castigar á los que fueran cómplices en esto con todo rigor; y prometo, y me obligo á guardar todo lo referido, bajo la fé, y palabra Real, en mi nombre, en el de mis Sucesores, y en el de estos Reynos, y bajo la Hipoteca, y obligación de todos los bienes, y rentas generales, y especiales, presentes, y futuras de ellos. Y en fô, y firmeza - de todo, he mandado otorgar la presente Carta, firmada por mi, y sellada con el sello grande de mis Armas. Dada en la Ciudad de Lisboa á 15 del mes de Diciembre" (203).

Coincidente con ese Acuerdo de no beligerancia y amistad, que se plasman a lo largo de los trece preceptos agavillados en aquel Pacto, se confieren recíprocos privilegios para españoles y portugueses, sin discriminaciones de ningún género. La única duda que podía plantearse era - la de conocer si a los españoles les correspondía asimismo el fuero en la administración de justicia portuguesa o en otras palabras, si tendrían

(203) Ibid. Op. cit. apartado último, pág. 312-3.

acceso a la vía singularizada del iudex conservador para los españoles.

La respuesta afirmativa nos viene dada por el artículo 4º del Tratado que comentamos, cuando nos señala que "Los dichos Vasallos, y Moradores, de una y otra parte, tendrán recíprocamente la misma seguridad, libertades, y privilegios, que están concedidos a los súbditos del Serenísimo Rey de la Gran Bretaña por el Tratado de 23 de Mayo de 1667" (204). Habida cuenta que por este último Acuerdo Internacional, -se confirmó a los súbditos ingleses, el privilegio del Juez Conservador-, competente en materia civil y penal, de las causas en que pudieran estar involucrados aquellos, mutatis mutandi habrá de colegirse, que tanto los portugueses en España como los españoles en el territorio lusitano, gozaban por imperativo de aquel artículo 4º, del fuero de extranjería stricto sensu, o beneficio del juez conservador.

Como quiera que los beneficios que se dispensaron a los vasallos de ambas coronas, lo fueron de forma mutua, se dió una absoluta equitatividad en el otorgamiento de aquellos, no hubo fisuras, ni grietas en su implantación. El fiel de la balanza en cuanto a la generosidad española y portuguesa, quedó en el mismo centro.

(204) Ibid. Op. cit. Art. IV, pág. 306.

Capítulos ajustados entre la villa de Santander y los comerciantes ingleses el 12 de Septiembre de 1700, confirmación del Fuero de Extranjería de los mercaderes británicos.(205)

INTRODUCCION.- ¿Se pueden considerar válidas jurídicamente estos Capítulos, por ser concertados por una ciudad sin refrendo del poder central?. Hasta 1700, los Privilegios conferidos por España en materia de -extranjería, lo fueron por conducto de nuestros Reyes Felipe III, Felipe IV y Carlos II, sin inferencia de ningún otro poder, institución o villa, Sin embargo, estimamos afirmativa la respuesta a aquella interrogante, y en virtud de estas cuatro razones:

1ª) Carlos II no derogó, ni modificó, la Transacción efectuada -entre la villa de Santander y los súbditos ingleses. El silencio legal en aquel instante debemos pues interpretarlo como de asentimiento y confirmación de aquel Pacto.

2ª) Habrá que reconocer capacidad activa negociadora para dispensar los Privilegios de Extranjería a la Villa de Santander, como en su día, -mutatis mutandi- y ad exemplum se admitió la capacidad pasiva para recibirlos a las Villas Hanseáticas, a tenor de los Capítulos de Felipe -

(205) ABREU Y BERTODANO, J.A.: Op. cit. (Reinado del Sr. D. Carlos II, -Parte III. de 1683 a 1 de noviembre de 1700). Año MDCCLII, pág. 683 a 693.

III de 28 de septiembre de 1607.

3ª) La Villa de Santander, se limita en algunos casos a aplicar en dicha urbe bien los beneficios que con carácter general se concedían a los ingleses en virtud de Tratados, o Acuerdos, pactados por ambas Coronas, o bien los que con carácter territorial limitado recibían en los Puertos Andaluces.

4 4ª) Esta Capitulación, efectuada sin anuencia de Carlos II, fué ordenada cumplir por el artículo 2 del Tratado concertado con Inglaterra el 14 de diciembre de 1715, esto es, quince años después, Hubo pues una aprobación tácita de tres lustros.

Hecha esta consideración previa, que desmiente, -en esa ocasión-, en buena exégesis, el carácter absolutista del poder central español, en una época propicia para el desarrollo del mismo, pasamos a exponer y analizar el espíritu y texto de los Capítulos que sirven de rótulo a estas líneas.

El animus que priva en estos Acuerdos, está inspirado en el de--seo de los habitantes de la Villa de Santander de atraer a los comerciantes ingleses radicados en la ciudad de Bilbao, a fin de incrementar el -tráfico mercantil desplegado a la sazón en aquella.

El aliento que a dichos efectos impregna los Capítulos, resplan-

dece en su apartado I, cuando lo acota así: "Les concede, y franquea, - que hayan de gozar, y gocen de las mismas conveniencias, emolumentos, é inmúnidades que gozan, y tienen los hijos, vecinos, y naturales de ella, fin que hayan de tener diferencia, carga, ni gravámen, ni otra pensión - mas en lo que dependiere de su Gobierno Politico" (206).

La confirmación de los Privilegios conferidos por Tratados de paces y Acuerdos anteriores, viene explicitada en los Capítulos de esta manera clara y exhaustiva: "Hallandole capaz, y entendida esta Villa de todos los Capítulos, Acuerdos y Tratados de Paces entre las dichas dos Coronas, y demás referidas, y de los demás privilegios, exemptiones, y libertades, que están concedidas á la dicha Nación Inglesa, y a sus Comerciantes. Por diferentes Cédulas, Privilegios, y Despachos que se han exhibido, los que así son, y constan por Testimonios, y otros Instrumentos; desde luego consiente est aVilla, que les sean guardados, cumplidos, y - observados en ella á los que vinieren á vivir de asiento, y comerciaren en su distrito, término, y jurisdicción, sin alteración alguna, todos en general, los quales dan por insertos en este Capítulo" (207).

(206) Ibid. Op. cit. pág. 684.

(207) Ibid. Op. cit. Art. IV, pág. 684-5.

Para una mejor comprensión de los importantes y variados beneficios, que a lo largo de veinticuatro apartados se especifican en el Cuerpo de los Acuerdos de Santander, los clasificaremos de este modo:

1.- El Fuero de Extranjería Stricto sensu.

A) Privilegios jurisdiccionales.- El Juez Conservador.- Con carácter general, la competencia de este iudex, viene determinada, por todos los asuntos civiles y criminales, en que pudieran estar involucrados los mercaderes de Inglaterra, a tenor de la remisión que el apartado VI hace a las Cédulas dadas para los comerciantes británicos de Sevilla y - otros Puertos andaluces (208). Dicho apartado lo concreta con este tenor: "Que en conformidad de los dichos sus Privilegios, les dé, y señale S.M. un Juez Conservador Privativo á su elección para sus Causas, Pleytos, y negocios que ocurrieren, según, y como le tienen los Comerciantes de Sevilla, y otros Puertos de aquella Costa, y con las declaraciones que se contienen en las dichas sus Cédulas, y Mercedes hechas á los dichos Comerciantes" (209).

Con carácter especial, la jurisdicción del Juez de los súbditos

(208) NOTA.- Las Cédulas a que se refiere, son las concedidas por Felipe IV el 19 de marzo, 26 de junio y 9 de noviembre de 1645,

(209) Ibid. Op. cit. Art. VI, pág. 685.

ingleses, en Sevilla, se proyecta a las materias relativas al comercio que ejercían, a "las pólizas de navíos, seguros y otras cosas" (210), expresión ésta última tan ambigua que permitiría una ancha parcela de competencia a aquel juzgador. Esta competencia se señala en el apartado V, — que dice: "En los casos que ocurran tocantes á dicho Comercio, pólizas de Navíos seguros, y otras cosas, se haya de estar á lo que determinare el Juez Conservador que ha de tener, informado por dos personas, ó más, que por el dicho Comercio extranjero serán nombradas para este efecto, — estándose en todo á la verdad sabida, y fé que se debe guardar" (211).

Destacamos poderosamente la existencia de dos ó más consejeros al lado del Juez Conservador, a fin de informarle y orientarle en su labor de administrar justicia, si bien, lo más trascendente de este apartado V, es que esos consejeros fueran designados "por el comercio extranjero", es to es, por los propios mercaderes ingleses a quienes aquel debía de Juzgar. No puede haber duda de que la misión de dichos "ad latere" del Juez Conservador, debía de contribuir a humanizar la aplicación de la ley, en su beneficio exclusivo.

1.1. El Fuero de Extranjería lato sensu.

(210) Ibid. Op. cit. Art. V, pág. 685.

(211) Ibid. op. cit. Art. V, pág. 685.

8) Privilegios personales.— Podemos desdoblarlos de este modo:

1º) Derecho a fabricar sus propias casas. Este beneficio abarca no solo la posibilidad que permite el rótulo del epígrafe, sino también el comprar viviendas ya construídas, habitarlas, residir en Posadas, ser arrendatarios, y no estar obligados a convivir con vecinos, ni soportar cargas de alojamiento, ni guardas, etc. etc. El privilegio se otorga con este tenor: "Asímismo por les hacer todo el buen passo, y favor á los dichos Señores Comerciantes, y á los de su Nación, y otros que se agregaren al Comercio de esta Villa, les concede, y franquea, que puedan fabricar casas propias en ella, en conformidad de la facultad que les esta — concedida por Leyes de estos Reinos; y la Justicia, y Ayuntamiento les — dará, y señalará sitios y solariegas en que las puedan fabricar en su — término, Corrales, y huertas los necesarios, que es a lo que se extiende su facultad: y también les concede, que las puedan comprar fabricadas, y que puedan vivir en ellas, ó en casas de Posadas, ó arrendadas, sin que sean obligados á vivir con Vecinos, ni á soportar cargas de alojamiento, ni guardas, ni otras, sean las que fueren; y que podrán servirle para su asistencia de Criados, y Criadas, en la misma forma que les es permitido, y lo usan los Comerciantes Ingleses en las Ciudades de Sevilla, Cádiz, y demás de Andalucía" (212).

(212) Ibid. Op. cit. Art. VIII, pág. 686.

Resaltamos la equiparación que a efectos de asistencia de Criados, se realiza con los comerciantes ingleses residentes en Andalucía.

2º) Derecho de venta al por mayor y por menor en sus tiendas y - Lonjas.- Se acotó con este texto: "Asímismo assienta, y capitula, que -- los dichos Señores Comerciantes por grueso en sus Tiendas, y Lonjas puedan vender por mayor, ó menor, salvo en las cosas menudas de poca monta, como son cintas de embotar, Velduques, Cordones, Medias, ó cosas semejantes, que ha de ser por docenas, el Pescado, y grasas por arrobas, los -- granos por fanegas, las telas por piezas, y no vareado, ni por libras; -- sí solo han de poder vender por menudo las mercaderías de mucho valor, y precio, como son Ambar, Almizcle, Algalia, y otras cosas semejantes, que podrán vender por onzas, y por menos como más les convenga" (213).

3º) Derecho de acarreo de mercaderías.- Implica esta concesión no sólo el reconocimiento de poder transportar los comerciantes ingleses libremente sus géneros y mercaderías, sino también la de elegir con el mismo albedrío las personas que puedan ayudarles en aquel menester. Se confiere así: "Item es condición, que los dichos Señores Comerciantes para el acarreo, y transporte de los géneros, y mercaderías que hubieron de transportar, y tragar por su cuenta, y de encomienda para entrarlos, y

(213) Ibid. Op. cit. Art. XVI, pág. 689.

alonjarlos en sus casas, se puedan valer de personas las que les preciere á su arbitrio, y voluntad, sin que la dicha Villa, ni otro individuo alguno de ella se lo pueda cuartear, ni ajustar, ni moderar precio sobre ello, sino que lo han de poder hacer francamente con la conveniencia que pudieren" (214).

C) Privilegios fiscales-aduaneros.— Los reagrupamos en esta clasificación:

1º) Exención de pago del Propio de Mar, por recepción ó expedición de mercaderías del Puerto.— Esta importante exención se desarrolla con el siguiente texto: "También les concede que todas las mercaderías que aportaren, y llegaren al Puerto, y jurisdicción de esta Villa por cuenta de dichos Señores Comerciantes, encaminadas, ó consignadas á cualquiera de ellos, á de extraños de estos Reynos, las puedan descargar de bordo á bordo como les pareciere, en este Puerto, sin pagar por ellos ningunos derechos de los que toca percibir, y cobrar á esta Villa por sus legítimos Propios, ni por otros que sean de su cargo, y cuenta por encabezamiento; y assimismo puedan alonjar las dichas mercaderías, y géneros, y volverlos á sacar cuando les conviniere sin que por ello paguen los dichos derechos, ni otra contribución de las que quedan referidas, ó extinguidas; y lo mismo se haya de entender, y entienda en las embarcaciones

que entraren en este dicho Puerto con qualesquiera géneros de bastimen-
tos, y otras mercaderías; y no teniendo ocasión, ó conveniencia de su des-
pacho, hayan de poder volver á salir libremente con ellos" (215).

2º) Reducción al 1% de los derechos de Alcabalas, Cientos y Mi-
llones.— Justifican los vecinos de Santander el otorgamiento de esta gene-
rosa concesión, en base a dos argumentaciones lógicas y comprensibles. De
un lado, a que los comerciantes británicos —a quienes se tratan de atraer—
gozaban en la villa de Bilbao donde residían, de exención plena de contri-
buciones y tributos Reales. En segundo lugar, a que dicha distribución —
del porcentaje no había de redundar en perjuicio de la Real Hacienda, si-
no todo lo contrario. Conságrase de esta manera: "Y por cuanto los dichos
señores Comerciantes se han de mudar, y transferir de la Villa de Bilbao
á esta de Santander, y siendo aquella exempta, y libre de contribuciones,
y tributos Reales, gozaban de esta conveniencia; por tanto, queriendo és-
ta corresponder á este punto en lo que le fuere posible, y deseando atraer
el Comercio para el mayor beneficio del público de estos Reynos, y mayor
aumento que se seguirá á la Real Hacienda, y sus haveres practicándose,—
y traginándose por tierras que no son exemptas, ni asotadas, desde el —
mismo sitio de esta Villa, que hace en ello servicio a S.M., les concede
a dichos Señores Comerciantes, estipúla, y promete, que por el tiempo de

los encabezamientos, que tiene hechos a su cargo, y cuenta, por lo tocante a Alcavalas, Cientos y Millones, no les cobrará de lo que comerciaren, y trataren, vendieren, y permutaren, sino al respecto de uno por ciento" (216).

3ª) Exención del pago del derecho del Propio de Tierra.— Con generosa liberalidad se exonera a los mercaderes ingleses, del abono del canon del Propio de Tierra —que gravaba las exportaciones de frutos de la comarca santanderina—, cuya obligación de pago se traslada a los vendedores de aquellos productos. Establecióse a este respecto: "Y por mas beneficiar á los dichos Señores Comerciantes, tambien les permite, y concede — esta Villa, que puedan sacar los frutos de esta tierra, sin que por ellos, y aunque los compran para este efecto, se les puedan llevar ni cobrar de rechos algunos á dichos Señores Comerciantes, porque los del Propio de Tierra los han de pagar los que los vendieren, y entraren en esta dicha Villa, y su jurisdicción, los cuales solo pagarán lo que es costumbre, y se puede, y suele llevar por el derecho del Propio" (217).

4ª) Exención de Diezmos y Puertos Secos.— Se transige el que cualesquiera clase de mercancías y géneros descargados en el puerto de San-

(216) Ibid. Op. cit. Art. XI, pág. 687.

(217) Ibid. Op. cit. Art. XII, pág. 687-8.

tander, por los mercaderes británicos, no satisfagan canon alguno en concepto de Diezmos y Puertos Secos, aunque vayan destinados a la venta y - consumo en la citada villa. La misma exención regía para el caso de reexportar dichas mercancías por mar, a los lugares que tuvieran por conveniente. Se amparó esta concesión con esta liberalidad: "Asímismo es una de dichas condiciones, para evitar dudas, y otros inconvenientes, que — puedan embarazar el dicho comercio, el que cualesquier géneros, y mercaderías, sean de la calidad que fueren, no hayan de adeudar al tiempo de la descarga, ni despues, derechos algunos de Diezmos, y Puertos Secos, aunque aquí en esta Villa, y su jurisdicción se consuman; y vendan; sino solo - aquellos que salieren de ella, y se llevaren a las Provincias de Castilla por las personas que los traginaren, ú de cuya cuenta fueren, que deberán llevar su Albalá, y Guia, y adeudar, y pagar en las Aduanas de Puertos Secos, que estan destinados en los passos, y tránsitos que es notorio; y assi se assienta, y capitúla, por no haver sido uso, y costumbre, ni se dará lugar á que se contravenga; y se declara, que los géneros, y mercaderías, que les vinieren, y fueren remitidas á dichos Señores Comerciantes de otras partes por Mar, los pueden; y han de poder volver á embarcar á su libertad, y remitirlos a las partes que les pareciere sin pagar derechos algunos de diezmos, ni otros, porque en este caso no los deben" (218).

5º) Exención de pago de derechos por compra y exportación de mercaderías.- Confirióse a los comerciantes de Inglaterra, plena exención - de pago de derechos Reales y de Proprios, para la compra de mercaderías con destino a su venta en Asturias, Galicia y otras partes por mar. La - descarga fiscal se desarrolla con este texto: "Asimismo ofrece esta Villa, que los Mercaderes, que compraren mercaderías para llevar a tierras de Asturias, Galicia, y otras partes por mar, les dará permissio, y libertad para las llevar, sin que por esta razón se paguen derechos algunos - por las personas que las compraren, por quedar satisfechos por los que venden, assi derechos Reales, como el Proprio" (219).

6º) Exención del pago del canon de Sissas y Millones.- Esta exoneración se aplicó tanto para la entrada, como para la salida de los vinos, que comerciasen los ingleses, sin más condicionamiento que la de su prohibición de venderse en Santander. Los Capítulos la fijaron así: "Item assienta, y sale esta Villa á que dichos Señores Comerciantes no pagarán derechos algunos de Sissas, y Millones de los Vinos que entraren en ella, y remitieren á otras partes, no los vendiendo, ni consumiéndolo aquí, porque estos derechos no se causan sino al tiempo del consumo, ó á la entrada de Reynos, ó Provincias exemptas" (220)

(219) Apartado XV, inciso 1º, pág. 688.

(220) Ibid. Op. cit. Art. XVIII, pág. 690.

Incluso se redimía del abono de la renta de millones por tráfico de vinos a los ingleses, que los adquiriesen o les fueran donados, para el consumo de sus casas y familias. Esta gracia, consagróse de este modo: "Item, que en conformidad de lo que queda arriba apuntado, y declarado, y estando á cargo de esta Villa (como espera) las dichas Rentas - de Millones, y las demás, que en tal caso, y desde luego capitula, y asienta, que no les cobrará á los dichos Señores Comerciantes, ni les cargará derechos algunos en los Vinos que les traxeren, ó remitieren de regalo, ó de otras partes para el gasto, y consumo de sus casas, y familias, y les consentirá la entrada de ellos libre" (221).

72) Reducción al 1% de los derechos de Alcavala y Cientos.- El canon en concepto de Alcavala y Cientos, se fija en un módico 1%, y su pago se verificaría anualmente en relación con todas las operaciones que realizasen los mercaderes ingleses. Si es trascendental un tipo impositivo tan bajo, contemplado desde la óptica meramente económica, no lo es - menos, el sistema arbitrado para su exacción. De un lado se creó a tal efecto una Comisión formada por dos diputados representantes de la hoy capital de la montaña, y dos personas libremente elegidas por los súbditos británicos, lo que establecía una justa paridad en la composición de

(221) Ibid. Op. cit. Art. XIX, pág. 690.

aquella, colocando en pié de igualdad -y de votos-, a los intereses rec^íprocos de la villa de Santander y los comerciantes a dichos súbditos; no prevalecía pues el interés español. Por otra parte, la liquidación se -- practicaba en base del exámen de las ventas registradas en los libros de aquellos mercaderes, ni de otras diligencias similares, sino -y esto es preciso destacarlo en función de la sola declaración juramentada de és--tos últimos. Bastaba su palabra, referente al montante de sus rentas, pa--ra fijar sobre la cifra declarada, el 1% ya aludido, sin mas pesquisas,- ni recelos o sospechas de fraude fiscal. Esta liberalidad y confianza del fisco español hacia lo inglés, quedó amparada con esta normativa: "Y es assiento, y capitulo assimismo, que la Alcavala, y Cientos, que quedan - resumidos, y pactados en el uno por ciento, se han de pagar en cada año de todas las mercaderías que vendieren dichos Señores Comerciantes, expre--ssando sus precios, y la venta celebrada de parte á parte en esta Villa, quedando reservadas las remisiones que ho procedieren de venta; y al me--dio, y forma que ha de haver para la cobranza, ha de ser, que por parte de esta Villa se hayan de nombrar, y nombren dos personas de toda satis--facción, diputados para que con otros dos que nombrará la dicha Nación, y Gremio de los Señores Comerciantes, puedan liquidar, y liquiden á punto - fixo lo que cada uno huviere vendido en cada un año, estándole á la decla--ración, y cómputo que estos hicieren debajo de juramento, sin passar á -

registro de los Libros, ni otras diligencias" (222).

82) Bonificación por entrada de Navíos.— Se redujo la tarifa de entrada de navíos ingleses en el Puerto de Santander, a la cantidad de un peso y medio, escudo de plata, por cada buque, suma que debía entregarse a la Justicia Ordinaria, con idéntico importe para los misnistros de la Inquisición, y medio escudo de abono a los Castillos. Los barcos que procediesen de puertos españoles solo serían gravados con este último canon, a fin de evitar la doble imposición fiscal. En todo caso, la carga aduana se aplicaba exclusivamente a los Navíos de cubierta. El privilegio económico que analizamos, se desarrolló de esta manera: "Pónese asimismo por asiento, y condición, que los Navíos que entraren en este Puerto, — sean del buque, y porte que fueren, solo deban pagar, y paguen por la visita de cada uno, peso y medio, escudo de plata, para el Juez, y Justi—cia ordinaria, y otro tanto á los Ministros de Inquisición, y medio escu—do á los Castillos, y no otra cosa de lo que se haya introducido; y que esto se entienda de los que no vinieren visitados en otro qualquier Puer—to de España, porque viniéndolo, solo deberán pagar el dicho derecho á — los dichos Castillos; y que esta visita solo la hayan de pagar los Navíos de cubierta, y no otros" (223).

(222) Ibid. Op. cit. Art. XXI, pág. 691.

(223) Ibid. Op. cit. Art. XXIII, pág. 691.

9º) Exención total por la importación de hierro.— Este desarme fiscal venía a corroborar lo dispuesto en el Privilegio concedido por — Carlos II en Cédula sancionada en 1692. En el apartado XXIV inciso primero, se confirió con este tenor: "Y, pone por pacto la dicha Villa, — que del hierro que se introdujere, y entraren en este Puerto los dichos Señores Comerciantes, no han de pagar, ni pagarán derechos algunos, por estar en uso, y observancia el que no se paguen, mediante el Privilegio, y Cédula de S.M. ganada, y expedida á instancia de la dicha Nación In— glesa en el año de mil seiscientos y noventa y dos" (224).

D) Privilegio en caso de guerra.— Para el supuesto de rompimien— to de hostilidades entre España e Inglaterra, se establece una inmunidad personal y real para los comerciantes británicos afincados a la sazón en Santander, de tal suerte que aquella se extienda a sus familias, y ha— ciendas, por un período de 6 meses a contar desde la iniciación de aque— llas y al objeto de que puedan abandonar —si lo desean— la villa de San— tander. Esta protección se reguló así: "Asimismo si (lo que Dice no quie— ra, ni permita) sobreviniere en algun tiempo rompimiento de guerra entre las dichas Coronas; ésta Villa, en cuanto pudiere, y permitiere la fé, y lealtad que debe á su Rey, y Señor natural, assistirá á los dichos Seño—

(224) Ibid. op. cit. Art. XXIV, pág. 691.

res Comerciantes, y les hará todo el passo, y tratamiento que le fuere - permitido, assi en dicha Villa, y su jurisdicción, como en las represen- taciones que se ofrezcan hacer á S.M., y sus Ministros, para que los tra- tan con la mayor equidad, y benignidad, protegiendo sus cosas, y nego- cios en cuanto le sea dado, y permitido, y por los medios que le parez- can mas proporcionados en semejante ocurrencia; y en todo caso se guar- darán los Capítulos de Paces, que sobre esto disponen, dádoles el tér- mino de seis meses, que les está señalado, para el retiro de sus hacien- das, personas, y familias" (225).

E) Privilegio de Comercio.-- Se autorizó a los ingleses para tener correspondencias en otras partes del Norte del Reino de Castilla a fin - de favorecer el tráfico de su comercio, y sobre todo se les reconoció la facultad de ser consignataria de mercancías traídas de otras provincias del Reino, poder venderlas y embarcarlas, sin restricción y limitación - alguna. El texto es este: "Y también se les concede, y consiente á los di- chos Señores Comerciantes, que puedan tener sus correspondencias, y enco- miendas en todas las partes del Norte de estos Reynos, y otros con ellos pacificados, y recibir los géneros que les vinieran encaminados, y con- signados, venderlos, y embarcarlos, y proveer de ellos á las Provincias

(225) Ibid. Op. cit. Art. VII, pág. 685-6.

de Castilla, y otras partes del Reyno, como más bien les estuviere, desde esta Villa, sin limitación, ni restricción alguna" (226).

Concluyen los Capítulos con el compromiso de un lado de la villa de Santander de respetar a los ingleses los Privilegios, pactos y -conciertos, reseñados, tanto para el presente como para el futuro, sin aplicación de otros maravedís, cargas o contribuciones distintas de las transcritas, prometiendo ofrecer con el tiempo otras ventajas y conveniencias a aquellos. De otra parte se recoge la promesa de dichos súbditos de cumplir con lo pactado y pagar llegado el caso, los derechos e -impuestos reseñados.

Juicio crítico.-- Por último un análisis de los Privilegios conferidos por la Villa de Santander a los comerciantes ingleses, en 1700, y que esquemáticamente hemos glosado, nos obliga a subrayar la trascen--dencia de aquellos, con la enorme carga de generosidad que llevaban in--sita. No es frecuente hallar en el contexto fiscal europeo de aquella --época, ciudades o naciones, que dejando en la cuneta sus intereses o egois--mos económicos particulares, dispensasen una cogida tan beneficiosa como la ofrecida por nuestra villa norteña. Creemos que no nos ciega la pasión de españoles al formular ese juicio.

(226) Ibid. Op. cit. Art. X, pág. 686-7.

CASA BORBONICA

REINADO DE FELIPE V

(1713 - 1746)

Tratado de Comercio concertado entre España e Inglaterra
el 13 de julio de 1713 en Madrid, como fundamento de los
que se concluyeron en el mismo año entre las dos coronas
 (227).

1. INTRODUCCION. Como preliminar del Tratado ajustado con la Gran Bretaña el 9 de diciembre de 1713, el presente Pacto está integrado por una Memoria y 20 proposiciones inglesas, así como por las consecutivas Memoria y respuestas del lado español. El final lleva inserto tres artículos añadidos por el milord de Lexington, con tres contestaciones españolas. Aquí glosaremos y reproduciremos los puntos más columbrantes agrupándolos según su coherencia; significando al propio tiempo que por ser un Tratado preliminar de otros posteriores, reviste la singularidad de ofrecer proposiciones o propuestas por una parte, y contestaciones a las mismas de otra. Abundan también las remisiones a la vigencia y virtualidad del Tratado de 1667. Al lado de un cúmulo de privilegios, unos de los británicos privativos y otros recíprocos, se rechazaron algunas propuestas inglesas.

(227) CANTILLO, A. "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y Comercio que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón, desde 1700 hasta 1843. Madrid, 1843. pág. 115 a 123.

2. MEMORIA.— Inglaterra en esta materia, presentó esta proposición genérica: "Memoria presentada al rey de España de parte de la reina de la Gran Bretaña por milord de Lexington sobre la dependencia del comercio.

Para la más pronta y fácil expedición de los negocios del comercio entre los vasallos de su majestad británica y los de su Majestad católica se deben ratificar los cuarenta artículos del tratado del año de 1667, firmado por las dos coronas; pero habiendo entre ellos algunos que por demasiado oscuros es preciso darles la claridad necesaria, necesitarán de una mayor extensión, y aumentar otros para evitar todo género de disputas entre los negociantes, arrendadores, administradores y otros oficiales de las aduanas de su majestad Católica, teniendo por bien de aprobar los que se extendieren o aumentaren en forma siguiente (228)

Frente a la petición británica para que se confirmasen los 40 artículos del Tratado de 1667, España contestó lo siguiente, "Respuesta de parte del rey de España á la memoria de su Majestad británica".

Queriendo el rey de España ocurrir desde ahora y para lo venidero á evitar todo género de disputas y diferencias sobre la dependencia del comercio entre sus vasallos y los de la reina de la Gran Bretaña, y

(228) Ibid, op. cit. pág. 115.

hacer que cesen las vejaciones y motivos de quejas que pudieren tener los negociantes de las dos naciones, ha dado su Majestad católica sus poderes necesarios al marqués de Bedmar para conferir con milord Lexington que se halla con los de la reina de la Gran Bretaña, para ejecutarlo sobre los artículos de la memoria que se ha presentado a su Majestad católica de parte de su Majestad británica por el referido milord de Lexington, a fin de que después de haberse meramente examinado entre los dos los antiguos tratados, convengan en virtud de sus sobredichos poderes en todo lo que es necesario reglar para las dos naciones, a cuyo efecto estas notas o respuestas que se pusieren por los dos referidos ministros al margen de cada uno de los referidos artículos servirán de regla" (229)

Como podemos apreciar, no se dió respuesta afirmativa, ni negativa, solamente, "estas notas o respuestas que se pusieren por los dos referidos ministros al margen de cada uno de los referidos artículos servirán de regla", lo que implícitamente supone un no reconocimiento de la no operatividad total de aquel Tratado.

3. Clasificación de privilegios. - Podemos acotar tres distintos tipos de privilegios, a saber: los jurisdiccionales, los personales y los fiscales.

(229) Ibid. op. cit. pág. 115.

3.1. Privilegio Jurisdiccional o Fuero de Extranjería stricto sensu.

El Juez Conservador.

Se solicitó por Inglaterra, el otorgamiento de su iudex, con este tenor: "Que su Majestad católica ha de conceder a los vasallos de su Majestad Británica que puedan nombrar un juez conservador español, el que les pareciere más idóneo y hábil; y que conozca en primera instancia de todos sus negocios del comercio y otros civiles y criminales; y que dicho juez haya de subdelegar su comisión y jurisdicción en el sujeto o sujetos que nombraren los vasallos de su Majestad británica para que sean jueces en los puertos, villas, o lugares del comercio, y a donde los necesitamos; y que de tres en tres años tengan facultad de reelegir así el nombrado en esta corte como los demás o si quisiere nombrarlos de nuevo por convenir así a la expedición de los negocios (230)

La propuesta encajaba con el espíritu y la normativa tanto de las tres cédulas Reales de Felipe IV de 1645 (19 de marzo, 26 de junio y 9 de noviembre) como con la regulación fijada en ese sentido por el Tratado de 1667. No obstante, la contestación española, prefiere concretar que en este punto se ha de estar a lo que se acuerde en el Congreso de Utrech próximo, (en dicho con-

(230) Ibid. op. cit. proposición 18, pág. 122.

greso celebrado el 9 de diciembre de 1713, se confirmó el Fuero de Extranjería para los ingleses, creado para éstos últimos, en la primera de aquellas R. Cédulas, de Felipe IV). El texto de la respuesta fue éste: "Habiéndose denegado esta repetición como una extensión directamente opuesta á las cédulas de que se han valido algunos sujetos por un corto servicio de dos mil quinientos ducados, en conformidad de los cuales el marques de Eedmar de parte de su majestad Católica ha venido en conceder a Juez Conservador en Cádiz y Sevilla, representando que los demás es contra la regalia de la corona de España; pues no se concederán á ninguna nación tales jueces conservadores en ningún otro reino ó estado; y que para evitar los desordenes que succederian de semejantes concesiones que todas las otras naciones solicitarian, se arreglarían su Majestad católica á negar lo mismo á todos y continuando milord Lexington de su parte en pretender que este artículo se conceda en todo por tener órdenes empresas para solb citarlo se acordó que se arreglaría este artículo en el congreso de Utrech. (231)

En todo caso, este privilegio no fué reintaurado con carácter reciproco, sino pura y simplemente, como lo había sido antaño, es-

(231) Ibid. op. cit. contestación nº 18. pág. 122.

to es, un fuero privativo de los mercaderes ingleses. A mayor abundamiento, se requirió lo siguiente, por el lado inglés. "Y por - que en el capítulo XXXVIII se acordó que los ingleses gozasen de los privilegios que cualquiera otra nación, ha de mandar su Majestad católica que todas aquellas franquezas, exenciones, libertades y privilegios, que se hubieren concedido y concedieren á cualquiera otra nación, así en general como en particular se concedan y hayan de gozar de ellos los vasallos de su Majestad británica."

(232)

El criterio hispano de esta materia fué adoptar aquella petición de mantenimiento de privilegios, conforme al art. 38 del Tratado de 1667, que se confirmó. La redacción de este precepto decía:

"Se ha convenido y concluido, que los pueblos y súbditos de uno y otro de los aliados tendrán y gozarán en sus respectivas tierras, mares, puertos, radas, playas, territorios y lugares cualesquiera los mismos privilegios, seguridades, libertades é inmunidades (así por lo que toca á sus personas como á sus negocios) que se han concedido é en adelante se concedieren, por cualquiera de los mencionados reyes al rey cristianísimo, á los estados generales de las provincias unidas del País Bajo, á las ciudades Anseáticas, ó

(232) Ibid. op. cit. proposición 6ª. pág. 118.

Á cualquier otro reino ó estado por sus tratados ó por cédulas - reales con todos los requisitos y cláusulas de estas concesiones, que obran en su beneficio y favor de un modo y forma tan amplia y eficaz, para hacer que produzca todo su efecto el contrato ajustado y ratificado como si estuviesen puestas é insertas a la letra en el dicho tratado" (233).

Habidacuenta que en la temática del Juez conservador para los - ingleses, contemplada por este Tratado, se remiten España e Inglaterra a lo ordenado en el próximo Pacto Internacional a celebrar en el Congreso de Utrech de 9 de diciembre de 1713, - el - cual, como dijimos, ratifico dicho Privilegio de Fuero, en beneficio de los súbditos del Reino Unido -, y de otra parte, con carácter supletorio, se consolida la aplicación del art. 38 del Tratadado de 1667, en cuyo haz de privilegios - que reconoce - tiene perfecta cabida, el jurisdiccional o de Fuero de Extranjería habrá que convenir consecuentemente que el mismo, tuvo pleno arraigo dentro del Pacto que estamos glosando. Cabe en este epigrafe, dar por reproducido todo lo que anteriormente se ha desarrollado sobre la iurisdictio del iudex de los ingleses.

(233) CANTILLO, A. op. cit. Art. 38. de Tratado de 1667. (Tomo reinado - Felipe V, inserto en el Tratado entre España y Gran Bretaña, de 9 de diciembre de 1.713) Pág. 136.

3.2. El Fuero de Extranjería lato sensu. Privilegios personales.

Ordenaremos las gracias de tipo personal, de este modo:

- a) Derecho a poseer casas y almacenes. - La óptica británica enfocó así este tema: "Que los vasallos de su Majestad británica que residieren en los dominios de España hayan de gozar de los privilegios concedidos á los que entonces vivían en la Andalucía, por cédulas reales de los reyes católicos de 19 de marzo 26 de junio y 9 de noviembre de 1645; está prevenido que los vasallos de ambas majestades puedan establecer en los dominios del otro sus casas de negocios y almacenes libremente; cuyo - capitulo no se ha observado en los puertos de Vizcaya y de Guipúzcoa sin embargo que son parte de los dichos dominios, a causa de que sus gobernadores no han permitido a los vasallos de su Majestad británica establecer en Bilbao y otros puertos de dicha provincia sus casas de negocios en la misma forma que lo han ejecutado y establecido en todos los demás de estos reinos de que se han originado graves daños a los comerciantes referidos, y para evitarlos y que en adelante no sucedan se ha de capitular y capitula que cualquier vasallos de su Majestad británica pueda establecer libremente su casa de negocios en los puertos y lugares de comercio de dicha provincia de Vizcaya y Guipuzcoa del mismo modo que las han tenido y practicado en -

Andalucía. (234)

Era razonada la solicitud precedente, de querer gozar aquella comunidad política, para sus vasallos, de los mismos derechos en toda la extensión de nuestra metrópoli, sin discriminaciones en el goce de beneficios, por razón de la distinta ubicación de regiones o provincias y de ahí que se aceptase aquella propuesta íntegramente, con esta contestación: "Su Majestad Católica ha concedido este artículo, y repetirá su Majestad Católica sus órdenes para que los vasallos de su Majestad británica que residieren en los dominios de España puedan establecer sus casas de comercio libremente en los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa, - como los tenían en Andalucía en conformidad del Tratado del año 1667, y de otras cédulas de los Reyes Católicos, mediante observarse lo mismo y lo recíproco con los vasallos de su Majestad católica que residieron y comerciaron en los dominios de su Majestad británica." (235).

Evidentemente, fue una gracia española, sin concesión por la otra parte.

- b) Privilegio de inmunidad en caso de guerra. - Coincidieron los criterios inglés y español en la ordenación de este derecho. El punto

(234) Ibid. op. cit. proposición 3ª, pág. 116.

(235) Ibid. op. cit. contestación 3ª, pág. 116.

to de vista de los primeros se explicitó así: "En el capítulo XXXVI se previene que se han de conceder a los vasallos de ambas Majestades que vivieren en los dominios del otro, en caso de declararse guerra, seis meses de término para poder en ellos retirarse á su país con todos sus caudales bienes y efectos, y por haberse experimentado en los dominios de su majestad católica que en el año de 1702, antes de la declaración de la guerra entraron sus ministros en las casas de los vasallos de su Majestad británica, embargando y confiscando todo cuanto pudie ron descubrir los pertenecía, y reduciendo los que aprehendie ren a estrechas y ríguosas cárceles; contra el dicho capítulo y derecho de las gentes, se capitula que su Majestad Católica empeña su real palabra por sí y por sus sucesores de que en ca so de rompimiento de guerra contra su Majestad británica (que Dios no lo permita) mandará guardar inviolablemente dicho capítulo XXXVI de tal forma que el gobernador, ministro ó otro - cualquiera persona que le quebrantare ha de ser severísimamente castigado, depuesto del empleo que tuviere y con obligación de restituir el caudal que se hubiere quitado al vasallo con las perdidas y menoscabos que por esta causa acontecieren. Que en consecuencia de este capítulo ha de mandar su Majestad Católica que todos los daños que por esta razón padecieron los vasa-

llos de su majestad británica se les han de hacer buenos, restituyéndolos á ellos, o á sus herederos, ó á los que tuvierén poder los bienes así muebles como raíces, casas y heredades - que les han sido confiscadas y estén existentes; y en su defecto se ha de dar la estimación de lo que importaren las mercaderías, dinero ó otros cualesquiera bienes que se les confiscó por ser contra lo determinado en dicho capítulo XXXVI, por los tesoreros de su Majestad católica; luego que cada vasallos de su Majestad británica haga constar el importe del caudal que tenía antes de dicha confiscación; y así mismo ha de comprender este capítulo á los vasallos que vivían en las islas de Canaria, adonde don Diego Trollop, de nación inglesa, que residía y vivía en Tenerife, fue muy maltratado y perdió una porción - considerable, como se justificará a su tiempo". (236)

El pensamiento español, paralelo al anterior, adoptó este texto: "En ejecución del capítulo XXXVI del tratado del año de - 1667 y lo estipulado en las presentes paces, se concede a los vasallos de ambas Majestades que vivieron en los dominios del otro, en caso de declararse guerra, seis meses de término para poder en ellos retirarse á su país con todos sus bienes y efectos

(236) Ibid. op. cit. proposición 5ª, pág. 117-8

tos; por el espacio de los cuales seis meses podrán los vasallos de ambas Majestades vender y transijir libremente todos sus bienes y efectos de la misma suerte que podían hacerlo antes de la declaración de la guerra". (237)

El reconocimiento del presente privilegio, fue amparado de forma rotunda y concluyente, corrigiendo excesos de otras épocas préteritas.

- c) Privilegio de exención de sucesivos registros. - El parecer británico se acotó con esta fórmula: "Que los jueces de contrabando ni sus ministros no puedan con ningún pretesto abrir los cofres, fardios, baules, ni barriles de cualquier género de mercaderías, perteneciente á los vasallos de su Majestad británica, que se llevan desde los navíos ó otras embarcaciones á las aduanas, hasta que se metan en ellas, ni tampoco incontinenti hasta tanto que sus dueños las vayan a despachar para pagar sus derechos, y que saliendo dichos fardios, baules, etc. de la aduana, despachado por el administrador ó administradores de ellas y - ministros del contrabando con sus marchamos ó sellos, no han de poder ningún juez de contrabando, sus ministros ó otros ni los guardas de las aduanas y millones ó otra persona de cualquier

(237) Ibid. op. cit. Contestación 5ª, pág. 118.

condición que sea, a Brillas ni embarazar a los comerciantes llevarlos á sus casas y almacenes; porque después de haberse despachado en la aduana y puesto en ellos su marchamo, no deben tener más registro. Y respecto de que las guardias de las aduanas y otros ministros suelen embarazar llevar fardos enteros, aunque enmarchamados, y piezas de ropa desde los almacenes y casas de unos comerciantes á las casas, lonjas y tiendas de otros a quienes los vendieron, sin que para ello saquen guía o licencia de el administrador de la aduana, todo en grave perjuicio del comercio, se ha de capitular y capitula que en adelante se les prohíba á todos los guardias y ministros de aduanas contrabando y otros cualesquiera, como se les prohíbe, el embarazar el transporte de unas á otras casas dentro de las muralles ó calles de las villas que no las tuvieren, cualquier género de mercaderías, sin ser necesario sacar guía o licencia alguna para mudarlas, pena de mil ducados al que contraviniere este capítulo, aplicados para la cámara de su Majestad católica (238).

Con una minuciosidad y casuística dignas de elogio, la óptica española, autorizó exenciones de registros en las mercaderías de los comerciantes del Reino Unido, cuando se diesen los requisi

(238) Ibid. op. cit. proposición 13ª, pág. 120-1.

tos de control aduaneros que seguidamente exponremos: "Habiéndose conformedo el marqués de Bedmar á lo preciso de las reglas más acertadas para eximir los comerciantes ingléses de todas - las vejaciones de los oficiales, de los arrendadores, de los - jueces de contrabando, y dar toda la facilidad al comercio sin perjudicar los derechos del rey de España. La primera que cada maestro de navio esté obligado veinticuatro horas después de haber llegado al puerto á entregar dos declaraciones de lo que traen dentro de su bajel, la una al arrendador de la aduana, y la otra al juez del contrabando. La segunda, que no se puedan abrir sus escotillas ni sacar de ellas cosa alguna de su carga sobre su bordo hasta que teng un permiso del arrendador para descargar y que estén presentes el guarda o guardas que se les nombrazen. La tercera, que no se han de descargar las mercaderías ni echar del bajel en ningún barco ni chalupa, sea la que fuere, sino para ser inmediatamente puestas en tierra y conducidas sin la menor detención a la aduana, según las licencias que se entregaren a las personas que disputare para ello el propietario ó comisario de las mercaderías para que se pesen y visiten en las referidas aduanas, y se paguen los derechos. La cuarta, que sea libre á los jueces de contrabando el hacer asistir ó que ellos mismos asistan a la descarga y transporte a la -

aduanas de las referidas mercaderías, si lo hallaren conveniente; y que en caso de sospecha de algún fraude, puedan hacer abrir - los fardos, valotes, cajas y cofres en la misma aduana en sus - presencias, o la de los que nombraren para este efecto. La quinta, que después de la expedición de la aduana y de haberse pagado o asegurado los derechos de las mercaderías, y marcado estas, se dará un recibo á los que estuvieren encargados de retirarlas, en virtud del cual les sea libre el sacarlas y transportarlas a almacenes, sin que los guardas ó oficiales del contrabando, ni otros, les puedan detener sino en el caso de recelo de fraude y de suposición de una mercadería por otra, en cuyo caso no se podrán detener ni abrir sino por expresa orden del juez de la aduana ó del contrabando, ó sus subdelegados. La sexta, que será libre a los propietarios ó comisarios encargados de las dichas mercaderías el venderlas y trasportarlas de una casa á otra, con - tal que esto sea desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, declarando a los arrendadores de las alcabalas, cientos y otros demás agregados los lugares para donde hicieren la - mudanza de estos géneros, a fin de que si fueren para venderse - se paguen los derechos y se les dé para este efecto por los referidos arrendadores un recibo en caso de venta, ó una licencia si

no fuere simple transporte; se ha acordado se ejecutará este artículo en cuanto fuere conforme al tratado de 1667" (239).

- d) Protección del pago de deudas.— Transcribamos el punto de vista de la Gran Bretaña: "Que cualquiera persona que estuviere debiendo dinero ó otra cosa en los dominios de España á los vasallos de su majestad británica, aún antes de declarar la guerra ó durante ella, estará obligado por justicia, á satisfacerlo como si tal guerra no hubiera sido declarada, y sin que se le admita excusa ni excepción alguna; y si la propusieren no han de ser oídos" (240)

Desde nuestra parcela patria, se admitió aquella óptica conesta contestación: "Daré su Majestad sus órdenes para que todos los vasallos que se hallaren deudores á los de su Majestad británica de deudas contraídas antes de la declaración de la guerra sean precisados al pagamento de ellas según las formalidades de justicia en tales casos; bien entendido que lo mismo y recíproco se ejecutará de parte de su Majestad británica en favor de los vasallos de su Majestad Católica; lo cual se observará también tocante a las deudas contraídas durante los referidos seis meses,

(239) Ibid.op. cit. contestación 13ª. pág. 121.

(240) Ibid. op. cit. proposición 16ª. Pág. 122.

y en tiempo de guerra, mediante los pasaportes". (241)

3.3. Privilegios fiscales. - En aras de una coherencia temática, con-
citadora de una nitidez expositora, más diáfana, agrupamos los -
siguientes privilegios:

- a) Privilegio de igualdad fiscal con los naturales. - Hubo perfec-
to acuerdo entre los dos Estados soberanos al configurarlo en
provecho mútuo. La petición de Inglaterra se concretó de este
modo: "Que los vasallos de la reina de la Gran Bretaña que co-
merciaren en los dominios del rey católico no han de pagar más
derechos sobre las mercaderías que introdujeran o soportaren
que los que pagan los naturales ó otros extranjeros; y que -
cualquier baja ó gracia que se hiciere á cualquiera nación, la
hayan de gozar y gocen los vasallos de dicha reina en la mis-
ma conformidad (242). La respuesta armónica española se agavi-
lló en este haz: "Concedido con la circunstancia de que de par-
te de su Majestad británica se observará y ejecutará la misma
recíproca igualdad con los vasallos de su Majestad católica -
que concurrieren y comerciaron en los dominios de su Majestad

(241) Ibid. op. cit. Contestación 16, pág. 122.

(242) Ibid. op. cit. Proposición 1ª. Pág. 115.

británica" (243)

- b) Privilegio de pago de los derechos de entrada. -Existió plena coincidencia por ambas partes en conjurar el peligro de repetición del pago de los derechos de entrada. El pensamiento inglés se consagró en esta proposición: "En el capítulo XII se ordena que habiendo los vasallos de su Majestad británica introducido en cualquier aduana de los dominios de su Majestad católica - sus mercaderías de cualquier género que sean, y pagado en - ellas los derechos usuales y corrientes, las puedan remitir - por mar o tierra adonde quisieren libremente sin pagar nuevos derechos o bien sea á reinos estraños, ó á los puertos, ciudades, villas o lugares de los de España; y por haber demostrado la experiencia que no se guardo este capítulo, pues sucede muchas veces que llevando los dichos vasallos sus mercaderías de los puertos en donde pagan los derechos de almojarifazgos, diezmos, alcabalas cientos y demás agregados y millones sobre los géneros que los deben pagar con testimonios de ello de los ministros de dichas aduanas a las ciudades, villas o lugares, tierra adentro, para su mejor despacho, y no obstante, los administradores de dichas rentas los obligan á pagar nuevamente es

(243) Ibid. op. cit. Contestación 1ª. Pág. 115.

tos derechos, aunque los conste por los despachos de las referidas aduanas haberlos satisfecho á su Majestad; y por ser cierto y conforme a la razón que no se deben pagar estos derechos - sino es una vez sobre cada venta, se ha de declarar y mandar - que ningún administrador, arrendador ó otro ministro en los - puertos, villas, ciudades, ó lugares de los dominios de su Majestad católica pueda pedir ni cobrar nuevamente cosa alguna - por los dichos derechos de alcabala, cientos, ni millones, etc. constando haberlos pagado en las aduanas de los puertos de su desembarco, o puertos secos por donde transitaran para entrar en Castilla, so pena de dos mil ducados a él que contraviniere aplicados para la cámara de su Majestad ó el hospital general - de Madrid, y que los escribanos de las aduanas y contrabando no puedan llevarlas más derechos por dar dichos despachos que quince reales de vellón" (244)

El criterio de la corona española discurrió por este cauce. "Los vasallos de su Majestad británica se pagarán más que una vez los derechos de entrada que estuvieren, reglados por el nuevo arancel por las nuevas mercaderías en el oficio de la aduana por donde entraren, como está reglado y convenido por el 2º artículo -

(244) Ibid. op. cit. proposición 4ª, pág. 117.

de este tratado. En cuanto á los derechos de alcabalas, cientos y demás agregados se pagarán en la parte donde está reglado, como se ha practicado ahora. Con advertencia de que habiendo pagado los mercaderes de lonja los dichos derechos de alcabalas, - cientos y demás agregados en las aduanas de los puertos de su - desembarco, o puertos secos por donde transitaran sin haber vendido las mercaderías, no los pagarán segunda vez por la primera venta en otra ciudad ó lugar donde las transportaren y las quisieren vender por la primera vez; con tal que aquellos que estuvieren vender por la primera vez; con tal que aquellos que estuvieren encargados de la conducción de estas mercaderías hayan de traer recibos del oficio del arrendador o administrador de - dichos derechos de alcabalas cientos y demás agregados de haber pagado los expresados derechos y testimonio de no haber vendido dichas mercaderías, y que á falta de uno ó otro de ellos deberán pagarlos, porque los derechos de alcabalas, cientos y demás agregados se deben sobre cada venta y reventa. Y por lo que toca á los tenderos y otros que venden por menor han de pagar estos derechos de alcabalas, cientos y demás agregados de todo lo que - vendieren, porque se supone haberlo comrado de los mercaderes - de lonja que venden en grueso. Y en cuanto á los derechos de millones, sisas y municipales se pagarán como hasta ahora en las

en las villas ó lugares donde se consumieren dichas mercaderías y conforme a lo que se ha practicado hasta aquí". (245). Resaltamos que este privilegio fué regulado a favor de los ingleses, pero no viceversa.

- c) Privilegios fiscales en Canarias.— La propuesta de la Gran Bretaña, pretendía seguir gozando en las islas Afortunadas de los beneficios otorgados en su día por el rey Carlos II. Veamos el tenor de aquella: "Que en las Islas Canarias no se deberán pagar más derechos sobre las mercaderías que en ellas introdujeran ó sacaran los vasallos de su Majestad británica que los pagaban en el reinado de Carlos II" (246)

Por parte de nuestro Estado, se aceptó así, de forma plena, dicha petición: Concedido: pagándose aquellos derechos según los que subsistían en el reinado del señor rey don Carlos II" (247)

4. Propuestas inglesas de privilegios inaceptadas por España.

- A) Obtener igual licencia que los Hanseáticos para llevar fuera de España, fondos en especie de oro y plata)

Quedó planteada de esta manera: "Que por haberse concedido a las -

(245) Ibid, op. cit. contestación 4ª, pág. 117.

(246) Ibid, op. cit. Proposición 15ª, pág, 121.

(247) Ibid. op. cit. Contestación 15ª. Pág. 121-2.

villas amseáticas licencia de poder llevar fuera de los dominios - de su Majestad católica en especie de oro y plata libremente el im porte de los pertechos de guerra, árboles, cables, velas, etc. para navíos, y granos de cualquier género para el mantenimiento, que introdujerén en los dichos omínios, se capitula ~~que~~ los vasallos de su Majestad británica han de gozar de este privilegio, como tam bién por el importe del bacalao seco y mojado, salmón, arenques, - sardinas, manteca y otros géneros comestibles que introdujerén en los puertos de España para el mantenimiento de sus pueblos, por ser tan necesarios; cuyo importe podrán llevar a bordo de sus navíos - en las referidas especies de oro y plata, como quisieren, sin pagar derecho alguno por ello; con guía o permiso del juez de sacas ó - otro ministro; sin que por dicha guía o despacho se lleve más de - quince reales de vellón" (248)

La negativa se justificó por "ser contraria a las leyes y ser un - pretexto que ya no subsiste hoy". (249) .

b) Autorización para transportar dinero en navíos.-

Se instrumentó la solicitud, con este texto: "Que ha de ser lícito á los vasallos de su Majestad británica en los puertos de España llevar a bordo de los navíos de cualquiera nación que sea, dinero

(248) Ibid. op. cit. proposición, 14, pág. 121.

(249) Ibid. op. cit. contestación 14, pág. 121.

para pagar los fletes y averías de las mercaderías que en ellos - les vinieren consignadas, libremente y sin despacho de juez de sacas, ó otros ministros, y ha de bastar en este caso la guía o despacho de la aduana que se lleva para el desembarco de las mercaderias" (250).

El rechazo español tuvo la misma base que el precedente.

- c) Licencia para llevar a bordo el importe de fletes en monedas de - oro y plata.-

La petición decía así: "Que por haberse concedido á las villas anse⁴ seática licencia de poder llevar fuera de los dominios de su Majestad católica en especie de oro y plata libremente el importe de - los pertrechos de guerra, árboles, cables, velas, etc. para navíos y granos de cualquier género para el mantenimiento, que introduje- ren en los dichos dominios, se capitula que los vasallos de su Majestad británica han de gozar de este privilegio, como también por el importe del bacalao seco ymojado, salmón, arenques, sardinas, manteca, y otros géneros comestibles que introdujeran en los puertos de España para el mantenimiento de sus pueblos, por ser tan necesarios; cuyo importe podrán llevar a bordo de sus navíos en las referidas especies de oro y plata, como quisieren, sin pagar dere

(250) Ibid, op. cit. Proposición 9, pág. 119.

cho alguno por ello; con guía o permiso del juez de sacas ú otro ministro; sin que por dicha guía ó despacho se lleve más de quince reales de vellón" (251)

d) Permiso de introducción de mercaderías del norte de Africa.

La propuesta británica adoptó el siguiente tenor: "Que han de poder introducir los vasallos de su Majestad británica en los puertos de España de los de Africa cera, cueros, cobre y otros cualesquiera géneros de producto de ella, libremente, como si fuesen de las fábricas ó producto de su Majestad británica; sin que los jueces de contrabando, gobernadores de los puertos ú otros ministros de su Majestad católica lo embaracen, ni lleven más derechos de los que debían pagar si fuesen de sus propios dominios, ni cosa alguna por vía de contrabando, ni otro impuesto que suelen imponer los gobernadores y capitanes generales en grave perjuicio de los comerciantes y sin que a su Majestad católica se le siga de ello la más leve utilidad y conveniencia". (252)

La contestación española muy fundamentada, se acotó con este texto:

"Se niega, por ser también contra las leyes, y sobre un pretexto que ya no subsiste hoy" (253)

(251) Ibid. op. cit. proposición 14, pág. 121.

(252) Ibid. op. cit. proposición 11, pág. 119-120.

(253) Ibid. op. cit. contestación 14. pág. 121.

e) Ratificación de los Capítulos de Santander de 2 de septiembre de 1700.

El requerimiento del Reino Unido, fue expresado en la proposición 17ª del tratado, con esta redacción: "Que su Majestad católica ha de confirmar y ratificar los veinticuatro capítulos ó artículos es tipulados por la villa de Santander a 2 de septiembre de 1700 con los vasallos de su Majestad británica en la misma conformidad que dicha villa se obligó por sí y sus sucesores, cuyo original para - en el oficio del escribano Rodrigo de Nardaz, que se presentará - con estos capítulos" (254)

Se denegó aquella ratificación por las razones que se desarrollaron en la contestación a aquella petición, que transcribimos a con tinuación: "Seniega la confirmación y ratificación como también la ejecución de esta capitulación, por no tener los vasallos facultad de hacer tales capitulaciones con los extranjeros, en vez de que - podrán los vasallos de su Majestad británica conforme al artículo XXX del Tratado de 1667, establecerse, sus casas y almacenes en la dicha villa de Santander". (255)

f) Imposición de sanción por vulneración del Tratado.-

La propuesta inglesa decía: "Que si algún oficial o ministro de -

(254) Ibid. op. cit. proposición 17ª, pág. 122.

(255) Ibid. op. cit. contestación 17ª. Pág. 122.

de ambas majestades temerariamente pretendiese ejecutar alguna cosa en contravención de cualquiera de dichos capítulos, vulnerando y perturbando lo convenido en ellos, por el mismo hecho se entendería haber delinquido gravemente; y además de que sea depuesto del empleo que goza, ha de quedar obligado a la satisfacción del daño que la parte ofendida hubiese padecido" (256)

La negativa española lo fué tan solo en cuanto a la aplicación de sanciones; no en lo tocante a mantener la intangibilidad del Tratado, como se infiere de esta respuesta: "Ordenará su Majestad Católica que todo el arreglado y convenido en estos artículos se ejecute puntualmente, sin que ninguno de sus ministros ni oficiales puedan contravenir a éllo en manera alguna" (258)

5. Juicio crítico. - A priori no debe sorprender al lector, la forma de redacción de este Tratado, a base de peticiones británicas y correlativas respuestas españolas. Piénsese a este respecto, que aquel no fué más, que el fundamento o precedente de los concluidos ese año entre dichas comunidades políticas; y que su contenido, o mejor dicho, el modo de redactarse, se basó en un tanteo diplomático por parte de Inglaterra a fin de conocer hasta qué punto llegarían las concesiones hispanas.

De ese forcejeo inglés, al objeto de obtener el mayor número de privile

(256) Ibid. op. cit. proposición 19ª. Pág. 122.

(257) Ibid. op.cit. contestación 19ª, pág. 122-3.

gios de nuestra patria, es fiel trasunto, lo glosado en páginas anteriores. Como quiera, que el espíritu del Pacto, se reduce a consolidar y aumentar los beneficios obtenidos por el Reino Unido, a base de reiteradas propuestas, sin coexistir idénticas peticiones del lado español, está claro, que no se dan recíprocas y plenos otorgamientos de derechos, y las consiguientes obligaciones. No hay el *do ut des* romano. El privilegio del juez conservador, así como varios de carácter fiscal-aduanero, dispensados a los vasallos ingleses, no tuvieron idéntica reproducción para los mercaderes españoles en las islas británicas. La conclusión a que debemos llegar en el análisis de este Tratado es que evidentemente obtuvo más concesiones para su súbditos la corona inglesa que la española. La posición de esta última debemos catalogarla como generosa y altruista a la vista de los privilegios otorgados no sólo por su quantum, sino sobre todo por la categoría de los mismos. Por otro lado, la pérdida de territorios que Felipe V se vió obligado a ceder como consecuencia de la fuerza de Sucesión, debilitó el papel de la política exterior española, en la mesa de aquellas deliberaciones.

Tratado de comercio y amistad entre España y Gran Bretaña
ajustado el 9 de diciembre de 1713 en el Congreso de —
Utrech. (258)

1. INTRODUCCION.

Nació este Tratado como fiel corolario de otro anterior de Paz, otorgado el día 13/2 de julio de 1713, entre Felipe V de España y la Reina Ana de Gran Bretaña. Los embajadores respectivos que obtuvieron aquella pacificación fueron los encargados de redactar este de comercio. Se infiere todo ello, del Preámbulo de éste último, que transcribimos a continuación: "Habiéndose establecido felizmente por la misericordia de Dios una buena y firme paz, y una verdadera y sincera amistad entre el serenísimo y muy poderoso príncipe y señor Felipe V, por la gracia de Dios, rey católico de las Españas, etc. y la serenísima y muy poderosa princesa y señora Ana, por la gracia de Dios, reina de la Gran Bretaña, Francia e Irlanda, etc. y entre sus herederos y sucesores, reinos y súbditos, por el tratado de pacificación concluido en Utrech el día 15/2 — del mes de julio pasado, fué uno de los primeros cuidados de sus Majestades se atendiese en el mejor modo posible á la reciproca conveniencia

(258) CANTILLO, A. op. cit. Madrid, 1843. Pág. 127 a 153 (Reinado de Felipe V)

de sus súbditos por lo que mira al comercio. Y á este fin se sirvieron mandar a sus embajadores extraordinarios y plenipotenciarios por cuyo medio se ha logrado prosperamente el ajuste de la paz, redujesen en forma solemne a un tratado de comercio aquello que pareciese más conveniente para este saludable fin, después de pesadas todas las circunstancias en las conferencias que sobre esta materia se tuvieron en Madrid. Y los dichos embajadores en virtud de sus plenipotencias, cuyas copias van insertas a la letra al fin de este tratado, para mayor claridad de los anteriores y facilitar más los medios del tráfico, convinieron en sus artículos de comercio en el modo y forma siguiente" (259)

El cuerpo de este tratado, encierra en sus entrañas, tanto el precedente de Paz, comercio y alianza, suscrito por ambas coronas en Madrid, el día 23/13 del mes de mayo de 1667, como las Cédulas Reales de Felipe IV de 19 de marzo, 26 de junio y 9 de noviembre de 1645, que hemos analizado con anterioridad. La justificación de dichas inserciones viene impuesta en el propio Pacto, cuando se nos dice: "Por el presente se ratifica y confirma el tratado de paz, comercio y alianza entre las dos coronas de España y de la Gran Bretaña concluido en Madrid el día 23/13 del mes de mayo del año del señor 1667; el cual ha parecido bien se inserte á la letra en este lugar para mayor fuerza y seguridad, juntamente con -

(259) Ibid, op. cit. pág. 127.

las cédulas reales ó ordenanzas anejas á él, el cual es como se sigue".

(260)

Como debemos inducir, la razón no es otra, que la de resultar el propósito de asegurar la fuerza y vigencia de aquel Tratado y concesiones regias las cuales se ratificaron, por el presente.

A: Clasificación de Privilegios.— Para una exposición más comprensiva, desdoblaremos los privilegios concedidos, de esta manera:

1. Privilegio Jurisdiccional. El Fuero de Extranjería stricto sensu.

- 1.1. El Juez Conservador. Se prevé en el Tratado, para el supuesto de no haber nombrado juez conservador — piénsese que en las Reales Cédulas de 1645, los jueces conservadores existían solamente en varios puertos andaluces —, que sea la justicia ordinaria la que juzgue las causas de los súbditos ingleses, como medida de fuerza mayor. Era natural esa medida precautoria en tanto no se creasen las correspondientes plazas de jueces conservadores en las villas oportunas. Lo más transcendente a nuestro entender es la imposición de administrar justicia a los jueces ordinarios, "sin dilación, sin inclinación, favor o afición a las partes". En el Pacto se nos dice a este respecto: "En cuanto al Juez Conservador y á — los otros que él hubiere de sustituir, concedida esta libertad á

otra cualquier nación extranjera, deben gozar igualmente de ella los súbditos ingleses y en el interior y hasta que se haya dispuesto cosa fija en esta materia, su real Majestad católica dará orden expresa a todos y cualesquiera jueces de su reino, y á — otros cualesquiera á quienes toca la administración ó ejecución de la justicia, y les encargará bajo las gravísimas penas, que en todas las causas de los súbditos ingleses administraren justicia, y la hagan ejecutar sin dilación, y sin inclinación, favor ó afición á las partes. Consiente el rey católico que las apelaciones de las sentencias dadas en causas pertenecientes á los súbditos ingleses se lleven al tribunal del consejo de guerra — de Madrid, y no á otra parte" (261).

2. El Fuero de Extranjería lato sensu.

2.1. Privilegios personales.

- a) Derecho a arrendar casas y almacenes. — Esta importante facultad que se otorgó con carácter recíproco para españoles y británicos, se concretó para los segundos a su ejercicio en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, con los mismos beneficios que en su día se les confirieron en Andalucía. Su tenor fue el

(261) Ibid. op. cit. art. 15. pág. 149.

siguiente: "Consiente el Rey Católico y promete, que en adelante será lícito á los ingleses que residieren en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, alquilar casas o almacenes a propósito para guardar en ellos sus mercaderías. Y para que esto se pueda hacer de la misma manera y con los mismos privilegios y libertad de que han gozado ó debido gozar los dichos ingleses en Andalucía o en otros cualesquier puertos ó lugares de España en virtud del referido tratado del año de 1667, ó de alguna cédula ó ordenanza concedida por sus majestades católicas; dará su real Majestad las órdenes repetidas para su cumplimiento. De esta misma libertad gozarán los súbditos españoles en cualesquiera puertos y lugares de la Gran Bretaña, con todos los privilegios que por el predicho tratado les pertenecen".

(262)

- b) Derecho de residir en la villa de Santander con los privilegios del Tratado de 1667.— El privilegio que sirve de rótulo a éstas líneas, se emparó con esta fórmula genérica: "Concede su Majestad católica a los súbditos ingleses facultad para que puedan asentar sus domicilios y habitar en la villa de Santander, con las condiciones expresadas en los artículos 9 y 30 -

del Tratado del año de 1667" (263)

La remisión que se efectuó al Tratado de 1667, no pudo ser más generosa, toda vez que aquel garantizaba estas facultades: "Los mercaderes de ambas naciones, sus factores, criados, familias, comisionados, ú otros cualesquiera dependientes, como asimismo los maestros de navio, pilotos y marineros vivirán y residirán libre y seguramente en los reinos y territorios de ambos reyes y en sus puertos y ríos" (264)

- c) Derecho de inmunidad en caso de guerra.- Se fijó a este respecto el mismo plazo de seis meses de inmunidad personal y - real, - a contar desde el inicio de las hostilidades-, que acotó el Tratado de 1667 en su art. 36, a fin de que los ingleses y españoles residentes en el otro país, pudieran durante dicho período retirarse juntamente con sus familias, bienes, navios y mercaderías, de aquel territorio, sin poder ser detenidos o molestados en embargo o prisión. El ejercicio de aquella inmunidad se reguló de este modo: "Y, además, se ha convenido también que si llegase el caso (lo que Dios no permita) de moverse y declararse guerra entre sus Reales Majestades y sus rei-

(263) Art. 14. (op. cit.) pág. 149.

(264) Art. 30. (Tratado de 1667) op. cit. pág. 135.

nos, se dará, según lo ajustado en el artículo 36 del referido tratado del año de 1667, el término de seis meses después de - declarado el rompimiento a los súbditos de entrambas partes que residieren en los dominios de la otra, en el cual les será permitido retirarse juntamente con sus familias, bienes, - mercaderías, navios y caudales, y llevarlos por tierra ó por mar a donde quisieren, pagando los derechos debido y acostumbrados: y asimismo les será permitido también entonces vender y enajenar sus muebles bienes y raíces, y sacar libremente y sin embarazo alguno el valor de su venta, ni se les podrá en este tiempo detener ni molestar con embargo y prisión a ellos ni á sus bienes, mercancías, efectos e intereses; antes bien obtendrán buena y pronta justicia los súbditos de una y otra - parte, para que durante el espacio de los seis meses puedan - cobrar las cosas y hacienda que hubieren dado fiadas así al - público como á los particulares". (265)

- d) Privilegio de indemnización por daños.- El sistema de liquidación de los daños sufridos por españoles y británicos en la última guerra, se determinó con esta regla equitativa: "También se ha convenido que todos los daños que los súbditos de entrambas coronas justificaren haber padecido al principio de esta

(265) Ibid. op. cit. art. 6. pág. 147.

última guerra contra el tenor del dicho artículo 36 del referido tratado del año de 1667, tanto en sus bienes muebles como raíces se resarzan recíprocamente y sin dilación a ellos ó a sus legítimos apoderados o herederos, ó á los que su causa hicieren, restituyéndoles los existentes y los confiscados,— sean posesiones, casas, heredades ó otras cualesquier bienes, y pagando el justo y legítimo precio de los que se hubieren extraído, así muebles como raíces, cuya satisfacción se ha convenido y ajustado entre sus reales Majestades se haga de buena fé por los tesoreros de una y otra parte, después de justificadas, según se ha dicho, las tales solicitudes". (266).

3. Privilegios fiscales.— Com esta temática agrupamos los siguientes:

- a) Privilegio del pago diferido de los derechos de alcabalas y cientos.— Este sustancioso derecho se dispensó por Felipe V de España hacia los súbditos británicos — sin pactarse la lógica reciprocidad de trato hacia los españoles—, en el art. 5 (del Tratado) ratificado el 21 de enero de 1714, por el mismo monarca autorizando que aquellos pudieran alargar el abono de dicho canon "todo el tiempo que los dueños quisieran dejar sus mercancías depositadas en di-

(266) Ibid. op. cit. pág. 147-8. art. 7.

chas aduanas, en los almacenes para esto destinados". (267).

El texto fué el siguiente: "Para evitar los abusos que se pueden cometer en la cobranza de los derechos llamados de alcabalas y cientos, su Majestad Católica consiente que los súbditos de la Gran - Bretaña tengan la libertad de diferir el pago de estos derechos - todo el tiempo que los dueños quisieren dejar sus mercancías depositadas en dichas aduanas, en los almacenes para esto destinados, y y hasta tanto que quieran sacarlas, sea para pasarlas más adelante dentro del reino, sea para venderlas en el paraje mismo, ó para - llevarlas a sus casas: lo cuál será permitido, entregando su obligación bajo de buena y suficiente fianza de pagar los derechos de alcabalas y cientos por la primera venta, dos meses después de la fecha de su obligación, mediante lo cual se les darán las correspondientes cartas de pago" (268).

- b) Privilegio en materia del pago del derecho de millones.- Se articuló este beneficio con similar tenor, que el privilegio precedente. El artículo 8 rectificado el 21 de enero de 1714, sentó esta fórmula dilatoria: "Su Majestad católica ha convenido que dará orden para que el derecho llamado de millones, que se cobra del pescado y de otras bastimentos de consumo ordinario, no se cobre en lo

(267) Ibid. op. cit. art. 5. pág. 151.

(268) Ibid. op. cit. art. 5. rectificado, inciso 1º. pág. 147.

venidero en los puertos o primeras aduanas para la entrada en España, todo el tiempo que los dueños los quisieran dejar depositados en los almacenes destinados para este efecto, con calidad de que cuando los saquen de allí, ya sea para pasarlos más adelante dentro del reino, ya para venderlos en el mismo paraje, ó para llevarlos á sus casas, hayan de entregar su obligación, mediante lo cual se les darán las correspondientes cartas de pago y juntamente los dichos géneros marcados o plomados por los ministros de la dicha renta de millones de los parajes en donde los expresados derechos se hubieren satisfecho, después de lo cual los dichos géneros podrán transportarse y venderse en los parajes de su consumo, sin pagar nuevos derechos de millones. Quiere consiguientemente su Majestad que si después de la presentación de las cartas de pago arriba referidas, algún oficial o dependiente de los arrendadores de millones exigiese nuevamente estos derechos de los mismos géneros o se opusiese a su paso, transporte y venta, ó les causase el menor impedimento, sea condenado en dos mil escudos de multa en beneficio de su real erario" (269)

- c) Privilegio de exención del segundo registro.— Esta facultad se acató exclusivamente en favor de los vasallos de la Gran Bretaña, una

(269) Ibid. op. cit. art. 8 rectificado, pág. 151.

vez fuesen despachadas en la aduana las correspondientes mercancías al objeto de impedir innecesarios registros posteriores, por haber sido devengados las tarifas oportunas. El Tratado estableció este beneficio así: "Pero una vez despachadas y sacadas de la aduana, las mercaderías y marcadas las cajas, barricas y otros fardos en que estuvieren metidas con el sello o cifra de ministro competente, no podrá juez alguno de contrabando, ó otro oficial, volverlas a abrir, ó impedir se lleven a casa del comerciante; ni tampoco les será permitido embarazar después con ningún pretexto que se muden de una casa o almacén a otro, dentro de los muros ó recinto de la misma ciudad ó población, como esto se haga desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, habiendo hecho saber antes á los arrendadores de alcabalas y cientos el motivo por qué se mudan; conviene a saber, si fuese, para venderlos, para que si no se hubieren pagado antes estos derechos, se cobren allí mismo ó en el sitio donde se vendieren; y sino para que ellos den al comerciante ó a su factor la guía o certificación que se acostumbra. Por lo demás habrá entera y plena libertad y derecho de poder pasar las mercaderías de cualquier puerto ó paraje a otro, dentro de los dominios del rey de España, así por tierra como por mar, bajo de las condiciones especificadas en el art. 5º de este tratado". (270)

(270) Ibid. op. cit. art. 11. insiso 2º. pág. 148.

- d) Privilegio de supresión de los derechos de entrada y salida de mercaderías.- El art. 3 rectificado en Madrid el 21 de enero de 1713 desarrolla esta exención, ordenando en su inciso 1º que en materia de comercio se apliquen a los ingleses los mismos privilegios y libertades de que gozaron en el reinado de Carlos II. En el inciso - 2º de dicho precepto, se deroga la vigencia de los derechos de entrada y salida de las mercaderías, por prestarse a abusos y confusiones, y en su lugar se implantó un único canon del 10% del valor de aquellas. El tenor es este: "Y por cuanto nada puede contribuir más para establecer el comercio con mútua utilidad, como una regla fija, clara y explicita para pagar los derechos, y especialmente sobre un pue moderado y proporcionado al valor de las mercancías, porque de otro modo se introducen los fraudes con gran perjuicio de las rentas de los soberanos, lo cual muchas veces se ha experimentado en España, donde son excesivos los derechos establecidos por los antiguos aranceles: Por tanto, queriendo su Majestad Católica evitar las consecuencias y facilitar en todo lo que pudiere pender de su dicha Majestad la libertad del comercio, favorecerle y aumentarle cuanto su Majestad británica lo desea también por su parte, ha convenido en suprimir, así los diferentes derechos de entrada y de salida contenidos en los antiguos aranceles mencionados como los que puedan haberse impuesto después acá bajo de cualquier

nombre y ptesto, y contentarse con un solo y único derecho, que se cobrará igualmente á la entrada como á la salida del reino, á razón del diez por ciento del valor de todo género de mercaderías, ahora sea que la valuación de ellas se haga por peso, por medida, por pieza, ó sea por cálculo o estima. Y este derecho se cobrará igualmente en beneficio del rey en todos los puertos y aduanas de España, comprendiéndose en esto Aragón, Valencia y Cataluña; no exceptuándose de la dicha regla general, más que a Guipúzcoa y Vizcaya, cuyos derechos de entrada y de salida permanecerán como en tiempos de Carlos II" (271)

Ha de destacarse en este punto que para Vizcaya y Guipúzcoa, seguirán aplicándose las tarifas otorgadas por Carlos II. En el inciso 3º, se establece como los administradores de las aduanas deberán marcar bultos despachados y su obligación de entregar un recibo a sus dueños. La normativa se expresó de este modo, "Y mediante este derecho de diez por ciento, y después de pagado á la entrada, los arrendadores o administradores de la aduana por donde hubieren entrado dichas mercaderías tendrán obligación de hacerlas marcar y plomar con las marcas y plomos de la misma oficina, y de entregarles un recibo, en cuya virtud el dueño o dueños de ellos tendrán -

(271) Ibid. op. cit. art. 3. rectificado, inciso 2º, pág. 150.

libertad de transportarlas á todas las demás partes de España que quisieren; sin que se pueda exigir otro derecho, impuesto ó carga en beneficio de su Majestad católica en ningunos otros puertos o parajes de España por razón del transporte de dichas mercaderías, más que el que ya se hubiere pagado conforme a la nueva tarifa, cu yos recibos y plomos o marcas se manifestarán, sin cuyo requisito se tendrá por fraudulento su transporte". (272)

4. Cláusula con trato de nación más favorecida.— Corroborando lo dispuesto en el artículo 39 del Tratado de 1667, se inserta en el presente - Acuerdo bilateral, la cláusula general de otorgamiento de trato recíproco como si fuese la nación más favorecida. La fórmula se recogió — así: "Los súbditos de sus reales Majestades que en los dominios de una y otra parte comerciaren no deberán pagar por las mercaderías que introdujerén o sacaren mayores derechos ni otros ningunos que los que - se pidieren y cobraren de otra nación, la más amiga; y si sucediere - que en adelante se conceda por una o otra parte alguna disminución de derechos ó otros beneficios á alguna nación extraña gozarán también - de ellos recíproca y enteramente los súbditos de una y otra corona. Y así como se ha convenido en lo tocante á los derechos, como queda re-

(272) Ibid. op. cit. art. 3 rectificado, inciso 3º, pág. 150.

ferido, del mismo modo se ha establecido también por regla general en tre sus reales Majestades, que todos y cada uno de los súbditos usen y gocen en todas las tierras y lugares sujetos al dominio de una y — otra parte, enteramente, de los privilegios, libertades é inmunidades en orden a todas y cualesquier imposiciones o tributos tocantes a las personas, mercaderías, mercancías, navíos, fletes, marineros, navega ción y tráfico, y logren en todo de igual favor así en los tribunales y justicias como en todas las demás cosas que miren al comercio ó á otro cualquier derecho, al que usa y goza ó en adelante pudiere usar y gozar cualquier nación extranjera, la más amiga, según más largamen te se declara en el artículo 38 del tratado del año de 1667, que va — especialmente inserto en el artículo antecedente". (273)

5. Obligaciones de los súbditos ingleses.

Aunque en el contexto del Tratado, lo que prevalece, son los privile gios y beneficios, que la corona española, otorga a los vasallos de la Gran Bretaña, no por ello dejamos de hallar una obligación indivi dualizada para aquellos.

- a) Obligación de entrega de inventario de las mercaderías transporta das.— La ratio essendi de esta formalidad aduanera, tiene su justi ficación, en la necesidad de impedir por parte de las autoridades

(273) Ibid. op. cit. art. 2. pág. 145.

españolas, el gran tráfico de contrabando, que podría desarrollarse al amparo de una falta de vigilancia y control de las mercaderías transportadas por los buques británicos a nuestra patria. Este esencial derecho español a tutelar sus legítimos intereses en el tráfico mercantil, se ordenó con este texto: "Los capitanes de navíos mercantes que entraren en algún puerto de España con sus buques, estarán obligados a entregar dentro de las veinte y cuatro horas de su llegada dos declaraciones ó inventarios de las mercaderías que hubiesen traído, o de la parte que han de descargar allí, conviene á saber, la una al arrendador ó administrador de la aduana, y la otra al juez del contrabando; y no abrirán las bodegas de los navíos antes de que hayan sido visitadas, ó se les haya concedido por los recaudadores de los derechos la licencia. Y no se descargarán mercaderías algunas con otro motivo que el de llevarlas en derecho a la aduana, según el permiso que para este fin se les hubiere dado por escrito; y no será permitido a ninguno de los jueces del contrabando ó otros ministros de la aduana con pretexto alguno abrir balones, cajas, barricas ó otros fardos de mercancía pertenecientes a súbditos ingleses al tiempo de llevarlas a la aduana y — antes de haber llegado a ella, y sin estar presente el dueño de ellas o su factor, para pagar los derechos y recogerlas. Pero podrán asistir los dichos jueces de contrabando ó sus diputados al tiempo de —

desembarcarse las mercancías y también cuando se registran y despachan en la aduana; y si hubiera sospecha de fraude y de que se intenta pasar unas mercaderías por otras, se podrán abrir todos los fardos, cajas, ó barricas, como sea esto dentro de la aduana y no en otra parte, en presencia del comerciante ó de su factor, y no de otra manera" (274).

6. Obligaciones reciprocas de ingleses y españoles.

- a) Pago de deudas.- Se arbitró en ese sentido, las siguientes garantías jurídicas, frente a las excusas e imponderables de una posible guerra: "Los súbditos de ambas reales Majestades que debieren algún dinero a súbditos de la otra parte, ó por haber contraído las tales deudas antes del principio de la última guerra ó en los primeros seis meses de ella, o durante ella con el resguardo de despachos de salvo conducto, ó finalmente después de ajustada la suspensión de armas entre las dos coronas, serán obligados y apremiados a pagarlas de buena fe, del mismo modo que si no hubiese habido guerra entre dichas coronas, sin que puedan los deudores oponer excepciones algunas con motivo de dicha guerra contra las justas demandas de los acreedores" (275).

(274) Ibid. op. cit. art. 11, pág. 148.

(275) Ibid. op. cit. art. 13, pág. 149.

7. Garantía de cumplimiento del tratado.

Ante la posibilidad de que algún súbdito vulnerase lo ordenado en el presente Tratado, se impuso la cautela económica de que "habría de responder de los daños ocasionados, y para el supuesto de ostentar cargo público, su acción llevaría consigo además la pérdida del cargo" (276) No hay duda de que en el ánimo de los autores del Tratado, existía un claro propósito de mantener la intangibilidad del mismo, frente a cualquier transgresión fuese cual fuese su procedencia.

8. Vigencia del Tratado.

La ratificación de Felipe V al presente Tratado, tuvo lugar en Madrid a 21 de enero de 1714, como la de la reina Ana de Inglaterra se cumplimentó el día 7 de febrero del mismo año, en ellas se ratifica el contenido de los artículos 3º, 5º y 8º, que con su nueva redacción, hemos glosado. La fórmula de vigencia del Pacto se acotó así: "Por tan to, en virtud de la presente, yo por mí, mis herederos y sucesores, como también por los vasallos, súbditos y habitantes en todos mis rei nos y señoríos, apruebo y ratifico todo lo expresado en el mencionado Tratado de comercio en lo que no contraviene a lo referido en los tres artículos 3º, 5º y 8º de los cuales se han de entender, observar y - practicar como van ultimamente expresados en el cuerpo de esta ratifi

(276) Ibid. op. cit. art. 16, pág. 149.

cación y no como están en el tratado, ratificando y aprobando todo lo demás de él, en la mejor y más amplia forma que puedo; y doy por bueno, firme y valedero todo lo que en él se contiene, y prometo en fé, y palabra de Rey, y por todos mis sucesores y herederos seguirle y - cumplirle inviolablemente según su forma y tenor, mediante los tres artículos nuevamente formados, y mandar que se observen y cumplan de la misma manera, como si yo le hubiera tratado por mi propia persona sin hacer ni dejar hacer en cualquier modo que sea ni permitir que se haga cosa alguna en contrario; y que si se hiciere alguna contravención de lo contenido en dicho tratado, considerados los tres artículos expresados en esta ratificación como si estuvieren escritos é insertos en el Tratado, la mandaré reparar con efecto sin dificultad ni dilación, castigando y mandando castigar los delincuentes: obligando para el efecto de lo susodicho todos y cada uno de mis reinos y señorios, y asimismo todos los otros mis bienes presentes y venideros, como también mis herederos y sucesores, sin exceptuar nada. Y para - firmeza de esta obligación, renuncio todas las leyes, costumbres y - todas otras cosas contrarias a ello. En fe de lo cual mandé despachar la presente firmada de mi mano, sellada con mi sello secreto y refrendada de mi infrascrito secretario de estado. Dada en Madrid a 21 de enero de 1714" (277). Debemos subrayar el firme deseo de Felipe V de

(277) Ibid. op. cit. art. 8 rectificado, inciso 2º, pág. 152.

comparar la virtualidad de aquel Pacto. Su pensamiento aflora a la su perficie con estas promesas recogidas en la citada norma: "prometo en fe y palabra de Rey, y por todos mis sucesores, y herederos seguirle y cumplirle inviolablemente según su forma y tenor (278). Y más adelante agrega "Y para firmeza de esta obligación, renuncio a todas - las leyes, costumbres y todas otras cosas contrarias a ello" (279). No puede ser más alara la intención de nuestro rey de dejar constancia escrita y en pacto solemne, del talante amistoso de España hacia Inglaterra, y de un firme propósito de ser el fiel guardian de la operatividad del mismo, frente a leyes, usos o costumbres en contrario.

3

9. Juicio crítico.

Un análisis sereno y ponderado de este tratado, nos obliga a emitir un diagnóstico francamente positivo respecto de las concesiones - españolas frente a los ingleses. Piénsese que el relevante privilegio del iudex para los británicos no tuvo igual correspondencia para con los españoles. Lo mismo podemos decir acerca de los beneficios otorgados a los británicos por residir en la villa de Santander. En materia fiscal, el fiel de la balanza se desequilibra en favor de los intereses de los súbditos del Reino Unido, de forma clara y rotunda. Así,

(278) Ibid. op. cit. art. 8 rectificado, inciso 2º, pág. 152.

(279) Ibid. op. cit. art. 8 rectificado, pág. 152.

por lo que concierne al privilegio del pago diferido de los derechos de alcabalas y cientos, como por lo que atañe al beneficio de exención del segundo registro y a la supresión de los derechos de entrada y salida de mercaderías. A la vista de lo expuesto, habrá que convenir que no hubo la misma generosidad por parte de ambas comunidades políticas; España - una vez más dió una lección de altruismo y desinterés político, sin buscar reciprocidad de trato.

Tratado de Paz y Amistad entre España y los Estados Ge-
nerales de las Provincias Unidas de los Países Bajos -
ajustado en el Congreso de Utrech el 26 de junio de -
1714. (280)

1. INTRODUCCION. DECLARACION DE PAZ.

Ad Imitio se establece por este Pacto, una Paz firme e inviolable entre la Corona de España y los citados Estados Generales, la cual se — acotó con el consiguiente texto:

("Habrá de aquí adelante entre el dicho señor Rey y sus sucesores reyes de España y sus reinos de una parte, y los dichos señores Estados generales de la otra, una buena, firme, fiel e inviolable paz, y cesarán en su consecuencia e inmediatamente después de la ratificación de este — tratado todos los actos de hostilidad de cualquier naturaleza que sean — entre los dichos señores rey y Estados Generales, así por mar y otras — aguas como por tierra, en todos sus reinos, países, tierras y señoríos, y por todos sus súbditos y habitantes de cualquier calidad o condición — que sean, sin excepción de lugares ni de personas")(281)

(280) CANTILLO, A. "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y Comercio, que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón", Madrid, 1843, pág. 154 a 161.

(281) art. 1. op. cit.

La fórmula no puede ser expresada con más claridad y buena intención terminológica, por ambas partes pactantes.

2. EFFECTOS DE LA PAZ.

Podemos hallar en este Tratado diversos efectos provinientes de la Paz instaurada, a saber:

a) Perdón General por los actos cometidos en la última guerra.

Este beneficio fué concretado así:

"Habrá un olvido y perdón general de todo lo que se haya cometido de una parte y otra con motivo de la última guerra; y así todos los súbditos de dichos señores rey y Estados Generales de cualquier calidad o condición que sean, sin exceptuar ninguno, podrán volver a entrar y serán efectivamente y sin embarazo restablecidos en la posesión y pacífico goce de todos sus bienes, honores, dignidades, privilegios, franquezas, derechos, exenciones, constituciones y libertades, sin poder requisados, turbados ni inquietados en general ni en particular por ninguna causa o pretexto que sea en razón de lo que ha pasado desde el principio de la dicha guerra. Y en consecuencia del presente tratado y después de ratificado, les será permitido a todos y a cada uno en particular, sin tener necesidad de letras de abolición y de perdón, el volverse en persona a sus casas y al goce de sus tierras y de todos sus bienes, y el disponer de todo del modo que quieran" (282)

(282) Art. 2. op. cit. pág. 154-5.

b) Derecho de recuperación de bienes confiscados en la guerra.-

Se instrumentó de esta manera:

("Asimismo, aquellos a quienes han sido embargados y confiscados algunos bienes con motivo de la dicha guerra, sus herederos, o los que representen su derecho, de cualquier condición que puedan ser, gozarán de dichos bienes y tomarán posesión de ellos de su propia autoridad y en virtud del presente tratado, sin que necesiten de recurrir a la justicia, no obstante cualesquier incorporaciones al fisco, empeños de ellos, contratos y convenios y transacciones, cualesquiera que sean las renunciaciones hechas en dichas transacciones para excluir de alguna parte de dichos bienes a aquellos a quienes pertenecen; y todos y cualesquier bienes y derechos que conforme al presente tratado sean o deban ser restituidos reciprocamente a los primeros propietarios, - sus herederos o los que tengan derecho, podrán ser vendidos por los dichos propietarios, sin que para esto necesiten de obtener consentimiento particular; y en consecuencia los propietarios de las rentas que de parte de los dichos bienes fuesen constituidas en lugar de los bienes vendidos, como también de las rentas y acciones constituidas respectivamente a cargo de los fiscos, podrán disponer de la propiedad de ellos por venta o de otra manera, como de sus demás bienes") (283)

(283) Ibid. op. cit. pág. 155.

Llama la atención en este orden de cosas, que aquellos bienes podrán ser recuperados por sus legítimos titulares, sin necesidad de acudir a la justicia, y no obstante cualesquiera empeños, contratos o transacciones verificadas en contra de dicha titularidad.

c) Derecho de reclamación de bienes detenidos por la guerra.

Frente al sistema jurídico en el apartado anterior, en el presente se arbitró una defensa de los propietarios de aquellos bienes, encauzada a través de la vía de la justicia. El procedimiento fué este:

"Los súbditos y habitantes de una parte y de otra podrán también reclamar sus bienes y efectos que hayan sido detenidos con motivo de la guerra, sea por sus corresponsales o por otras cualesquier persona que sea, podrán pedir su producto; y en caso de disputa sobre esto, les será permitido apremiar a los detentores de sus bienes y efectos a sus deudores por las vías de justicia; y los jueces estarán obligados a administrarles pronta y buena justicia, atendiendo solamente en el examen de estos procesos a los méritos de la causa, sin reflexionar de ninguna manera sobre la guerra pasada" (284)

d) Compromiso de mútuo apoyo y asistencia.

Una Paz nacida entre dos países que han sostenido largas y cruentas guerras, en donde no estén cicatrizadas por el paso del tiempo, las heridas

(284) Art. 4. op. cit. pág. 155.

reciprocamente infligidas, necesita para su operatividad, de una manifestación de ayuda y consejo, por las partes antaño enemigas, que destierre los enojos y recelos de épocas pretéritas. Este espíritu de colaboración se plasmó con este tenor:

"Restablecida también entre los dichos señores rey y Estados generales la paz, la buena amistad y la correspondencia, como así mismo entre sus súbditos y habitante recíprocamente, y habiéndose precautionado que no suceda cosa que pueda mantener o causar alguna enemistad; los dichos señores rey y Estados generales procurarán y adelantarán fielmente el bien y la prosperidad el uno del otro, por medio de todo apoyo, ayuda, consejo y asistencia en todas ocasiones y en todo tiempo; y no convendrán en adelante en tratado alguno o negociaciones que puedan ocasionar daño al uno o al otro; antes bien las romperán y darán abiso de ellas recíprocamente con toda diligencia y sinceridad luego que tengan noticia de ello". (285)

e) Abolición de los impuestos creados por la guerra.

Esta exención fiscal, con la equiparación de pago de impuestos al de las naciones más favorecidas, se reguló con esta talante.

"Los derechos impuestos en las mercaderías y manufacturas de los súbditos de las Provincias unidas en tiempo y por causa de guerra so-

(285) Art. 9. op. cit. pág. 156.

bre las que se pagaban por los aranceles del tiempo del rey Carlos II cesarán inmediatamente después de firmada la paz; y así mismo cesarán los derechos que hubieren sido cargados en las mercaderías y manufacturas que salían de España en el curso y con motivo de la dicha guerra pagando de aquí adelante los mismos derechos que las demás naciones - las más favorecidas" (286)

f) Devolución de prisioneros de guerra.

La eliminación de este último vestigio de la confrontación bélica se exteriorizó con estas palabras.

"Todos los prisioneros de guerra de una parte y de otra serán — puestos en libertad sin pagar rescate alguno y sin distinción de lugares ni de banderas o estandartes, en donde o bajo de las cuales ha yan servido, por cuantos estos prisioneros están en poder de los dichos señores rey y Estados generales: y las deudas que los dichos prisioneros de guerra de una parte y de otra hubieren contraído u hecho serán pagadas, las de los españoles por su Majestad católica, y las de los prisioneros de los señores Estados por el estado, respectivamente, y en el término de tres meses después del cambio de las ratificaciones de este tratado" (287)

Como fiel corolario de la nueva Paz, no podía preterirse borrar -

(286) art. 30, op. cit. pág. 160.

(287) art. 32. op. cit. pág. 160.

una huella de tan fuerte repercusión psicológica, como la derivada de la detención de combatientes del otro bando.

3. PRIVILEGIO JURISDICCIONAL. - El Juez Conservador.

El Tratado hace referencia al fuero de Extranjería de los naturales de los Estados generales de las provincias unidas de los Países Bajos, en dos artículos, el 29 y el 12, inciso último. En ambos casos, se trata de una concesión graciosa, de España hacia aquellos vasallos extranjeros. En el primer precepto se les permite conservar a efectos del privilegio de su juez conservador, de los mismos beneficios que los otorgados en tiempos de Carlos II. El artículo 29 decía:

"El dicho señor rey conservará a los súbditos de los dichos señores Estados generales, en las ciudades mercantiles de su reino en donde han tenido jueces conservadores en tiempo del difunto rey Carlos II, la misma facultad, y la gozarán también en las demás ciudades donde otras naciones la gozan, o podrán todavía gozar en adelante, todo de la misma manera y con la misma autoridad de que los jueces conservadores han usado, durante el reinado del difunto rey Carlos II; y la apelación de las sentencias de estos jueces conservadores, podrán también ser interpuesta y seguida conforme le ha sido practicada en el mismo reinado: todo lo cual se observará a menos de que se convenga otra cosa sobre esto" (288)

(288) art. 29. op. cit. pág. 159-160.

En el art. 12 inciso último, aparece el juez conservador como testigo y dador de la licencia precisa para que los oficiales y factores de los arrendadores de las aduanas, pudieran girar visita de inspección a las casas y almacenes de los súbditos de aquellas provincias de los Países Bajos. El tenor fue este:

"El comerciante que fuere visitado podrá llamar al juez conservador o al cónsul de su nación para asistir a la visita, el cual podrá solo servir de testigo, y sin que le sea permitido hacer vejación alguna al comerciante ni a su comercio, bien entendido siempre que si los propios súbditos del dicho señor rey o de cualquier otro príncipe, estado, nación o ciudad fueren entonces o después tratados más favorablemente tocante a esto, los súbditos de los dichos señores Estados generales lo serán de la misma manera". (289).

En el nombramiento del juez conservador, facultades de éste, sistema de aplicaciones, etc. etc. habrá de tenerse presente - en virtud de la remisión del art. 17 de este Tratado - lo dispuesto en materia del Fuero de Extranjería, por los Capítulos de Privilegios para los Hanseáticos de fecha 28 de septiembre de 1607 dados por Felipe III; así como las Reales Cédulas de Felipe IV de 1645 (19 de marzo, 26 de junio y 9 de noviembre), tratado con Inglaterra de 23 de mayo de 1667, Tratado con la Hansa

(289) art. 12, inciso último, op. cit. pág. 156.

Teutónica de 1/11 de septiembre de 1647, Capítulos de la Villa de Santander de 12 de septiembre de 1700, Tratado de Comercio y Amistad con Gran Bretaña de 9 de diciembre de 1713, Tratado de Utrech con Gran Bretaña de 14 de diciembre de 1715, Tratado de Familia con Francia de 15 de agosto de 1761, Tratados con Portugal de 10 de Febrero de 1763, y 24 de mayo - de 1768.

4. PRIVILEGIOS PERSONALES.

Se pueden agrupar de este modo:

a) Derecho a poseer casas y almacenes propios

"También podrán tener en las tierras y estados del uno y del otro - sus casas propias para vivir y sus almacenes y sótanos para poner sus mercaderías y gozar de ellas recíprocamente con toda libertad y seguridad como un efecto de la paz" (290)

b) Derecho a intimidad en sus hogares y almacenes.

En cuyo caso los oficiales y factores de los arrendadores podrán hacer la visita que convenga con el permiso del juez conservador de las aduanas y otras rentas; y el comerciante que fuere visitado podrá llamar al juez conservador o al cónsul de su nación". (291)

(290) art. 12. inciso 1º, pág. 156.

(291) art. 12. inciso 3º, pág. 156.

c) Privilegio de inembargabilidad.

"Los mercaderes, maestros de navio, pilotos, marineros, sus buques, mercaderías, géneros y otros bienes que les pertenecen no podrán ser embargados ni detenidos, ni en virtud de una orden general o particular, ni por cualquier causa que sea de guerra ó otra; y menos con el pretexto de querer servirse de ellos para la conservación y defensa del país. Pero no se entienden ni comprenden en esto los embargos y secuestros de justicia por las vías ordinarias por causa de deudas - propias, obligaciones y contratos válidos de aquellos a quienes se han hecho los dichos embargos, en lo cual se procederá según costumbre, por derecho y razón" (292)

d) Derecho marítimo de recalada.

"Los navios de guerra del uno y del otro hallarán las playas, ríos y puertos libres y abiertos para entrar, salir y mantenerse al ancla - todo el tiempo que necesiten sin poder ser visitados en su carga; con todo, deberán usar de este permiso con discreción y no dar motivo alguno de recelo por el gran número de buques, por una larga y afectada detención, ni por otra cosa, a los gobernadores de las plazas y puertos, a los cuales los capitanes de los dichos navios darán parte de la causa de su arribada y detención. Pero por lo que mira a los navios -

(292) art. 18. op. cit. pág. 157.

mercantes de los súbditos del uno y del otro, les será permitido a los arrendadores u oficiales de la aduana poner en ellos guardas luego que hayan entrado en los dichos puertos" (293) Es preciso diferenciar los supuestos, según sean buques de guerra o mercantes.

1º - Buques de guerra.

Se protege este derecho sin más cortapisas, que las de usarlo moderamente, y sin levantar suspicacias en su ejercicio; así como la obligación de los capitanes de los navios de dar razonada cuenta de la arribada y detención a los gobernadores de las plazas y puertos.

2º - Buques mercantes.

Se impone como única restricción la de permitir que los arrendadores de la aduana, pudiesen colocar en ellos, guardas para la vigilancia de dichas naves y su carga.

e) Derecho a servirse de abogados y procuradores.

"Los súbditos y habitantes de los países bajos podrán en todas partes de las tierras de la obediencia, procuradores, escribanos, agentes y - ejecutores que les pareciere, para lo cual recibirán estos comisión de los jueces ordinarios cuando sea necesario y estos sean requeridos; y los dichos súbditos y habitantes de dicho señor rey que vengan a los

(293) art. 20. op. cit. pág. 158.

países de dichos señores Estados, gozarán de la misma asistencia recíprocamente". (294)

Esta facultad recíproca de los súbditos de ambas partes, es un derecho consustancial del ser humano, de obtener el servicio de profesionales del derecho para la defensa de sus intereses.

f) Privilegio de inaplicación del derecho de anbana.

La legislación española en su decurso histórico, ha sido contraria a la aplicación del odioso derecho de anbana en nuestra patria. Recíprocamente se impuso la inobservancia del mismo con este tenor:

"Los súbditos y habitantes de los países de los dichos señores - rey y Estados generales, de cualquier calidad y condición que sean, son declarados capaces de sucederse respectivamente los unos a los - otros tanto por testamento como sin testamento, según las costumbres de los países. Y algunas herencias hubiesen recaído antes de ahora a algunos, serán mantenidos y conservados en ellas". (295)

g) Derecho de libertad religiosa.

"Y a fin de que las leyes de comercio que han sido obtenidas por la paz no puedan quedar infructuosas, como sucedería si los súbditos de dichos señores Estados fuesen molestados por el caso de conciencia cuando van, vienen o residen en los dominios de dicho señor rey para

(294) Art. 23. op. cit. pág. 158.

(295) art. 25. pág. 158. (op. cit.)

ejercer en ellos el tráfico u a otro fin; por esta causa, a fin de -
que el comercio se haga seguro y sin peligro tanto por mar como por
tierra, el dicho señor rey dará las órdenes necesarias para que los
súbditos de dichos señores Estados no sean molestados contra y en -
perjuicio de las leyes del comercio; y que ninguno de ellos sea in-
quietado ni turbado por su creencia mientras no dieren escándalo ni
cometieren ofensa pública, de lo que los dichos súbditos deberán abs-
tenerse, conducirse y comportarse con toda modestia. Lo mismo obser-
vará respecto a los súbditos de dichos señores rey que residieren en
las Provincias unidas". (296)

Ha de destacarse la frase "y que los súbditos de los Estados Ge-
nerales de las provincias unidas de los Países Bajos, no sean inquie-
tados, ni turbados por sus creencias, mientras no diesen escándalo,
ni cometiesen ofensa pública", habida cuenta de la intransigencia re-
ligiosa que imperaba a la sazón en el mundo, lo cual contribuye a -
ponderar más acusadamente, la generosa actitud de España y la de -
aquellos Estados, en función del carácter recíproco de dicha fórmula.

h) Privilegio de inmunidad en caso de guerra.

"Y para asegurar mejor en adelante el comercio y la amistad entre los
súbditos de dicho señor rey y los de dichos señores de Estado, ha si-

(296) art. 28. op. cit. pág. 159.

do acordado, que si acaeciere en lo sucesivo alguna interrupción de amistad o rompimiento entre la Corona de España y los dichos señores Estados (lo que Dios no quiera), siempre se dará el término de un - año y un día después de dicho rompimiento a los súbditos de una parte y de otra para retirarse con sus efectos y transportarlas adonde me jo r les parezca; lo que se les permitirá hacer, como también el vender o transportar sus bienes y muebles en toda libertad, sin que les puedan poner embarazo alguno, ni proceder durante el dicho término de un año y un día a embargo alguno de sus efectos, y menos aún al arres to de sus personas". (297).

Sobresale el dilatado período de inmunidad tanto personal, como de - bienes, acotado para los súbditos de España y de aquellos territorios de los Países Bajos, en el supuesto de rompimiento futuro de hostili dades. Un año y un día, - a contar desde el inicio de la guerra -, es plazo de garantía más que suficiente para abandonar un territorio ex tranjero, con absoluta inmunidad.

5. PRIVILEGIOS DE COMERCIO

Hallamos en el Tratado los siguientes que clasificamos de este - modo, para una más nítida comprensión:

(297) art. 36. op. cit. pág. 161.

a) Libertad general de comercio.

("Los dichos súbditos de una parte y de la otra podrán también frecuentar con sus mercaderías y navíos los países, tierras, ciudades, puertos, plazas y ríos del uno y del otro estado, y llevar a ellos y vender dichas mercaderías indistintamente a cualesquier personas; y comprar, y traficar y transportar toda suerte de mercaderías cuya entrada o salida no sea prohibida general y universalmente a todos, así - súbditos como extranjeros, por las leyes y ordenanzas de los estados del uno y del otro, pagando los derechos de entrada y salida y otros que se pagaren por los propios súbditos, y por otras naciones amigas las más favorecidas; y así facilitarán recíprocamente la entrada y la salida de sus navíos, sin más dilación ni embarazo.") (298)

("Y para que el comercio y la navegación de una parte y de otra sea todavía más libre y segura se ha convenido en confirmar el tratado de marina hecho en el Haya en 17 de diciembre de 1650 entre el difunto rey Felipe IV y los señores Estados generales y que este tratado se observe y ejecute en todo como si estuviese inserto aquí la palabra por palabra; excepto la prohibición comprendida en los artículos 3 y 4 de dicho tratado, que no tendrá lugar" (299)

(298) Arts. 13, pág. 156 y 157, op. cit.

(299) art. 33. pág. 160.

No puede ser más generosa la protección del tráfico mercantil.

b) Exención de presentación de libros de comercio.

("Los mismos súbditos y habitantes de una parte y de otra no serán - compelidos a mostrar ni presentar sus registros y libros de cuentas a persona alguna, sino fuere para hacer prueba, evitar los pleitos y contestaciones; y no podrán ser embargados, retenidos ni tomados de entre sus manos con ningún pretexto. Y será permitido a los dichos - súbditos de una parte y de otra en los lugares respectivos donde vivieren el tener sus libros de cuenta, de negocio y correspondencia en la lengua que gustaren, española, flamenca, o cualquier otra, por razón de lo cual no serán molestados, ni sujetos a pesquisa de persona alguna; y cualquier otra cosa que haya sido concedida por el uno o el otro de los altos contratantes a alguna otra mación sobre este punto se entenderá igualmente por concedida aquí" (300).

El origen de esta exoneración habrá que hablarlo en el deseo de - ambas partes soberanas de no entorpecer innecesariamente el libre - ejercicio del comercio.

6. PRIVILEGIOS FISCALES.

Podemos agruparlos de esta manera:

(300) art. 24, op. cit. pág. 158-9.

a) Igualdad fiscal que los naturales del territorio.

Hallamos esta equiparación en dos preceptos. El artículo 12 inciso 2º estableció: "Y no estarán sujetos a mayores derechos, ni impuestos - que los súbditos del uno y del otro" (301). El término "derechos", - debemos interpretarlo como sinónimo de arbitrio o canon, a satisfacer por el comerciante. De otro lado, y con carácter general y recíproco, al art. 14 recalcó ese talante fiscal, con estos términos:

"Los dichos súbditos de una parte y de otra tampoco serán obligados a pagar mayores ni otros derechos, cargas, gabelas o impuestos, cualesquiera que sean, sobre sus personas, bienes, mercaderías, géneros, navíos o fletes de éstos, directa ni indirectamente bajo de cualquier nombre, título o pretexto que sea, sino aquellos que pagaren los proprios y naturales súbditos de la una y de la otra" (302)

b) Pago único de los derechos de entrada.

"Habiendo pagado una vez los dichos súbditos de una parte y otra los derechos de entrada comprendidos en las tarifas y otras leyes, no serán obligados a pagar más derechos, aunque transporten por tierra sus mercaderías o géneros de un reino o provincia al otro dentro de España, debiéndose observar esto de la misma manera dentro del estado de

(301) Art. 12. inciso 2º, op. cit., pág. 156.

(302) Art. 14. op. cit. pág. 157.

las provincias unidas. En cuanto a los otros derechos, pagarán respectivamente los mismos que pagan los propios súbditos o las otras naciones más favorecidas" (303)

Es obvia la regulación a este beneficio, tendente a impedir el pago de impuestos sucesivos, por un sólo concepto, ya satisfecho.

7. CLAUSULA CON TRATO DE NACION MAS FAVORECIDA.

"Los súbditos de dichos señores Estados generales no podrán asimismo ser tratados en España, ni en los reinos y estados de su dependencia de otra manera o menos favorablemente que la nación más privilegiada; y aún gozarán en lo que to ca al comercio y navegación, y generalmente en todo, sin excepción ni reserva alguna, de los mismos privilegios, franquezas, exenciones, inmunidades y seguridades de que han gozado antes de esta guerra, y que otras naciones y ciudades mercantiles, las más favorecidas puedan gozar ahora, o podrán después sobre esto, ya sea en virtud de tratados de paz o de comercio, ya por contratos, reglamentos y actos particulares; de manera que los mismos privilegios, franquezas, exenciones, inmunidades y seguridades que han sido concedidas o se concedieren después al rey de Francia, a la reina de la Gran Bretaña, o a cualquier otro reino, estado, nación o ciudad, cualesquiera que sean, o a sus súbditos, serán igualmente concedidas a dichos Señores Estados, o a sus súbditos,

(303) Art. 16. op. cit. pág. 157.

ditos con todas las cláusulas y circunstancias ventajosas que a ellas se añadirán; y lo mismo se observará también por lo que mira a los súbditos de dicho señor rey, quienes en toda la extensión de los países de la obediencia de dichos señores Estados serán tratados tan favorablemente como la nación más privilegiada" (304)

Es tan sumamente expresiva la terminología de esta cláusula, que nos veda - en aras de esta concesión el hacer comentarios al respecto, tanto en lo tocante a su exégesis, como a la trascendencia de la misma, En todo caso, su implantación tuvo carácter recíproco.

8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL TRATADO.

A fin de vigilar la intangibilidad del Tratado, se adoptarán ad cautelam, las siguientes garantías:

a) Sanciones a los contraventores.

Se fijaron en este tenor: "Si por inadvertencia u otra causa sobre viniere alguna inobservancia o inconveniente al presente tratado por parte de los dichos señores rey o Estados, o sus sucesores, no dejará de subsistir en toda su fuerza esta paz y alianza, sin que por ello se llegue a romper la amistad y buena correspondencia, pero repararan prontamente las dichas contravenciones; y si estas procedieren de culpa de algunos particulares súbditos, estos solos serán castigados; y se repa

(304) art. 17, op. cit. pág. 157.

rarán prontamente las dichas contravenciones; y si estas procedieren de culpa de algunos particulares súbditos, estos solos serán castigados; y se reparará el daño en el mismo paraje en donde hubieren cometido la contravención, si fueren cogidos allí, o bien en el lugar de su domicilio; sin que puedan ser perseguidos en otra parte en sus personas ni bienes de ninguna manera" (305)

b) Publicidad del Tratado.

Se estableció así: "Y para mayor seguridad de este tratado y de todos los puntos y artículos en él contenidos, será publicado, comprobado y registrado de una parte y de otra en los consejos, cortes y plazas - donde es costumbre hacer las publicaciones, comprobaciones y registro" (306)

c) Ratificación del Tratado.

A corto plazo se marcó su ratificación con esta redacción: "El presente tratado será aprobado y ratificado por los dichos señores rey y Estados Generales, y los despachos de ratificación se cambiarán en el término de seis semanas, o antes si se puede, contando desde el día de la firma" (307)

(305) Art. 39. op. cit. pág. 160-1

(306) Art. 39, op. cit. pág. 161.

(307) Art. 40, inciso 1º, op. cit. pág. 161.

9. JUICIO CRITICO

Si bien dentro del régimen de Privilegios, derechos, exenciones, que se postulan en el presente Tratado, casi todos tienen carácter recíproco en favor de los súbditos españoles y los de aquellas provincias de los Países Bajos, con lo que no puede a priori hablarse de trato desigual; no obstante, lo anterior, un examen profundo de los artículos - 12, inciso último y 29, nos obliga en conciencia a reconsiderar que en materia de administración de justicia, esto es, en la vía jurisdiccional existía un trato en favor de España hacia los Países Bajos (provincias unidas), marcado por la existencia de un juez propio - el juez conservador - encargado de juzgar, fuera del cauce ordinario, las litis en que interviniesen los vasallos de este último país; sin que - mutatis mutandi - en estos últimos territorios hubiese sido creado un juez privativo de los españoles. Esta disparidad de privilegio jurisdiccional, invita a inferir que la postura española adoptada en este Tratado, no fue no solamente interesada, sino singularmente graciosa y altruista.

Tratado de Paz y Amistad ajustado entre España y Portu-
gal en Utrech el 6 de Febrero de 1715. (308)

1. INTRODUCCION.

Este Tratado fué el último de los tratados que se firmaron en el Congreso de Utrech. Está integrado por veinticinco artículos y otro - anexo-separado. El rey portugués que lisonjeado por las ventajas que se le prometieron por los países a los que se unió en la gran alianza contra Felipe V, trató de compensar con este Pacto, los sacrificios hechos durante la guerra, solicitó en un principio la cesión de Badajoz y de - la colonia americana de Sacramento, a lo que se opuso el rey de España a la primera pretensión, aceptando en cambio la segunda, exigiendo a cambio de le indemnizara del valor de varios buques que había confiscado el gobierno portugués.

2. DECLARACION DE PAZ.

Se proclama este loable deseo, con estas tranquilizadoras palabras: "En el nombre de la Santisima Trinidad, Sea notorio a todos los -

(308) CANTILLO, A. "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y de Comercio, que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la casa de Borbón," Madrid, 1843, pág. 164 a 169.

presentes y venideros, que hallándose la mayor parte de la cristiandad aflijida por una larga y sangrienta guerra, ha sido Dios servido de mover los corazones del muy alto y muy poderoso príncipe don Felipe V, por la gracia de Dios, rey católico de España, y del muy alto y muy poderoso príncipe Don Juan V, por la gracia de Dios, rey de Portugal, á un ardiente y sincero deseo de contribuir al universal reposo y asegurar la tranquilidad á sus súbditos, renovando y restableciendo la paz y buena correspondencia que había antes entre las dos coronas de España y de Portugal". (309)

A mayor abundamiento se insiste, que: "Habrá una paz sólida y - perpétua y una verdadera y sincera amistad entre su Majestad católica, sus descendientes, sucesores y herederos, todos sus estados y súbditos, de una parte; y su Majestad portuguesa, sus descendientes sucesores y - herederos, todos sus estados y súbditos, de la otra; la cual paz será - observada firme é inviolablemente tanto por tierra como por mar, sin permitir que se cometa hostilidad alguna entre las dos naciones que en ninguna parte y con ningún pretexto; y si, aunque no se espere, se llegase á contravenir en alguna cosa al presente tratado, este quedará no obstante en su vigor, y la dicha contravención se reparará de buena fé sin dilación ni dificultad, castigando rigurosamente á los agresores, y vol—

(309) Ibid. op. cit. pág. 164-5.

viéndolo todo a su primer estado" (310)

No obstante, a fin de llevar el terreno de los hechos, lo que no dejaba de ser una mera exposición de intenciones, - que podía disiparse como niebla vespertina - se buscó una consolidación de la paz, mediante una política realista, basada en estos efectos:

2.1. Efectos de la paz.

Clasificaremos los siguientes efectos, de este modo:

- a) Olvido de las hostilidades. - Se reconoció esta política de pretensión absoluta de las afrentas bélicas anteriores, mediante este texto: "En consecuencia de esta paz se olvidarán enteramente todas las hostilidades cometidas hasta ahora; de suerte que ningún súbdito de las dos coronas tendrá derecho para pretender satisfacción de los daños padecidos por las vías de justicia, ni - por otra alguna, ni tampoco podrán alegar recíprocamente las pérdidas que hayan tenido durante la presente guerra, y olvidarán todo lo pasado como si no hubiese habido interrupción alguna en la amistad que se establece al presente" (311).
- b) Amnistia. - La amnistia para todo tipo de personas que hubieren mudado de servicio durante las hostilidades, se reguló con este

(310) Art. 1. op. cit. pág. 165.

(311) Art. 2. op. cit. pág. 165.

generoso tenor: "Habrá una amnistia para todas las personas, así oficiales como soldados y otros que durante esta guerra ó con motivo de ella hubieren mudado de servicio; excepto para aquellos que hayan tomado partido, ó que se hayan empeñado en servicio de otro príncipe que no sea su Majestad católica o su Majestad portuguesa; y sólo aquellos que hayan servido á su Majestad católica o á su Majestad portuguesa serán comprendidos en este artículo, los cuales lo serán comprendidos en este artículo, los cuales lo serán también en el artículo 11 de este tratado".

(312)

- c) Devolución de prisioneros. - Es lógico que se previese la restitución de prisioneros habidos, dado que es una norma de conducta tradicional en los pueblos reintegradores de la paz. La temática fue ésta: "Todos los prisioneros y rehenes serán restituidos prontamente y puestos en libertad de una parte y otra sin excepción y sin pedir cosa alguna por su trueque, ni por el gasto que hubieren hecho, como ellos satisfagan las deudas particulares que hubiesen contraído" (313).
- d) Restitución de plazas y territorios. - En coherencia con la nueva actitud española y portuguesa, de dejar en reposo las armas, pa

(312) Art. 3. op.cit. pág. 165.

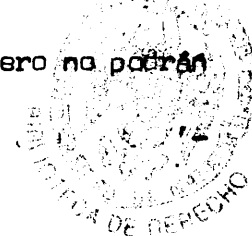
(313) Art. 4, op. cit. pág. 165.

ra reimplantar unos cauces de diálogo fraternal se aprobó que:

"Las plazas, castillos, ciudades, lugares, territorios y campos pertenecientes a las dos coronas, así en Europa como en otra - cualquiera parte del mundo se restituirán enteramente y sin reserva alguna; de suerte que los límites y confines de las dos monarquías quedarán en el mismo estado que tenían antes de la presente guerra. Y particularmente se volverán a la corona de España las plazas de Alburquerque y la Puebla con sus territorios en el estado en que se hallan al presente sin que su Majestad portuguesa pueda pedir cosa alguna a la corona de España por nuevas fortificaciones que ha hecho aumentar en dichas plazas; y á la corona de Portugal el castillos de Noudar con su territorio, la isla de Verdejo y el territorio y colonia del Sacramento". (314)

- e) Levantamiento de las confiscaciones. - Se arbitró el modo práctico de proceder a la restitución de los bienes confiscados, fijando un plazo, para que las partes interesadas pudieran presentarse ante los tribunales correspondientes en defensa de sus legítimos intereses. La normativa se acotó así: "Los bienes confiscados reciprocamente con motivo de la presente guerra se restituirán a sus antiguos poseedores y á sus herederos, pagandos estos

antes las mejoras útiles que hayan hecho en ellos, pero no podrán



pretender jamás de las personas que han gozado hasta aquí los -
dichos bienes el valor de sus productos desde el tiempo de la -
confiscación hasta el día de la publicación de la paz. Y a fin
de que la restitución de la propiedad de los dichos bienes con-
fiscados pueda ejecutarse, las partes interesadas estarán obli-
gadas a presentarse en el término de un año ante los tribuna-
les a quienes toque, en donde dichas partes litigarán sus dere-
chos, y sus causas serán juzgadas dentro del término de otro -
año" (315).

- f) Confirmación de las presas. - A fin de evitar el caos que podría
originar con las reclamaciones de los vasallos de ambas sociedad
des políticas, en materia de presas, se determinó esto: "Todas -
las presas hechas de una parte y otra durante el curso de la -
presente guerra, ó con ocasión de ella, serán juzgadas por bue-
nas y no quedará a los súbditos de las dos naciones algún dere-
cho ni acción para pedir en tiempo alguno que dichas presas se
les vuelvan atento a que las dos Majestades reconocen las razones
que ha habido para hacer las dichas presas" (316).

(315) Art. 11, op. cit. pág. 167.

(316) Art. 12. op. cit. pág. 167.

2.2. Tipología de privilegios.

Se puede espigar dentro del "corpus" del Tratado, diversas clases de privilegios, a saber:

a) Privilegio jurisdiccional.- El Fuero de extranjería stricto sensu. El Juez Conservador.-

El reconocimiento de un privilegio de tal magnitud por parte española y a favor de la lusitana, viene impuesto por lo declarado en el art. 13 del Tratado que dice: "Para mayor seguridad y validación del presente tratado se confirma de nuevo el que se hizo entre las dos coronas el 13 de febrero de 1668, el cual queda en su fuerza en todo lo que no fuere revocado por el presente tratado, y se confirma particularmente el artículo 8º de dicho tratado de 13 de febrero de 1668, como si estuviera inserto aquí palabra por palabra. Y sus Majestades católica y portuguesa ofrecen recíprocamente dar sus órdenes para que se haga una pronta y entera justicia a las partes interesadas" (317)

Como quiera que se confirma y mantiene la vigencia del Tratado - entre España y Portugal de 13 de febrero de 1668, por el que se aplicaba en España a los portugueses (art. IV de dicho tratado) los mismos privilegios que recibían los súbditos británicos según

(317) Art. 13. op. cit. pág. 167.

el Tratado de 23 de mayo de 1667, y entre ellos destacaba, el de Fuero de Extranjería *strictu sensu*, habrá que reconocer que aquella vía excepcional de administración de la justicia, tenía — abiertas las puertas de par en par, para que acudiesen ante la — misma, los súbditos portugueses. Corrobora esta exégesis, lo que dispone el art. 17 inciso 1º cuando señala que, "el comercio será generalmente abierto entre los súbditos de las dos Majestades con la misma libertad y seguridad que lo estaba antes de la presente guerra, y en muestra de la sincera amistad que desean, no solamente restablecer, sino aumentar entre los súbditos de las dos coronas, su Majestad Católica conceda a la nación portuguesa y su Majestad portuguesa a la española todas las ventajas en el comercio, y todos los privilegios, libertades y exenciones que — han concedido hasta ahora, y concederán en adelante a la nación más favorecida y más privilegiada de todas las que trafican en las tierras de los dominios de España y de Portugal" (318)

El aplicar a Portugal, la cláusula de nación más favorecida, comporta el que los súbditos de la misma, tengan a su disposición, el cauce del juez conservador, como estaba concedido a los Hanseáticos, Países Bajos (Provincias obedientes) e ingleses, por —

(318) Art. 17. inciso 1º, op. cit. pág. 168.

Tratados y Concesiones Reales.

Omitimos deliberadamente desarrollar la figura y competencia de aquel iudex, habida cuenta de que en páginas anteriores ha quedado descrita, con minuciosidad, su competencia y jurisdicción.

b) Privilegios personales.— Acotamos dos epígrafes:

1º) Plazo de inmunidad en caso de declaración de guerra: "Si por algún accidente (lo que Dios no quiera) hubiere alguna interrupción de amistad, ó rompimiento entre las coronas de España y Portugal, en este caso se concederá a los súbditos de éstas dos coronas el término de seis meses después del dicho rompimiento para retirarse y vender sus bienes y efectos, o transportarles adonde mejor les pareciese". (319). El plazo era más que suficiente para abandonar el país con inmunidad.

2º) Ius communicationis.— Viene amparado con este texto: "Los navíos de las dos naciones así de guerra como mercantes podrán entrar recíprocamente en los puertos de los dominios de las dos coronas donde tenían costumbre de entrar por lo pasado, con condición de que en los mayores puertos no haya á un mismo tiempo más de seis naves de guerra, ni más de tres en los puertos menores. Y en caso que un mayor número de naves de —

(319) Art. 21. op. cit. pág. 168-9.

guerra de una de las dos naciones arriba delante de algún -
 puerto de la otra, estas no podrán entrar en él sin permiso
 del gobernador ó del magistrado. Pero si obligadas por fuerza
 del temporal o por alguna otra necesidad ejecutiva, dichas
 naves llegasen a entrar en él sin haber pedido el permiso para
 ello, estarán obligadas a dar luego parte de su arribada
 y no podrán quedarse allí más tiempo que el que les fuere -
 permitido teniendo gran cuidado de no hacer daño alguno ni
 perjuicio al dicho puerto" (320).

- c) Privilegio de comercio.- Con carácter general, por lo que atañe
 al comercio, se restableció el sistema de libertad, seguridad,
 derechos de entrada y salida de los súbditos españoles y
 portugueses, que imperaba antes de la guerra. El tenor fué éste:
 Por "El presente artículo separado que tendrá la misma fuerza y
 vigor que si estuviese inserto en el tratado de paz concluido
 hoy entre sus majestades católica y portuguesa, y que debe ser
 ratificado como el tratado mismo, se ha convenido por los embaja
 dadores extraordinarios y plenipotenciarios de ambas Majestades
 que el comercio recíproco de ambas naciones se restablezca y -
 continúe de la misma manera y con las mismas seguridades, liberta
 des, exenciones, franquezas, derechos de entradas y salidas,y

(320) Art. 19. op. cit. pág. 168:

todas las demás dependencias como se hacía antes de la presente guerra, mientras no se arregle otra cosa, y se declare la conformidad en que debe correr el comercio entre las dos naciones, En fé de lo cual y en virtud de las órdenes y plenos poderes que nosotros los que abajo firmamos tenemos de nuestros amos el rey de España y el Rey de Portugal, hemos firmado al presente artículo separado y hecho poner en sí los sellos de nuestras armas En Utrech a 6 días del mes de febrero de 1715 años" (321)

3. FUERZA Y VIGOR DEL TRATADO.

Existió una verdadera obsesión por mantener el vigor del tratado, como se infiere de la proliferación de artículos en los que se plasma ese criterio. En el art. 13 se insiste en consolidar la vigencia del tratado de 1668, como apuntamos anteriormente al glosar el privilegio jurisdiccional. En el art. 20 se reitera que: "Deseando sus Majestades católica y portuguesa el pronto cumplimiento de este Tratado, principalmente por el reposo de sus súbditos, se ha convenido que tendrá toda fuerza y vigor inmediatamente después de la publicación de la paz, y que se hará la dicha publicación en los lugares de los dominios de sus Majestades lo más presto posible. Y si después de la suspensión de armas se hubiere

(321) Art. anexo op. cit. pág. 169.

cometido alguna contravención, se dará satisfacción de ello recíprocamente"(322)

Más adelante se indica: "Y porque la difunta reina de Inglaterra de gloriosa memoria, había ofrecido ser garante de la entera ejecución de este Tratado, de su firmeza y duración; sus Majestades católica y portuguesa aceptan la sobredicha garantía en toda su fuerza y vigor para todos los presentes artículos en general, y para cada uno en particular." (323)

Al salir de garante de la ejecución del Tratado la reina inglesa se robusteció sin duda, el vigor del mismo.

En el art. 23, se amplía la garantía a otros reinos y príncipes, de esta manera: "Las mismas Majestades católica y portuguesa aceptarán también la garantía de todos los otros reinos, príncipes y repúblicas - que en el término de seis meses quieran ser garantes de la ejecución de - este tratado, con condición de que esto sea a satisfacción de las dos majestades". (324)

A los propios embajadores españoles y portugueses, prometieron - que el tratado sería cumplido y ejecutado por sus propios reyes, su promesa quedó regulada de este modo: "Todos los artículos arribas escritos

(322) Art. 20, op. cit. pág. 168.

(323) Art. 22. op. cit. pág. 169.

(324) Art. 23. op. cit. pág. 169.

han sido tratados, acordados y estipulados entre los susodichos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de los señores reyes de España y Portugal, en nombre de sus Majestades; y prometen en virtud de sus plenos poderes que los dichos artículos en general y cada uno en particular serán inviolablemente observados, cumplidos y ejecutados por los señores reyes sus amos" (325). El plazo de satisfacción del tratado se fijó en cincuenta días, con este temor: "Las ratificaciones del presente tratado dadas en buena y debida forma se cambiarán de una parte y otra dentro del término de cincuenta días, que empezarán desde el de la firma, o antes si se pudiera" (326)

4. JUICIO CRITICO.

Existe una marcada reciprocidad en la concesión de privilegios por el lado español y portugués. Esta ponderación se encuentra tanto en el análisis de los privilegios de comercio, como en los personales, anteriormente glosados; lo mismo podemos arguir por lo que contiene a los efectos de la Paz instaurada, en los que se observa una paridad de trato para los súbditos de las naciones ibéricas. Se rompe a nuestro entender ese equilibrio, en materia jurisdiccional, por la remisión que el presente tratado efectúa al anterior de 13 de febrero de 1668, ajustado por aquellas comunidades políticas, toda vez que éste último nos reenvía

(325) Art. 24. op. cit. pág. 169.

(326) Art. 25. op. cit. pág. 169.

al Tratado español-inglés de 23 de mayo de 1667, por el que se ratificaba a los vasallos británicos en España, el privilegio del juez conservador; concesión que paralelamente por el juego de la remisión había - que hacer con los súbditos lusitanos residentes en España. Como quiera que no conocemos la existencia del juez conservador de los españoles en Portugal, tendremos que convenir pese a lo que dispone el Tratado: "El comercio será generalmente abierto entre los súbditos de las dos majestades con la misma libertad y seguridad que lo estaba antes de la presente guerra: y en muestra de la sincera amistad que desean, no solamente restablecer, sino aumentar entre los súbditos de las dos coronas su Majestad católica concede a la nación portuguesa y su Majestad portuguesa a la española todas las ventajas en comercio, todos los privilegios libertades y exenciones que han concedido hasta ahora y concederán en adelante a la nación más favorecida y más privilegiada de todas las que trafican en las tierras de los dominios de España y de Portugal" (327)

(327) Art. 17. inciso 1º, op.cit. pág. 168.

Tratado entre España e Inglaterra concluido en Madrid el
14 de Diciembre de 1715, explanatorio de los de Paz y co-
mercio ajustado entre ambas potencias en 1713. (328)

1. INTRODUCCION.

La génesis de este Tratado tiene su ratio essendi en las diferencias surgidas del lado español y el inglés, con ocasión de la práctica del comercio entre ambos países, operada después de la conclusión de los Tratados de Paz y comercio suscritas por las mismas el 13 de julio y 9 de diciembre de 1713. Así se infiere, de lo dispuesto en su Preámbulo, cuando establece lo siguiente: "Habiendo quedado aún después de - los tratados de paz y de comercio ultimamente concluidos en Utrech en 13 de julio y en 9 de diciembre de 1713, entre su Majestad Católica la difunta reina de la Gran Bretaña, de gloriosa memoria, algunas pequeñas diferencias tocantes al comercio y curso de él, y hallándose - sus Majestades católica y británica inclinados a mantener y cultivar una firme e inviolable paz y amistad, han hecho para lograr este salu- dable fin, concluir y firmar por los dos ministros, reciprocamente y

(328) CANTILLO, A. "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y de Comercio, que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón desde el año 1700 hasta el día", Madrid, 1843, pág. 170-1.

en la debida forma á este fin calificados los artículos siguientes".

(329)

La brevedad de este Pacto, integrado solo por siete preceptos recorta al máximo, la glosa a realizar.

2. TIPOLOGIA DE PRIVILEGIOS.

Espigando en el texto del Tratado, hallamos tres categorías de privilegios, que clasificamos de este modo:

2.1. Privilegio jurisdiccional. El Fuero de Extranjería stricto sensu: El iudex británico.

Se consolida esta figura excepcional dentro del organigrama de la administración de justicia española, al amparo de lo delimitado en el art. 5 del Tratado, que establece: "Gozarán los dichos vasallos de todos y cualesquiera derechos, privilegios, franququezas, exenciones e inmunidades de que gozaron antes de la última guerra en virtud de cédulas reales á ordenanzas y por los artículos del tratado de paz y comercio hecho en Madrid en el año de 1667, el cual se confirma plenamente aquí; y los dichos vasallos serán tratados en España de la misma forma que la nación más favorecida" (330)

(329) Ibid. op. cit. pág. 170.

(330) Art. 5. op. cit. pág. 171.

La remisión que dicho precepto hace del Tratado de España con Inglaterra de 1667 - comentado con anterioridad - el cuál confirma plenamente, lleva aparejado el que se mantenga la institución peculiar en nuestro suelo del juez conservador de los británicos, con toda la fuerza y vigor que aquel Tratado de Carlos II de España, le confirió. A mayor abundamiento, encontramos en el mismo Tratado argumentos en favor de dicho criterio, como es el inferido de la frase acotada en el citado art. 5 y los vasallos ingleses serán tratados en España de la misma forma que la nación más favorecida, - lo que implica que dichos súbditos gozasen de las mismos privilegios otorgados a los Hanseáticos por los Capítulos de Felipe III de 28 de septiembre de 1607 y el Tratado de Munster de 1/11 de septiembre de 1647, así como a los naturales de los - Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos por el Tratado de 30 de enero de 1648, entre los que ocuparon un lugar preeminente, el privilegio del juez conservador o fuero de extranjería stricto sensu-, y por lo delimitado en el art. 2 de este tratado, que precisa: "Confirma su majestad católica el tratado hecho por los comerciantes ingleses con los magistrados de Santander el año de mil y setecientos". (331).

(331) Art. 2. op. cit. pág. 171.

Recordemos que en los Capítulos de Santander, se concedía a los mercaderes ingleses residentes en aquella villa, la facultad de acudir a su Juez Conservador. Damos por transcrito aquí todo lo relativo a dicho iudex, comentado en el tratado de 1667, y en los Capítulos de la villa de Santander de 1700.

2.2. Privilegios fiscales. - Encontramos dos clases de beneficios fiscales que ordenamos así:

- a) Mantenimiento de los privilegios fiscales de Carlos II - "Los vasallos ingleses no estarán obligados a pagar mayores ó otros derechos por las mercaderías que introducen y estraen de diferentes puertos de su Majestad católica, que los que pagaban por las mismas en tiempo del rey Carlos II, arreglados por cédulas y ordenanzas del referido rey o sus predecesores. Y aunque el pie del fardo no esté fundado en ninguna ordenanza real, no obstante su Majestad católica declara, quiere y manda que se observe al presente y en lo venidero como una ley inviolable: los cuales derechos se exigirán y sacarán ahora y en adelante con las mismas ventajas y favores de los referidos vasallos". (332)

Destácase la trascendencia económica de ratificar los beneficios fiscales otorgados en el reinado de Carlos II, esto es,

(332) Art. 1. op. cit. pág. 170-1.

desde 1665 a 1700, operado en la monarquía borbónica de Felipe V en el año de 1715.

- b) Equiparación fiscal con los españoles.- "Los referidos vasallos no pagarán parte alguna más de mayores ó otros impuestos que los que pagan los mismos vasallos de su Majestad católica en el mismo paraje". (333)

2.3. Privilegios de comercio.- Dentro de este contexto, hallamos una concesión mercantil española dispensada graciosamente a los vasallos de la Gran Bretaña, y una mútua promesa de ambas coronas de evitar inoportunas innovaciones en la práctica mercantil. Veámoslas por separado.

- a) Concesión en materia de sal: "Su Majestad católica permite a los referidos vasallos recoger y tomar sal en la isla de Fortu dos, habiendo gozado de esta licencia en tiempo del rey Carlos II sin interrupción alguna" (334)

- b) Promesa recíproca de mantenimiento del statu quo mercantil.- Viene establecido en el Tratado con este tenor: "Y pudiendo - haber habido innovaciones en el comercio, promete su Majestad Católica aplicar de su parte todo el cuidado posible para abo

(333) Art. 4. op. cit. pág. 171.

(334) Art. 3. op. cit. pág. 171.

lirlas y hacerlas evitar por todos los medios en lo venidero á igualmente su Majestad británica promete aplicar todo el - cuidado posible para abolir de su parte todas las innovaciones y evitarlas en lo venidero por todos los medios" (335)

Esa promesa bilateral de consolidación del statu quo mercantil entre España e Inglaterra, no podía tener otro propósito que el de conjurar posibles irregularidades en la aplicación práctica de la legislación vigente a la sazón, impidiendo por ende, que la admisión de nuevas "innovaciones" en la materia, - produjesen daños irreparables en el tráfico de comercio de - aquellos dos países.

3. RATIFICACION DEL TRATADO DE UTRECH DE 1713.

Se mantiene en vigor lo dispuesto por el Tratado de Utrech de 9 de diciembre de 1713, en todo aquello que no contradiga al presente: "El - tratado de comercio hecho en Utrech en 9 de diciembre de 1713, quedará en su fuerza, á excepción de los artículos que se hallaren contrarios a lo que se ha concluido y firmado hoy los cuales serán abolidos y de ninguna fuerza: y sobre todo los tres artículos llamados comunmente esplanatorios y el presente serán aprobados, ratificados y cambia-

(335) Art. 6. op. cit. pág. 171.

dos de una y otra parte en el término de seis semanas, ó antes si fuera posible. En fé de lo cual, y en virtud de nuestros plenos poderes, firmamos el presente. En Madrid á 14 de diciembre de 1715" (336).

4. JUICIO CRITICO.

¿Qué Estado salió más beneficiado con lo pactado en este Tratado? Indudablemente Inglaterra. Un examen meticoloso del corto articulado del mismo nos lleva indefectiblemente a esa consecuencia. Salvo lo determinado en el art. 4, que equipara los súbditos españoles a los británicos, en lo tocante a las cargas fiscales, y hecha excepción, de la promesa reciproca de ambas monarquías, de mantener el "statu quo" mercantil existente, entre dichas comunidades políticas, a tenor de lo dispuesto en el art. 6, los demás preceptos del Tratado rezuman privilegios españoles a favor del Reino Unido, como son, en materia de administración de justicia, el reconocimiento de la institución del Juez conservador de los ingleses; en materia fiscal, la reducción de la presión fiscal a la implantada en el reinado de Carlos II, y en la temática mercantil, la conformidad para que los vasallos británicos tomasen sal en la isla de Fortudos, como en tiempos del último monarca de la casa de Austria. En un orden de gradación de la trascendencia de aquellos privilegios, estimamos como el más importante, el de la rati

(336) Art. 7. op. cit. pág. 171.

ficación del fuero de extranjería - "stricto sensu" - de los súbditos de la Gran Bretaña, instaurada para los mismos, por Felipe IV de España en 1645. El fiel de la balanza, se inclinó una vez más, en el cómputo de la generosidad de dichas comunidades políticas, resueltamente a favor de España. Ello nos parece obvio e incontrovertible desde el punto de vista exegético.

Tratado de Comercio y de Navegación entre el Rey de España, Felipe V y el Emperador de Alemania Carlos VI, concluido en Viena el 1º de mayo de 1.725. (337)

1. INTRODUCCION.

Este Tratado español-alemán, se compone de 47 artículos y un Preámbulo en los que se regulan con destacada casuística las relaciones marítimas y mercantiles entre ambas comunidades políticas. Glosaremos el mismo, agrupando los preceptos en razón de la coherencia de su contenido; la sistemática a seguir será la de efectuar distintas clarificaciones según la afinidad de materias.

1.1. Instauración de la Paz. - El Pacto tiene como piedra angular la paz instaurada y de la que se derivaron los siguientes efectos, portadores consecuentemente de un clima de amistad entre las dos citadas coronas .

1.2. Efectos de la Paz. - La Paz instaurada generó dos secuelas, una gama de privilegios y el que glosamos seguidamente:

a) El ius communicationis - Como principal corolario de las nuevas

(337) CANTILLO, A. "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y de Comercio, que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón", Madrid, 1.843, pág. 218 a 228.

relaciones diplomáticas creadas, se instrumentó una amplia libertad de tránsito y comunicación, merced a esta regulación (338):

"En virtud de la paz establecida entre Su Majestad cesárea católica y su Real Majestad Católica, será lícito a todos los súbditos de entrambos, de cualquier estado, calidad y condición que sean entrar, salir ó morar en cualesquiera reinos, provincias y dominios suyos con toda libertad y seguridad, sin que para ello se necesite de patente especial salvo conducto, ni de otro particular permiso, bastando la sola publicación de la paz, con la cual se suplen semejantes requisitos y gozarán reciprocamente por tierra y por mar de aquella misma protección pública así en sus personas como en sus dependencias de que por otra parte gozan en todo y por todo sus propios naturales súbditos, sin ningún temor ni riesgo de perjuicio ó daño alguno, según por este tratado se ha convenido."

El derecho marítimo de arribada y recalada, tanto en los puertos, playas, ensenadas y provincias, de ambos países, se acotó con esta fórmula liberal (339):

(338) Art. 1, pp. cit. pág. 219.

(339) Art. 2, op. cit. pág. 219.

"Se permite desde luego plenamente a los navíos, así de guerra como mercantes, pertenecientes a los sobredichos contratantes ó a sus súbditos, el que puedanrecíprocamente frecuentar sus puertos, playas, ensenadas y provincias, sin necesidad de pedir antes otra alguna licencia; antes bien se les dará libre y amigable entrada en ellos, y se les suministrará por su justo precio todo lo que hubieren menester, así de bastimentos y víveres, como para reparo de sus navíos ó otras necesidades, para que puedan con toda seguridad hacerse a la mar; sin que se les pueda pedir derechos algunos, ni impuestos bajo de cualquier nombre ó título que finalmente sea. Y esto mismo se ha de entender por lo que toca a las Indias Orientales; pero con tal que no ejerciten comercio alguno en ellas, ni puedan comprar sino lo que puramente necesitaren de víveres, ó para reparos y pertrechos de sus navíos."

Por lo que concierne a la arribada de busques de guerra a puertos de la obra parte contratante, no se adoptaron más limitaciones que las que el buen sentido aconsejó, a fin de prevenir actitud de sospecha y recelo. Las medidas fueron éstas: (340)

(340) Art. 3. op. cit. pág. 219-220.

"Por lo que toca a losnavíos de guerra, como pueden con más facilidad ser ocasión de siniestra sospecha, se les prohiba la entrada en los puertos y onsenadas menos fortificados, sino es que para librarse de alguna tormenta o de caza de - enemigos, se hallasen precisados a guarecerse en ellos; pero pasado el riesgo del enemigo, o serenado el mar, y provistos de lo necesario, sin más detención partirán de allí. Tampoco enviarán de su escuadra muchos marineros juntos a tierra, sino tan solamente los que les permitiere el magistrado ó gobernador del lugar; y ultimamente obrarán en todo de manera que aparten de sí cualquier justo temor ó siniestra sospecha de que pudiesen ocasionar, lo que especialmente, se ha de observar en las Indias orientales, en donde más que en otras partes, suele haber más desconfianza".

En lo tocante a la llegada de navos mercantes, como quiera, que su entrada en puerto, no levantaba ninguna suspicacia en los naturales, se posibilitó su receso y salida - sin sufrir molestia alguna - una vez exhibidos al gobernador del lugar, sus pasaportes y pólizas de carga, todo ello al amparo de este tenor (341):

"Los navíos de transporte ó mercantes, de cualquier parte

que sean, que ó por librarse del temporal, o de la infestación de enemigos, ó por otro cualquier motivo, entraren en algún puerto, habrán de manifestar al gobernador del lugar sus pasaportes y sus pólizas de carga, concebidas en la fórmula abajo inserta: con la cual podrán salir y apartarse libremente de allí, sin molestia, estorsión ni oposición alguna, y sin que se les pueda precisar por ningún motivo a descargar sus mercaderías, ni a que se las visiten."

El supuesto de entrada de buques de guerra con las presas tomadas al enemigo en puertos del otro pactante, se autorizó - lo mismo que su partida-, sin exigencia de pago de ningún tributo o carga, en base a este criterio (342):

"No obstante lo referido, los navíos de guerra ó armados en corso, podrán entrar con toda seguridad en dichos puertos - con las presas tomadas al enemigo, y volver de la misma manera á sacarlas sin pagar ningún portazgo ni tributo, á menos de que habiendo pedido antes y obtenido el permiso, quisieren venderlas en todo ó en parte en aquel lugar; en cuyo caso habrán de pagar los mismos derechos de que más abajo se ha convenido por lo tocante a mercaderías".

(342) Art. 4. op. cit. pág. 220.

Las relaciones en alta mar entre navíos de guerra y mercantes,-- españoles o alemanes, o viceversa, se determinarán -- a fin de -- prevenir el contrabando que pudiera verificarse transportando -- mercaderías destinadas a enemigos del comandante del buque de -- guerra con esta generosa normativa: (343):

"Si algún navío de guerra imperial se encontrase en alta -- mar con un navío mercante perteneciente a súbditos del rey de España, ó si sucediese lo contrario no se acercará el de guerra al mercante más que a tiro de cañón, enviándole el -- bote don dos o tres hombres tan solamente, a quienes el ca-- pitán del buque mercante tendrá que manifestar su póliza de carga, por la cual se venga en conocimiento del lugar de don-- de salió, á cuál va destinado y de las mercaderías que lle-- va. Y en caso de constar que lleva entre ellas algunas de contrabando, destinadas para los enemigos del comandante del navío de guerra; en tal caso, y no de otra manera, los gèn-- ros prohibidos se adjudicarán al fisco, pero quedando sal-- vos el buque, la tripulación y demás mercaderías. Se deberá dar crédito a las pólizas de carga que el capitán del navío exhibiere y donde pareciere necesario, se convendrá recípro--

(343) Art. 8, op. cit. pág. 220.

camente de cierta marca distintiva que se estampará en las pólizas, con la cual se dará a estas mayor fé."

La circunstancia de prohibir aproximarse al buque de guerra a menos de tiro de cañón del lugar ocupado por el mercante, así como la de limitarse la inspección de la carga a la comprobación de la póliza de las mercaderías que el capitán de este último exhibiese, no son más que dos premisas reveladoras de los sentimientos de buena fe que atesoraban ambas partes.

b) Tipología de privilegios. - A nuestro entender, se puede hallar dentro del Tratado, la siguiente temática privilegiada, como otro de los efectos de la Paz instaurada.

1. Privilegio jurisdiccional. - El Fuero de Extranjería stricto sensu. El Juez Conservador. - En el artículo 30 se precisa este respecto (344):

"Por lo que toca a los jueces conservadores que en los antecedentes reinados ejercían en España el oficio de un magistrado muy considerable, y que antiguamente era concedido por los reyes a las naciones más favorecidas, con potestad de conocer y juzgar privativamente sobre todas las causas de sus nacionales, así civiles como criminales; se ha convenido que si su Majestad real católica concediere en -

(344) Art. 30, op. cit. pág. 224.

adelante este privilegio a otra nación, cualquiera que sea, se deba entender concedido igualmente el mismo á los súbditos de su Majestad cesárea. Pero en el interín se mandará severamente a todos los jueces ordinarios y magistrados que les administren pronta justicia, y la ejecuten sin dilación, parcialidad ni favor alguno. Además de esto, su Majestad católica consiente que de las sentencias en las causas pertencientes a los súbditos de su Majestad cesárea se pueda apelar solamente al consejo de comercio y no a otro tribunal".

Si bien de la exégesis literal de este precepto, pudiese inferirse que los alemanes residentes en España, sólo tendrían acceso a sus jueces conservadores, en el supuesto que su Majestad Católica concediere en el futuro dicho privilegio a otra nación - beneficio un tanto aleatorio en consecuencia - quiebra esa hermeneútica lo declarado en el art. 47, cuando se nos agrega (345):

"Ultimante se ha convenido que todo lo que universalmente fue estipulado en favor de la nación británica en los tratados de Madrid de 23/15 de mayo de 1667 y de 18/8

(345) Art. 47. op. cit. pág. 227.

de julio de 1670, y en los tratados de paz y de comercio de Utrech del año de 1.713, y recientemente en el tratado o convención estipulado en que aquí solo se ha expresado solo de paso, o no está suficientemente explicado en favor de los súbditos de su Majestad cesárea, en cuanto se les puede aplicar, se tenga por especialmente expreso ó inserto: entendiéndose también lo mismo de las ventajas que fueron concedidas a los súbditos de las Provincias Unidas por el tratado de paz de Munster el año de 1648, por el tratado de navegación del Haya año de 1650, y por el tratado de paz y comercio de Utrech de 1714; de suerte que si ocurriere dada en este o aquel caso sobre lo que se hubiera de observar en España o en los demás reinos de su Majestad católica respecto de los súbditos de su Majestad cesárea, los referidos tratados y lo que por los precedentes reyes de España y por su Majestad católica hoy reinante, fué concedido a las dos dichas naciones debajo de las mencionadas fechas, deberán servir de norma y regla en los casos dudosos, o en los omitidos en este instrumento. Y el presente tratado se ratificará por la sacra cesárea católica Majestad, y la sacra real

católica Majestad; y se entregarán recíprocamente los -
instrumentos de las ratificaciones dentro de tres meses,
ó antes si se pudiere".

La remisión que se hace, considerándolas como insertos al presen-
te - a los Tratados de la Gran Bretaña de 23/13 de mayo de 1667 y
13 de julio y 9 de diciembre de 1.713, así como a los concertados
con las Provincias Unidas de los Países Bajos en 1648, 1650 y --
1.714, obliga a considerar que el Fuero de Extranjería otorgado
en su día a los ingleses y a los súbditos de las Provincias Uni-
das, - todavía en vigor a la sazón - tenía por imperativo del úl-
timo precepto comentado, que aplicarse a los alemanes residentes
en España. Corrobora esta hermanocóptica, análogicamente, lo dispues-
to con este tenor" (346):

"Concede el rey católico a los súbditos de su Majestad cosá-
rea que residieron en las puertos y ciudades de los reinos de
Andalucía, Murcia, Aragón, Valencia y Cataluña, y también en
las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, que arrienden las ca--
sas acomodadas para su habitación, y tiendas en que guarden -
las mercaderías, y gocen de los mismos privilegios, libertades
y exenciones de que gozan en este punto los ingleses y holan-

(346) Art. 21, op. cit. pág. 223.

desos; y el mismo derecho y privilegio recíproco concede su Majestad cesárea a los súbditos del rey de España en sus reinos y provincias".

Que existía jurídicamente el juez conservador o fuero de extranjería stricto sensu, al tiempo de ajustarse este Tratado en 1.725, lo demuestra la redacción siguiente del mismo, cuando nos dice (347):

"Pero se exceptúa el caso en que alguna de dichas navas fuese destinada para puerto enemigo, y por las cartas de fletamento constase estar cargada de géneros prohibidos; porque en semejante caso se ha convenido que se registre la tal nave, pero que no se haga sin asistencia del juez conservador de la nación, si acaso le hubiere, y del cónsul; y que sea con tal moderación y cuidado que no se derriamen las mercaderías, ni coriban algún daño, ni rompan los fardos o envoltorios. Las mercaderías prohibidas que se hallaren a bordo serán confiscadas, excepto el buque con los demás géneros, sin que por esto sea lícito exigir al capitán del navío multa pecuniaria ni costas, aunque fuese con pretexto de visita o de autos formados.

La utilización en dicho texto de la institución del juez - conservador de los alemanes, como garante del "savoir faire" en la inspección de las naves de igual procedencia - con - destino a puerto enemigo- es incontrovertible aseveración de la vigencia de la misma, y de su virtualidad funcional. Robustece la interpretación anterior, lo determinado en el art. 13. op. 3, que dice (348):

"Habiendo expresamente convenido la sacra cesárea Ma-
 jestad y la sacra real católica Majestad que respecti-
 vamente los súbditos de uno y otro, en todos sus esta-
 dos, territorios y provincias existentes en cualquier
 región del mundo, tengan y gocen de todos los derechos,
 exenciones, gracias y libertades que fueron, son y fue-
 ron jamás concedidas a las naciones más amigas, y espe-
 cialmente a los súbditos y habitantes de la Gran Breta-
 ña, a los de Provincias Unidas de los Países Bajos, y á
 las ciudades anseáticas, por tanto su real católica Ma-
 jestad promete y declara en éstas que concede a los súb-
 ditos de su cesárea Majestad pleno y efectivo uso de to-
 do lo que se contiene en este artículo; de suerte que -

(348) Art. 13. op. cit. pág. 222.

no sean obligados a pagar, así por la entrada como por la salida y tránsito de las mercaderías, otro derecho que el dicho diez por ciento, del mismo modo que lo han solido pagar los ingleses, excepto los derechos de alcabalas, millones y cientos, respecto de los cuales se ha tratado lo siguiente.

2. Privilegios personales.— Se puede presentar el presente abanico de facultades personales privilegiadas, a saber:

a) Privilegio de confiscación de mercaderías.— Se arbitró como legitima esta aprehensión, cuando dichas mercaderías fuesen localizadas en navíos enemigos, aunque perteneciesen a cualquiera de los contratantes. La regulación fué ésta (349):

"Demás de esto se ha pactado y convenido en que todas las mercaderías, de cualquier especie que sean, pertenecientes á súbditos de uno ó otro de los serenísimos contratantes que se encontraron en algún navío enemigo, sean confiscadas juntamente con el buque, aunque no fuesen de la clase de las prohibidas".

b) Privilegio de cambio de domicilio. - (350)

"Entre los mencionados privilegios son los principales los siguientes: la facultad de mudar domicilio a su voluntad, sin que preceda licencia alguna: inmunidad en todo género de reconocimiento, visita y molestia en sus habitaciones y tiendas por razón de sus mercaderías sino en el caso de haber alguna grave sospecha, o de poderse probar algún fraude contra los derechos reales, en cuyo caso tendrá lugar la visita, con la prevención de que esta se haga con la asistencia del cónsul, que será expresamente llamado para esto, no causando en lo demás otra molestia al mercader o á sus mercaderías. Pero si el mercader fuere convencido de que introdujo fraudulentamente las mercaderías, se le confiscarán; y además de esto pagará las costas de la visita, quedando libre su persona y las demás mercaderías. De la misma suerte su Majestad cesárea promete a los súbditos de su Majestad católica las mismas libertades y privilegios en sus reinos.

- c) Privilegio de inmunidad personal.— Además de la inmunidad consagrada en el apartado b) precedentes se amplió aquella parcela con esta temática (351):

"Los súbditos de una y otra parte de cualquier calidad y condición que sean, no podrán ser presos en sus personas, ni por los gobernadores y ministros de justicia por causas de deudas públicas o privadas que no contrajeron ellos, o de las cuales no hubiesen sido fiadores; ni tampoco por semejantes causas podrán ser embargados sus bienes y mercaderías durante la paz, ó sobreviniendo su rompimiento. Y en este artículo se comprende en particular a los capitanes de navío, oficiales de mar y marineros, y también a los buques mayores y menores con toda su carga."

- d) Privilegio de no exhibición de libros de cuentas.— (352)

"Los súbditos de los referidos serenísimos contratan-
tes, que establecieron sus domicilios para sus negocios en los dominios de uno ó de otro, en ninguna parte estarán obligados a manifestar sus libros de cuentas, sino es para deducir alguna prueba; ni con protesto alguno

(351) Arts. 24 y 26, op. cit. pág. 223-4.

(352) Art. 23. op. cit. pág. 223.

será lícito a nadie aprehender dichos libros, ó sacarlos de su poder: los que también podrán escribir en la lengua que quieran, sin que sean obligados a estenderlos en otra.

e) Privilegio de nombrar abogados y procuradores.— (353)

"Será libre nombrar abogados, doctores, agentes y procuradores cuando tuvieren necesidad de ellos; y si quisieren tener propios y particulares corredores, podrán elegir uno ó dos de los que hubiere en el pueblo, los cuales, presentados, serán recibidos y reconocidos por habilitados para procurar por sí solos los negocios que se les cometieren".

f) Privilegio a tener Cónsules.— (354)

"En todos los puertos y principales plazas de comercio en que pareciere bien al emperador y al rey, se establecerán cónsules nacionales que defiendan los mercaderes súbditos de una y otra parte, los cuales cónsules gozarán de los mismos derechos, facultades, libertades e inmunidades de que gozan los de las otras naciones más amigas".

(353) Art. 27. op. cit. pág. 224.

(354) Arts. 28 y 29. op. cit. pág. 224.

"Tendrán estos cónsules particular facultad y autoridad en los pleitos entre mercaderes y capitanes de navios, ó entre estos y sus marineros de conocer de ellos arbitrariamente y decidirlos, ya provengan de soldados y salarios, ya de otra causa, de cuya sentencia no se podrá apelar a los jueces locales, sino a los que fueron constituidos por el príncipe cuyos súbditos son."

g) Privilegio de exoneración del "droit d'aubaine" (355)

"El derecho de extranjería ó otros semejantes, de ningún modo se ha de ejercer con súbdito alguno de los dos serenísimos contratantes; sino antes bien, los herederos de los difuntos que fallecieron en cualquier parte país o provincia en que se hallaron, los sucedan sin impedimento alguno en todos sus bienes muebles e inmuebles, ya hubiesen muerto con testamento o abintestato, según las leyes de suceder y heredar que rijan en la tierra donde se hallaren las herencias. Y en caso que dos o muchos litigaren entre sí sobre la herencia, entonces los jueces del país determinarán el pleito por sentencia definitiva."

h) Privilegio en caso de naufragio.— (356)

"Si una embarcación de alguno de los dos serenísimos contratantes o de algún súbdito suyo, naufragase en - dominios de uno de ellos, en tal cas ni los oficiales del real patrimonio, ni los de retnas podrán pretender derecho alguno sobre ella. Y se prohibirá severamente todo robo a cualesquier personas particulares; antes - bien el señor, ó el magistrado del pueblo más cercano estará obligado a dar todo socorro y ayuda a los per- didos, y a salvar del buque naufragado todo lo que pu- diere, y ponerlo en recaudo. Pero por el derecho de sal- vamento gozarán del cinco por ciento según la estima de las mercaderías, y se les satisfarán los gastos he- chos en tan piadosa obra. Pero si la embarcación, aunque muy maltratada, quedase entera, y no hubieren perecido los oficiales ni los marineros; á estos les tocará el - cuidado de salvar las cosas, á los cuales se dará pron- to socorro y asistencia, suministrándoles por su justo precio lo que necesitaren.

i) Privilegio en caso de ocultación de bienes.- (357)

"Los bienes y otras cualesquier cosas que se ocultaren por temor de confiscación en tiempo de guerra quedarán en pleno derecho a sus propietarios; y ninguno con motivo de que las ocultó contra la prohibición será molestado".

j) Garantías en caso de deudas.- (358)

"También las deudas de súbditos de una y otra parte - contraídas por razón de comercio o por otro contrato, como no sean confiscadas en el tiempo intermedio, se pagarán íntegramente, más sin los intereses, no obstante la guerra que sobrevino.

k) Garantías contra patentes de represalia.- (359)

Las patentes de represalias concedidas en lo pasado por cualquier causa, de una ó de otra parte, se declaran - por nulas; y sus Majestades recíprocamente prometen que no las quieren conceder en adelante en odio y perjuicio de sus súbditos, si no es en caso de manifiesta denegación de justicia; lo que no se tendrá por probado sino

(357) Art. 38. op. cit. pág. 226.

(358) Art. 39. op. cit. pág. 226.

(359) Arts. 41 y 42, op. cit. pág. 226.

después de la demora y dilación de dos años corridos - desde la presentación de la primera demanda; pasados - los cuales, el actor presentará la súplica a su príncipe para obtener la cédula de represalia, quien la comunicará al ministro del otro príncipe, si se hallare en la corte, ó al encargado de negocios. Y después de estos oficios todavía se aguardará la sentencia definitiva otros seis meses, pasados los cuales, por último, se podrán expedir las letras de represalia."

"A los súbditos de su Majestad cesárea y á los de su Majestad católica estrechamente se les prohibirán las comisiones que llaman de armar y patentes de represalias para hacer el corso como enemigos contra los súbditos de alguno de los dos, y que también las reciban de otro príncipe. Y si alguno contraviniere a este artículo, será tratado como pirata, no solo en las provincias contra las que recibió dicha comisión, siendo cogido en el mismo hecho de su corso, sino también en todas las de - aquel príncipe a cuyo dominio estuviere sujeto; y así a la primer queja se procederá contra el tal criminalmente hasta la ejecución."

1) Garantías temporales en caso de guerra.— (360)

"Y aunque se debe esperar que la paz nuevamente establecida entre su Majestad cesárea católica y su real católica Majestad y sus sucesores, reinos y dominios, con el favor de Dios dure muy dilatado tiempo, sin — quebrantarse de una ni otra parte por algún protesto ó ofensa; no obstante como todas las cosas humanas están expuestas a alteraciones, se ha convenido, que si se originase nueva guerra entre sus Majestades (lo que Dios no permita) se conceda el espacio de seis meses a los mercaderes y súbditos que a la sazón se hallen en los puertos, ciudades, dominios y provincias del otro, dentro de los cuales, los dichos, con toda seguridad, así ellos como sus familias, sus bienes, muebles y mercaderías juntamente con sus navíos, su carga, sus capitanes, oficiales de mar y todo lo que les perteneciere, puedan restituirse y volverse a su patria y también cobrar sus deudas legitimamente contraídas para su utilidad y provecho, con sus demás derechos y acciones, sobre lo cual se les administrará pronta justicia".

"Y para que el precedente artículo no quede sujeto a --
escrúpulo alguno de ambigüedad, se declara en la forma
siguiente, conviene á saber: que a los dichos mercado-
res, por espacio de dichos seis meses, se les permitirá
y concederá continuar su comercio, vender, comprar, per-
mutar y transportar por mar y por tierra sus personas
y todas sus mercaderías, sus familias, las de sus fac-
tores y domésticos, sin la menor molestia ni embarazo,
con la misma libertad que pudieran durante la paz, y --
como si no hubiese intervenido la guerra, con tal que
se porten moderada y pacíficamente, y se abstengan de
cualesquier ocultas maquinaciones contra el estado. Po-
drán demandar en juicio a sus acreedores durante el tér-
mino de dichos seis meses, y se les administrará tan --
pronta justicia que se pronuncie la sentencia antes de
la conclusión del término y si fuere posible, se ponga
en ejecución. Y si después de hecha toda diligencia no
se pudiere pronunciar ó ejecutar la sentencia definiti-
va antes de pasado dicho término, se permitirá a los re-
feridos súbditos que estuvieren para ausentarse, ya sean
actores ya reos, sigan por sus apoderados y demanden sus
derechos y acciones a lo que se les debiere en fuerza

de la sentencia ya pronunciada; lo cual se les adjudicará, no obstante en este punto el motivo de la guerra encendida entre los príncipes".

3. Privilegios de comercio.— Bajo este rótulo, deslindamos las siguientes parcelas:

- a) Privilegio de transporte de mercaderías. Para el caso de que cualquier buque que perteneciese a su Majestad Cesárea, arribare a puerto español por motivos de comercio, se reconoció esta facultad (361): "antes bien se prohíbe a los jueces de rentas y a los dependientes de la aduana registrar balones, cajas, toneles ni fardo o lio alguno que traigan mercaderías, ni en el navío ni en la playa, hasta que estén en la aduana; y aún — después de depositadas efectivamente en ella, no se han de abrir sin asistencia del dueño o de su factor, para que pueda el mismo propietario atender mejor a sus intereses, pagar sus derechos y pedir sobre ello certificaciones y cartas de pago, y después volver a recoger sus géneros y hacer se les ponga el sello de la aduana del lugar. Y ejecutado así, podrá el dueño llevar segun

(361) Art. 12. op. cit. pág. 221.

ramente a su casa con mercaderías sin que estén sujetas después a nueva visita; y podrá asimismo transportarlas de una casa a otra, y de un almacén a otro, como sea en el recinto de la población y desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, habiendo participado antes a los arrendadores de alcabalas y cientos si es con el fin de venderlas, en cuyo caso se habrán de pagar los derechos que estuviesen por pagar; o si ora con intento de no venderlas, en cuyo caso se deberán dar al dueño la certificación y el testimonio acostumbrado".

b) Privilegio de determinación del precio de venta.— (362)

"Su Majestad católica no permitirá ni por policía ni por otro algún pretexto se ponga limitación alguna al precio de las mercaderías de los súbditos de su Majestad cesárea, antes les será lícito venderlas al precio que permite el uso común del comercio; y de la misma libertad gozarán los súbditos del rey católico en los dominios de su Majestad cesárea."

(362) Art. 34, op. cit. pág. 225.

c) Privilegio de Comercio con las Indias Orientales (363)

"Se permite a los súbditos y embarcaciones de su Majestad cesárea llevar todo género de frutos y mercaderías de las Indias Orientales a cualquiera de los dominios y estados del rey de España, e introducirlas, con tal que conste por los testimonios de la compañía de las Indias que se ha formado en la Flandes austriaca que son de los países adquiridos y de las colonias o factorías de dicha compañía, ó que hayan provenido de ella; y bajo de esta consideración lograrán los mismos privilegios concedidos a los súbditos de las Provincias Unidas por las reales cédulas de 15 de junio y de 3 de julio del año de 1663, que se publicaron en 30 de junio y 4 de julio de dicho año. Además, su Majestad católica declara que concede a los súbditos de su Majestad cesárea todo lo que fué concedido a los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos -- por el tratado del año de 1648, tanto respecto de las Indias, como de todas las de más cosas que no siendo repugnantes a éste tratado, ni tampoco a la paz concluí

da entre ambas majestades fueren capaces de aplicarse a él".

d) Privilegio de Comercio con las Indias Canarias (364).—

"Por lo que mira al comercio de las islas de Canarias, los súbditos de su Majestad cesárea gozarán de las mismas exenciones que gozan los ingleses y holandeses".

4. Privilegios Fiscales.— En este orden, se pueden ofrecer sistemáticamente las siguientes acotaciones:

a) Privilegio de dulcificación de la presión fiscal.—

Esta benignidad en la carga fiscal, se manifestó, en la aplicación de los tributos vigentes en tiempo del rey español Carlos II, a que alude el art. 11 con este texto (365) :

"Los súbditos de los sobredichos serenísimos contratan_{tes} que se encontraren en algún navío enemigo, sean confiscados juntamente con el buque, aunque no fuesen de la clase de las prohibidas".

Por otra parte, se exteriorizó dicha política tributaria generosa en el establecimiento del módico canon del 10%

(364) Art.37, op. cit. pág. 226.

(365) Art. 11. op. cit. pág. 221.

tanto para las introducciones como para las extracciones de mercaderías. El tenor fué éste (366):

"Demás de esto, como no hay cosa más perjudicial al -- progreso recíproco del comercio que la variedad de derechos con que están recargadas las mercaderías; deseando su Real Majestad católica remediar este mal en toda la extensión de sus dominios de Europa, de algunos -- años a esta parte, a favor de la nación inglesa, consintió y determinó que suprimiendo los antiguos derechos de las mercaderías que en su introducción estracción antes de ahora se solían cobrar, o los que después del fallecimiento de Carlos II SE IMPUSIERON; todo género de derechos se reduzca en todas partes a una suma determinada, hecha la regulación a razón de diez por -- ciento, la que se deberá pagar así por la introducción como por la estracción, hecho el cómputo según la estimación y valor de ellas; y esto se verificará no solo -- en los puertos de Gádiz, Santa María y otros de la corona de Castilla, sino también en otros, como son los de Aragón, Valencia y Cataluña, exceptuadas solamente las

(366) Art. 13. ap.1º y 2º, op.cit. pág. 221-2.

provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, en las cuales se -
pagarán los derechos de entrada y de salida en la mis-
ma forma y modo que hasta aquí se ha observado, y se
observa el día de hoy con los franceses, ingleses y -
holandeses."

"Pero los mercaderes, ó aquellos a quienes pertenecie-
ren los géneros, pagando una vez el diez por ciento en
la introducción o estracción de España, los podrán tras-
portar libremente a cualquier parte por mar o por tie-
rra; ó por los ríos a todas las partes de España, sin
tener que adeudar ningún otro derecho o imposición nue-
va en cualquier puerto o parage adonde llevaron dichas
mercaderías; y para esto bastará manifestar las certi-
ficaciones y despachos en que conste el primer pago y
los fardos con el plomo y marcas acostumbradas. Excep-
tándose, sin embargo, los derechos de alcabalas, cientos
y millones, sobre lo cual se ha hecho una trasacción -
separadamente".

b) Privilegio en materia de alcabalas y cientos (367).-

"Los súbditos de la sacra cesárea Majestad podrán dife-

rir la paga de alcabalas y de los llamados cientos - todo el tiempo que tuvieran sus mercaderías con todo cuidado guardadas en los almacenes; pero si quisieren extraer de allí dichas mercaderías con el fin de trasportarlas a otro lugar del reino, o de venderlas en - aquel mismo, o de llevarlas a su casa, les sea absolutamente permitido lo mismo, con tal que hechos los testimonio convenientes, afiancen la paga de los derechos, la que deberá hacerse dos meses después de la - venta; lo cual ejecutado, se les darán las guías con que puedan transportar las mercaderías, marcadas y señaladas con el plomo, a otra parte, o á cualquier otro lugar o puerto de los dominios de España en Europa, y venderlas por junto, ó como vul garmente se dice - por mayor. Y si algún dependiente destinado a la cobranza de dichos derechos, habiéndosle mostrado y vistos los despchos de la primera paga, y reconocidas las marcas y el plomo, intentare cobrar otra vez los derechos, ó se opusiere al transporte de dichas mercaderías, el tal pagará la multa de dos mil ducados aplicados al erario: lo que se ha de entender solamente de

La primera venta. Pero si el mercader quisiera vender sus géneros por partes o por menudo, deberá igualmente pagar los derechos según los particulares reales -- reglamentos; y los oficiales no les podrán pedir más que quince reales de vellón por el despacho de las -- certificaciones o cartas de pago, de que se habló -- arriba.

c) Privilegio de los Derechos de millones. -- (368).--

La misma regla se ha de guardar respecto de los derechos de millones que se pagan por el pescado y demás víveres; de suerte que no se adeuden ni se puedan cobrar en su introducción todo el tiempo que sus dueños los tengan depositados en los almacenes públicos; pero en caso que las quieran transportar a los pueblos interiores del reino, o venderlas en aquel mismo, ó llevarlas a su casa, entonces se obligarán por escrito, dando la competente fianza, a la paga de dicho derecho de millones, que deberá verificarse a los dos -- meses de la fecha de dicha obligación; lo cual ejecutado, se les concederán sin dilación los despachos ne

cosarios por dichos colectores o administradores del referido derecho, entregándoles las mercaderías marcadas con el plomo y señaladas con los marchamos; y las podrán transportar a cualesquier lugares donde se suelen gastar, y venderlas sin gravámen de nueva exacción de millones. Y si algún dependiente o comisario recaudador de millones, después de habérsele manifestado, los debidos despachos, el plomo, las marcas y señales se atreviere a cobrar otra vez el mismo derecho, o se opusiere al transporte o venta de las mercaderías, el referido pagará la multa de dos mil ducados aplicados como se dijo arriba, el real erario".

d) Exoneración fiscal en ciertos útiles (369).-

"Siendo mercaderías sumamente necesarias los mástiles de navío, bergas y palos para la construcción de bajelos mayores y menores; es nuestra voluntad exceptuarlas de la regla general, de tal suerte que su introducción sea libre de toda exacción de derechos, por cualquier título o motivo que fueren impuestos."

5. Juicio crítico.— Al lado de privilegios personales reci-

procesos, conferidos entre España y Alemania, como los de confiscación de mercaderías, inmunidad personal, no exhibición de libros de cuentas, nombramiento de abogados y procuradores, garantía de cónsules, exoneración del derecho de avería, naufragio, ocultación de bienes, deudas, patentes de represalia, inmunidad temporal en caso de guerra; y los ajustados en materia mercantil en idéntico carácter mutuo, como los libre determinación del precio de venta, o el fiscal de reducción de la presión fiscal, sobresalen con luz propia, los privilegios graciosos -- otorgados exclusivamente por España a favor de los vasallos alemanes, sin contraprestación equivalente de dicho lado, como la trascendente concesión del Fuero de Extranjería o sumisión al Juez Conservador de los alemanes en materia de administración de justicia de vital importancia para los beneficiarios de la misma, por cuanto gozaban de una vía jurisdiccional de signo excepcional, que les confería un status de rango privilegiado. En lo tocante a la temática mercantil, asimismo se confirmó -- sin entrada del "dout des" -- por la corona española a favor de la germánica, los privilegios en el transporte de

mercaderías, en el comercio de las Indias Orientales y con las Islas Canarias, todo ello de gran repercusión económica en el tráfico de los súbditos teutones para con nuestra patria. Por último no silenciaremos, las sustanciosas ganancias que por este Tratado, recibieron únicamente los almanes, en el campo fiscal, como en lo relativo al pago de alcabalas y cientos, en los derechos de millones, y en la introducción libre de tributos, de utensilios y accesorios de naves mercantes. Debe inferirse consecuentemente que la actitud española, pasó de una lógica equidad contractual, a una diáfana generosidad hacia los intereses de la nación alemana, sin que ésta llegase a alcanzar dichas cotas de altruismo político y diplomático.

Tratado en España y Dinamarca - suscrito en el Real Sitio de San Ildefonso el 18 de julio de 1.792 - de amistad, navegación y comercio. (370)

1. Introducción.

Se aglutinan en este Tratado 28 preceptos y un Preámbulo. En los primeros se instrumenta una teoría de concesiones de variada índole, jurisdiccionales, mercantiles, fiscales, personales, que seguidamente exponemos con arreglo a la sistemática que impera en páginas precedentes. En el segundo, se concreta la nueva entente entre las dos potencias en esta declaración (371):

"Hallándose enteramente dispuestos los ánimos de los serenísimos y muy poderosos príncipes don Felipe V, por la gracia de Dios, rey católico de España y de las Indias, y Cristiano VI, por la gracia de Dios, rey de Dinamarca y de Noruega a restablecer, cultivar y afianzar la antigua amistad y buena inteligencia que ha permanecido entre los reyes sus predecesores; y deseando estrecharla y perpetuarla mayormente entre ellas y sus herederos y sucesores, han tenido por más conveniente y seguro al

(370) CANTILLO, A. op. cit. pág. 360-67.

(371) Preámbulo, op. cit. pág. 360-1

logro de tan saludable intento de restablecer una libre y perfecta correspondencia entre sus respectivos vasallos, arreglando sus intereses particulares, por lo que toca al comercio, con pactos y condiciones capaces de contribuir a un acrecentamiento de navegación y marina, y de prevenir las diferencias que pudiera ocurrir".

Existe una perfecta coherencia entre el texto de dicha manifestación y el significado del rótulo arriba subrayado. Comencemos por deslindar los distintos órdenes de privilegios:

2. Tipología de Privilegios.

A nuestro modo de ser, pueden desglosarse con arreglo a esta clasificación:

2.1. Privilegio jurisdiccional.- El Fuero de Extranjería stricto sensu.

El Juez Conservador.- ¿Dónde encuentra apoyatura la aplicación de los daneses de un iudex propio? A prima facie, desde la óptica de la doctrina científica, autores como Antonio Riquelme (372) incluyen dentro de las potencias beneficiarias de aquel Fuero de Extranjería, a la nación danesa, si bien no cita el Tratado que ampare dicha tesis. Por otro lado, parece cochar por tierra aquel criterio afirmativo, lo pactado en el Tratado (373):

(372) Elementos de Derecho Público internacional. Tomo I.1849, pág.379.

(373) Art. 21. op. cit. Pág. 366.

"No habiendo en España jueces conservadores para conocer y juzgar de las causas civiles y criminales de las naciones domiciliadas, las dos Majestades han estipulado y convenido de dar las más eficaces órdenes a todos los jueces de sus reinos que se hallan encargados de la administración de la justicia para que en todas las causas que sobrevinieren y siguieren sus respectivos súbditos, la administren y hagan ejecutar sin la menor dilación, inclinación, favor y afecto para las partes concurrentes ante ellos, y se reciban las apelaciones en el consejo de justicia".

El texto no puede ser más rotundo, "no habiendo en España jueces conservadores para conocer y juzgar de las causas civiles y criminales de las naciones domiciliadas". ¿Respondía dicho tenor a la realidad jurisdiccional española? Un examen comparativo con los tratados casi coetáneos, otorgados con otras potencias, nos inducen a pensar y sostener lo contrario. El tratado con Dinamarca negador explícito en su artículo 21 de la existencia del Fuero de Extranjería en nuestra patria, data del año 1742, pues bien, con anterioridad bien reciente a dicha fecha, existen otros Pactos Internacionales que sostienen la vigencia de la figura del Juez Conservador, así por ejemplo, el Tratado de Paz y Amistad con Portugal celebrado en Utrech el 6 de febrero de 1715, el ajustado con

Inglaterra también en Utrech el 14 de diciembre de 1.715, o el concertado con Alemania el 1 de mayo de 1.725. La glosa afectuada en páginas anteriores de dichos Tratados, y en particular del Fuero de Extranjería, que en los mismos se contempla, nos releva de todo punto, de insistir sobre dicho tema. No obstante, podría el estudioso arguir — y con razón — que con posterioridad a dichos Acuerdos se pudo derogar aquella vía excepcional de impartición de justicia, con lo que sería preciso aceptar la redacción literal del Tratado de 1.742 y consecuentemente la tesis por él sustentada. Frente a esa suposición razonable, habremos de enfrentar el peso dialéctico de los Tratados suscritos con Francia el 15 de agosto de 1761, con Portugal el 10 de febrero de 1.763 y 24 de marzo de 1778 — citados como mero ejemplo —, y en los que se reconoce abiertamente la existencia para goce de franceses y portugueses, del Fuero de Extranjería. Tenemos, pues, Tratados inmediatamente anteriores al de Dinamarca de 1.742, y así mismo otros posteriores, que confirman la vigencia del Juez Conservador en España, ¿qué ocurre entonces? ¿Existió una fecha o un período en torno a 1742 en que se extinguieron en España los Jueces conservadores? No conocemos la disposición — derogatoria de esa jurisdicción en que encontrase base legal el Pacto danés. ¿Qué exégesis había que otorgarle pues, al ya citado art. . 21, negador del Fuero de Extranjería en España en 1742? A la luz de

expuesto, será preciso reducir su hermanáutica a una mera "declaración de propósitos", más que a una auténtica visión de la realidad jurídica española. Pensemos que los Jueces Conservadores no -
 desa parecieron en virtud de una declaración de intenciones, y -
 que el Fuero de Extranjería, bajo un tinte no civil, sino militar, subsistió todavía en el Real Decreto de Extranjería de 1.852, al amparo de las figuras de los gobernadores militares de las plazas marítimas y los Capitanes Generales, conforme recoge el artículo 30 del mentado Real Decreto, y que asumen el papel de neo-jueces conservadores en pleno siglo XIX.

Un argumento contundente que robustece nuestro punto de vista, se obtiene del propio pacto de 1742, esto es, de la cláusula de nación más favorecida que se aplicó a la nación danesa, a tenor de lo -
 dispuesto en el artículo 10, que dice (374):

"Se ha acordado y convenido que los súbditos de ambos reyes -
 tendrán y gozarán reciprocamente en las tierras, mares, puer-
 tos, playas y demás surgideros en Europa de todos los privi-
 legios, seguridades, libertades e inmunidades que han sido -
 concedidos y se concederán en lo venidero de una ó otra parte
 a la nación más amiga y favorecida".

(374) Art. 10. op. cit. pág. 364.

Si a los daneses se les habrán de atribuir los mismos privilegios que antaño - y en el futuro - se otorgaban a la nación más amiga, "a factiori" entrará en juego en beneficio de aquellos, el Fuero de Extranjería existente para los portugueses e ingleses en 1715, y para los alemanos en 1725, a los que hicimos referencia en párrafos precedentes; todo ello, sin necesidad de remontarnos a los Capítulos y Tratados instauradores de aquel Fuero del siglo XVII en busca de una mayor cobertura legal.

2.2. Privilegios Personales. - Cabe verificar las siguientes acotaciones:

A - Protección del ius communicationis. - Observamos varias vertientes; a saber:

1 - Derecho marítimo de recalada (375) -

"Los navíos de una y otra parte tendrán licencia de echar la ancla, cuando la necesidad lo requiera, en cualquiera - playaperteneciente a uno ó otro soberano, sin que se hallen precisados de entrar en ninguno de los puertos para donde - no fuesen destinados; y en caso de que por borrasca, por - huir de los enemigos ó por otro accidente se viesen obligados a ello, les será libre de volver a la mar cuando quisiesen (como ya se ha dicho) sin abrir sus escotillas, ni es-

(375) Art. 5. op. cit. pág. 362.

poner en venta su carga, con tal de que dichos navíos no -
 vengan consignados a alguno de los puertos del enemigo, y
 que no les lleven cosas prohibidas en los reinos respecti-
 vos por ser de contrabando, sobre que deberá haber suficien-
 tes pruebas; y cuando echaren el ancla o entraren en los -
 puertos, según se ha expresado, no serán visitados ni mo-
 lestados; bastando en tal caso de que manifiesten sus pasa-
 portes, cartas de mar y el inventario de la carga, los que
 reconociendo ser legítimos y arreglados por los oficiales
 de los dos soberanos respectivamente, para que puedan salir
 sin detención."

Como puede apreciarse las únicas limitaciones se fundamenta-
 ban en impedir el contrabando de aquellos navíos o que comer-
 ciasen con el enemigo.

- 2 - Límites en la aproximación de buques de guerra - El control
 mediante buques de guerra del tráfico marítimo de buques de
 la otra parte contratante, se arbitró armonizando tanto el
 interés de los primeros en prevenir el contrabando, como la
 seguridad de los segundos (376).

"Siempre que los navíos pertenecientes a los súbditos de -

los dos contratantes se encontraren en la mar con navíos de guerra, flota de uno á otro, no podrán estos acercarse de los otros más que á la sola distancia de tiro del cañón, y podrán enviar sus botes o chalupas a bordo de los tales navíos, en donde no entrarán más que dos o tres hombres para reconocer los pasaportes y cartas de mar, -- que les mostrarán los capitanes o patrones, expedidos según el formulario que irá inserto al fin de este tratado; por las cuales debe constar, no solo su destino y carga, más también el domicilio y residencia del capitán o patrón y aún del navío, a fin de que por este medio se pueda reconocer si trae o no mercaderías de contrabando, y que se tenga suficiente noticia de la naturaleza y calidades del navío, como también del capitán o patrón; a los cuales pasaportes y cartas de mar, siendo legítimas, se deberá dar entera fé y crédito; y para que se pueda venir en conocimiento de su validación, y no puedan ser falsificadas de ningún modo, se darán provisionalmente algunas contraseñas de parte de cada uno de los dos reyes respectivos; y en caso de que en los mencionados navíos se hallasen, por los medios citados, algunas mercaderías vedadas y del número

de las que se llevan declaradas por de contrabando, serán descargadas, denunciadas y confiscadas ante el juez del almirantazgo o cualquiera otro competente; sin que por esta razón el navío o los demás efectos y mercaderías permitidas que hallasen, puedan ser detenidos ni confiscados".

B - Derecho a la intimidad en casas y haciendas. (377)

"Los súbditos de los dos reyes contratantes establecidos en sus respectivos dominios para hacer comercio, no serán inquietados en sus casas y almacenes sino en el solo caso que haya prueba o suficientes indicios de haber defraudado los derechos reales, los que deberán satisfacer; y en este caso y otros que pueden acontecer de semejante naturaleza, los jueces o corregidores - que entendieren de la percepción de estos fraudes, procederán con la concurrencia del cónsul donde lo hubiere, observando la costumbre establecida, según las leyes y ordenanzas; y si hicieren pesquisa contra algún criminal que se hubiese refugiado a casa de algún cónsul o comerciante, procederá el juez según perteneciere a derecho y a la justicia que debe observar en tales casos".

C - Protección jurídica. - Se reguló con acusada amplitud. Deslinda

(377) Art. 14. op. cit. pág. 365.

remos las siguientes parcelas:

1 - Seguridad personal (378)

"No podrán ser arrestados los súbditos de una y otra parte por la justicia por deudas particulares que no hubiesen sido contraídas por sí mismos, ó de su parte por aquellas en cuyas casas y comercio se hubieran subrogado y que no se hubiesen obligado determinadamente a pagar; ni por razón de esto se podrán embargar y secuestrar sus papeles; si bien podrá la justicia poner en arresto a tales sujetos por causas criminales, siempre que hayan incurrido en ellas, procediendo hasta la conclusión según las leyes de los reinos respectivos, y en la conformidad que lo expresa el antecedente capítulo o artículo".

2 - Derecho a servirse de abogados y procuradores - (379)

"Los mercaderes y súbditos que se hallaren establecidos en los estados de los serenísimos reyes podrán servirse de abogados, procuradores, escribanos, agentes y corredores del número y aprobados a su voluntad; y encargales sus pleitos, negocios y diligencias con la asistencia de los

(378) Art. 15. op. cit. pág. 365.

(379) Art. 19. op. cit. pág. 365.

jueces ordinarios en caso de necesidad y que la parte litigante lo pida. Y para mayor conveniencia de los enunciados súbditos, comerciantes en los reinos y estados de uno y otro monarca, se podrán establecer cónsules en los parages y lugares, de común acuerdo, y de la nación de dichos súbditos: los cuales cónsules gozarán de todos los derechos libertados y exenciones que pertenecen a este empleo con - tal de que procedan de forma que ninguna de ellos bajo del menor pretexto no intente por sí mismo o por interpuestos personas cosa que sea contraria al bien del Estado donde reside, ó perjudicial al servicio del rey; porque siempre que hicieren lo contrario estarán sujetos al castigo que - merecen."

3 - Vía voluntaria del Consulado (380)

"Nombrados los cónsules en el modo explicado podrán conocer arbitralmente de las diferencias que pudieren sobrevenir entre los comerciantes y los dueños de los navíos de su nación, ó entre los capitanes y patrones y sus propios marineros, ya sea a causa de sus viajes, gastos y cuentas, o ya por razón de sus salarios para ajustarlos amigablemente;pe

ro sin embargo, aquél o aquellos que no quisiesen someterse a su arbitrio podrán recurrir a los jueces ordinarios del príncipe, cuyos vasallos fueren".

En todo caso, el derecho de impetrar el auxilio del Consulado respectivo, ha de circunscribirse únicamente a la vía amistosa o de amigable componedor, pues siempre quedaba en pie la vía contenciosa ante los Tribunales de justicia.

- 4 - Exoneración del derecho de aubana. - La odiosa prohibición de transmisión mortis causa a los extranjeros, - desconocida en España - y que tanto predicamento tuvo en otros países en el medievo -, no se aplica consecuentemente en este tratado, al amparo de esta normativa: (381)

"Los bienes y efectos de los súbditos de un rey, que vinieron a morir en los países, tierras y estados del otro, serán conservados para los legítimos herederos y sucesores, salvo siempre y reservado el derecho de tercero".

La instrumentación de esa política sucesoria, se arbitró con estas medidas cautelares tendentes a poner a buen recaudo el caudal relicto del extraneum: (382)

(381) Art. 22. op. cit. pág. 366.

(382) Art. 23. op. cit. pág. 366.

"Se hará inventario de los bienes y efectos, como también de los papeles, cartas, escritos, libros de cuentas de los súbditos del rey de Dinamarca que fallecieron en los estados del rey católico ab intetato; y este inventario se hará ante el juez ordinario y su oficial, ó ante un escribano en presencia del cónsul en los parajes donde los hubiera, y donde no en presencia de diputado de la nación y dos comerciantes, y en falta de todo esto se pondrán los efectos muebles, y generalmente cuanto hubiere quedado, depositados jurídicamente, a fin de que sean custodiados y conservados íntegramente para los propietarios en conformidad de lo expresado en el artículo precedente."

5 - Inmunidad temporal ante el "casus belli" (383)

"Si aconteciese en lo verdadero alguna diferencia entre los soberanos respectivos que pudiese poner en riesgo el comercio recíproco entre sus vasallos, se dará noticia y el término de seis meses para que puedan poner a cubierto ó retirar su navío, mercaderías y efectos sin que durante este tiempo se les pueda hacer molestia ó vejación alguna, ni detener o embargar sus personas ni bienes".

(383) Art. 26. op. cit. pág. 366.

6 - Auxilio en naufragio (384).-

"Si llegase el caso de que un navio perteneciente a uno - de los altos contratantes, ó á alguno de sus súbditos res- pectivos naufragase a par de las costas de uno ú otro rei- no, se dará por la justicia del país donde el caso sucedie- se todo socorro y asistencia a los que padeciesen este por- juicio para salvar, si fuese posible, el navio lastimado, y ponerle en seguro para entregárselo integramente al ca- pitán, patrón o sobrecargo que se hallase, sin más carga - que la de pagar el trabajo y los gastos que se hubiesen - hecho y causado para salvar las mercaderías y efectos: cu- ya entrega a las personas referidas se deberá hacer por in- ventario, del que dejarán recibo para que conste en todos los tiempos; y en caso que el dicho capitán, patrón o sobre- cargo haya perecido, entonces el depósito de los efectos - salvados deberá hacerse formalmente por las justicias del territorio por su cuenta y riesgo bajo de fianza abonada, para entregarlos después a los legítimos herederos o inte- resados, en la forma enunciada".

Es sumamente trascendente esta tutela jurídica habida cuen-

ta la proliferación que en Europa en los siglos XVIII y - XIX, se desarrollaron casos de naufragios, provocados desde tierra mediante falsas señales luminosas.

- 7 - Exención del servicio militar. - Al lado de las exenciones de alojamientos, cargas personales o patrimoniales y curadoria, se reguló la exención del extranjero de la prestación del servicio militar por mar y tierra, con esta fórmula: (385)

"Los súbditos de ambos soberanos serán exentos de los países respectivos de alojamientos, cargas personales o patrimoniales, de toda imposición, curadoría, tributos ordinarios y extraordinarios y de todo servicio militar por - mar y tierra; pero esta exacción no se debe entender, sin embargo, con los de las artes mecánicas y gentes de tienda abierta, solo si á los comerciantes por mayor, súbditos de los dos soberanos respetivos".

2.3. Privilegios de comercio.

Vislumbramos dos, a saber:

- A - Privilegio de Libre Comercio. - La política mercantil instaurado entre Dinamarca y España, consistió en reconocer la

(385) Art. 18. op. cit. pág. 365.

fórmula genérica del libre comercio, entre ambos países.

El cauce legal que lo admitió se redactó con este tenor

(386):

"Habrá un comercio libre entre los súbditos de una y otra parte, y podrán ir y venir, así por mar y otras aguas, como por tierra (excepto los países y mares de las Indias españolas cuyo comercio está prohibido a la nación más amiga y favorecida) sin que necesiten de pasaportes ni de licencias particulares, detenerse, traficar y comerciar con sus propios bajeles, productos, efectos y manufacturas, y volver a sus puertos con las que cambiaren o compraren, conduciéndolas y cargándolas de un país a otro, pagando en parte los derechos acostumbrados, o los que por sus Majestades católica y dinamarquesa o sus sucesores se impusieren, y en la misma conformidad que estos derechos se pagaren por las naciones más amigas y favorecidas, observando las leyes, estatutos, costumbres y derechos de los países respectivos; entendiéndose que de los estados de su Majestad dinamarquesa, puertos y ríos de su dominación, se exceptúan las tierras distantes del Norte, como son la

(386) Art. 1. op. cit. pág. 361.

Islandia, Forroe, las colonias que su dicha Majestad posee en la Groenlandia, Norland y la Finmarcken, puesto que las naciones más amigas y favorecidas no les es permitido de ir.

B - Privilegio de no exhibición de libros. - (387)

"Los expresados súbditos de una y otra parte no podrán ser obligados a presentar sus libros y papeles de cuentas sino cuando convenga evidenciar alguna circunstancia, o evitar pleitos y controversias, y para hacer las pruebas necesarias no se podrá detenerlos ni quitárseles a menos milite una razón muy urgente, y les será lícito tenerlos en la lengua que quisieron".

2.4. Privilegios fiscales.

Hallamos una trilogía de ventajas económico-fiscales y de reducción de trámites aduaneros:

A - Exoneración fiscal (388)

"Los palos de navíos, antenas y otras maderas propias para la construcción de bajeles gruesos y pequeños, como también la brea, alquitrán y cordaje que los súbditos de su majestad din

(387) Art. 16. op. cit. pág. 365.

(388) Art. 12.1. op. cit. pág. 364.

marquesa trajeren en navios de su bandera hacia los puertos de España, gozarán de libre entrada sin que paguen derecho alguno".

Si bien es razonable dicha exención, al no perseguirse lucro lógicamente con aquella entrada no es desdeñable su montante.

B -- Reducción de tarifas.— Con carácter de concesión exclusiva -- de España hacia Dinamarca, nos tropezamos con una reducción del 50% de las tarifas vigentes, en materia de introducción. De pescados secos o salados. El texto es éste (389):

"Concede a más de esto el serenísimo rey católico a favor de los súbditos dinamarqueses que cuando estos traigan en sus -- propios navios pescados secos o salados de sus propios países, y cogidos en los estados y sobre las costas del dominio de su Majestad dinamarquesa, y que fueren certificados por -- tales, no pagarán más que la mitad de derechos que ya están arreglados para este género".

C -- Reducción de trámites aduaneros.— Se impusieron ciertas restricciones a los capitanes de buques en aras de controlar el contrabando; de una parte, la obligación de presentar la de-

claración de las mercaderías transportadas; de otro lado, la prohibición de abrir las escotillas antes de haber obtenido la licencia oportuna y de que los guardias de la aduana hayan pasado a bordo. No obstante, estas limitaciones, se procuró - al máximo ocasionar las mínimas molestias en los trámites aduaneros, acertando estos, en beneficio de una mayor fluidez en - el tráfico mercantil. El tratado lo desarrolla así (390):

"Los capitanes, patrones de los navíos marchantes que entren en un puerto de alguno de los dos altos contratantes para hacer el comercio, darán ante todas cosas una declaración de las mercaderías que quisiesen descargar o vender, sin que puedan abrir sus escotillas hasta que hayan obtenido la licencia, y que los guardas de la aduana hayan pasado a bordo; y en presencia de ellos y con los conductores destinados descargarán las mercaderías contenidas en la declaración, transportándolas a la aduana para que los propietarios o sus comisionarios las despachen dentro de tres meses ó antes si quisiesen, pagando los derechos establecidos o que se establecerán, como ya se ha dicho, y se les entreguen los efectos según costumbre".

(390) Art. 9. op. cit. pág. 364.

3. JUICIO CRITICO.

Si bien a lo largo del articulado, predomina una justa paridad, en materia de concesión de privilegios, exenciones e inmunidades (de los distintos súbditos españoles y daneses, cuando residan en el territorio de la otra parte contratante, no es menos cierto, que en el apígrafe 2.1. al estudiar la figura del Juez Conservador, llegábamos - con la aportación de datos y argumentos históricos - al convencimiento de que dicho iudex existió en beneficio de los vasallos daneses, sin que por otra parte tengamos conocimiento de su aplicación recíproca a los súbditos españoles en aquel país nórdico. ¿Por qué no se daba en este punto la igualdad de trato que un tratado de amistad obviamente debía comportar? ¿Debemos atribuirlo a la proverbial generosidad o hidalguía española hacia lo foráneo? Entendemos que la concesión de un juez especial para juzgar de las litis en que pudieran subsumirse aquellos - regnícolas, es de tal importancia al no quedar sujetos a la jurisdicción ordinaria, que más que una simple benevolencia hispana, alcanzó grados de quijotismo políptico español. No conviene preterir además, que al glosar la exoneración del derecho de aubana, como odiosa prerrogativa estatal que no se aplicaba en España, ni por ende se instrumentó su vigencia en el tratado, sin embargo, en art. 23. del mismo se arbi- traron una serie de garantías de protección de los bienes del danés -

fallecido en España, sin que por contra se adoptasen idénticas cautelas respecto del caudal relicto del español muerto en aquel país nórdico. La disparidad de trato es obvia (391)

"Este Tratado aunque recibió la ratificación de las dos cortes, la de España se resistió a su ejecución no obstante las vivas instancias. En un despacho que tiempos adelante escribía el ministro de Estado al encargado de negocios de su Majestad en Copenhague, explicando las razones del rompimiento de 1.753 entre los dos gobiernos se decía lo siguiente:

"Durante la residencia de Wense en esta corte, una de sus colicitudes fué poner en práctica el tratado de comercio y navegación que hicieron y firmaron año de 1742 Campillo y el conde Doku, y casi siempre que han hablado los ministros de Dinamarca en París de volver a la buena correspondencia con nosotros, han insinuado su mira de que tenga efecto. Los ministros del rey padre, incluso el mismo Campillo, ni los de su Majestad en su reinado, han querido reconocer este tratado, suponiéndole perjudicial y alegando haber sido hecho por sorpresa, fuera de la vía regular, jamás publicado ni llevado a efecto. En la secretaría de estado no se ha visto hasta que ahora se ha pedido a la de hacienda. En el artículo 12º, hay una condición impracticable: dice que los daneses no pagarían más que la mitad de los derechos que otras naciones por los pescados secos que con-

(391) Nota. op. cit. pág. 367.

dujesen. Con las demás está pactado que han de ser tratadas como la más favorecida; pretenderán por consiguiente que se les baje la mitad de los derechos en los pescados, como a los daneses. Supuesto que se les conceda, solicitarán siempre los daneses pagar la mitad que los otros, y así jamás será practicable el pacto. En los demás artículos no hay cosa tan chocante a primera vista, pero merece examinarse bien el todo.

Tercer Pacto de Familia entre los Reyes de España y Francia, Carlos III y Luis XV, concluido y firmado en París el 15 de agosto de 1.761. (392)

1. INTRODUCCION.

Lo que más destaca en este tratado, es no solo la exaltación de los lazos familiares que unen a ambas coronas, sino la reiteración en proclamar la identidad sanguínea de las dos ramas borbónicas, la matriz o francesa, y la filial o española. Al conjuro de esa política fraternal, se entrelazan en el texto una serie de distintos privilegios jurisdiccionales, personales y fiscales que acataremos por separado, sin perder por ello la visión de conjunto. Comenzamos por exponer la temática relativa a la Declaración de la unidad familiar, que se exteriorizó de la manera siguiente:

2. Política del "alter ego" estatal. Declaración de amistad e identidad de vínculos familiares.

Se recoge con toda devoción en este Pacto de Familia, una doble obligación ética y jurídica, a cargo de ambas Majestades Católica y Cristianísima; por un lado se comprometen Carlos III y Luis XV a "hacer permanentes

e indisolubles, tanto para sí como para sus descendientes - las mutuas - obligaciones que traen consigo naturalmente el parentesco y la amistad", el insigne modo de pensar de Luis XIV de Francia, de gloriosa memoria, - su común y augusto bisabuelo" (393) No se agota ni mucho menos, con aquella declaración, el lógico anhelo de robustecer las relaciones diplomáticas, por parte de dichas testas coronadas - política coherente con la - significación de dos dinastías de tronco común y comprensible de todo punto, desde la óptica humana toda vez que se agraga (394):

"El rey católico y el rey cristianísimo declara que en virtud de sus estrechos vínculos de parentesco y amistad, y en consecuencia de la unión que contratan por el presente tratado, mirarán en adelante como enemiga común la potencia que viniere a serlo de una de las dos coronas".

Que el Pacto que glosamos revestía caracteres de exclusividad entre las dos familias reinantes en España y Francia se infiere de este tenor (395):

"Debiendo ser considerado el presente tratado, según se anuncia en el preámbulo, como un pacto de familia entre todas las ramas de la augusta casa de Borbón, ninguna otra potencia que las que fueren -

(393) Preámbulo, op. citado, pág. 468.

(394) Art. 1. op.cit. pág. 469.

(395) Art. 21. op. cit. pág. 471.

de esta sangre podrá ser convidada ni admitida a acceder a ella"

2.1. Instrumentación de la política de Familia.

a) Mantenimiento de límites territoriales.

Se consolida el statu quo geográfico de dichas sociedades políticas, con esta solemne determinación de invariabilidad de límites territoriales (396):.

"Los dos monarcas contratantes se conceden recíprocamente en la forma más auténtica y absoluta la garantía de todos los estados tierras, islas y plazas que poseerán en cualquier parte del mundo, sin reserva ni excepción alguna, cuando por primera vez, después de este tratado, se hallen uno y otro en plena paz con las demás potencias, y tales cuales entonces estuvieren sus respectivas posesiones".

b) Unidad política ante el casus belli.

La identidad política y diplomática entre Estados, cobra especial significación en el suficiente de entrada en guerra de cualquiera de ellas; y es entonces cuando se desdobra la virtualidad de una Alianza política. Es en el terreno comprometido de la praxis bélica, cuando se decantan las excelencias de la operatividad de las promesas solemnes de amistad y mútua aguda interestatal. No

(396) Art. 2. op. cit. pág. 469.

tiene, pues, nada de extraño - sino todo lo contrario - que se arbitrase una promesa de mútua asistencia en caso de ser agredida alguna de las dos potencias. La plasmación de esa teoría de recíproca ayuda se alumbra de este modo: (397)

"Aunque la garantía mútua e inviolable que contratan sus Majestades católica y cristianísima debe ser sostenida con todo su poder y que lo entienden así, conforme al principio sentado - que hace la basa de este tratado de quien ataca a una corona - ataca a otra; sin embargo han juzgado a propósito las dos partes contratantes fijar los primeros socorros que la potencia - requerida tendrá obligación de suministrar a la potencia demandante".

c) Delimitación de los auxilios bélicos. - Podemos deslindar dos tipos de asistencias militares:

1. Ayuda marítima. Se pergeñó con el compromiso de tener a disposición de la corona ofendida por la fuerza de las armas doce navíos de línea y seis fragatas armadas, preparadas en el plazo máximo de tres meses a contar desde la petición de ayuda. (398)

(397) Art. 4. op. cit. pág. 469.

(398) Art. 5. op. cit. pág. 469.

2. Ayuda terrestre. Se concretó su "quantum", distinguiendo las parcelas de infantería y caballería, y matizando su repercusión numérica a tenor de la importancia del ejército de cada país. Venimos dicha delimitación (399):

"La potencia requerida tendrá en el mismo tiempo de los tres meses a disposición de la potencia demandante, si fuese España la potencia requerida, diez mil hombres de infantería y dos mil de caballería; y si lo fuese la Francia, diez y ocho mil hombres de infantería y seis mil de caballería, en cuya diferencia de número se mira solo a las que hay entre las tropas que mantiene la España y las que la Francia tiene actualmente en pie; pues si llegase a ser igual, entonces será también igual la obligación. Y este número de tropas le ha de juntar y avocar la potencia requerida, sin salir desde luego de sus dominios en el paraje de ellos que la demandante señalase, para estar más a la mano de la empresa ó del objeto con que las pida: y como haya de proceder a este objeto - embarco y navegación o marcha de tropas por tierra, todo lo ha de costear la potencia requerida, dueña en propiedad del socorro".

(399) Art. 6. op. cit. pág. 469.

d) Identidad de criterio en las conclusiones de Paz. (400)

"Sus Majestades católica y cristianísima se empeñan y se prometen para el caso de hallarse ambos en guerra no escuchar ni hacer proposición alguna de paz, no tratarla ni concluirla con el enemigo, o los enemigos que tuviesen, sino de un acuerdo y consentimiento mútuo y común y comunicarse recíprocamente todo lo que pudiese acaecer a una á a otra de las dos potencias, en particular sobre el objeto de la pacificación; de suerte - que tanto en guerra como en paz cada una de las dos coronas mirará como propios los intereses de la otra su aliada".

e) Prorratéo de pérdidas guerreras. (401)

"Siguiendo: estos principios y los empeños contraídos en su - consecuencia, han convenido sus Majestades católica y cristianísima que cuando se trate de terminar con la paz la guerra - que hayan sostenido en común, compensarán las ventajas que una de las dos potencias haya podido lograr con las pérdidas que - haya padecido la otra; de forma que tanto sobre las condiciones de la paz como sobre las operaciones de la guerra, las dos monarquías de España y Francia, en toda la extensión de sus domi

(400) Art. 17, op. cit. pág. 471.

(401) Art. 18. op. cit. pág. 471.

nios, han de ser considerados y han de obrar como si no formasen más que una sola y misma potencia".

f) Notificación recíproca de otras alianzas.

Se estrecharon todavía más los vínculos fraternales, anteriormente descritos -- de por sí ya muy explícitos -- con esta declaración de simbiosis política: (402)

"Los altos contratantes se confiarán recíprocamente todas las -- alianzas que pudiesen formar en lo sucesivo, y las negociaciones que pudiesen seguir, sobre todo las que tuviesen alguna conexión con sus intereses comunes, y en su consecuencia sus Majestades -- católica, cristianísima y siciliana mandarán a los respectivos -- ministros que mantienen en las demás cortes extranjeras que vivan entre sí con la más perfecta inteligencia y la mayor confianza a fin que todas las operaciones hechas en nombre de cualquiera de las tres coronas, se encaminen a su gloria y a sus comunes ventajas, acrediten y sean una prenda constante de la intimidad que sus dichas Majestades quieren establecer y perpetuar entre sí".

3. PRIVILEGIO JURISDICCIONAL. El Fuero de Extranjería stricto sensu.

El Juez Conservador.-

Dedúcese su existencia "a contrario sensu" de lo preceptuado en el Trg

(402) Art. 26. op. cit. pág. 472-3.

tado con estos términos: (403)

"Si los altos contratantes hiciesen en adelante algún tratado de comercio con otras potencias y los acordasen o les hubiesen ya acordado el tratado de la nación más favorecida en sus puertos ó estados, se provendrá a dichas potencias que el trato de los españoles en Francia y en las Dos Sicilias, el de los Franceses en España y también en las Dos Sicilias, y el de los napolitanos y sicilianos en España y Francia sobre el mismo objeto es exceptuado en esta parte, y no debe ser citado ni servir de ejemplo, pues sus Majestades católica, cristianísima y siciliana no quieren que otra alguna nación participa de los privilegios que hallan por conveniente hacer recíprocamente gozar a sus respetivos vasallos."

Si en Tratados anteriores— que ya hemos comentado con anterioridad— admitíase la aplicación de la cláusula de nación más favorecida, con una exégesis amplia y generosa, que no restaba fuerza, ni expresividad a la misma, la circunstancia de que en el presente se declare de que los súbditos de los países beneficiarios de tal cláusula, no obtendrán el mismo trato que los españoles en Francia o los franceses en España, "pues ambas majestades no quieren que otra alguna nación participe de los privilegios que hallan por conveniente hacer recíprocamente gozar a sus res—

(403) Art. 25. op. cit. pág. 472.

pectivos vasallos", nos lleva a la conclusión de que si fué normal apli-
car el Fuero de Extranjería por vía de la citada cláusula - como se ha
visto en Pactos ya reseñados y glosados - la presente capiti diminutio
del status de otras naciones frente a las recíprocas concesiones fran-
cesas y españolas, debe movernos a interpretar lógicamente con una ma-
yor generosidad y amplitud las ventajas otorgadas mutuamente por éstas
últimas, lo que "mutatis mutandi" comporta que consideremos englobada
dentro de aquellas, la figura del Juez Conservador para los franceses
residentes en España, pese a que no se determine explícitamente en el
Pacto de Familia que rotula este comentario. En la doctrina española
apoya esta tesis, Riquelme cuando manifiesta "que el principio adopta-
do con sobrada ligereza e indeterminación y no sin consecuencias poste-
riores harto perjudiciales para la España, de pactar con algunas poten-
cias la concesión de considerar a sus súbditos como los de la más privi-
legiada y favorecida, hubo de hacer extensivo a los franceses, el privi-
legio del juez conservador concedido a los ingleses, pues en el pacto
de familia de 15 de agosto de 1.761 ya se hicieron extensivos a esta -
potencia los tratados de 1667, 1713 y 1715, celebrados con Inglaterra"
(404). Coherentemente si se admitía el Fuero de Extranjería para vasa-

(404) RIQUELME, A. "Elementos de Derecho Público Internacional". Tomo I
1849, pág. 378.

llos de países no vinculados a España, con lazos tan estrechos como los existentes entre ésta y Francia, con mayor razón tenían que gozar de — aquel, los súbditos franceses.

4. PRIVILEGIOS PERSONALES.

Adotamos dos clases de privilegios:

a) Inaplicación recíproca del "droit d'aubaine".

El Tratado la exterioriza con este tenor: (405)

"Para cimentar más esta buena inteligencia y ventajas recíprocas entre los súbditos de las dos coronas de España y Francia; se ha convenido que no comprenderá en adelante a los españoles la ley de auvana (de extranjería) de Francia; y en su consecuencia ofrezco su Majestad cristianísima abolirla por lo que a ellos toca, de suerte que podrán disponer por testamento, donación o de cualquiera otra manera, de todos sus bienes que posean en los dominios de Francia, sin excepción, de cualquier naturaloza que sean, y que sus herederos, súbditos de su Majestad católica, habitantes fuera o dentro — de Francia, podrán recoger las herencias, aun cuando haya abintestato, por sí mismos, por sus procuradores o apoderados, aunque no estén naturalizados, y transportarlos fuera de los estados de su

(405) Art. 23. op. cit. pág. 471-2.

Majestad cristianísima, no obstante las leyes, edictos, establecimientos, costumbres o derechos que haya en contrario; pues todas y todos los deroga su Majestad cristianísima en cuanto sea necesario. Su Majestad católica ofrece por su parte hacer que gocen — igualmente de los mismos privilegios en todos los estados y países de su dominio todos los franceses y súbditos de su majestad — cristianísima por lo que toca a la libre disposición de los bienes que posean en toda la extensión de su monarquía española; de suerte que los súbditos de las dos coronas serán generalmente tratados en todo y por todo lo concerniente a este artículo, en los países que ambas dominan como los propios y naturales de la potencia en cuyo territorio residan. Todo lo dicho respecto a la abolición de la Ley de auvena en favor de los españoles en Francia, y a las de más ventajas concedidas a los franceses en los estados del Rey de España, se entiende concedido a los súbditos del rey de las dos — Sicilias, que van comprendidos bajo las mismas condiciones en este artículo; y reciprocamente los súbditos de sus Majestades católica y cristianísima gozarán las mismas exenciones y ventajas en los estados de su Majestad siciliana.

- b) Concesiones protocolarias.— Este privilegio de fijación de prelación en las ceremonias oficiales de los ministros franceses o es-

pañoles, se concretó a favor de los primeros, argumentando que --
 procedía por ser la dinastía gala de la fuente originaria de la --
 Casa borbónica española. A este respecto se consagró (406):

"El delicado objeto de la precedencia en los actos, funciones y --
 ceremonias públicas es frecuentemente un estorbo para la buena ar--
 monía y estrecha coofianza que conviene haya entre los ministros
 respectivos de España y Francia, porque estas especies de discusio--
 nes, cualquiera que sea el temperamento que se tome para cortar--
 las, indisponen siempre los ánimos. Estas disputas eran naturales
 cuando las dos coronas de España y Francia eran poseídas por princi--
 pes de dos casas diferentes; pero actualmente y para todo el tiem--
 po que haya determinado la divina Providencia mantener en ambos --
 tronos soberanos de la misma familia, no conviene que subsista en--
 tre ellos una ocasión continua de sinsabor y descontento. En conse--
 cuencia, sus Majestades católica y cristianísima han convenido en
 contar dicha ocasión, fijando por regla invariables a sus ministros
 revestidos de igual carácter en las cortes extranjeras que en las
 de familia, como sonal presente las de Nápoles y Parma, preceda --
 siempre en cualquier acto, función o ceremonia el ministro del mo--
 narca cabeza de la familia; cuya precedencia se considerará como --

una consecuencia de la ventaja del nacimiento; y que en todas las demás cortes, el ministro, sea de España, sea de Francia que hubiese llegado último, o cuya residencia fuese más reciente, ceda al ministro de la otra corona y de igual carácter que hubiese llegado primero ó cuya residencia fuese más antigua: de suerte que habrá desde hoy con respecto a esto una constante y fraternal alternativa, a la que ninguna otra potencia deberá ni podrá ser admitida, en atención a que esta disposición (que es únicamente un puro efecto del presente pacto de familia) cesaría si los tronos de ambas monarquías dejasen de ser ocupados por príncipes de la misma casa; pues entonces cada corona haría revivir sus derechos o pretensiones a la precedencia. Se ha convenido también que si por alguna casualidad los ministros de las dos coronas llegasen precisamente a un mismo tiempo a una corte que no sea de las de familia, el ministro del soberano, cabeza de la casa, precederá por este título al ministro del soberano, segundo de la misma casa".

Frente al privilegio anterior de tipo general para todos los súbditos, este último sólo hacía referencia a los vasallos a nivel de Ministro.

5. PRIVILEGIOS MERCANTILES Y FISCALES.

Se estableció una equiparación absoluta entre ambas potencias, en materia de comercio y tributario. La obsesión de no hacer partícipes a otras

naciones, de las concesiones fijadas en el Pacto de Familia, aflo a continuamente, así se dice (407): "bien entendido que ninguna otra potencia extranjera gozará en España ni en Francia privilegio alguno más ventajoso que el de las dos naciones". Pero detengámonos en la redacción literal de aquellos privilegios: (408)

"Los súbditos de los altos contratantes serán tratados, relativamente al comercio y a las imposiciones en los dominios de cada uno en Europa, como los propios súbditos del país adonde llegasen o residiesen; de suerte que la bandera española gozará en Francia los mismos derechos y prerrogativas que la bandera francesa, así como la bandera francesa será tratada en España con el propio favor que la española. Los súbditos de las dos monarquías, en declarando sus mercaderías, pagarán los mismos derechos que pagarían si fiesen de naturales; y esta misma igualdad se observará en cuanto a la libertad de la importación y exportación, sin que deban pagarse de una y otra parte más derechos que los que se perciban de los propios súbditos del soberano; ni ser materias de contrabando para unos las que no lo fuesen para los otros; y por lo que mira a estos objetos, quedan abolidos cualesquiera tratados, convenciones o establecimientos anteriores entre las dos monarquías; bien entendido que

(407) Art. 24. op. cit. pág. 470.

(408) Art. 24. op. cit. pág. 472.

ninguna otra potencia extranjera gozará en España ni en Francia privilegio alguno más ventajoso que el de las dos naciones. Las mismas reglas se observarán en España y Francia con la bandera y súbditos del rey de las Dos Sicilias; y Su Majestad siciliana hará que los gocen recíprocamente en sus dominios las banderas y súbditos de las dos coronas de España y Francia".

No tiene nada de extraño, ni de incongruente, dicha política, toda vez que estamos en presencia de un Pacto creado en función de unos vínculos de sangre, y donde está misma circunstancia, concita esa paridad de trato; y de ahí la extensión de beneficios recíprocos con el reino de las dos Sicilias. (409)

"Concurriendo en el rey de las Dos Sicilias los mismos vínculos de parentesco y amistad y los mismos intereses que unen intimamente a sus Majestades católica y cristianísima; estipula su Majestad católica por el rey de las Dos Sicilias, su hijo; y se obliga a hacerle ratificar tanto por sí como por sus descendientes perpetuamente, todos los artículos del presente tratado; bien entendido que se determinarán en el acto de accesoión de su Majestad siciliana los socorros que haya de suministrar a proporción del poder de sus dominios".

(409) Art. 19. op. cit. pág. 471.

Como puede inferirse, si bien el Pacto Familiar nació y fué firmado con carácter dual entre España y Francia, lo cierto es que por "la fuerza de la sangre", adquirió naturaleza tripartita, englobando bajo su manto al reino de Sicilia; así se deduce asimismo de esta declaración: (410)

"Sus Majestades Católica, cristianísima y siciliana se obligan a concurrir, no solo a la conservación y esplendor de sus reinos en el estado en que se hallan actualmente, sino también a sostener primero que cualquiera otro objeto y sin excepción la dignidad y los derechos de su casa; de suerte que cada Príncipe que tendrá el honor de venir de la misma sangre, podrá estar asegurado den cualquiera ocasión de la protección y asistencia de las tres coronas".

Ratificaré dicho criterio de unión familiar tripartita, cuando se insistió: (411)

"La estrecha amistad que une a los monarcas contratantes y los empeños que toman por este tratado, los determinan a estipular que sus estados y súbditos respectivos participaran de las ventajas y de la alianza que se establece entre los soberanos; y sus Majestades se prometen que no sufrirán, por ningún caso ni bajo cualquier pretexto, que sus dichos estados y súbditos puedan hacer ni emprender nada contrario a la perfecta correspon-

(410) Art. 20. op. cit. pág. 471.

(441) Art. 22. op. cit. pág. 471.

dencia que debe subsistir inviolablemente entre las tres coronas."

6. JUICIO CRITICO

No obstante tratarse de un Pacto Familiar, en el que obviamente se inspiraron las partes contratantes en una política de máxima reciprocidad, hay sin embargo en el texto del Tratado dos matices, uno implícito y otro explícito, que rompen el equilibrio que "a priori" pudiera establecerse entre los status francés y español, de cara a las concesiones mutuas. El matiz implícito, quedó desarrollado en el epígrafe 3 de este tratado, cuando aludimos a la existencia del Juez Conservador de los franceses. La nota explícita se glosó en el apartado b) del artículo 4, al tratar de las concesiones protocolarias. Como quiera que la atribución a los súbditos galos de la vía excepcional de administración de justicia - el iudex conservator de los franceses - no conllevó la análoga - concesión para los españoles radicados en Francia, y habida cuenta de - que en el orden ceremonial oficial, el art. 27 destacó la prioridad de los representantes de la dinastía borbónica francesa, será consecuente colegir que predominaran las concesiones españolas, respecto de las conferidas por aquella Casa Real.

CASA BORBÓNICA

REINADO DE ISABEL II

(1833 - 1868)

REAL DECRETO DE EXTRANJERIA DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1.852

1. INTRODUCCION

Nuestra doctrina científica coincide en subrayar que la ratio essendi de dicho Real Decreto, descansa en la necesidad jurídica de aglutinar bajo un mismo cuerpo legal, la dispersa y variada normativa sobre la extranjería en España, propósito que por otra exterioriza el Preámbulo de aquél. Así, según Pecourt, "El Real Decreto de 17 de noviembre de 1.852, conocido usualmente como "Real Decreto de Extranjería", se promulgó según se declaraba expresamente en su Exposición de motivos, con la intención de formar una ley nueva en este ramo, sino con el decidido propósito de reunir en una sola disposición cuanto se halla prevenido respecto de los extranjeros". Debe advertirse sin embargo, que, a pesar de este tono deliberadamente modesto y conservador, el Decreto introdujo novedades sustanciales en el régimen español de extranjería". (412)

El Real Decreto de 17 de noviembre de 1.852 lleva como encabezamiento el siguiente: "Real Decreto, clasificando y fijando la condición

(412) PECOURT GARCIA, E. "Una institución singular en la Historia del Derecho Internacional Español: El Fuero de Extranjería" (en Estudios de Derecho Internacional Público y Privado, Homenaje al Prof. Luis Sala Sampil) Universidad de Oviedo, Tomo II, 1970, pág. 894.

civil de los extranjeros domiciliados y transeúntes, sus derechos y obligaciones". Consta de 45 arts. divididos en cinco capítulos. El I está dedicado a fijar quiénes son extranjeros y su clasificación en España. El II recoge las disposiciones que han de observarse para el ingreso y residencia en España de los extranjeros. El Capítulo III se refiere a la condición civil de los extranjeros domiciliados y transeúntes, sus derechos y obligaciones, y en él se incluyen las disposiciones relativas al fuero de extranjería. El Capítulo IV trata de los buques extranjeros y el V contiene disposiciones generales.

El mantenimiento del Fuero de Extranjería se justificaba por el entonces Ministro de Estado, don Manuel Bertrán de Lis, en los siguientes términos:

"Un solo punto ofrecía grave dificultad en su acertada resolución, y es el de la Subsistencia o abolición del fuero privilegiado de extranjería; pero cualquiera que sea la opinión que en este punto se forme, es indudable que las razones más poderosas reclaman que en todas las dependencias del Estado se observe una misma regla que evite todo motivo de contradicción y conflicto, y reclamaciones por parte de los representantes de las Potencias extrañas. Por otra parte, es indudable que hoy cabe este privilegio dentro de nuestro sistema jurisdiccional.

Por tanto, después de un maduro exámen, y de haber oído el dictamen de personas competentes en la materia, el Ministro - que suscribe se ha decidido a conservar, en el proyecto de - decreto adjunto, el fuero de extranjería en la misma forma - que existe en la actualidad. Respetándose de este modo el statu quo, cesará la ocasión de las reclamaciones antes indicadas, y habrá una regla fija a que puedan y deben atenerse todos los Tribunales y Juzgados sinexcepción" (413)

A idéntica conclusión llega Fuentes Lojo: "El Real Decreto de 17 de noviembre de 1852 tuvo por objeto reunir en una sola disposición todo lo estatuido acerca de dichas personas." (414)

Verplaetse, por su parte agrega: "El Real Decreto de Extranjería de 17 de noviembre de 1952 ha centralizado todo lo que se refiere a la condición de los extranjeros en España. Varios otros decretos han completado aspectos particulares de la extranjería. Del R.D. de Extranjería poco queda vigente. Casi todo ha sido reproducido por disposiciones legales y administrativas posteriores entre otros por el R.D.

(413) Ibid. op. cit. pág. 895.

(414) FUENTES LOJO, J.V. Los Extranjeros ante la Ley de Arrendamientos Urbanos". (Foro Gallego, regista Legislativa y Jurisprudencial, Año X. Nº 83. 1952. Pág. 496.

de 12 de marzo de 1.917. " (415).

José Ramón de Orde añadió que: "Es fundamental para estudiar la extranjería en España, el conocimiento del Real decreto de 17 de noviembre de 1.852, denominado de extranjería, que reguló en su integridad el estatuto jurídico de los extranjeros en España. Pese a su derogación por el Decreto-Ley de unificación de fueros (6 Diciembre de 1868) y a posteriores transformaciones, sirven de necesario enlace sus disposiciones con el régimen actual, hasta el punto de hallarse en la práctica vigentes, algunos de sus criterios. Ciertos que otras cláusulas — no se cumplían, restituyendo su vigencia y completando el régimen, al Real Decreto de 12 de marzo de 1.917, que atiende a las contingencias producidas por la gran conflagración". (416). Existe, pues, una comúnis opinio en nuestra doctrina científica proclive a subrayar el poder aglutinador que aquel R.D. encierra en materia de la extranjería. Así, en esa línea, en 1883, Torres Campos destacaba: "En la actualidad rige en la Península el Real Decreto de 17 de noviembre de 1.852, y en Ultramar la Ley de Extranjería de 4 de julio de 1870. Notables preceptos se contienen en la memorable Constitución de 1869, algunos

(415) VERAPLAETSE, J.G. "Derecho internacional Privado". Madrid, 1954. pág. 229.

(416) ORUE, J.R. Manual de Derecho Internacional Público. Edit. Reus. 1928, pág. 160.

de los cuales han pasado a la de 1.876. El principio de reciprocidad domina aún en alguna parte de la legislación patria. Merecen especial mención los convenios celebrados por España, para fijar los derechos civiles de los súbditos respectivos y las atribuciones de los agentes consulares destinados a protegerlos, con Francia en 1.862, con Italia en 1867 y con Portugal en 1870. En ellos son equiparados a los nacionales los extranjeros". (147)

Por otra lado, en el Diccionario Espasa-Calpe a este tenor se recuerda: "En España se dicta el Real Decreto del 17 de noviembre de 1852 - llamado de Extranjería para los extranjeros domiciliados y transeúntes. Este Real Decreto fue derogado por el Decreto Ley de unificación de fueros de 6 de diciembre de 1868, que restablece, en este particular, la igualdad entre españoles y extranjeros, ratificada en la Constitución de 1878, y en el Código Civil y que constituye hoy el principio fundamental de la doctrina legal española sobre extranjería".(418)

Un autor anónimo precisa: "La Legialación de extranjería suele partir de uno de dos principios opuestos, como bases de la política que se proponer observar una nación respecto a los individuos precedentes

(417) TORRES CAMPOS, M. Principios de Derecho Internacional Privado", pág. 110.

(418) DICCIONARIO ESPASA-CALPE. (Voz Extranjería), pág. 1564.

de países extranjeros: o del deseo de atraerlos a su suelo, llamando a él sus brazos y su industria, a cuyo fin les concede toda la protección compatible con los intereses nacionales: o del deseo de aljarles, ofreciéndoles pocos atractivos en cuanto a la consideración y a los derechos que han de gozar en el país que legisla" (419)

¿Qué talante adoptó el R.D. de extranjería con respecto al extranseum entronizado en nuestra Patria?

El Decreto de 17 de noviembre "parece haberse propuesto huir a la vez de uno y del otro extremo en las disposiciones relativas a la condición civil de los extranjeros, y a sus derechos y obligaciones, se encuentra un espíritu protector y se les dispensan todas las consideraciones compatibles con la organización actual de nuestra sociedad y las leyes que la rigen; pero al propio tiempo, así en este capítulo como en el relativo a su ingreso y residencia en España, se establecen las garantías suficientes a poner a cubierto a la sociedad de los males que pudiera inferirse una protección mal entendida, y el ejercicio de unos derechos que no tuvieran su contrapeso en el cumplimiento de ciertos deberes indeclinables". (420).

(419) A. "EL Fuero de Extranjería"= El Faro Nacional. (Revista de Jurisprudencia, de Administración, de Tribunales y de Instrucción Pública. Nº 196. 29 de mayo de 1853. Pág. 601.

(420) Ibid, op. cit. 601.

El estudio detenido del presente Real Decreto, nos obliga a reproducir su articulado, acotándolo por separado en razón de la coherencia de su temática, y para mayor facilidad de análisis y comentario. Veamos los distintos Capítulos.

CAPITULO I

"De los extranjeros y su clasificación en España".

"Art. 1º - Son extranjeros:

I. Todas las personas nacidas de padres extranjeros fuera de los dominios de España.

II. Los hijos de padre extranjero y madre española nacidos fuera de estos dominios, si no reclaman la nacionalidad de España.

III. Los que han nacido en territorio español de padres extranjeros o de padre extranjero y de madre española, si no hacen aquella reclamación.

IV. Los que han nacido fuera del territorio de España de padres - que han perdido la nacionalidad española.

V. La mujer española que contrae matrimonio con extranjero.

Como parte de los dominios españoles, se consideran los buques na

cionales sin distinción alguna.

Art. 2º.— Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza o ganado vecindad, con arreglo a las leyes, son tenidos españoles.

Art. 3º.— Todos los demás que residan en España sin haber adquirido carta de naturaleza ni ganado vecindad, son extranjeros domiciliados o transeúntes.

Art. 4º.— Se entenderán domiciliados, para los efectos legales, aquellos que se hallen establecidos con casa abierta o residencia fija o prolongada por tres años y bienes propios o industria y modo de vivir conocido en territorio de la Monarquía, con el permiso de la autoridad superior civil de la provincia.

Art. 5º.— Se considerarán transeúntes, los extranjeros que no tengan su residencia fija en el Reino del modo que expresa el artículo anterior" (421)

Se ha destacado que ¿qué comentarios ha suscitado ese articulado?. "Entre las novedades más útiles y convenientes que ha introducido el decreto de 1.852, puede mencionarse, en nuestra opinión, la de haber creado una clase de extranjeros que se denominan domiciliados, y que ocupan, digámoslo así, un término medio entre los naturalizados o aveci-

(421) Enciclopedia Jurídica Española, (Vos extranjería), R.D. de 17-11-1852, pág. 547-8.

nados y los transeúntes. Estas tres últimas clases de extranjeros son, -- en efecto, las que antes de ahora reconocían nuestra constitución y nuestras leyes: de ellas, las dos primeras se hallan equiparadas en un todo a los naturales del país, doctrina que se consigna también el primer artículo del decreto a que nos referimos; y a la última pertenecían todos los que, sin tener naturaleza ni haber ganado vecindad, ejercían su profesión o industria en clase de extranjeros dentro del territorio de la Península. Así es que de los naturalizados y de los que han ganado vecindad, puede decirse que han dejado de ser tales extranjeros llegado a este caso; y que sólo a los transeúntes han tenido aplicación por largo tiempo las -- doctrinas y disposiciones establecidas respecto al uso y ejercicio de los derechos de extranjería. (422) El status del extranjero transeúnte superaba sin duda en goce de privilegios a sus homólogos avecindados.

Algunos autores sostienen que el R.D. de 1.852, "no ha sido derogado en su conjunto, aunque sí en muchos de sus aspectos y establece el concepto de extranjeros en su artículo 1 y los divide en residentes y no residentes, subdividiéndolos a estos últimos en domiciliados y transeúntes (arts. 3, 4 y 5). Esta clasificación no influye sobre la capacidad, pero da a los extranjeros domiciliados las ventajas del domicilio (art.

(422) A. "El Fuero de Extranjería" (El Faro Nacional. Revista de Jurisprudencia, de Admón de Tribunales) 29 de mayo de 1.853, nº 195. pág. 601.

19)". (423)

El concepto de extranjero es, en realidad, lo contrario de súbdito. La enumeración del artículo 1º del R.D. debe ser ampliada por los preceptos del C.C. y demás Leyes y Decretos. En cuanto a las circunstancias que acreditaran estar los extranjeros avocindados en España y se encuentran establecidas en la Ley 3ª, tit. XI, Lib. VI de la Novísima Recopilación: de morar en España con casa poblada por diez años, la de arraigarse comprando y adquiriendo bienes raíces y posesiones, la de tener cargos de cualquier género que sólo pueden usar los naturales, la de ejercer comercio, la de estar inscrito en las listas electorales, repartos de contribución, etc. La distinción tenía gran importancia antaño porque los primeros gozaban del privilegio del fuero - renunciable - de extranjería.

El Real Decreto de Extranjería aludido, en su art. 3º, clasificaba, a su vez, los residentes extranjeros en dos categorías: domiciliados y transeúntes; son extranjeros domiciliados los que "se hallasen establecidos con casa abierta o residencia fija o prolongada por tres años y bienes propios o industria o modo de vivir en la Monarquía, con permiso de la autoridad civil superior de la provincia, quien llevaría el regis-

(423) Verplaetse, J.G. op, cit. pág. 229.

tro correspondiente, sobre el que la Orden de 18 de diciembre de 1.902, establecía nuevas normas". (424)

Son transeúntes, "los que encontrándose en el Reino, no tienen en él residencia fija (art. 5º) como se vió, esta distinción servía de modo especial para fijar el fuero de extranjería. Añade la ley de Ultramar de 4 de julio de 1.870, la categoría de extranjeros emigrados." - (425)

CAPITULO II

"De las disposiciones que han de observarse para el ingreso y residencia de los extranjeros en España".

Art. 6º.- Para ingresar en territorio español, deberá todo extranjero presentar en el primer puerto o pueblo fronterizo adonde llegue el - pasaporte visado por el agente del Gobierno español a quién corresponda; la autoridad local refrendará este pasaporte en los términos acostumbrados.

(424) BONET CORREA. "Los extranjeros en el ordenamiento Jurídico español" Rev. Gen. de Leg. y Jurisp. Nº 218. año 1965. Pág. 503.

(425) ORUE, J.R. "Manual de Derecho Internacional Público", 1928.pág.161.

Art. 7º.- Ningún extranjero podrá viajar por el reino con pasaporte de la Legación, o Consulado de su Nación, sino cuando ingrese en el territorio español o cuando salga del mismo.

Art. 8º.- El extranjero transeúnte que desee domiciliarse, deberá solicitar la correspondiente licencia de la autoridad superior civil de la provincia, haciendo constar que reúne las circunstancias prevenidas en el art. 4º.

Art. 9º.- En los gobiernos civiles de todas las provincias se formarán y llevarán matrículas o registros en que se asienten los nombres y circunstancias de los extranjeros que residen o vinieron a residir en el Reino con separación de las dos clases de transeúntes y domiciliados

Art. 10.- En los Consulados de todas las Naciones extranjeras establecidas en España, se formarán y llevarán igualmente matrículas o registros de los súbditos de la Nación respectiva.

Estas matrículas han de confrontarse con las de los Gobiernos civiles, pues solo cuando estén conformes con aquellas y arregladas a las formas prescritas en España podrán surtir efectos legales en el Reino.

Art. 11º.- Las matrículas de los Gobiernos Civiles y las de los Consules extranjeros, se confrontarán anualmente.

Art. 12º.- No tendrán derecho a ser considerados como extranjeros -

en ningún concepto legal, aquellos que no se hallen inscritos en las -
clases de transeúntes o domiciliados en las matrículas de los Gobiernos
de las provincias y de los cónsules respectivos de sus Naciones. Las -
inscripciones se renovarán en el caso de pasar el extranjero de la cla-
se de transeúnte a la de domiciliado.

Art. 13.- El extranjero en contravención a las disposiciones que -
preceden, se introdujese en España sin presentar el pasaporte, podrá ser
castigado como desobediente a la autoridad con la multa de 100 a 1.000
reales y expulsado, además, del territorio español, si el Gobierno así
lo determinase, en vista de lo que la autoridad civil informe por el Mi-
nisterio de la Gobernación y se acuerde en su consecuencia por este mis-
mo y por el Ministerio de Estado.

Art. 14.- Cuando algún extranjero llegue a algún puerto o pueblo de
la frontera sin el correspondiente pasaporte, será detenido por las au-
toridades españolas, que deberán inmediatamente dar cuenta al Gobierno
por el Ministerio de la Gobernación, expresando las circunstancias del
extranjero y si es vago o si busca auxilio contra los procedimientos de
sus jueces naturales. El Gobierno, con este conocimiento, y procediendo
siempre definitivamente para estos asuntos, de acuerdo los Ministerios
de Estado y Gobernación, determinará la expulsión del extranjero, desig-
nará el punto de su residencia o dispondrá lo que juzgue más convenien-
te.

Art. 15.- Lo mismo se practicará cuando lleguen a España grupos o -
cuerpos de emigrados, hasta que el Gobierno designe punto de depósito y
lo demás que juzgue conveniente, sin perjuicio que desde luego entreguen
las armas los que hubiesen presentado armados.

Art. 16.- El extranjero que desobedezca la orden para su expulsión
del Reino, quedará sujeto a la pena designada en el art. 285 del Códigi-
go, considerándose al efecto la desobediencia grave y como asunto del
servicio público la orden de la expulsión, sin perjuicio de que ésta se
lleve a efecto después de ejecutada la pena" (426)

Glosando estos preceptos, un autor anónimo, puntualizó que "Se -
fijan en el segundo capítulo las disposiciones que habrán de observarse
para el ingreso y residencia en España de los extranjeros, así como en
el tercero se determina lo relativo a su condición civil, una vez fijada
su posición como domiciliados y transeúntes, y sus derechos y obligacio-
nes en cada uno de estos Estados. En estas disposiciones vemos una cons-
tante tendencia a conciliar la protección que se debe al extranjero, -
con lo que exigen el orden y la seguridad del país, procurando al propio
tiempo armonizar la legislación vigentes respecto a ellos con el estado
de nuestras actuales instituciones y leyes". (427)

(426) "Enciclopedia Jurídica española", voz extranjería, pág. 548.

(427) A. op. cit. pág. 602.

El derecho de entrada del extranjero en España se reconoce previa presentación del pasaporte visado por el Agente español oportuno.

Establecióse por ende por la legislación española un amplio principio de libertad, toda vez que pueden los extranjeros adentrarse en territorio español con ciertas limitaciones, así tienen el "derecho de entrar y salir libremente de puertos y poblaciones de España, y transitar libremente, sujetándose a los Reglamentos sobre esta materia. Se encuentra condicionada dicha entrada y su circulación por el régimen de pasaportes y la prohibición respecto a vagabundos y transeúntes, los cuales regresarán a su respectivo país". (428)

Fúndase el régimen de pasaportes en el incontrovertible derecho del Estado para no admitir personas peligrosas o de malos antecedentes. Su utilización es indispensable no solo para el ingreso del extranjero, sino también para su circulación por España. Establecidos los pasaportes por Real decreto de 17 de noviembre de 1.852, sufrieron numerosas variaciones, como las del Real Decreto de 12 de marzo de 1.917, Decreto de 4 de octubre de 1.935 y Ordenes Generales de 23 de febrero de 1942.

Con anterioridad el Real Decreto de 1.852 la organización de los extranjeros residentes en España, se verificaba mediante el registro de

(428) ARJONA COLOMO, M. "Derecho Internacional Privado", 1949, pág.110 y sig.

miciliar ante el Cónsul respectivo (Real Orden de 14 de agosto de 1825). En este sentido se impone a los extranjeros residentes, por el Real Decreto de extranjería de 1.852, "a inscribirse en las matrículas o registros de los Gobiernos civiles y de los respectivos Consulados (arts. 9 a 11), verificándose una confrontación anual de ambas (arts. 10 y 11) - pues para que tuviera eficacia este registro, era indispensable coincidieran los asientos de Consulados y Gobiernos civiles" (429)

El resto del articulado de este Capítulo no merecen mayor consideración exegética, por cuanto afecta a normas internas relativas al control de entrada de extranjeros sin pasaporte, objeto de la sanción económica correspondiente y su posible expulsión de nuestro territorio.

CAPITULO III

"De la condición civil de los extranjeros domiciliados y transeúntes: sus derechos y obligaciones."

Art. 17.- Todos los extranjeros, así avecindados como transeúntes, tendrán derecho de entrar y salir libremente de sus puertos y poblacio-

(429) ORUE, J.R. Op. cit. pág. 164.

nes de España y de transitar con igual libertad en su territorio, sujetándose a las reglas establecidas por las leyes para los súbditos españoles, así como a los reglamentos de puertos y policía.

Art. 18.- Pueden también adquirir y poseer bienes inmuebles, ejercer las industrias y tomar parte en todas las empresas que no estén reservadas por las leyes y disposiciones vigentes a los súbditos españoles.

Art. 19.- Los extranjeros domiciliados pueden ejercer el comercio -- por mayor y por menor bajo las condiciones que para los españoles establecen las leyes y reglamentos, y tendrán derecho a disfrutar de todos los aprovechamientos comunes del pueblo en donde tengan su domicilio.

Art. 20.- Los transeúntes podrán hacer el comercio por mayor, con -- sujeción a las leyes y disposiciones que rigen en el Reino.

Art. 21.- Así los domiciliados como los transeúntes están obligados al pago de los impuestos y contribuciones de todas clases que correspondan a los bienes raíces de su propiedad y al comercio o industria que ejercieren con arreglo a las disposiciones y leyes generales del Reino.

Art. 22.- Los domiciliados estarán sujetos, además, al pago de los préstamos, donativos y toda clase de contribución extraordinaria o personal, de que estarán exceptuados los transeúntes, así como a los impuestos municipales, vecinales y provinciales.

Art. 23.- Unos y otros estarán exentos de las cargas concejiles personales. Pero los domiciliados que tengan casa abierta por sí, están sujetos a las cargas de alojamiento y bagajes.

Art. 24.- Así los domiciliados como los transeúntes y sus hijos, - cuando no hayan optado por la nacionalidad española, estarán exentos del servicio militar.

Esta excepción no alcanza a los nietos cuando sus padres han nacido ya en territorio español, aunque conserven la nacionalidad extranjera.

Art. 25.- Ningún extranjero podrá profesar en España otra religión que no sea la católica, apostólica y romana.

Art. 26.- No podrán tampoco participar de los derechos políticos - pertenecientes a los españoles, ni obtener beneficios eclesiásticos de ninguna clase, ni pescar en las costas de España, ni hacer con sus buques el comercio de cabotaje.

Art. 27.- Tampoco podrán los extranjeros ejercer los derechos municipales en las elecciones para los Ayuntamientos, ni obtener cargos municipales ni empleo en las diversas carreras del Estado, si no renuncian expresamente, por sí y por sus hijos, la exención del servicio militar y a toda protección extraña en lo relativo al servicio de sus cargos.

Para hacer esta renuncia, que se verificará ante la auto-

ridad civil superior de la provincia y de la cual se harán las anotaciones correspondientes en las matrículas respectivas, debe hallarse inscrito con antelación en la clase de extranjero domiciliado.

Art. 28.- En los abintestatos de los extranjeros domiciliados y transeúntes, la autoridad local, de acuerdo con el cónsul de la Nación del finado, formará el inventario de los bienes y efectos y adoptará las disposiciones convenientes para que estén en segura custodia hasta que se presente el heredero legítimo o la persona que legalmente la represente.

Así en este caso como en los de sucesiones testamentarias, sólo conocerán los Tribunales de las reclamaciones que ocurran sobre embargo de bienes de acreedores y cualquiera otra que tenga por objeto el cumplimiento de las obligaciones o responsabilidades contraídas en España o a favor de súbditos españoles.

Art. 29.- Los extranjeros domiciliados y transeúntes están sujetos a las leyes de España y a los Tribunales españoles, por los delitos que comentan en el territorio español y para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan en España o fuera de España, siempre que sean a favor de súbditos españoles.

Art. 30.- Mientras que en una nueva organización de los Juzgados y Tribunales del Reino y de las diversas jurisdicciones no lo impidan, conocerán en primera instancia de los pleitos y causas contra los extran-

jeros domiciliados y transeúntes, los gobernadores de las plazas marítimas y los capitanes generales en los demás puntos y en las segundas y demás instancias sucesivas, el Tribunal Supremo de Guerra y Marina y de extranjería.

Art. 31.— El fuero de extranjería de que habla el artículo anterior, es meramente pasivo y no gozarán de él los extranjeros domiciliados y transeúntes, en los casos siguientes:

I. En los delitos de contrabando.

II. En los juicios que procedan de operaciones mercantiles.

III. En los delitos de sedición y los demás que deben ser juzgados con arreglo a la ley de 17 de abril de 1.821.

IV. En los delitos cometidos a bordo y en alta mar y en los juicios de presas.

V. En las causas por tráfico de negros.

VI. En los juicios de faltas, en que, según el código penal, no lo gozan los españoles de ninguna condición ni estado. En todos estos casos serán competentes para juzgar a los expresados extranjeros los Tribunales y jueces establecidos respectivamente por las leyes.

Art. 32.— Los extranjeros domiciliados y transeúntes, tienen derecho a que por los Tribunales españoles se les administre justicia, con arreglo a las leyes, en las demandas que entablen para el cumplimiento

de las obligaciones contraídas en España o que deban cumplirse en España o cuando versen sobre bienes sitos en territorio español.

Art. 33.- En los negocios entre extranjeros o contra extranjeros, aunque no procedan de acción ni acción personal, por obligaciones contraídas en España, serán sin embargo, competentes los jueces españoles, cuando se trate de evitar un fraude o adoptar medidas urgentes y provisionales para detener a un deudor que intente ausentarse, a fin de eludir el pago o para la venta de objetos expuestos a perderse en almacenes o para proveer interinamente de guardador a un demente u otros análogos.

Art. 34.- A los exhortos de los jueces extranjeros se dará cumplimiento en todo aquello que puede y debe ejecutarse en el Reino, con arreglo a las leyes cuando vengan por el Ministerio de Estado con las formalidades y requisitos de costumbre. Por el mismo Ministerio se remitirán los exhortos para las autoridades extranjeras; estos exhortos, cuyo cumplimiento no ha de hacerse por los cónsules españoles, se dirigirán precisamente a los Tribunales y autoridades extranjeras que deban ejecutar las diligencias que se encarguen.

Art. 35.- Son válidos y causan ante los Tribunales españoles los efectos que procedan en justicia, los contratos y demás actos públicos celebrados fuera del Reino cuando concurren las circunstancias que expresa el R.D. de 17 de octubre de 1.851". (430)

(430) Enciclopedia Jurídica Española, (voz extranjería) arts.17 a 35.
pág. 548 a 550.

1. INTRODUCCION

Es sin duda este Capitulo el de mayor trascendencia jurídica del Real Decreto que glosamos, no sólo por tener inserto dentro del mismo lo -
concerniente al Fuero de Extranjería, sino también por incardinarse -
en sus límites todo lo referente a la conditio iuris del extraneum. -
Podemos deslindar dentro del mismo, los siguientes privilegios o dere-
chos a favor de los extranjeros, recogiendo en rúbricas aparte las -
obligaciones y prohibiciones que les afectan.

2. PRIVILEGIOS Y DERECHOS DEL EXTRANJERO EN ESPAÑA (R.D. 1852)

A nuestro entender, bajo esta rúbrica se pueden agavillar estos privi-
legios:

- a) El "ius communicationis", aparece sancionado con toda largueza en el
el art. 7. sin más cortapisas que la de quedar sometidos a las mis-
mas leyes que los súbditos españoles, y a los reglamentos de puertos
y policía.
- b) El "ius commercii", se reconoce en sus variedades de al por mayor y
al por menor a los extranjeros domiciliados en iguales condiciones
que a los regnícolas en el art. 19 y solamente al por mayor a los
extranjeros transeúntes según el art. 20.
- c) El ejercicio de la industria y entrada en empresas españolas, ampa-
ra en el art. 18, sin más restricción en la práctica, que la de in-

gresar en empresas reservadas solamente para los españoles.

- d) Derecho de posesión y adquisición de bienes inmuebles (art. 18)
- e) Privilegio de exención de cargas concejiles personales (art. 23)
- f) Los extranjeros transeúntes además están exentos del pago de toda clase de contribuciones extraordinarias. (art. 22)
- g) Exención del servicio militar (art. 24)
- h) El derecho a la protección del caudal relicto del fallecido abintestato. (art. 28). De acuerdo con la tradición histórica española de no aplicar en nuestro territorio el vejatorio derecho de abintestato. (art. 28). De acuerdo con la tradición histórica española de no aplicar en nuestro territorio el vejatorio derecho de abintestato.
- i) El privilegio singular del Fuero de Extranjería, esto es, de gozar de una jurisdicción excepcional en los pleitos y causas en que fueron demandados. De este privilegio nos ocuparemos con más detenimiento seguidamente (art. 30).
- j) El derecho a administrarles justicia por los Tribunales españoles (arts. 30 y 32).

3. OBLIGACIONES PERSONALES QUE AFECTAN A LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA.—(R.D. 1.852)

En el marco de este epígrafe, hallamos estas obligaciones:

- a) Obligación de pago de impuesto y contribuciones de todas clases que recaigan sobre los bienes inmuebles de su propiedad o por el comercio o industria que desarrollaron. (art. 21)

- b) Los extranjeros domiciliados están además sujetos al pago de los -
préstamos, donativos y toda clase de contribución extraordinaria o
personal. (art. 22).
- c) Los Extranjeros domiciliados y con casa abierta por sí, están obli-
gados al abono de las cargas de alojamiento y bagajes.
- d) Obligación de sumisión a las leyes y Tribunales españoles por los
delitos que cometan en el territorio español y para el cumplimiento
de obligaciones siempre que estas sean a favor de las reguicolas. ;
(art. 29).

4. PROHIBICIONES QUE AFECTAN A LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. (R.D. de 1852)

Relación de prohibiciones que anudamos bajo esta rúbrica:

- a) Prohibición de profesar otra religión que no sea la católica, apos-
tólica y romana. (art. 25). Esta prohibición ha de interpretarse ex-
clusivamente en lo que se refiere al culto externo, no en lo que se
se refiere al culto externo, no en lo que atañe a la profesión priva-
da. Insistiremos sobre este punto más adelante.
- b) Prohibición de gozar de los derechos políticos. (art. 26).
- c) Prohibición de obtener beneficios eclesiásticos de ninguna clase -
(art. 26)
- d) Prohibición de pescar en las costas de España (art. 26).
- e) Prohibición de participar en las elecciones municipales, ni obtener

cargos en el Ayuntamiento (art. 27).

f) Prohibición de empleo en las carreras del Estado (art. 27).

g) Prohibición de goce del Fuero de Extranjería, cuando incurran en -
los casos de desafuero previstos en el art. 31.

Comentando el R.D. de 1.852, un escritor ha señalado que desde el art. 17 al 23, se establecen, así sus derechos y exenciones, como las cargas y contribuciones generales a que están obligados. Los transeúntes solo puede ejercer comercio por mayor, porque el comercio por menor supone un establecimiento abierto, y este establecimiento un domicilio: en cambio no están sujetos a los donativos, préstamos u otras contribuciones extraordinarias o personales, ni a los impuestos municipales, vecinales y provinciales. Sobre los domiciliados pasan todas estas cargas y gabelas; pero pueden ejercer el comercio por mayor y menor, y - disfrutar de todos los aprovechamientos comunes del pueblo en que tengan su domicilio. La reciprocidad no puede ser más completa". (431)

Añade el mismo autor que "Los inmediatos artículos, o sean el 24 y 25 envuelven en sí dos cuestiones de trascendencia y quedaría materia para largas y profundas consideraciones, si pudiese esto caber en la - índole del presente trabajo. Por el primero se declaran exentos del servicio militar los domiciliados, los transeúntes y sus hijos: por el se

(431) A. op. cit. pág. 602-3.

gundo se prohíbe al extranjero profesar en España otra religión que la católica apostólica romana". (432)

Con carácter general, puede afirmarse en cualquier país que no hay un derecho absoluto de entrada, de residencia o de establecimiento del extranjero. El principio del "libre acceso al territorio español que - consagra el artículo 17 del Decreto de 1.852, se subordina, en el mismo cuerpo legal, a la presentación del pasaporte y a lo dispuesto por los Reglamentos de Puertos y Policía". (433).

España no siendo un país de inmigración, no ha implantado el sistema de los contingentes. El Real Decreto de Extranjería de 1852, disponía, en su artículo 36, que los buques extranjeros podían entrar en - los puertos, y llegando de arribada forzosa, serían auxiliados por las autoridades. El artículo 40 mandaba ayudar en caso de naufragio. El derecho de comunicación marítima y entrada en puerto estaba absolutamente reconocido y garantizado en dicho articulado.

En cuanto al tema de la religión, la normativa española ha evolucionado según el talante de las relaciones Estado-Iglesia; así en épocas pretéritas, esto era quizás lo más grave que ocurría entre pueblos de distinta confesionalidad religiosa. Incluso el artículo 25 del Real

(432) A. op. cit. pág. 602 y sig.

(433) Verplaetse, J.G. Op. cit. 230 y sig.

decreto de 1.852, ordenaba que ningún extranjero pudiera profesar en España otro credo que el católico apostólico romano. Sin embargo, "no es esta ya la condición de los extranjeros en nuestro país. El art. - 11 de la Constitución entonces vigente, al declarar que aquella es la del Estado, el cual se obliga a mantener su culto y sus ministros, proclama que nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. Añade, sin embargo, que no se permitirán otras ceremonias que las de la religión del Estado" (34)

Imperó, pues, en España a tenor de la Constitución entonces vigente, lo que se denomina comúnmente como tolerancia religiosa, en cuya virtud los extranjeros que no profesen nuestra religión, podrán poner sus correspondientes templos, escuelas, hospitales y cementerios, y efectuar las prácticas y ceremonias religiosas oportunas.

En cuanto al disfrute de los derechos políticos de la extranjería, a tenor del artículo 26 del Real Decreto español de extranjería, los extranjeros no podían participar de los derechos políticos pertenecientes a los españoles. En la Constitución de 1876, vigente en 1.914, no se mantiene ese precepto, pero, según su artículo 13, solamente corresponden a los nacionales, los siguientes derechos:

(434) BRAVO, E. "Derecho Internacional privado". Tomo I. 1886. Pág.148.

"El de emitir libremente ideas y opiniones ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa:

El de reunirse pacíficamente;

El de asociarse para los fines de la vida humana;

El de dirigir peticiones individual o colectivamente al Rey, a las Cortes y a las autoridades.

La ley de imprenta y la relativa al ejercicio del derecho de reunión conservan a éste y al de emisión del pensamiento el carácter de privativos de los españoles que la Constitución les atribuye". (435)

Por la que atañe a la sumisión del foráneo al ordenamiento jurídico español, el art. 29 dice que los extranjeros domiciliados y aún los transeúntes, están sujetos a las leyes de España, y a los Tribunales españoles por los delitos que cometan en el territorio español, y para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan en España o fuera de España, siempre que sean a favor de súbditos españoles, no obstante tampoco "puede ya él servir para formarse una idea exacta de los derechos y obligaciones de la condiciones en nuestro país del extranjero en materia civil y criminal" (436)

(435) GONZALEZ HONTORIA, Vol. II. 1928. Pág. 352 y 353.

(436) Anónimo. "Nacionalidad, Naturalización y Ciudadanía", 1878. Pág. 81-82

EL FUERO DE EXTRANJERIA STRICTO SENSU EN EL R.D. de 1.852.

1. NORMATIVA

Viene sancionada con este texto: "Mientras que una nueva organización de los Juzgados y Tribunales del Reino y de las diversas jurisdicciones no lo impidan, conocerán en primera instancia de los pleitos y causas contra los extranjeros domiciliados y transeúntes, los gobernadores de las plazas marítimas y los capitanes generales en los demás puntos y en las segundas y demás instancias sucesivas, el Tribunal Supremo de Guerra, Marina y de extranjería" (437)

Glosando Pecourt García dicho precepto, afirma que "Tres rasgos - marcadamente significativos se apuntan en la regulación dada al fuero de extranjería de 1852. Ante todo, queda claro su carácter privilegiado e impuesto, resultado, pues, más de factores históricos y políticos que de una orientación legislativa libremente adoptada por las autoridades españolas. Paladínamente reconoce esto el Ministro Bertrán de Lis al referirse de modo reiterado a las reclamaciones hechas por los representantes de Potencias extrañas" (438).

Ahora bien - sigue diciendo el mismo internacionalista, y esto es el segundo rasgo que merece destacarse - "parece evidente que el man-

(437) Enciclopedia Jurídica Española (Voz extranjería) R.D.1852.Art.30.Pg.

(438) Pecourt, op. cit. pág. 895 y sig.

tenimiento del fuero de extranjería y en la nueva organización establecida en 1.852, sólo se hizo a contrapelo y ya en precario. Dedúcese ello, sobre todo, de la afirmación contenida en la Exposición de Motivos, de acuerdo con la cual se admite la subsistencia del fuero ya que "Hoy cabe este privilegio dentro de nuestro sistema jurisdiccional" y de la reserva explícita hecha en el transcrito art. 30 que reconoce su supervivencia mientras que una nueva organización de los Juzgados y Tribunales del Reino y de las diversas jurisdicciones no lo impida".(439).

En fin, "como tercer rasgo cabe señalar el carácter puramente conservatorio de la normatividad establecida, que se limita a sistematizar la legislación anterior al respecto." (440)

El texto de los artículos 30 y 31 del Real Decreto de 1852, nos aclaran lo que en el siglo XIX constituyó dicho fuero de extranjería, "hasta que, a poco de haber triunfado la revolución de septiembre, expidió el Gobierno Provisional un Decreto-Ley de unificación de fueros, con el cual debió necesariamente desaparecer el de que disfrutaba los extranjeros, no obstante el justificado escrúpulo que sobre el particular acusaba la exposición al referido Real Decreto, quedando éstos

(439) Ibid. op. cit. pág. 895 y sig.

(440) Ibid. op. cit. pág. 896.

sometidos al fuero ordinario" (441). Así vino posteriormente a consagrarlo definitivamente la Ley sobre organización del poder judicial de 15 de septiembre de 1.870, cuyos preceptos más acordes con el presente tema, son los siguientes:

Art. 319. Lo establecido en este capítulo comprenderá a los extranjeros que acudieren a los Juzgados y Tribunales españoles, promoviendo actos de jurisdicción voluntaria, interviniendo en ellos y compareciendo en juicio como demandantes o como demandados, contra españoles o contra otros extranjeros, cuando proceda que conozca la jurisdicción española con arreglo a las leyes del Reino, o a los Tratados en otras potencias.

Art. 333. Los extranjeros que cometieren faltas o delinquieren en España, serán juzgados por los que tengan competencia para ello por razón de las personas o del territorio.

Los artículos 347, 348, 349 y 350 fijan la competencia de las jurisdicciones especiales en lo criminal, que quedan reducidas a la jurisdicción de guerra y marina en los delitos cometidos por militares y marinos en activo servicio, los cuales serán juzgados en los negocios propios de su instituto, con arreglo a las Ordenanzas del Ejército y Armada con excepción de los delitos comunes especificados en el

(441) Anónimo. "Nacionalidad, naturalización y ciudadanía", 1878. pág. 81-2.

art. 349: Ha de subrayarse lo recogido por el artículo 319 de la Ley sobre organización del Poder judicial, respecto a la competencia civil y el art. 333, que sometiendo a la jurisdicción ordinaria española el conocimiento de toda falta o delito cometido por extranjeros en España, establece igual competencia para las responsabilidades que de una u otro resultaren, sea a favor de españoles o de extranjeros; en cuanto a las responsabilidades contraídas por delitos cometidos en el extranjero, ya sea contra el Estado, ya contra particulares; además, es preciso tener presente los artículos 335 al 34; y por último, recordar que estos efectos civiles de las leyes respecto a los extranjeros se suelen modificar y precisar por los convenios internacionales, los cuales son, por tanto, una base de jurisprudencia que no puede ser relegada al olvido. De aquí la excepción en art. 319 que ya conocemos, y tantas otras como contienen nuestros Códigos.

2. INTERPRETACION REDTRICTIVA DEL FUERO DE EXTRANJERIA.

Como ejemplos del criterio restrictivo aplicado en las sentencias de nuestros Tribunales, se citan "Cincuenta y dos decisiones del Tribunal Supremo sobre cuestiones de competencia suscitadas entre el fuero común y el de extranjería, demuestran en efecto, que dominó una interpretación restrictiva, aplicándose, por el contrario, extensivamente la jurisdicción ordinaria frente a la excepcional o privilegiada -

constituida por el fuero de extranjería. Son varios los aspectos en los que esta interpretación jurisprudencial queda registrada de modo inequívoco". (442)

Por lo que atañe a la extensión del fuero de extranjería *ratione personae*, el Tribunal Supremo impuso drásticamente que la condición de extranjero domiciliado o transeúnte resultare plenamente probada. Incluso desde la óptica de la extensión *ratione materiae* la interpretación jurisprudencial del fuero de extranjería fué notablemente limitativa. "Se confirmó en todo caso su carácter meramente pasivo, cumpliéndose sin excepción los casos de desafuero previstos en el artículo 31 del Real Decreto y negando su aplicación por vía incidental". (443)

Como puede apreciarse, el criterio exegético del Tribunal Supremo a propósito de aplicar o no el Fuero de Extranjería, era restrictivo, no sólo como *ratione personae*, sino también *ratione materiae*. Además dificultaba la posibilidad de acudir ante aquella litis excepcional, el hecho de que el extranjero se sometiese espontáneamente a

(442) PECOURT, op. cit. pág. 896 y sig.

(443) PECOURT GARCIA, E. "Una institución singular en la Historia del Derecho Internacional Privado español: El Fuero de Extranjería". Universidad de Oviedo, 1970. Homenaje al Prof. E. Sela Sampil, Tomo II pág. 897.

la jurisdicción ordinaria. Pero existe por otra parte, un argumento legal limitativo de la práctica del Fuero de Extranjería, y no es otro que el proclamado en los casos de desafuero regulados en el art. 31.

2.1. CRITERIO LEGAL LIMITATIVO.

CASOS DE DESAFUERO

El Fuero de Extranjería de que habla el artículo anterior, es meramente pasivo y no gozarán de él los extranjeros domiciliados y transeúntes en los casos siguientes:

I. En los delitos de contrabando.

II. En los juicios que procedan de operaciones mercantiles.

III. En los delitos de sedición y los demás que deban ser juzgados con arreglo a la ley de 17 de abril de 1.821.

IV. En los delitos cometidos a bordo y en alta mar, y en los juicios de presas.

V. En las causas por tráfico de negros.

VI. En los juicios de faltas, en que, según el Código Penal, no lo gozan los españoles de ninguna condición ni estado. En todos estos casos serán competentes para juzgar a los extranjeros los Tribunales y jueces establecidos respectivamente por las le-

yes. (444)

(444) Enciclopedia Jur. Española (Voz extranjería) R.D. 1852. Art.31.pg. /549.

Comentando dicho precepto, en autor anónimo, recoge idéntica clasificación. (445).

En todos aquellos casos son competentes para juzgar y conocer de los pleitos contra los extranjeros los jueces y tribunales respectivamente establecidos por las leyes.

No habiendo sido el objeto del Real Decreto de 17 de noviembre de 1852, hacer una ley nueva, y si únicamente reunir en una sola disposición todo lo que entonces se hallaba prevenido respecto a los extranjeros, conservando el fuero de extranjería en la forma existente a la sazón, se deduce que además de las excepciones de dicho fuero comprendidas en el art. 31 de aquel Real Decreto, puede haber y hay efecto otros casos de excepción consignados en las leyes anteriores y posteriores al mismo.

Ad exemplum, se halla dispuesto por las leyes 8 y 9 del tit. 10 y 4ª del título 11, libro 12 de la Novísima Recopilación y por la Real Orden de 9 de abril de 1.831, que los delitos de resistencia, atentado o desacato a las autoridades que ejercieren funciones de justicia, producen desafuero, sea de la clase que fuere, el que a los procesados corresponda. Es evidente por tanto y así lo

(445) J.L.F. "El Fuero de Extranjería". Rev. Genl de Leg. y Jurisp. 1863. Pág. 34 y sig.

tiene declarado el Tribunal Supremo de Justicia que pierden su fuero los extranjeros en los procedimientos por delitos expresados.

Por otra parte, los jueces y tribunales del Fuero de Extranjería son también incompetentes para conocer los juicios de inquilinato o desahucio, en ejecución e incidencias, porque ha sido reservado el conocimiento de ellos a los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria por el art. 636 de la Ley de Enjuiciamiento civil, que los declaraba de la exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria.

Y finalmente, también quedan privados los extranjeros de su fuero en los actos de jurisdicción voluntaria, pues se halla dispuesto por la regla 1ª del art. 1208 de la repetida ley de Enjuiciamiento civil, que se practiquen en los juzgados de primera instancia las actuaciones relativas a ellos, en cuyo sentido ha resuelto asimismo el Tribunal Supremo de Justicia varias competencias suscitadas entre la jurisdicción ordinaria y la especial de Guerra y Marina.

Acerca de si los extranjeros pueden ser desaforados hay diversidad de criterios, "creen algunos que este fuero de extranjería es tan personal que en ningún caso cabe el desaforo; otros con-

sideran que el fuero de los extranjeros es el militar, y por consiguiente suponen como parte del fuero, el desafuero en los casos en que las leyes militares lo establecen". (446)

Sin embargo, la argumentación de estas dos opiniones no es correcta. El fuero de extranjería por muy privativo que se configure, "no deja de estar sujeto a aquellas modificaciones que exigen las circunstancias y la organización interior del Estado, porque ninguna nación puede ser obligada a cumplir estipulaciones, -- que el tiempo y las circunstancias hacen incompatibles con la administración pública. Como una prueba de respeto que siempre ha merecido esta verdad, puede citarse que poco después de estipularse el fuero de extranjería se excluyeron de él las causas de contrabando, sin que ninguna de las potencias interesadas en su existencia se creyese en derecho de reclamar". (447). En esa línea de pensamiento, se ha escrito que "separando del Ejército, la Jurisdicción Civil, no hemos de reservársela a los Extranjeros, aunque la imposición de los arrestos y multas a que los condene por faltas de justicia, se ejecuten por los jefes o Tribunales militares. Por lo tanto, si a lo que aspiran es a ser procesados en sus deli

(446) RIQUELME, A. "Elementos de Derecho Público", Tomo I, Madrid, 1849. Pág. 385.

(447) Ibid, op. cit. pág. 385-6.

tos y crímenes con la severidad de las leyes militares, sea en buena hora; pero sepan que a eso no se reducirá en adelante el protectorado que les dispensa el pabellón del Ejército" (448)

A tenor de una "real cédula de 24 de octubre de 1.782, que forma la ley 8, tit. 36, lib. 12, Nov. Rec. se ha querido suponer que los extranjeros no deberían gozar fuero en materia criminal. Más esta disposición habla solo de los delitos contra el orden público, o sea también de la infracción a las reglas de policía y bien gobierno, por manera que más que una ley general debe ser mirada como una declaración o caso de desafuero, y si así no fue se debería conceptuarse derogada por el art. 3, del tratado ajustado en Versalles en 3 de septiembre de 1.783, entre España e Inglaterra, en que de nuevo se sancionó el fuero de extranjería". (449)

Con carácter general puede acotarse "que el extranjero perdía su fuero privilegiado en dos casos concretos:

a) en las causas de contrabando. Así, la Real Cédula de 8 de

marzo de 1716, había preceptuado, que los jueces conserva-

(448) NUÑEZ DE ARENAS, Isaac. "Bases y motivos en que funda la reforma del Tratado de Justicia para la nueva Ordenanza militar", Madrid, 1856, pág. 48.

(449) BACARDI, A. "Nuevo Colón o Tratado del Derecho Militar". Tomo I, Madrid, 1864, pág. 35 y sig.

dores deberían entender de todos los litigios y causas - excepto las que tocaren a las rentas y derechos reales. Dicho tenor se confirmó en la Real Cédula de 7 de julio de 1727, y, posteriormente lo hizo suyo el Real Decreto de 21 de diciembre de 1759.

- b) En los pleitos sobre negocios mercantiles. Se instrumentó este motivo de desafuero, a partir de la aparición - del Código de Comercio de 1.829, cuyo art. 20 ordenaba - textualmente que, todo extranjero que celebra actos de co^mercio en territorio español, por el mismo hecho se sujeta en cuanto a ellos, y sus resultados e incidencias, a los tribunales españoles, los cuales conocerán las causas que sobrevengan y las decidirán con arreglo al Derecho co^mún español y a las leyes de este Código. "Los comentaristas interpretaron este motivo de desafuero como expresión de una línea tradicionalmente mantenida en el derecho español. A este respecto, se citaban las antiguas leyes 15, tit. I, Partida I y 15 Tit. 14, Partida 3, de acuerdo con las cuales los extranjeros que contrataban en España se sometían por este mismo hecho a las leyes y tribunales españoles, por lo que el "desafuero que el Código de comercio establece en los negocios mercantiles ha debido fun-

darse en nuestras antiguas leyes". (450).

c) En los casos de tráfico de negros, de acuerdo con lo establecido en el art. 7º del tratado hispano-británico de 1.835 y,

d) En los juicios de presas y en las causas por delitos cometidos a bordo y en alta mar.

De ahí que, uno de los temas que más se habían discutido en esta materia, era el de si el fuero de extranjería debía englobar a todos los negocios y litis de las personas a quienes se proyecta si de esta regla general habían de admitirse como lógicas y legítimas algunas excepciones; "la exageración, y aún nos atrevemos a decir, la sinrazón, llegó en esta parte a tal extremo, que se proclamó la subsistencia del fuero como cualidad personal del aforado para cuantos negocios pudieran suscitarse contra el mismo en el orden civil y criminal, sin que pudiese desaforársela por motivo ni préstamo alguno" (451).

No obstante de aquel criterio amplio, sin embargo, los internacionalistas no participaron, los que "con tanto calor profes-

(450) PECOURT GARCIA, Ibid. op. cit. pág. 892.

(451) A. (autor anónimo) "El Fuero de Extranjería" en El Faro Nacional, 28 de Julio 1.853 (Rev. de Jurisprudencia Administración, de Tribunales y de Instrucción Pública". Pág. 98 y sig.

ban y sostenían los diplomáticos. Fácilmente ocurrieron a su consideración algunos casos, en que no entraba ni podía entrar en el interés de las naciones conservar ileso y subsistente el fuero de extranjería"(452). Así, y por lo que concierne a los delitos de contrabando, verbigracia, en que el extranjero consular de un modo lesivo las leyes e intereses del país en las litis que se sustancian a tenor de la ley de 17 de abril de 1.821, en que se entiende que los reos en ellas han tenido por objeto hostilizar al gobierno y erosionar la seguridad interior del Estado, "¿cómo es posible que pudiera nación alguna, sin mengua de su mima dignidad y prestigio, consentir que los extranjeros criminales fuesen juzgados por sus tribunales propios, en lugar de aplicárseles de una manera extraordinaria y urgente la acción - de la ley que condena y reprime sus excesos". (453)

Si bien el art. 31 del R.D. de 17 de noviembre de 1852, no la incluye entre los casos de desafuero, ni tampoco ha sido reconocida en tal concepto por los comentaristas lo cierto es que según nuestro criterio, existe otro caso muy importante de desafuero que es el determinado por la ley 8ª, título 36, libro 12

(452) Ibid. op. cit. pág. 98-9.

(453) Ibid. op. cit. pág. 98-9.

de la Novísima Recopilación y cuyo texto trascribimos por su interés seguidamente:

"Don Carlos III, por resolución a consulta de 1º y cédula del consejo de 24 de octubre de 1.782.

"Los extranjeros delincuentes en estos reinos o infractores de bandos públicos, sean procesados y castigados por justicias, sin remitirlos a sus jueces.

"Habiendo llegado a mi real noticia, que en diferentes países del extranjero, cuando algunos de mis vasallos, así — soldados como paisanos, transeúntes o domiciliados en ellos delinquen contra sus leyes y bandos públicos, se les forman procesos por las justicias ordinarias sentenciándolos, e imponiéndoles las penas convenientes, sin remitir los delincuentes a los tribunales de España; fui servido manifestar al mi consejo la regla de reciprocidad, que estimaba conveniente se estableciese en estos mis reinos, en los casos — que ocurriesen con los extranjeros transeúntes y residentes en ellos; y habiéndoseme hecho presente su parecer, con lo expuesto por mis fiscales, en consulta de 1º de este mes, conforme a él he venido en mandar, que todas las justicias de mis reinos y señoríos en sus respectivas jurisdicciones, siguiendo la regla de reciprocidad, procedan contra los extranjeros transeúntes o domiciliados, de cualquiera nación, que delinquieren o ingrigieren los bandos públicos; formándoles causa, e imponiéndoles las penas correspondientes conforme a las leyes del reino, reales pragmáticas, y bandos — públicos, del mismo modo que se ejecuta con los naturales de estos mis reinos, sin permitir que se forme sobre ello competencia alguna". (454)

Los términos tajantes por los que nuestro Rey Carlos III ordenó someter a todos los extranjeros (transeúntes o domiciliados) a — la jurisdicción ordinaria — sin permitir que se forme sobre ello

(454) RIQUELME, A. Apéndice al Derecho Internacional de España". Madrid, 1849, Tomo II, pág. 318.

competencia alguna - se apoyó en criterio de reciprocidad, toda vez que a los españoles en el extranjero no se les juzgaba mediante Tribunales especiales españoles. No existía razón jurídica para aplicarles el Fuero de Extranjería - en nuestro suelo - a los no reguicolas.

CAPITULO IV

DE LOS BUQUES EXTRANJEROS

Art. 36.- Los buques pertenecientes a cualquiera de las Naciones o potencias extranjeras, podrán acogerse a los puertos españoles.

Cuando lleguen por arribada forzosa, serán auxiliados por las autoridades españolas sin más restricciones que las necesarias para evitar el fraude o contagio.

No se privará a los buques de sus tripulaciones, antes - bien serán restituidos a su bordo los desertores, cuando fuese posible - suaprehensión.

Art. 37.- Los buques mercantes extranjeros no podrán servir de asilo a los criminales españoles, y cuando se refugiasen a bordo, las autoridades españolas, de acuerdo con el cónsul respectivo, podrán proceder a la extradición.

Art. 38.- Respecto del asilo tomado por los criminales españoles en los buques de guerra extranjeros, se procederá reclamar la extradición por la vía diplomática con sujeción a las leyes y tratados vigentes.

Art. 39.- Cuando a bordo de un mercante anclado en puerto español - ocurra algún exceso que pueda perturbar la tranquilidad pública o atacar contra la seguridad interior o exterior del Estado, la autoridad local competente tendrá derecho a intervenir y conocer para precaver y reprimir aquellos excesos. Si estos atacan exclusivamente la disciplina interior del buque, su capitán procederá según estime conveniente y obtendrá auxilio de las autoridades españolas si lo reclama.

Art. 40.- En los casos de naufragio de un buque extranjero, las autoridades de Marina, sin que por ninguna otra deba suscitarse competencia y dar ocasión a entorpecimientos, daños y reclamaciones trascendentales, antes bien recibiendo aquella autoridad el auxilio de todas las demás, proveerán a todo cuanto fuere necesario para el salvamento de las personas del buque y de su carga, procediendo en todo de acuerdo con el capitán del buque y el cónsul de la nación respectiva, si en aquel punto lo hubiere.

A falta de cónsul en el punto de naufragio podrá el más inmediato nombrar persona que con poder bastante lo represente.

Los extranjeros están exentos, así como los súbditos espa-

ñales en la actualidad, de pagar cantidad alguna por razón de costas o derechos procesales en las actuaciones, expedientes o procedimientos que se formen con motivo del naufragio y salvamento.

En el caso de que se altere la legislación y disposiciones vigentes, ni en ningún otro los extranjeros no tendrán obligación de pagar nunca por razón de salvamento derechos más crecidos que aquellos que paguen los súbditos españoles, pero podrá detenerse la entrega de los efectos salvados hasta que se satisfagan los derechos correspondientes o se asegure el reintegro por medio de fianza bastante" (455)

Distinguimos dentro de este Capítulo, relativo a regular la problemática que plantean los buques extranjeros, surtos en puertos españoles, una serie de concesiones o derechos a favor de los países donde están abanderados los primeros, y unas medidas cautelares que el legislador español reservó en beneficio propio.

1.- Derechos o Privilegios a favor de buques extranjeros.

Los esquematizaremos del siguiente modo:

- a) Derecho de entrada y acogimiento en puerto español (art. 36 ap. 1)
- b) Derecho de auxilio en caso de arribada forzosa (art. 36 ap. 2)
- c) Derecho de recuperación de los tripulantes desertores, - de resti

(455) Enciclopedia Jurídica Española (Voz Extranjería). R.D. de 17 de noviembre de 1.852, pág. 550.

tución por las autoridades españolas - o lo que es igual, la no concesión de asilo por parte del Estado español (art. 36 ap. 3)

- d) Derecho a obtener el auxilio de las autoridades españolas, en los casos de incidentes de la tripulación, que ataquen exclusivamente la disciplina interior del buque (art. 39, ap. 2).
- e) Derecho al auxilio de las autoridades de Marina Españolas en caso de naufragio, a fin de obtener el salvamento de las personas del buque y de su carga (art. 40 ap. 1).
- f) Privilegio de exención del pago de costas o derechos procesales, en las actuaciones, expedientes o procedimientos que se incoen con ocasión de un naufragio o salvamento. (art. 40 ap. 3). Igualdad de trato que al español.
- g) Privilegio de equiparación de trato con el español, en caso de - naufragio, limitándose a satisfacer el propietario del buque, los gastos que se causen por razón del salvamento del mismo (art. 40 ap. 4)

2.- Medidas cautelares reservadas a favor de España.

A nuestro modo de ver, pueden delimitarse las siguientes:

- a) No admisión de derecho de asilo en los buques mercantes extranjeros para los criminales españoles (art. 37).
- b) Derecho de extradición por vía diplomática de los criminales espa

ñoles refugiados a bordo de buques mercantes extranjeros surtos en puertos españoles (art. 37 y 38).

- c) Derecho de intervención y conocimiento de las autoridades locales españolas competentes, de los incidentes surgidos en buques mercantes extranjeros, anclados en puertos españoles, que puedan perturbar la tranquilidad pública, o atentar contra la seguridad interior o exterior del Estado español, a fin de precaver y reprimir aquellos excesos. (art. 39).
- d) Derecho de prenda de los efectos salvados del naufragio o aseguramiento bastante en su defecto, de los gastos habidos con ocasión del salvamento (art. 40 y último inciso).

No puede ser más razonable por parte del legislador español, la adopción de las medidas "ad cautelam", que hemos apuntado en párrafos precedentes, habida cuenta el carácter mínimo de las mismas, y sobre todo valorando debidamente la relevancia de las concesiones hechas a los buques extranjeros respecto de nuestra patria. Piénsese que no glosamos un Tratado en el que dos partes contratantes, con intereses contrapuestos o distintos, tratan de conseguir en beneficio propio las mayores ventajas, sino que por el contrario estamos ante una norma con rango de Real Decreto, competencia exclusiva del legislador español y cuyo texto ha sido redactado - o debido redactarse - sin ingerencias o presiones extrañas. Con es

ta última consideración queremos resaltar la trascendencia de las ventajas dispensadas por España, sin obtención de contraprestaciones recíprocas.

Las disposiciones del capítulo 4º del decreto de extranjería se refieren a los buques extranjeros; puede aceptarse que aquí se ha seguido "el mismo sistema respecto a los individuos en el interior del reino, distinguiéndose siempre con cuidado lo que es propio de la policía administrativa y preventiva, de lo que es del orden judicial; y lo que verdaderamente afecta a la nacionalidad de los países extranjeros, de lo que no tiene representación ni carácter alguno en este concepto. Así se vé, por ejemplo, que por los artículos 37 y 38 se establece una notable diferencia entre los buques extranjeros mercantes y los de guerra, respecto al caso en que un criminal español se refugiase en ellos. En los primeros no se respeta este asilo, procediendo a la extradición la autoridad local de acuerdo con el cónsul; en el segundo debe reclamarse por la vía diplomática, con sujeción a tratados y leyes vigentes. (456). ¿Cómo se explica esta distinción? En que el buque de guerra representa a la nación a la que pertenece, y en prueba de ello ostenta su pabellón, que ha de ser respetado por los demás, so pena de orrogarse colisiones diplomáticas

(456) A. "El Fuero de Extranjería" (El Faro Nacional, Rev. de Jurisprudencia, de Admón y de Tribunales) 29 de mayo de 1853, nº 196. pág. 104.

graves; en cambio, los buques mercantes no representan sino empresas particulares, sin condición pública de ninguna especie.

CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES

Por lo que respecta a "las disposiciones generales que forman el último decreto, lo declaran inaplicable a las provincias de Ultramar, en atención a que rigen en ellas disposiciones especiales sobre este punto; y otro tanto se establece respecto a los súbditos de la sublime puerta, los moros de Marruecos y los de las regencias berberiscas, que deben ser juzgados por los respectivos cónsules, en los negocios que entre ellos ocurran, refiriéndose a lo estipulado en los tratados y disposiciones vigentes, y guardándose las leyes de reciprocidad que rigen en esta parte" (457)

Resulta comprensible que en el art. 45 se determine que los cambios de nacionalidad - mediante naturalización - tanto de los extranjeros, como de los españoles, no eximirá del cumplimiento de las obligacio-

(457) Ibid. A. "El Fuero de Extranjería" (Rev. El Faro Nacional). op. cit. pág. 604.

nes inherentes a la nacionalidad primitiva, cuando dicha mutación tenga lugar sin la autorización del Gobierno respectivo. Con dicha medida preventiva se pretendía evitar cambios de ciudadanía, que fuesen motivados por la finalidad de sustraerse al servicio militar.

JUICIO CRITICO

Con carácter general, nuestros tratadistas han visto con malos ojos la existencia de Fuero privilegiado para los extranjeros, por entender entre otras razones que era un atentado a la soberanía española, impuesto mediante presiones diplomáticas.

Un autor anónimo puntualizó que el fuero de extranjería es una de esas instituciones que "basadas en el egoísmo nacional y en la desconfianza que cada país tiene en la manera como se haya de ejercer en los otros la justicia con los individuos procedentes del suyo, debería desaparecer ante otro sentimiento más noble y digno, que va desarrollándose a favor de la civilización moderna, y va ganando terreno en todas las naciones cultas de la Europa" (458).

El Fuero de Extranjería, afirma un internacionalista contemporáneo, al menos por lo que se refiere a su primera época, la constitución y desa

(458) A. "El Fuero de Extranjería" (El Faro Nacional, Rev. de Jurisp. de Admón, de Tribunales y de Instrucción Pública, 24 de julio de 1853, nº 212, pág. 89.

rollo del fuero de extranjería estuvo en función de las presiones, diplomáticas o convencionales, llevadas a cabo por las entonces Potencias dominantes. De este modo, pues, los asuntos de orden privado suscitados en España por ciudadanos extranjeros llegaron a convertirse en asuntos de Cancillería, de tal forma que, en este como en tantos otros aspectos, no regía en realidad, un auténtico derecho de extranjería español, sino más bien la circunstancial reacción política del Ministerio de Estado, ante la reclamación del Gobierno extranjero de turno" (459).

Será oportuno tener presente que en definitiva, el fuero de extranjería supuso una jurisdicción privilegiada, esto es, un beneficio mediante el cual se otorgaba a los extranjeros en España un iudex privativo. "Tal beneficio, comprensible en tanto que actuó cumplido por la figura del juez conservador, perdió parte de su genuino sentido al asimilarse, mutatis mutandi, al llamado fuero militar. De hecho, al igual que sucedió con otros muchos fueros privilegiados, el de extranjería acabó por convertirse en un medio manipulado para entorpecer el funcionamiento normal de la administración de justicia" (460).

La implantación y posterior subsistencia del Fuero de Extranjería, comportó a juicio de algún comentarista decimonónico varias consecuencias:

(459) PECOURT GARCIA, E.op. cit. pág. 900.

(460) Ibid, op. cit. pág. 900.

1º Que dicho fuero es renunciable lo mismo que cualquiera otro cuya renuncia no esté prohibida por la ley, y, que puede por tanto, someterse -- bien sea tácita, bien expresamente, a favor de los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria, pero no de otra especial, en virtud de lo prescrito por los últimos párrafos de los artículos 3º y 4º de la Ley de Enjuiciamiento civil; 2º que no pueden gozar de dicho fuero, las empresas establecidas en el extranjero para los negocios que tengan en nuestra nación. 3º y, finalmente, que en las demandas sobre bienes de extranjeros debe tenerse en consideración el fuero de estos y no el de sus apoderados o representantes, cualquiera que sea el que a los últimos corresponda. (461).

Puede colegirse que si bien teóricamente, el artículo 30 del Real Decreto de 1852, mantuvo el Fuero de Extranjería en nuestra Patria, con -- una fórmula bastante amplia, esto es, aplicable tanto a los extranjeros -- domiciliados, como a los transeúntes, y en los pleitos y causas dirigidos contra aquellos -- sin más limitaciones que las determinadas en el art. 31 regulador de los casos de desafuero --, no es menos cierto que nuestro Alto Tribunal aplicó con criterio muy selectivo la posibilidad de gozar de la vía excepcional de Fuero, abundando por ende la práctica de remitir --

(461) J.L.F. "El Fuero de Extranjería" (Rev. Gen. de Leg. y Jurisp.) pág. 42 y sig.

las litis a la competencia de la jurisdicción ordinaria. No puede pre-
terirse a mayor abundamiento, que desaparecida la figura del Juez Con-
servador según R.D. de 21 de diciembre de 1.759 y Reales Ordenes con-
cordantes de 1.760, 1.772, 1.775, 1.781, suplida por los gobernadores
de las plazas marítimas o los capitanes generales en su caso - criterio
ratificado por el R.D. de 1.852 - no se instauró por ello un Fuero mi-
litar a favor del extranjero, sino que estas últimas autoridades se -
convirtieron en un sucedáneo del Juez Conservador, sin imprimir por -
ello especial sello militar a su administración de justicia; el cargo -
militar en suma no determinaba por se que el Fuero se convirtiese en ju-
risdicción castrense. La jurisdicción seguía siendo civil - de carác-
ter extraordinaria - si bien servida por autoridades militares.

- - - - -

d

S U M A R I OPARTE SEGUNDAVOLUMEN SEGUNDOANALISIS SISTEMATICO DE LA NORMATIVA SOBRE EL FUERO DE EXTRANJERIA

	<u>Páginas</u>
ADVERTENCIA PRELIMINAR.	2
<u>EL FUERO DE EXTRANJERIA EN ESPAÑA DURANTE</u> <u>LA DINASTIA DE LA CASA DE AUSTRIA.</u>	
<u>REINADO DE FELIPE III.</u>	3
<u>Instauración del Fuero de Extranjería en los Ca-</u> <u>pítulos de Privilegios concedidos por Felipe III</u> <u>para la Hansa Teutónica el 28 de Septiembre de</u> <u>1.607.</u>	
1. Introducción.	
2. El Fuero de extranjería strictu sensu. Jurisdicción Privilegiada de los Hanseá- ticos.	
2.1. Creación del Juez Conservador de los Hanseáticos.	
2.2. Extensión de la Jurisdictio.	
2.3. Recurso de Apelación.	
2.4. Justicia rápida.	
2.5. Garantías en la detención y prisión.	

- 2.6. Cosa juzgada.
- 2.7. Sanción por vulneración del Fuero de Extranjería.
- 3. El Fuero de Extranjería lato Sensu. Jurisdictio complementaria.
 - 3.1. El cónsul.
 - 3.2. Protección del Comercio Hanseático: La Lonja.
- 4. Privilegios del Ius Communicationis.
- 5. Privilegios de Comercio y Aduana.
- 6. La Cláusula "In dubio pro Hanseático"
- 7. Privilegios personales.
 - 7.1. Derecho de construcción de casas.
 - 7.2. Exoneración del Servicio militar y del pago de tributos.
 - 7.3. Inmunidad temporal de personas y bienes en caso de guerra. 4

Legislación complementaria de los Capítulos de Privilegios de Felipe III concedidos a los Hanseáticos el 28 de septiembre de 1.607.

Transacción ajustada entre Felipe II y las Ciudades Hanseáticas el 7 de noviembre de 1.607.

- 1. Introducción.
- 2. Libertad de comercio recíproca.
- 3. Restricción a las exportaciones españolas.
- 4. Exención a los Hanseáticos del derecho del Treinta por Ciento.
- 5. Inmunidad de personal y de bienes en caso de guerra. 22

III.

REINADO DE FELIPE IV. 33

Instauración del Fuero de Extranjería de los Ingleses. Real Cédula de Felipe IV de 19 Marzo 1645.

1. Introducción.
2. Vigencia de la ordenanza de Sevilla.
3. Garantías jurídico-procesales.
4. Liberalidad en materia religiosa.
5. Trato benévolo en materia de libros de Comercio.
6. El Fuero de Extranjería stricto sensu.
Creación de Jurisdicción propia: El Juez Conservador.
 - 6.1. Competencia geográfica.
 - 6.2. Función.
 - 6.3. Monopolio en primera instancia.
 - 6.4. Jurisdicción retribuida.
 - 6.5. Vigencia y fuerza de la Cédula Real. . . 34

Real Cédula de Felipe IV de 26 Junio 1645 de confirmación y desarrollo del Fuero de Extranjería concedido a los ingleses el 26 de junio de 1.645.

1. Introducción.
2. El Fuero de Extranjería Stricto Sensu.
 - 2.1. El Juez Conservador. Función. 49

Real Cédula de Felipe IV para los mercaderes ingleses de 9 de noviembre de 1.645, de confirmación y desarrollo del Fuero de Extranjería.

1. Introducción.

2. Privilegios jurisdiccionales: El fuero de Extranjeria Stricto Senu. El Juez Conservador.
3. El Fuero de Extranjeria Lato Senu.
 - A) Privilegios económicos.
 - B) Privilegios personales.
 - C) Privilegio arrendaticio.
4. Resumen y juicio crítico.

57

Tratado de Comercio entre España y las Ciudades Hanseáticas otorgado en Munster el 1/11 de Septiembre de 1.647

- A) Tratado de Munster.
- B) Confirmación de 26 de enero de 1648.
 1. Confirmación y ampliación de los Privilegios.
 - 1.1. Privilegio Jurisdiccional. Fuero de Extranjeria Stricto Senu. Juez Conservador de los Hanseáticos.
 - 1.2. Fuero de Stranjeria Lato Senu. Privilegios personales de Hanseáticos.
 - 1.3. Privilegio de comercio.
 - 1.4. Privilegio de exógesis.
 - 1.5. Juicio crítico.

73

Tratado de paz y comercio entre España y los Estados Generales de las Provincias Unidas, ajustado en el Congreso de Munster de 3o Enero 1.648.

1. Declaración de paz y reconocimiento de soberanía.
2. Efectos de la Paz.
3. Concesión de Privilegios.

4. Privilegios jurisdiccionales.
5. Privilegios personales.
6. Privilegios de comercio.
7. Privilegios fiscales.
8. Garantías de cumplimiento.
9. Juicio crítico. 90

CARLOS II. 107

Tratado de paz y comercio entre España e Ingla-
terra ajustado en Madrid el 17 diciembre de 1665

1. Introducción.
2. Propósito del Tratado.
3. Clases de privilegios: El Fuero de Extran-
jería stricto sensu.
 - 3.1. Privilegio jurisdiccional.
 - 3.2. Privilegio personales.
 - 3.3. Privilegios de comercio.
 - 3.4. Privilegios fiscales.
4. Garantía de vigencia del Tratado.
5. Juicio crítico. 108

Tratado de Paz, Alianza y Comercio entre España
e Inglaterra, de 23 mayo 1667.

Introducción.

1. Privilegio Jurisdiccional: El Fuero de Ex-
tranjería stricto sensu. Juez Conservador.
2. El Fuero de Extranjería lato sensu.
 - 2.1. Privilegios personales.
3. Privilegios de comercio.
4. Privilegio de libre comunicación y tránsito.

5. Privilegio de igualdad fiscal que a los espa	
ñoles.	
6. Privilegio de Consulado.	
7. Privilegio de exención del derecho de aubana.	
8. Privilegio de libertad religiosa.	
9. Juicio crítico.	126

Tratado de paz entre España y Portugal ajustado en Lisboa a 13 de febrero de 1668.

Introducción.

1. Ratio essendi del Tratado. Instauración de la Paz.

1.1. Efectos de la paz.

- a) Devolución de prisioneros.
- b) Restitución de haciendas.
- c) Reparación de daños.
- d) Promesas de paz.
- e) Renuncia a Leyes y Costumbres contra
- rias a la Paz.
- f) Ratificación de la paz.
- g) Publicidad.

2. Tipología de Privilegios.

2.1. El Fuero de Extranjería stricto sensu: Privilegio Jurisdiccional. El Juez Con

servador.

2.2. El Fuero de Extranjería lato sensu. Pri

vilegios personales.

2.3. Privilegios de comercio.

Juicio crítico.	148
-------------------------	-----

Capítulos ajustados entre la villa de Santander y
los comerciantes ingleses el 12 septiembre de 1700.

Introducción.

1. El Fuero de Extranjería stricto sensu.
2. El Fuero de Extranjería lato sensu.

Privilegios Personales.

Privilegios fiscales-aduaneros.

Privilegio en caso de guerra.

Privilegio de comercio.

Juicio Crítico. 158

CASA DORDONICA

REINADO DE FELIPE V. 176

Tratado de Comercio concertado entre España e In-
glaterra el 13 julio 1.713 en Madrid.

1. Introducción.

2. Memoria.

3. Clasificación de Privilegios.

3.1. Fuero de Extranjería stricto sensu.

Privilegio jurisdiccional.

3.2. Fuero de Extranjería lato sensu. Pri-
vilegios personales.

3.3. Privilegios fiscales.

4. Propuestas inglesas de privilegios inaccepta-
das por España.

5. Juicio crítico. 177

Tratado de comercio y amistad entre España y Gran
Bretaña de 9 de diciembre 1.713. (Congreso Utrech)

Introducción.

VIII.

1. El Fuero de Extranjería stricto sensu.
Privilegio jurisdiccional.
2. El Fuero de Extranjería lato sensu.
Privilegios personales.
3. Privilegios fiscales.
4. Cláusula con trato de nación más favorecida.
5. Obligaciones de los súbditos ingleses.
6. Obligaciones recíprocas de ingleses y españoles
7. Garantía de cumplimiento del tratado.
8. Vigencia del Tratado.
9. Juicio crítico. 204

Tratado de Paz y Amistad entre España y los Estados
Generales de las Provincias Unidas de los Países
Bajos ajustado en el Congreso de Utrech el 26 de
junio de 1.714.

1. Introducción.
2. Efectos de la Paz.
3. Privilegio jurisdiccional.
4. Privilegios Personales.
5. Privilegios de comercio.
6. Privilegios fiscales.
7. Cláusula con tratodde nación más favorecida.
8. Garantía de cumplimiento del tratado.
9. Juicio crítico. 225.

Tratado de paz y amistad entre España y Portugal;
en Utrech el 6 de Febrero de 1.715

1. Introducción.
2. Declaración de Paz.

- 2.1. Efectos de la paz.
- 2.2. Tipología de privilegios.
 - a) Privilegio jurisdiccional.
 - b) Privilegios Personales.
 - c) Privilegios de comercio.
- 3. Fuerza y vigor del Tratado.
- 4. Juicio crítico. 246

Tratado de España y de Inglaterra en Madrid el 14
de diciembre de 1.715, explanatorios de los de Paz
y Comercio ajustado en 1.713.

- 1. Introducción.
- 2. Tipología de privilegios.
 - 2.1. Privilegio jurisdiccional.
 - 2.2. Privilegios fiscales.
 - 2.3. Privilegios de comercio.
- 3. Ratificación del Tratado de Utrech de 1713.
- 4. Juicio Crítico. 260

Tratado de Comercio y de Navegación entre el Rey de
España Felipe V y el Emperador de Alemania Carlos VI
en Viena el 1 de mayo de 1.725.

- 1. Introducción.
 - 1.1. Instauración de la paz.
 - 1.2. Efectos de la paz.
 - a) El ius communicationis.
 - b) Tipología de privilegios.
 - 1. Privilegio jurisdiccional.
 - 2. Privilegios personales.
 - 3. Privilegios de comercio.
 - 4. Privilegios fiscales. 268

Tratado de España y Dinamarca de 18 julio 1.792, en
el REal Sitio de San Ildefonso.

1. Introducción.
2. Tipología de Privilegios.
 - 2.1. Privilegio Jurisdiccional.
 - 2.2. Privilegios personales.
 - A - Protección del ius communicationis.
 1. Derecho marítimo a recalada.
 2. Límites en la aproximación de buques de guerra.
 - B - Derecho a la intimidad en casas y haciendas.
 - C - Protección jurídica.
 1. Seguridad personal
 2. Derecho a servirse de abogados y procuradores.
 3. Vía voluntaria del Consulado.
 4. Exoneración del derecho de aubana
 5. Inmunidad temporal ante el casus belli
 6. Auxilio de naufragio.
 7. Exención del servicio militar.
 - 2.3. Privilegios de comercio.
 - A - Privilegio de libre comercio
 - B - Privilegio de no exhibición de libros
 - 2.4. Privilegios fiscales.
 - A - Exoneración fiscal.
 - B - Reducción de tarifas.
 - C - Reducción de trámites aduaneros.
3. Juicio crítico. 301.

Tercer Pacto de Familia entre los Reyes de España
y Francia, en Paris, de 15 de agosto de 1.761.

1. Introducción.

2. Política del "alter ego" estatal. Declaración de amistad e identidad de vínculos familiares.

2.1. Instrumentación de la política de familia.

- a) Mantenimiento de límites territoriales
- b) Unidad política ante el casus bello.
- c) Delimitación de los auxilios bélicos.
- d) Identidad de criterio en las Conclusiones de Paz.
- e) Prorratado de pérdidas guerreras.
- f) Notificación recíproca de otras alianzas.

3. Privilegio jurisdiccional

4. Privilegios personales.

5. Privilegios mercantiles y fiscales.

6. Juicio crítico. 324

REINADO DE ISABEL II 340

Real Decreto de Extranjería de 17 Noviembre 1.852.

1. Introducción.

Capítulo I: De los extranjeros y su clasificación en España.

Capítulo II: De las disposiciones que han de observarse para el ingreso y residencia de los extranjeros en España.

Capítulo III: De la condición civil de los extranjeros domiciliados y transeúntes; sus derechos y obligaciones.

1. Introducción.

2. Privilegios y derechos del extranjero en España.

3. Obligaciones personales que afectan a los extranjeros en España.
4. Prohibiciones que afectan a los extranjeros - en España.

El Fuero de Extranjería Strictu Sensu en el R.D. de 1.852.

1. Normativa.
2. Interpretación restrictiva del Fuero de Extranjería.
 - 2.1. Criterio legal limitativo. Casos de Do safuero.

Capítulo IV: De los buques extranjeros.

1. Derechos y Privilegios a favor de buques extranjeros.
2. Medidas cautelares reservadas a favor de España.

Capítulo V: Disposiciones generales.

Juicio Crítico. 341

- - - - -

R. 175.449



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5317380421

TE
1631

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

FACULTAD DE DERECHO

RECOPILACION DE NORMATIVA SOBRE EL FUERO

DE EXTRANJERIA

VOLUMEN III



Tesis doctoral: "EL FUERO DE EXTRANJERIA
EN ESPAÑA",

por JOAQUIN BLANCO ANDE

Director de la Tesis: Dr. D. FERNANDO M^a
CASTIELLA MAIZ

Septiembre de 1.975.

1.2966567X

ADVERTENCIA PRELIMINAR

En el presente volumen, se recoge por riguroso orden cronológico, la normativa más trascendente dictada sobre el Fuero de Extranjería, desde su implantación en 1.607 hasta el 6 de diciembre de 1.868, fecha en que fué - abolido. El objeto de la presente recopilación, no es otro, que facilitar - al amante y estudioso de esta temática, la búsqueda de fuentes, con la espe- ranza de que nuevos textos contribuyan a delimitar más exhaustivamente, - aquella sugestiva institución jurídica.

En aras de la brevedad, en aquellas disposiciones que solo tange- cialmente se refieren al Fuero de Extranjería, se inserta la parte concreta que al mismo fué aplicable.

CAPITULOS DE PRIVILEGIOS CONCEDIDOS A LAS CIUDADES CONFEDERADAS
DE LA HANSA TEUTONICA, Y A SUS SUBDITOS, CIUDADANOS, Y VECINOS,
EN LOS DOMINIOS DE PORTUGAL, CONFIRMADOS Y AMPLIADOS POR SU MA-
JESTAD CATHOLICA PARA LA ANDALUZIA, Y DEMAS REYNOS DE CASTILLA,
EN MADRID A 28 DE SEPTIEMBRE DE 1607, (SIMANCAS, COPIA DE FU -
TRADUCCION CASTELLANA.) (1)

Nos Phelipe, por la grazia de Dios, & c. Hazamos notorio, y firme por
tenor de los Presentes á toda la posteridad, que los merces passados las Ciuda-
des confederadas de la Hanfia Teutónica, nos embiaron sus Embaxadores N.N.N.N.
para que officiosamente nos dieffen el parabien del feliz gobierno de nueſtros
Reynos, y renovaffen la memoria de su obſervancia, y antigua amistad con noſo-
tros, pidiendo les correfpondieſſemos con reciproca benevolencia, y obtuvieſſen,
entre otros sus Privilegios, que les concedieron los Reyes de Portugal nueſ-
tros antecesseores, la confirmación, y extension de otros en nueſtros Reynos.
Y haviendo oído, y tratado grata, y benevolamente a estos Embaxadores, acor-
dándonos de los tiempos passados, y quan preciamamente ha merecido siempre -
con nosotros, y nueſtros Reynos la Hanfia Teutónica, haviendo desde que se co-
menzó el Comercio entre nosotros, permanecido siempre en lealtad, y correfpon-
dencia, comunicándonos no solamente las utilidades de sus mercaderías, fino -
que también ha empleado su vida, y derramado su sangre, no sola una vez, por
la seguridad de nueſtros Reynos; y así acordándonos de todo esto, hemos juz-

gado, que haviendo ellos cumplido por su parte, no hemos de ser tardos en ser agradecidos. En primer lugar les hemos confirmado pleníffimamente los Privilegios de Portugal con parecer del Consejo de aquel nuestro Reyno, como mas legítimamente parece del Diploma desta confirmación. Demás desto, habiendolo comunicado con los Principales de nuestro Reyno de Castilla, y examinado atenta, y diligentemente en el Consejo Secreto de Estado, que todo lo que en este tiempo no pudimos conceder, juzgamos con todo effo haverse de conceder en parte alguna; en cuya conformidad hizimos facer ciertos Capítulos de los Privilegios de Portugal, que determinamos conceder también en nuestra Castilla a los Hanseaticos, segun por este nuestro Diploma, con plena noticia de la causa de cierta ciencia, y plenitud de nuestra Regia potestad, damos, y concedemos todos los infraescriptos Capítulos de los Privilegios a las Ciudades Confederadas de la Hanfia Teutónica, y à todos los Subditos, Ciudadanos, y Vecinos dependientes dellas en nuestra Castilla, y Reynos, para que perpetuamente los posean, y gozen dellos.

1. Primeramente aprovamos, queremos, y concedemos, que los Hanseaticos puedan arribar a todos los puertos del dicho nuestro Reyno, Riveras, y Distritos, libre y seguramente, sin Passaporte, ò otra Licencia general, ò especial en los Navios, así propios, como arrendados, y qualquier bienes, y mercaderías

(1) ABREU y BERTODANO, J.A. "Colección de los Tratados de Paz, Alianza, Neutralidad,... hechos por los pueblos, Reyes y Príncipes de España desde antes del establecimiento de la Monarquía Gothica hasta el feliz reinado de Rey N.S.D. PHELIPE V. (Reinado del Sr. Rey D. PHELIPE III. Parte I). Madrid, MDCCXL, pág. 375 a 382.

rias de todo género, y detenerse en ellos lo que les pareciere, y salir dellos quando quifieren.

2. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que de aqui adelante, ningunos Soldados visiten los Navios de los Hanfeaticos; y si acafo el Theforero Mayor de nuestro Reyno, o los mismos Alcavaleros quifieren embiar algunas Guardias a los Navios, aya de ser a su costa, fin que permitan, que saquen, ni pidan cosa alguna a los Hanfeaticos.

3. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que nuestros Ministros no les saquen las mercaderias de sus Navios; sino que primero requieran a los Maestros de los Navios, y Dueños de las mercaderias, las descarguen; y si acafo se hallaren en la Ciudad, tres horas antes.

4. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que los Hanfeaticos puedan depositar sus mercaderias, sacadas de los Navios, en nuestro Almacen por espacio de un año, y un dia; y si en el interin el Almacen se hallare embarazado con algunas mercaderias, en este caso se depositen en alguna Casa vecina, poniendo dos cerraduras, teniendo una llave nuestro Arrendador, y la otra, el Dueño de la mercaderia, así se aseguren; no estando obligados los Dueños de las mercaderias a pagar Alcavala de ellas hasta pasado el año, y el dia; y en este interin, puedan entrar en el Almacen siempre que quifieren, y visitar sus mercaderias.

5. Pero si los Hanfeaticos quifieren pagar luego la Alcavala, en este caso aprovamos, queremos, y concedemos, que los despachen en nuestro Almacen antes que a ninguno.

5.

6. Item aprovamos, queremos, y concedemos, que los Hanfeaticos no paguen derechos ningunos del Oro, y Plata, del Trigo, del Maderamen, de que se fabrican los Navios, y Maestiles, y Antenas dellos, y de las municiones Militares, como son Mosquetes, Arcabuzes, Polvora, Balas de hierro, y plomo, y de qualesquier formas, y materiales, de que ellas se componen, y son necesarias para su uso, y manejo.

7. Juntamente aprovamos, queremos, y concedemos, que los Hanfeaticos, que vinieren a Sevilla, y a los demás Lugares Marítimos, no paguen ninguna Alcavala de la comida, ni bebida, ni de sus vestidos, fundas, ni cubiertas de sus mercaderías.

8. Item aprovamos, queremos, y concedemos, que de las mercaderías que truxeren (que arriba no se han expuesto) paguen ocho por ciento en nombre de Alcavala, y cinco por ciento en nombre de Almojarifazgo, y sobre esto no se les pida cosa alguna.

9. Item aprovamos, queremos, y concedemos, que nuestros Theforeros, o Arrendadores no precien en más las mercaderías de los Hanfeaticos, que en realidad de verdad valen; y que los mismos Arrendadores, o nuestros Theforeros estén obligados a recibir en pago de la Alcavala las mercaderías tasadas, y pagar a los Dueños dellas lo que fuere.

10. Item aprovamos, queremos, y concedemos, que los Hanfeaticos puedan muy libremente andar por todo nuestro Reyno, y traer lo que tuvierén, en Cavallos, Mulas, ó Carros, y negociar, contratar, comprar, y vender, así por sí,

como por sus Agentes, y Factores, como mas facil, y comodamente les pareciere.

11. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que los mismos Hanfeaticos pongan precio a sus mercadurias, y no las precie otro ninguno; y les sea lícito comprar en lo menos que pudieren, y vender en quanto mas pudieren.

12. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que puedan los Hanfeaticos poner a sus contratos corredores, o abstenerte dellos; y si alguno juzgaren poner, pongan el que les pareciere.

13. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que los Hanfeaticos puedan vender sus mercadurias quando, y à quienes quisiere; ni estén obligados a mostrar la venta de las libres de alcavala, fino es de aquellas, que están sujetas à ella, y haviéndola pagado una vez.

14. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que puedan los Hanfeaticos llevar, y dividir por todo el Reyno sus mercadurias libres de Alcavala, y las otras, de que una vez la huvieren pagado; y no tengan necesidad de pagar nuevamente dellas, ò obtener licencia para llevarlas.

15. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que los Hanfeaticos puedan tener en su casa Peño, o Romana, con que privadamente pesen sus mercadurias pero de tal manera, que el Comprador no esté obligado a pasar por este genero de Peño, fino que, si deseara otro, se aplique el publico en los contratos.

16. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que las mercadurias, que los Hanfeaticos hubieren vendido, y entregado, se tengan por buenas, y no aya lu-

gar de bolverlas, ni minorarlas de precio, fino que el Comprador dentro de -
tres días se quexe de su falta.

17. Item aprovamos, queremos, y concedemos, que si los Hanfeaticos de
fearen labrar moneda en nuestro Reyno de su oro, y plata, siempre sean despa
chados antes que otros en la Casa de la Moneda.

18. Item aprovamos, queremos, y concedemos, que los Hanfeaticos, que
por razón del Comercio van y vienen, o se detienen, y habitan en nuestro Rey
no, no puedan ser presos, citados, condenados, ni juzgados en ninguna Causa
Civil, ni Criminal por ningún Magistrado, o Juez, fino solamente por aquel -
especial Conservador, y Juez, que les daremos; pero en las Causas tocantes à
nuestra Alcavala, podrá conocer, y juzgar el Thesorero Mayor de nuestro Reyno.

19. Item aprovamos, queremos, y concedemos, que no sea lícito a nin
gún Magistrado, o Juez de qualquiera dignidad, o preeminencia que sea, fino
solamente à su Conservador, y Juez propio, visitar sus Casas, ni registrar -
sus Tiendas; pero en caso que algún malhechor, huyendo del delito, se acogie
re à ellas, podrá requerirlas el Ministro de Justicia, que le figure.

20. Item aprovamos, queremos, y concedemos, que quando el Thesorero -
Mayor de nuestro Reyno deseara visitar las Casas, y Tiendas de los Hanfeati
cos, por tener indicios bastantes de que en ellas ay mercaderías escondidas,
de que se paga Alcavala, y que las han eximido de ella; lo pueda hazer sola
mente su propio Juez, enviando, algunos de los suyos con el Notario Público,
para hazer la visita, y averiguación, y después lo refieran al Thesorero; y

afsi à nadie le fea licito hazerlo fin el Notario, y fin la voluntad de fu -
Confervador.

21. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que el Juez (que efpecial
hemos dicho les daremos) juegue en qualquiera Caufa Civil, y Criminal, no fo-
lamente dentro dellos muros de nueftra Ciudad de Sevilla, fino también fuera
de ellos, feis loguas alrededor, ora fean los Hanfeaticos Actores, ora Reos;
exceptas solamente las perfonas privilegiadas, fi con ellas fe tratare algu-
na controversia, b pleyto; porque en efte cafo, fi las perfonas privilegia-
das padecieren las partes de Reos, podrán parecer delante de fu Juez.

22. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que la Sentencia dada por
fu Juez, fi los Litigantes fueren ambos Hanfeaticos, pueda la parte vencida
llevar, y apelar della a la Hanfia Teutónica; pero fi el pleyto fuere decidi-
do entre Hanfeático, y otro Subdito de nueftro Reyno, o Eftrangero, fe pue-
da apelar a nueftro Confejo Civil de Sevilla.

23. Iten aprobamos, queremos, y concedemos, que no fea licito apelar
de fimple Interlocutoria, ni tampoco de la Sentencia definitiva; fino es que
la fuma juzgada excediere de cien ducados.

24. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que en aquel cafo, en que
la Sentencia paffare por apelación a nueftro Confejo Real, el Prefidente de
nueftro Confejo, o Governador cometa toda la Caufa a dos Letrados, y fi fue-
re neceffario, a tres; y à lo fumo, a quatro, los quales no folamente exami-
nen diligentemente la Sentencia definitiva, fino también todas las Interlocu-

torias de la primera instancia; y despues ellos mismos pronuncien definitivamente lo que fuere de derecho; y de este juicio ninguna pueda más apelar.

25. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que las Causas de los Hanfeaticos se despachen aprieffa, y no se alarguen cosa ninguna.

26. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que quando por algun delito fuere necesario llevarlos a la Carcel, en este caso fu mismo Juez los lleve a ella; y si la Causa fuere tal, que aya lugar de tomar fianzas, las admita siempre el Juez sin dificultad, y que se proceda a prision sin grande y urgente causa.

27. Iten aprovamos, queremos y concedemos, que compete solamente la - ejecución de la cosa juzgada al propio Juez, y Conservador de los Hanfeaticos; y también, si se huviere juzgado por él, o por nuestro Thesorero en las Causas de Alcavala, o por los Juezes de Apelaciones en nuestro Reyno.

28. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que sea licito a los Hanfeaticos edificar Casas, y Tiendas dentro, y fuera de los Muros de nuestra - Ciudad de Sevilla; y que de ninguna manera se los haga molestia en sus personas, o mercaderías; ni sus Casas, ni Tiendas se embarazen con Hospedes, o Cavalgaduras.

29. Iten aprovamos, queremos, y concedemos; que qualquiera de las - Ciudades Hanfeaticas, que vivieren en nuestro Reyno, sean totalmente libres, y immunes de todos los Oficios, assi Patrimoniales, como Personales; y en especial del cargo de Tutela, y de todo Escote, Penfión, y Tributo, tan ordina-

rio, como extraordinario; y también de todo servicio, y milicia, así en la Mar, como en la Tierra.

30. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que quando fuciere, que alguno de los Hanfeaticos muriere en nuestro Reyno, o yendo a él, espirare en la Mar, y llegaren los bienes a nuestro Reyno; que estos bienes inventarié fu Juez, y Conful constituido, y dos, los más ancianos de la misma Nación por un Notario Público, y se entreguen al Conful, y á los más Señores, para que los guarden; y ellos mismos los restituyan a los herederos fielmente, y fin ninguna carga.

31. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que sea lícito a los Hanfeaticos llevar sus mercaderías que hubieren traído, y aún no vendido, pagada una vez la Alcavala, conforme al tenor de los Privilegios, fuera del Reyno otra vez a su casa, o adonde quifieren, fin ningún embarazo.

32. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que paguen tan folamente cinco por ciento al Almojarifazgo de las mercaderías compradas en nuestro Reyno, y que los Hanfeaticos hubieren de sacar, excepto de los Olores, de que no se acostumbra pagar cosa alguna.

33. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que los Olores comprados, o los lleven luego a sus Navios, o los guarden en sus Casas, para llevarlos a ellos, quando más comodo les pareciere.

34. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que puedan llevar sus mercaderías en los Navios que quifieren.

35. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que sea licito a los Hanfeaticos poder llevar fuera de nuestro Reyno todo el Oro y plata que huvieren juntado, pues toda la moneda de Oro, y Plata la havrán amontonado, o del Oro y plata, o del Trigo, o de las Municiones Militares que huvieren vendido.

36. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que puedan llevar cambio del dinero, que no huvieren empleado.

37. Iten aprovamos, queremos y concedemos, que quando (lo que Dios no quiera) los Hanfeaticos huvieren de salir del Reyno por ocasion de la Guerra, lo puedan hazer esto licitamente, assi ellos, como sus Agentes, y Ministros, con todos sus bienes, y mercaderias; pero de tal manera, que sean requeridos un año, y un día antes.

38. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que los Hanfeaticos, sus Navios, ni bienes no padezcan embargos en nuestros Reynos, y mucho menos Represalias; fino que los delitos tengan sus autores, y se castiguen por la vía del derecho y uno por otro no pague el delito.

39. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que quando alguno de los Hanfeaticos tuviere quiebra en nuestros Reynos, y Dominios, ninguno de los bienes, y mercaderias, que no huvieren padecido quiebra, o nuestro Fisco, o otro de nuestros Subditos se satisfaga; fino lo que fuere del, se dexa, y se restituya a los que huvieren padecido la quiebra, o a sus Herederos.

40. Iten aprovamos, queremos, y concedemos, que quando se ofreciere ha ver menester algunos Navios de los Hanfeaticos para nuestro servicio, en este

cafo lo participen a fu Conful primeramente los Generales de nueftra Armada, y los otros Cabos; y ante todas cofas fe obtenga el contentimiento de los Marineros; y hecho efto, fe afsiente un jufto medio de eftos Navios; y fegun lo que fe ajuftare, fe entable la racion, o falario, y fe pague fiempre bien, y fe valden los Navios en cierta eftima, y conforme a ella, fi fucediere percer en mi fervicio, fe pague todo el precio a fus dueños.

41. Item aprovamos, queremos, y concedemos, que los Navios en efte cafo no fe detengan en nueftro fervicio hasta el Invierno, fino que los defpidan temprano, y antes que el Mar fe yele, puedan bolver a casa; y fi nueftro fervicio esto no lo permitiere, que fe les dé buena, y comoda invernación en nueftros Reynos, hallandofe forzados á aguardar buen tiempo de navegar; y no les fuceda confumir otiofamente en el Invierno lo que huvieren adquirido honestamente en nueftro fervicio.

42. Item aprovamos, queremos, y concedemos, que los que quebrantaren eftos Privilegios, fean condenados en cien ducados; los quales de tal manera cobre, y pida el Juez, o Confervador de los Hanfeáticos, que la quarta parte dé al Defcubridor, y las otras á los pobres.

43. Item aprovamos, queremos, y concedemos, que pueda la Hanfia conftituir un Conful, ó mas en nueftro Reyno, para que juntamente con el Conferva—dor, y Juez, que fe les diere, haga fe les guarden fus Privilegios, y firmemente fe tengan fus Pactos, y Tranfacciones; y afsi, qualquiera que la Hanfia eligiere, y nombrare, no folamente le confirmaremos de buena gana, fino que tam—

bien le autorizaremos, para que lo estimen nuestros Oficiales, y Ministros, y con tanto mayor fruto exerza su oficio.

44. Item aprovamos, queremos y concedemos, que pueda la Hanfía embiar alguno de los suyos a nuestro Palacio, que le frecuente siempre, y cuida también de que se observen, los Privilegios a los Hanfeaticos y los pactos de los Conciertos se les cumplan.

45. Item aprovamos, queremos, y concedemos, que pueda la Hanfía edificar en nuestra Ciudad de Sevilla una Casa pública, o Residencia, para que florezca mas la mercadería, y tengan Lonja, conforme la tienen en otros Reynos, para que les daremos sitio acomodado; y no los dexaremos de ayudar en sus gastos, y con mayores Privilegios, si fuere necesario, haciéndolo lo más commodamente que se pudiere.

46. Item aprovamos, queremos, y concedemos, que si acaso por esta gracia desde nuestro Concierto, y comunicación de Comercio huviere hecho, o hiziere algunos gastos la Hanfía Teutónica, en que algunas ciudades no quisiere tener parte; que estas mismas Ciudades no sean partícipes de estos Privilegios, hasta que igualmente huviere satisfecho los gastos.

47. Item aprovamos, queremos, y concedemos, que si fuere menester hacer alguna interpretación de estos Privilegios, que siempre la interpretación se haga por los Hanfeaticos, y de ninguna manera contra ellos.

Y así todos los sobredichos Capítulos de Privilegios, cada uno, y de por sí, aprovamos, confirmamos, y de nuevo concedemos a las Ciudades Confede-

radas de la Hanſia Teutónica, y à todos, y cada uno de ſus Subditos, Ciudadanos, y Vecinos, y à los dependientes dellas, en nueſtra Caſtilla, y Reynos, para que perpetuamente los poſſean, y gozen: y prometemos con Palabra Real, de que noſotros, y nueſtros Succeſſores los obſervaremos firmemente, ora tengamos paz, ora Guerra, con los Rebeldes en Flández; no obſtante las Leyes de nueſtro Reyno, Ordinaciones, Sanciones, y qualeſquiera Conſtituciones: para cuya fee, y Teſtimonio, puſimos a eſte nueſtro Diploma, y le firmamos de -
nueſtra mano. Dado en Madrid a 28 de Septiembre de 1607.años.

TRANSACCION AJUSTADA, Y CONVENIDA ENTRE FU Magestad CATHOLICA, Y LOS DIPUTADOS DE LAS CIUDADES CONFEDERADAS DE LA HANSA TEUTONICA, FOBRE EL MODO DE PRACTICAR LOS PRIVILEGIOS DE COMERCIO, QUE LES EFTAVAN CONCEDIDOS: EN MADRID A 7 DE NOVIEMBRE DE 1607. (Simancas, Original) (2)

Sea notorio, y manifiesto à todos en general, y à cada uno en particular, que haviendo embiado las Ciudades de la Confederacion de la Hansa Teutonica los mefes paffados por fus Embaxadores à los Señores Juan Dommano, - Doctor en ambos Derechos, fu Syndico, y Orador, Henrico Broques, Senador de Lubek, Hieronimo Bogler, Senador de Amburgo, y Arnoldo Wanholtten, Senador de Danzik al Rey Nuestro Señor, para que en primer lugar dieffen la enorabuena a fu Magestad, afsi de la felice entrada, y continuacion en el Gobierno de - fus Reynos, como del nacimiento de la Real Serefsion; y para que jutamente - renovaffen los Pactos, y Confederaciones de la antigua amistad, pidiendo la confirmacion, y aumento de los Previlegios antiguos, de que han gozado en - los Reynos, de Portugal, y que fiendo pofsible, fe eftendieffen a los de Caftilla: fu Magestad despues de haber recibido, y oido a los dichos Embaxadores graciosa, y amigablemente, y hecho examinar en fu Supremo Consejo de Eftado, lo que los dichos Embaxadores, afsi de palabra, como por diferentes Eferitos han propuesto, y representado, y lo que fobre todo de una, y otra parte fe -

ha replicado; mirado todo con prudente, y maduro confejio, ufando de fu acoftumbrada benignidad, y clemencia, y particularmente movido del amor, que fiempre ha tenido a las dichas Ciudades, con defearles todo bien, y aumento; ha fido fervido de mandar convenir, affentar, y concertar con los dichos Embaxadores, en nombre de lad dichas Ciudades, lo figuiente.

Lo primero, que fe ha renovado, y confirmado con toda voluntad el derecho de la Unión, y Amiftad antigua, para que fea siempre duradera.

Iten fu Mageftad confirma a los Naturales de las dichas Ciudades de la Confederación Hanfeatica los Previlegios, que por los Serenifsimos Reyes de Portugal, fus predeceffores les fueron concedidos, en la forma que mas particularmente fe contiene en el Recaudo, que por uno de los Secretarios de aquel Confejio fe les dará, para que puedan gozar dellos los Naturales de las dichas Ciudades, conforme a lo capitulado en esta Tranfacción, en los Reynos de Portugal.

Afsimismo, defeando complacer a las dichas Ciudades, fu Mageftad les ha concedido, y concede algunos de los dichos Previlegios, para que puedan gozar dellos en eftos Reynos de Caftilla, como fe verá por el Recaudo, que dellos - fe les dará.

Y para que el corriente del Tratado, y Comercio de las dichas Ciudades

(2) ABREU Y BERTODANO, J.A. Op. cit. (Reinado del Sr. Rey D. PHELIPE III, Parte I). Madrid, MDCCXL, pág. 383 a 390.

fe continde con mas facilidad, y abundante gfruto de entrambas Partes, quitando
 do los tropiezas, y embarazos, que de algunos años à esta parte fe han ofrecido
 do; fe ha concertado, y concludo entre fu Magestad, y los dichos Legados, que
 el Trato, y Comercio entre los Naturales, Subditos, y Moradores de entrambas
 Partes fe continde, y fea fiempre libre à los Subditos de fu Magestad en las
 dichas Ciudades, y à los Hanfeaticos en todos, y quelefquiera de los Reynos,
 y Reynos, y Señorios de fu Magestad, donde hafta agora fe les ha permitido,
 fin alterar en esta parte las costumbres, y leyes, que fe han guardado en -
 tiempos passados; y que puedan entrar en todos los Puertos, Senos, y Diftritos
 de los dichos Reynos, en los queles en tiempos passados folian entrar falva,
 y feguramente, fin que ayan de pedir falvoconduto, o otra licencia, con fus
 Navios, afsi cargados, como por cargar; meter mercancías, como no fean de las
 prohibidas por Leyes, y Ordenanzas expreffas de eftos Reynos; comprar y vender
 en ellos quanto quifieren, y à los precios que lo pudieren concertar; tomar
 el mantenimiento neceffario para tu fustento, y viage a precios juftos; aten-
 der al aderezo de fus Navios, y partir de los dichos Puertos con fus bienes,
 y mercancías, haviendo pagado los derechos, y tallas, fegun los Eftatutos de
 los Lugares, y fus Previlegios, con la misma libertad; y ir a fus propias tierras,
 b à las de las Prònvicias Unidas de los Belgas, de la manera que quifieren,
 fin ponerles impedimento, ni fer compelidos a esperar fuera de los Puertos,
 tos, afsi a la entrada, como à la falida.

Iten fe ha concertado, y concluido, que ninguno pueda tomar á los Hanfeaticos, ni forzarlos à vender fus mercancías contra fu voluntad, ni ponerles taffa en ellas; y, fi acafo fu Mageftad tuviere neceffidad de alguna de las dichas mercancías, fus Miniftros, ni Oficiales, no las tomen por fuerza, fino precediendo primero contrato, y concierto, y pagando el precio, que afsi fe concertare, o con voluntad, y fatisfacción de los dueños; y fin efto no fean obligados los vendedores a entregar las mercancías.

Iten fe ha convenido, y concertado, que las mercancías que los Naturales, Vecinos, y Moradores de las dichas Ciudades traxeren a eftos Reynos, como no fean de las prohibidas, fean libres del derecho de Treinta por Ciento, que de pocos años á efta parte fe comenzó a cobrar, pagando tan folamente los derechos, y impuestos de antes de la impofición del derecho del Treinta por Ciento, excepto en las mercancías, en que por los Privilegios fe les haze gracia, que en eftos no han de pagar más de lo contenido en los dichos Privilegios y fu Mageftad mandará, que cessen todas las impoficiones y extorsiones, de que fin jufto titulo pareciere haver fido trabajados.

Iten fe ha convenido, que todo el dinero, que los dichos Hanfeaticos - huvieren depofitado en razon del derecho de Treinta por Ciento, y no eftuviere ya cobrado por el Fifco, fe reftituya luego a fus dueños; y fi en razon de efto han intervenido algunos fiadores, fean libres eftos reales de la fianza.

Iten fe ha convenido, y concertado, que despues de la confirmación de eftos Capítulos, las Ciudades Hanfeaticas prohibirán por Edicto Público, que -

ninguno de sus Subditos, Moradores, o Vassallos, transferirá, ni traerá a los Reynos, y Señoríos de su Magestad, y de los Serenísimos Principes Alberto y Isabel Clara Eugenia, Archiduques de Auftria, Duques de Borgoña, en qualquier manera, directé o indirecté, en propio nombre, o en el ageno, ni acomodará de su nombre, para transferir, y tranfportar a los dichos Reynos, y Señoríos ninguna Nao, o Naos mercaderías, manufacturas, o qualquier otra cosa de los Natu-
rales, o Moradores de las Provincias Unidas, ni llevara ningun Mercader de las dichas Provincias Unidas a los dichos Reynos, y Señoríos de su Magestad, y Altezas, fo pena de la indignacion de los Magistrados, y otras constituidas de derecho contra los menofpreciadores de sus mandatos.

Que para que en este negocio por entrambas partes se vaya con mas seguridad, y más rectamente se pueda obviar a los fraudes; se ha convenido y concertado, que las mercancías que se huvieren de traer por los Hanfeaticos a los Reynos, y Dominios de su Magestad, vengán señaladas con el Registro, y Sello de la Ciudad donde se faceran; y afsi registradas, y señaladas, sean tenidas, y aprovadas por mercaderías Hanfeaticas sin ninguna dificultad, o disputa, falva la prueba del fraude; pero de tal manera, que no por esto sean retardadas las mercancías, ni en ninguna manera se detenga el corriente del Comercio, y mercancía; pero las mercancías que no vinieren registradas, y señaladas, siendo de las que admiten señal, incurran en la pena de confiscación, y sean, como -
dizen de buena prefa, y de la misma manera pueden ser presos, y detenidos todos los Holandeses, y Zelandeses, y otros de las Provincias Unidas, que se ha

hallaren en estas Naves.

Y porque los Registros sean ciertos, y que por ningun caso puedan introducirse al trato en estos Reynos los Holandeses y Zelandeses y los demás de las Provincias Unidas; quando los dichos Naturales, Vecinos, y Moradores de las dichas Ciudades Hanseaticas huvieren de cargar en los Puertos dellas algunas mercancías, declaren con juramento ante la persona, o personas, que segun sus costumbres huviere diputadas en cada Ciudad para dar los dichos Registros, que las tales mercadurias son fuyas propias, y que no son hechas en las Provincias Unidas, ni en ninguna parte dellas, ni directé, o indirecté tocan, ni pertenecen, ni tienen parte, ni ganancia los de las dichas Provincias Unidas, y que no les han pagado, ni pagarán ningunos derechos; lo qual todo ha de venir expreffado en los Testimonios, o Registros, los quales han de venir desde el día de la confirmación desta Capitulación en adelante, en Lengua Latina, y no en otra, porque no serán admitidos, ni tenidos por ciertos, y verdaderos: y los han de presentar ante la persona que fu Magestad diputare en cada Puerto; y mientras no la huviere, ante las Justicias; y los que antes del dicho tiempo estuvieren en estos Reynos, o fueren partidos para ellos, valdrán dos meses despues de su data, no mas.

Item se ha convenido, y concertado, que para evitar los Passaportes falsos, de que los Belgas de las Provincias Unidas se han aprovechado para navegar a estos Reynos con titulo, y nombre fingido de Hanseaticos, contrahaciendo los sellos de algunas de las dichas Ciudades, y tomando otros nombres;

teniendo de aquí adelante un Contrafalso secreto los Magistrados de las dichas Ciudades, le seguirán, y cumplirán la forma, que los dichos sus Diputados han propuesto, y ofrecido en el Capítulo Decimo de su primera Respuesta dada a - 28 de Julio deste año de 1607.

Item se ha convenido, y concertado, que de mas de los Pasaportes, y Registros que truxeren los Navios, que partieren de los dichos Puertos, traigan Cartas de Aviso, cerradas de la persona diputada por el Senado para el Consul, advirtiéndole de los Navios que parten, quien son, y lo que traen, para que por todas vías se cierre la puerta a los fraudes.

Y porque su Magestad entre otros Privilegios ha concedido a la Hanza que nombren en los Puertos que les pareciere de estos Reynos, Consules de su Nación, los quales aprobara su Magestad, y las Instrucciones que les dieren; se ha convenido, y concluido, que los tales Consules ayan de hazer el juramento en la forma acordada, que se pondrá al fin de esta Capitulación, que usaran bien, y fielmente su oficio, y advertirán con toda diligencia, que no se haga ningún daño, o fraude contra esta Capitulación ni lo disimularán de ninguna manera, fopena de privación de oficio, y otras penas ordenadas contra los perjuros, como en la forma del juramento, y Artos de esta Legación más particularmente se contiene.

Item se ha convenido, y concertado, que por las mercancías, que los Mercaderes Hanseaticos compraren en España, o en otros Reynos de su Magestad, y las sacaren dellos, ora sea en sus propias Naves, o en alquiladas, o presta

tadas, para su uso, exceptuando las de los Holandeses, y Zelandeses, y las de las Provincias Belgas Unidas, no paguen el derecho de Treinta por Ciento, ni otros más de los acostumbrados antes de haberse puesto el dicho derecho, conforme a los Privilegios, que se les han concedido; con tal, que las dichas mercancías las lleven a las dichas Ciudades, ó á otras partes de las neutrales, y no prohibidas: y para que no se figa engaño, ni se transfieran las dichas mercancías, en especie á Holanda, y Zelanda, y las demás Provincias Unidas; se ha concluido, que los dichos Mercaderes, al tiempo que cargaren las Naves en España, o en los otros Reynos, y Señoríos de su Magestad, de que arriba se ha hecho mención, se obligarán ante el Magistrado del Lugar donde faceren las dichas mercancías, que pagarán el sobredicho derecho del Treinta por Ciento, en caso que llevaren las dichas mercancías á partes prohibidas, y presentar Certificación, facada de los Magistrados de los Lugares, de la descarga de las dichas mercancías, dentro de doce meses, y si passaren el Estrecho, diez y seis y presentada la dicha Certificación, se cancelen las obligaciones hechas primero, en presencia de los que las traxeren.

Item se ha concertado, y concluido, que las Ciudades Hanseáticas, después de la confirmación desta Capitulación, prohiban por Edicto público, que ninguno de sus Naturales, Subditos, Moradores, ni Vassallos, lleve a Holanda, y Zelanda, ni a las demás Provincias Unidas ningunas mercancías de los Reynos, y Señoríos de su Magestad, y de los Serenísimos Archiduques, fino a solos los Puertos Hanseáticos, ó á otros lugares, y Reynos amigos, ó neutrales, so pena

de confifcación de todas aquellas mercancías, que deſtos Reynos fueren llevadas por los Hanſeaticos a las dichas Provincias; de tal manera, que la mitad de eſtas mercancías, o de fu valor, ſea para el Fifco de la Hanſa; y la otra mitad ſe dé a los Denunciadores, facandofe primero dellas el derecho de Treinta por Ciento, y pagando lo a los diputados de fu Mageſtad, dando ſee a las provanzas legítimas hechas en Eſpaña, y embiadas en auténtica forma a la Hanſa.

Item ſe ha concertado, y concluido, que ninguno de los que dieren el Testimonio de la defcarga, y diere ſee del Registro de las mercancías, admita en ello ningun fraude, fopena de privacion de Oficio, y otras, que contra los prevaricadores eſtán conſtituidas.

Item ſe ha concertado, y concluido, que quando fuceda el traerſe a eſtos Reynos, ò facar de ellos algunas de las mercancías, y haciendas prohibidas, y al delinquir alguno de otra manera; folamente ſe confifquen las cofas prohibidas, y en fu genero folas las perſonas, que delinquieren, fufran la pena, y que no eſtén por ello detenidos, ni moleſtados, la Nave, o los demás inocentes.

Item ſe ha concluido, y concertado, que fi alguna vez fuere menefter valerſe de las Naves de los Hanſeaticos para el ſervicio de fu Mageſtad por algun accidente, o en otra manera; fu Mageſtad ordenará deſde luego a los Generales de ſus Armadas, y à todos los demás Miniſtros, y Oficiales, à quien - tocare, que de aqui adelante no las detengan, ni fuerzen a fervir contra fu -

voluntad de ninguna manera, fino fuere con consentimiento de los Mercaderes, y concertándose con ellos en el precio; y que celebrado el concierto, sean — tratados amigable, y benevolmente, y se les pague al tiempo concertado su es tipendio, sin dilacion; y mandará, que se cumpla así, sin dar lugar a otra cosa en ningún tiempo.

Y para que puedan los Subditos de entrambas partes recibir más abundantes frutos desta Capitulación; se ha concertado, y concluido, que su Magestad, y los Serenísimos Archiduques juntamente con las Ciudades Hanseaticas, unida, y separadamente, trabajarán, en que no se les cierre la entrada á los Hanseaticos, por los Belgas de las Provincias Unidas, ni otros para los Puertos de su Magestad, y de los Serenísimos Archiduques; fino que donde quiera, puedan gozar de sus Privilegios, y uso del libre Comercio: para lo qual las dichas — Ciudades, dentro de seis meses despues de la confirmación desta Capitulación, enviarán a requerir a los de las dichas Provincias Unidas, que les guarden su neutralidad, y dexen gozar de la Casa, y Privilegios, que tienen en Amberes, y y entren a tratar libremente, como más particularmente se ha tratado en los — Actos de esta Legación; y quando las dichas Provincias Unidas no se quisieren reducir a su justa petición, se usara de los remedios contenidos en los dichos Actos.

Y porque su Magestad no quiere, ni entiende, que se quite el derecho de Treinta por Ciento para con los Subditos de los Reyes, Principes, y otras Ciudades Septentrionales, que no han convenido, ni capitulado sobre la forma del

Trato y Comercio, para excluir del d^{ch}tos Reynos à los de las Islas de Holanda y Zelanda, y las demás Provincias Unidas contra fu Magestad, como lo han hechos los Serenifsimos Reyes de Francia, y Inglaterra, y la Hanfa Teutónica; fe declara, que folos los dichos Hanfeaticos puedan traer las mercancías de Alemania, y de los Lugares Septentrionales fus Vecinos, libre del derecho del Treinta por Ciento, por el tiempo, y en el entretanto, que los dichos Reyes, Príncipes, y Repúblicas fe convengan con fu Magestad, como lo han hecho los dichos Reyes de Francia, y Inglaterra, y la dicha Hanfa Teutónica, o fe reduzgan a la debida obediencia los Subditos de las dichas islas de Holanda, y Zelanda, y las demás Provincias Unidas, b fe tome acuerdo, y afsiento con ellas de Paz, ó Tregua; con tal declaración, que aya de quedar, y quede en fu fuerza, y vigor la concefsión hecha a los Subditos de los Reyes de Francia, y Inglaterra fobre el traer las mercancías de Alemania Superior, las quales les ferá lícito traer à los Reynos de fu Magestad, como les está concedido.

Item fe ha convenido, y concertado, y fu Magestad quiere declaradamente, que en virtud de esta Capitulación folo puedan gozar las Ciudades Hanfeaticas del fruto, y comodidades della, y de los Previlegios que fe les han concedidao; y los dichos Diputados ayan de dar por escrito los nombres, y fituacion de las dichas Ciudades antes que fe partan desta Corte, para que fu Magestad tenga la noticia que conviene dellas, y fe ponga al fin deste Tratado.

Item fu Magestad no quiere, ni entiende que entren en este Tratado las Villas de Campen, Deventer, y Zwol, ni otras ningunas de las que fe han juntao

do con las Provincias Unidas de los Estados Baxos contra fu Magestad, hafta que fe ayan reducido a la devida obediencia; antes las excluye claramente en quanto, como dicho es, no fe tomare afsiento, y concierto con ellas de Paz, ò Tregua.

Afsimismo excluye la Villa de Staden, y à todas las demás Ciudades, que fe huvieren apartado, ò adelante fe apartaren de la Hanfa; y no quiere que gozen del Comercio, y Previlegios, hafta que fe buelvan a reducir a la dicha Unión, ò hafta que fu Magestad quiera admitirlas al dicho Comercio, y Previlegios, que esto lo referva à fu mera voluntad.

Y porque los dichos Diputados han pedido la admifsion de las Ciudades de Augufta, Norimberga, Argentina y Ulma, y las demás de la Alemania Superior, que hafta agora han acostumbrado traer à estos Reynos fus mercancías en las Naves de los Hanfeaticos; fu Magestad fe contenta, de que las Ciudades Hanfeaticas las puedan libremente admitir a este Tratado, con que guarden las mismas condiciones, que las dichas Ciudades Hanfeaticas están obligadas a guardar, y que gozen de los Previlegios de los Hanfeaticos.

Item fe ha concertado, y concluido, que fi en algun tiempo la Hanfa, ò alguno de fus miembros fuere por fuerza, o injuria conturbada, y derribada en fu estado, y libertad, con menofprecio del derecho, y justicia; afu Magestad - pudiendo con jufto título, informado primero del cafo, y fiendole pedido por la Hanfa, la focorrerá con fu ayuda, y confejio, conforme a lo que muestran los aftos de esta Legación, que hablan en este cafo.

Item se ha concertado, y concludido, que todos, y cada uno de los dichos Capítulos, se guarden de una, y otra parte con fincera, y buena fee; y las - Ciudades Confederadas de la Hanfa Teutónica, debaxo de los Sellos de feis de las Ciudades Vandálicas, y de la Ciudad de Danzik, de contentimiento, y aprovación de la Hanfa, desde fu primera Dieta; los embien firmados, y aprovados à fu Magestad dentro de feis meses despues de la confirmación, y en ellas ta, bien se hagan promulgar, publicar, guardar, y cumplir en todas partes por fus Subditos; y que antes de la confirmación, no sea fu Magestad tenido a cofa alguna.

Item se ha concludido, y asentado, que en caso de Guerra (lo que Dios no quiera) no corran los Subditos de fu Magestad, que se hallaren en el Dominio de las Ciudades Hanfeaticas, ni los sábditos de ellas, que se hallaren en los Reynos, y Señoríos de fu Magestad, detrimento, ni daño de fus perdonas, ni bienes, y que tengan los unos, y los otros tiempo de año, y día, para poder retirarse con fus haciendas, fin que en ello se les ponga estorvo, ni impedimento alguno.

De todo lo qual ha mandado fu Magestad dar esta Certificacion, firmada de mi nombre, a mi Andres de Prada, Cavallero de la Orden de Santiago, Comendador de la Encomienda de Sencaloyato, y fu Secretario de Eftado, y que - se entregue a los dichos Señores Embaxadores de las dichas Ciudades; y quando por ellas se aya confirmado, y enviado a fu Magestad esta Transaccion, se les dará firmada de la Real mano de fu Magestad; y demás de esto, mandará fu

Magestad darles todos los Recaudos necessarios para la execución, y cumplimiento de lo en ella contenido, en ampla forma; y los dichos Señores Diputados, - han de dexar otra Copia, femejante a ella, firmada de fus nombres, y fellada con fu Sello, Fecha en Madrid à 7 de Noviembre de 1607.

Certificación de los Embaxadores de la Hansa Teutónica
de haber recibido de S.M.C. una Copia de la Tranfacció
anterior. QUD.

LEY 1ª, TITULO 11, LIBRO 6º

De los extranjeros domiciliados y transeúntes en estos reinos,

Don Felipe IV en Madrid en los capítulos de reformation de la pragmática del
año de 1.623. (3)

Permiso a los extranjeros católicos y amigos de la corona para venir a ejer-
citar sus oficios en estos reinos.

Permitimos que los extranjeros destos reinos (como sean católicos y -
amigos de nuestra corona) que quieran venir á ella á ejercitar sus oficios y
labores, lo puedan hacer; y mandamos que ejercitando actualmente algún oficio
o labor y viviendo veinte leguas de la tierra adentro de los puertos, sean li
bres para siempre de la moneda forera, y por tiempo de seis años de las alca
balas y servicio ordinario y extraordinario, y asimismo de las cartas conce
jiles en el lugar donde vivieren; y que sean admitidos, como los demás veci
nos del, á los pastos y demás comodidades; y encargamos a las justicias les -
acomoden de casas y tierras, si las hubieren menester, Y los demás extranje
ros, aunque no sean oficiales ni laborantes, habiendo vivido en este reino --
diez años con casa poblada, y siendo casados con mujeres naturales de él por
tiempo de seis años, sean admitidos a los oficios de república, como no sean

(3) Los Códigos Españoles anotados y concordados. Tomo 8º. Novísima Recopi
lación de las Leyes de España. Título XI, libro VI, Ley I. (La Publioidad)
Madrid 1850, pág. 254-5.

corregidores, gobernadores, alcaldes mayores, regidores, alcaldes, depositarios, receptores, escribanos de ayuntamiento, corredores, ni otros de gobierno, porque en cuanto á estos y á los beneficios eclesiásticos, dejamos en su fuerza y vigor lo dispuesto por nuestras leyes (leyes 1ª, 2ª y 3ª, tit. 14, lib. 1ª); y encargamos á las justicias los acomoden en todo, lo que se pudiere de casas y tierras para la labor, por el beneficio que se considera de su asistencia con estas calidades. (Cap. 5º de la ley 66, tit. 4º, lib. 2ª Recop.)



REAL CEDULA DE FELIPE IV DE 19 DE MARZO DE 1,645 (4)

Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla (siguen todos los títulos). Por cuanto por parte de vos Ricardo Antonio, cónsul de la nación inglesa, por vos y en nombre de los vasallos del rey de la Gran Bretaña me ha sido hecha relación, que mediante las paces que en este y aquel reino están asentadas, residen y comercian en Andalucía, principalmente en las ciudades de Sevilla, Sanlúcar, Cádiz y Málaga, suplicándome sea servido de confirmaros los privilegios, exenciones y facultades os competen así por los capítulos de dichas paces, como por las confirmaciones de ellas y otras mercedes é indultos que el rey mi señor, mi padre (que haya gloria) os dió, y otras cualesquiera que se os hayan dado por mis coronas de los mis reinos de Castilla y Portugal, mandando que se las guarden y cumplan en todo y por todo sin ninguna limitación y á mayor abundamiento concederóslas de nuevo con las calidades, ampliaciones, condiciones y declaraciones que más os convergan, poniendo penas á quien los contradijere y no los guardare; y para que se sepa los que son, se les dé copias de ellos, ó como la mi merced fuese. Y teniendo consideración á lo referido, y porque para las ocasiones que tengo de guerras habeis ofrecido servirme con dos mil y quinientos ducados de plata, pagados los mil de contado

(4) CANTILLO, A.: "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y de Comercio - que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón desde el año 1700 hasta el día". Madrid 1843, pág.137 a 140

y los mil y quinientos ducados de plata, pagados los mil y quinientos restantes para el mes de abril de este año, de que el licenciado Francisco Moreno - con intervención de don Antonio de Campo-Redondo y Rfo, caballero de la orden de Santiago, del mi consejo y cámara y del de hacienda, en vuestro nombre y - en virtud de poder vuestro, otorgó escritura de obligación en forma nate Juan Cortés de la Cruz, mi escribano, lo he tenido por bien. Y por la presente, de mi propio motu y conciencia cierta, y poderío real absoluto de que en esta parte quiero usar y uso como rey y señor natural, no reconociente superior en lo temporal, confirmolo y apruebo los privilegios de exenciones y facultades que os competen, así por los capitulos de dichas paces como por las confirmaciones de ellas, y las demás mercedes é indultos que el rey mi señor, mi padre, os - dió, y otras cualesquiera que se hayan dado por mis coronas de Castilla y Portugal á los dichos vasallos en todo y por todo, como en ello y en cada cosa y en parte de ello se especifica, contiene y declara, para que sean firmes, estables y valederos, y se observan, guardan y cumplan: porque mi intención y voluntad deliberada es que todos los de la dicha nación gocéis y gocen de ellos sin ninguna limitación; con calidad que en el tiempo que residieren en la Andalucía los dichos ingleses, á vos, ni á ellos no se os pueda encargar ningún oficio ni carga pública ni concejil, tutelas, curadurías, receptorías, tesorerías, aunque sean de alcabalas y millones, y otros servicios que toquen á mi real hacienda, ni tampoco se os puedan pedir préstamos ni donativos, ni que toméis juros, ni sus rentas, caballos ni esclavos.

Y por os hacer más merced, en conformidad de lo asentado en las paces quiero y permito que podáis y puedan tratar y comerciar libremente y vender vuestras mercaderías y frutos y comprar los de mis reinos y sacarlos de ellos, guardándose lo dispuesto por las leyes y pragmáticas que de esto hablan, y pagando á mi real hacienda los derechos que se debieren pagar: prohibiendo, como prohibo y mando, que no se os tomen por fuerza, ni se os saquen ningunas mercaderías, trigo ni cebada, aunque sea para apresto de mis armadas, flotas y galeones, ni por asentistas ni extranjeros, y los dichos privilegios hayan de ser, en cuanto al trigo y cebada, conforme á la tasa; y en cuanto á las demás cosas y mercaderías aquello en que os conviniéredes y concertáredes, sin sacarlas de vuestro poder hasta haberos pagado, y sin que por razón de ello se haya de dar lugar a que se os hagan molestias y vejaciones.

Y porque muchos de vosotros tratáis traer á los puertos de Andalucía, ciudad de Sevilla y otras partes mucha cantidad de bacallao y otros géneros de pescado seco y salado, por ser los mantenimientos más necesarios que hay, y se os hacen muchas cosas y vejaciones; quiero y mando que se os guarde la ordenanza de la ciudad de Sevilla, en que dispone que á los que entran con pescado seco y salado no se pueda poner postura, antes se les permitirá vender el precio que quisieren, sin que sea necesario manifestarlo más que á los ministros que cobran mis rentas reales; y si los navíos en que se trajere dicho bacallao, fueren grandes que no puedan subir río arriba y se ondeare en -

en barcos, el juez del almirantazgo, ni otro alguno no puede poner en los dichos barcos guardas á costa de los dueños de ellos. Y asimismo mando que en caso de contar que el dicho pescado está podrido y no se puede gastar, se haya de quemar ó echar al agua sin que por razón de esto se pueda hacer ni gaga caísa á los dueños ó personas que lo vendieren, ni prenderlos, ni denunciarlos.

Y porque el administrador de los almojarifazgos y otros diferentes derechos que se cobran de los frutos y mercaderías, han introducido, cuando alguna se denuncia, el prender á la persona que se muestra parte, de que se sigue á los hombres de negocios mucho descrédito, costas y vejaciones: es mi voluntad y mando, que en las dichas denunciaciones solo se proceda contra las mercaderías y no contra las personas, permitiéndoles, como les permito, que puedan hacer y hagan sus defensas en las dichas vejaciones.

Y porque así mismo, conforme á capítulo de las dichas paces que habla en materia de relijion, sin embargo que en algunos palitos se han intentado declarar si son católicos romanos ó nó, escusándose de dar fé en los juramentos que hacen como partes y como testigos: mando asimismo que en cuanto á esto no se haya de tratar ni trate cosa alguna con los naturales del dicho reino, sino que se guarde y cumple la dicha condición, sin que se os hagan semejantes preguntas, dando á los juramentos que hiciérades en juicio y fuera de él la fé y crédito que se diera si fuerádes españoles: sin que sobre esto recibáis vejaciones ni molestias, ni se os pueda hacer agravio alguno.

Y porque para justificación de algunas causas, los jueces y justicias pretenden que los mercaderes exhiban los libros de sus contrataciones y sobre ello reciben vejaciones y agravios; quiero y mando que los libros de los mercaderes de la dicha nación no se saquen de su poder por ninguna causa que sea, sino que los tengan de manifiesto en sus casas para sacar la partida que se señalar, sin pedirles otras, ni poderles sacar otros papeles ningunos, so pena que el que contraviniere á ello será castigado conforme á derecho.

Y porque asimismo los mercaderes despachan las mercaderías en la aduana de la ciudad de Sevilla de todos los derechos, que por ser muchos se hace una hoja y esta va firmada y rubricada de todos los ministros y se queda en poder del alcaide de la aduana, porque en su virtud deja salir las mercaderías que van en fardos, pacas, baules y cajas, y después de haberlas sacado y puesto las en su casa en sus almacenes, el guarda mayor de la aduana y los ministros del medio por ciento os visitan las casas y la ropa, haciendos molestias y vejaciones, pidiéndos los despachos, constándoles que no los pueden tener por haberlos dejado en poder de dicho alcaide de la aduana; prohibo y mando que no se puedan visitar las casas de los dichos mercaderes, ni pedirles ni pidan los despachos que no quedan en su poder, con que esto se haya de entender y entienda en las casas que están de los muros adentro de la dicha ciudad; y porque se sepa los que sois de la dicha nación inglesa, se os haya de dar copias de los dichos privilegios y exenciones que os tocaren y os estuvieren concedidos así por los capítulos de las dichas paces, como en otra cualquier manera.

Y para ejecución y cumplimiento de todo lo referido mando á los de mi consejo y á los demás mis consejeros, juntas y tribunales de mi corte; y á los presidentes y oidores de mis audiencias; alcaldes, alguaciles de mi casa y corte y chancillerías; y al rejente y jueces de la mi audiencia de grados de la ciudad de Sevilla y alcaldes mayores de la cuadra de ella; y á todos — los corregidores, asistente, gobernadores, alcaldes mayores y ordinarios así de las dichas ciudades de Sevilla, Cádiz y Málaga y de Sanlúcar de Barrameda, como de todas las demás ciudades, villas y lugares de estos mis reinos y señoríos, y á otros cualesquier jueces y justicias de ellos, de cualquier calidad y condición que sean, á quien principal ó accidentalmente tocara en cualquier manera el cumplimiento de todo lo contenido en esta mi carta, que luego que — fueran requeridos con ella, ó con su traslado signado de escribano público — (que se le ha de dar tanta fé como al original) cada uno en la parte que le toucare, la guarden y cumplan, y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todo y por todo, como en ella se contiene, sin que en todo ó en parte se os pueda poner ni ponga impedimento, ni otra duda ni dificultad alguna, ir ni venir contra su tenor y forma, ni conscientas ni den lugar á que se interprete, limite ni suspenda en todo ni en parte, ni que se den en contrario cédulas, provisiones ni otros despachos; antes para su observancia, en la parte que á cada uno tocara provean y den orden se os den las que fueren necesarias para mayor firmeza de la merced que por esta mi carta os hago.

Y para que en todo tiempo esta merced os sea cierta y segura, hayáis de tener un juez conservador para la Andalucía, principalmente para las dichas ciudades de Sevilla, Málaga, Cádiz y Sanlúcar de Barrameda, á quien yo haya de dar comisión bastante para la guarda y cumplimiento de los dichos privilegios, libertades y exenciones; el cual haya de apremiar y compeler á todas y cualesquier personas, de cualquier suerte y calidad que sean que tocaren á la dicha nación, así en aquella en que fueren reos convenidos, como en las que fueren actores, aunque las personas que los convinieren y que de ellos fueren convenidos tengan cualesquier jueces privativos, así por asiento ó contrato que haya hecho, como por preeminencias ó inmunidades que tengan, porque de las dichas causas solo ha de conocer privativamente el dicho juez conservador, y no otro juez ni tribunal alguno, aunque sea por vía de esceso, ni de injusticia notoria, ó en otra cualquier manera ó forma: y el dicho juez conservador por ahora le sea el doctor don Francisco Vergara, juez de la mi audiencia de los grados de la ciudad de Sevilla, el tiempo que asistiere en ella, y por su ausencia el licenciado don Francisco Medrano, juez de la misma audiencia; el - cual para los negocios y pleitos que se ofrecieren en las dichas ciudades de Málaga y Cádiz y en Sanlúcar haya de subdelegar su conservaduría en la persona que por la dicha nación se le propusiere para que los substancie hasta la conclusión y se los remita para determinarlos; y de lo que él determinare se haya de apelar al mi consejo y no para otro tribunal alguno. Y porque mi voluntad es que cada uno en su tiempo tenga jurisdicción y comisión privativa para

ampararos y defenderos en todo lo contenido en esta mi carta, para que todo ello se guarde y cumple en la forma que os está ofrecido; he tenido por bien de encargar como por la presente los encargo la protección y amparo de esto; y les mando vean esta mi carta y las calidades, condiciones, preeminencias y ampliaciones en ella contenidas; y todo ello lo hagan guardar y cumplir y ejecutar en la forma, según y de la manera que en ella se contiene y declara sin consentir ni dar lugar á que en todo ó en parte se os pueda poner ni ponga duda, ni dificultad alguna, y ante el dicho D. Francisco de Vergara, y en su ausencia ante el dicho D. Francisco de Medrano, y no ante otro juez alguno, privativamente en primera instancia hayan de pasar y seguirse todas las causas y pleitos que sobre lo referido, y cualquiera causa y parte de ello se hicieren y causaren, y la ejecución y castigo de los inobedientes; porque mi voluntad es que el conocimiento y determinación de todo lo contenido en esta mi carta privativamente les haya de tocar y toque, procediendo en todo contra los que fueren culpados, ejecutando en ellos las penas que hallaren por derecho; reservando, como reservo, las apelaciones que de sus actos y sentencias se interpusieran para el mi consejo y no para otro tribunal alguno, sin que ninguno de los demás de mis consejos, tribunales, audiencias ni chancillerías, ni otros ningunos jueces ni justicias de los mis reinos y señoríos, de cualquier calidad que sean, se puedan entrometer, ni entrometan en ello, ni en el uso ni ejercicio de la jurisdicción privativa en la dicha primera instancia, que por esta mi cédula le doy, por vía de esceso, apelación ni otro recurso ni manera

alguna, á los cuales y á cada uno de ellos inhibo y he por inhibidos de su conocimiento, y los declaro por jueces incompetentes de él: que para todo y cada cosa y parte de ello les doy el poder más cumplido y la comisión más amplia que de derecho se requiere y es necesario, con sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades: y que después de ellos la dicha nación inglesa de la ciudad de Sevilla pueda nombrar en la dicha comisión uno de los jueces de la dicha audiencia, el que elijiere la dicha nación. Y mando el presidente y los del mi consejo de la cámara, que presentado ante ellos el nombramiento suyo, llegado el caso de vacar la dicha comisión por promoción ó vacación de los dichos don Francisco de Vergara ó don Francisco Medrano, ó en otra manera, la despachen por ordinaria al que fuere nombrado en ella en la forma, según y como por esta mi carta se dispone, y para que mejor se cumpla, desde luego les doy facultad, poder y autoridad para que puedan subdelegar y subdeleguen esta comisión para los negocios y pleitos que se ofrecieren en las dichas ciudades de Cádiz, Málaga y Sanlúcar de Barrameda en la persona que por vosotros se les propusiera, para que sustancie hasta la conclusión, y los remita los pleitos y causas que hubiere, para determinarlos en la forma que los pareciera y viere - que conviene para la seguridad de lo contenido en esta mi carta. Y encargo el serenísimo príncipe D. Baltasar Carlos, mi muy caro y amado hijo; y mando á los infantes, prelados, duques, marqueses, condes, ricos-hombres, comendadores y subcomendadores, alcaldes de los castillos y casas-fuertes y llanas, y á los de mi consejo, presidentes, oidores de las mis audiencias, alcaldes y alguaci-

les de la mi casa y corte y chancillerías, y á todos los correjidores, asistentes, gobernadores, alcaldes mayores y ordinarios, y á todos cualesquier jueces y justicias de estos mis reinos y señoríos, que os guarden y cumplan, y - hagan guardar y cumplir esta mi carta y la merced que por ella os hago, y contra su tenor y forma no vayan ni pasen ahora ni en ningún tiempo, ni por ninguna manera, perpétuamente para siempre jamás; ni consientan ni den lugar á que se os cumpla ni suspenda en todo ó en parte todo ello, no embargante cualesquiera leyes ó pragmáticas de estos dichos mis reinos y señoríos, ordenanzas, estilo, uso y costumbre de las dichas ciudades de Sevilla, Cádiz, Málaga y - Sanlúcar, y todo lo demás que haya ó puede haber en contrario: con lo cual, para en cuanto á esto toca y por esta vez habiéndolo aquí por inserto é incorporado, como si de verbo ad verbum aquí lo fuese, dispenso, y lo abrogo, y derogó, caso y anulo, y doy por ninguno y de ningún valor ni efecto, quedando en su fuerza y vigor para lo demás adelante. Y de esta mi cédula ha de tomar la razón Jerónimo de Canencia, mi contador de cuentas de mi contaduría mayor de ellas, mi secretario de la media anata é cuyo cargo está la cuenta y razón de este derecho; y declaro que de esta merced habéis pagado el derecho de la media anata, que importa 85.155 maravedis en plata, el cual habeis de pagar hasta en la misma cantidad de quince en quince años perpétuamente; y llegando el caso de cumplirse no pabeis de poder usar de esa merced sin que primero - conste haber satisfecho este derecho; y también ha de pagar el juez conserva-

dor que nombraron del salario ó ayuda de costa que gozase por la dicha ocupación, antes de gozar de ella; de que ha de constar por certificación de la -
contaduría de este derecho. Dada en Zaragoza a 19 de marzo de 1645 años. Yo,
el rey.- Yo, Antonio Carnero, secretario del rey nuestro señor, la hice escribi
bir por su mandado.- Licenciado don Juan Chumacero y Carrillo.- Licenciado don
Antonio Campo-redondo y Río.- Licenciado José González.- Tejistrada.- Mi-
guel de Olaraguer.- Tomé la razón.- Jerónimo de Canencia.

Real Cédula de Felipe IV de 26 de Junio de 1.645. (5)

El Rey.— Licenciado don Francisco de Medrano, juez de la mi audiencia de grados de Sevilla: sabed que por una mi carta y provisión de 19 de marzo - de este año hice merced á Ricarte Antonio, cónsul de la nación inglesa y á - los vasallos del rey de Inglaterra que residen y comercian en el Andalucía, principalmente en esa ciudad y en la de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda de los privilegios, exenciones y facultades que les competen, así por los capítulos de las paces, como por las confirmaciones y otras mercedes é indultos qu el rey mi señor, mi padre (que haya gloria) les dió, y con otras calidades, condiciones, preeminencias y ampliaciones en la dicha provisión declaradas por haber ofrecido servirme don dos mil y quinientos ducados de plata, según más largo en ella, á que me refiero, se contiene. Y una de las condiciones con que les hice esta merced fue, que los había de nombrar y conceder un juez conservador para la Andalucía, principalmente para las dichas dos ciudades y Sanlúcar de Barrameda, á quien se haya de dar comisión bastante para la guarda y cumplimiento de los dichos privilegios, libertades y exenciones, el cual puede cono

(5) CANTILLO, A.: "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y de Comercio que han hecho con las potencias extranjerías los monarcas españoles de la Casa de Borbón desde el año 1.700 hasta el día", Madrid, 1843, pág. 140 a 142,

cer de todas las causas civiles y criminales, en que fueren reos convenidos, que contra ellos se intentaren, y ante él hayan de pasar cualesquier pleitos y causas que tocaren á los dichos ingleses ó á otras cualesquier personas de cualquier calidad que sean, así en aquellos en que fueren reos convenidos como en los que fueren actores, aunque las personas que los convinieren tengan cualesquier jueces privativos, así por asientos o contratos que hayan hecho, como por preeminencia ó inmunidad que tengan; porque de las dichas causas solo ha de conocer privativamente al dicho juez conservador y no otro juez ni tribunal alguno, aunque sea por vía de esceso ó en otra cualquiera forma ó manera: y que para los negocios ó pleitos que se ofrecieren en las dichas ciudades de Cádiz y Málaga y en Sanlúcar haya de subdelegar su comisión en la persona que por la dicha nación se le propusiera para que la sustancie hasta la conclusión y la remita para determinar; y de lo que el dicho juez determinare se ha de apelar para el mi consejo y no para otro tribunal alguno; y que por ahora lo seáis vos por el tiempo que asistierades en esa audiencia, y por vuestra ausencia y después de vos el que señalare la dicha nación en la dicha ciudad de Sevilla. Y porque mi voluntad es que todo ello se les guarde y cumpla en la forma que les está ofrecido, he tenido por bien de encargaros, como por la presente os encargo, la protección y amparo de esto, y os mando veáis la dicha provisión y las calidades, preeminencias y ampliaciones en ella contenidas, y todo llo lo hacer guardar y cumplir en la forma, según y de la manera que en la dicha provisión y en esta mi cédula se declara, sin consentir ni dar

lugar á que en todo ni en parte se les pueda poner ni ponga duda ni dificultad alguno y ante vos, y no ante otro juez alguno, en primera instancia hayan de pasar y seguirse todas las causas y pleitos que sobre esto y cualquier cosa y parte de ello se hicieren y causaren, y conocer asimismo de todas las causas civiles y criminales en que fuesen reconvenidos, que contra ellos se intentaren; y ante vos han de pasar cualesquier pleitos y causas que tocaren á los dichos ingleses entre cualesquier personas de cualquier calidad que sean, y la ejecución y castigo de los inobedientes: porque mi voluntad es que el conocimiento y determinación de todo lo contenido en la dicha provisión y en esta mi cédula de ampliación, privativamente os haya de tocar y toque, procediendo en todo contra los que fueren culpados, ejecutando en ellos las penas que halláredes por derecho, sin que ningunos tribunales, audiencias ni chancillerías, ni otros ningunos jueces, justicias de los mis reinos y señoríos de la corona de Castilla, de cualesquier calidades que sean, se puedan entrometer ni entrometen en ello, ni en el uso y ejercicio de la jurisdicción privativa en la dicha primera instancia, que por esta mi cédula os doy por vía de escuso, apelación ú otro recurso, en manera alguna; á los cuales, y á cada uno de ellos inhiho y he por inhibidos de su conocimiento, y los declaro por jueces incompetentes de él, que para todo y cada cosa y parte de ello os doy el poder más cumplido y la comisión más amplia que por derecho se requiere y es necesaria con sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades, y que después que vos, la dicha nación inglesa de la dicha ciudad de Sevilla ha de po

der nombrar en la dicha comisión uno de los jueces de esa audiencia, el que -
elijiere la dicha nación, y mando á los de mi consejo de la cámara, que pre-
sentándose ante ellos el nombramiento suyo, llegado el caso de vacar la dicha
comisión por promoción ó vacación vuestra ó en otra manera, la despachen por
ordinaria al que fuere nombrado en ella, en la forma, según y como en esta mi
cédula se dispone. Y para que mejor se cumpla todo lo contenido en la dicha -
provinsión y en esta mi cédula os doy facultad, poder y autoridad para que -
podáis subdelegar y subdeleguéis esta comisión para los negocios y pleitos -
que se ofrecieren en las dichas ciudades de Cádiz, Málaga y Sanlúcar en la per-
sona que por la dicha nación se propusiere, para que sustancie hasta la con-
clusión y los remita para detenerlos en la forma que os pareciese y viéredes
que conviene para la seguridad de la dicha provisión, y que todo se guarde en
la forma que por ella se dispone y manda, no embargante cualesquier leyes y
pragmáticas de los dichos mis reinos y señoríos, ordenanzas, estilo, uso y cos-
tumbre, y otra cualquiera cosa que haya ó pueda haber en contrario, todo lo -
cual para en cuanto á esto toca y por esta vez dispenso, abrogo y derogo, ce-
so, anulo y doy por ninguno y de ningún valor y efecto; quedando en su fuerza
y vigor para en lo demás adelante. Fecha en Zaragoza á 26 de junio de 1645 -
años.— Yo el rey.— Por mandado del rey nuestro señor.— Antonio Camero.

Real Cédula de Felipe IV de 9 de Noviembre de 1645. (6)

Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, (siguen todos los títulos). Por cuanto por una mi carta y provisión de 19 de marzo de este año hice merced a vos los vasallos del rey de la Gran Bretaña, que residía en el Andalucía, de aprobar y confirmar los privilegios, cédulas y franquezas que os están concedidas por las coronas de Castilla y Portugal, y mandé que se os guardasen y cumpliesen los capítulos de las paces hechas entre mi corona y la de Inglaterra; y por otra mi cédula de 16 de junio del mismo año os nombré juez conservador para que conociese de todas las causas civiles y criminales, así en las que fuéades actores demandantes, como en la de reos convenidos, y con otras calidades, ampliaciones y preeminencias en las dichas provisión y cédula contenidas, según en ellas (á que me refiero) se contiene: y ahora por vuestra parte me ha sido hecha relación, que habiendo presentado la última cédula en el acuerdo de la audiencia de los grados de la ciudad de Sevilla, se mandó dar traslado al licenciado don Juan de Villalva, mi fiscal de ella, y le tiene en su poder desde 15 de julio sin haber respondido hasta ahora, con lo cual se ha embarazado y detenido el uso y cum

(6) CANTILLO, A.: "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y de Comercio, que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón desde el año 1700 hasta el día"; Madrid, 1843, pág. 142 a 144.

plimiento de las dichas provisión y cédula y se os causa grave perjuicio y da
ño: y aunque según lo dispuesto por ellas, el juez conservador podrá conocer
 de todas las causas civiles y criminales, así siendo actores como reos, con -
 cualquiera persona que tratasedes, vuestro intento es fozer solamente del diq
 cho privilegio y juez conservador, cuando los pleitos fueren entre los de -
 vuestra nación, ora seais actores, ora reos, y las causas quier sean civiles
 ó quier criminales; y cuando los pleitos fueren con españoles ó con otras perso
 nas de diferentes naciones, el conservador ha de conocer tan solamente de -
 las causas en que fuéredes civil ó criminalmente reos convenidos, y no cuando
 fuéredes actores demandantes: suplicándome que porque en esta parte os habéis
 apartado y desistido del dicho privilegio ante Alonso de Alarcón, sea servido
 de declararlo así con las condiciones, ampliaciones y preeminencias, y las -
 calidades que más o convergan y fueren necesarias para mayor fuerza de lo reg
 ferido, ó como la mi merced fuese: y porque para las ocasiones que tengo de
 guerras habéis ofrecido servirme con mil y quinientos ducados en plata doble,
 pagados a ciertos plazos, lo he tenido por bien.

12. Y por la presente quiero y es mi voluntad y declaro: que cuando -
 los pleitos fueren entre los de vuestra nación, ora seais actores, ora reos,
 y las causas fueren civiles o criminales, habeis de gozar solamente del dicho
 privilegio y sus calidades; y cuando los dichos pletos fueren con españoles
 ó con otras personas de diferentes naciones, el juez conservador haya de co-
 nocer y conozca solamente de las causas en que fuéredes civil ó criminalmen-

te reos convenidos, y no cuando fuéredes actores demandantes.

2º. Y porque los derechos de las sisas de los servicios de millones - que se impusieron en el bacallao seco y frescal, sardina, arenque y salmónes, y otros géneros de pescado fresco y salado, se mandó que se cobrase de los que lo consumen; y los arrendadores de estos derechos, y los jueves que conocen de estas causas os hacen grandes agravios, y os obligan a que pagueis doscientos maravedís de cada quintal de bacallao, y de los otros géneros al respecto que están concedidos; y en llegando los navíos a los puertos de Málaga, Cádiz y Sanlúcar os obligan a que declaréis la cantidad de pescado que traeis, haciéndose cargo de todo por mayor, y obligándoos á la paga, como por maravedíse de mi haber, y á los cuatro meses os apremian a la satisfacción de lo que monta, lo cual es injusto, porque los que compran estos géneros y los consumen son clérigos, frailes, monjas y otras personas que tienen privilegios y - hábitos, alcaldes mayores, veinte y cuatros y jurados; por cuya causa los arrendadores de estos derechos no quieren cobrarlos de ellos, y los cobran de vosotros por entero, sin considerar la cantidad que os hurtan, la que se pudre y gastais en vuestro sustento, demás de que sobre quererlo cobrar nosotros de - tales personas, os maltratan y no lo pagan: quiero y mando que este derecho se cobre de los compradores y consumidores, y los arrendadores pongan persona por su cuenta que lo cobre, como se hacen en la renta de la alcabala y almojara rifazgo, con tanto que hayáis de ser obligados, como yo os obligo, á que hayais de registrar y registreis todos los dichos géneros de pescado referido,

como teneis obligación, conforme á los despachos generales, sin que de esto se pueda esceder en manera alguna.

3º. Y porque de las visitas que os hacen los arrendadores se os siguen grandes molestias, quiero y mando que en las ciudades de Málaga, Sanlúcar y Cádiz se os guarde y cumpla el privilegio de no poder visitarse las mercaderías estando en vuestras casas, que es en la forma que está dispuesto y mandado por dicha provisión de 19 de marzo de este año, y es lo mismo que se concedió a los que residen en la ciudad de Sevilla; y asimismo mando que la dicha visita no la puede hacer ningún arrendador, pues en la aduana dejáis pagados todos los derechos: y esto se os guarde y cumpla inviolablemente.

4º. Y porque á todos los navios que vienen á los dichos mis reinos de los de Inglaterra, Irlanda y Escocia, los ministros del contrabando y el almojarifazgo, sobre el visitarlos así como entran en los puertos, hacen grandes vejaciones y molestias á los maestros de ellos, y cierran á los dichos navios las escotillas y pañoles, deteniendo el hacer la visita ocho y quince días y poniendo guardas a costa de los maestros, las cuales quieren que las sustenten y regalen con dádivas; mando a los dichos ministros, así del contrabando como del almojarifazgo, y á cada uno y á cualquiera de ellos, que dentro de tercero día hayan de hacer y hagan la dicha visita, sin ponerles guardas, ni llevar derecho por esto; y si las pudieren sea á costa del almojarifazgo mayor y almirantazgo, pues vosotros no debéis cosa alguna. Y cuando vinieren á dichos puertos de Málaga, Cádiz y Sanlúcar cualesquier navios

con mantenimientos o mercaderías, al tiempo de la visita y de la descarga, ni en otro alguno, en la forma referida, mando también que los jueces y ministros del contrabando y almirantazgo ni otro alguno, no puedan poner ni pongan en ellos guardas á costa de los maestros ó dueños, ni sobre esto se os hagan molestias á los unos ni á los otros, que es en conformidad de lo dispuesto - en los capítulos 4º de la institución del dicho almirantazgo, por el cual se hace consignación en efectos tocante á él para la satisfacción de las guardas y ministros suyos, y en el 8º, de las paces, en que se manda que los vasallos de un rey en el territorio del otro sean tratados como los mismos naturales, en cuyos navíos nunca se han puesto guardas á costa de los maestros ni dueños de ellos.

5º. Y porque también los ministros del contrabando en los dichos puertos luego que los navíos dan fondo piden á los maestros los libros de sobordo y si en ellos no se hallan escritas las mercaderías que os bienen asignadas, os hacen causa por ello, aunque tengáis los conocimientos que los maestros han dado de haberlas recibido para entregarlas según su consignación, en lo cual recibís notorio agravio, porque el mejor instrumento que podéis tener son los conocimientos de los maestros, porque por ellos los apremiéis por justicia a que os entreguen las mercaderías; y si los maestros por descuido o por malicia no las escriben en los dichos libros de sobordo, no es justo que se ejecute la pena en los dueños de las mercaderías, sino en los maestros y navíos, y ejecutándose en esta forma, los libros de sobordo siempre estarán justos

tificados: en cuanto á esto es mi voluntad y declaro, que los maestros cumplan con exhibir los libros de sobordo á los tres días de como hayan entrado en los dichos puertos, y mando que por esta causa, mostrando los dueños de las mercaderías, los conocimientos, no se os pueda hacer ni haga causa ni molestia alguna.

6º. Y porque asimismo, los jueces de sacas y otros ministros os hacen muchas molestias y vejaciones si hallan en los navíos dinero, y es fuerza que los maestros tengan cantidad, conforme las toneladas,, para comprar velas, cables, áncoras y otros bastimentos necesarios; doy licencia y permisión para que hablando primero hecho registros, como se acostumbra, ante el juez que conoce de estas causas, cada navío pueda tener tres reales de á ocho por cada tonelada para el dicho efecto, y no para otro alguno, sin que se pueda hacer ni haga causa alguna por ello.

7º. Y porque también los fieles ejecutores de la dicha de Sevilla os hacen molestias, vejaciones y causas, diciendo que es de ordenanza manifestéis la manteca, baqueta y otras mercaderías y mantenimientos, y que declaréis los precios á que vendéis y á qué personas, por lo cual ha dos años que no se trae manteca a la dicha ciudad, y la ordenanza no debe hablar con el extranjero que trae sus mercaderías y mantenimientos por alta mar, sino con los regatones que van a comprarlas á los puertos y las traen á la dicha ciudad para ganar en ellas; declaro no tener obligación á hacer las dichas manifestaciones, ni por ello se os pueda obligar á hacerlas, ni hacerseos causas; y si las -

hicieren mando se remitan al juez conservador, para que él las determine.

8º. Y porque muchas veces habiendo arrendado casas en que vivir y tener vuestras mercaderías, estándolas vendiendo, personas poderosas que tienen privilegio os las quitan antes de cumplir vuestros arrendamientos, por ser grandes y haberlas buscado donde está el comercio, y os obligan á mudar las mercaderías, las cuales se os maltratan y hurtan, quiero y mando que durante el tiempo de vuestro arrendamiento no se os puedan quitar las dichas - casas por ninguna persona, aunque sea juez y tenga privilegio particular.

Y para que todo ello sea cierto y seguro mando al rejente y jueces de la mi audiencia de grados de la ciudad de Sevilla, alcaldes de la cuadra de ella y al mi asistente de la dicha ciudad y á su lugarteniente en el dicho oficio, y á los demás jueces y justicias de ella y de otras cualesquiera ciudades, villas y lugares de los mis reinos y señoríos de la Corona de Castilla á quén principal ó incidentemente tocare todo lo aquí contenido, que todas las causas que estuvieren pendientes en que vosotros fueredes reos, siendo de las calidades en esta mi carta declaradas, provean y den orden se remitan luego al juez conservador que os tengo nombrado en el estado que estuvieren, aunque se hayan empezado antes ó después de la dicha mi provisión de 19 de marzo de este año, juntamente con las dichas provisión y cédulas, sin embargo de haberse mandado por la dicha mi audiencia de grados dar traslado de ello al dicho mi fiscal, y sin poner en ello escusa, réplica, duda, ni dificultad alguna; á los cuales mando que no se entrometan ni puedan entrometer

en cosa alguna tocante á lo contenido en las dichas provisión y cédulas y en esta mi carta, sino que las guarden y cumplan y hacer guardar, cumplir y ejecutar en todo y por todo como en ella se contiene; y á cada uno en la parte que le tocare las haga llevar y lleve á pura y debida ejecución con efecto, - de manera que todo ello se cumpla, sin que sea necesario ocurrir más á mí sobre esto, no embargante cualesquiera leyes y pragmáticas de los mi reinos y señoríos, ordenanzas, estilo, uso y costumbre, y todo lo demás que haya ó — pueda haber en contrario; con lo cual para en cuanto a ésto toca y por esta vez dispenso y lo abrogo y derogo, caso y anulo y doy por de ningún valor y efecto, quedando en su fuerza y vigor para en lo de adelante. Y de esta carta han de toamr la razón los contadores que la tienen de mi real hacienda, y declaro que de esta merced habies pagado el derecho de la media anata. Dada en Valencia á 9 de noviembre de 1645 años.— Yo el rey.— Yo Antonio Carnero, - secretario del rey nuestro señor la hice escribir por su mandado.— Licenciado don Juan Chumacero y Carrillo.— Licenciado don Antonio de Campo-Redondo y Rfo.— Licenciado José González.— Registrada.— Miguel de Olariaga, teniente de chanciller mayor.— Miguel de Olariaga.

TRATADO ajustado entre los Plenipotenciarios de S.M. CATHOLICA y los Diputados de las Ciudades Hanseáticas, para reestablecer el reciproco comercio à su antiguo estado, y darle toda la extension possible: concluido en Munster a 1 de septiembre de 1647; ratificado por S.M. CATHOLICA en Madrid a 26 de Enero de 1648, y por los Consules y Senadores de la HANSA TEUTONICA y publicado en Hamburgo a 12 de Agosto de 1650. (Simancas, original en Latin). (7).

NOS LOS CONSULES, Y SENADORES DE LAS CIUDADES DE LUBEK, BREMEN, HAMBURGO, Y DANCICK, EN NUESTRO NOMBRE, Y DE TODA LA HANSA TEUTONICA, declaramos, y hacemos notorio à todos, y à cada uno. Por quanto se ha tratado por mucho tiempo, y repetidas veces entre los señores Embaxadores Plenipotenciarios del Serenissimo, y Poderosissimo Rey de las Españas, nuestro Clementissimo Señor, para los tratados universales de Paz, de una parte; y los diputados de las sobredichas Ciudades Hanseáticas, para los mismos Tratados, de otra, de reducir el COMERCIO a su antiguo, y floreciente estado, y de ampliarlo; y finalmente convenido (bajo la Ratificación de ambos Señores Principales)

(7) ABREU Y BERTODANO, J.A. op. cit. Reinado de PHELIPE IV. Parte VI. Año MDCCLI, pág. 49 a 69.

el día $\frac{1}{11}$ de Septiembre de este año en Munster, con ciertas condiciones, en el modo, y forma siguiente.

SEA NOTORIO A TODOS, que habiendose representado muchas veces de parte de las Nobles Ciudades Hanfeaticas, por medio de sus Diputados expreffos, à los Embaxadores Plenipotenciarios del Rey de las Efpañas para el Tratado de la Paz general, refidentes en Munster de Westphalia, que el COMERCIO de dichas Ciudades, que con mutuo, y reciproco fruto, y utilidad havia florecido en otro tiempo en los Reynos, Dominios, y Eftados de S.M.C., fe ha arruinado de algunos años à esta parte, por la injuria, è infelicidad de los tiempos, y por las calamidades de la Guerra, con muy grande menoscabo, afsi de los — Pueblos Efpañoles, como de los Hanfeaticos y quebrantandose los Tratados ajustados fobre el dicho Comercio, habiendo presentado, y exhibido à este fin una Memoria de muchos gravamenes, à que con las mayores instancias fe pedia, en nombre de las fobredichas Ciudades, fe aplicasse remedio quanto antes, y ferriamente; y lo mismo pedian à boca, y por efcrito, en nombre de todo el Imperio, cerca de los mismos Plenipotenciarios del Rey de Efpaña, los Subdelegados de los Congreffos generales juntos, afsi en Munster, como en Ofnabruc; cuyas instancias oidas, y confideradas, habiendo buuelto à efcribir el principal Embaxador de eftos Plenipotenciarios de Efpaña, el Conde de Peñaranda, à fu Real Mageftad Catholica, y remitidole exemplares de los referidos gravamenes, juntamente con algunas Cartas de las dichas Ciudades Hanfeaticas, à cerca del

reftablecimiento del Comercio, y obtenidas benignas, y favorables refpueftas, por las quales abundante, y claramente manifielta fu Real Mageftad Catholica fu benévola propenfion à las Ciudades Hanfeaticas, y à fus inftancias y juntamente dà facultad à fus dichos Plenipotenciaries para tratar de efte ~~tefta~~blecimiento del Comercio, y ceffacion de los gravámenes: y afsimifmo para facilitar, y eftablecer de todos modos la antigua amiftad, navegacion, tranfporte, compra, y venta de mercaderias entre las Provincias Efpañolas, y Hanfeaticas, y fus Ciudades, y Pueblos; ajuftada fegunda vez con los infrafcritos Diputados, y Embiados de las Ciudades Hanfeaticas, una amigable, y expreffa Conferencia, y confulta fobre efte negocio; fe ha ccovenido entre unos, y otros provifionalmente, y baxo la futura aprobacion, y ratificacion de S.M.C.

I.

QUE los antiguos Privilegios, è Immunidades, que han adquirido las Ciudades Hanfeaticas en los Reynos, y Provincias de Efpaña, y principalmente (el Tratado del año de 1607), con las Efcrituras anexas, y la Real extenfion de ellos, (cuyo tenor, que fe infertará baxo la firma de los Embaxadores de ambas partes al fin del prefente Acuerdo, tendrá la fuerza de authentico) concedidas, confirmadas, y enteramente renovadas por efte mifmo Tratado, fe obfervarán de aqui en adelante puntualmente, y con buena fé de ambas partes, exceptuando aquellas cofas, que fe derogaren por los Articulos figuientes, pero en

primer lugar, que cefando las hoftilidades entre fu Real Mageftad, y las Provincias Unidas del País Baxo, yà fea por Tregua, ò por Tratado de Paz, todo - aquello que fe refervò contra las dichas Provincias, fus Habitantes, y Subdi- tos en el dicho Tratado del año de 1607., ceffe, y de todo punto fe extinga, durante la Paz, y Tregua; y fi en efte cafo fe huviere concedido à los Subdi- tos de las dichas Provincias Unidas del País Baxo, por razon del Comercio, -- y de aquellas cofas que pertenecen à la feguridad, y libertad de è mifmo, al- guna cofa mas de lo que antiguamente competia, `fe concediò à los Hanfeaticos, todo fe entienda concedido à los Hanfeaticos, en virtud de efte Tratado, ma-- yormente conftando, que las principales Ciudades de eftas Provincias fon igual- mente miembros de la Sociedad Hanfeatica: pero en tiempo de Guerra fe observa- rà lo difpuefto en los figuientes Artículos de efte Convencion.

II..

Las nuevas formulas de Certificaciones, que fe han introducido de algu- nos años à efte parte contra, o fuera de lo prefcripto por el Tratado del año de 1607., feràn fuprimidas; y fe eftara folamente à los modos de inquirir, y certificar, que fe expreffan en los precodentes Tratados, reftituyendolo todo à fu antiguo sèr: de manera, que los Maeftres de Navios eftèn obligados tan - folamente à mofttrar una Certificacion, con expreffa declaracion de las merca- derias que llevaren en cada Navio, conforme à la formula del dicho Tratado --

del año de 1607., para que se mantengan mejor, y mas seguramente los vínculos de Amistad, y Comercio entre los Pueblos de S.M.C., y de la Sociedad Hanfeática. Pero cesando las hostilidades con las Provincias Unidas, no se ha de dar mas Certificacion, fino de que las mercaderias no pertenecen à ninguno de — aquellos que no son Hanfeáticos, ò que no gozan de los mismos privilegios, y de derechos, que los Hanfeáticos en los Reynos, y Dominios de su Real Magestad.

III.

Pero mientras subsistieren las hostilidades entre su Real Magestad, y — las Provincias Unidas del País Baxo, 'ò' otros qualesquier Enemigos, gozarán — los Hanfeáticos de la Neutralidad, que no se les niega por los Enemigos de S. M.; y por tanto, quedando fálvas todas las anteriores cosas concedidas à la — Sociedad Hanfeática, tendrá libre facultad para traficar en qualquier tiempo con las Provincias Unidas, y con otros qualesquier Enemigos de su Real Magestad; ir, y salir de sus Tierras, y conducir, y transportar mercaderías por — Tierra, y por Mar, excepto aquellas correspondientes al uso de la Guerra, que provengan de los Dominios de España. En cuyo supuesto, para que no se figa — ningun dolo, se observará de aqui en adelante lo que en el Artículo XI. del — dicho Tratado del año de 1607. está asentado à cerca de no transportar merca — derías à las dichas Provincias Unidas del País Baxo, y de las obligaciones, — que se han de hacer sobre esto, en quanto à todos los Lugares Enemigos, à cer

ca de las dichas mercaderias.

IV.

Las Ciudades Hanfeaticas daràn todas señales de amistad al Rey Catholico, y à sus Subditos, y Eftados; y demàs de esto todo apresto de Naves, y de las demàs cofas que pertenecen à ellas, y à su reparo, segun la costumbre del lugar; y ferà libre, y permitido à los Ministros de S.M.C. comerciar en ellas, juntamente con todas las demàs commodidades, que se concedieren à otro qualquier Principe, y Eftado Neutral, y Amigo en qualquier tiempo, y lugar.

Los quales pactos han firmado, y sellado con sus Sellos los Embaxadores de España de una parte, y los Diputados Hanfeaticos de otra; y para mayor firmeza se han encargado de procurar, y entregar dentro de quatro meses las Ratificaciones de S.M.C., y respectivamente de sus Principales.

Hecho en Munster à $\frac{1}{11}$ de Septiembre de 1647.

(L.S.) El Conde de Peñaranda

(L.S.) Frate Joseph, Arzobispo de Cambray

(L.S.) A. Brun

(L.S.) David Gloxino, D. y Syndico de Lubek.

(L.S.) Gerh. Coch. D. Senador de la Republica de Bremen

(L.S.) Juan Christoval Meurer, D. Syndico de Hamburgo.

Y habiendose convenido, que las Ratificaciones de esta Convencion se entregarian reciprocamente dentro del termino de quatro meses; por tanto, con -

previa madura deliberacion, en virtud de las presentes, aprobamos en todo, y tenemos por rata, y firme la sobredicha Convencion, segun està inferida mas - arriba al pie de la letra, juntamente con el Tratado del año de 1607., añadi- do al fin, y con sus demás anexos, de la misma manera, que fi todas, y cada - una de las cosas comprendidas allí se huvieffen hecho, y tratado en nuestra preferencia, prometiendo de buena fé por nuestra parte cumplir del mejor modo - posible las cosas arriba admitidas, y prometidas. Para cuya mayor fé, y segun- ridad hemos procurado, que se entregue este Instrumento de Ratificacion corro- borado con los Sellos de las sobredichas Ciudades.

RATIFICACION POR PARTE DE S.M. CATHOLICA DEL TRATADO ANTERIOR.

DON Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragón, de las dos Sicilias, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valen- cia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas s de Canarias, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra firme del Mar Oceano, Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña, de Bravante, y de Mi- lán, Conde de Habspurg, de Flandes, Tirol, y Barcelona, Señor de Vizcaya, y - de Molina, &c. Por quanto el Conde de Peñaranda, de mi Consejo, y Camara de - Castilla, y mi primer Plenipotenciario en el Congreſſo de la Tratacion de la Paz general de Munſter, y Antonio Brun, del Consejo Supremo de mis Países Ba- xos de Flandes, tambien Plenipotenciario mio en el dicho Congreſſo, con espe-

cial orden mia, y en mi nombre, trataron, acordaron, y firmaron con los Dipu-
tados de las Nobles Ciudades Hanfeaticas, y en fu nombre en II. de Septiem-
bre del año paffado de 1647., en razon, y forma de comerciar dichas Ciudades,
y fus Habitantes en mis Reynos, y Provincias de Efpaña; la Efcritura que fe -
figue.

Por tanto defeando Yo la ratisfaccion de dichas Nobles Ciudades, y que
fe continde entre fus Habitantes, y mis Subditos la buena, y fincera corres-
pondencia que fiempre fe ha procurado, yrenovandola por medio de efte nuevo -
Tratado: Por la prefente apruebo, ratifico, y confirmo la dicha Efcritura - -
aquí inferta, fegun, y como en ella fe contiene, como cofa hecha por mi orden,
y en mi Real nombre, para que fea firme, eftable, y fegura en todo tiempo. -
Afsi lo tengo por bien, y en firmeza de ello mandè defpachar la prefente, fir-
mada de mi mano, fellada con el Sello fecreto, y refrendada de mi infraefcrip-
to Secretario de Eftado. Dada en Madrid à veinte y feis de Enero de mil feif-
cientos quarenta y ocho. YO EL REY. Geronymo de la Torre (a).

CONFIRMACION, DECLARACION, y AMPLIACION por parte de la Mageftad Catho-
lica del Señor D. Phelipe IV. de los Privilegios concedidos por fus Predece-

(a) Efta Ratificacion fe ha tomado de un Tratado impreffo en Madrid el año -
1648. exiftente en la Secretaria de Eftado del cargo del Marquès de Uzta-
riz.

ffores en los Reynos de PORTUGAL, à las Ciudades Confederadas de la HANSA TEUU
 TONICA, para el Comercio en los Reynos de CASTILLA, y ANDALUCIA, y forma de
 practicarle: becha en Madrid à 26 de Enero de 1648., y publicada en Hamburgo
 en 12. de Agosto de 1650. (Secretarà de Eftado del Cargo del Marquès de Uztau
 riz, Copia en Caftellano, authorizada con una Certificacion en Latin, dada -
 por los Diputados de las referidas Ciudades Hanfeaticas).

EL REY.

Por quanto por parte de las Ciudades de la Confederacion de la Hanfa -
 Teuronica, entre otras cosas, que fus Embaxadores Juan Domano, Jurifconfulto,
 Syndico, y Orador de las dichas Ciudades; Henrico Broquer, Senador de Lubecas;
 Hieronymo Bogheler, Senador de Hamburgo; y Arnaldo Walholten, Senador de Dan-
 cick; nos ha fido pedido, que demàs de confirmarles los Privilegios, que los
 Serenifimos Reyes de Portugal, nueftros Predeceffores, concedieron, y confir-
 maron à los Naturales de la dicha Hanfa Teutónica en los Reynos, y Corona de
 Portugal, fueffemos fervidos de ampliarlos, y eftenderlos à nueftros Reynos
 de Caftilla, reprefentandonos la voluntad con que fiempre han acudido al Tra-
 to, y Comercio, aventurando fus vidas, y haciendas, y commutando fus utilida-
 des en abundante, y honefta mercancia, permaneciendo desde fu principio en -
 perpetua obfervancia, teniendo confideracion à ello, y por el amor que fiam-
 pre hemos tenido à los Subditos de la dicha Hanfa, defenadoles todo bien, y -

aumento: Haviendose visto en mi Consejo de Estado hemos acordado de conceder—
les, como por la presente les concedemos à todos, y à cada uno de los Natural
les de la Hanfa Teutonica, las gracias, y privilegios siguientes.

I. Primeramente les concedemos, que puedan tener en estos Reynos (Ca—
jas de Contratacion), y que sean reservadas de Huefpedes, y de todo otro im—
pedimento.

2. Iten se les concede, que puedan nombrar en los Puertos de estos Reyn
nos (Consules de su Nacion), los quales su Magestad aprobarà, y authorizarà;
y que sean tales, que serviràn con la fidelidad que conviene, haciendo el jur
ramento, que por la Tratacion hecha con los dichos Diputados sobre el Comer—
cio hoy dia de la fecha de esta, està acordado para evitar los fraudes de los
inobedientes, y demás inconvenientes, que hasta agora ha havido; y asimismo
juren de cumplir la instruccion que ellos les dieren, aprobada por su Magesta
dad.

3. Iten se les concede, que puedan tener Agente proprio en su Real Cort
te, para que haya en todo el buen orden, y correspondencia necessaria.

4. Iten quiere su Magestad, que los dichos Hanfeaticos (sean reserva—
dos de los officios publicos, y Curadurias, si no los quifieren de su voluntad).

5. Iten (que no sean competidos à servir por Mar, y por Tierras los Hanf
eaticos que residieren en estos Reybos).

6. Item (que nadie les embargue, embarace, ni de apofento, las casas en que viven, ò vivieren, bodegas, y callerizas; y que puedan andar con bestia, mulas de freno, y fillas en todos estos Reynos).

7. Item se les concede que puedan tratar, y contratar libremente en estas Reynos; y que de la moneda de plata, que traxeren de sus Provincias, y metieren en estos Reynos, no paguen ningunos derechos.

8. Asimismo se les concede, que de la moneda de oro, ò plata, que hubieren registrado al tiempo que la metieren en estos Reynos, antes de haver desembarcado, siendo de la ley, y estampa de sus Provincias, puedan volver à facer la que les fuere; y en caso que quieran cambiar alguna de la plata que traxeren por oro, la puedan facer, aunque sea en moneda de estos Reynos.

9. Item tiene su Magestad por bien, y les concede, que en caso de Guerra, ò otro accidente tal, no corran los Hanseaticos detrimento en sus personas, ni bienes, y que tengan tiempo de año y dia para poder retirarse con sus haciendas, con que lo mismo se conceda à los Subditos de su Magestad, que se hallaren en el dominio de las Ciudades.

10. Asimismo se les concede, que puedan escoger uno de los Corredores aprobados, y que tuvieran Titulo, el que mejor les estuviere; y que éste lo haga sus negocios.

11. Iten concede fu Mageftad, que noppuedan fer prefos, ni detenidos por cafo que fea de Crimen, ò Civil, fino por un Juez particular, el qual fu Mageftad nombrará, para que conozca de fus Caufas.

12. Iten fe les concede que quando fe ofrezca, que los Adminiftradores, y Recaudadores de las Rentas, ó el Juez de Sacas, y cofas vedadas, teniendo informacion, ò fofpecha de algun fraude, huviere de vifitar las cafas de los Hanfeaticos, ò de qualquiera de ellos; fea por fu perfona, ò la de algun Miniftro, ò Efcribano, que nombrare; pero que efto fea hallandofe prefente el Juez de los Hanfeaticos, ò algun Miniftro fuyo; y que folo firva de fer testigo, para que no fean moleftados con achaques.

13. Iten fe les concede à los dichos Hanfeaticos, que puedan cargar fus mercancias en las Naos que quifieren, como fean de los que tuvieran permiffion de tratar en los Reynos de fu Mageftad, y no de otros.

14. Iten fe les concede, que puedan tener pefas, balanzas para ajuftrar fus mercancias en fus cafas, como fean felladas del Contrafte; y que ninguno de los compradores fea obligado à paffar por aquel pefo, fino que queriendolo afsi, fe ufe del Pefador público.

15. Afsimifmo fe les concede, que fu Juez lo fea en todas las Caufas - Civiles, y Criminales en la Ciudad de Sevilla, y feis leguas à la redonda, y tenga jurifdiccion hafta en cantidad de diez mil maravedís, fin que de èl ha

ya apelacion, ni agravio, excepto contra las personas privilegiadas; y en lo que fuere de ai arriba se junte con dos Letrados, fulminada la Causa, y la Sentencia en Definitiva.

16. Asimismo quiere su Magestad, y manda à las Justicias, que tengan particular cuidado con que sus Ministros no entren en las casas de los Hanfeaticos sin orden, y legitima causa.

17. Item se les concede, que si alguno de los Factores de los dichos Hanfeaticos, u otro de aquella Nacion falleciere, vaya su juez à casa del difunto, y haga Inventario de sus bienes, con asistencia del Conful, y de dos Ancianos; y se guarden en poder del Depositario General, si louviere; y fino, en poder del Conful, y de los Ancianos, para que con buena fe se restituyan à los verdaderos Herederos.

18. Item concede su Magestad, que los dichos Hanfeaticos puedan andar por todos estos sus Reynos en mulas, hacas, y les den posadas, y mantenimientos por sus dineros.

19. Item se les concede, que cada, y quando que quifieren, puedan entrar en la Aduana, sin detenerles la puerta.

20. Item se les concede à los Hanfeaticos, que su Juez pueda executar la pena de cinquenta ducados en todos los que no les guardaren sus Privilegios, y que se apliquen à alguna obra pia; los que parece se pueden añadir,

fegun fummemoria.

21. Iten concede fu Mageftad, que los dichos Hanfeaticos puedan entrar con fus Navios, afsi propios, como alquilados, y todo genero de mercancías, y qualesquier otros bienes, como no fean las dichas Naves, ni mercancías de las Islas de Holanda, y Zelanda, y Provincias Unidas, ni otras prohibidas, en todos los Puertos, Senos, y Biftritos de eftos dichos Reynos, donde en tiempos paffados han acoftumbrado, y les ha fido lícito entrar feguramente, fin Salvoconduêto, ò otra Licencia general, ò efpecial, y detenerfe en los que les pareciere, y bolver à navegar quando quifieren, guardando las Coftumbres, y Leyes de los tales Puertos.

22. Iten, que à las Naves de los Hanfeaticos, de aqui adelante, las — perfonas, Miniftros, y otros qualesquier Oficiales, que fueren à hacer la Vi fita, no les tomen, ni pidan cofa alguna por ella; y fi acafo los Adminiftradores, ò Arrendadores de nueftra Hacienda, quifieren embiar à las Naves algunas Guardas, las embien, y tengan los dichos Arrendadores à fu cofta, y los Adminiftradores à la de mi Hacienda; y no les confientan, que pidan, ò tomen cofa alguna à los Hanfeaticos.

23. Iten, que las mercancías de los Hanfeaticos, que fe traxeren à la Aduana, no fean apreciadas por los Oficiales de ella à mayor precio del que realmente valieren; ni que los dichos Oficiales fe las tomen, contra fu vo—

luntad, en cuenta de fus derechos, ni pagandoles lo que và de mas à mas.

24. Iten, que puedan caminar por todo el Reyno en cavallos, mulas, y carros; negociar, contratar, comprar, y vender en èl libremente, afsi por fus perfonas, como por fus Agentes, y Factores, qualesquiera que fean, como à ellos les fuere mas commodo, y pareciere mejor, con que los dichos Factores fean de los que fu Mageftad permite, que refidan en fus Reynos.

25. Iten, que fea licito à los Hanfeaticos vender fus mercancias quando quiera, y à quien quiera que quifieren, pagando los derechos; y de ningu na manera fean compelidos à vender contra fu voluntad, afsi las mercancias que fueren libres de ~~der~~echos, como las otras.

26. Iten, que los naturales de la Hanfa, que por caufa del Comercio - vàn, viene, eftàn, y contratan en eftos Reynos, en ninguna Caufa Civil, ni Criminal, puedan fer citados, juzgados, ni condenados, fino ante el Juez efpecial que fe les diere, exceptuando las Caufas que tocaren à los derechos Reales, y Aduanas, de las quales han de conocer, y juzgar los Jueces, y Recaudadores de ellas.

27. Iten fe les concede, que no fea licito apelar de la fimple Sentencia Interlocutoria, ni de la mifma Definitiva, fi no excediere la fuma de - cien ducados.

28. Iten, que las Caufas de los Hanfeaticos fe defpachen con brevedad,

y que no se vayan alargando, con ninguna dilacion, de dia en dia.

29. Item se les concede, que toque la execucion de lo juzgado à folo el Juez, y Conservador proprio de los Hanfeaticos, afsi las juzgadas por - el, como por los Jueces de Apelacion.

30. Item, que los Hanfeaticos, y sus Naves, y Haciendas, no sean detenidos en nueftros Reynos por ningunos arreftos, y mucho menos sean agrava—dos por ningunas reprefalias, fino los authores de los delitos, y sean con—venidos por Via Juridica, y no paguen los unos los delitos de los otros.

31. Item, que fi en algun tiempo fucediere padecer naufragios alguno de los Hanfeaticos en eftos Reynos, y Señorios, nadie se atribuya, ni tome de los bienes, y mercancias, que se facaren, y falvaren del tal naufragio, ni el Fifco Real, ni otro de los Subditos de fu Magestad; fino que qualquier ra cosa que sea se déxe, y reftituya à los que han padecido el naufragio, ò à sus Herederos.

32. Item, que fi acafo por razon de esta Confederacion, y Union del - Comercio, se huvieren hecho algunos gaftos por la Hanfa, ò en lo venidero - se huvieren de hacer, de los quales algunas Ciudades quifieren escofarse, - no sean partícipes las tales Ciudades de eftos Privilegios, hafta que igual—mente hayan participado en los mismos gaftos.

33. Item, que quando acafo alguno de eftos privilegios hubiere necesi—

dad de alguna interpretacion, fea fiempre en favor de los Hanfeaticos.

Efte Papel es el mifmo original, que vino de Madrid con la Ratifica—
cion original de fu Mageftad fobre el Tratado de Comercio con las Villas —
Hanfeaticas, defpachada en aquèlla Corte à veinte y feis de Enero de efte
año, la qual mandò fu Mageftad remitirmela à mí el Conde de Peñaranda, con
fu Real Carta de veinte y feis de Enero; y en fé de ello Nos los infrafcrip
tos Plenipotenciarios de fu Mageftad firmamos, y fellamos efte Papel, fegun
lo que fe previene en el primer Articulo de la dicha Tranfaccion de fu Ma—
geftad, en Munter à 3. de Mayo de 1648.

(L.S.) El Conde de Peñaranda.

(L.S.) A. Brun.

NOS los Diputados de las Ciudades Hanfeaticas teftificamos, en virtud
de nueftra firma, y Sello, que la prefente copia concuerda enteramente con
el Inftrumento del mifmo tenor, authorizado con la firma de los Iluftrifi—
mos, y Excelentifimos Señores Embaxadores de Efpaña, en virtud del Articulo
I. de la ultima Convencion, y que nos ha fido entregado con la Ratificacion
original de S.M.

En Munfter à 3. de Mayo de 1648.

DAVID GLOXINO, Diputado, y Syndico de Lubec, firmè.

JUAN CHRISTOVAL MEURER, Diputado, y Syndico de la República de Hambur—
go.

SEA manifestto à todos, y à cada uno, que haviendo embiado los meses paffados las indictas Ciudades de la Hanfa Teutónica fus Embaxadores N.N. N.N. al Serenifsimo, y Poderofifsimo Principe, y Señor Don Phelipe Tercero de este nombre, Rey de las Efpañas, y de las Indias, Señor nuestro Clementi^ufsimo, para que dieffen à fu Mageftad la enhorabuena del felix gobierno de fus Reynos, del nacimiento de la Real fucefsion de entrambos fexos, y para renovar los pactos, y confederaciones de la antigua amiftad con fu Mageftad, y procurar, y pedir confirmacion, y aumento de los privilegios antiguos, y que fe quiten algunos impedimentos, que eftrechaban, y detenian el curfo — del Comercio: Su Mageftad, movido de la equidad, y benevolencia que tiene — para con todos, y principalmente para con las Ciudades confederadas ~~darla~~— Hanfa Teutonica, despues de haver primero oído los dichos Legados, y admiti^udoles fiempre graciofamente; y examinadas diligentemente las cofas de confi^uderacion fegun fu jufto pefo, ante todas cofas ha renovado con buena voluntad el derecho de la union, y amiftad antigua; y no folo les ha confirmado los privilegios, que los Reyes de Portugal fus predeceffores antiguamente — les concedieron; pero los ha eftendido en cierta forma à los Reynos de Caf- tilla, como por los actos de la confirmacion, y extenfion mas particularmen^ute confa; y afsimifmo ha tratado, y convenido con los dichos Legados fobre el libre y facil corriente del Comercio en esta manera.

1. Primeramente se ha convenido entre su Magestad, y los dichos Legados, que sea liberrísimo el Comercio entre los Subditos de entrambas partes; y sea lícito à los Hanseaticos el poder entrar en todos los Puertos, Senos, y Difritos de su Magestad, en los quales en tiempos passados solian entrar falsa, y feguramente, sin algun Salvoconducto, ò otra Licencia general, ò especial; de tal manera, que no sean compelidos à esperar fuera de los Puertos, en la Mar, y anclados, ningun tiempo; fino que puedan via recta, y sin detencion entrar en los Puertos, y estar en ellos quanto les pareciere que les es necesario para descargar las mercancías de las Naves, y cargar otras en ellas; reparar los Navios rotos, y maltratados; calefetearlos, y embrearlos; comprar las cosas necesarias para el sustento, y viage; y finalmente bolver à partir, y navegar, con sus mercancías, bienes, y otras qualesquier cosas, habiendo pagado los derechos, segun las tablas de sus Privilegios para la parte que les pareciere, sin ningun impedimento.

2. Tambien se ha concertado, que pueda cada qual vender sus mercancías, quando, y à quien quisiere; y de la misma manera comprarlas de quien le pareciere, de manera, que no sea compelido à vender, ò comprar contra su voluntad, fino que el que no quisiere vender sus mercancías, las pueda detener, y guardar por tiempo, ò en otra manera; y pagado el derecho concertado, llevarlas; y que cada uno ponga el precio a sus mercancías; y que no se apreen, ni estimen por otro las mercancías ajenas.

3. Más fe ha concertado, y concluido, que no fea licito à nadie el - tomar contra la voluntad del dueño las mercancías, debaxo de ningun pretex to, ni qualesquier otras cosas: y si acafo fu Magestad tuviere necefsidad de algunas de las mercancías, no fea licito à fus Ministros, y Oficiales el embargar, ò tomar en otra forma las mercancías de los Hanfeaticos, si no - fuere precediendo primero contrato, y concertado, y pagado el precio, ò ha bida feguridad; y que fin efto no fe entreguen las mercancías por los Ven dedores, ni fe tomen por los Ministros, y Oficiales de fu Magestad.

4. Iten fe ha concertado, y concluido, que nadie fea forzado contra fu voluntad à ufar en fus contratos de Corredores, ò Medianeros, fino que eftè à difpofition de cada uno si quifiere ufar del que mejor le pareciere, ò bien celebrar èl mifmo fus contratos.

5. Iten fe ha concertado, y concluido, que las Ciudades Hanfeaticas, y fus Ciudadanos, Subditos, Habitantes, y Moradores, fean libres del dere cho de Treinta por Ciento, que de pocos años atrás fe comenzó à cobrar; y tambien queden libres, y francos para fiempre de todas las demás impoficio nes, y extorfiones de que, fuera de la voluntad de fu Magestad, algun tiem po han fido trabajados; y que todo el dinero, que en razon del derecho de Treinta por Ciento eftà depofitado, fea reftituido luego à fus dueños: y - si en razon de efto han intervenido algunos Fiadores, eftos tales fean li bres de la fianza, y los hombres Hanfeaticos folo fean obligados à pagar -

aquel derecho, que està expreffado, y definido en fus Privilegios de aquí adelante.

6. Iten fe ha concertado, y concluido, que las Ciudades Hanfeaticas luego despues de la confirmacion de esta Tranfaccion, prohiban por Edicto público, que ninguno de fus Subditos, Moradores, ò Vaffallos transfieran, ni lleven à los Reynos, y Señorios de fu Mageftad, y de los Señores Príncipes Alberto, y Ifabèl Clara Eugenia, Archiduques de Auftria, y Duques de Borgoña, y de Bravante &c. ningunas Naves de los Holandeses, y Zelandeses, ni en fus proprias Naves ningunas mercancías, aora sean nacidas, aora hechas en Holanda, y Zelanda, ni ningun Mercader Holandès, ni Zelandès, fo - pena de la indignacion de los Magiftrados, y otras penas constituidas de derecho contra los menofpreciadores de fus mandatos.

7. Que para que en este negocio, entre ambas partes, fe vaya con mayor feeguridad, y mas rectamente fe pueda obviar à los fraudes, ge ha conveⁿnido, y concertado, que las mercancías que fe huvieren de traer por los Hanfeaticos a los Reynos, y Dominios de fu Mageftad, vengan feñaladas con el regiftro, y fello de la Ciudad de donde fe facaren; y afi regiftradas, y feñaladas, sean tenidas, y aprobadas por mercaderías Hanfeaticas, fin ninguna dificultad, o difputa, falva la prueba del fraude; pero de tal manera, - que no por effo fe detengan las mercancías, ni en ninguna manera fe impida el corriente del Comercio, y mercancia; pero las mercancías que no vinieren

registradas, ni señaladas, (fiendo de las que admiten señal) incurran en la pena de confiscacion, y sean, como dicen, de buena prefa; y de la misma manera puedan ser presos, y detenidos todos los Holandeses, y Zelandeses que se hallaren en estas Naves.

8. Más se ha convenido, y concertado, que demás de los Testimonios, y Registros de las Ciudades en cuyos Puertos se embarcaren las mercancías, también los Señores de las tales mercancías hayan de enviar sus Cartas particulares à los Confules puestos por la Hanfa en los Reynos de su Magestad, en los quales por orden se les declaren las mercancías, y esto para que no quede ningun lugar à los fraudes.

9. Para esto se ha convenido, y concluido, que los Confules así — puestos por la Hanfa, juren juntamente en la forma acordada entre su Magestad, y la Hanfa, que quieren usar fielmente su oficio; y advertir con toda diligencia, que no se haga ningun daño, ò fraude contra esta Transaccion, ni dissimulacion en ninguna manera, so pena de privacion de oficio, y — otras penas ordenadas contra los perjuros, como en la forma del juramento y actos de esta Legacion mas particularmente se contiene.

10. Item se ha concertado, y concluido, que las Ciudades Hanseaticas, luego despues de la confirmación de esta Transaccion, prohiban por Edicto público, que ninguno de sus Subditos, Mercaderes, no Vafallos, lleve à Ho—

landa, ò Zelanda ningunas mercancías de los Reynos, y Dominios de fu Magestad, y de los Serenísimos Archiduques, fino à folo los Puertos Hanfeaticos, ò à otros lugares, y Reynos Amigos, ò Nautrales, fo pena de confiscacion de todas aquellas mercancías, que de eftos Reynos fueren llevadas por por los Hanfeaticos à Holanda, ò Zelanda; de tal manera, que la mitad de las mercancías, ò de su valor, fea para el Fifco de la Hanfa, y la otra mitad fe dè à los Denunciadores, facandose primero de ella el derecho del Treinta por Ciento, u pagandolo à los Diputados de fu Magestad, dando fe à las Probanzas legitimas hechas en Efpaña, y embiadas en authentica forma à la Hanfa.

11. Y para que en efte cafo vaya fu Magestad mas affegurado, y fe eviten tanto mejor los fraudes, fe ha convenido, y concertado, que los Mercadores, ò Maeftres Hanfeaticos fe obligaràn (al tiempo que cargaren las Naves en Efpaña, ò en otros Reynos, y Dominios de fu Magestad, y de los Señores Archiduques, ante los Magistrados del lugar donde fe embarcaren en las Naves las mercaderías) que pagaràn el derecho de Trèinta por Ciento, fi llevaren aquellas mercancías à Holanda, ò Zelanda; y que dentro de diez y feis mefes, fi dirigieren via recta de allí fu viage à las Ciudades Hanfeaticas, traeràn Teftimonio de fu Magistrado; y fi por ventura navegaren primero por el Eftrecho la buelta de Italia, dentro de veinte mefes al Magistrado del lugar donde embarcaron las mercaderías; por el qual confte del

lugar de la defcarga; y que traído, ò embiado el tal Teftimonio, haya efpi-
rado la obligacion del Mercader, ò Maeftre; y fi eftuviere por efcrito, fe
darà luego al que traxere el Teftimonio de la defcarga.

12. Iten fe ja concertado, y concluido, que por ninguno de los que -
dieren, ò hicieren el Teftimonio de la defcarga, fe cometa de ningun modo
engaño, ò fraude, fo pena de privacion de oficio, y otras, que contra los -
Prevaricadores, y Falfarios de efta calidad eftàn conftituidas.

13. Iten fe ha concertado, y concluido, que quando fuceda el traerfe,
ò facarfe algunas de las mercancías, y haciendas prohibidas, y el delinquir
alguno de otra manera, folamente fe confifquen las cofas prohibidas; y en -
fu genero fola la perfona que delinquiere, fufra la pena; y que no fean por
ello detenidos, ni moleftados la Nave, ò los demás inocentes.

14. Y porque los derechos del Comercio, que aqui fe eftablecen, no de-
ben hacerfe infructuosos, como lo ferían fi à los hombres Hanfeaticos, mien-
tras vãn, y buelven à los Reynos, y Dominios de fu Mageftad, y de los Sere-
nifsimos Archiduques, y alli fe detienen por razon del Comercio, ò de los -
Negocios, fe les hicieffe alguna moleftia por razon de la conciencia; por -
tanto, para que el Comercio fea feguro, afsi en la Mar, como en la Tierra,
fu Mageftad, y los Serenifsimos Archiduques, tendràn cuidado, y proveeràn,
que por la dicha caufa de la conciencia no fean moleftados, ni inquietados

contra el derecho del Comercio, mientras no dieran escandalo à los demás.

15. Iten se ha concertado, y concluido, que si alguna vez sucediere, que alguno de los Hanfeaticos muera en los Reynos de su Magestad, se inventarién ante un Notario sus bienes por el Conful, y dos de los Ancianos de su Nacion, juntamente con el Juez diputado para la Nacion por su Magestad, y se guarden por el Conful, y los Ancianos, y con buena fe se restituyan à los verdaderos Herederos, sin ninguna disputa, ni carga.

16. Iten se ha concertado, y concluido, que si alguna vez su Magestad ò los Generales de su Armada, ò otros Oficiales, y Ministros, acaso tuvieren necesidad de las Naves de los Hanfeaticos para algunos servicios de su Magestad, no les sea licito el detenerlas contra su voluntad, ò forzarlas à servir de ninguna manera, sin que primero tengan el consentimiento de los Maestros, y se concierten con ellos en el precio; y celebrado el contrato, sean tenidos en el servicio, y tratados amigable, y benevolamente, y se les pague al tiempo concertado su estipendio, sin detencion, ni disputa, como mas particularmente se contiene en las tablas de los Privilegios.

17. Y para que puedan los Subditos de entrambas partes recibir mas abundantes frutos de esta Transaccion, se ha concertado, y concluido, que su Magestad, y los Serenissimos Archiduques, juntamente con las Ciudades Hanfeaticas, unida, y separadamente, trabajaràn en que no se les cierre la

entrada à los Hanfeaticos para ninguno de los Puertos de fu Mageftad, y de los Serenifsimos Archiduques; fino que donde quiera puedan gozar de fus — Privilegios, y ufo del mas libre Comercio, conforme à lo que fobre efte cafo en muchas cofas los actos de efte Legacion lo teftifican.

18. Iten fe ha concertado, y concluido, que para mas abundante recompensa de las cofas de que los dichos Legados fe han quejado ante fu Mageftad, à folos los Hanfeaticos les fea licito por eftos diez años proximos, — el traer à los Reynos de fu Mageftad las mercancías de Alemania, y de los lugares Septentrionales fus vecinos; y que ninguno otro las pueda traer, — fo pena de confifcacion de las tales mercancías, quedando en fu vigor la — concefsion hecha à los Ingleses fobre el traer las mercancías de la Alemania Superior, las quales les ferà licito traer juntamente à los Hanfeaticos à los Reynos de S.M.

19. Iten fe ha convenido, y concertado, y fu Mageftad ha querido declaradamente, que folas las Ciudades Hanfeaticas fean comprehendidas en efta Tranfaccion, y ellas folas puedan aprovecharfe, y gozar del fruto, comodidades, y privilegios de efte Tranfaccion, concedidos à ellos; ni tampoco (a) aquellas Ciudades, que fe huvieron apartado del Cuerpo, y Confederacion Hanfeatica, ora fea de fu voluntad, ora fiendo excluidas, ni las que

(a) En lugar de ni tampoco, parece debe decir: pero no.

en lo venidero se apartaren, ó fueren excluidas.

20. Item fu Magestad excluye declaradamente aquellas Ciudades, que se han juntado á las Provincias Unidas contra fu Magestad en los Estados Baxos; y que ni estas, aunque en tiempos passados hayan fido de la Federacion Hanfeatica, puedan aprovecharse, ni gozar de esta Transaccion, y Privilegios, mientras no se hiciere Paz, ó Tregua con los rebeldes.

21. Item se ha convenido, y concertado, que á las Ciudades Confederadas de la Hanfa Teutonica les quede en su libre, y entero arbitrio el admitir á las Ciudades Libres del Imperio, que hasta agora han acostumbrado traer sus mercancías á los Reynos, y Dominios de su Magestad, y de los Serenísimos Archiduques en las Naves de los Hanfeaticos, en los mismos Comercios, y hacerlos participes de sus privilegios por el tiempo, y mientras á la Hanfa le pareciere convenir, con que aquellas Ciudades, en caso que sean admitidas, hagan, y cumplan lo mismo, que por esta Transaccion son obligados á hacer, y cumplir los Hanfeaticos.

22. Item se ha concertado, y concluido, que si en algun tiempo toda la Hanfa, ó alguno de sus miembros mas Noble, aconteciere por fuerza, y injuria ser conturbada, y derribada en su estado, y libertad, menoscabada la via del derecho, y justicia, que su Magestad, informado primero del caso, y fiendole pedido por la Hanfa en razon de esta conjuncion, y obliga

cion del derecho antiguo, la focorrerà con fu ayuda, y confejò, como mas cumplida, y particularmente lo muestren los actos de esta Legacion.

23. Item se ha concertado, y concludido, que todos, y cada uno de los sobredichos Capítulos se guarden de una, y otra parte con sincera, y buena fé; y las Ciudades Confederadas de la Hanfa Teutonica, debaxo de los sellos de feis de las Ciudades Vandalicas, y de la Ciudad de Dancick, de consentimiento, y aprobacion de la Hanfa desde su primera Dieta, los embien firmados, y aprobados de su Magestad, y en ellas tambien las hagan promulgar, y publicar, y guardar, y cumplir en todas partes por sus Subditos.

En fé, y testimonio de todo lo qual està colgado el Sello de su Magestad en este Instrumento, el qual tambien señalaron, y firmaron los Legados.

Este Papel es el mismo original, que vino de Madrid con la Ratificacion original de su Magestad sobre el Tratado de Comercio con las Villas Hanfeaticas, despachada en aquella Corte à veinte y feis de Enero de este año, la qual mandò su Magestad remitirmela à mí el Conde de Peñaranda, con su Real Carta de veinte y feis de Enero; y en fé de ello Nos los infrascriptos Plenipotenciarios de su Magestad firmamos, y sellamos este Papel, segun lo que se previene en el primer Artículo de la dicha Ratificacion de su Magestad, en Munster à tres de Mayo de mil seiscientos y quarenta y ocho años.

(L.S.) El Conde de Peñaranda

(L.S.) A. Brun

TRATADO DE MUNSTER CON LOS PAISES BAJOS

Tratado definitivo de paz y comercio, ajustado entre S.M.C.
y los Estados generales de las Provincias Unidas, en el Con
greso de Munster de Westfalia a 30 de enero de 1648: á que
se sigue un artículo particular tocante a la navegación y
comercio, acordado en 4 de febrero del mismo año (8).

En nombre y á gloria de Dios. Sea notorio á todos, que después del largo curso de sangrientas guerras que han afligido por tantos años a los pueblos, súbditos, reinos y países de la obediencia de los señores Rey de las Españas y estados generales de las Provincias Unidas del País Bajo, los dichos Señores Rey y Estados, movidos de cristiana compasión, y deseandopo ner fin a las calamidades públicas, y atajar las deplorables consecuencias inconvenientes, daños y peligros que la ulterior continuación de las dichas guerras de los Países Bajos puede traer consigo, particularmente habiéndo se extendido a otros Estados, países, tierras, y mares más distantes, y cono vertir los siniestros efectos de ella en los muy agradables de una buena y sincera pacificación de una y otra parte, y en los dulces frutos de una to

(8) RIQUELME, A.: "Apéndice al Derecho Internacional de España", Tomo II. Madrid 1849, pág. 27 a 49.

tal y firme quietud, para consuelo de los dichos pueblos y Estados de su obediencia, y para la indemnización de los daños padecidos en bien común, no solo de los Países Bajos, sino de toda la cristiandad, convidando y pidiendo á los demás principes y potentados de ella, que mediante la gracia de Dios se muevan a la misma compasión y aversión a las desdichas, ruinas y desórdenes que por tanto tiempo y tan cruelmente ha hecho experimentar el pesado azote de la guerra: para lograr un fin tan bueno y deseable los dichos señores Rey de las Españas D. Felipe IV y Estados Generales de las dichas Provincias Unidas del País Bajo, han nombrado y diputado, es á saber: el dicho Sr. Rey a - D. Gaspar de Bracamonte y Guzman, conde de Peñaranda, señor de Aldea Seca de la Frontera, caballero de la Orden de Alcántara, administrador perpétuo de la encomienda de Daymiel de la orden de Calatrava, gentil hombre de cámara de su S. M. de su consejo y cámara, embajador extraordinario de S. M. I., y primer plenipotenciario para el tratado de la paz general; y al Sr. Antonio - Brun, caballero, consejero de S. M. C. en su consejo de Estado, y supremo para los negocios de los Países Bajos y de Borgoña cerca de su real persona, y su plenipotenciario para los tratados de la paz general; y los dichos señores Estados generales de las Provincias Unidas del País Bajo al Sr. Barthold de Gent, señor de Loenen y Meynerswik, Senescaal y Dickgrave de Bonunel, Tielve y Bonmielesweerden, diputado de la nobleza de Gueldres a la asamblea de los señores Estados generales; al Sr. Juan Matchenesse, señor de Matheness, Riviere, Onmeer, Sontevveen, etc., diputado en el consejo ordinario de Holanda,

Westfisia, á la asamblea de los señores Estados Generales de parte de los nobles de la dicha provincia, consejero y Heemrad de Schieland; al señor Adrian Paw, caballero, señor Heemstede, Hogersmilde, etc., primer presidente, consejero y ministro de cuentas de Holanda y Westfrisia, y diputado de parte de la dicha provincia á la asamblea de los señores Estados generales; al señor Juan de Knuyt, caballero, señor del viejo y nuevo Cosmar, primer noble y personero de la nobleza a los Estados, y primer consejero de S. A. el señor príncipe de Orange, diputado ordinario a la asamblea de los señores Estados generales; al Sr. Godart de Reede, señor de Nederhorst, Uredolant, Cortchoef, Overmeer, Horstwaert, etc., presidente en la asamblea de los nobles de la provincia de Utrech, y diputado de su parte a la asamblea de los señores estados generales; al Sr. Francisco de Donia, señor de Hinnema, en Hielsum, di'utado a la asamblea de los señores Estados Generales de parte de la provincia de Frisia; al Sr. Guillermo Ripperdá, señor de Hengeloo, Boxbergen, Bocolo y Russenbergh, diputado de la nobleza de la provincia de Overissel a la asamblea de los señores Estados Generales, y al Sr. Adrian Claud de Stedem, señor de Nittresum, etc, diputado ordinario de la provincia de la ciudad de Grominga y Ommelandes a la asamblea de los señores Estados generales; todos embajadores extraordinarios á Alemania y plenipotenciarios de los dichos señores Estados Generales para los tratados de la paz general, y todos autorizados con poderes suficientes, que se insertarán al fin de las presentes: - los cuales, habiendose juntado en la ciudad de Munster, en Westfalia, desti

nada de común acuerdo para el tratado general de la paz y de la cristiandad, en virtud de sus dichos poderes, han hecho, concluido, y ajustado por los dichos señores Reyes y Estados, y en nombre de ellos, los artículos siguientes:

1º. Primeramente el dicho Sr. Rey declara y reconocer, que los dichos señores Estados generales de los Países Bajos Unidos, y las provincias de ellos respectivamente con todos sus países asociados, ciudades y tierras de su pertenencia, son Estados, provincias y países libres y soberanos, sobre las cuales, ni sobre sus países, ciudades y tierras asociadas, como se ha expresado, el dicho Sr. Rey no pretende nada, y que al presente o de aquí adelante no pretenderá nunca cosa alguna para sí, sus herederos y sucesores, y que en consecuencia de esto tiene á bien tratar con los dichos señores Estados, como lo hace al presente, una paz perpétua, con las condiciones escritas y declaradas aquí abajo.

2º. Es á saber, que la dicha paz será buena, firme, fiel, e inviolable y que en su consecuencia cesarán y se suspenderán todos los actos de hostilidad, de cualquier manera que sean, entre los dichos señores Rey y Estados generales, así por mar y otras aguas, como por tierra en todos sus reinos, países, tierras y señoríos, y para todos sus súbditos y habitantes de cualquier calidad o condición que sean, sin excepción de lugares ni de personas.

3º. Cada uno quedará en posesión, y gozará efectivamente de los países ciudades, plazas, tierras y señoríos, que tiene y posee el presente, sin ser turbado ni inquietado en ellos, directa ni indirectamente, de cualquier maneg

ra que sea; en lo cual se entiende comprender las villas, lugares, aldeas y país llano de su dependencia; y consiguientemente toda la mairia de Bolduc, como también todos los señoríos, ciudades, castillos, villas, lugares, aldeas y país llano, dependientes de la dicha ciudad y mairia de Bolduc; la ciudad y marquesado de Bergues-op-zoom; la ciudad y baronía de Breda; la ciudad de Maastricht, y su jurisdicción, como también el condado de Vroonhorff: la ciudad de Grave, y país de Kuych, Hulst, y Bailia de Hulst, y Hulster Ambacht; y también Axele Ambacht, situados en las Costas Meridional y Septentrional de la Guala; como también los fuertes que dichos señores Estados poseen al presente en el país de Waes; y todas las demás ciudades y plazas que los dichos señores Estados tienen en Bravanto, Flandes y otras partes, quedarán á los dichos Señores Estados, con todos y los mismos derechos y parte de soberanía y superioridad, sin exceptuar nada, y todo de la misma manera que los tienen las Provincias Unidas de los Países Bajos. En inteligencia de que todo lo restante del dicho país de Waes, exceptuando los dichos fuertes, quedara al dicho señor Rey de España. Por lo tocante a los tres cuarteles de la otra parte de la Mosa, es á saber, Falquimont Dalen y Roleduc, quedarán en el estado en que se hallan al presente; y en caso de disputa ó controversia, se remitirá a la cámara Mipartita para que se decida en ella.

4º. Los súbditos y habitantes de los países de los dichos señores Rey y Estados, tendrán toda buena correspondencia y amistad, sin sentirse de las

ofensas y daños que hubieren recibido en lo pasado; podrán también frecuentar y hacer mansión en los países uno de otro, y ejercer allí su tráfico y comercio con toda seguridad, así por mar y otras aguas, como por tierra.

5º. La navegación y tráfico de las Indias Orientales y Occidentales será mantenida según y en conformidad de las concesiones hechas sobre esto, ó que se hicieren de aquí en adelante; para cuya seguridad servirá el presente tratado, y la ratificación de él, que se procurará de una y otra parte; y serán comprendidos en el dicho tratado todos los potentados, naciones y pueblos, con los cuales los dichos señores Estados, o los de la compañía de las Indias Orientales y Occidentales en su nombre, dentro de los límites de sus dichas concesiones, tienen amistad y alianza y cada uno es á saber: los sobre dichos señores Rey y Estados respectivamente quedarán en posesión y goce de aquellos señoríos, ciudades, castillos, fortalezas, comercio, y países de las Indias Orientales y Occidentales, como también en el Brasil y en las costas de Asia, Africa y América, respectivamente, que los dichos señores Rey y Estados respectivamente tienen y poseen, comprendiendo en esto especialmente - los lugares y plazas, que los portugueses han tomado y ocupado a los dichos señores Estados desde el año de 1.641; como también los lugares y plazas que dichos señores Estados llegaren a conquistar y poseer de aquí en adelante, sin contravenir al presente tratado: y los directores de la compañía de las Indias así Orientales como Occidentales de las Provincias Unidas, como también los Ministros, oficiales superiores o inferiores, soldados y marineros

que están actualmente en servicio de una ú otra de dichas dos compañías o ha-
yan estado en él; como asimismo aquellos que fuera de su servicio continúan
aún, o pudieren de aquí en adelante ser empleados, así en este país como en
el distrito de las dichas dos compañías respectivamente, serán y quedarán li-
bres y sin molestia en todos los países que están bajo la obediencia del di-
cho señor Rey en Europa; y podrán viajar, traficar y frecuentarlos como to-
dos los demás habitantes de los países de los dichos señores Estados. Y ade-
más de esto se ha tratado y estipulado, que los españoles mantendrán su na-
vegación del modo que la tienen al presente en las Indias Orientales, sin -
poder estenderse más adelante, como también los habitantes de los países Ba-
jos se abstendrán de la frecuentación de las plazas, que los castellanos tie-
nen en las Indias Orientales.

6º. Y en cuanto á las Indias Occidentales, los súbditos y habitantes
de los reinos, provincias y tierras de los dichos señores Rey y Estados res-
pectivamente, se abstendrán de navegar y traficar en todos los puertos, lu-
gares y plazas guarnecidas de fuertes, lonjas o castillos, y en todas las -
demás poseidas por una ú otra parte; es á saber: que los súbditos de dicho
Sr. Rey, no navegarán ni traficarán en las ocupadas por los dichos señores
Estados, ni los súbditos de los dichos señores Estados, en las tenidas por
dicho señor Rey; y entre las plazas tenidas por dichos señores Estados serán
comprendidas las que los portugueses han ocupado en el Brasil a los dichos
señores Estados desde el año de 1641, como también todas las demás plazas que

poseen al presente mientras las ocupen los dichos portugueses, sin que el artículo antecedente pueda derogar el contenido del presente.

7º. Y porque es necesario mucho tiempo para avisar a los que están fuera de dichos límites con fuerzas y navíos, a fin que desistan de todos actos de hostilidad, se ha acordado, que dentro de los límites de la concesión anteriormente hecha a la compañía de las Indias Orientales del País Bajo, ó de la que se hiciere para su continuación, no comenzará la paz sino un año después de la fecha de la conclusión de este tratado. Y en cuanto a los límites de la concesión hecha anteriormente por los Estados generales, o que se hiciere para su continuación a la compañía de las Indias Occidentales; para que en dichos lugares no comenzará la paz hasta seis meses después de la mencionada fecha; debiéndose entender, que si el aviso de la dicha paz por parte del público de una y otra parte llegare antes a los dichos límites respectivamente, que desde la misma hora que llegue el aviso, cesará la hostilidad en dichos lugares; pero si después del término de un año, y de seis meses respectivamente, se hiciere algún acto de hostilidad en los límites de las concesiones sobredichas, se pararán los daños sin dilación.

8º. Los súbditos y habitantes de los dichos señores Rey y Estados, que traficaren en los países uno de otro, no serán obligados a pagar mayores derechos o imposiciones, que los propios súbditos respectivamente: de manera que los habitantes y súbditos de los Países Bajos Unidos serán y quedarán exentos de cierto veinte por ciento, ó de cualquier otra imposición menor ó

mayor que el rey de España, durante la tregua de doce años, ha cobrado, o - que de aquí en adelante, directa ó indirectamente, quisiere cobrar de los - habitantes y súbditos de los Países Bajos Unidos, ó gravarlos mas de lo que haría con sus propios súbditos.

9. Los dichos señores Rey y Estados no cobrarán fuera de sus respec - tivos limites algunas imposiciones ó gabelas por la entrada, salida ó otras - carga delas mercaderías que pasaren, sea por agua o por tierra.

10. Los súbditos de los dichos señores Rey y Estados gozarán respec - tivamente en los países uno de otro, de la antigua franquicia de Peages de que hubieren estado en posesión pacífica antes de comenzarse la guerra.

11. No podrá impedirse la frecuentación, trato y comercio entre los súbditos respectivos; y si sobrevinieren algunos impedimentos serán real y efectivamente quitados.

12. Y desde el día de la conclusión y ratificación de esta paz, hará el rey cesar en el Rhin y la Mosa la cobranza de todos los Peages que antes de la guerra han estado bajo el distrito y jurisdicción de las Provincias - Unidas, y espe cialmente el Peage de Zelanda; de manera que éste no se cobra - rá por parte de su dicha Magestad, ni en la ciudad de Amberes, ni en otra - parte; en inteligencia y con la condición de que desde el sobredicho día, los Estados de Zelanda tomarán recíprocamente á su cargo, y pagarán ante todas cosas desde este mismo día, las rentas anuales que antes del año de 1572 fue - ron hipotecadas sobre el dicho Peage, y de las cuales los propietarios y co

bradores de la renta han estado en posesión y cobrado antes de comenzarse la -
dicha guerra, lo que harán igualmente los propietarios de los sobredichos otros
Pagges.

13. La sal blanca cocida que viene de las Provincias Unidas a las de su
dicha Magestad, será recibida y admitida sin ser gravada con mayores imposicio-
nes que la sal gruesa, y de la misma manera se admitirá la sal de las provin-
cias de su dicha Magestad en las de los dichos señores Estados, y se venderá -
en ellas, sin que tampoco pueda ser más gravada que la de los dichos señores -
Estados.

14. Los ríos de la Esquelda, como también los canales de Sas, Zuyn, y -
otras bocas del mar que van a parar allí, se tendrán cerrados por parte de los
dichos señores Estados.

15. Los navíos y mercaderías que entraren y salieren de los puertos de
Flandes respectivamente, serán y quedarán gravadas por el dicho Sr. Rey, con -
todas aquellas imposiciones y demás cargas que se cobran de las mercaderías que
van y vienen por la extensión de la Esquelda y otros canales mencionados en el
artículo antecedente; y se convendrá después entre las partes recíprocamente
sobre la tasa de la sobredicha carga igual.

16. Las ciudades Anseáticas con todos sus ciudadanos, habitantes y paí-
ses gozarán, en cuanto a la navegación y comercio en España y en los reinos y
Estados de España, de todos y los mismos derechos, franquezas, inmunidades y -
privilegios que por el presente tratado se conceden, ó de aquí en adelante se

concedieren, a favor y respecto de los súbditos y habitantes de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Y recíprocamente los dichos súbditos y habitantes de las Provincias Unidas de los Países Bajos gozarán de todos y los mismos derechos, franquezas, inmunidades, privilegios y capitulaciones, así en cuanto al establecimiento de los cónsules en las ciudades capitales o marítimas de España, y otras partes donde fuere menester, como en cuanto á los mercaderes, factores, maestros de navíos, marineros ó otros, del mismo modo que las dichas ciudades Anseáticas en general ó en particular los han obtenido y usado por lo pasado, ó obtuvieren y usaren de aquí en adelante, para la seguridad, beneficio y ventaja de la navegación y comercio de sus ciudades, mercaderes, factores, encomenderos y otros dependientes de ellas.

17. Los súbditos y habitantes de los países de los dichos señores Estados tendrán también la misma seguridad y libertad en los países de dicho Sr. Rey, que se concedió a los súbditos del Rey de la Gran Bretaña por el último tratado de paz y artículos secretos hechos con el condestable de Castilla.

18. El dicho Sr. Rey dará cuanto antes la orden necesaria para que se señalen lugares honoríficos para el entierro de los cuerpos de aquellos que por parte de los dichos señores Estados murieren en los dominios de dicho Sr. Rey.

19. Los súbditos y habitantes de los países de dicho señor Rey que visiten a los países y tierras de los dichos señores Estados, deberán, por lo que mira al ejercicio público de la religión, gobernarse y portarse con toda

modestia, sin dar algún escándalo de palabra o de hecho, ni proferir algunas blasfemias, y lo mismo se hará y observará por los súbditos y habitantes de los países de los dichos señores Estados, que vinieren a las tierras de su dicha Majestad.

20. Los mercaderes, maestros de navios, pilotos, marineros, sus navios, mercaderías, géneros y otros bienes suyos, no podrán ser embargados ni confiscados en virtud de algún mandamiento general o particular, o por cualquier causa que sea de guerra u otra, ni tampoco como pretexto de querer servirse de ellos para la conservación y defensa del país; pero no se entiende comprender en esto los embargos y confiscaciones de justicia por las vías ordinarias, á causa de deudas, propias obligaciones, y contratos válidos de aquellos á quienes se hubieren hecho los dichos embargos, en lo cual se procederá según se acostumbra por derecho y razón.

21. Se nombrarán de una y otra parte ciertos jueces, en número igual en forma de cámara Mipartita, que tendrán asiento en las provincias del País Bajo, y en aquellos lugares que convinieren; y esto por turnos, ya sea bajo la obediencia del uno ya sea bajo la del otro, según se acordare de mútuo consentimiento: los cuales jueces nombrados por una y otra parte, conforme a la comisión, y instrucción que se les dará, y sobre la cual harán juramente según cierto formulario que de una y otra parte se arreglará sobre este asunto, atenderán al comercio de los habitantes de las dichas provincias de los Países Bajos, y á las cargas e imposiciones que se cobraren por una y otra parte sobre las mercadu—

rias: y si los dichos jueces supieren que de una ú otra parte o por ambas se -
hace algún exceso, le corregirán y moderarán. Demás de estos los dichos jueces
examinarán las cuestiones tocantes a la falta de ejecución del tratado, como -
también las contravenciones de él, que en su tiempo y lugar puedan sobrevenir
así en los países de la parte de acá, como en los reinos distantes, países, pro
vincias, é islas de Europa, y dispondrán de ellas y sumariamente y de plano, y
decidirán lo que hallaren convenir en conformidad del tratado; y las sentencias
y disposiciones de estos jueces se ejecutarán por los jueces ordinarios del lu
gar en donde se hubiere hecho la contravención, o bien contra las personas que
contravinieren según lo requieran las ocurrencias; y no podrán los dichos jue-
ces ordinarios faltar a la referida ejecución o dejarla de hacer, y de reparar
las contravenciones en el término de seis meses después que hayan sido requeri
dos.

22. Si se hubieren dado algunas sentencias y juicios, entre personas de
diversos partidos no prohibidos sea en materia civil o criminal, no podrán eje
cutarse contra las personas condenadas ni contra sus bienes; y no se concederán
ningunas letras de marca o represalias, sino es con conocimiento de causa, y en
los casos permitidos por las leyes y constituciones imperiales, y según el or-
den establecido por ellas.

23. No se podrá abordar entrar, ni detenerse en los puertos, abras, pla
yas, y radas de los países de uno ú otro con navíos y gente de guerra en núme-
ro que pueda dar sospecha, sin pasaporte y licencia de aquel que mandare los -

dichos puertos, abras, playas, y radas, sino es que sean arrojados por tempe-
stad ó obligados por necesidad, y para evitar algunos peligros de mar.

24. Aquellos cuyos bienes se hubieren embargado, y confiscado con oca-
sión de la guerra, o sus herederos, o los que tengan derecho, gozarán de ellos
y tomarán la posesión de su autoridad privada, y en virtud del presente trata-
do, sin que necesiten recurrir a la justicia, no obstante todas incorporacio-
nes al fisco, empeños, donaciones hechas, tratados, acuerdos y transacciones,
con cualesquiera renunciias que se hayan puesto en dichas transacciones para
excluir de alguna parte de dichos bienes a aquellos de quienes fueren, y todos
y cada uno de los bienes y derechos que conforme al presente tratado serán o
deberán ser restituidos recíprocamente a sus primeros propietarios, sus here-
deros o los que tengan derecho: podrán venderse por dichos propietarios sin -
que sea necesario para ello obtener licencia particular; y por consiguiente -
los propietarios de las rentas que por parte de los fiscos fueren constituidas
en lugar de los bienes vendidos, como también de las rentas, y acciones que -
están a cargo de los fiscos respectivamente, podrán disponer de la propiedad
de ellas por venta o de otra manera, como de sus demás bienes propios.

25. Lo que también se ejecutará en beneficio de los herederos del difun-
to señor príncipe Guillermo de Orange, aun por lo tocante a los derechos que -
tienen en las Salinas del condado de Borgoña, que les serán restituidas y deja
das con los bosques de su dependencia, en órden a lo que no constare haberse
comprado y pagado por parte de su dicha Magestad.

26. En lo cual se entienden también comprendidas los demás bienes y derechos situados con los condados de Borgoña y Charolois; y lo que en consecuencia del Tratado de 9 de abril de 1.609, y de 7 de enero de 1610 respectivamente no se ha restituido todavía, se restituirá cuando antes en todo lugar de buena fe a los propietarios, sus herederos, ó los que tengan derecho a ambas partes.

27. Como asimismo se entienden comprendidos en esto los bienes y derechos, que después de cumplida la Tregua de doce años, fueron adjudicados al difunto conde Juan de Nassau por sentencia del Supremo Consejo de Malinas, en perjuicio del fisco o de cualquier otra manera, que el conde haya adquirido su posesión, en cualesquiera lugares, plazas o señoríos que los dichos bienes y derechos puedan estar situados, y por cualesquiera que puedan ser poseídos: la cual sentencia, en virtud del presente Tratado, es y será tenida por no dada, y cualquier otra adquisición de la sobredicha posesión, es y será anulada.

28. Y en cuanto al pleito de Chatol-Belin intentado en vida del difunto señor Príncipe de Orange, ante el Supremo Consejo de Malinas, contra el procurador general de dicho señor Rey, respecto de que dicho pleito no fué juzgado después de un año, que se siguió como estaba prometido en el artículo 14 de la Tregua de doce años; se ha acordado que inmediatamente después de la conclusión y ratificación del presente Tratado, el fisco en nombre de S.M. o de cualquiera que sea, dejará efectivamente todos, y cada uno de los bienes demandados en dicho pleito, por cualquiera y con cualquier derecho que pudieren ser poseídos;

y renunciará en nombre y de parte de los referidos todas las acciones y pretensiones que el fisco pueda tener, ó pretender de cualquier manera sobre dichos bienes, para que el dicho señor Príncipe de Orange actual, sus herederos, sucesores y los que tengan derecho, los ocupen real y efectivamente, y tomen la libre y plena posesión de ellos, inmediatamente después de la conclusión y ratificación de este Tratado, y en virtud de él, y sin recurso a la justicia, con la condición de que los frutos percibidos y consumidos con sus cargas, hasta la conclusión del presente Tratado, quedarán a beneficio del fisco.

29. Si en algún lugar se encontrare dificultad sobre la restitución de los bienes y derechos que se han de restituir, el juez de él hará efectuar sin demora la dicha restitución, y en estos tomará la más pronta providencia, sin que con el pretesto de no haberse pagado la capitación ú otro, pueda diferirse la restitución.

30. Los súbditos y habitantes de los Países Bajos Unidos podrán en toda la extensión de las tierras de la obediencia de dicho señor Rey, servirse de los abogados, procuradores, notarios, agentes y ejecutores que les parezca, para lo cual también serán nombrados por los jueces ordinarios, cuando sea necesario, y estos jueces son requeridos; y recíprocamente los habitantes y súbditos de dicho señor Rey que vinieren a los países de los dichos señores Estados, gozarán de la misma asistencia.

31. Si el fisco hubiere hecho vender algunos bienes confiscados de una u otra parte, aquellos a quienes deben pertenecer en virtud del presente tratado

do, estarán obligados a contentarse con el interés del precio a razón de seis por ciento para que se pague cada año a solicitud de los que poseen dichos bienes, y de otra manera les será lícito acudir al fondo y heredad vendida: en inteligencia, de que en lugar de los bienes vendidos, rentas redimidas o el capital de ellas, se despacharán por y en nombre de los fiscos respectivamente, letras patentes a favor de lo propietarios, sus herederos o los que tengan derecho, las cuales se servirán de prueba declaratoria en conformidad del tratado con asignación de la paga anual sobre un receptor en la provincia en donde se hubiere hecho la venta o redención, el cual se nombrará, y el precio se computará a razón de la primera venta pública o de otra manera hecha, como es de derecho; el primer año de la cual renta caerá un año después de la fecha de la conclusión y ratificación del presente tratado.

32. Pero si las dichas ventas se hubieren hecho por justicia por deudas buenas y legítimas de aquellos á quienes los dichos bienes solían pertenecer antes de la confiscación, les será lícito o á sus herederos y á los que tengan derecho el desempeñarlos, pagando el precio dentro de un año, contado desde el día del presente tratado, después de cuyo término no se les volverá á oír; y hecho por ellos el desempeño y redención podrán disponer de dichos bienes como les pareciere, sin que sea menester otra licencia.

33. Sin embargo, de esto, no se entiende dar lugar á éste desempeño por lo tocante á las casas situadas en las ciudades vendidas con este motivo por la grande incomodidad y notable daño que en esto recibirán los compradores á cau

sa de las innovaciones y reparos que pudiesen haberse hecho en dichas casas, -
cuya liquidación será muy larga y difícil.

34. Y en cuanto a los reparos y mejoras hechas en otros bienes vendidos, cuya redención es permitida, si acaso se pretendieren, los jueces ordinarios - harán justicia con conocimiento de causa, quedando los fundos y heredades hipotecadas por la cantidad en que se liquidaren las mejoras, sin que por esto sea lícito a dichos compradores usar del derecho de retención, para ser pagados y satisfechos.

35. Todos los bienes y derechos ocultados, muebles, inmuebles, rentas, - acciones, deudas, créditos y otros, que no hayan sido embargados por el fisco con debido conocimiento de causa, antes del día de la conclusión y ratificación de este tratado, quedarán a la libre y plena disposición de los propietarios, sus herederos, o los que tengan derecho, con todos los frutos, rentas, productos y emolumentos; y asimismo aquellos que hubieren ocultado los sobredichos - bienes y derechos ó sus herederos, no podrán con este motivo ser molestados por los fiscos respectivamente; pero los propietarios, sus herederos, o los que ten gan derecho, tendrán en orden a ellos acción contra cualquiera como a sus propios bienes.

36. Los árboles cortados después del día de la conclusión de este trata do, y que en este mismo día hayan estado en los fundos, como también los árboles vendidos que al tiempo de al tiempo de la dicha conclusión no se hayan cor tado todavía, quedarán a los propietarios, no obstante su venta, y sin que estén

obligados a pagar precio alguno.

37. Los frutos, alquileres, arrendamientos, y rentas de los señoríos, tierras, diezmos, pesquerías, casas, rentas, y otros productos de los bienes que conforme al tratado deberán restituirse, caídos después del día de la conclusión de este tratado, quedarán por todo el año a los propietarios, sus sucesores, o los que tengan derecho.

38. Los arrendamientos de los bienes confiscados o embargados (aunque se hayan hecho por muchos años) espirarán en el mismo año de la conclusión del tratado, según la costumbre de los respectivos lugares en donde dichos bienes estuvieren situados; y los arrendamientos caídos después del día de la conclusión del tratado, como se ha dicho, se pagarán a los propietarios; debiéndose entender que si el arrendador de dichos bienes hubiere hecho algunos gastos en beneficio de ellos para este año, que estos serán pagados por los propietarios al arrendador, según costumbre, o á discreción de los jueces del lugar en donde estuvieren situados los dichos bienes.

39. La venta de los bienes confiscados o embargados, hecha después de la conclusión del tratado, se tendrá por nula y no efectuada, como también la venta hecha antes de la dicha conclusión contra las capitulaciones o acuerdos hechos particularmente con algunas ciudades.

40. Las casas de los particulares restituidas, o que se han de restituir conforme al tratado, no serán reciprocamente gravadas con alojamientos ó otras cargas de distinta manera, ni más que las casas de los demás habitantes de

igual calidad.

41. Ninguno será impedido de una ú otra parte directa ó indirectamente en la mudanza del lugar de su habitación, pagando los derechos correspondientes; y si se pusieren algunos impedimentos después del tratado, se quitarán prontamente.

42. Si se hubieren hecho algunas fortificaciones ú obras públicas, por una ú otra parte con la permisión y autoridad de los superiores de los lugares cuya restitución debe hacerse por el presente tratado, los propietarios de ellos estarán obligados a contentarse con la valuación, que se hiciere por los jueces ordinarios, así de los dichos lugares como de la jurisdicción que allí tenían, sino es que las partes se convengan sobre ello bienamente, como también se dará satisfacción a los propietarios de los bienes aplicados a las fortificaciones, obras públicas, o lugares píos.

43. En cuanto a los bienes de iglesias, colegios, y otros lugares píos, situados en las Provincias Unidas, los cuales fueren miembros dependientes de las iglesias, beneficios y colegios, que son de la obediencia del dicho señor Rey, se les entregará y restituirá lo que no hubiere vendido antes de la conclusión del presente tratado, y entrarán de nuevo en su posesión y goce de su autoridad privada, y sin auxilio de justicia, aunque sin poder disponer de ellos como se ha dicho arriba: pero en cuanto a los que se hubieren vendido antes del dicho tiempo, ó dado en pago por los Estados de algunas de las Provincias, la renta del precio se les pagará cada año a razón de seis por ciento -

por la provincia que hubiere hecho la dicha venta o dado los dichos bienes en pago; y asimismo se asignará de manera que puedan quedar asegurados: lo mismo se hará y observará por parte de dicho señor Rey.

44. Por lo tocante á las pretensiones é intereses, que el señor príncipe de Orange pudiese tener en orden a los bienes de que no está en posesión, se convendrá por un tratado separado a satisfacción del dicho señor príncipe de Orange; pero en cuanto á los bienes y otros efectos de que el dicho señor príncipe está en posesión por donación y concesión de los dichos señores Estados generales en la Bailia de Hulster Ambacht, y otras partes de que los dichos señores Estados le han dado poco ha la confirmación; todos ellos le quedarán absolutamente con plena propiedad, en beneficio suyo y de sus sucesores, sin que pueda pretenderse cosa alguna de los dichos bienes, en virtud de algunos artículos del presente tratado.

45. En cuanto á otros ciertos puntos, que además de lo contenido en el artículo antecedente, se han tratado y ajustado separadamente y firmado en dos diferentes escritos, el uno de ocho de enero, y el otro de veinte y siete de diciembre de 1647, por, y en nombre del dicho señor príncipe de Orange; los dichos escritos y todo lo contenido en ellos, surtirán su efecto y se confirmarán, cumplirán y ejecutarán según su forma y tenor de la misma manera que si todos los dichos puntos en general, o cada uno de ellos en particular, estuvieren insertos a la letra en el presente tratado, y esto no obstante cualesquiera otras cláusulas del presente tratado contrarias a ello, las cuales se en—

tiende derogar y se derogan expresamente por el presente artículo: y las dichas cláusulas por lo que toca a lo contenido en los dichos dos escritos, son y serán tenidas por no hechas, y sin que por causa de ellas se pueda impedir o retardar de ninguna manera el efecto, cumplimiento y ejecución de los sobredichos dos escritos de ocho de enero y veinte y siete de diciembre de 1.647.

46. Aquellos á quienes se deben restituir los bienes confiscados, no - estarán obligados a pagar los atrasos de las rentas, cargas y otras obligaciones especialmente hipotecadas, y asignadas sobre dichos bienes por el tiempo que no los hubieren gozado; y si por esto fueren reconvenidos o molestados - por una ú otra parte serán absueltos. Y si se hallare ser cierto que todos - los bienes de alguno de una ú otra parte han sido confiscados o embargados de suerte que el tal no haya retenido ningunos medios para poder pagar las rentas, o intereses caidos durante la confiscación o embargo, éste no solo quedará libre de las cargas reales y rentas en conformidad de las rentas o intereses que durante el dicho tiempo hubieren caído.

47. Tampoco se podrá pretender en orden a los bienes vendidos o concedidos para ser dicados o redicados, sino las cargas solamente a los poseedores se hubieren obligado por los tratados hechos sobre esto con los intereses de los dineros de entrada, si se hubieren dado algunos, también a razón de seis por ciento como se ha dicho arriba.

48. Las sentencias dadas sobre los bienes y derechos confiscados entre las partes que hayan reconocido a los jueces y sido legítimamente defendidas

subsistirán; y los condenados no serán admitidos a impugnarlas sino por ~~las~~ las vías ordinarias.

49. El dicho señor Rey cede y renuncia todas las pretensiones de redención, y todos los demás derechos y pretensiones que podrá tener, o pretender de cualquier manera sobre la ciudad de Grave, país de Kuyck, sus pertenencias y dependencias, la antigua baronía de Bravante, tenida antes en empeño por el difunto señor príncipe de Orange, y la rendición del cual empeño se dejó y convirtió en propiedad, y fué cedida en beneficio del difunto señor príncipe Mauricio en diciembre de 1.611 por los Estados Generales de los Países Bajos Unidos, como soberanos de la ciudad de Grave y país de Kuyck, según y en conformidad de las letras patentes expedidas sobre esto; y en virtud de la cual conversión y cesión, el dicho señor príncipe de Orange actual, sus herederos y sucesores o los que tengan derecho, gozarán para siempre de la plena y entera propiedad de la dicha ciudad y país de Kuyck, sus pertenencias y dependencias.

50. También cede y renuncia el dicho señor Rey todos y cada uno de los derechos y pretensiones, sean de propiedad, cesión u otros que de cualquier manera podría pretender sobre la ciudad, condado y señoríos de Linghen y sus cuatro aldeas y otros derechos pertenecientes a ella, como también sobre las ciudades y señoríos de Bevergade, Cloppemburgh y otras pretensiones hacia y contra cualquiera que sea, a fin que queden real y efectivamente para siempre al dicho señor príncipe de Orange, sus herederos y sucesores, o á los que tengan acción con pleno derecho de propiedad, conforme á las letras de donación e in

vestidura del emperador Carlos V, con fecha de 3 de noviembre de 1.546, y a la transacción hecha después entre el conde de Burén y el de Teckelnborg con fecha de 5 de marzo de 1.548; y finalmente, en consecuencia de la cesión hecha sobre es to en noviembre de 1.578, la cual ha confirmado y confirma el dicho Señor Rey por el presente tratado, en cuanto le pueda tocar.

51. Los dichos señores Rey y Estados nombrarán cada uno por su parte jueces y magistrados para la Administración de la justicia y policía en las ciudades y plazas fuertes, que por el presente tratado deben restituirse a sus propietarios para que las gocen,

52. El alto cuartel de Gueldres se cambiará por un equivalente, y en caso de no poderse concertar el dicho equivalente, se remitirá el negocio a la cámara Mi-partita, para que en ellse decida dentro de seis meses después de la conclusión y ratificación del tratado.

53. El dicho Señor Rey se obliga aprocurar efectivamente la continuación y observación de la neutralidad, amistad y buena vecindad de parte de S.M.I. y del imperio con los dichos señores Estados, a la cual continuación y observancia se obligan también recíprocamente los dichos señores Estados; y se deberá hacer su confirmación dentro de dos meses por parte de S.M.I. y dentro de un año por parte del imperio, después de la conclusión y ratificación del presente tratado.

54. Los muebles confiscados y frutos caídos antes de la conclusión del pre sente tratado, no estarán sujetos a restitución alguna.

55. Las acciones moviliarias que los dichos señores Rey o Estados hayan -

remitido en beneficio de los deudores particulares antes de la conclusión del presente tratado, quedarán extinguidas por una y otra parte.

56. El tiempo que ha corrido durante la guerra comenzando desde el año de 1567 hasta el principio de la tregua de doce años, como también el tiempo que ha corrido desde que espiró la dicha tregua hasta la conclusión del tratado presente, no se tendrá en cuenta para hacer con este motivo perjuicio o daño a nadie.

57. Los que durante la guerra se hubieren retirado a países neutrales, gozarán también del beneficio de este tratado, y podrán vivir en donde les pareciere, y asimismo volver a sus antiguos domicilios para habitar en ellos con toda seguridad, observando las leyes del país, sin que con motivo de la residencia que hicieren en cualquier lugar que sea, puedan embargarse sus bienes ni ellos ser privados de su goce.

58. No se podrán hacer algunos nuevos fuertes en los Países Bajos de una u otra parte, ni tampoco se podrán abrir nuevos canales ni fosos, por los cuales se pueda quitar o extravíar el agua de una ó otra parte.

59. Los señores de la casa de Nassau, como asimismo el conde Juan Alberto de Solms, gobernador de Maastricht, no podrán ser perseguidos ni molestados en sus personas o bienes, a causa de algunas deudas contraídas por el difunto señor príncipe Guillermo de Orange desde el año de 1567 hasta su fallecimiento, ni por algunos atrasos caídos durante el embargo y secuestro de los bienes que estaban gravados con ellas.

60. Si se hiciere alguna contravención al presente tratado por algunos par

ticulares sin orden de los dichos señores Rey ó Estados, se reparará el daño en -
el mismo lugar en donde se hubiere hecho la contravención, si allí fueren aprehendidos o bien en el de su domicilio, sin que puedan ser perseguidos en otra parte
en sus cuerpos o bienes de cualquier manera que sea; y no será lícito llegar a -
las armas o romper la paz por este motivo, sino que será permitido en caso de denegación manifiesta de justicia valerse como es costumbre de letras de marca o re
presalias.

61. Todas las desheredaciones y disposiciones hechas en odio de la guerra
se declaran por nulas y no hechas; y bajo las desheredaciones hechos en odio de
la guerra, se entiende comprender aquellas que se hacen por alguna causa de don-
de haya procedido la guerra o que de ella dependan.

62. Los súbditos y habitantes de los países de los dihos señores Rey y Es
tados, de cualquier calidad y condición que sean se declaran por hábiles para su
cederse unos a otros así por testamento como ab-intestato según las costumbres -
de los lugares; y si á algunos de ellos les hubieran caído anteriormente algunas
sucesiones serán mantenidos y conservados en ellas.

63. Todos los prisioneros de guerra se entregarán de ambas partes sin pa-
gar rescate alguno, y sin distinción ni reserva de los prisioneros que han servid
do fuera de los Países Bajos, y bajo de otros estandartes y banderas, que las de
dichos señores Estados.

64. La paga de los atrasos de las contribuciones, que al tiempo de la concl
usión del tratado quedaren por pagar por las personas y bienes de una y otra -

parte, se reglará y determinará por los que de ambas partes tiene la superintendencia de las contribuciones.

65. Y todo lo que durante la negociación se propusiere, alegare á boca ó por escrito, por una y otra parte, no se glosará ni podrá interpretar de ningún modo en favor o perjuicio de alguno directa o indirectamente, sino que - así los dichos señores Rey y Estados generales y particulares, como todos los príncipes, condes, barones, caballeros, ciudadanos, y demás habitantes de sus respectivos reinos y países de cualquier calidad, estado o condición que sean quedarán con sus derechos según el tenor del tratado y su conclusión.

66. Los respectivos habitantes y súbditos de los dichos señores Rey y Estados, gozarán realmente del efecto del artículo 15 de la tregua de doce años ya acabada, y del efecto del artículo 10 del ajuste que se hizo en 7 de enero de 1610, y esto en atención a que durante el término de la dicha tregua, no se siguió ni procuró el dicho efecto por una ni otra parte.

67. Los límites en Flandes y en otras partes se arreglarán del modo - que se hallare pertenecer a la jurisdicción de una ó otra parte, sobre lo - cual se esperarán y entregarán las instrucciones, para que dichos límites se reglen a su tiempo.

68. De la parte y lado del dicho señor Rey de España se demolerán junto a la Esclusa y en sus contornos los fuertes nombrados aquí; es á saber, San Job, San Donás, el fuerte de la Estrella, el fuerte de Santa Teresa, el fuerte de San Fadrique, el fuerte de Santa Isabel, el fuerte de San Pablo y

y el reducto Papemuzt. Y del lado y parte de los dichos señores Estados se demolerán los fuertes siguientes; es á saber, los dos fuertes de la isla de Casand, llamados Orange y Federico, los dos de Pas, todos los que están sobre el río la Esquelda a la parte Oriental, excepto Lilo y el fuerte de Kieldrecht llamado Spinola, sobre cuya demolición que se ha de hacer recíprocamente se convendrá entre las partes para ajustar su equivalente.

69. Todos los registros, legajos, cartas, archivos y papeles, como tan bien sacos de procesos concernientes respectivamente á algunas de las Provincias Unidas, países asociados, ciudades y miembros o algunos habitantes de ellas, que están en los tribunales, chancillerías, consejos, y cámaras de policía, justicia, hacienda, feudos, o archivos, sea en Avennas, Malinas y otras plazas que están bajo la obediencia del dicho señor Rey, serán entregados de buena fe a aquellos que de parte de las dichas provincias respectivamente tengan comisión para pedir las, y lo mismo se hará por parte de dichos señores Estados con las provincias, ciudades y particulares de la obediencia del dicho señor Rey.

70. A la ciudad de la Esclusa se dejará la jurisdicción sobre las aguas conforme la tiene.

71. El dique que atraviesa y cierra el río de Soute junto a San Donás, se quitará y abrirá, haciéndose y fabricándose allí un pas, sobre cuya guarda se convendrá según se ha dicho arriba en orden a la demolición de los fuertes.

72. Serán comprendidos en este tratado de paz aquellos que antes del -

cambio de la aceptación o ratificación, o tres meses después, fueren nombrados por una y otra parte: dentro de cuyo término nombrará el dicho señor Rey aquellos que le pareciere conveniente. Por parte de los dichos señores Estados son nombrados el principe Langrave de Hesse-Cassel, con sus países, ciudades y Estados; el conde de Ostfrisia, la ciudad de Embden; el condado y país de Ostfrisia, las ciudades Anseáticas y particularmente Lubec, Bremen, y Hamburgo, reservando los dichos señores Estados nombrar dentro del dicho término los demás que tuvieren por conveniente.

73. En cuanto a la pretensión del conde de Flodorp sobre que se le restituya el castilllo de Leuth, con oos bienes que dependieren de él y todos los demás bienes y aldeas que le pudieren pertenecer en aquellos contornos y estuvieren embargados de parte del dicho señor Rey, se le concede la dicha restitución, y asimismo la del castillo, salvo que entre la conclusión del presente tratado y su ratificación, se dispondrá acerca de mantener una guarnición de parte del dicho señor Rey, o de la demolición de las nuevas fortificaciones hechas después que se ocupó el dicho castillo.

74. Por lo que toca a lo que en 8 de diciembre del año de 1.646 se trató y convino entre los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de los dichos señores Rey y Estados, tocando a Rugero Huygens por y en nombre de su mujer la señora Ana Margarita de Stralen: esto tendrá toda su fuerza y efecto, y se cumplirá y ejecutará de la misma manera que si estuviera inserto a la letra en el presente tratado.



74. Y á fin que se observe mejor el presente tratado, prometen recíprocamente los dichos señores Rey y Estados ayudar y emplear sus fuerzas y medios cada uno de por sí para poner los pasos libres, y los mares y ríos navegables y seguros contra las correrías de los amotinados piratas, corsarios y ladrones, y hacerlos castigar rigurosamente si se les pudiera coger.

75. Demás de esto prometen no hacer cosa alguna contra o en perjuicio del presente tratado, ni permitir que se haga directa o indirectamente, y si se hiciere mandarla reparar sin dificultad ni dilación alguna: y se obligan recíprocamente á la observancia de todo lo referido, (y el dicho señor Rey por sí y sus sucesores) y para la firmeza de esta obligación renuncian todas las leyes, costumbres y otras cosas cualesquiera contrarias a ésto.

77. El presente tratado será ratificado y aprobado por los dichos señores Rey y Estados, y las letras de ratificación se entregarán de una y otra parte en buena y debida forma en el término de los meses; y si la dicha ratificación llegare antes, cesarán desde entonces todos los actos de hostilidad entre las partes sin esperar a que se cumpla el dicho término: en inteligencia, de que después de la conclusión y firma del presente tratado, no cesará la hostilidad de ambas partes sin que antes se entregue y cambie la ratificación del Rey de España en debida sustancia y forma por la de los dichos señores Estados de las Provincias Unidas.

78. Pero no obstante esto, quedarán los negocios por ambas partes en el mismo estado y constitución en que se hallaren al tiempo de la conclusión

del presente tratado, y hasta tanto que la dicha recíproca ratificación sea cambiada y entregada.

79. Este tratado se publicará en todas aquellas partes donde corresponda, inmediatamente después que se hayan cambiado y entregado las ratificaciones de una y otra parte, y cesarán desde entonces todos los actos de hostilidad.

Artículo particular tocante a la navegación y comercio, en con
secuencia del tratado de paz concluido y asentado entre los em
bajadores extraordinarios y plenipotenciarios del señor Rey de
España y los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de
los señores Estados Generales de las Provincias Unidas de los
Países Bajos.

Los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos. A todos los que las presentes letras vieren salud. Por cuanto habiendo nuestros embajadores extraordinarios y plenipotenciarios juntos en la ciudad de Munster en Westfalia, hecho y concluido el día 30 de enero del presente año de 1.648 un tratado de paz con los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios del señor Rey de las Españas D. Felipe IV, el cual hemos aprobado y ratificado en todos y cada uno de sus puntos; se ha considerado y convenido de ambas partes, que (para la mayor firmeza y entera observancia de dicho tratado de paz, y a fin de restablecer la navegación y comercio recíprocamente con tal libertad y seguridad, que por ningunos inconvenientes que le sobrevengan, pueda ser turbada la común quietud) es necesario poner en ello buen orden y regla; para este fin nuestros dichos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios en virtud de nuestros poderes, han concluido y ajustado con los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de dicho señor Rey de España, un artículo particular tocante a la navegación y comercio sobredicho, cuyo tenor

está inserto aquí al pie de la letra.

Los súbditos y habitantes de las Provincias Unidas podrán navegar y -
traficar con toda libertad y seguridad en todos los reinos, estados y países
que están o estuvieren en amistad ó neutralidad con el estado de las Provin-
cias Unidas; y no podrán ser turbados ni inquietados en su navegación y tráfi-
co sobredicho con ocasión de las hostilidades que hay o pudiere haber en ade-
lante entre el dicho señor Rey de España y los sobredichos reinos, estados o
países, a algunos de ellos que estuvieren en amistad o neutralidad con los -
sobredichos señores Estados, como se ha dicho arriba, sin que no obstante sea
permitido llevar a los enemigos declarados del dicho señor Rey, mercaderías
prohibidas o de contrabando; y para obviarlo y no interrumpir el curso del -
comercio estarán obligados, habiendo entrado en algunos puertos del dicho Se-
ñor Rey, y queriendo ir de allí a los puertos de los enemigos a mostrar sus
pasaportes, los cuales contendrán la especificación de la cargazón de sus na-
vios, testificada y marcada con el sello ordinario, y conocido de los oficia-
les del almirantazgo del lugar de donde hubieren partido; y no podrán ser en
lo demás visitados o molestados, y menos detenidos bajo cualquier pretexto -
que sea, como tampoco estando en alta mar o viniendo a algunas bahías sin que
rer entrar en los puertos o vender sus mercaderías, estarán obligados a dar
alguna cuenta de la carga de sus navíos. Debiéndose entender que los señores
Estados harán prohibición expresa, para que ningunos de sus súbditos puedan -
llevar mercaderías de contrabando a los enemigos de dicho señor Rey; y darán

contraseñas para reconocer mejor, por medio de ellas, la validación de los - dichos pasaportes del almirantazgo, a fin que no puedan ser falsificados, sal vo no obstante que la navegación y comercio de los súbditos de las Provincias Unidas en Francia, y recíprocamente, se podrá continuar como antes de ahora, absteniéndose de llevar a Francia mercaderías que provengan de los Estados del Rey de España, y puedan servir contra S.M. y sus dichos Estados.

Y en caso que en los dichos navíos se hallen aquellos bienes, mercaderías ó géneros que están declarados por prohibidos y de contrabando, los di chos bienes, mercaderías o géneros prohibidos y de contrabando, serán solamente secuestrados y confiscados, sin que el navío ni los demás bienes, mercaderías o géneros que estuvieren en él, puedan por esta razón ser de ninguna manera molestados, inquietados o confiscados.

Y recíprocamente tendrán los súbditos del dicho señor Rey la misma li bertad de navegación y tráfico, en caso de que haya ó pueda haber hostilidad entre los dichos señores Estados y los reinos, estados o países, o algunos - de ellos, que están o estuvieren en amistad o neutralidad con el dicho señor Rey de España, y esto conforme a las sobredichas condiciones y restricciones expresadas en este artículo.

El presente artículo será observado, ejecutado y tenido por inserto en el tratado de paz, y ratificado por el señor Rey de España y los señores Est dos generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos, como el dicho - tratado principal, dentro de dos meses después de hecho el cambio de las rati

ficaciones del dicho tratado principal, concluido y firmado en 30 de enero - del año presente de 1648, ó cuanto antes sea posible, después del dicho cambio; y las ratificaciones se entregarán y cambiarán por una y otra parte en - debida y válida forma.

Hecho, asentado y firmado por los dichos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios del señor Rey de España y de los dichos señores Estados generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos, en Munsters a cuatro de febrero de 1648. Firmado y sellado con lacre.=(L.S.)= El Conde de Peñaranda. Antonio Brun.= Barthott de Gent.= Juan de Mathenesse.= Adrian Brun.= God, van Reede.= F. v. Donia.= W. Rippeidá.= Adr. Giant.

TRATADO de RENOVACION DE PAZ, ALIANZA, y COMERCIO entre las Coronas de España, y de la Gran Bretaña, ajustado por el PADRE JUAN EVERARDO NIDARDO, el Duque de SAN LUCAR LA MAYOR, y el Conde de PEÑARANDA, en nombre de S.M. CATHOLICA, y por el Conde de SANDWICK en el de S.M. BRITANICA: fu fecha en Madrid à 23. de Mayo de 1667. (Secretaria del Confejo de Eftado del cargo de Don Aguftin Pablo de Hordeñana, Original en Latin) (9)

POR quanto por muerte del Serenifismo, y muy Poderoso Rey de las Españas Phelipe IV., de gloriosa memoria, ha succedido (por disposicion de Dios Omnipotente) en los Reynos, Eftados, y Dominios de la Monarchia Paterna el Serenifismo, y muy Poderoso Rey Catholico Carlos Segundo, fu Hijo, y fido nombrada por fu Tutora, y Curadora para el gobierno, y administracion de ellos, durante la menor edad del Rey, la Serenissima Reyna Catholica Doña Maria Ana de Auftria; Por tanto ha parecido à los Serenifimos, y muy Poderosos Rey, y Reyna Catholicos, y al Serenifismo, y muy Poderoso Rey — Carlos Segundo de la Gran Bretaña, llevados, y movidos reciprocamente de — igual afecto, y defeo, renovar, y confirmar con nuevos aumentos aquella — buena correspondencia, y amistad que desde tiempo muy antiguo subfiftia —

(9) ABREU Y BERTODANO, J.A. op. cit. (Reinado de Carlos II. Parte I. Año MDCCLI. pág. 145 a 188.

entre las Coronas de España, y de la Gran Bretaña, hasta que las alteraciones de las cosas interrumpieron la concordia, y amistad que havia entre una, y otra Nacion, mayormente quando la mutua frecuencia, y ventajas del comercio, y la inclinacion de ambas Naciones, parece que piden una singular union de ánimos, y dictámenes; y à este fin el dicho Serenísimo Rey de la Gran Bretaña ha embiado por su Embaxador Extraordinario cerca de sus Magestades Catholicas al Excelentísimo Señor Eduardo, Conde de Sandwick, Vizconde de Hinchbrook, Baron de Montagu de San Neote, Vice-Almirante de Inglaterra, Gefe de la Guarda-Ropa del Rey, Confejero de Estado, y Cavallero de la muy Noble, y muy célebre Orden de la Jarretiera, no solo para renovar los antiguos vínculos de amistad entre las dichas Coronas, rotos por la mala constitucion de los tiempos, sino tambien para unir, y establecer con mas estrecho lazo nuevos fundamentos de amistad mas firme, - por medio de Articulos de una reciproca Alianza, que haya de durar hasta la mas distante posteridad, y para ello ha corroborado à dicho Embaxador con un Poder muy amplio, cuya copia se insertará aqui abaxo.

Y Respecto de que la negociacion de dicho Embaxador Extraordinario ha sido admitida en el Placio del Rey Catholico con tanta complacencia, ha parecido conveniente à la Serenísima Reyna, Tutora, y Gobernadora del Rey, nombrar à los Excelentísimos Señores el Señor Juan Everardo Nidardo, Confejero de la Serenísima Reyna Catholica, Inquifidor General, y Confejero

de Eftado: à Don Ramiro Phelipez Nuñez de Guzmàn, Duque de San Lucar la Ma
 yor, y de Medina de las Torres, del Confejo de Eftado, y Prefidente del de
 Italia; y à Don Gafpàr de Bracamonte y Guzmàn, Conde de Peñaranda, del Con
 fejo de Eftado, y Prefidente del de Indias, para ajuftrar, y concluir con -
 Èl un Tratado, à los quales ha dado el Poder, y Comifion del tenor figuien
 te.

SIGUEFE EL TENOR DEL PODER, O PLENIPOTENCIA POR PARTE DE FU Mageftad
 CATHOLICA.

DON CARLOS por la gracia de Dios Rey de Caftilla, de Leon, de Aragón,
 de ambas Sicilias, de Jerufalèn, de Portugal, de Navarra, de Granada, de -
 Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de -
 Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaèn, de los Algarves, de Algecira, de
 Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y Occidenta
 les, Islas, y Tierra firme del Mar Occeano, Archiduque de Auftria, Duque -
 de Borgoña, de Brabante, de Milàn, Conde de Habfpurg, de Flandes, Tirol, y
 Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c.; y la Reyna Doña Maria Anna
 de Auftria, fu Madre, Tutora, y Curadora de fu Real Perfonas, y Gobernadora
 de dichos Reynos, y Señorios: Por quanto para affentar las cofas convenien
 tes à la caufa comun de las Serenifsimas dos Coronas de Efpaña, y la Gran
 Bretaña, que por algunos accidentes del tiempo fe hallan pervertidas de la

observancia, y Capitulaciones asentadas en los antiguos Tratados de Paz entre las dichas Coronas, he tenido por bien de dar Poder (como en virtud de la presente le doy) à Juan Everardo Nidardo mi Confeffor, del Consejo de Estado, y Inquifidor General, Don Ramiro Phelipez Nuñez de Guzmàn Duque de San Lucar la Mayor, y de Medina de las Torres, del Consejo de Estado, y Presidente del de Italia, y Don Gaspar de Bracamonte, y Guzmàn Conde de Peñaranda del Consejo de Estado, y Presidente del de Indias, por concurrir en sus Personas las prerogativas de gran calidad, prudencia, y experiencia zelo, y amor de mi servicio, y particularmente por la gran confianza y satisfaccion que me asiste de lo que procuran y defean todo lo que pueda conducir al beneficio, y bien público; Por tanto en virtud del presente Poder les authorizo, y doy tan cumplida facultad, qual de derecho se requiere, para que por el Serenissimo Rey mi muy charo, y muy amado hijo, y en su Real Nombre, representando mi propia Persona, puedan oir, conferir, tratar, ajustar, y concluir con el Conde de Sandwich, del Consejo de Estado del Serenissimo Rey de la Gran Bretaña Carlos Segundo mi buen hermano, y primo, y su Embaxador Extraordinario en esta Corte, en virtud del Poder, que asimismo presenta del dicho Rey de la Gran Bretaña, qualesquier Tratados de Renovacion de Paz, y mas estrecha Amistad; y tambien les doy Poder para qualesquier Tratados de Union y alianza con el dicho Rey de la Gran Bretaña, y una Tregua con la Corona de Portugal por el tiempo que pareciere con

toda la mayor potestad, y authoridad, y la misma que reside en mi Real Per
 fona, obligandome, como me obligo, y al dicho Rey mi hijo en fee y palabra
 Real à estâr, y paffar por ello, aprobarlo, y ratificarlo con el juramento,
 y demás requifitos, y solemnidades, que en tal cafo fuere neceffario den--
 tro del termino, que para ello fe señalare, fin diminucion alguna. En fee
 de lo qual mandè despachar la Prefente firmada de mi mano, sellada con el
 Sello Secreto, y refrendada del mi infracripto Secretario de Eftado. Dada
 en Madrid à quinze de Junio de mil feiscientos, y fefenta y feis años. YO
 LA REYNA. Don Pedro Fernandez del Campo y Angulo.

Siguete el tenor del Poder, à Plenipotencia por parte del Sereniffi--
 mo Rey de la Gran Bretaña,

CARLOS SEGUNDO, por la gracia de Dios, Rey de la Gran Bretaña, Fran--
 cia, è Irlanda, Defenfor de la Fè, &c. A todos, y à cada uno de los que las
 prefentes Letras vieren, falud. Por quanto la defgracia de este figlo pare--
 ce que confifte principalmente en que la mayor parte de los Principes, y --
 Eftados confultan, y estân tan afidos à fus defeos, è intereffes, que quie--
 ren antes atropellar todos los derechos de la Amiftad, y Vecindad, è por --
 mejor decir, deftruir todas estas cosas, que ceder un punto de fus defig--
 nios, y proyectos, por mas débiles, è iniquos que fean; aquellos pocos Re--
 yes, à cuyo poder unio Dios cierto natural amor à lo bueno, y à lo jufto,--

deben mayormente aplicar un fuma eftudio, y trabajo, afsi para poder establecer entre sí facrofantas Alianzas de amiftad, como para atraer, y inclininar las perverfas voluntades de los que fe refiften à los mas utiles defeos de la concordia: y atendiendo à que los genios de los Ingleses, y Efpañoles han fido fiempre de tal naturaleza, que han acoftumbrado llevar mal fu mutua feparacion, y con facilidad buelven à fu amiftad, y que fus refpectivivos Reynos entonces han florecido principalmente, quando los Reyes, figuiendo fu natural inclinacion, han obfervado religiofifsimamente la Paz mutuamente eftablecida: confiderando tambien, y conftando por muy ciertos indicios, que la Serenifsima Reyna Doña Maria Ana de Auftria, Madre, Tutora, y Curadora del Serenifsimo, y muy Poderofa Rey de las Efpañas, &c., y Gobernadora de fus Reynos, y Provincias, tiene las mifmas intenciones que Nos, - no fulo qde que fe renueven las antiguas Alianzas entre nueftras Coronas, - fino de que fe unan aún con mas eftrechos vínculos, y mas firma lazo que - hafta aqui: nos ha parecido, que para perficionar una obra tan faludable, - no falta mas que el que elijamos un fujeto digno, y fuficiente para tan importante negocio, que exerza el cargo de nueftro Embaxador Extraordinario cerca de la Serenifsima Reyna Regente de Efpaña, y que adorne fu caracter con fus prendas; el qual, entre todos los demás, hemos penfado que fea - - nueftro muy amado, y muy fiel Pariente Eduardo, Conde de Sandwich, y Vizconde de Hinchinbrook, Baron de Montagù de San Neote, Vice-Almirante de In

glaterra, Gefe de nueftra principal Guarda-Ropa, de nueftro Confejo de Ef-p
tado, y Cavallero de la muy antigua, y muy célebre Orden de la Xatretiera:
Por tanto fea notorio, que Nos, confiando mucho en la fidelidad, induftria,
juicio, y prudencia de dicho Conde de Sandwich, nueftro Embaxador Extraor-
dinario, le hemos hecho, ordenado, y nombrado, y por las prefentes le hace-
mos, ordenamos, y nombramos por nueftro verdadero, y cierto Comiffario, y
Procurador, dandole, y condediendole plena, y omnimoda poteftad, y autho-
ridad, y juntamente Poder general, y efpecial para affentar, comunicar, —
tratar, convenir, y concluir con muy utiles, y convenientes articulos, y con
condiciones en nueftro nombre con la referida Serenifsima Reyna Regente, y
con fus Comiffarios, Diputados, y Procuradores, authorizados con fuficien-
te Poder para ello, de, y fobre la mas eftrecha Confederacion entre las Co-
ronas, y Reynos de la Gran Bretaña, y de Efpaña; afsimifmo de, y fobre ref-
tablecer la libertad del Comercio, y Navegacion; y finalmente de, y fobre
una Alianza defenfiva, y ofenfiva entre dichas Coronas, y Reynos; y para —
hacer todas las demás cofas que firvan, y conduzcan à los referidos fines;
y hacer, y pedir, y recibir de la otra parte los Articulos, Letras, è Inf-
trumentos neceffarios fobre efto; y finalmente para executar todas aquellas
cofas que fobre lo referido, è acerca de ello fueren neceffarias, y oportu-
nas: prometiendo con buena fè, y palabra Real, que tendremos por ratas, —
gratas, y firmes todas, y cada una de aquellas cofas que acerca de lo fobre

dicho, ò en alguna parte de ello fe hicieren, pactaren, y concluyeren entre dicha Serenifsima Reyna Regente de Efpaña, y fus Procuradores, Diputados, y Comiffarios, y el mencionado nueftro Embaxador Extraordinario, y - que jamàs contravendremos à alguna, ò algunas de las fobredichas cofas; - fino que antes bien obfervaremos, y procuraremos que fe obferve fanta, è inviolablemente todo lo que fe haya prometido en nueftro nombre. En tefti monio de lo qual hemos mandado defpachar eftas Letras, firmadas de nueftro mano, y corroboradas con nueftro gran Sello de Inglaterra. Dadas en nueftro Palacio de Weftminfter à 16. del mes de Febrero, año del Señor de 1665. y 18. de nueftro Reynado. CARLOS, REY

En virtud de los quales Poderes, y fggun fu tenor, los referidos Excelentifimos Señores Comiffarios, y Diputados de los Serenifsimos Rey, y - Reyna de las Efpañas, y el Embaxador Extraordinario del Serenifsimo Rey de la Gran Bretaña, despues de repetidas Conferencias tenidas hafta hoy, y de una cuidadosa atencion, y diligente, y madura deliberacion, digna de tan arduo negocio, han convenido, confentido, firmado, y concluido los Artículos de Paz (que con el favor de Dios, ha de durar perpetuamente) en eftos terminos.

EN EL NOMBRE DE LA SS^{ma}. Trinidad, Padre, Hijo, y Espiritu Santo, — tres personas distintas, y un solo Dios verdadero.

I

En primer lugar fe ha convenido, y acordado, que entre la Corona de España, de una parte, y la de la Gran Bretaña de otra, como entre las Tierras, Provincias, Reynos, Dominios, y Territorios pertenecientes à qualquiera de los fobredichos Reyes, ò fujetos à ellos, havrà universal, buena, fincera, verdadera, firme, y perfecta Amiftad, Confederacion, y Paz, que - durará defde hoy para fiempre, y fe obfervará inviolablemente, afsi por - Tierra, como por Mar, y otras Aguas; y que los Subditos, y Pueblos de los Fobredichos Reyes, y los Habitantes de fus Provincias, de qualquier grado, ò condicion que fean, fe afsiftirán unos à otros con reciproca ayuda, mutuos auxilios, y todo genero de officios refpectivos de benevolencia, y - - amiftad.

II.

Que ninguno de los fobredichos Reyes, ni los Habitantes, Pueblos, ò Subditos de fus Dominios, atentarán, harán, ò procurarán que fe haga con - ningun pretextó, pública, o privadamente, en algun lugar, por Mar, ò por Tierra, en los Puertos, ò en los Rios, ninguna cofa que pueda fer en daño, y detrimento de la otra Parte; fino que antes bien la una tratará à la - otra con amiftad muy eftrecha, y todo genero de benevolencia. Demàs de ef- to ferá libre, y fegura à qualquiera de las Partes, afsi por Mar, como por

Tierra, la entrada en las Provincias, Reynos, Islas, Dominios, Ciudades, y Villas, muradas, ò por murar, fortalecidas, ò por fortalecer; y afsimifmo en qualesquiera Bahías, y Puertos en donde antes folia hacerfe el tràfico, y comercio: de tal manera, que qualquiera pueda reciprocamente comprar, vender, y practicar todo genero de negociacion en qualquiera lugar perteneciente à la otra Parte, con la mifma libertad, y feguridad que comercian los mifmos Ciudadanos con fus Conciudadanos, ò Vecinos, ò otra qualquier Nacion Eftrangeras, à quien qualquiera de las Partes haya permitido frequentar los dichos Lugares para comerciar.

III.

Que los dichos Reyes de Efpaña, y de la Gran Bretaña cuidarán de -- aquí adelante en primer lugar de que fus refpectivos Subditos, y Pueblos fe aftengan reciprocamente de toda fuerza, agravio, y violencia; y que fi aconteciere, que tal vez fe haga alguna injuria por uno de los mencionados Reyes, ò fus Pueblos, ò Subditos à los Pueblos, ò Subditos del otro, ò contra los Articulos de efta Confederacion, ò contra la razon del derecho, y de lo jufto, de ninguna manera fe defpacharán por razon de efto Letras de Repreffalia, Marca, ò Contra-Marca por parte de alguno de los Confederados, fin haver procurado, y follicitado antes los remedios ordinarios de derecho, y jufticia: pero en cago de diferirfe, ò negarfe el beneficio del de-

recho, y de la jufticia, aquel Tey cuyos Subditos, ò Habitantes huvieren padecido la injuria, pedirà, y eftrecharà con mas eficacia, que fe admintre jufticia, ò cerca del mifmo Rey Aliado, ò cerca de los Comiffarios que fe nombraran por parte de ambos Reyes; los quales conoceràn de todas las quexas, y diferencias de efta naturaleza, y las compondràn por amigable tranfaccion, ò à lo menos las terminaràn conforme à Derecho; pero fi defpues de efto huviere ulterior dilacion, y no fe diere satisfaccion alguna dentro de feis mefes defpues de hecha la inftancia, finalmente fe ha convenido, que en efto cafo fe puedan conceder Letras de Repreffalia, Marca, ò Contra-Marca à la Parte agraviada.

IV.

Que entre el Rey de Efpaña, y el Rey de la Gran Bretaña, como entre fus refpectivos Subditos, Pueblos, y Habitantes, afsi por Mar, como por Tierra, y otras aguas en todos, y qualequiera de fus reynos, Dominios, territorios, Provincias, Islas, Colonias, Ciudades, Villas, Aldèas, Puertos, Rios, Bahías, Senos Eftrechos, y corrientes de aguas, fujetos à la obediencia qualquiera de los Reyes en donde antes de agora fe acoftumbrò hacer el trato, ò comercio; fe concederà refpectivamente libertad, y facultad de negociar, hacer, y exercer todo genero del comercio; de tal fuerte, que fin Letras de Salvoconducto, ò otra forma de Licencia general, o expecial

los Pueblos, y Subditos de ambas Partes puedan libremente navegar, y viajar, afsi por Tierra, como por Mar, y Aguas Dulces, à las Provincias, Reynos, Bominios, Ciudades, Puertos, Corrientes de aguas, Bahías, Diftritos, y otros Lugares qualesquiera, fujetos à qualquiera de los Confederados; y juntamente entrar, è introducirse en qualesquiera Puertos que les pareciere, con fus Navios cargados, ò vacíos, y con qualquier otro genero de cavalgaduras, y carros; y luego que hayan entrado en ellos emplearse en la compra, venta, y permuta de todo genero de mercaderias à qualquier valor, y precio. Afsimifmo comprar al precio jufto, y acostumbrado las vituallas, y todo genero de viveres neceffarios para la manutencion de la vida, ò para hacer viage: entender en el reparo, y conftruccion de fus Navios, y de fus cavalgaduras, y carruages: mudar de lugar, y falir libremente à donde los pareciere con fus Navios, y demás carruages, bienes, mercaderias, y - facultades, fea para bolver à fus Tierras, ò para paffar à otra parte, - fin que fe les caufe ninguna moleftia, inquietud, ò impedimento, fatisfaciendo, y pagando fiempre fus refpectivos derechos, Alcavalas, y Aduanas, falvas tambien las Leyes, y Ordenanzas eftablecidas, y obfervadas en los Dominios, y Provincias de ambos Reyes .

V.

Afsimifmo fe ha acordado, que los generos, y mercaderias que los Sub

ditos del Rey de la Gran Bretaña compraren en España, ò en otros Reynos, - ò Dominios sujetos al Rey de España, y las cargaren en sus propios Navios, ò en otros prestados, ò fletados, no estarán sujetos, ni serán gravados - de ninguna manera con algunos derechos, Portazgos, Diezmos, Subsidios, ò otras cargas, fuera de aquellas à que están obligados en igual caso los - mismos Naturales, y todos los demás Eñtranjeros que comercian en los di- chos lugares. Demàs de esto los Mercantes, y Subditos sobredichos en sus compras, ventas, y contratos de sus mercaderías, así por lo tocante al pre cio, como à la paga de todos los derechos, tendrán, y gozarán siempre de - los mismos Privilegios, que los Subditos naturales; y les será lícito com prar para sí bienes, y mercaderías, y cargar las que hubieren comprado - (segun se ha dispuesto arriba) en sus Navios: de tal manera, que no será permitido detener en el Puerto con ningun pretexto los dichos Navios carga dos despues de la paga de los derechos debidos, ni mover pleyto, ò contro versia alguna à los Cargadores, Mercantes, Factores, ò Agentes de Negocios empleados en la compra, ò carga de estos bienes despues de la partida del Navio, sobre alguna cosa perteneciente al Navio, à los bienes, ò à la car ga de ellos.

VI.

Y para que los Oficiales, y Ministros de qualesquiera Ciudades, Vi-

llas, y Lugares, que estàn baxo la obediencia de uno, ò otro de los Confederados, no exijan, ni tomen de los respectivos Mercantes, ò Subditos mayores derechos, taffas, estipendios, recompensas, dones, ò alguna otra cosa, fuera de aquellas que pueden exigirse de derecho, segun la fuerza, y tenor de este Tratado; y para que los Mercantes, y Pueblos sobredichos — puedan saber ciertamente y distinguir con claridad lo que se ha establecido, y determinado tocante à los derechos; se ha convenido, y concluido, que en todas las Oficinas, y puertas de las Aduanas de qualquiera Ciudad, Villas, y Lugares sujetos à uno, ò otro de los Serenissimos Reyes, — en donde fueren pagarse estos portazgos, ò derechos, se fixaràn ciertas — Tablas, ò Aranceles, en los quales se notará con claridad la justa razon, ò tassa de las cargas, derechos, Subsidios, y pagas qualquiera, debidas así al Real Fisco, como à los Oficiales de la Aduana; es à saber, constará, y se notará la tassa de las especies de mercaderías que se llevaren, ò extrageren de la Provincia, contadas cada una por sí: y si algun Oficial, ò Diputado fuyo exigiere directa, ò indirectamente, pública, ò privadamente, ò tomàre, ò permitiere que se le dè alguna cantidad de dinero baxo el nombre de derecho, carga, dòn, estipendio, recompensa, ò débito, — por alguno de los referidos Mercantes, ò Subditos, fuera de lo prescripto por los dichos Aranceles; (aunque sea por via de presente, ò donativo) se ha convenido, que el dicho Oficial, ò Diputado, que de este modo delinque

re, y fuere convencido de fu delito ante Juez competente de aquel País en donde hiciere la ofensa, ferà castigado con la pena de carcel por tres meses continuos, y obligado à pagar el triplo del valor del dinero, ò de — qualquiera otra cosa injustamente tomada, segun se ha dispuesto arriba; y la una mitad de esta multa se aplicará al Real Fisco del Rey de España, ò del de la Gran Bretaña; y la otra mitad al Denunciador, conforme à Derecho, ante Juez competente en aquel País en donde fuere aprehendido el delinquente que huviere hecho esta ofensa.

VII.

Que ferà lícito, y libre à los Subditos del Rey de la Gran Bretaña comerciar, afsi introduciendo, como extrayendo mercaderias en España, y — demás Tierras, y Dominios qualesquiera, fujetos al Rey, de España, en donde anteriormente han acostumbrado exercer el tráfico, y comercio; y afsimismo vender, y extraher todo genero de paños, mercaderias, y manufacturas facadas de las Islas Britanicas, juntamente con las manufacturas, bienes, frututos, y genero proprio de las Ilas, Ciudades, ò Colonias fujetas al dominio nio del Rey de la Gran Bretaña; y afsimismo todos aquellos bienes que huvieren comprado los Factores, ò Agentes de Negocios de los referidos — Subditos, afsi de la parte de acà, como de la de allá del Cabo de Buena-Esperanza, fin la menor obligacion de declarar, ò manifestar à què perso-

nas ò à què precio han vendido estas mercaderías, y generos que tuvierén, y fin vexacion, ò moleftia alguna, por los yerros que fuerén cometer los Maeftrés de Navios en orden al regiftro de las mercaderías, ò bienes de esta naturaleza. Afsimifmo los referidos Subditos podrán falir a fu arbitrio de los Dominios del Rey de Efpaña, y partir libremente à qualefquiera Territorios, Islas, Dominios, ò Provincias del Rey de la Gran Bretaña, que les pareciere, ò à otros qualefquiera lugares que quifierén, con todos fus bienes, caudales, y mercaderías, haviendo pagado antes los derechos, y portazgos que fe deben exigir, fegun los Articulos antecedentes. Demàs de efto, fi quedare en el Puerto en donde eftuvieren alguna parte de las mercaderías que llevaren, la qual no hayan querido defcargar, podrán detenerla, y guardarla, y llevarla configo en fus Navios, ò Baxeles qualefquiera, fin pagar nada abfolutamente baxo el nombre de derecho, ò portazgo, con la mifma exempcion que fi de ningun modo huvieffen tocado, ò entrado en los Puertos, ò Bahías del Rey Catholico. Finalmente todos los bienes, Caudales, mercaderías, Navios, ò otras Embarcaciones llevadas à los dominios, y Lugares del Rey de la Gran Bretaña baxo el nombre de prefa, y judicialmente pronunciadas, y declaradas por prefa legitima, fe entenderán, y reputarán en virtud de efté Artículo por mercaderías, y bienes propios de las Islas Britanicas.

VIII.

Que los Subditos, y Vaffallos del Serenifsimo Rey de la Gran Breta—
 ña podràn llevar, y conducir libremente qualesquiera frutos, generas, y -
 mercaderias de la India Oriental à qualesquiera Dominios pertenecientes al
 Serenifsimo Rey de las Efpañas, con tal, que confte por Teftimonio de los
 Diputados de la Compañia de la dicha India Oriental, refidentes en Lon—
 dres, que los referidos frutos, y mercaderias han fido trahidas, ò proce—
 den de las Conquiftas, Colonias, ò Factorias de Ingleses, en la mifma forma,
 y con el mifmo Privilegio, y fegun el contexto, tenor, y efecto de las Or—
 denanzas, y Concefsiones, que fe defpacharon a favor de los Vaffallos de
 las Provincias Unidas de los Países Baxos en las Reales Cédulas, expedi—
 das acerca de las mercaderias prohibidas, ò de Contrabando en 27. de Ju—
 nio, y 3. de Julio del año de 1663. (a) y publicadas en 30. de Junio, y 4
 de Julio de dicho año. Y por lo que mira à ambas Indias, y a otras quales—
 quiera partes, quiere la Corona de Efpaña, que todo lo que fe concediò à
 los Eftados Generales de las Provincias Unidas de los Países Baxos por el
 Tratado de Munfter, celebrado en el año de 1648., fe entienda concedido, -
 y otorgado al Rey de la Gran Bretaña, y à fus Vafallos, con la mifma fir—
 meza, y amplitud que fi eftuvieffe aqui inferto capitulo por capitulo, y

(a) Eftas Cédulas quedan puestas en la Parte VII. del Reynado del Señor -
 don Phelipe IV; pero por Decreto de 718, fe prohibiò todo tegido de -
 China, y demás partes del Afsia; cuya prohibicion eftá en pràctica, -
 aunque venga por mano de Vaffallos de la Corona de Efpaña, en aten—
 cion à la ruina que caufaba fu admifion à las Fabricas de Sedas de ef—
 tos Reynos.

punto por punto, fin omitir cosa alguna: observandose las mismas Leyes à que estàn obligados, y fujetos los Subditos de los dichos Eftados, y manteniendo de una, y otra parte una reciproca amistad. (a) .

IX.

Los Subditos del Rey de la Gran Bretaña, que entendieren en la negociacion, compra, y venta de qualesquiera mercaderias dentro de los Dominios, Gobiernos, Islas, ò Territorios del Rey de España, ufaràn, y gozàràn de todos aquellos Privilegios, è Immunidades que el Rey Catholico concediò, y confirmò por Reales Cédulas, ò Ordenes de 10. de Marzo, 26. de Junio, y 9. de Noviembre del año de 1645. (b) à favor de los Comerciantes Ingleses, residentes en Andalucia, las quales Cédulas manda S.M. Catholica, que se ratifiquen, y que se admitan, y confirmen, como parte principal de este Tratado. Y para que conste à todos de ello, se ha concluido, que las referidas Cédulas, ò Ordenes Reales (en quanto à la substancia, fuerza, y efecto de ellas) se comprehenderàn, y admitiràn en el numero de

-
- (a) Este Artículo en su ultima parte es relativo al V. y VI. del Tratado de paz hecho con los Eftados Generales en 30. de Enero de 1648. que se halla en la Parte V. del Reynado del Señor Don Phelipe IV. pag.309.
- (b) Estas Cédulas se hallaràn en el Reynado del Señor Don Phelipe V. insertas en el Tratado de Comercio, ajustado en Utrech en 9. de Diciembre de 1713. entre estas mismas Coronas.

estos Articulos, y se estenderàn con todo el beneficio posible al uso, y comodidad de todos, y cada uno de los Subditos del Rey de la Gran Bretaña, que habitan, ò comercian en qualquier lugar perteneciente à los Dominios del Rey Catholico.

X.

Que los Navios, y todas las demás Embarcaciones pertenecientes al Rey de la Gran Bretaña, ò à sus Subditos, que se dirigieren, ò entraren en los Dominios, ò Puertos del Rey de España, de ninguna manera fèràn visitas, ò examinadas por los Ministros, Jueces de Contrabando, ò otros cualequiera de propria, ò agena authoridad; ni paffaràn à bordo, ò entraràn en los sobredichos Navios algunos Soldados, Hombres armados, Oficiales, ò Particulares qualequiera, baxo el nombre de Guardas, ò con qualquier otro pretexto. Demàs de estos los Ministros de la Aduana de ninguna manera gravaràn con alguna visita, ò inspeccion à los Navios, ò Embarcaciones de una, ò otra parte, quando lleguen à las Provincias, Dominios, ò Puertos de una, ò otra, hasta que se hayan descargado las mercaderias que traxeren, ò à lo menos hayan puesto en tierra aquella parte de sus mercaderias, que por declaracion del Maestre confite destinarse à dicho Puerto. Y no fèrà lícito poner en prision al Capitan, Maestre, ò otro qualquiera de la Tripulacion, al Piloto, ò Marinero, ò causarles al-

na vexacion, por medio de la detencion en tierra de sus personas, ò Lanchas; pero sin embargo, podrán los Oficiales de la Aduana hacer pasar à los referidos Navios algunos Ministros para su custodia, con tal, que ningun Navio sea precisado à recibir mas de tres Guardas, los quales velarán sobre que no se extraiga, ò fague ocultamente cosa alguna, sin haver pagado los derechos, que segun estos Articulos se deben exigir: à los quales Oficiales, que velaren sobre esto, no tendrán que pagar los dichos Navios, y Embarcaciones, Maestres, Compañeros, Marineros, Pilotos, Mercantes, — Factores, y Proprietarios, con motivo de esta custodia, ningunos gastos, ni gratificaciones, ni serán gravados con carga alguna baxo este pretexto.

(a) Y quando el Maestro declarare, que toda la carga de su Navio se ha de descargar en algun Puerto, la declaracion de todas las dichas mercaderias de que estuviere cargado se hará en la Aduana, segun se ha acostumbrado — hasta aqui; y en caso que despues de hecha esta declaracion, se hallen en el navio mas bienes de los que se huvieren registrado, se les concederá — el termino de ocho dias utiles de trabajo (contados desde aquel en que se

(a) Sin embargo de esta clausula, se ha acostumbrado reciprocamente por — tiempo immemorial, que los Capitanes por un Acto de Civilidad, ò Hospitalidad dan la mesa à los Ministros puestos por tan pocos dias à — bordo de sus Navios; y notamos, que en el Artículo IV. del Tratado hecho por el Protector Cromwel con Portugal en 10. de Julio de 1654. — (que queda puesto en la Parte VI. del Reynado del Señor Don Phelipe — IV. pag. 261.) se estipuló, que la subsistencia de los tales Ministros havia de ser de cuenta de los Baxeles por el tiempo alli asignado.

empezò à descargarse el Navio) para que se manifesten los bienes ocultos, y se impida su confiscacion: y en caso que no se haga la declaracion, ò registro de los referidos bienes dentro del termino señalado de los ocho dias, entonces solo estos, y no otros algunos, se adjudicaràn al Fisco, aunque no se haya acabado de descargar el Navio; pero de fuerte, que el Mercante, ò Proprietario de dicho Navio no padezca alguna otra molestia, ni incurra en alguna otra pena; (a) y luego que los Navios se hallen cargados, podràn salir libremente. (b)

- (a) Esta clausula tiene, al parecer, implicacion con otra que se halla en el Artículo VII. de este mismo Tratado, que dice: Ni seràn molestados (los Mercantes Ingleses) por yerros que hicieren los Maestres de Navios, ò otros en la entrada, y registro de sus bienes; pues no puede darse en el assunto mayor molestia, que la confiscacion de las mercaderias.
- (b) La Nacion Inglesa, fundada en las primeras clausulas de este Artículo; pretendia, que segun ellas, no estaban sujetos sus BaXELes à la visita, abriendo por este medio la puerta à todo genero de contrabandos, y fraudes, fin embargo de que por este mismo Artículo se previene claramente, que hayan de pasar à bordo de los Navios que entraren en los Puertos de España, tres Oficiales de la Aduana, como està expresamente capitulado en todos los Tratados de Comercio con otras Naciones, y se contiene literalmente en el Artículo VIII. Del Tratado hecho con la misma Nacion Inglesa en 17. de Diciembre de 1665. que queda puesto en esta Parte, pag. 1.: Y para ocurrir à estos fraudes se declaró, y mandò por Cedula de 23. de Diciembre de 1716. (que se hallarà en su lugar) que los Gobernadores, Afsistientes, Corregidores, y demás Justicias de los Puertos, arreglándose à lo literal de este Capitulo, del XX. con Holanda en 714., y afsimismo à las Instrucciones de Administracion, y contrabando con que se hallaban, observassen puntualmente lo dispuesto por ellos, poniendo à bordo de cada Navio las tres personas, ò Oficiales de la Aduana, los quales debieffen juntos zelar todo lo que mirasse à qualesquiera Rentas, derechos, y contrabandos; fòbre cuya práctica no parece se ha ofrecido despues reparo por la citada Nacion, ni por otra.

XI.

Que fi algun Navio perteneciente à qualquiera de los fobredichos Reyes, ò à fus Subditos, ò Pueblos, entràre en algun Puerto de las Tierras, ò Dominios de uno, ò otro, y alli, ò en alguna Bahia defcargàre alguna - parte de los bienes, ò mercaderías de que eftuviere cargado, yendo defti- nado, y paffando à otros Lugares dentro, ò fuera de los Dominios del Rey Aliado con lo reftante de la carga; de ninguna manera eftará obligado à regiftrar el refiduo de ella, que no huviere defembarcado, ni à pagar de recho alguno, con tal, que por razon de aquellos bienes que fe huvieren defcargado en el Puerto, ò Bahia en donde eftà el Navio, fe fatifagan - los derechos de la Aduana; y no fe dará ninguna fianza, fea fidejufforia, ò otra qualquiera, por los bienes que huviere de llevar à otra parte, fal- vo que intervenga alguna diferencia en materia de Felonia, deuda, delito de Iefa Mageftad, ò otro qualquiera capital.

XII.

Por quanto la mitad de los derechos, que fe imponen fobre los bie- nes, y mercaderías Eftrangeras, conducidas à Inglaterra, fe debe refti- - tuir, y bolver por ley à la perfona que las introduxere, fi quifiere tal vez facar eftos mifmos bienes fuera del expreffado Reyno dentro de un año defpues de hecha la primera defcarga de ellos, haviendo antes hecho jura- mento de ferlos mifmos bienes en numero por los quales fe pagaron los de-

rechos, quando se introduxeron; y pudiendo tambien estos bienes extraherse del Reyno en qualquier tiempo, despues de pasado un año, sin pagar segunda vez ningun derecho, ò portazgo; se ha concludido, que si algunos Subditos del Rey de la Gran Bretaña descargaren de aqui en adelante algunos bienes, ò mercaderias, de qualquier País, ó especie que fueren, en qualesquiera Puertos del Rey Catholico; los registraren en la Aduana, y pagaran los derechos debidos, segun este Tratado; y despues de pasado algun tiempo, quifieren transportar à otra parte los referidos bienes, ò alguna porcion de ellos para su mejor venta; les será enteramente lícito, y permitido à los referidos Subditos, sin que paguen, ni se exija de ellos ningun nuevo derecho, ò tributo por los mencionados bienes; pero habiendo se prestado antes juramente por el que los transportare, requerido para ello, de ser los mismos bienes por los quales se pagaron los derechos de introduccion, quando se descargaran primeramente: y si tal vez los Subditos, Pueblos, y Habitantes de las Dominios, de una, ò otra de las Partes pudiesen en tierra, ò retuvieren en sí algunos bienes, mercaderias, frutos, ò caudales en qualquiera Ciudad, Villa, y Lugar, por los cuales hayan pagado efectivamente los derechos en la forma prescripta arriba, y determinaren llevar consigo los sobredichos bienes, mercaderias, frutos, ò caudales à alguna otra Ciudad, Villa, ó Lugar dentro del ámbito del mismo Dominio, por causa de no parecerles conveniente venderlos en aquel

lugar en donde estuvieren; esto no solo les será enteramente lícito ejecutarlo, y permitido sin la menor dificultad, ó impedimento, y sin gravarlos con ningunas cargas; (con tal, que se hayan pagado las que se debían en la primera entrada) sino que también siempre que conste por Certificaciones de los Oficiales, que cuidan de la Aduana, haber pagado ya una vez los Portazgos del modo, y forma debida, no se podrán exigir segunda vez los mismos, ó otros cualesquiera derechos en ningún otro Puerto. Demás de esto los Arrendadores, y Administradores de las Rentas de S. M. Católica, ó otros Oficiales nombrados para este fin, permitirán de aquí en adelante, que en todo tiempo se transporten bienes, y mercaderías de un lugar á otro; y darán claras Certificaciones á los Proprietarios de ellas, ó á sus Comisarios, de haber satisfecho en la primera descarga los derechos debidos de justicia; y reconocidas éstas, podrán extraerlas libremente, y introducir las en cualquier otro Puerto, ó lugar que les pareciere, libres de todo Portazgo, ó impedimento, como queda dicho, salvo siempre el derecho de ter cero.

XIII.

Que será permitido á los Navios de los Pueblos, y Subditos de uno, - ó otro de los Confederados echar la Ancla, ó dar fondo en las Riberas, Bahías, ó otras cualesquiera Padas pertenecientes á cualquiera de ellos, sin

fer obligados de ninguna manera à entrar en el Puerto inmediato; y en caso que algun Navio se haya visto precisado à entrar en dicho Puerto, arrojado de alguna tempestad, por miedo de Enemigos, ò Piratas, ò por qualquier — otra contingencia, con tal, que confite no ir de ninguna manera destinado à Puerto enemigo con mercaderías prohibidas, vulgarmente llamadas de Contra bando, (lo que no se sospecharà de ninguna manera, à no haver claros indicios) el expreffado Navio podrà salir del Puerto quando le pareciere, y — hacerse à la vela, sin el menor impedimento: con la condicion de que no se llegue à la carga que llevare, ni se descargue, ò faque alguna parte de — ella para venderla en el Puerto; pero luego que haya echado la Ancla, y dado fondo en el Puerto; para impedir la molestia de qualquiera visita, ò — examen, bastarà que tenga en su poder, y manifieste Letras de Salvoconducto, ò otros Instrumentos de su rumbo, y Libros de Sotabordo; y exhibidos, y manifestados estos à los Oficiales de aquel de los dos Reyes, que fuere necessario, los referidos Navios podrán continuar su viage sin otra molestia.

XIV.

Que los Navios de Guerra pertenecientes à qualquiera de los sobredichos Reyes, ò à los Armadores particulares Subditos de uno, ò otro, que encontraren Navios Mercantiles, que esten en alguna Rada, ò que naveguen — en alta Mar, se pondrán distantes à tiro de cañon, sin acercarse mas; (pa-

ra evitar con esta distancia todo despojo, ò violencia) pero si les pareciere, podrán embiar al Navio Mercantil una Lancha con solo dos, ò tres - hombres, à los quales luego que hayan entrado en él, mostrarà las Letras - de Salvoconducto el Maestre, ò Patron, y le manifestarà tambien el Paffaporte, concebido segun el Formulario, que se pondrà al pie de este Tratado; por donde no solo les constarà de las mercaderías de que estuviere car-gado el Navio, fino tambien del lugar del domicilio, y residencia en los Dominios de qualquiera de los dos Reyes, y asimismo del nombre del Maestre, ò Patron, y tambien de el del Navio, para que por estos dos Inftrumen-tos se pueda conocer quales son las mercaderías que conduce el Navio, es à saber, si son prohibidas, ò de contrabando, quien es el Maestre, ò Patron, y ultimamente que Navio; (a) y las referidas Letras, y Paffaporte tendrán tanta mayor authoridad, quanto asì por parte del Rey de España, como por ~~la del~~ de la Gran Bretaña, se corroboraràn, si fuere neceffario, con algunas Certificaciones con contrafeñas, en virtud de las quales sean mas au-thenticas, y de ninguna manera puedan confundirse las verdaderas con las - falsas.

-
- (a) Este Artículo parece que acredita, que asì como encontrado en alta Mar el Navio Mercantil con generos de contrabando, puede ser detenido, y - fondeado; con mayor razon lo podrà ser, si por el rumbo, ò derrotero - se sospechare que navega à Puerto de Enemigos.

XV.

Si se transportaren algunas mercaderías, ó bienes prohibidos de los Reynos, Dominios, ó Territorios de uno, ó otro Rey por los Pueblos, ó Subditos de qualquiera de los dos; en este caso solo se confiscarán los bienes prohibidos, y no otros algunos, ni el referido delincuente incurrirá en otra pena fuera de esta, (a) salvo que faque, ó extrayga de los Reynos, y Dominios del Rey de la Gran Bretaña dinero, ó moneda propia de la Provincia, lana, ó tierra para abatanar; y de los Dominios del Rey de España oro, ó plata labrada, ó por labrar; en cuyos casos las Leyes de los Respectivos Países tendrán su fuerza, y debido efecto.

XVI.

Que los Pueblos, y Subditos de ambos Reyes podrán entrar, y arribar à los Puertos de uno, y otro, subfistir, y permanecer en ellos, y partir con la misma libertad, no solo con sus Navios Mercantiles, y otras Embarcaciones, que sirven para el tráfico, ó comercio, sino tambien con Navios de Guerra armados, afsi para refistir, como para ofender al Enemigo. Afsi mismo podrán reparar sus Navios, arrojados por la violencia de alguna tempestad, y proveerse de viveres, segun lo necesitaren, con tal, que el numero de los Navios, que entraren voluntariamente, no dé lugar à justa sospecha; los quales, si fueren de Guerra, no excederán el numero de ocho, ni -

fe detendrán en las Habras, ò cerca de los Puertos mas tiempo del que pareciere neceffario para reparar los Navios, ò proveerfe de baftimentos; y mucho menos darán motivo à que fe perturbe, ò rompa el comercio, ni embazarán el arribo, y entrada de les Navios de qualquier otra Nacion, que eftè en Paz con el Rey, del Puerto en donde fe hallaren: pero fi por algun accidente fe acercàre à algun Puerto mayor numero de Navios de Guerra del que fe acoftumbra, no les ferà licito entrar en èl, ò mantenerfe en la Rada, fin haver obtenido antes licencia del mifmo Rey, ò del Gobernador del Puerto, falvo que fean precifados à ello por tempeftad, ò para evitar qualquiera peligro imminente del Mar; en cuyo cafo fe expondrán al Gobernador del Puerto, ò al primer Magiftrado del Lugar, quanto antes fue re poffible, las caufas del dicho arribo; y no fubfiftirán alli mas tiempo del que pareciere jufto, y conveniente al referido Gobernador, ò Magiftrado; ni intentarán contra los demás que fe hallaren en dicho Puerto alguna hoftilidad, que pueda fer en perjuicio de qualquiera de los dichos Reyes.

- (a) En efta claufula ve ven corregidos el Articulo XXII. del Tratado ajustado con efta mifma Corona en 1604., y el XX. del de 1630., en que fe previno, que fe podria proceder contra los Extractores de cofas prohibidas, fegun las Leyes del Reyno; pues efto folo permite la confifcacion de los bienes prohibidos.

XVII.

Que ninguno de los sobredichos Confederados detendrá, impedirá, ò — arreftarà, en virtud del Edicto, ò Mandamiento general, ò especial, ò por otra qualquier causa, ni obligará à que éntre en su servicio à ningun Mercante, Maestre de Navio, Piloto, ò Marinero, ni à sus Navios, mercaderías, paños, ò otros bienes pertenecientes à la otra Parte, mientras se mantuvieren en los Puertos, ò Aguas de uno, ò otro, sin haverlo comunicado antes con el otro Rey, ò à lo menos con las personas que en ello tengan interés, y obtenido su consentimiento, y aprobacion: lo que se ha de entender de modo, que por este Artículo de ninguna manera se frusten, ò interrumpen los remedios ordinarios del Derecho, convenientes para administrar la justicia conforme à equidad.

XVIII.

Que los Mercantes, y Subditos de ambos Reyes, y sus Factores, y Criados, como tambien sus Navios, Maestres, y Marineros, asì à la ida, como à la vuelta, tanto por el Mar, y otras Aguas, como en las Playas, y Puertos de uno, y otro, podrán traer, y servirse de todo genero de armas ofensivas, y defensivas, sin la menor obligacion de registrarlas; como tambien llevaràn, si les pareciere, armas portátiles por tierra, y usarán de ellas para su defensa particular, segun la costumbre del lugar.

XIX.

Que ningun Capitan, Oficial, ò Marinero de qualquier Navio pertene-
 ciente à los Subditos, ò Pueblos de uno, ò otro de las Confederados, mien-
 tras eftuvieren en los Reynos, Dominios, Tierras, Provincias, ò Lugares de
 la obediencia de qualquiera de ellos, pondrà pleyto, ò caufará daño, ò per-
 juicio à los Navios, Capitanes, Oficiales, ò Marineros, que fupiere fer de
 fu proprio Pais, ò Subditos de fu Rey, con motivo del fueldo, ò falario, ò
 con qualquier otro pretexto que fea; ni podrán ponerfe, ni fer admitidos -
 al fervicio, ò baxo la proteccion del Rey de Efpaña, ò del de la Gran Bre-
 taña, ò baxo fus Vanderas, con ningun motivo; fino que en cafo que fe ori-
 gine alguna diferencia entre los Mercantes, y Maestres de Navios, ò entre
 eftos, y los de la Tripulacion, fe remitirá fu decifion al Conful de la Na-
 cion; (a) pero de tal fuerte, que à aquel que no quifiere fometerfe à la -
 Sentencia Arbitraria del Conful, por no parecerle jufta, le ferà licito —
 apelar à los Jueces Ordinarios de fu patria, ò domicilio.

(a) En el exemplar, que de efte Tratado fe imprimió en Idioma Caftellano,
 y dió al público en efta Corte en el mifmo año de 1667., fe ve añadido:
 A folo el Conful de la Nacion, cuya particula folo no fe halla en el -
 original Latino; y es digna de notarfe, pues no conteniendofe en el Ar-
 ticulo la particula à folo el Conful, es libre à las Partes bufcar en
 otro Arbitro, ò Juez la compoficion, y determinacion de lo que fe dif-
 putáre; y efto eftà mas expreffamente eftipulado en el Artículo XI. —
 del Tratado hecho entre las mifmas dos Coronas en 17. de Diciembre de
 1665., que queda puefto por principio de efta mifma Parte.

XX.

Para que los Mercantes, y Negociantes fujetos à la obediencia del - Rey de la Gran Bretaña (vencidos todos obftàculos) puedan bolver nuevamente à Brabante, Flandes, y demàs Provincias del País Baxo de la obediencia del Rey Catholico, con el fin de reftaurar el antiguo comercio; ha parecido conveniente, que todas las Leyes, Edictos, Eftatutos, Ordenanzas, y Actos, por los quales fe prohibe llevar à Flandes, y à las demàs Provincias fobredichas los paños, y otros generos de lana, fabricados por Ingleses, - de qualquier efpecie que fean, teñidos, ò por teñir, abatanados, ò no, -- fean de aqui en adelante revocados, rotos, y anulados; y afsimifmo fe extinguirà toda carga, tributo, portazgo, impoficion, ò gafo impuefto, y -- cargado fobre los paños, y demàs generos de lana, fabricados en Inglaterra con permiffo, y confentimiento, ò de otra manera, excepto folamente los antiguos portazgos impueftos, y continuados hafta aqui fobre cada pieza de - paño, ò fardo, y afsi à proporcion fobre los demàs generos de lana, fabricados en Inglaterra, fegun los antiguos Tratados, y Convenciones entre -- los Reyes de Inglaterra, y los Duques de Borgoña, y los Gobernadores de los Paifes Baxos; y que de aqui en adelante no fe impongan, ò exijan con qualquier pretexto ningunas cargas, ò derechos de efta naturaleza de los paños, ò generos de lana fobredichos; como affimifmo, que los Mercantes, y Negociantes, que trafican en las referidas Provincias, ò en fus Ciudades, y Vici

llas, y fus Criados, Factores, y Commiffarios, ufen, y gocen de aquí en — adelante de todos los Privilegios, Exempciones, Immunidades, y Beneficios de que gozaban antiguamente en qualquier tiempo, fegun la fuerza, y tenor de los Tratados anteriormente ajuftados entre los Reyes de la Gran Bretaña, y los Duques de Borgoña, y los Gobernadores de los Paifes Baxos. Y fe ha acordado, que fe nombraràn Diputados por el Serenifsimo Rey de la Gran Bretaña, los quales concurriràn con el Marquès de Caftel-Rodrigo, ò con el que entonces fuere Gobernador de las dichas Provincias, ò con otros Miniftros, que tengan fuficiente Poder para ello, y (pefada la utilidad de ambas Naciones) trataràn, y refolveràn amigablemente fobre todo lo arriba dicho: y afsimifmo los Mercantes Ingleses gozaràn de mas amplios Privilegios, Immunidades, y Exempciones acomodadas al prefente eftado de las cosas, fegun pareciere convenir fobre efte negocio por un Tratado efpecial, que fe hará fobre èl, para la conveniencia, y utilidad de los Negociantes, y para la feguridad del mifmo comercio.

XXI.

Que los Subditos, y Moradores de los Reynos, y Dominios, que refpectivamente eftàn baxo la obediencia de los Serenifsimos Reyes de Efpaña, y de la Gran Bretaña, podràn navegar, y comerciar con rota feguridad, y libertad en todos los Reynos, Eftados, y Paifes, que eftàn en Paz, Amiftad,

ò Neutralidad con uno, ò otro.

XXII.

Los Navios, ò Subditos de uno, ò otro de los dichos Reyes no interrumpiràn de ningun modo, con algun impedimento, ò inquietud, esta libertad, por razon de las hostilidades que al presente hay, ò pudiere haver de aqui en adelante entre ambos, y fus referidos Reynos, Provincias, y Estados, ò alguno de aquellos que eftuvieren en Amistad, ò Neutralidad con qualquiera de ellos.

XXIII.

Y en cafo que fuceda aprehenderfe en los dichos Navios las mercaderías prohibidas, vulgarmente llamadas de Contrabando, que fe declaran mas abaxo, por los medios fobredichos; fe faceràn del Navio, y feràn denunciadas, y confifcadas ante los Jueces del Almirantazgo, ò otros competentes; pero de fuerte, que el mismo Navio, y las demás mercaderías libres, y permitidas, que en èl fe encontraren, de ningun modo feràn embargadas, ò confifcadas por esta caufa.

XXIV.

Demàs de esto, para evitar, en quanto fea pofsible, las diferencias

que puedan ocurrir, tocante à las mercaderías, que se han de reputar por vedadas, y prohibidas, ò de contrabando; se ha declarado, y convenido, que baxo este nombre se comprehenden todas las armas de fuego, como Cañones, Bombardas, Morteros, Petardos, Bombas, Granadas, Salchichas, Circulos empegados, Cureñas, Horquillas, Vandoleras, Polvora, Mechas, Salpiedra, y Balas; como tambien baxo el mismo nombre de mercaderías prohibidas se comprehende todo genero de otras armas, como Picas, Espadas, Morriones, Cascos, Corazas, Alabardas, Uabalinas, y otras semejantes: y asimismo se prohibe baxo este nombre el transporte de Soldados, y Cavallos, y de fus Jaeces, Pistolas, Fundas, Talarines, y otros aderezos pertenecientes al uso de la Guerra.

XXV.

Asimismo para evitar todo motivo de disputa, y contestacion, se ha asentado, que baxo este nombre de mercaderías vedadas, y de contrabando no serán comprendidos el Centeno, Trigo, ò otros granos, y legumbres, — Sal, Vino, Aceyte, ni los demás que sirven al alimento, y sustento de la — vida; fino que quedarán libres, como todas las demás mercaderías no declaradas en el Artículo antecedente; cuyo transporte será permitido aun à los lugares de Enemigos, (a) excepto à las Ciudades, y Plazas sitiadas, y bloqueadas.

XXVI.

Tambien fe ha convenido, y concludido, que todo lo que fe halláre — cargado por los Subditos, y Habitantes de los Reynos, y Dominios de qualquiera de los dichos Reyes de Eſpaña, y Inglaterra, en navios enemigos de uno, ò otro, aunque no fean mercaderías prohibidas, fe confifcarà, con todas las demás cofas que fe hallaren en dichos Navios, fin excepcion, ò reſerva.

XXVII.

El Conful, que de aqui en adelante ha de refidir en los Dominios del Rey de Eſpaña, para el auxilio, y proteccion de los Subditos del Rey de la Gran Bretaña, ferà nombrado por eſte miſmo Rey; y tendrà, y exercerà la miſma poteſtad, y authoridad para el cumplimiento de fu empleo, que ha tenido hafta aqui qualquier otro Conful en los Dominios del Rey Catholico; y reciprocamente los Confules de Eſpaña, refidentes en Inglaterra, gozaràn de la miſma authoridad, que hafta aqui fe ha permitido en dicho Reyno à los Confules de qualquier otra Nacion.

-
- (a) En los Articulos VIII. X. y XVIII. del Tratado hecho con Inglaterra en 1604.; y en el IV. y XVI. del de 1630. con la miſma Nacion, fe eſtipulo lo contrario, como fe podrà ver; cuyos Articulos no fe hallan expreſſamente derogado en el actual Tratado. El Articulo III. 3. del Tratado de los Pyrineos eſtà conforme en eſta parte con los citados de Inglaterra, aunque fe reconoce alguna implicacion entre èl, y elXIII. — del miſmo Tratado.

XXVIII.

Y para que los Derechos, y Leyes del Comercio, que se han establecido en tiempo de Paz en favor de los Comerciantes, no queden infructuosas, lo qual feria muy de temer, si se causasse alguna molestia por caso de — conciencia à los Subditos del Rey de la Gran Bretaña, que van, vuelven, y residen en los Dominios, y Provincias del Rey de España, por razon de sus comercios, ò otros negocios; para que estos se hagan sin la menor diferencia, y los Negociantes puedan estar con seguridad, y tranquilidad, el mencionado Rey de España cuidará, y atenderá con mucha vigilancia à que no se cause ninguna molestia, ò inquietud, contra las Leyes del Comercio, asì — por Mar, como por Tierra, à los Subditos del Rey de la Gran Bretaña; ni se haga el menor gravamen à alguno de ellos, ò se mueva alguna disputa con el motivo, ò pretexto de conciencia; con tal, que estos no den en publico algun escandalo manifestado, ò cometan alguna ofensa: Y el sobredicho Rey de la Gran Bretaña, por las mismas razones cuidará, y atenderá por su parte con la misma vigilancia à que no se cause ninguna molestia, ni inquietud à los Subditos del Rey de España, con el motivo, y pretexto de Religion, contra las Leyes del Comercio; con tal, que estos no den en público algun escandalo manifestado, ò cometan alguna ofensa.

XXIX.

Que los Subditos, Pueblos, y Habitantes de ambos Reyes no sean obligados de ninguna manera à vender, ò dar fus mercaderías por monedas de oro, ò cobre dentro de los Dominios, Territorios, Provincias, ò Colonias de uno, ò otro; ni à cambiarlas por monedas, ni otras qualesquiera cosas contra su voluntad; ni à tomar el precio de lo vendido en otra especie, - que aquella que se huviere estipulado, y convenido, no obstante qualquiera ley, ò costumbre, que pueda oponerse al tenor de este Artículo.

XXX.

Los Mercantes de ambas Naciones, sus Factores, Criados, Familias, - Comisarios, ò otros Agentes, como asimismo los Maestros de Navios, Pilotos, y Marineros, vivirán, y residirán libre, y seguramente en los Reynos, y Territorios de ambos Reyes, y en sus Puertos, y Rios: y asimismo los - Pueblos, y Subditos de uno de ellos usarán con toda libertad, y seguridad, dentro de qualesquiera Dominios, y Territorios del otro, de las Casas, y - Alojamientos oportunos para su habitacion, y de las Lonjas, y Almacenes - convenientes para guardar sus bienes, y mercaderías; y las disfrutarán, - sin ningun impedimento, por todo el tiempo que las huvieren alquilado, ò - concertado.

XXXI.

Los Habitantes, y Subditos de ambos Confederados podrán fervirfe, y valerfe en todos los Lugares de la obediencia de qualquiera de los dichos Reyes, de los Abogados, Procuradores, Efcribanos, Agentes, Miniftros, y - Letrados, que les pareciere mas à propofito; à los quales tambien podrán cometer fus Caufas, con confentimiento de los Jueces Ordinarios, quando - fea neceffario, y los requiriere la Parte litigante; y no fe les obligará à manifeftar à ningunas perfonas fus Regiftros, ò Libros de Quentas, ni à darles copia de ellos, fino es que puedan fervir de prueba para evitar, ò terminar algun pleyto; ni tampoco ferán detenidos de ninguna manera baxo el nombre de embargo, ò fequeftro, ni tomados violentamente à los propietarios con algun otro pretextto: y tambien ferá licito, y enteramente permitido à los Subditos de ambas Partes efcribir, y poner los Libros de Quentas, y Correpondencia, que tuvieren, en lengua Efpañola, Inglesa, Flamenuca, ò otra qualquiera que les pareciere conveniente: de manera, que no fe les haga ninguna moleftia, ò pefquifa: entendiendofe tambien concedido por ambas Partes todo lo que en otro tiempo fe ha concedido à qualquier otra Nacion, tocante à los Libros de Quentas, Comercio, y Correpondencia.

XXXII.

Que si se embargaren, ò sequestraren algunos bienes de qualquiera persona, por authoridad de qualquier Tribunal, dentro de los Reynos, y Dominios de uno de los Confederados; aquellos bienes, deudas, ò creditos de que estuvieren en posesion los Reos, si se reconociere pertenecer de buena fé à los Pueblos, ò Subditos del otro, de ninguna manera se podrán confiscar por authoridad de los referidos Tribunales; fino que se deberán restituir in specie, si aún estuvieren en ser, à su legitimo propietario; pero si no, se pagará su justo valor dentro de tres meses despues de este sequestro, segun el pacto, y contrato que se huviere hecho entre las Partes.

XXXIII.

Que los caudales, y bienes de los Subditos, de qualquiera de los dos Reyes, que murieren en las Tierras, Países, y Dominios de uno, ò otro, se guardarán intactos para los Herederos, ò demás Successores por Testamento, ò ab intestato, quedando salvo à cada uno su derecho privado, y accion.

XXXIV.

Que los bienes, y caudales de los Subditos del Rey de la Gran Bretaña, que murieren ab intestato en los Dominios del Rey de España, se inven-

tariaràn por el Conful, ò otro Miniftro público del Rey de la Gran Bretaña, juntamente con fus Papeles, Efcrituras, Libros de Quentas, y qualesquiera documentos; y fe pondrán en manos de dos, ò tres Mercantes, que fe rán nombrados; por el dicho Conful, ò Miniftro, para entregarlos à los Proprietarios, Herederos, ò Acreedores; y ni el Confejo de Cruzada, ni algun otro Tribunal conocerà de los bienes de qualquier difunto, (a) ni fe mezclarà en ellos: lo qual tambien fe practicarà en Inglaterra reciprocamente en igual cafo con los Subditos del Rey de Efpaña.

XXXV.

Se concederà, y darà un lugar conveniente, y comodo para enterrar los cuerpos de los Subditos del Rey de la Gran Bretaña, que murieren dentro de los Dominios del Rey de Efpaña.

-
- (a) Se debe entender muerto ab inteftado, figuiendo el efpiritu, y mente - de efte mifmo Articulo; porque en los que murieren con teftamento pertenece à la Jufticia Ordinaria del diftrito el conocimiento: y de los que mueren en la Mar parece debe tocar el Inventario al Juez Militar - del Puerto, con preferencia al Ordinario, fi en el no hay Juez Confervador de la Nacion, fobre que fe han expedido varias Ordenes Reales, - pues el Gobernador Militar en tal cafo es Confervador General en las - Causas de Mar, y Tierra de los Eftrangeros tranfeuntes.

XXXVI.

Si fe originare en adelante alguna diferencia entre los dichos Confe-
derados, (lo que Dios no quiera) por la qual haya peligro de interrumpirfe
el mutuo comercio, y reciproca correspondencia; fe darà avifo de ello con
tiempo à ambas Partes feis mefes antes de comenzar las hostilidades, para
que cada uno pueda retirar reciprocamente fus mercaderías, y bienes, fin -
que caufe entre tanto ninguna molestia, ò gravamen, por medio de detencion,
ò embargo de fus bienes, ò personas.

XXXVII.

Todos los bienes, y derechos ocultos, o fequestrados, muebles, raí-
ces, rentas, acciones, deudas, creditos, y otros femejantes, que con pre-
vio conocimiento de causa, y con la condenacion debida, segun las Leyes co-
munes, no huvieren entrado en el Real Erario al tiempo de la conclusion de
este Tratado, quedaràn en la libre, y plena administracion de los Proprie-
tarios, fus Herederos, ò los que tuvieren fu derecho; y resolveràn, y dif-
pondràn de ellos como les pareciere, juntamente con todos fus frutos, ren-
tas, reditos, y emolumentos: y à los que huvieren ocultado eftos bienes, y
derechos, como à fus Herederos, no fe les podrà caufar con este motivo mo-
lestia alguna por el Fisco; fino antes bien los Proprietarios, ò fus Here-
deros, ò los que tuvieren fu derecho, tendràn acciones; y files pareciere,

las intentaràn fobre los bienes, y demàs cosas fobredichas con la misma - libertad que fobre las cosas que les pertenecen por derecho, propiedad, y dominio.

XXXVIII.

Se ha convenido, y concluido, que los Pueblos, y Subditos de uno, y otro de los dichos Confederados, tendràn, y gozaràn en sus respectivas — Tierras, Mares, Puertos, Radas, Playas, Territorios, y Lugares qualesquiera, los mismos privilegios, seguridades, libertades, è inmunidades (así por lo que toca à sus personas, como à sus negocios) que se han concedido, è en adelante se concedieren, por qualquiera de los mencionados Reyes, al Rey Christianissimo, à los Estados Generales de las Provincias Unidas del País Baxo, à las Ciudades Hanfeaticas, è à qualquier otro Reyno, è Estado, por sus Tratados, è por Cédulas Reales, con todas las circunstancias, y - cláusulas de estas concefsiones, que hacen en su beneficio, y favor, de un modo, y forma tan amplia, y eficaz, para hacer que furta todo su efecto el Contrato ajustado, y ratificado, como si estuvieffen puestas, è insertas à la letra en el dicho Tratado.

XXXIX.

En caso que se mueva alguna diferencia fobre los dichos Artículos to

cantes al comercio, por los Oficiales del Almirantazgo, à otras qualesquiera personas, residentes en uno, ò otro Reynos; despues que se haya dado la queja por la parte agraviada à su Real Magestad, ò à lo menos à algun Consejo Real, el Rey ante quien se presentare cuidará de que sin dilacion dilacion se satisfaga el perjuicio, y de que todo furta se execucion, y debido efecto, como se ha acordado arriba: y si con el tiempo se descubrieren algunos fraudes, ò inconvenientes en orden al Comercio, y Navegacion, à — que no se haya proveído, y cautelado bastante por estos Articulos, se podrán dar las demás providencias, que de ambas partes parecieren convenientes; pero quedando el presente Tratado en su fuerza, y vigor (a).

XL.

Demás de esto se ha acordado, y concluido, que los dichos Serenísimos Reyes de España, y de la Gran Bretaña guardarán fídelmente, y de buena fé todos, y cada uno de los capitulos convenidos, y asentados en el — presente Tratado; y harán que sus Subditos, y Habitantes los observen, y guarden; y no contravendrán à ellos directa, ò indirectamente, ni consentirán que se contravenga por sus Subditos, y Habitantes; y que ratificarán,—

-
- (a) Los exceßos, que se cometian por los Subditos de ambas Coronas en las Indias Occidentales, obligaron al nuevo Tratado que se hizo en 18. de Julio de 1670., por el qual se regló la navegacion à las Respectivas Colonias, como se verá en su lugar.

y confirmaràn todas, y cada una de las cosas arriba acordadas por Letras Patentes de ambas Partes, ordenadas, y hechas en suficiente, válida, y eficaz forma, y las entregaràn reciprocamente, ò haràn entregar de buena fé, y realmente dentro de quatro meses, contados desde la fecha de las presentes; y cuidaràn de que la presente Paz, y Amistad se publique (quanto antes sea posible) en los lugares, y forma que se acostumbra.

En fé de todas, y cada una de las quales cosas, Nos los sobredichos Comisarios de los Serenísimos Rey, y Reyna de España, y el Embaxador Extraordinario del Sereníssimo Rey de la Gran Bretaña, hemos firmado el presente Tratado de nuestra mano, y corroborado con nuestros Sellos reciprocos, en Madrid, à veinte y tres de Mayo, año del Señor de mil seiscientos sesenta y siete.

TRATADO DE PAZ, ajustado entre los Reyes de España y Portugal por mediación de Carlos II, Rey de la Gran Bretaña, en el qual fue reconocido D. Alonso VI, por legitimo Soberano de la Corona de Portugal, hecho en Lisboa en el Convento de San Eloy a 13 de febrero de 1668; ratificado por el dicho Rey D. Alonso en la misma ciudad a 3 de marzo; y por el - Príncipe D. Pedro a 15 de Diciembre del mismo año. (Secretaría del Consejo de Estado del cargo de Don Agustín Pablo de Hordeñana, original en Portugués). (10)

Don Pedro, por la gracia de Dios, Príncipe de Portugal, y de los Algarves de la parte de acá, y de la de allá del Mar de Africa, de Guinea, y de la Conquista, Navegación, y Comercio de Ethiopia, Arabia, Persia, y la India, &c., como Succesor, Gobernador, y Regente de estos Reynos, y Señorios: Hago saber a todos los que esta mi Carta Patente de Aprobación, Ratificación, y Confirmación vieren, que en esta Ciudad de Lisboa, en el Convento de San Eloy, a 13, días del mes de Febrero de este presente año de 1668,

(10) ABREU Y BERTODANO, J.A.: Op. cit. (Reinado del Sr. Rey D. Carlos II. Parte I. De 1.665 a 1.673. Año MDCCLII, pág. 292 a 316.

fe ajustó, concluyó, y firmó el Tratado de Paz perpetua entre estos dichos Reynos, y los de Castilla, cuya copia de verbo ad verbum es la siguiente.

DOM ALONSO, por la gracia de Dios, Rey de Portugal, y de los Algarves de la parte de acá, y de la de allá del Mar de Africa, Señor de Guinea, y de la Conquista, Navegación, y Comercio de Ethiopia, Arabia, Persia, y la India, &c.: Hago saber a todos los que esta mi Carta Patente de Aprobación Ratificación, y Confirmación vieren, que en esta Ciudad de Liaboa, en el Convento de San Eloy, a los 13. días del mes de Febrero de este presente año - de 1668, fe ajustó, concluyó, y asentó un Tratado de Paz entre mi, mis Sucessores, y mis Reynos, y el muy Alto, y Serenissimo Principe Don Carlos II, Rey Catholico de las Españas, sus Sucessores y sus Reynos, por don Gaspar - de Haro Guzmán y Aragón, Marqués de Carpio, Comissario nombrado para este - efecto, en virtud de Poder, y Procuración de la muy Alta, y Serenissima Reyna Doña María Ana de Austria, como Tutora de la Real Persona del Rey Catholico, fu Hijo, y Gobernadora de todos sus Reynos, y Señorios, de una parte: y de - otra por los infraescriptos Comissarios nombrados por mí, interviniendo tam- bién, como Mediador, y Fiador del muy Alto y Serenissimo Principe Carlos II, rey de la Gran Bretaña, mi buen Hermano, el Conde de Sandwich, fu Embaxador Extraordinario, con Poder, que para el dicho efecto ha presentado, de cuyo Tratado, reducido à trece articulos, y de los Poderes, el tenor es como se - figura.

ARTICULOS DE PAZ ENTRE el muy Atoo, y Serenifísimo Principe don Carlos Segundo, Rey Catholico, fus Suceffores, y fus Reynos, y el muy Alto, y Serenifísimo Principe Don Alonfo Sexto, Rey de Portugal, sus Succesores, y fus Reynos, por mediación del muy Alto, y Serenifísimo Principe Carlos Segundo, Rey de la Gran Bretaña, Hermano del uno, y Aliado muy antiguo de ambos, ajuftados por Don Gaspar de Haro Guzmán y Aragón, Marqués de Carpio, como Plenipotenciario de fu Mageftad Catholica; y Don Nuño Alvarez Pereyra, Duque de Cadaval: Don Basco Luis de Gama, Marqués de Iñiza: Don Juan de Silva, Marqués de Govéa: Don Antonio Luis de Menefes, Marqués de Marialba: Henrique de Sousa Tabares de Silva, Conde de Miranla; y Pedro Vieyra de Silva, como Plenipotenciarios de fu Mageftad de Portugal; y Eduardo, Conde Sandwich, Plenipotenciario de fu Mageftad de la Gran Bretaña, Mediador y Fiador de dicha Paz, en virtud de los Poderes figuientes,

Don Carlos Segundo, por la gracia de Dios Rey de las Hespanhas de las dos Sicilias, de Hierufalen, de las Indias &c. Archiduque de Aftria, Duque de Borgoña, de Milán, Conde de Afpurg, y de Tiro, &c. Y la Reyna Doña Maria Anna de Auftria fu Madre, Tutora, y Curadora de fu Real Persona, y Gobernadora de todos fus Reynos, y Senorios, Por quanto el Serenifísimo Principe Carlos II, Rey de la Gran Bretaña movido del Zelo del bien, y reposo común de la Chriftiandad, e defeo de que fe terminen las diferencias entre esta Corona, y la de Portugal, ha interpuesto en diferentes tiempos repeti-

das instancias ofreciendo su mediación, y amigables officios al fin referido, y últimamente Embiado a esta Corte a Eduardo Conde de Sandwich, y Visconde de Hinchingbroock Baron Montagu de San Neote Vize Almirante de Inglaterra, Maestro de la Gran guardaropa, y de los Confejos Secretos, y Caudalero de la orden de la Jarretera por su Embaxador Extraordinario para tratar algun ajustamiento de reciproca satisfacción entre ambas Coronas con los poderes neffecarios para ello. Y hauiendome infinuado el dicho Conde de Sandwich, que podría ser el mejor medio para conseguir este intento el de una buena Paz con el Ermano de su Rey Don Alfonso Sexto Rey de Portugal se han superado las dificultades, que han ocurrido, y finalmente por lo mucho que deseo complacer al dicho Serenissimo Rey de la Gran Bretanha, se han ajustado los trece Capítulos de Paz, que van puestos en un proyecto aparte para cuya mas pronta Execucion se ha ofrecido el dicho Conde de Sandwich a ir en persona a Lisboa a participar al dicho D. Alfonso Sexto Rey de Portugal todo lo dispuesto, y tratado por su mediación, y a procurar en nombre de su Rey, que se llegue a la conclusión, y porque para que esto se configa con la brevedad, que se requiere es neccessario, que haya en aquella Ciudad persona de authoridad, calidad, prudencia, y zelo, que tenga poder mio para ajustar en forma deuida los dichos Artículos de Paz. Por tanto concurriendo (como concurren) las dichas, y otras buenas partes, y calidades, en voz Don Gaspar de Haro, Guzman, y Aragón Márquez del Carpio, Duque de Montoro, Conde Duque de Olivares, Conde de Morente, Marques de Heliche Señor del Estado

de Sorbas, y de la Villa de Lueches, Alcayde perpetuo de los Alcazares de la Ciudad de Cordoba, y Cavalleriço, mayor de fus reales Cavalleriças, Alcuacul mayor perpetuo de la mifma Ciudad, y de la Santa Inquifiçión de ella Alcayde perpetuo de los reales Alcazares y Atarazanas de Sevilla, gran Canciller de las Indias, Comendador mayor de la orden de Alcántara, Gentilhombre de la Cámara, Montero Mayor, y Alcayde de los reales Sitios del Pardo, Balfain, y Zarzuela, os doy, y conçedo en virtud de la prezente tan cumplido, y vaftante poder, comiſſion, y facultad como es neceſſario, y fe requiere para que por el Sereniſſimo Rey my muy charo y muy amado hijo, y en fu - real nombre, y en el mio podais tratar, ajuſtar, capitular, y concluir con el Deputado Commiſſario, o los Deputados O Commiſſarios del fobredicho Don Alphonſo Sexto Rey de Portugal en virtud del poder que prezentaren del dicho rey Luſitano una Paſ Perpetua, conforme al tenor de dichos capitulos, ou en la forma, que más pareçiere, y obligar al Rey mi hijo, y á mi al cumplimiento de lo que aſſi ajuſtareis, y firmaries, y declaro , y doy mi palabra real, que todo lo que fuere hecho, tratado, y concertado por vos el dicho Marquez del Carpio defde aora para entonçes lo Confiento, y apruebo, y lo tendré - por firme, y valedero, y paſſaré por ello como por cofa hecha en nombre del Rey mi hijo, y mio, y por my voluntad, y authoridad, y lo cumpliré entera, y pontualmente, y aſſimismo ratificaré, y aprobaré en eſpecial, y conbeniente forma con todas las fuerças, y demás requifitos neceſſarios, que en ſemejantos caſos fe acostumbra todo lo que, en razon deſto Concluyereis, aſen-

tareis y firmareis, para que todo ello sea firme, válido y estable, con preci
fa condición, que se aya de feneçer y firmar dicho Tratado de Paz dentro de -
quarenta días desde el de la fecha de este poder, de manera que si este plazo
se pasare fin quedar concluydo, y firmado dicho Tratado doy desde agora para en
tonces por nullo este poder y todas las clausulas que en él se contienen, y -
quanto en su virtud se hubiere propuesto, o comenzado a tratar; en cuya decla
ración que mandado despachar la presente firmada de mi mano, fallada con el -
fallo secreto, y refrendada de mi infrescrito Secretario de Estado. Dada en -
Madrid a finco de Enero de mil seiscientos y seffenta y ocho años. YO LA REY-
NA. Don Pedro Fernández del Campo y Angulo.

EN EL NOMBRE DE LA S^{ma}. TRINIDAD, PADRE, HIJO, Y ESPIRITU SANTO, TRES PERSONAS DISTINTAS, Y UN SOLO DIOS VERDADERO.

I

Primeramente declaran los Señores Reyes Catholico, y de Portugal, que - por el prefente Tratado hacen, y establecen en fus nombres, de fus Coronas, y de fus Vaffallos, una Paz perpetua, buena, firme, e inviolable, que comenzará desde el día de la publicación de este Tratado, (que se hará en el termino de quinze días), cessando desde luego todos los actos de hostilidad, de qualquier manera que sean, entre fus Coronas, por Tierra y por Mar, en todos fus Reynos, Señoríos, y Vaffallos, de qualquier calidad, y condición que sean, sin excepción de Lugares, ni de personas. Y se declara, que se dará el termino de quince días para ratificar el Tratado, y el de otros quinze para publicarle.

II

Y respecto de que la buena fé con que se hace este Tratado de Paz perpetua, no permite que se piense en Guerra para lo futuro, ni en querer cada una de las Partes hallarse para este caso con mejor partidos se ha acordado, que se restituyan al Rey Catholico las Plazas que durante la guerra le ocuparon - las Armas de Portugal, y à Portugal las que durante la guerra le ocuparon las Armas del Rey Catholico, con todos fus términos, en la forma, y manera, y con

los límites, y fronteras que tenían antes de la Guerra; y a todos los bienes - raíces se reftituirán a fus antiguos poffedores, o à fus herederos, pagando las mejoras útiles, y neceffarias, fin que por efto se puedan pedir los daños que - se atribuyen a la Guerra; y quedará en las Plazas la Artillería que tenían quan- do se ocuparon. Y los Moradores, que no quifieren quedarfe, podrán llevar todos fus muebles, y recogerán los frutos de lo que huvieren sembrado al tiempo de la publicacion de la Paz: y efta reftitucion de las Plazas se hará en el termino de dos mefes, que comenzarán desde el día de fu publicacion; pero declaran, que en efta reftitución de las Plazas no entra la Ciudad de Ceuta, que ha de quedar en poder del Rey Catholico, por las razones que para ello se han tenido presen- tes; y se declara, que de las haciendas, que se poffeyeren con otro título que no sea el de la guerra, podran disponer de ellas fus dueños libremente.

III

Los Vaffallos, y Moradores de las Tierras poffeidas por uno, y otro Rey, tendrán toda buena correspondencia, y amistad, fin mostrar sentimiento de las - ofensas, y daños paffados; y podrán comunicar, entrar, y frequentar los límites de uno, y otro; y usar, y exercer el Comercio con toda seguridad, por Tierra, y por Mar, en la forma, y manera que se usaba en tiempo del Rey Don Sebastian.

IV

Los dichos Vaffallos, y Moradores de una, y otra parte tendrán reciproca

mente la misma seguridad, libertades, y privilegios, que están concedidos à los Subditos del Serenissimo Rey de la Gran Bretaña por el Tratado de 23, de Mayo de 1667, y otro del año de 1630., en lo que no se deroga por este Tratado, de la misma forma, y manera que fi todos aquellos Articulos, en razón del Comercio, à inmunidades tocantes à él, fueren aquí expreßamente declarados, sin excepción de Artículo alguno, mudando folamente el nombre en favor de Portugal. Y de estos mismos privilegios usará la Nacion Portuguesa en los Reynos de S. M. Catholica, segun y como lo practicaba en tiempo del Rey Don Sebastian.

V

Y por quanto es neceßario mucho tiempo para que se pueda publicar este tratado en las partes mas distantes de los Señorios de uno, y otro Rey, à fin de terminar entre ellos todos los actos de hostilidad; se ha acordado, que esta Paz comenzará en las dichas partes un año despues de la publicacion que de ella se hiciere en España; pero si el aviso de la Paz pudiere llegar antes à aquellos lugares, cessarán desde entonces todos los actos de hostilidad; y si pasado dicho año, se cometiere por qualquiera de las Partes algun acto de hostilidad, se satisfará todo el daño que de él se originare.

VI

Todos los Prisioneros de Guerra, o en odio de ella, de qualquier Nación que sean, serán puestos en libertad, sin dilación, ni embarazo alguno, afsi de

una, como de otra parte, fin excepcion de persona alguna, ni de razón, ò pre-
 texto que se quiera alegar en contrario; y esta libertad comenzará desde el -
 día de la publicación en adelante.

VII

Y para que esta Paz se a mas bien observada, prometen respetivamente los
 dichos Reyes Catholico, y de Portugal dar libre, y seguro paffo, por Mar, o -
 rios navegables, contra la invasión de qualesquiera Pyratas, ú otros Enemigos
 que procurarán aprefar, y castigar con rigor, dando toda libertad al Comercio.

VIII

Todas las privaciones de herencias, y disposiciones hechas en odio de la
 guerra, se declaran por nulas, y no como fucidas; y los dos Reyes conceden
 perdon a unos, y à otros Vassallos en virtud de este Tratado, debiendose resti-
 tuir las haciendas que estuvieren en el Fisco, y Corona, à las Personas a quie-
 nes, si no huviera intervenido esta Guerra, havian de tocar, ò pertenecer, pa-
 ra poder gozar de ellas libremente: pero los frutos, y renditos de los dichos -
 bienes hasta el día de la publicación de la Paz, quedarán à los que los huvie-
 ren poseido durante la Guerra. Y porque se pueden ofrecer sobre esto algunas
 demandas, que conviene abreviar para el sosiego de la República, será obliga-
 do cada uno de los Pretendientes à intentar las demandas dentro de un año, y se
 determinarán breve, y sumariamente dentro de otro.

IX

Y fi contra lo difpueſto en eſte Tratado, algunos Habitantes, fin orden, ni mandato de fus reſpetivos Reyes, hicieron algun daño, fe reparará, y caſtigará el daño que hicieron, fiendo aprehendidos los delinquentes; pero no ferá lícito por eſta cauſa tomar las armas, ni romper la Paz; y en caſo de no haſerle juſticia, fe podrán dar Letras de Marca o Repreſſalias contra los delinquentes en la forma que fe acóſtumbra.

X

La Corona de Portugal, por los intereſſes que reciproca, é inſeparablemente tiene con la Inglaterra, podrá entrar en qualquier Liga, o Ligas ofenſiva, y defenſiva, que las dichas Coronas de Inglaterra, y Catholica hicieron - entre ſi, juntamente con qualeſquiera Confederados fuyos: y las condiciones, y obligaciones reciprocas, que en tal caſo fe ajuſtaron, o en adelante fe añadieren, fe mantendrán, y guardarán inviolablemente en virtud de eſte Tratado, en la miſma forma, y manſera que fi eſtuvieran particularmente expreſſadas en él, y nombrados ya los Aliados.

XI

Prometen los fobredichos Señores Reyes Catholico, y de Portugal no hacer nada contra, ni en perjuicio de eſya Paz, ni confentir que fe haga directa o indirectamente; y fi acaſo fe hiciere, repararlo fin ninguna dilación. Y á

la obsevancia de todo lo arriba contenido se obligen para con el Señor Rey de la Gran Bretaña, como Mediador, y Fiador de esta Paz; y para firmeza de todo renuncian a todas las Leyes, Costumbres, o qualquiera cosa que haga en contrario.

XII

Esta Paz será publicada en todas las partes donde convenga, lo más breve que se pueda, después de la ratificación de estos Artículos por los Señores Reyes Catholico, y de Portugal, y de haver sido entregados reciprocamente en la forma acostumbrada.

XIII

Finalmente los presentes Artículos, y Paz en ellos contenida, serán también ratificados, y aprobados por el Serenísimo Rey de la Gran Bretaña, como Mediador, y fiador de ella por cada una de las Partes, dentro de quatro meses después de su ratificación.

Todas las queales cosas contenidas en estos Artículos, fueron acordadas, establecidas, y concluidas por Nos Don Gaspar de Haro Guzman y Aragón, Marques del Carpio: Eduardo, Conde de Sandwich; Don Nuño Alvarez Pereyra, Duque de Cadaval; Don Bafco Luis de Gama, marqués de Niza: Don Juan de Silva, Marqués de Govêa; Don Antonio Luis de Menefes, Marqués de Marialba: Henrique de Soufa Tabares de Silva, Conde de Miranda; y Pedro Vieyra de Silva, Comiffarios Diputados para este efecto, en virtud de las Plenipotencias, que quedan trasladadas,

en nombre de sus Magestades Catholica, de la Gran Bretaña, y Portugal; en cuya fe, firmeza, y testimonio de verdad, hemos hecho el presente Tratado, firmado de nuestras manos, y sellado con el Sello de nuestras Armas. En Lisboa en el Convento de San Eloy a 13 del mes de febrero de 1668. Don Gaspar de Haro y Guzmán, el Conde de Sandwich, El Duque Marqués de Ferreyra, El Marqués de Niza, - Almirante de la India, El marqués de Govêa, Mayordomo Mayor, El Marqués de Marialba, El Conde de Miranda, Pedro Vieyra de Silva.

Y habiendo Yo visto el dicho Tratado de Paz perpetua, despues de considerado, y examinado con toda atención, he tenido por conveniente aceptarlo, - aprobarlo, ratificarlo, y confirmarlo, como con efecto le acepto, apruebo, ratifico, y confirmo con esta mi Carta Patente: prometiendo en mi nombre, en el de mis Succesores, y Reynos, observar, guardar, y cumplir, y hacer observar, guardar, y cumplir inviolablemente todas las cosas contenidas en él, fin permitir, que de ningún modo, o por ningún acontecimiento que haya, o pueda haver, se contradiga, o vaya contra él directa, o indirectamente; y si se huviere hecho, o se hiciere de qualquier manera cosa en contrario, mandarla reparar, sin dificultad, ni dilación alguna; castigar, y mandar castigar a los que fueren - cómplices en ello con todo rigor; y prometo, y me obligo a observar todo lo referido, baxo la fe, y palabra de Rey, en mi nombre, en el de mis Succesores, y Reynos, y baxo la hypoteca, y obligación de todos sus bienes, y rentas generales, y especiales, presentes, y futuras. Y en testimonio, y firmaza de todo,

he mandado despachar la presente Carta, firmada por mí, y sellada con el Sello grande de mis Armas. Dada en la Ciudad de Lisboa, a 3 de Marzo, Luis Texeira de Carvalho la hizo el año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu Christo de - 1668. Pedro Vieyra de Silva lo hizo escribir. EL PRINCIPE.

Y por quanto el dicho Tratado de Paz ha sido aprobado, ratificado, y - confirmado por los sobredichos Reyes de Portugal, y Castilla, y por el de la Gran Bretaña, como mediador, y Fiador de él, y solemnemente publicado, así en esta Ciudad, como en la Villa de Madrid, y lo mismo se ha hecho en todo el Reyno, y sus Conquistas: y deseando Yo, que se continúe, y perpetúe en la misma manera por mí, y mis Successores en la Corona de estos Reynos; he tenido por bien aceptarlo, aprobarlo, ratificarlo, y confirmarlo, y por esta mi Carta Patente lo acepto, apruebo, ratifico, y confirmo; y prometo en mi nombre, y en el de mis Successores, y Reynos, observar, guardar, y hacer observar, guardar, y cumplir inviolablemente todas las cosas contenidas en él, sin permitir, que de ningún modo, ó por qualquier acontecimiento que haya, o pueda haver, se contradiga, o vaya contra él directa, ó indirectamente; y si se huviere hecho, o hiciere en alguna manera cosa en contrario, mandarla reparar, sin dificultad, o dilación alguna; castigar, y mandar castigar a los que fuesen cómplices en esto con todo rigor; y prometo, y me obligo a guardar todo lo referido, baxo la fe, y palabra Real, en mi nombre, en el de mis Successores, y baxo la hypoteca, y obligación de todos los bienes, y rentas generales, y especialmente, presentes, y futuras de ellos. Y en fé, y firmeza de todo he mandado otorgar la

presente Carta, firmada por mí, y sellada, con el Sello grande de mis Armas.
Dada en la Ciudad de Lisboa a 15 del mes de Diciembre. Arias Monteyro y Soufa
la hizo año del Nacimiento de Nuestro Señor Jefe Christo de 1668. Dice entre
 renglones en el Artículo XIII. y reconocidos. Pedro Sanchez Farfña lo hizo es
cribir. (a)

EL PRINCIPE.

-
- (a) Este Instrumento se contiene en doce hojas de papel de marquilla, las ocho
escritas, y las cuatro restantes en blanco, todas cosidas con un cordón de
feda verde, y plata; y en la primera hoja, que está en blanco, se ve el cí
culo del Sello Real.

Las Ratificaciones de este Tratado, hechas por S.M. Catholica en 23. de Fe
brero de 1668, y 20 del mismo mes de 1669, y la que respectivamente hizo el
Rey de Inglaterra, como Mediador, y Garante de él, en primero de Mayo de
1668, se hallarán en esta misma Parte en sus lugares correspondientes.

RATIFICACION DEL TRATADO DE PAZ, ajustado entre los Reyes de ES
PAÑA, y PORTUGAL en 13. de Febrero de 1.668.: hecha por S.M. CA
THOLICA en Madrid 23 del mismo mes, y año. (Secretaria del Con-
 fejo De Estado del cargo de Don Agustin Pablo de Hordenana, ori-
 ginal en Castellano).

Don Carlos Segundo por la Gracia de Dios Rey de las Españas, de las dos
 Sicilias, de Hierufalen, de las Indias &c. Archique de Austria, Duque de Bor-
 goña, de Milán, Conde de Abfpurg, y de Tirol &c. Y la Reyna doña Mariana de
 Auftria fu Madre, Tutora y Curadora de fu Real Persona, y Gouvernadora de todos
 fus Reynos, y Señoríos. Por quanto Don Gaspar de Haro, Guzman y Aragón Marqués
 del Carpio, en virtud del Poder que le concedí, ha ajustado concluido y firma-
 do en treze deste presente mes, un Tratado de Paz, con los Ministros Comiffa-
 rios Infraferiptos. Diputados para este efecto por el muy Alto, y Serenifísimo
 Príncipe, Don Alonso Sexto, Rey de Portugal. &c. Interviniendo también, como
 medianero y fiador en nombre del muy Alto, y Serenifísimo Príncipe Carlos Se-
 gundo Rey de la Gran Bretaña &c. El Conde de Sanduich fu Embaxador Extraordi-
 nario con poder que para ello tuvo fuyo. El qual dicho tratado va aqui infer-
 to, reducido a treze Articulos, cuyo tenor traducido de lengua Portuguesa en
 Castellana, es como fe figue.

(Omitese fu infercion, por fer el mismo que queda puesto en
 esta Parte)

Por tanto hauiendo visto, confiderado, y examinado en mi Consejo maduramente dicho tratado, Yo por mí, y por el muy Alto, y Serenifsimo Principe Don Carlos Segundo, Rey de las Españas Occ. Nueftro muy Charo, y muy amado Hijo, hemos Refuelto aprobarle, y Ratificarle, como en General, y cada punto en particular, le aprouamos, y Ratifficamos por nos, y nueftros herederos, y fubceffores, como afsimismo por los Veffallos, fubditos, y hauitantes de todos nuestros Reynos, Paifes, y Señoríos, afsi en Europa, como fuera de ella, fin exceptuar ninguno, Reciuendo el dicho Tratado, y todo lo que contiene, y cada punto de ello en particular en todas fus partes, por bueno, firme, y valedero, prometiendo en Fee, y Palabra Real, por nos, y nueftros Subceffores Reyes, Principes y Herederos, finceramente, y con buena Fee, Seguir, Obferuar, y cumplirle inviolable, y puntualmente fegun fu forma y tenor, y hacerle feguir, obfervar, y cumplir de la mifma manefa, como fi le huieramos tratado por nueftra -
propria perfona, fin hacer, ni permitir que en ninguna manera fe haga cofa en contrario, Directa, ni Indirectamente, en qualquier modo que fer pueda, y fi fe huviere hecho o fe hiciere contrabencion en alguna manera, hacerla Reparar, fin dificultad, ni dilacion alguna, Caftigar, y mandar Caftigar a los que hubieren contrabenido, con todo Rigor, fin gracia, ni perdon, Obligando para el efecto de lo fufodicho totos, y cada uno de nueftros Reynos, Paifes, y Señorios, como también todos nueftros otros Vienes, prefentes, y Venideros, fin -
exceptuar nada, y para la firmeza de efta obligacón, Renunciamos todas las -
Leyes, y Coftumbres, y todas otras cofas contrarias a ello. En Fee, de lo qual

mandamos despachar la presente, firmada de mi Mano, Sellada con nuestro Sello Secreto, y Refrendada del Infracripto Secretario de Estado. Dada en Madrid a veinte y tres de Hebrero de mil y seiscientos y sesenta y ocho. YO LA REYNA.

D. Pedro Fernández del Campo, y Angulo. A(a)

- (a) El original de esta Ratificación en que se halla también inserto el Tratado de Paz, que en ella se expresa, con las Plenipotencias de sus Magestades Católica, y Portuguesa en Castellano, y la de su Magestad Británica en Latín, consta de ocho hojas grandes de pergamino, cosidas con hilo blanco, y cubiertas con otras dos hojas de pergamino grueso del mismo tamaño.

CAPITULOS ajustados por la Justicia, Ayuntamiento, y Vecindario de la Villa de SANTANDER, con diferentes Comerciantes de la Nacion Inglesa, avecindados en la Villa de VILBAO, fobre mudar fu trato, comercio, y refidencia à SANTANDER, ofreciendoles para este efecto varias ventajas, y utilidades: en la dicha Villa de Santander à 12. de Septiembre de 1700. (Copia autentica, exiftente en la Secretaria del Confejo de Eftado del cargo de D. Agustín Pablo de Hordeñana, en Castellano). (11)

En la M.N. y mas leal Villa de Santander, à doce dias del mes de Septiembre de mil y feteientos, los Señores Justicia, y Regimiento de ella, efpecial, y feñaladamente el Capitan Don Manuel Antonio de Santian, Cavallero del Orden de Santiago, que como Regidor mas antiguo exerce de Alcalde Ordinario; el Capitan Don Juan Antonio de Toraya Veteterra; el Capitan Don Fernando de Herrera Carreto de Cavallos; Don Juan Manuel de Cevallos Guzmàn, y el Alferez Don Antonio de las Cabadas, Regidores; y el Señor Don Antonio de Campuzano Riva Herrera, Cavallero de la Orden de Santiago, Conde de Manfilla, Señor de la Villa de Zerazo, Syndico Procurador General, congregados en la Sala Capitular del Ayuntamiento de esta Villa, haviendo an-

(11) ABREU Y BERTODANO, J.A.Op. cit. (Reinado del Sr. Rey D. Carlos II. — Parte III. de 1683 a 1 de noviembre de 1700). Año MDCCLII. pág. 683 a 693.

tes conferido con los /Cavalleros, y demás perfonas que fueron llamadas, - y convocadas à Concejo abierto, à quienes fe noticiò, y hizo saber todos - los Capítulos, y Tratadòs que aqui iràn infertos, de la una parte; y de la otra los Señores Don Rodrigo Slingar, Don Daniel Dambrin, Don Guillermo Go to clin, Don Andrès Brughton, Don Henrique Vite, Don Roberto Earle, Don Gil berto Gronies, Don Abraham Lordoll, Comerciantes de la Nacion Inglesa, di xeron, que por quanto han venido à esta Villa à conferir, y tratar con di chos Señores Justicia, y Regimiento, y demás Vecinos, fobre affentar en — ella fu morada, y Comercio que tienen en la Villa de Vilbao, del Señorío - de Vizcaya, afsi por parte de los Otorrogantes, como de los que al presente refiden en la dicha Villa de Vilbao, y en adelante quifieren venir à esta, en conformidad de la orden que para ello han traído, por quienes preftaron voz, y caucion en forma de que eftaràn, y paffaràn por todo lo que eſtá — tratado, y ajustado con dichos Señores Justicia, y Regimiento, y conferido en esta razon con todos los Señores del Concejo abierto, para mayor fervi cio de Dios, de S.M. Catholica, del Rey nueſtro Señor, y del bien, y utili dad de fus Reynos, y de los Vecinos, y Naturales de esta Villa, y fu jurif diccion; y poniendolo en execucion, fe affienta, y capitula por ambas par tes. lo figuiente, (a)

- (a) Esta Capitulacion, hecha fin licencia, ni aprobacion de S.M., fue manda da guardar por el Artículo II. del Tratado ajustado entre las Coronas - de España, è Inglaterra en Madrid à 14. de Diciembre de 1715. para la - declaracion, y explicacion de algunos Articulos del Tratado concluido - en Utrech entre las mismas Coronas, fiendo Plenipotenciario de S.M. Ca tholica el Marquès de Belmar, y del Rey de la Gran Bretaña Jorge Bubb, como fe verá en el lugar que le corresponde.

I.

Primeramente habiendo entendido esta Villa, fu Ayuntamiento, Concejo, y Vecinos en Concejo general, y abierto, por infinuacion que les han hecho los dichos Señores Comerciantes de la Nacion Inglesa, que fi en esta Villa se les atiende, y hace buen paffo, y conveniencia, paffaràn à ella de afuiento, con fus personas, casas, y familias, mudando fu comercio, tratos, y correspondencias de la Villa de Vilbao, donde al presente las tienen; y entendiendo esta dicha Villa, que esto puede redundar, y redundar en beneficio del público de estos Reynos, y del mayor fervicio de S.M. (Dios le - - guarde) y en algun alivio, y utilidad de fus vecinos, y moradores; por lo tanto, en quanto està de fu parte, les concede, y franquea, que hayan de gozar, y gocen de las mismas conveniencias, emolumentos, è inmunidades que gozan, y tienen los hijos, vecinos, y naturales de ella, fin que hayan de tener diferencia, carga, ni gravamen, ni otra pensión mas en lo que dependiere de fu Gobierno Político.

II.

Item les concede, y franquea à los que fueren, y se bolvieren Catholicos Romanos, que estuvieren en ella con fus mugeres, casa, y familia cinco años cumplidos, el que puedan tener entrada, gozar, y obtener los oficios honoríficos de ella, y voz, y voto activo, y pasivo, en conformidad

de la costumbre, y Carta de Eleccion que tiene para poder distribuir dichos officios entre sus vecinos.

III.

Afsimifmo à los que no fueren Catholicos Romanos les hará el mismo -
paffo, y tratamiento que les hacen en la Ciudad de Sevilla, Cadiz, Malaga,
y Puertos de Andalucia, conformandose con algunos de los capítulos asentados en las Paces, y conciertos que hay entre esta Corona, y la de Inglaterra, y con la misma inteligencia, y declaraciones que en ellos están puestas en esta razon; y lo mismo se entienda en otros capítulos puestos en favor de las Villas, y Ciudades Hanfeaticas, y Provincias Unidas, los quales hayan de entenderse como los de fuero referidos.

IV.

Afsimifmo hallandose capaz, y entendida esta Villa de todos los Capítulos, Acuerdos, y Tratados de Paces entre las dichas dos Coronas, y demás referidas, y de los demás privilegios, exenciones, y libertades, que están concedidas à la dicha Nacion Inglesa, y à sus Comerciantes por los Señores Reyes passados, y por el muy Catholico nuestro Señor, y Monarcha Don Carlos II. por diferentes Cédulas, Privilegios, y Despachos, que se han exhibido, los que afsi son, y constan por Testimonios, y otros Instrumentos; desde luego confiente esta Villa, que les sean guardados, cumplidos, y ob-

fervados en ella à los que vinieren à vivir de afsiento, y comerciaren en fu diftrito, termino, y jurifdiccion, fin alteracion alguna, todos en general, los quales dãn por`infertos en efte Capitulo; y no fe confentirà, que les fean vulnerados, ni quebrantados en manera alguna, y antes los afsiftirà, y ayudará à lo defender, hafta que tenga cumplido efecto, y efectiva - obfervancia, como convenga para fu quietud, y libre comercio.

V.

Que en los cafos que ocurran tocantes à dicho Comercio, polizas de - Navios, feguros, y otras cofas, fe haya de efcàr à lo que determinàre el - Juez Confervador que han de tener, informado por dos perfonas, ò mas, que por el dicho Comercio extrangero feràn nombradas para efte efecto, eftando fe en todo à la verdad fabida, y fè que fe debe guardar.

VI.

Afsimifmo fe les confiente, que en conformidad de los dichos fus Privilegios, les dè, y feñale S.M. un Juez Confervador Privativo à fu elec-cion para fus Caufas, Pleytos, y negocios que ocurrieren, fegun, y como le tienen los Comerciantes de la Ciudad de Sevilla, y otros Puertos de aquella Cofta, y con las declaraciones que fe contienen en las dichas fus Cedulas, y Mercedes hechas à los dichos Comerciantes.

VII.

Afsimifmo fi (lo que Dios no quiera, ni permita) fobreviniere en algun tiempo rompimiento de Guerra entre las dichas Coronas; éfta Villa, en quanto pudiere, y permitiere la fé, y lealtad que debe à fu Rey, y Señor natural, affiftirá à los dichos Comerciantes, y les hará todo el paffo, y tratamiento que le fuere permitido, afsi en dicha Villa, y fu jurifdiccion, como en las representaciones que fe ofrefcan hacer à S.M., y fus Miniftros, para que los traten con la mayor equidad, y benignidad, protegiendo fus cofas, y negocios en quanto le fea dado, y permitido, y por los medios que le parezcan mas proporcionados en femejante ocurrencia; y en todo cafo fe - - guardaràn los Capítulos de Pacos, que fobre efto difponen, dandofeles el - termino de feis mefes, que les eftà feñalado, para el retiro de fus hacienudas, porfonas, y familias.

VIII.

Afsimifmo por les hacer todo el buen paffo, y favor à los dichos Señores comerciantes, y à los de fu Nacion, y otros que fe agregaren al Comercio de efta Villa, les concede, y franquica, que queden fabricar cafas - proprias en ella, en conformidad de la facultad que les eftà concedida por Leyes de eftos Reynos; y la Jufticia, y Ayuntamiento les dará, y feñalarà fitios, y folariegas en que las puedan fabricar en fu termino, Corrales, y

Huertas los neceffarios, que es à lo que fe extiende fu facultad: y tambien les concede, que las puedan comprar fabricadas, y que puedan vivir en ellas, ò en Cafas de Poffadas, ò arrendadas, fin que fean obligados à vivir con Vecinos, ni à foportar cargas de alojamiento, ni guardas, ni otras, fean las que fueren; y que pdràn fervirfe para fu afsiftencia de Criados, y Criadas, en la mifma forma que les es permitido, y lo ufan los Comerciantes Ingleses en las Ciudades de Sevilla, Cadiz, y demàs de Andalucia.

IX.

Tambien les concede, que todas las mercaderias que aportaren, y llegaren al Puerto, y jurisdiccion de efta Villa por cuenta de dichos Señores Comerciantes, encaminadas, ò confignadas à qualquiera de ellos, ò de extraños de eftos Reynos, las puedan defcargar de bordo à bordo, como les pareciere, en efto Puerto, fin pagar por ello ningunos derechos de los que toca percibir, y cobrar à efta Villa por fus legitimos Proprios, ni por otros que fean de fu cargo, y cuenta por encabezamiento; y afsimifmo puedan alonjar las dichas mercaderias, y generos, y bolverlos à facar quando les conviniere, fin que por ello paguen los dichos derechos, ni otra contribucion de las que quedan referidas, ò extinguidas; y lo mifmo fe haya de entender, y entienda en las Embarcaciones que entraren en efto dicho Puerto con qualquiera generos de baftimentos, y otras mercaderias; y no teniendo oca—

fion, ò conveniencia de fu despacho, hayan de poder bolver à salir libremente con ellos.

X.

Y tambien fe les concede, y confiente à los dichos Señores Comerciantes, que puedan tener fus correspondencias, y encomiendas en todas las partes del Norte de eftos Reynos, y otros con ellos pacificados, y recibir los generos que les vinieren encaminados, y consignados, venderlos, y embarcarlos, y proveer de ellos à las Provincias de Caftilla, y otras partes del Reyno, como mas bien les eftuviere, desde efta Villa, fin limitacion, ni reftriccion alguna.

XI.

Y por quanto los dichos Señores Comerciantes fe han de mudar, y transferir de la Villa de Vilbao à efta de Santander, y fiendo aquella exempta, y libre de contribuciones, y tributos Reales, gozaban de efta conveniencia; por tanto, queriendo efta corresponder à efto punto en lo que le fuere pofible, y defeando atraer el Comercio para el mayor beneficio del público - de eftos Reynos, y mayor aumento que fe fequirà à la Real Hacienda, y fus haveres, practicandofe, y traginandofe por tierras que no fon exemptas, ni aforadas, desde el mifmo fitio de efta Villa, à todos los parages; por lo referido, y entendiendo efta dicha Villa, que hace en ello fervicio à S.M.,

les concede à dichos Señores Comerciantes, eſtipùla, y promete, que por -
el tiempo de los encabezamientos, que tiene hechos à fu cargo, y cuenta,-
por lo tocante à Alcavalas, Cientos, y Millones, no les cobrará de lo que
comerciaren, y trataren, vendieren, y permutaren, fino al reſpecto de uno
por ciento, y con las limitaciones, y advertencias que quedan, y irán re-
feridas en eſtos Capítulos, y Conciertos: y para poderles continuar eſta
mifma conveniencia, y para que movidos de ella mas bien, puedan venirſe à
eſta Villa, y mantener fu Comercio en ella, follicitará eſta Villa, que al
mifmo tiempo que trate de a probar eſtos Capítulos en el Conſejo, ſe le dè,
y conceda providencia, y forma que haya de tener en lo venidero en la con-
tribucion de las rentas, y tributos Reales, y que éſta ſea cierta, è inal-
terable; y configuiendolo, como lo eſpera del gran amor, y zelo con que -
ſiempre S.M. ha mirado à eſta Villa, y Puerto, y por las razones del mayor
beneficio, y aumento del público, y del Real ſervicio, y por otras razones
urgentes que hay, y repreſentará; en tal caſo, y de lograrlo (como no duda)
confervará, y ſe obliga à mantener, y confervar la fobredicha equidad à -
los dichos Señores Comerciantes, y que no les tirará, ni cobrará por la --
dicha razon, ni otra, mas cantidad, ni derechos, que el uno por ciento de
todo lo que trataren, y vendieren, quedando exceptuado, y reſguardado lo -
que entre ſi mifmos ſe vendieren, y permutaren los dichos Señores Comerciantes
tes, de lo qual no han de pagar derechos algunos, ni otra contribucion, por

haverse affi concertado en el fupuefto de lo que vâ advertido, y referido.

XII.

Y por mas beneficiar a los dichos Señores Comerciantes, tambien les permite, y concede efta Villa, que puedan facar los frutos de efta tierra, fin que por ellos, y aunque los compren para efto efecto, fe les puedan - llevar, ni cobrar derechos algunos à dichos Señores Comerciantes, porque - los del Proprio de Tierra los han de pagar los que los vendieren, y entra- ren en efta dicha Villa, y fu jurifdiccion, los quales folo pagaràn lo que es cofumbre, y fe puede, y fuele llevar por el derecho del Proprio.

XIII.

Item, que de los dichos frutos que defembarcaren los dichos Señores Comerciantes, y otros generos, folo hayan de pagar èl Proprio, que llaman de Mar, y por èl lo refpectivo à un real de vellon, que eftà capitulado fe haya de llevar por cada faca de lana, que importa feifcientos reales de - plata, y en vellon novecientos, fin que por efto fe les pueda llevar mas - que al dicho refpecto por razon de dicho Proprio de Mar.

XIV.

Afsimifmo es una de dichas condiciones, para evitar dudas, y otros - inconvenientes, que puedan embarazar el dicho Comercio, el que qualesquier

generos, y mercaderias, sean de la calidad que fueren, no hayan de adeudar al tiempo de la descarga, ni despues, derechos algunos de Diezmos, y Puertos fecos, aunque aqui en esta Villa, y su jurisdiccion se consuman, y vendan; fino solo aquellos que salieren de ella, y se llevaren a las Provincias de Castilla por las personas que los trajeren, o de cuya cuenta fueren, que deberan llevar su Albalá, y Guia, y adeudar, y pagar en las Aduanas de Puertos fecos, que estan destinadas en los pafos, y tranfitos que es notorio; y así se asienta, y capitula, por no haver fido uso, y costumbre, ni se dará lugar a que se contravenga; y se declara, que los generos, y mercaderias, que les vinieren, y fueren remitidas a dichos Señores Comerciantes de otras partes por Mar, los pueden, y han de poder bolver a embarcar a su libertad, y remitirlos a las partes que les pareciere sin pagar derechos algunos de diezmos, ni otros, porque en este caso no los deben.

XV.

Afsimifmo ofrece esta Villa, que los Mercaderes, que compraren mercaderias para llevar a las tierras de Asturias, Galicia, y otras partes por Mar, les dará permiso, y libertad para las llevar, sin que por esta razon se paguen derechos algunos por las personas que las compraren, por quedar satisfechos por los que venden, así derechos Reales, como el Proprio. Y -

porque dichos Señores Comerciantes han de traer partida confiderable de la nas de las partes que les conviniere, y otras las compraràn en esta Villa de personas que las traeràn para venderlas en trueque de generos, ò por - dinero; es condicion, que de unas, ni de otras no hayan de pagar, ni paga - ràn mas que un real de vellon por cada faca por razon del Proprio de esta Villa, incluyendose en este dicho real, quier fea de Tierra, quier fea el de Mar, porque por uno, ni por otro se ha de poder llevar mas, ni lo han de pagar, ni tampoco han de pagar, ni pagaràn otros derechos algunos por razon de Cientos, y Alcavalas, ni por otro motivo, si folo el dicho real - de vellon, que debe el Harriero, ò Traginante que conduxere dichas lanas, - por el Pie de Mulo que llaman; y para que logren mas conveniencias, y menos embarazo los dichos Señores Comerciantes, contribuirà esta Villa de su par - te con los oficios, y representaciones neceffarias, à fin de que S.M., y - los Arrendadores Generales den forma, y providencia como los demás derechos, y diezmos pertenecientes à dichas lanas, è impuestos sobre ellas, se adeu - den en esta Villa al tiempo de embarcarfe; y las mercaderías, y generos — que hayan de salir, y remitirse por dichos Señores Comerciantes desde esta Villa à qualesquiera Villas, y Lugares de Castilla, adeuden asimismo los dichos derechos, y diezmos en esta dicha Villa; y para entrambas cosas sub - miniftrarà de su parte la ayuda, y oficios que convenga à dicho Comercio - esta Villa.

XVI.

Afsimifmo afsienta, y capitula, que los dichos Señores Comerciantes por grueffo en fus Tiendas, y Lonjas puedan vender por mayor, ò menor, falvo en las cofas menudas de poca monta, como fon Cintas de embotar, Velduques, Cordones, Medias, ò cofas femejantes, que ha de fer por docenas, el Pefcado, y graffa por arrobas, los granos por fanegas, las telas por piezas, y no vareado, ni por libras; si folo han de poder vender por menudo las mercaderías de mucho valor, y precio, como fon Ambar, Almizcle, Algallia, y otras cofas femejantes, que podrán vender por onzas, y por menos, como mas les convenga.

XVII.

Ponefe por capitulo, y condicion, que los Pilotos de efta Villa, y Tierra han de entrar los Navios en el Puerto, y Ria de ella, que fueren de los dichos Señores Comerciantes, ò traxeren fus generos, y mercaderías, y folo fe les haya de pagar por la entrada de cada Navio de alto bordo un doblon de à dos efculos de oro, el un efculo de oro por la entrada, y el -- otro por la falida; y à los demás Mareantes, que entraren en las Chalupas para ayudar à remolcar, y entrar dichos Navios, fe les ha de pagar à razon de dos reales y medio de vellon à cada hombre: y fi por accidente de temporal, ò otro impedimento, no pudieren de una vez traer los dichos Navios al Surgidero feguero, y frontero al muelle, en tal cafo han de ayudar à amarrar,

y dexar feguro el Navio, hafta que fe paffe, y ferene el accidente, ò temporal, y despues han de bolver à traer los dichos Navios al Surgidero por otros dos reales y medio cada hombre de los que entraren; y fe entiende, - que para una Chalupa ordinaria no han de paffar de ocho hombres, reputando otros dos por la Chalupa, de fuerte, que Chalupa, y hombres han de llevar à veinte y cinco reales de vellon; y para que efto fe observe ha de diputar perfonas de cuidado, y fatisfaccion efta Villa, que lo hagan cumplir, fin caufar demora, ni daño, ni otro exceffo; y fi el Navio necefsitäre mas gente, y embarcaciones, fe les hayan de dâr à efta mifma taffa, y refpecto.

XVIII.

Item afsienta, y fale efta Villa à que dichos Señores Comerciantes - no pagaràn derechos algunos de Siffas, y Millones de los Vinos que entra-- ren en ella, y remitieren à otras partes, no los vendiendo, ni confumiendo aqui, porque eftos derechos no fe caufan fino al tiempo del confumo, ò à - la entrada de Reynos, ò Provincias exemptas.

XIX.

Item, que en conformidad de lo que queda arriba apuntado, y declarado, y eftando à cargo de efta Villa (como efpera) las dichas Rentas de Millones, y las demás, que en tal cafo, y defde luego capitûla, y afsienta, - que no les cobrarà à los dichos Señores Comerciantes, ni les cargarà dere-

chos algunos en los Vinos que les traxeren, ò remitiesen de regalo, ò de otras partes para el gafo, y confumo de fus cafas, y familias, y les confentirà la entrada de ellos libre.

XX.

Item es condicion, que los dichos Señores Comerciantes para el acarreo, y tranfporte de los generos, y mercaderías que huvieren de tranfportar, y traginar por fu cuenta, y de encomienda para entrarlos, y alonjarlos en fus cafas, fe puedan valer de perfonas las que les pareciere à fu arbitrio, y voluntad, fin que la dicha Villa, ni otro individuo alguno de ella fe lo pueda quarteear, ni ajustar, ni moderar precio fobre ello, fi no que lo han de poder hacer francamente con la conveniencia que pudieran.

XXI.

Y es afsiento, y capitulo afsimifmo, que la Alcavala, y Cientos, que quedan refumidos, y pactados en el uno por ciento, fe han de pagar en cada un año de todas las mercaderías que vendieren dichos Señores Comerciantes, expreffando fus precios, y la venta celebrada de parte à parte en efta Villa, quedando refervadas las remifsiones que no procedieren de venta; y el medio, y forma que ha de haver para la cobranza, ha de fer, que por parte de efta Villa fe hayan de nombrar, y nombren dos perfonas de toda fatisfaccion, diputados para que con otros dos que nombrará la dicha Nacion, y Greg

mio de los Señores Comerciantes, puedan liquidar, y liquiden à punto fixo lo que cada uno huviere vendido en cada un año, eftandofe à la declaracion, y còmputo que eftos hicieren debaxo de juramento, fin paffar à registro de los Libros, ni otras diligencias.

XXII.

Afsimifmo fe afsienta, y pacta, que todos los generos que entraren - en eſta Ria, y Puerto en qualeſquiera embarcaciones mayores, y menores, — queayan conſignados, y dirigidos à los dichos Señores Comerciantes, y - los que tranſportaren de bordo à bordo para remitirlos à otras partes, — fin hacer deſcarga en tierra; es viſto que no han de pagar derechos algu— nos de Proprios, ni otros por ellos, ni Alcavalas, ni Cientos en tiempo al— guño, fino fuere que los vendan en Tierra, ò Mar, del diſtrito de eſta Vi— lla; y en tal caſo ſolo pagaràn el dicho uno por ciento de Alcavala, y - - Cientos, y no mas.

XXIII.

Poneſe afsimifmo por afsiento, y condicion, que los Navios que entra— ren en eſte Puerto, ſean del buque, y porte que fueren, ſolo deban pagar, - y paguen por la viſita de cada uno, peſo y medio, eſcudo de plata, para el Juez, y Juſticia Ordinaria, y otro tanto à los Miniſtros de Inquificion, y medio eſcudo à los Caſtillos, y no otra coſa de lo que ſe haya introducido;

y que esto se entienda de los que no vinieren visitados en otro qualquier Puerto de España, porque niviendolo, solo deberán pagar el dicho derecho à los dichos Castillos; y que esta visita solo la hayan de pagar los Navios de cubierta, y no otros.

XXIV.

Afsienta y pone por pacto la dicha Villa, que del fierro que se introduxere, y entraren en este Puerto los dichos Señores Comerciantes, no han de pagar, ni pagarán derechos algunos, por estar en uso, y obfervancia el que no se paguen, mediante el Privilegio, y Cedula de S.M. ganada, y ex pedida à instancia de la dicha Nacion Inglesa en el año de mil seiscientos y noventa y dos, y poderlo embarcar en la misma forma.

Todas las quales dichas condiciones, capitulos, pactos, y conciertos, que van puestos, y expreffados, y los mismos que se han referido de Pacas, y Privilegios, se ofrece, y obliga esta Villa, por lo que le toca, y por los venideros, que se les cumplirán, y obfervarán à dichos Señores Comerciantes puntualmente, sin quiebra, ni mengua; y que configuiendo forma, y cantidad ciertas en sus cabezones permanente, no los llevará, ni tirará — otros maravedis, cargas, ni contribuciones de las que quedan sentadas, y — especificadas; y antes bien ofrece, afsienta, y pacta, que si con el tiempo halláre, que debe, y puede hacerles otras conveniencias, y buen paffo —

para mejor mantener, y confervar fu Comercio, fe las franquearà, y añadirà, y concederà, haviendofe con dichos Señores Comerciantes como con vecininos los mas neceffarios, è importantes para el beneficio, y aumento de esta Republica, protegiendo con fu authoridad fus perfonas, y haciendas en quanto pudiere; y le fuere dado, y con qualesquiera infinuaciones que tenga de parte de dichos Señores Comerciantes, cuyos efectos mas favorables remite à la experiencia, quedando fujeta à fer reconvenida fobre estos oficios, y buena correffpondencia que les guardarà en todo lo razonable: y los dichos Señores Comerciantes, y Diputados de la Nacion Inglesa, que prefentes estàn al otorgamiento de esta Escritura, y fus tratados, por sí, y — por los demás que le hallan en la Villa de Vilbao, y vinieren à esta de — Santander à vivir, tratar, y comerciar, por quienes tienen preftado voz, y caucion, y de nuevo preftan; fe obligan à estar, y paffar de fu parte por lo que va pactado, y que pagaràn, llegado el cafo, los dichos derechos que quedan expreffados, y limitados à esta Villa, y perfonas que en fu nombre los hayan de haver, y percibir; y ambas partes Señores Jufticia, y Regimiento, y Señores Comerciantes, para cumplir, y executar todo lo contenido en estos Tratados, obligaron los dichos Señores Jufticia, y Regimiento los Proprios, y Rentas de esta dicha Villa, y dichos Señores Comerciantes fus perfonas, y bienes, dieron poder cumplido à las Jufticias, y Jueces, que de fus caufas puedan, y deban conocer, renunciaron todas las leyes, fueros,

y derechos, de fu favor, con la general del Derecho en forma, y afsi lo -
 otorgaron ante mí el Efcribano, y teftigos en efta Villa de Santander di-
 cho dia, fiendo teftigos Juan Abad, Gregorio Ibañes, y Pedro de Villamar,
 Fieles, y Alguaciles de efta Villa; y los Señores Otorgantes, que yo el -
 Efcribano doy fé conozco, lo firmaron. Don Manuel Antonio de Santian. El
 Conde de Manfilla. Don Juan Antonio de Toraya Vereterra. Don Fernando de
 Herrera Carreto Cevallos. Don Juan Manuel de Cevallos Guzmán. Antonio de -
 las Cabadas. Rodrigo Slinger. Don Guillermo Gotoclin. Daniel Dambrin. Gil-
 berto Gronies. Andrés Brughton. Roberto Earle. Abraham Lordoll. Enrique --
 Vite. Ante mí. Rodrigo de Verdad.

Concuenda con fu original, que en mi poder, y Oficio queda, à que me
 remito; en cuya fé yo Juan Antonio de Somonte, Efcribano Real por S.M. (que
 la Divina guarde) del Numero, Ayuntamiento, Marina, Guerra, y Contrabando
 en efta Villa de Santander, y fu agregado, como fucceffor al Oficio, y Pa-
 peles criados por Rodrigo de Verdad, Efcribano que fue del mismo Numero, y
 en virtud de orden comunicada por el Señor Marquès de Uztariz, Secretario
 del Real Confejo de Guerra, al Señor Don Domingo Breton, Comendador de Al-
 mendralejo en la Orden de Santiago, Theniente Coronel de Infanteria Efpaño
 la, y Gobernador Politico, y Militar en las Villas de efta Cofta, por - -
 quien fue participada al Señor Don Ignacio Guerra de la Vega, que lo es de
 la Villa de Rio-Seco, Alcalde, y Jufticia Ordinaria en efta, de cuyo manda-

to fe ha facado, y en fè lo figno, y firmo en efta referida Villa de San—
tander à diez y ocho dias del mes de Agofto de 1744. en eftas quince fojas
con la en que và mi figno, primera del Sello tercero, y lo intermedio co—
mun. En teftimonio de verdad. Juan Antonio de Somonte.

LEY II..- Facultad de residir en estos Reinos los extranjeros católicos que tengan las calidades que se previenen; y ex pulsión de los que se hallaren sin ellas. (12)

D. FELIPE V EN MADRID POR BANDO DE 16 DE JUNIO DE 1.703.

Mando, que todos los Ingleses y Holandeses, que no fueren católicos, y aunque lo sean, si no tuvieran las calidades prevenidas en mi Real Decreto de 16 de Abril del año pasado de 1.701, á quienes por él se permite la residencia en estos Reynos de España, en que fui servido de resolver, que a los católicos Ingleses y Irlandeses, que hubiese diez años que asistían en este Reyno, y á los que se hallaban casados con Españolas, se les concedía el que pudiesen vivir en mis Reynos, comerciar y vander libremente, y tener bienes raíces y de cualquier género, sin que se les pudiese perturbar por accidente alguno en sus personas y haciendas; con declaración de que en ningún tiempo pudiesen gozar de otros privilegios que los de los naturales vasallos, reconociéndose que bie res tenían, que fuesen adquiridos los raíces por vía de compra legitima, y no traspaso ni otra cosa que diese lugar al dolo de que pudiesen en su cabeza sus haciendas los que no deben gozar de este privilegio; cuyo decreto por otra resolución a consulta de 6 de julio de dicho año de 1701 mandé, se extendiese a

(12) Los Códigos españoles concordados y anotados. Tomo 8º. Novísima Recopilación de las Leyes de España, Libro VI. Título XI, ley III. La Publicidad. Madrid, 1850. Pág. 255.

los católicos de la nación Holandesa, con expresión de que los de una y otra Nación, que fuesen católicos, no deben gozar de otros algunos privilegios expresados en los capítulos de paces con aquellas Naciones, reputándose en todo como mis vasallos, salgan de ellos en el término preciso de quarenta días; y los que conforme a dicho decreto y resoluciones pueden habitar y residir en ellos, no tengan correspondencia ni inteligencia con las Naciones y vasallos de las Coronas enemigas a la de España; y que si la tuvieren directa o indirectamente en mi deservicio y de mi Corona, sean severamente castigados en sus personas y bienes con las más rigurosas penas establecidas por Derecho, leyes y pragmáticas de estos Reynos; y que sobre ello los Alcaldes de Casa y Corte, Alcaldes Ordinarios, y demás Justicias de estos Reynos a quienes toca y pertenece la observancia y cumplimiento de ellos, celen con el mayor cuidado que se requiere en materia de tan grave importancia a la quietud pública y gobierno de estos Reynos: y asimismo, que los Ingleses y Holandeses, que estuvieren establecidos y residentes en estos Reynos de España de diez y seis años a esta parte, tengan obligación a presentarse dentro de tercero día a la publicación de este bando ante las Justicias de las ciudades, villas y lugares donde tuvieran sus casas y continua habitación y residencia y justificar ante ellos como testigos fidedignos y de mayor excepción, y atestación del Cura de la Parroquia en que residieren, de estar tenidos y reputados comunmente por verdaderos católicos, y profesar nuestra Religión y santa Fé Católica, y de otra manera, que sean excluidos y mandados salir de estos Reynos (Aut.4, tit.9, lib. 8.º)

Tratado de comercio celebrado entre España y la Gran Bretaña en Madrid, à 13 de Julio de 1713, como fundamento ò preliminar de los — que se concluyeron en el mismo año entre las dos coronas (13).

Memoria presentada al rey de España de parte de la reina de la Gran Bretaña por milard de Lexington sobre la dependencia del comercio.

Para la mas pronta y facil expedicion de los negocios del comercio entre los vasallos de su Majestad británica y los de su Majestad católica se deben ratificar los cuarenta artículos del tratado del año de 1667, — firmado por las dos coronas; pero habiendo entre ellos algunos que por de masiado oscuros es preciso darles la claridad necesaria, necesitarán de — una mayor estension, y aumentar otros para evitar todo género de disputas entre los negociantes, arrendadores, administradores y otros oficiales de las aduanas de su Majestad católica, teniendo por bien de aprobar los que se estendieren ó aumentaren en la forma siguiente.

Respuesta de parte del rey de España á la memoria de su Majestad — británica.

(13) CANTILLO, A. "TRATADOS, CONVENIOS Y DECLARACIONES DE PAZ Y DE COMERCIO", que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la casa de Borbón". Madrid, 1843, pág. 115 a 123.

Queriendo el rey de España ocurrir desde ahora y para lo venidero a evitar todo género de disputas y diferencias sobre la dependencia del comercio entre sus vasallos y los de la reina de la Gran Bretaña, y hacer — que cesen las vejaciones y motivos de quejas que pudieren tener los negociantes de las dos naciones, ha dado su Majestad católica sus poderes necesarios al marqués de Bedmar para conferir con milord Lexington, que se halla con los de la reina de la Gran Bretaña, para ejecutarlo sobre los artículos de la memoria que se ha presentado a su Majestad católica de parte — de su Majestad británica por el referido milord de Lexington, á fin que — despues de haberse maduramente examinado entre los dos los antiguos tratados, convengan en virtud de sus sobredichos poderes en todo lo que es necesario reglar para las dos naciones, á cuyo efecto estas notas ó respuestas que se pusieren por los dos referidos ministros al margen de cada uno de — los referidos artículos servirán de regla.

Proposición 1ª.

Que los vasallos de la reina de la Gran Bretaña que comerciaren en — los dominios del rey católico, no han de pagar mas derechos sobre las mercancías que introdujeran ó esportaren que los que pagan los naturales ó — otros extranjeros: y que cualquier baja ó gracia que se hiciere á cualquiera nacion, la hayan de gozar y gocen los vasallos de dicha reina en la misma — conformidad.

Contestación 1ª.

Concedido con la circunstancia de que de parte de su Majestad británica se observará y ejecutará la misma recíproca igualdad con los vasallos de su Majestad católica que concurrieren y comerciaren en los dominios de su Majestad británica.

Proposición 2ª.

Que aunque en el VI capítulo de los XI. de que se compone el tratado del año de 1667 se halla prevenido, que ha de haber aranceles en todas las aduanas, regla común por donde se venga en conocimiento de los derechos - que cada uno debe pagar, se ha experimentado sin embargo grande irregularidad en la cobranza de ellos en las aduanas de los dominios de España, pues en unas partes suben mas los precios de los referidos derechos que en - - otras; y para quitar este y otros inconvenientes, diferencias y cuestiones, y que sepan los vasallos de la reina á punto fijo lo que deban pagar, se - ha de formar nuevo arancel, arreglado en todo á lo que se pagaba en las -- aduanas del puerto de Santa María ó Cadiz en tiempo de Carlos II (que Dios haya), por ser puerto y escala del mayor comercio de dichos reinos; con cuya circunstancia se tendrá ciencia segura de lo que liquidamente se ha de pagar de cada especie de mercaderías; el cual arancel se ha de ejecutar -- con asistencia de los contadores de ellas por parte de su Majestad católi- ca, y de don Carlos Rusel, de nacion inglesa, comerciante en dicha ciudad

de Cadiz, y de otro comerciante, el que dicho don Carlos elijiere; y concluido que sea, se ha de mandar imprimir para que sirva de pauta y gobierno en todas las demas aduanas de estos reinos, asi en los puertos mojados y secos de ellos, como tambien en los reinos de Aragon, Valencia y Cataluña, sus anejos y dependientes, sin que se pueda en ninguna aduana de ellos cobrar ni pedir mas derechos con razon ni pretesto alguno que los que espresare dicho arancel; y constando haberlos pagado en una de las aduanas de estos reinos de España, podrán llevar las mismas mercaderias por mar o tierra; sin que por otra aduana, aunque sea mayor, se les pueda pedir nuevo derecho de ellas; cuya justificacion ha de llevar el comerciante por testimonio de haberlo pagado antes.

Contestación 2ª.

Se reunirán en un solo arancel todos los que habia al tiempo de la muerte del señor rey don Carlos II, que comprenderá los derechos que sedeberán pagar por la entrada en las aduanas; cuyos derechos de entrada no podrán exceder de los que estaban reglados y establecidos por los otros diferentes aranceles. El tarif ó arancel que se hiciere nuevamente en esta forma, se comunicará a los comerciantes de las naciones interesadas — que nombrase milord de Lexington y los ministros de las demás naciones; — después de lo cual se publicará en todos los puertos y entradas del reino, para que cada uno sepa en lo que consisten estos derechos. Y cuando los dede

rechos reglados por este nuevo arancel se hubieren pagado una vez á la entrada de las mercaderías en uno de los oficios de las aduanas, se podrán trasportar las mercaderías en toda la estension de lo interior de dichas aduanas, sin que los arrendadores de ellas puedan solicitar que estos mismos derechos de entrada se les paguen segunda vez de las mismas mercade—rias; con tal que los que estuvieren encargados de la conduccion de las —referidas mercaderías hayan de traer recibos ó testimonios de haber pagado los derechos en la aduana por donde hubieren entrado, porque en su defecto serán reputadas dichas mercaderías como introducidas con fraude.

Proposición 3ª.

Que por cuanto en el IX capítulo y tambien en el XXX se previene y —ordena que los vasallos de su Mageftad británica que residieren en los dominios de España hayan de gozar los privilegios concedidos á los que en—tonces vivian en la Andalucia, por cédulas reales de los reyes católicos —de 19 de marzo, 26 de junio, y 9 de noviembre de 1645; y que especificamente en el dicho capítulo XXX está prevenido que los vasallos de ambas Majestades puedan establecer en los dominios del otro sus casas de negocios y —almacenes libremente; cuyo capítulo no se ha observado en los puertos de Vizcaya y de Guipúzcoa sin embargo de que son parte de los dichos dominios, á causa de que sus gobernadores no han permitido á los vasallos de su Ma—jestad británica establecer en Bilbao y otros puertos de dicha provincia

sus casas de negocios en la misma forma que lo han ejecutado y establecido en todos los demas de estos reinos; de que se han originado graves daños á los comerciantes referidos, y para evitarlos y que en adelante no sucedan se ha de capitular y caPitula que cualquier vasallo de su Majestad británica pueda establecer libremente sus casas de negocios en los puertos y lugares de comercio de dicha provincia de Vizcaya y Guipúzcoa del mismo modo - que las han tenido y practicado en Andalucia, en atención y conforme á los dichos capítulos IX y XXX.

Contestación 3ª.

Su Majestad católica ha concedido este artículo; y repetirá su Ma—
jestad católica sus órdenes para que los vasallos de su majestad británica que residieren en los dominios de España puedan establecer sus casas de comercio libremente en los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa como los tenían en Andalucia, conformidad de los capítulos IX y XXX del tratado del año de —
1667 y de otras cédulas de los reyes católicos, mediante observarse lo mismo y lo recíproco con los vasallos de su Majestad católica que residieren y comerciaren en los dominios de su Majestad británica.

Proposición 4ª.

En el capítulo XII se ordena que habiendo los vasallos de su Majes—
tad británica introducido en cualquiera aduana de los dominios de su Majes

tad católica sus mercaderías de cualquier género que sean, y pagado en ellas los derechos usuales y corrientes, las puedan remitir por mar ó tierra — adonde quisieren libremente sin pagar nuevos derechos, ó bien sea a reinos estraños, ó á los puertos, ciudades, villas ó lugares de los de España; y por por haber demostrado la experiencia que no se guarda este capítulo, pues — sucede muchas veces que llevando los dichos vasallos sus mercaderías de — los puertos en donde pagan los derechos de almojarifazgos, diezmos, alcavalas, cientos y demás agregados y millones sobre los géneros que los deben pagar con testimonios de ello de los ministros de dichas aduanas á las ciudades, villas ó lugares, tierra, adentro, para su mejor despacho, y no obstante, los administradores de dichas rentas los obligan a pagar nuevamente estos derechos, aunque les conste por los despachos de las referidas aduanas haberlos ya satisfechos á su Majestad; y por ser cierto y conforme á — la razón que no se deben pagar estos derechos sino es una vez sobre cada — venta, se ha de delcarar y mandar que ningun administrador, arrendador ó — otro ministro en los puertos, ciudades, villas ó ligares de los dominios — de su Majestad católica pueda pedir ni cobrar nuevamente cosa alguna por — los dichos derechos de alcabala, cientos, ni millones, etc., constando haberlos pagado en las aduanas de los puertos de su desembarco, ó puertos segcos por donde transitarén para entrar en Castilla, sopena de dos mil ducados á el que contraviniere, aplicados para la cámara de su Majestad ó el

hospital general de Madrid, y que los escribanos de las aduanas y contrabando no puedan llevarles mas derechos por dar dichos despachos que quince reales de vellon.

Contestación 4ª.

Los vasallos de su Majestad británica no pagarán mas que una vez - los derechos de entrada que estuvieren, reglados por el nuevo arancel por las mercaderías en el oficio de la aduana por donde entraren, como está reglado y convenido por el 2º artículo de este tratado. En cuanto á los derechos de alcabalas, cientos y demas agregados se pagarán en la parte donde está reglado, como se ha practicado hasta ahora. Con advertencia de que habiendo pagado los mercaderes de lonja los dichos derechos de alcabalas, - cientos y demas agregados en las aduanas de los puertos de su desembarco, - ó puertos secos por donde transitaran sin haber vendido las mercaderías, - no los pagarán segunda vez por la primera venta en otra ciudad ó lugar donde las transportaren y las quisieren vender por la primera vez; con tal que aquellos que estuvieren encargados de la conduccion de estas mercaderías - hayan de traer recibos del oficio del arrendador ó administrador de dichos derechos de alcabalas, cientos y demas agregados de haber pagado los espresados derechos, y testimonio de no haber vendido dichas mercaderías, y que á falta de uno ó otro de ellos deberán pagarlos, porque los derechos de alcabalas, cientos y demas agregados se deben sobre cada venta y reventa. Y

por lo que toca á los tenderos y otros que venden por menor han de pagar - estos derechos de alcabalas, cientos y demas agregados de todo lo que vendieren, porque se supone haberlo comprado de los mercaderes de lonja que - venden en grueso. Y en cuanto á los derechos de millones, sisas y municipa- les se pagarán como hasta ahora en las villas ó lugares donde se consumie- ren dichas mercaderías y conforme á lo que se ha practicado hasta aquí.

Proposición 5ª.

En el capítulo XXXVI se previene que se han de conceder á los vasa- llos de ambas Majestades que vivieren en los dominios del otro, en caso de declararse guerra, seis meses de término para poder en ellos retirarse á su país con todos sus caudales, bienes y efectos; y por haberse experimen- tado en los dominios de su Majestad católica que en el año 1702 antes de la declaración de la guerra entraron sus ministros en las casas de los vasa- llos de su Majestad británica, embargando y confiscando todo cuanto pudie- ron descubrir los pertenecía, y reduciendo los que aprehendieron á estre- chas y rigurosas cárceles, contra el dicho capítulo y derecho de las jen- tes, se capitula que su Majestad católica empeña su real palabra por sí y por sus sucesores de que en caso de rompimiento de guerra contra su Majes- tad británica (que Dios no lo permita) mandará guardar inviolablemente di- cho capítulo XXXVI de tal forma que el gobernador, ministro ó otra cual- quier persona que le quebrantare ha de ser severísimamente castigado, de-

puesto del empleo que tuviere y con obligacion de restituir el caudal que se hubiere quitado al vasallo con las pérdidas y menoscabos que por esta causa acontecieren. Que en consecuencia de este capítulo ha de mandar su Majestad católica que todos los daños que por esta razón padecieron los vasallos de su Majestad británica se les han de hacer buenos, restituyéndoles á ellos, ó á sus herederos, ó á los que tuvieran poder los bienes — así muebles como raices, casas y heredades que les han sido confiscadas y esten existentes; y en su defecto se ha de dar la estimacion de lo que importaren las mercaderías, dineros ó otros cualesquiera bienes que se les confiscó, por ser contra lo determinado en dicho capítulo XXXVI, por los tesoreros de su Majestad católica; luego que cada vasallo de su Majestad británica haga constar el importe del caudal que tenía antes de dicha confiscación; y asimismo ha de comprender este capítulo á los vasallos que vivían en las islas de Canaria, adonde don Diego Trollop, de nacion inglesa, que residía y vivía en Tenerife, fue muy maltratado y perdió una porcion considerable, como se justificará á su tiempo.

Contestación 5ª.

En ejecución del capítulo XXXVI del tratado del año de 1667 y lo estipulado en las presentes paces, se concede á los vasallos de ambas Majestades que vivieren en los dominios del otro, en caso de declararse guerra, seis meses de término para poder en ellos retirarse á su país con todos sus

bienes y efectos; por el espacio de los cuales seis meses podrán los vasallos de ambas Majestades vender y transijir libremente todos sus bienes y efectos de la misma suerte que podían hacerlo antes de la declaración de la guerra. Y respecto de lo que se representa, que en contravención al dicho capítulo XXXVI se hubiese experimentado lo contrario el año de 1702 - antes de la declaración de la guerra, mandarán ~~ambas~~ Majestades reparar - recíprocamente los daños que los vasallos de una y otra nación pueden haber recibido por esta contravención en todas partes, en justificándolos, sin dilación.

Proposición 6ª.

Y porque en el capítulo XXXVIII se acordó que los ingleses gozasen de los privilegios que cualquiera otra nación, ha de mandar su Majestad católica que todas aquellas franquezas, exenciones, libertades y privilegios que se hubieren concedido y concedieren á cualquiera otra nación, así en - general como en particular, se concedan y hayan de gozar de ellos los vasallos de su Majestad británica.

Contestación 6ª.

Habiéndose acordado este artículo por todo lo que no estuviese revocado. Y encontrando milord de Lexington algun inconveniente en esta ~~en~~presion, se ha convenido en que el artículo XXXVIII del tratado del año de 1667 se ejecutará.

Proposición 7ª.

Que será permitido á los vasallos de su Majestad británica introducir en todos los puertos, ciudades, villas y lugares de los dominios de España todos jéneros de pescados secos y mojados, como de carnes sala-das, y desembarcarlas y conducir las a sus lonjas y almacenes, sin que sean obligados á pagar el derecho del millon sobre dichas mercaderías hasta que se vendan; y no teniendo oportunidad de venderlas en el paraje que las desembarcaren, las podrán sacar libremente fuera de dichos dominios sin pagar cosa alguna por razón del derecho del millon, que no se causa ni se debe pagar hasta el consumo de las mercaderías; y en la misma conformidad las puedan llevar á remitir á cualquiera otro puerto, ciudades, villas ó lugares de los dominios de su Majestad católica sin pagar el referido derecho hasta su consumo; y porque acaece muchas veces hallarse los pescados en las lonjas y almacenes con el vicio de corrupción, por cuya causa no se pueden vender y por ser dañosos á la salud, se ha de capitular que si sucediere este caso, podrá el comerciante llamar al adminis-trador que fuere de aquel partido en donde tuviere dichas mercaderías, y en defecto de dicho administrador á un escribano con dos testigos, para que reconocida la calidad de dichos pescados y carnes, justificando ser podridos ó dañosos á la salud, aparte el comerciante y separe fuera de sus lonjas y almacenes los que así fuesen dañados, y los arroje al mar;

rio ó campo; de todo lo cual ha de tomar testimonio, como de la cantidad ó cantidades que echare fuera por inútil mercadería; y en su virtud quedara libre de pagar dichos derechos sobre la parte que había de causar la dicha mercadería dañada si se hubiera vendido buena; y si antes hubiere pagado dicho derecho al administrador ó arrendador de dicha renta ó á otro en su nombre, ha de ser obligado á restituirlo al comerciante de lo que importare por los pescados ó carnes que separó legítimamente como dañados de sus lonjas, luego que se les haga constar; y la misma regla se ha de practicar en los derechos de almojarfazgos, diezmos, alcabalas, cientos y otros agregados sin impedimento alguno; y es muy justo que ya que el comerciante pierda el principal sin percibir útil de dichos pescados y carnes dañadas, no se le grave con los referidos derechos.

Contestación 7ª.

Se niega: porque no se obliga á ningún mercader á pagar los derechos de carne ó pescado de mala calidad ó corrompido; pues está en la libertad del mercader el echarlo á la mar antes de desembarcarlo; y si está desembarcado por ser de buena calidad puede venderlo antes que se corrompa; y como el derecho de millones no se debe sino en la villa ó lugar de la destinación del consumo de estos géneros, no se perjudica en nada al mercader.

Proposición 8ª.

Que respecto de suceder algunas veces el introducirse en las aduanas de los reinos de España diferentes mercaderías que no estan contenidas en el arancel por ser de nueva fabrica, ó hasta ahora no conocidas; y que los administradores de ellas suelen avaluarlas á precios exorbitantes para cobrar los derechos de ellas, de forma que no le tiene cuenta á su dueño - despacharlas; para atajar este inconveniente se ha de capitular y capitula, que siempre que ocurra tal caso, quedará al arbitrio del comerciante pagar los derechos en la misma especie de estas mercaderías, ó que el administrador ó administradores se las tomen al precio que las avaluaren pagando luego al comerciante su importe en dinero de contado, rebajando del todo sus derechos; para que de este modo se eviten las estorciones que acostumbran ejecutar dichos administradores.

Contestación 8ª:

Las mercaderías de nueva fábrica de que se habla en este artículo -- que no estuvieren comprendidas en el nuevo arancel, se reglarán por el mismo arancel á un tanto por ciento de su valor; y sino se conviniere entre el administrador y el mercader en su valor, será libre al mercader dejar dicha mercadería al arrendador por el valor en que la hubiere avaluado, pagando - luego al mercader su importe en dinero de contado, bajando del todo sus derechos; ó de pagar los derechos en la misma especie de las mercaderías.

Proposición 9ª.

Que ha de ser lícito a los vasallos de su Majestad británica en los puertos de España llevar á bordo de los navios de cualquiera nacion que — sea, dinero para pagar los fletes y averías de las mercaderías que en ellos les vinieren consignadas, libremente y sin despacho de juez de sacas, ó — otros ministros; y ha de bastar en este caso la guia ó despacho de la aduna na que se lleva para el desembarco de las mercaderías.

Contestación 9ª.

Se niega esto por ser contrario absolutamente á las leyes del reino que prohíben la estracción de dinero.

Proposición 10ª.

Que los capitanes, pilotos ó otros vasallos de su Majestad británica que vinieren á los puertos de su Majestad católica con sus bajeles y — naos cargados de mercaderías de cualquier especie que sean, podrán llevar libremente á bordo de dichos navios el importe de sus fletes y averías en monedas de oro y plata, no pagando por ellas derecho alguno, llevándolas — donde quisieren; y ha de bastar para ello guia del juez de sacas ó administrador de las aduanas, que se les dará sin mas costa que cuatro reales de plata.

Contestación 10ª.

Se niega por la misma razón que en el artículo antecedente.

Proposición 11ª.

Que han de poder introducir los vasallos de su Majestad británica -p en los puertos de España de los de Africa cera, cueros, cobre y otros cualesquiera géneros de producto de ella, libremente, como si fuesen de las fábricas ó producto de su Majestad británica; sin que los jueces de contrabando, gobernadores de los puertos ó otros ministros de su Majestad católica lo embaracen, ni lleven mas derechos que los que debían pagar si fuesen de sus propios dominios, ni cosa alguna por vía de contrabando, ni otro impuesto que suelen imponer los gobernadores y capitanes generales en grave perjuicio de los comerciantes y sin que á su Majestad católica se le siga de ello la más leve utilidad y conveniencia.

Contestación 11ª.

Como su Majestad católica pretende tener un derecho preciso para negar este artículo en cuanto á los moros de la costa de Berbería por estar en guerra viva con aquellas naciones, y que por esta misma razón, reinando el señor rey don Carlos III, estaba prohibida la introducción de los frutos y fabricas de aquella parte de la Berbería, y que si se introdujeron algunos fue por fraude, en contravencion de la ley, y por corrupcion de los —

oficiales ó ministros de los puertos y costas por donde se han introducido; y que además, por otras importantísimas consideraciones no puede su Majestad católica venir en tal novedad; y que de parte de milord Lexington se representa que sus instrucciones no le permiten acordarse con esta distinción: se ha tenido por conveniente referir este artículo al congreso de Utrecht, para cuyo efecto ambas Majestades enviarán sus poderes á sus plenipotenciarios para que en vista de las instrucciones que de cada parte se les enviaren se arregle este artículo á lo más acertado.

Proposición 12ª.

Que los vasallos de su Majestad británica puedan introducir en los puertos de España todas las mercaderías de presas que hiciesen contra cualesquiera enemigos que tuvieren, como si fuese del producto de Inglaterra; aunque sean de contrabando en España, sin que por ellas se les pueda llevar mas derechos que los que cobraban de tales géneros en España en tiempo de paz, ni otra cosa alguna por razon de contrabando que deban pagar á los jueces de ellos ni á otros ministros.

Contestación 12ª.

Representando el marques de Eadmar de parte de su Majestad católica que además de las mercaderías de contrabando espresadas en el artículo XXIV del tratado de 1667, tambien se consideran de contrabando todas las de las naciones con quienes sus Majestades pudieren estar en guerra; y además las

que son de corrupción ó contrarias á la salud, ó de países infestados, ó de uso ilícito en el estado, conforme á los tiempos y como se practica en todos los otros reinos y estados; y que esto se ha de entender así de lo contenido en aquel tratado, ha sido acordado sin mas esplicacion que este artículo se ejecutará en cuanto sea conforme al tratado de 1667.

Proposición 13^a.

Que los jueces de contrabando ni sus ministros no puedan con ningun pretesto abrir los cofres, fardos, baules ni barriles de cualquier género de mercaderías, perteneciente á los vasallos de su Majestad británica, que se llevan desde los navíos ó otras embarcaciones á las aduanas, - hasta que se metan en ellas, ni tampoco incontinenti hasta tanto que sus dueños las vayan á despachar para pagar sus derechos; y que saliendo dichos fardos, baules, etc. de la aduana, despachados por el administrador ó administradores de ellas y ministros del contrabando con sus márchamos ó sellos, no han de poder ningun juez de contrabando, sus ministros ó - - otros, ni los guardas de las aduanas y millones ó otra persona de cualquier condición que sea, abríelos ni embarazar á los comerciantes llevarlos á - sus casas y almacenes; porque despues de haberse despachado en la aduana - y puesto en ellos su márchamo, no deben tener más registro. Y respecto de que las guardias de las aduanas y otros ministros suelen embarazar llevar fardos enteros, aunque enmarchamados, y piezas de ropa desde los almacenes

y casas de unos comerciantes á las casas; lonjas y tiendas de otros quienes los vendieron, sin que para ello saquen guía ó licencia del administrador de la aduana, todo en grave perjuicio del comercio, se ha de capitular y capitula que en adelante se les prohíba á todos los guardas y ministros de aduanas, contrabando y otros qualesquiera, como se les prohíbe, el embarazar el transporte de unas á otras casas dentro de las murallas ó calles de las villas que no las tuvieran, cualquier género de mercaderías sin ser necesario sacar guía ó licencia alguna para mudarlas, pena de mil ducados al que contraviniere á este capítulo, aplicados para la cámara de su Majestad católica.

Contestación 13ª.

Habiéndose conformado el marqués de Bedmar á lo preciso de las reglas mas acertadas para eximir los comerciantes ingleses de todas las vejaciones de los oficiales, de los arrendadores, de los jueces de contrabando, y dar toda la facilidad al comercio sin perjudicar los derechos del Rey de España. La primera, que cada maestro de navio esté obligado veinte y cuatro horas despues de haber llegado al puerto á entregar dos declaraciones de lo que traen dentro de su bujel, la una al arrendador de la aduana, y la otra al juez de contrabando. La segunda, que no se puedan abrir sus escotillas ni sacar de ellas cosa alguna de su carga sobre su bordo hasta que tengan permiso del arrendador para descargar, y que esten presentes

el guarda ó guardas que se le nombraren. La tercera, que no se han de descargar las mercaderías ni echar del bajel en ningun barco ni chalupa, sea la que fuere, sino para ser inmediatamente puestas en tierra y conducidas sin la menor detención á la aduana, segun las licencias que se entregaren á las personas que diputare para ello el propietario ó comisario de las mercaderías para que se pesen y visiten en las referidas aduanas, y se paguen los derechos. La cuarta, que sea libre á los jueces de contrabando el hacer asistir, ó que ellos mismos asistan á la descarga y trasporte á la aduana de las referidas mercaderías, si lo hallaren conveniente; y que en caso de sospecha de algun fraude, puedan hacer abrir los fardos, valotes, cajas y cofres en la misma aduana en sus presencias, ó la de los que nombraron para este efecto. La quinta, que despues de la expedicion de la aduana y de haberse pagado ó asegurado los derechos de las mercaderías, y marcado estas, se dará un recibo á los que estuvieren encargados de retirarlas, en virtud del qual les sea libre el sacarlas y trasportarlas á sus almacenes, sin que los guardas ó oficiales del contrabando, ni otros, les puedan detener sino en el caso de recelo de fraude y de suposición de una mercadería por otra; en cuyo caso no se podrán detener ni abrir sino por expresa orden del juez de la aduana ó del contrabando, ó sus subdelegados. La sexta, que será libre á los propietarios ó comisarios encargados de las dichas mercaderías el venderlas y trasportarlas de una casa á otra, con —

tal que esto sea desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde,- declarando a los arrendadores de las alcabalas, cientos y otros demas agregados los lugares para donde hicieren la mudanza de estos géneros, á fin - que si fueren para venderse se paguen los derechos y se les dé para este - efecto por los referidos y se les dé para este efecto por los referidos -- arrendadores un recibo en caso de venta, ó una licencia si solo fuere simple transporte: se ha acordado se ejecutará este artículo en cuanto fuere - conforme al tratado de 1667.

Proposición 14ª.

Que por haberse concedido á las villas anseáticas licencia de poder llevar fuera de los dominios de su Majestad católica en especie de oro y - plata libremente el importe de las pertrechos de guerra, árboles, cables,- velas, etc. para navios, y granos de cualquier género para el mantenimien- to, que introdujeran en los dichos dominios, se capitula que los vasallos de su Majestad británica han de gozar de este privilegio, como tambien por el importe del bacalao seco y mojado, salmon, arenques, sardinas, manteca y otros géneros comestibles que introdujeran en los puertos de España para el mantenimiento de sus pueblos, por ser tan necesarios; cuyo importe podrán llevar a bordo de sus navios en las referidas especies de oro y plata, como quisieren, sin pagar derecho alguno por ello; con guía ó permiso del juez de sacas ó otro ministro; sin que por dicha guía ó despacho se lleve más -

de quince reales de vellon.

Contestación 14ª.

Se niega, por ser tambien contra las leyes, y sobre un pretesto que ya no subsiste hoy.

Proposición 15ª.

Que en las islas de Canarias no se deberán pagar más derechos sobre las mercaderías que en ellas introdujeran ó sacaren los vasallos de su Majestad británica que los que pagaban en el reinado de Carlos II.

Contestación 15ª.

Concedido: pagándose aquellos derechos segun los que subsistian en el reinado del señor rey don Carlos II.

Proposición 16ª.

Que cualquiera persona que estuviere debiendo dinero ó otra cosa en los dominios de España á los vasallos de su Majestad británica, aun antes de declarar la guerra ó durante ella, estará obligado por justicia á satisfacerlo como si tal guerra no hubiera sido declarada, y sin que se le admita excusa ni escepción alguna; y si la propusieren no han de ser oídos.

Contestación 16ª.

Dará su Majestad sus órdenes para que todos los vasallos que se ha-

llaren deudores á los de su Majestad británica de deudas contraídas antes de la declaración de la guerra sean precisados al pago de ellas según las formalidades de justicia en tales casos; bien entendido que lo mismo y recíproco se ejecutará de parte de su majestad británica en favor de los vasallos de su Majestad católica; lo cual se observará también tocante á las deudas contraídas durante los referidos seis meses, y en tiempo de guerra, mediante los pasaportes.

Proposición 17ª.

Que su Majestad católica ha de confirmar y ratificar los veinte y cuatro capítulos ó artículos estipulados por la Villa de Santander en 9 de septiembre de 1700 con los vasallos de su Majestad británica en la misma conformidad que dicha villa se obligó por sí y sus sucesores; cuyo original para en el oficio del escribano Rodrigo de Nardaz, que se presentará con estos capítulos.

Contestación 17ª.

Se niega la confirmación y ratificación como también la ejecución de esta capitulación, por no tener los vasallos facultad de hacer tales capitulaciones con los extranjeros, en vez de que podrán los vasallos de su Majestad británica conforme al artículo XXX del tratado de 1667 establecerse, sus casas y almacenes en la dicha villa de Santander (2).

Proposición 18ª.

Que su Majestad católica ha de conceder á los vasallos de su Majestad británica que puedan nombrar un juez conservador español, el que les pareciere más idóneo y habil; y que conozca en primera instancia de todos sus negocios del comercio y otros civiles y criminales; y que dicho juez haya de subdelegar su comision y jurisdiccion en el sujeto ó sujetos que nombren los vasallos de su Majestad británica para que sean jueces en los puertos, villas ó lugares del comercio, y adonde los necesitasen; y que de tres en tres años tengan facultad de reelegir, así el nombrado en esta corte como los demás; ó si quisiere nombrarlos de nuevo por convenir así á la expedicion de los negocios.

Contestación 18ª.

Habiéndose denegado esta repetición como una estension directamente opuesta á las cédulas de que se han valido algunos sujetos por un corto servicio de dos mil quinientos ducados, en conformidad de las cuales el marques de Bedmar de parte de su Majestad católica ha venido en conceder un juez conservador en Cadiz y Sevilla, representando que los demás es contra la regalía de la corona de España; pues no se concederán á ninguna nacion tales jueces conservadores en ningun otro reino ó estado; y que para evitar los desórdenes que sucederían de semejantes concesiones que todas las otras naciones solicitarían, se arreglaría su Majestad católica á negar lo mismo á todos; y

continuando milord Lexington de su parte en pretender que este artículo se conceda en todo por tener órdenes espresas para solicitarlo se acordó que se arreglaría este artículo en el congreso de Utrech, como se ha prevenido en el artículo XI antecedente.

Proposición 19ª.

Que si algun oficial ó ministro de ambas majestades temerariamente - pretendiese ejecutar alguna cosa en contravención de cualquiera de dichos artículos, vulnerando y perturbando lo convenido en ellos, por el mismo hecho se entienda haber delinquido gravemente; y ademas de que sea depuesto - del empleo que goza, ha de quedar obligado á la satisfaccion del daño que - la parte ofendida hubiese padecido.

Contestación 19ª.

Ordenará su Majestad católica que todo lo arreglado y convenido en es tos artículos se ejecute puntualmente, sin que ninguno de sus ministros ni oficiales puedan contravenir á ello en manera alguna.

Proposición 20ª.

Que los referidos capítulos ampliados con los que nuevamente se constituyem, ha de mandar su Majestad católica se inserten á los cuarenta del - tratado del año 1667, para que sepan los vasallos de ambas Majestades lo - que inviolablemente deben observar y conste á todos los administradores en

los puertos, otros lugares y villas de rentas reales, ó otros cualesquier - ministros la regla fija por donde se han de gobernar; y para que no cobren ni pidan mas derechos de los que en dichos capítulos antiguos, renovados y nuevos se espresan.

Contestación 20^a.

Concedido que las notas puestas al margen de los artículos antecedentes servirán de esplicacion sobre la forma de la ejecución del tratado de - 1667, en cuanto no perjudicaren en manera alguna á los antiguos tratados.

Tres artículos añadidos por el mismo milord Lexington sobre los pro-
prios puntos de comercio.

1^a

Que despues de declarada la guerra, los vasallos de ambas Majestades tendrán permiso en los seis meses capitulados de vender y transijir libremente todas sus mercaderías y bienes muebles y raices, escrituras, vales y dictas de cualesquiera especies que sean de la misma suerte que podían hacer antes de declarada; y la persona ó personas que les hubiere comprado dichas mercaderías ó efectos no podrán ser molestados con pretesto alguno por haberlo hecho, y gozarán de ellos de la misma suerte como si los hubiesen - comprado de los vasallos del rey.

Contestación

Negado, por estar ya comprendido en el artículo V de las veinte propuestas primero por milord de Lexington; y estar enunciado suficientemente en el artículo XXXVIII del tratado del año de 1667.

2º

Que por cuanto suelen entrar en la bahía de Cadiz y otros puertos de estos dominios navíos ingleses con sus cargas, de las cuales parte está — destinada para descargar en dichos puertos, y otra parte para llevar á los puertos de Italia y otros del mar Mediterraneo, y sucede que los dichos navíos no pueden proseguir sus viajes por maltratados, ó por tenerles mas — conveniencia á sus dueños cargarles con los frutos de este reino; en este caso será permitido á los capitanes de dichos navios ingleses, ó á sus factores mudar de ellos y llevar á bordo de otros cualesquiera navios que se hallaren en los mismos puertos destinados para Levante las mercaderías que así tuvieran de tránsito libremente, sin pagar derechos algunos por ellas por razón de ondeaje; y que para ello se les darán las guías ó despachos — que pidieren para mudarlas, sin llevarles por dichas guías ó despachos mas de quince reales de vellon, ó lo que su Majestad fuere servido.

Contestación

Negado por los sumos perjuicios y fraudes que resultarían del pasaje de estas mercaderías de un navío á otro.

3º.

Por cuanto sucede en la bahía de Cadiz y otros puertos de estos reinos que los navios ingleses que estan á la carga para el Norte necesitan - traer de Málaga y otros puertos de ellos vinos, aguardientes, jabon, pasas y otros frutos para surtir su cargazon, se ha de declarar que les será per-mitido hacer traer los dichos frutos de otros cualesquiera puertos de es--tos dominios en cualquiera embarcación, con sus despachos y testimonios de haber pagado en ellos los derechos debidos á su Majestad por su estracción fuera de los reinos, en virtud de los cuales podrán ondearse libremente á bordo de los dichos navios ingleses sin pagar nuevo derecho alguno.

Contestación.

Viene su Majestad católica en que las mercaderes que tuvieran sus ba-jeles en el puerto ó bahía de Cadiz puedan hacer traer allí por mar todo - género de frutos del país, pagando á la salida de los puertos donde los hu-bieren cargado los derechos adeudados; mediante lo cual y justificando la paga de ellos no satisfarán otros ningunos derechos de entrada ni de salida con tal que el pasaje de los dichos frutos se haga de bordo á bordo en un tiempo señalado, con la licencia y en presencia de las guardas, de los administradores ó arrendadores de la aduana.

Tratado de comercio y amistad ajustado entre las coronas de
España y de la Gran Bretaña el 9 de diciembre de 1713 en el
Congreso de Utrech. (14)

Habiéndose establecido felizmente por la misericordia de Dios una buena y firme paz, y una verdadera y sincera amistad entre el serenísimo y muy poderoso príncipe y señor Felipe V, por la gracia de Dios, rey católico de las Españas etc. y la serenísima y muy poderosa princesa y señora Ana, por la gracia de Dios, reina de la Gran Bretaña, Francia é Irlanda, etc. y entre sus herederos y sucesores, reinos y súbditos, por el tratado de pacificación concluido - en Utrech el día 13/2 del mes de julio pasado; fue uno de los primeros cuidados de sus Majestades se atendiese en el mejor modo posible á la recíproca conveniencia de sus súbditos por lo que mira al comercio. Y á este fin se sirvieron mandar á sus embajadores extraordinarios y plenipotenciarios por cuyo medio se ha logrado prósperamente el ajuste de la paz, redujesen en forma solemne á un tratado de comercio aquello que pareciese más conveniente para este saludable fin, después de pesadas todas las circunstancias en las conferencias que - sobre esta materia se tuvieron en Madrid. Y los dichos embajadores en virtud de

- (14) CANTILLO, A. "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y de Comercio que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón desde el año 1700 hasta el día", Madrid, 1843.

sus plenipotencias, cuyas copias van insertas á la letra al fin de este tratado, para mayor claridad de los anteriores y facilitar más los medios del tráfico, convinieron en unos artículos de comercio en el modo y forma siguiente:

ARTICULO 1º

Por el presente se ratifica y confirma el traslado de paz, comercio y alianza entre las dos coronas de España y de la Gran Brtaña concluido en Madrid el día 23/13 del mes de mayo del año del Señor 1667; el cual ha parecido bien se inserte á la letra en este lugar para mayor fuerza y seguridad, juntamente con las cédulas reales ú ordenanzas ajenas á él, el cual es como se sigue. ()

Prometen mútuamente sus reales Majestades que se guardarán y cumplirán de buena fé, y cuidarán en todo tiempo que sus ministros y oficiales y los demás súbditos guarden y cumplan todos y cada uno de los artículos de este tratado antecedente y cualesquier privilegios, concesiones, concordias y otros cualesquier beneficios de cualquier género á favor de los súbditos de una y otra parte que se contienen en dichos artículos, como también en las cédulas adjuntas, de manera que usen y gocen en adelante los súbditos de una y otra parte del efecto plenario de aquellas mismas cosas y de cada una de ellas, excepto - tan solamente aquellas sobre las cuales para satisfacción recíproca se hubiere dispuesto otra cosa en los artículos siguientes, como también de todas aquellas que se contienen en los dichos siguientes artículos. Demás de esto se confirma

() NOTA: No se reproduce aquí el Tratado de 1667, por haberlo transcrito en páginas precedentes.

y ratifica nuevamente el tratado que para quitar disensiones, reprimir robos y establecer la paz en América entre las coronas de España y de la Gran Bretaña, se ajustó entre ellas el año de 1670; con tal que no sea en perjuicio de otro contrato alguno, ó otro privilegio ó licencias que por su Majestad católica se hubiere concedido á la reina de la Gran Bretaña ó á sus súbditos en el tratado de paz que nuevamente se ha concluido, ó en el contrato del asiento; y también sin perjuicio de otra cualquier libertad ó facultad antes de ahora perteneciente, ó permitida, ó concedida á los súbditos de la Gran Bretaña.

ARTICULO 2º

Los súbditos de sus reales Majestades que en los dominios de una y otra parte comerciaren, no deberán pagar por las mercaderías que introdujeran ó sacaren mayores derechos ni otros ningunos que los que se pidieren y cobraren de otra nación la más amiga; y si sucediere que en adelante se conceda por una ó otra parte alguna disminución de derechos ó otros beneficios á alguna nación - extraña gozarán también de ellos recíproca y enteramente los súbditos de una y otra corona. Y así como se ha convenido en lo tocante á los derechos, como queda referido, del mismo modo se ha establecido también por regla general entre sus reales Majestades, que todos y cada uno de los súbditos suyos usen y gocen en todas las tierras y lugares sujetos al dominio de una y otra parte, enteramente, de los privilegios, libertades é inmunidades en orden á todas y cualesquier imposiciones ó tributos tocantes á las personas, mercaderías, mercancías, navíos, fletes, marineros, navegación y tráfico, y logren en todo de igual fa-

vor así en los tribunales y justicias como en todas las demás cosas que miran el comercio ú á otro cualquier derecho, al que usa y goza ó en adelante pudiere usar y gozar cualquier nación extranjera, la más amiga, según más largamente se declara en el artículo 38 del tratado del año de 1667, que va especialmente inserto en el artículo antecedente.

ARTICULO 3º

Respecto de que por el tratado de paz recientemente concluido entre - sus reales Majestades se puso y estableció por base y fundamento, que los súbditos ingleses usasen y gozacen en todas las partes de los reinos de España de los mismos privilegios y libertades, en materia de comercio, de que gozaban en tiempo de Carlos II; y que por tanto esta regla es y ha de ser la base y fundamento del presente tratado de comercio (lo cual se entiende recíprocamente en los súbditos de España que contratan en la Gran Bretaña en todo lo que según lo pactado les compete); y conviniendo mucho para arreglar justamente y con recíproca utilidad las disposiciones del comercio en forma breve, claro y fijo método de los derechos que se hubieren de pagar; por esta razón se ha convenido y concluido que dentro del plazo de tres meses desde la ratificación de este tratado se juntarán en Madrid ó en Cádiz por parte de ambas - reales Majestades comisarios que para esto se han de señalar y poner de una y otra parte, por mano de los cuales se forme sin perder tiempo alguno un arancel nuevo, el cual deberá estar público y patente en todos los puertos y espresará y contendrá por menor los derechos que en adelante se hubieren de pagar

por las mercaderías que se introduzcan ó saquen de Castilla, Aragón, Valencia y Cataluña: arreglándolo de modo que se reduzcan á un solo derecho y un solo pago todas las diferentes imposiciones que en tiempo del último rey Carlos II se pagaban bajo de varios nombres y en diferentes oficinas ó cajas por las mercaderías que entraban ó salían de los puertos de España, comprendidos también en ellos los reinos de Aragón y Valencia y el Principado de Cataluña; - exceptuando solo á Guipúzcoa y Vizcaya, de que se hablará después.

Y respecto de que el embajador británico pidió con grandes instancias se previniese a los dichos comisarios cuidasen especialmente de no incluir - en el nuevo arancel mayores derechos ó otras cartas para cobrarlas en adelante en algún puerto marítimo ó terrestre dentro de los dominios del rey católico, que las que se pagaban en el reinado del pasado rey de España Carlos II en las aduanas del puerto de Santa María ó de Cádiz, consintieron los embajadores de España y se ha convenido y pactado, que en cuanto á los dichos puertos de Cádiz y Santa María se observe aquella regla, de manera que cesando y quitándose todo aumento de derechos que acaso se hubieren introducido allí después del tiempo de Carlos II con ocasión de la guerra ó con pretexto de habilitación ó otro cualquiera, los súbditos ingleses no estarán obligados á pagar en los puertos de Santa María y de Cádiz por las mercaderías que hubieren traído ó llevaren, mayores cargas, de cualquier género, ó debajo de cualquier título que sea, así antes como después de firmados los dichos aranceles, que los que allí se pagaron en tiempo de Carlos II.

También se encargará ante todas cosas á los dichos comisarios en cuento á los puertos de Santa María y de Cádiz, que en la formación de los nuevos aranceles no se gobiernen por los antiguos derechos, que por su grande esceso dejaron de exigirse en tiempo de Carlos II; sino que solamente sigan aquellos que ó con nombre de Carlos II; sino que solamente sigan aquellos - que ó con nombre de aranceles ó de registros constare haber subsistido en - tiempo de Carlos II, y pagándose conforme á ellos los derechos. Y también - se ha convenido que será enteramente lícito á los súbditos ingleses llevar las mercaderías, después de pagados por ellas en los dichos puertos los derechos, conviene a saber, hasta que se formen los dichos aranceles, los que se pagaban en tiempo de Carlos II, ó los que después se hubieren de pagar por las mercaderías que se trajeren, según el tenor de los tales aranceles, á - otro cualquier puerto ó lugar, de los dominios sobredichos de España, por - tierra ó por mar, sin que por este motivo se les pidan de ningún modo los derechos ya pagados: antes bien para quitar cualesquier pleitos, que sin embardo de la exacta administración de justicia en España, consta haberse orijinado otras veces por causa de otras cargas que algunas veces se exigían con gravísima descomodidad de los comerciantes y perjuicio del comercio, se ha - convenido en que las mercaderías de que se hubieren pagados los derechos, como se ha dicho antes, en Cádiz o en el puerto de Santa María, y se hubieren transportado para venderlas en grueso y por mayor, serán libres y exentas de otra cualquier carga por toda España; pero con tal que el dueño de las merca

derías ó el factor traiga testimonios por donde conste haber pagado, según se ha dicho, debidamente los derechos, y en caso de no hacerlo así se tendrán las mercaderías por introducidas de contrabando. Y en cuanto a los derechos que hubieren de pagarse de alcabalas, cientos y millones se habrá de observar lo que tocante á ellos se declara en los artículos 5º y 8º de este tratado.

Y respecto de que fueron los embajadores de España de dictamen que — sin lesión de las leyes del reino y de varios privilegios suyos que no tienen fuerza de ley, y también sin gravísimo perjuicio del rey su amo, no se podían ajustar los derechos en cada uno de los puertos de España á la regla de los que en Cádiz ó en el puerto de Santa María consiguieron ó podrán conseguir; por esta causa ha parecido dejar la ventilación y determinación de esta materia á los comisarios que hubieren de formar los nuevos aranceles. Promete también el rey católico que se quitarán luego en los dichos puertos todos los aumentos de derechos que acaso se hubieren introducido en ellos después del tiempo de Carlos II con motivo de la guerra ó con título de habilitación ó otro cualquiera: y asimismo que ó se establecerá en los dichos puertos la misma regla en que se ha convenido para Cádiz y el puerto de Santa María, ó á lo menos se guardará así antes como después de hechos los dichos — aranceles la que en tiempo de Carlos II subsistía respectivamente en cada — puerto; de manera que no se cobren en adelante, allí ni en otro cualquier lugar de tránsito mayores derechos que los que se pagaban en dichos lugares en

tiempo de Carlos II. Además se observará en ellos lo que se ha expresado — arriba en este mismo artículo en orden a los derechos de alcabalas, cientos y millones. En cuanto á los puertos de Guipúzcoa y Vizcaya ú otros no sujetos a las leyes de Castilla, en los cuales en tiempo de Carlos II se pagaban menores derechos que los que se cobraban en Cádiz ó en el puerto de Santa María, promete su real Majestad católica no aumentar por el nuevo arancel los tales derechos en los dichos lugares, pero que entre tanto quedarán como en tiempo de Carlos II. Pero las mercaderías que después de introducidas en los puertos de Vizcaya y de Guipúzcoa se llevaren por tierra á los reinos de Castilla y de Aragón, satisfarán en el puerto de su primera entrada en dichos reinos los derechos que en tiempo de Carlos II se pagaban allí, ó los que se establecieren en el nuevo arancel.

ARTICULO 4º

Consiente el rey católico y promete, que en adelante será lícito a los ingleses que residieren en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa alquilar casas ó almacenes á propósito para guardar en ellos sus mercaderías. Y para — que esto se pueda hacer de la misma manera y con los mismos privilegios y libertad que han gozado ó debido gozar los dichos ingleses en Andalucía ó en otros qual esquier puertos ó lugares de España en virtud del referido tratado del año de 1667, ó de alguna cédula ó ordenanza concedida por sus Majestades católicas; dará su real Majestad las órdenes repetidas para su cumplimiento. De esta misma libertad gozarán los súbditos españoles en cualesquier

puertos y lugares de la Gran Bretaña, con todos los privilegios que por el predicho tratado les pertenecen.

ARTICULO 5º

Y para evitar los abusos que se hallan en la cobranza de los derechos de alcabalas y cientos, consiente su Majestad católica que queda á elección de los súbditos ingleses que entraren sus mercaderías por cualquier puerto terrestre ó marítimo de España para venderlas por mayor, el pagar los dichos derechos de alcabalas y cientos en el mismo lugar ó puerto de su primera llegada, ó sino en donde .y cuando se vendieren, conforme á las leyes de Castilla; cuyos derechos serán los mismos que los que se pagaban en tiempo de Carlos II. También se ha convenido que podrán los súbditos ingleses enviar ó - transportar las mercaderías que quisieren vender por mayor (y por las cuales hubieron ya pagado una vez los derechos de alcabalas y cientos) á cualquier puerto ó lugar de los dominios de su Majestad católica en Europa, sin que se les haga molestia alguna, ni se les vuelvan a pedir los dichos derechos ó - otros algunos por la primera venta; pero con condición que los que llevarán dichas mercaderías presenten guías ó testimonios de los recaudadores ó administradores de las aduanas, por donde conste haberse pagado los tales derechos por las dichas mercaderías, y otros testimonios también que justifiquen que las dichas mercaderías no han sido vendidas todavía. Pero si algún comerciante vendiere por menor sus géneros, estará obligado a pagar, bajo de las penas impuestas por las leyes, todas las cargas locales y municipales que por

la dicha venta se deben y acostumbran pagar, juntamente con los derechos de alcabalas y cientos y otros cualesquiera que hubiese. Consiente también su Majestad católica, que si después de haber exhibido los testimonios arriba in dicados, algún oficial ó recaudador de derechos pudiese segunda vez y por es ta causa detuviere el paso de las mercaderías, ó de cualquier modo causase al guna molestia, el oficial culpado incurrirá en pena de dos mil ducados para la real cámara de su Majestad ó del hospicio general de Madrid. Los escribanos de las aduanas ó del contrabando no llevarán por despachar los dichos tes timonios de certificación más de quince reales de vellón; sino es que se dis pongan otra cosa en el nuevo arancel que se hiciere.

ARTICULO 6º

Y así como los súbditos de sus reales Majestades deben tener de una y otra parte el uso y libertad de la navegación y del comercio entero, salvo y libre de toda molestia toto el tiempo que subsista la paz y amistad establecida entre sus reales Majestades y sus coronas; del mismo modo quisieron pre venir sus reales Majestades el que no quedan privados sus súbditos de esta - seguridad por algunas centellas de discordias que acaso pudiesen nacer; antes bien que gocen del entero beneficio de la paz, entre tanto que no se declare guerra entre ambas coronas. Y además, se ha convenido también, que si llegase el caso (lo que Dios no permita) de moverse y declararse guerra entre sus rea les Majestades y sus reinos, se dará, según lo ajustado en el artículo 36 del referido tratado del año de 1667, el término de ~~seis~~ seis meses después de decla-

rado el rompimiento á los súbditos de entrambas partes que residieren en los dominios de la otra, en el cual les será permitido retirarse juntamente con sus familias, bienes, mercaderías, navíos y caudales, y llevarlos por tierra ó por mar adonde, quisieren, pagando los derechos debidos y acostumbrados; y asimismo les será permitido también entonces vender y enajenar sus bienes - muebles y raíces, y sacar libremente y sin embarazo alguno el valor de su - venta: ni se les podrá en este tiempo detener ni molestar con embargo ó pri - sión á ellos ni á sus bienes, mercancías, efectos é intereses; antes bien - obtendrán buena y pronta justicia los súbditos de una y otra parte, para que durante el espacio de los seis meses puedan cobrar las cosas y hacienda que hubiern dado fiadas así al público como á los particulares.

ARTICULO 7º

También se ha convenido que todos los daños que los súbditos de en--
trambas coronas justificaran haber padecido al principio de esta última guerra
contra el tenor del dicho artículo 36 del referido tratado del año de -
1667, tanto en sus bienes muebles como raíces se resarzan recíprocamente y
sin dilación á ellos ó á sus lejitimos apoderados ó herederos, ó á los que
su causa hicieren, restituyéndoles los existentes y los confiscados, sean poss
esiones, casa, heredad s ó otros cualesquier bienes, y pagando el justo y
lejitimo precio de los que se hubieren extraido, así muebles como raíces, cu
ya satisfacción se ha convenido y ajustado entre sus reales Majestades se -

haga de buena fé por los tesoreros de una y otra parte, después de justificadas, según se ha dicho, las tales solicitudes.

ARTICULO 8º

Se ha convenido también y su real Majestad católica dará sus órdenes para su efecto, que los derechos de millones impuestos sobre los pescados y otros bastimentos no se cobren en el lugar de su primer llegada, sino que solamente se paguen, conforme a la costumbre antigua establecida por las leyes, en el lugar donde se consumieren, y después de vendido el género y no antes.

ARTICULO 9º

Promete su real Majestad católica, que las mercaderías que no se expresaren específicamente en los aranceles que según el artículo 3º de este tratado se han de formar, no se gravarán con mayores derechos respecto de su valor que los que se impusieren á las mercaderías especificadas en los dichos aranceles; y si resultare pleito entre los arrendadores o administradores de las aduanas y el comerciante sobre el valor de algunos géneros, quedará al arbitrio de este dejarlos al arrendador ó administrador por el precio en que estos los hubieran estimado, el cual se habrá de pagar luego en dinero de contado, rebajándose solamente los derechos. Podrá también el comerciante dejar al arrendador ó administrador en pago de los derechos en parte de dichas mercaderías, según el valor en que, como va dicho, las hubiere apreciado el vista, y llevarse las demás.

ARTICULO 10º

Se ha convenido que en caso que los súbditos ingleses traigan mercaderías á España de cualesquiera costas de Africa, y dichas mercaderías fuesen admitidas para pago de los derechos, satisfechos estos debidamente, las dichas mercaderías, no han de ser después gravadas con algunas otras cargas por los capitanes generales de las costas, ó por los gobernadores de los puertos ó otros cualesquiera, con ningún nombre ó título, fuera de aquellos que generalmente se debieren pagar por todas las mercaderías de esta misma especie al tiempo de venderse.

ARTICULO 11º

Los capitanes de navíos mercantes que entraren en algún puerto de España con sus buques, estarán obligados á entregar dentro de las veinte y cuatro horas de su llegada dos declaraciones ó inventarios de las mercaderías que hubiesen traído, ó de la parte que han de descargar allí; conviene á saber, la una al arrendador ó administrador de la aduana, y la otra al juez del contrabando; y no abrirán las bodegas de los navíos antes que hayan sido visitados, ó se les haya concedido por los recaudadores de los derechos la licencia. Y no se descargarán mercaderías algunas con otro motivo que el de llevarlas en derecho á la aduana, según el permiso que para este fin se les hubiere dado por escrito; y no será permitido á ninguno de los jueces del contrabando ó otro ministro de la aduana con pretesto alguno abrir balones, cajas, barricas ó otros fardos de mercancías pertenecientes á súbditos

ingleses, al tiempo de llevarlas á la aduana y antes de haber llegado á ella, y sin estar presente el dueño de ellas ó su factor, para pagar los derechos y recojerlas. Pero podrán asistir los dichos jueces de contrabando ó sus diputados al tiempo de desembarcarse las mercancías y también cuando se registran y despachan en la aduana: y si hubiera sospecha de fraude y de que se intenta pasar unas mercaderías por otras, se podrán abrir todos los fardos, cajas, ó barricas, como sea esto dentro de la aduana y no en otra parte, en presencia del comerciante ó de su factor, y no de otra manera. Pero una vez despachadas y sacadas de la aduana, las mercaderías y marcadas las cajas, barricas y otros fardos en que estuvieren metidas, con el sello ó cifra de ministro competente, no podrá juez alguno de contrabando, ó otro oficial, volverlas á abrir, ó impedir se lleven a casa del comerciante; ni tampoco les será permitido embarazar después con ningún pretesto que se muden de una casa ó almacén á otro, dentro de los muros ó recinto de la misma ciudad ó población, como esto se haga desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, habiendo hecho saber antes á los arrendadores de alcabalas y cientos el motivo por qué su muden; conviene á saber, si fuese para venderlos, para que si no se hubieren pagado antes estos derechos, se cobren allí mismo ó en el sitio donde se vendieren; y sino para que ellos den al comerciante ó á su factor la guía o certificación que se acostumbra. Por lo demás habrá entera y plena libertad y derecho de poder pasar las mercaderías de cualquier puerto o parage á otro, dentro de los dominios del rey de España, así por -

tierra como por mar, bajo de las condiciones especificadas en el artículo 5º de este tratado.

ARTICULO 12º

No se harán pagar á los súbditos ingleses mayores derechos por las mercaderías que llevarán á las islas de Canaria ó sacaren de ellas, que los que se pagaban allí mismo reinando el difunto rey Carlos II, ó lo que hubieren de pagar con arreglo á los nuevos aranceles.

ARTICULO 13º

Los súbditos de ambas reales Majestades que debieren algún dinero á súbditos de la otra parte, ó por haber contraído las tales deudas antes del principio de la última guerra ó en los primeros seis meses de ella, ó durante ella con el resguardo de despachos de salvo conducto, ó finalmente después de ajustada la suspensión de armas entre las dos coronas, serán obligados y apremiados á pagarlas de buena fé, del mismo modo que si no hubiese habido guerra entre dichas coronas, sin que puedan los deudores oponer excepciones algunas con motivo de dicha guerra contra las justas demandas de los acreedores.

ARTICULO 14º

Conceda su Majestad Católica á los súbditos ingleses facultad para que puedan asentar sus domicilios y habitar en la villa de Santander, con las condiciones expresadas en los artículos 9 y 30 del tratado del año de 1667.

ARTICULO 15º

En cuanto al juez conservador y á los otros que él hubiere de sustituir, concedida esta libertad á otra cualquier nación extranjera, deben gozar igualmente de ella los súbditos ingleses; y en el interín y hasta que se haya dispuesto cosa fija en esta materia, su real Majestad católica dará orden espresa á todos y cualesquier jueces de su reino, y á otro cualesquiera á quienes toca la administración ó ejecución de la justicia, y les encargará bajo de gravísimas penas, que en todas las causas de los súbditos ingleses administren justicia, y la hagan ejecutar sin dilación, y sin inclinación, favor ó afición á las partes. Consiente el rey católico que las apelaciones de las sentencias dadas en causas pertenecientes á los súbditos ingleses se lleven al tribunal del consejo de guerra de Madrid, y no á otra parte.

ARTICULO 16º

Si algún ministro ó otro súbdito de las reales Majestades católica ó británica quebrantare este tratado ó algun artículo suyo, estará obligado á la satisfacción de todos los daños que de ello se originaren; y si tuviere algún empleo público, además de la reparación, que como se ha dicho, hubiere de dar á la parte perjudicada, será depuesto de tal empleo.

ARTICULO 17º

Será lícito á los súbditos ingleses que hubieren sacado por mar de al

gún puerto de España, vino, aguardiente, aceite, jabón, pasa ó otras merca
derías, y exhibieron testimonios de haber pagado sus derechos en el paraje
 de donde salieron, cargar dichos efectos en los navíos que tuvieran en el -
 puerto de Cádiz, ó trasbordarlos allí mismo de un buque a otro con permiso
 de los jueces de las cosas de mar y en presencia suya ó de sus comisionados,
 si quisieren asistir, para evitar cual esquier fraudes, en tiempo á propósito,
 que dentro de veinte y cuatro horas deberán señalar los dichos ministros
 y con tal franqueza que no hayan de pagar ni el derecho de ondeaje, ni otro
 alguno de entrada ó de salida.

Se ratificará este presente tratado por el serenísimo rey católico y
 la serenísima reina de la Gran Bretaña, y se permutarán recíprocamente los
 instrumentos de su ratificación en Utrech dentro de dos meses, o ántes si -
 pudiere ser. En fé de lo cual los infrascritos embajadores extraordinarios
 y plenipotenciarios del serenísimo rey católico y de la serenísima reina de
 la Gran Bretaña, hemos autorizado con nuestros sellos el presente tratado,
 firmado de nuestras manos. En Utrech, el día 9 del mes de diciembre del año
 de nacimiento de Cristo 1713. El Duque de Osuna.- El Marqués de Monteleón.
 John Bristol.

Ratificación de su Majestad Católica á excepción de los artículos 3º, 5º y
 8º que se modifican en los términos que abajo se expresa.

Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León (siguen
 los títulos). Por cuanto habiéndose ajustado, concluido y firmado en la ciudad

dad de Utrech en 9 de diciembre del año próximo pasado de 1713 por mis embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, y el obispo de Bristol em
bajador extraordinario y plenipotenciario de la serenísima reina de la Gran Bre
taña, mi muy cara y muy amada hermana y prima, el tratado de comercio entre
las coronas de España y de Inglaterra que queda referido, el cual tratado de
comercio aquí escrito é inserto, como arríba queda referido, después de haber
le visto y examinado maduramente palabra por palabra en mi consejo, heeresuel
to aprobarle y ratificarle, a excepción de los tres artículos 3º, 5º, 8º,
que se han de entender y observar en la forma y expresiones que de nuevo se
han puesto, y expresan aquí palabra por palabra en los términos siguientes.

ARTICULO 3º

Como por el último tratado de paz se ha asentado y establecido por ba
se y fundamento que los súbditos de la Gran Bretaña gozarían por lo tocante
al comercio de las mismas libertades y privilegios de que gozaron en el reina
do de Carlos II, en toda la extensión de los reinos de España; esta misma re
gla debe también servir de base y fundamento al presente tratado de comercio,
lo cual debe recíprocamente entenderse a favor de los súbditos de España que
comerciaren dentro de los dominios de la Gran Bretaña.

Y por cuanto nada puede contribuir más para establecer el comercio -
con mútua utilidad, como una regla fija, clara y explícita para pagar los -
derechos, y especialmente sobre un pie moderado y proporcionado al valor de
las mercancías, porque de otro modo se introducen los fraudes con gran per-

juicio de las rentas de los soberanos, lo cual muchas veces se ha experimentado en España, donde son excesivos los derechos establecidos por los antiguos aranceles: Por tanto, queriendo su Majestad Católica evitar las consecuencias y facilitar en todo lo que pudiere pender de su dicha Majestad la libertad del comercio, favorecerle y aumentarle cuanto su Mahestad británica lo desea también por su parte; ha convenido en suprimir, así los diferentes derechos de entrada y de salida contenidos en los antiguos aranceles mencionados, como los que pueden haberse impuesto después acá bajo de cualquier nombre y pretexto, y contentarse con un solo y único derecho que se cobrará igualmente a la entrada como a la salida del reino, a razón del diez por ciento del valor de todo género de mercaderías, ahora sea que la valuación de ellas se haga por peso, por medida, por pieza, ó sea por cálculo ó estima. Y este derecho se cobrará igualmente en beneficio del rey en todos los puertos y aduanas de España, comprendiéndose en esto Aragón, Valencia y Cataluña; no exceptuándose de la dicha regla general más que a Guipúzcoa y Vizcaya, cuyos derechos de entrada y de salida permanecerán como en tiempo de Carlos II, y mediante este derecho de diez por ciento, y después de pagado á la entrada, los arrendadores ó administradores de la aduana por donde hubieren entrado dichas mercaderías tendrán obligación de hacerlas marcar y plomar con las marcas y plomos de la misma oficina, y de entregarles un recibo, en cuya virtud el dueño ó dueños de ellas tendrán libertad de transportarlas á todas las demás partes de España que quisieren; sin que se pueda exigir otro

derecho, impuesto ó carga en beneficio de su Majestad Católica en ningunos otros puertos o parajes de España por razón de transporte de dichas mercaderías más que el que ya se hubiera pagado conforme á la nueva tarifa, cuyos recibos y plomos ó marcas se manifestarán, sin cuyo requisito se tendrá por fraudulento su transporte: todo sin perjuicio de los derechos de alcabalas, ciento y millones, de que se tratará después en los artículos 5º y 8º.

Y atendiendo á que el embajador de Inglaterra ha hecho presente que para evitar todo género de altercados en lo venidero, era absolutamente necesario asentar desde ahora para siempre sobre un pie cierto la valuación de dichas mercaderías, de suerte que este derecho de diez por ciento no se pueda variar por el aumento o disminución del precio corriente que podían tener en el comercio en diversos tiempos y en diferentes parajes del reino; se ha convenido y agordado entre sus Majestades católica y británica, por medio de sus embajadores, que dentro del término de tres meses después de la ratificación de este tratado, y antes si fuere posible, se juntarán en Madrid ó en Cádiz por parte de sus Majestades, comisarios nombrados y autorizados por sus dichas Majestades en debida forma, los cuales sin pérdida de tiempo procederán al arreglo de un nuevo arancel ó lista para fijar y limitar de tal suerte lo que se haya de exigir en adelante y para siempre de cada especie de mercaderías, así á su entrada como á su salida; que todos los derechos ó impuestos que se cobraban en la importación y exportación, sea del tiempo de Carlos II sea antes o después, bajo de cualesquiera nombres y pretextos y en cuales

quiera de las diversas aduanas, estén comprendidos bajo de este solo y único derecho, pagadero en una sola suma, bien á la entrada ó bien á salida de los puertos de España, comprendidos en éstos los de los reinos de Aragón y - Valencia y del principado de Cataluña, exceptuando solamente las provincias de Guipúzcoa y de Vizcaya, de que se acaba de hacer mención. Y porque además se ha pedido con toda instancia por el embajador de la Gran Bretaña se mandase á los dichos comisarios cuiden sobre todo los puertos y aduanas de la entrada y salida de España á razón de diez por ciento del valor que tienen dichas mercaderías en el curso del comercio y entre comerciantes en los puertos de Cádiz y Santa María; los embajadores de España han convenido en ello, debiéndose entender que las mercaderías que entraren en España por los puertos de dichas provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, y después fueren transportadas á las provincias de los reinos de Castilla y de Aragón, hayan de pagar en el primer puerto ó aduana de su entrada en los dichos reinos los derechos que se arreglaren por este nuevo arancel.

ARTICULO 5º

Para evitar los abusos que se pueden cometer en la cobranza de los derechos llamados de alcabalas y cientos, su Majestad católica consiente que los súbditos de la Gran Bretaña tengan la libertad de diferir el pago de estos derechos todo el tiempo que los dueños quisieren dejar sus mercancías depositadas en dichas aduanas, en los almacenes para esto destinados; y hasta tanto que quieran sacarlas, sea para pasarlas más adelante dentro del rei

no, sea para venderlas en el paraje mismo, ó para llevarlas á sus casas: lo cual les será permitido, entregando su obligación bajo de buena y suficiente fianza de pagar los derechos de alcabalas y cientos por la primer venta, dos meses después de la fecha de su obligación, mediante lo cual se les darán las correspondientes cartas de pago. Y las dichas mercancías serán marcadas y plomadas en las marcas y plomos de los ministros de dichas alcabalas y cientos en los parajes de donde dichos comerciantes las podrán transportar y vender por mayor en cualquiera puerto y tierra de la obediencia de su Majestad católica en Europa, sin que por causa de dichos derechos de alcabalas y cientos se les pueda poner impedimento alguno, ni obligarles á pagarlos segunda vez por razón de su primera venta; pero con calidad que los que condujeran las dichas mercaderías presenten las cartas de pago, plomos o marcas de los ministros ó comisionados encargados de la recaudación de estos derechos, ó testimonio de no haber sido todavía revendidas. Pero si al contrario, algún comerciante vendiese su mercadería por menor, estará obligado de pagar segunda vez los referidos derechos de alcabalas y cientos bajo de las penas establecidas por las leyes: en cuya consecuencia quiere su Majestad católica que si después de la presentación de los recibos referidos, algún oficial ó empleado en la recaudación en alcabalas y cientos exigiese nuevamente estos derechos sobre las dichas mercaderías, marcadas y plomadas como queda prevenido, ó se opusiese a su paso ó transporte, ó las causase el menor impedimento, sea condenado en dos mil escudos de multa á beneficio del real era-

rio. Los oficiales de aduanas reales no podrán tomar más que quince reales de vellón por la expedición de las cartas de pago ó certificaciones, á no ser que se disponga otra cosa en el nuevo arancel que más adelante se ha de ajustar.

ARTICULO 8º

Su Majestad católica ha convenido que dará orden para que el derecho llamado de millones, que se cobra del pescado y de otros bastimentos de consumo ordinario, no se cobre en lo venidero en los puertos ó primeras aduanas para la entrada en España, todo el tiempo que los dueños los quisieran dejar depositados en los almacenes destinados para este efecto, con calidad de que cuando los saquen de allí, ya sea para pasarlos más adelante dentro del reino, ya para venderlos en el mismo paraje, ó para llevarlos á sus casas, hayan de entregar su obligación con buena y suficiente fianza de pagar por esta razón los derechos de millones dentro de dos meses después de la fecha de su obligación, mediante lo cual se les darán las correspondientes cartas de pago y juntamente los dichos géneros marcados ó plomados por los ministros de la dicha renta de millones de los parajes en donde los expresados derechos se hubieran satisfecho; después de lo cual los dichos géneros podrán transportarse y venderse en los parajes de su consumo, sin pagar nuevos derechos de millones. Quiere consiguientemente su Majestad que si después de la presentación de las cartas de pago arriba referidas, algún oficial ó dependiente de los arrendadores de millones exigiese nuevamente estos derechos de los

misimos géneros, ó se opusiese á su paso, transporte y venta, ó les causase el menor impedimento, sea condenado en dos mil escudos de multa en beneficio de su real erario.

Por tanto, en virtud de la presente, yo por mí, mis herederos y sucesores, como también por los vasallos, súbditos y habitantes en todos mis reinos y señoríos, apruebo y ratifico todo lo expresado en el mencionado tratado de comercio en lo que no contraviene á lo referido en los tres artículos 3º, 5º y 8º, los cuales se han de entender, observar y practicar como van ultimamente expresados en el cuerpo de esta ratificación, y no como están en el tratado, ratificando y aprobando todo lo demás de él en la mejor y más amplia forma que puedo; y doy por bueno, firme y valedero todo lo que en él se contiene: y prometo en fé y palabra de rey, y por todos mis sucesores y herederos seguirle y cumplirle inviolablemente según su forma y tenor mediante los tres artículos nuevamente formados, y mandar que se observen y cumplan de la misma manera, como si yo la hubiera tratado por mi propia persona; sin hacer ni dejar hacer en cualquier modo que sea, ni permitir que se haga cosa alguna en contrario; y que si se hiciera alguna contravención de lo contenido en dicho tratado, considerados los tres artículos expresados en esta ratificación como si estuvieran escritos é insertos en el tratado, la mandaré reparar con efecto sin dificultad ni dilación, castigando y mandando castigar los delincuentes: obligando para el efecto de lo susodicho todos y cada uno de mis reinos y señoríos, y así mismo todos los otros mis

bienes presentes y venideros, como también mis herederos y sucesores, sin es
ceptuar nada, y para firmeza de esta obligación, renuncio todas las leyes,
costumbres y todas otras cosas contrarias á ello. En fé de lo cual mandé despa
char la presente, firmada de mi mano, sellada con mi sello secreto y refrenda
da de mi infrascrito secretario de Estado. Dada en Madrid, a 21 de enero
de 1714, Yo, el rey.— Don Manuel de Vodillo y Velasco:

La reina Ana de la Gran Bretaña dió su ratificación el 7 de febrero
del mismo año. Es igual a la anterior, y contiene los tres artículos modifica
dos en los términos que acaban de verse.

ARTICULO SEPARADO

Establecido un Juez Conservador en las islas Canarias para los súbditos brita
nánicos.

Por el presente artículo separado que habrá de tener la misma fuerza
y vigor como si palabra por palabra estuviese inserto en el tratado de comerci
o que hoy se ha concluido entre sus reales Majestades de España y de la -
Gran Bretaña, y para este fin se habrá de ratificar de la misma manera que
el dicho tratado; consiente su real Majestad Católica que de hoy en adelante
sea lícito á los súbditos de la Gran Bretaña que con motivo del comercio resi
den en las islas de Canaria, nombrar algunos de los súbditos españoles para
que tengan allí el empleo de juez conservador, y conozca en primera instancia
de todas las causas mercantiles de ingleses; y promete su real Majestad
que concederá el tal juez conservador, así nombrado, las comisiones, junta—

mente con la autoridad misma y todos los privilegios de que los jueces conser
vadores han gozado hasta aquí en Andalucía, ó también si los sábditos ingleses
desearan tener allí mismo muchos de estos jueces, ó mudar cada trienio á los
nombrados les será permitido y se les concederá. Conciente también el rey ca
tólico que las apela ciones de las sentencias del dicho juez conservador se -
llevan al tribunal del consejo de guerra de Madrid, y no á otra parte.

En fé de lo cual, nos los infrascritos embajadores extraordinarios y
plenipotenciarios del serenísimo rey católico y de la serenísima reina de la
Gran Bretaña, hemos autorizado con nuestros sellos el presente artículo firma
do de nuestras manos. En Utrech, el día 9 del mes de diciembre del año del se
ñor de 1713.- El duque de Osuna.- El marquês de Monteleón.- Joh. Bristol.

Su Majestad Católica ratificó este artículo el 21 de enero y su Majes
tad británica el 7 de febrero de 1714.

En 23 de febrero de 1714 hicieron los plenipotenciarios una declaración
en la Haya, para que no parase perjuicio á los dos tratados de paz y comercio
el hacer transcurrido el término señalado para el canje de las ratificaciones.

Estas se canjearon en la misma Haya el 12 de dicho mes y año, y el 4 de
abril se publicaron con las solemnidades de forma ambos tratados en Madrid.

LEY I.— Fuero militar y personas que deben gozar de él, con las limitaciones que se expresan.

D. Felipe V, en Buen-Retiro, por dec. de 25 de Abril de 1714, cap. 6, y por otro de 25 de agosto de 1715 cap. 22 a 25, comprensivos de nuevas plantas del Consejo de Guerra y por el art. 1, 10 11 y 12, tit. 10. lib. 4, de la ordenanza de 12 de julio de 1728.

(15)

Hallándome informado del abuso que hay en el fuero militar; solicítandole muchos que no le deben tener por cuyo medio embarazan el uso a la Jurisdicción ordinaria y a otras, y por consecuencia la buena administración de justicia en grave perjuicio de mi servicio y de la vindicta pública; he resuelto revocar, como revoco, todo el fuero Militar concedido hasta ahora; y declarar, como declaro, que los que de hoy en adelante han de gozar el referido fuero, son los Militares que actualmente sirven y sirvieren en mis tropas regladas, ó

(15) Los Códigos españoles concordados y anotados. Tomo 8º. Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VI. Título IV, Ley I, La Publicidad. Madrid, 1.850, pág. 142.

empleos que subsistan con ejercicio actual en guerra, y que como tales militares gozaren sueldo por mis Tesorerías de Guerra; todos los oficiales militares de cualquier grado, que sirvieren en la Marina y Armadas de mar con patentes mías, y sueldos por mis Tesorerías; y asimismo los Militares que se hubieren retirado del servicio, y tuvieran despachos míos para gozar del fuero.

Por lo que toca a los actuales asentistas, y los que les sucedieren, de provisiones de víveres, de pertrechos y municiones de guerra, y hospitales, remontas, fortificaciones, fábricas de navíos y pertrechos para ellos, y generalmente los asentistas de qualquiera cosa que toque a la guerra, así de tierra como de mar, sus factores y oficiales que tuvieran títulos de tales, pasados por el Consejo de Guerra; quiero y declaro, que gocen del fuero de la Guerra solamente en las diferencias y pleytos que tuvieran con sus factores y oficiales, que ellos mismos nombran para su gobierno, y en todas las causas que miran a si han cumplido con el asiento o provisión en la cantidad y bondad de los géneros que se obligan a proveer, así de municiones de guerra como de boca, vestuarios y armas, porque en esto está interesado el Fisco, y en esta parte deberán estar sujetos al fuero Militar (a).

También es mi voluntad, que las causas criminales de delitos que cometieren como asentistas, se vean y determinen por el Consejo de Guerra; pero en

(a) Sobre el fuero militar de los asentistas, véanse los reglamentos de provisiones de 25 de julio de 1.800 y la R.O. de 10 de octubre de 1.830.

los delitos comunes a todos, como hurto, homicidio y otros, no deben gozar del fuero Militar, porque los asientos no tienen respecto alguno con los delitos de esta especie; y se conocerá de ellos por las Justicias ordinarias para más breve expedición, y satisfacción de la vindicta pública.

Por lo que toca a las causas civiles, y pleytos que se originan entre proveedores, asentistas y sus oficiales y factores en contratos que se celebran con personas particulares, vasallos míos, sobre compra de granos, vestuarios y otros géneros, portes y otros manejos y disposiciones para el cumplimiento de sus asientos; declaro, que no han de gozar del fuero Militar, por obviar los perjuicios y agravios que muchos de mis vasallos padecerían en desaforarlos y traerlos de todo el recinto de España para comparecer en el Consejo de Guerra, respecto de los insuperables gastos que se les ocasionarían en sus viajes, y asistencia más costosa en la Corte que en otra parte alguna del Reyno; y así encargo con especialidad a mi Consejo de Guerra, atienda con el mayor desvelo a la puntual observancia de esta mi resolución, tocante a la distinción con que se ha de usar del fuero Militar, por lo que conduce al mayor alivio de mis vasallos, y buena administración de justicia.

Tratado de paz y amistad ajustado entre la corona de España y los Estados generales de las Provincias unidas de los países Bajos en el congreso de Utrech el 26 de junio de 1714 (16).

En el nombre y en gloria de Dios.

Sea notorio á todos: que despues de una larga y sangrienta guerra — que ha aflijido los pueblos, súbditos, reinos y países de la obediencia de los señores rey de España y Estados generales de las provincias unidas de los Países Bajos; movidos dichos señores rey y Estados de una compasión — cristiana, y deseosos de poner fin á las calamidades públicas, de suspender las deplorables consecuencias que la ulterior continuacion de la dicha guerra podría causar, y de convertirlas en efectos agradables de una buena y sincera paz, y en dulces frutos de un entero y firme reposo; y deseando asimismo restablecer, conservar y aumentar la buena inteligencia que por — tan largo tiempo y tan dichosamente había subsistido entre la corona de España y el Estado de las provincias unidas, de la que han sacado tanta utilidad los súbditos de una y otra de las partes para su comercio y navegación: para llegar á tan buen término y á un tan deseado logro, los dichos

(16) CANTILLO, A. "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y de Comercio, que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón". Madrid 1843. pág. 154 a 161.

señores rey de España D. Felipe V y Estados generales de las provincias —
 unidas han comisionado y diputado por sus embajadores estraordinarios y —
 plenipotenciarios á saber: el dicho señor rey, á don Francisco Maria de —
 Paula Tellez Jiron, duque de Osuna, conde de Ureña, marques de Peñafiel, —
 grande de España de primera clase, camarero mayor del rey católico, nota—
 rio mayor en los reinos de Castilla, comendador y clauero mayor de la or—
 den de Calatrava, comendador en la Santiago, jentil-hombre de cámara de su
 Majestad, general en sus ejércitos y capitán de la primera compañía de guar—
 dias de corps; y á don Isidro Casado de Acevedo y Rosales, marques de Mon—
 teleon, vizconde de Alcazar real, del consejo supremo de las Indias y jen—
 til-hombre de la cámara de su Majestad; y los dichos señores Estados gene—
 rales á los señores Jacques de Randwich, señor de Rossém, etc., burgrave —
 del imperio y juez de la ciudad de Niméga; Guillermo Buys, consejero pen—
 sionario de la ciudad de Amsterdam; Bruno Vander-Dussen, burgomaestre, se—
 nador y consejero pensionario de la ciudad de Gonde, asesor en el consejo
 de las Heemrades de Schieland, dykgrave del Grimpener-Waard; Cornelio Van—
 gehel, señor de Spanbroek, Bulkestein, etc., gran bailio del Franco y de
 la ciudad de la Esclusa, superintendente de los feudos dependientes de la
 villa de Brujas dentro de la jurisdicción del Estado; Federico Adrian, ba—
 ron de Reede, señor de Renswoude, de Imminkhusen y Moerkerken, presidente
 de la nobleza en los Estados de la provincia de Utrech, Siccovan, Goslinga,

Grietman de Francquereadeél y curador de la universidad en Franequer; y Car los Fernando, conde de Inhuysen y de Kniphuysen, señor de Vredewold, etc., diputados en sus asambleas de parte de los Estados de Gueldres, de Holanda y Westfrisia, de Zeelanda, de Utrech, de Frisia y de la ciudad de Groninga y Ommelandes; los cuales embajadores estraordinarios y plenipotenciarios, - revestidos respectivamente de plenos poderes (cuyas copias van insertas pa labra por palabra al fin del presente tratado) y juntos en esta ciudad de Utrech, destinada para las negociaciones de una paz general han hecho, con cluido y acordado en virtud de sus dichos plenos poderes, y en nombre de - los dichos señores rey y Estados los artículos que se siguen.

Artículo 1º.

Habr^a de aquí adelante entre el dicho señor rey y sus sucesores re-- yes de España y sus reinos de una parte, y los dichos señores Estados generales de la otra, una buena, firme, fiel é inviolable paz, y cesarán en su - consecuencia é inmediatamente despues de la ratificacion de este tratado - todos los actos de hostilidad de cualquier naturaleza que sean entre los - dichos señores rey y Estados generales, así por mar y otras aguas como por tierra, en todos sus reinos, países, tierras, y señoríos, y por todos sus súbditos y habitantes de cualquier calidad ó condicion que sean, sin excepcion de lugares ni de personas.

Artículo 2º.

Habr  un olvido y perdon general de todo lo que se haya cometido de una parte y otra con motivo de la  ltima guerra; y as  todos los s bditos de dichos se ores rey y Estados generales de cualquier calidad   condici n que sean, sin esceptuar ninguno, podr n volver   entrar y volver n   entrar y ser n efectivamente y sin embarazo restablecidos en la posesi n y pac fico goce de todos sus bienes, honores, dignidades, privilegios, franqu zas, derechos, exenciones, constituciones y libertades, sin poder ser pesquisados, turbados ni inquietados en general ni en particular por ninguna causa   pretesto que sea, en raz n de lo que ya pasado desde el principio de la dicha guerra. Y en consecuencia del presente tratado y despu s de ratificad , les ser  permitido   todos y   cada uno en particular, sin tener necesidad de letras de abolic n y de perdon, el volverse en persona   sus casas y al goce de sus tierras y de todos sus bienes, y el disponer de todo del modo que quieran.

Art culo 3º.

Asimismo, aquellos   quienes han sido embargados y confiscados algunos bienes con motivo de la dicha guerra, sus herederos,   los que representan sus derecho, de cualquier condici n que puedan ser, gozar n de dichos bienes y tomar n posesi n de ellos de su propia autoridad y en virtud del presente tratado, sin que necesiten de recurrir   la justicia, no obs-

tante cualesquier incorporaciones al fisco, empeños de ellos, contratos, -- convenios y transacciones, cualesquiera que sean las renunciaciones hechas en -- dichas transacciones para escluir de alguna parte de dichos bienes á aque-- llos a quienes pertenecen: y todos y cualesquier bienes y derechos que con-- forme al presente tratado sean ó deban ser restituidos recíprocamente á -- los primeros propietarios, sus herederos ó los que tengan su derecho, po-- drán ser vendidos por los dichos propietarios, sin que para esto necesiten de obtener consentimiento particular; y en consecuencia los propietarios -- de las rentas que de parte de los fiscos fuesen constituidas en lugar de -- los bienes vendidos, como tambien de las rentas y acciones constituidas -- respectivamente á cargo de los fiscos, podrán disponer de la propiedad de ellos por venta ó de otra manera, como de sus demás bienes.

Artículo 42.

Los súbditos y habitantes de una parte y de otra podrán tambien re-- clamar sus bienes y efectos que hayan sido detenidos con motivo de la gue-- rra, sea por sus corresponsales ó por otras cualesquier personas; y en ca-- so que estos bienes y efectos se hayan vendido por cualquier persona que -- sea, podrán pedir su producto; y en caso de disputa sobre esto, les será -- permitido apremiar á los detentores de sus bienes y efectos ó á sus deudo-- res por las vías de justicia; y los jueces estarán obligados á administrar-- les pronta y buena justicia, atendiendo solamente en el exámen de estos --

procesos á los méritos de la causa, sin reflexionar de ninguna manera sobre la guerra pasada.

Artículo 5º.

Los súbditos de dicho señor rey no podrán tomar comisión alguna para armamentos particulares ó patentes de represalias de los principes á estados enemigos de dichos señores Estados generales; y menos turbarles ni hacerles daño en manera alguna en virtud de las tales comisiones ó patentes de represalias, ni ir en corso con ellas bajo pena de ser perseguidos y castigados como piratas; lo que igualmente se observará por los súbditos de las provincias unidas con respecto á los súbditos de dicho señor rey. Y á este fin todas las veces que esto fuere requerido de una parte y otra en las tierras de la obediencia de dichos señores rey y Estados generales, se publicarán y renovarán prohibiciones muy espresas y precisas de servirse en manera alguna de las tales comisiones ó patentes de represalia bajo la pena arriba mencionada, la que será ejecutada severamente contra los contraventores, además de la entera restitucion á que estarán obligados en favor de aquellos á quienes hubieren causado daño.

Artículo 6º.

Y para obviar mejor las inconvenientes que podrán sobrevenir de las presas hechas por ignorancia de esta paz, principalmente en los parajes — distantes, ha sido convenido y acordado, que si se hacen algunas presas de

una parte ó de otra en el mar Báltico, ó en el del Norte, desde Tarneuse en Noruega hasta el fin de la Mancha, despues del término de doce dias, ó desde el fin de dicha Mancha hasta el Cabo de San Vicente, despues del de cuatro semanas; y de allí al mar Mediterráneo y hasta la línea, despues - del de seis semanas; y de la otra parte de la línea y en todos los otross parajes del mundo, pasados seis meses; á contar respectivamente desde el día de la firma del presente tratado de paz: las dichas presas y los daños que se hagan despues de estos plazos, como tambien las presas y los daños que se hagan dentro de los dichos términos por los que hubieren tenido noticia de la conclusión de esta paz, serán puestos en cuenta, y rodo lo que hubiere sido tomado, se volverá con indemnización de todos los perjuicios que se hubieren ocasionado.

Artículo 7º.

Todas las patentes de marca y de represalia concedidas antes de ahora por cualquier causa que fuere son declaradas por nulas, y no podrán ser de aquí en adelante dadas por los altos contratantes en perjuicio de los súbditos del otro, sino solamente en caso de manifiesta denegación de justicia, lo cual no podrá ser tenida por probada, si la representación del - que pide las represalias no se comunica al ministro que se hallare en los lugares de la parte del estado contra los súbditos del cual deben despachar se, á fin de que en el término de seis meses, á antes si es posible, pueda

él informarse de lo contrario, ó procurar el cumplimiento de justicia que — sea debido.

Artículo 8º.

Tampoco podrán los particulares, súbditos de dicho señor rey, ser de mandados ó arrestados en sus personas ó bienes por alguna cosa que su Ma— jestad católica pueda deber; ni los particulares, súbditos de dichos se— ñores Estados, por las deudas públicas del estado.

Artículo 9º.

Restablecida tambien entre los dichos señores rey y Estados genera— les la paz, la buena amistad y la correspondencia, como asimismo entre sus súbditos y habitantes recíprocamente, y habiéndose precaucionado que no su ceda cosa que pueda mantener ó causar alguna enemistad; los dichos señores rey y Estados generales procurarán y adelantarán fielmente el bien y la — prosperidad el uno del otro, por medio de todo apoyo, ayuda, consejo y asis tencia en todas ocasiones y en todo tiempo; y no convendrán en adelante en tratado alguno ó negociaciones que puedan ocasionar daño al uno ó al otro; antes bien las romperán y darán aviso de ellas recíprocamente con toda di— ligencia y sinceridad luego que tengan noticia de ello.

Artículo 10º.

Servirá de base al presente tratado el de Munster de 30 de enero de 1648, hecho entre el difunto rey Felipe IV y los señores Estados generales, y tendrá cumplimiento en todo cuanto no se haya mudado por los artículos siguientes, y en cuanto sea aplicable; y por lo que mira á los artículos 5º y 16º de la dicha paz de Munster no tendrán su ejecución sino en lo que concierne solamente á las dos potencias contratantes y á sus vasallos (2).

Artículo 11º.

Los súbditos y habitantes en los países de dichos señores rey y Estados tendrán juntos toda buena correspondencia y amistad, y podrán frecuentar, detenerse y residir en país el uno del otro, y ejercer en él su tráfico y comercio, así por mar y otras aguas, como por tierra, todo respectivamente, con total seguridad y libertad y sin embarazo alguno.

Artículo 12º.

Tambien podrán tener en las tierras y estados del uno y del otro — sus casas propias para vivir y sus almacenes y sótanos para poner sus mercaderías y gozar de ellas recíprocamente con toda libertad y seguridad como un efecto de la paz; y no estarán sujetos á mayores derechos ni impuestos que los súbditos del uno y del otro; ni podrán ser inquiridos, visitados ni inquietados á causa de su negociación ó tráfico, en sus casas, al-

macenas ó sótanos, ya sean alquilados ó propios, si no fuere sobre avisos é indicios suficientes de fraude ó de comercio de contrabando; y en cuyo caso los oficiales y factores de los arrendadores podrán hacer la visita que convenga con el permiso del juez conservador de las aduanas y otras rentas; y el comerciante que fuere visitado podrá llamar al juez conservador ó al cónsul de su nacion para asistir á la visita, el cual podrá solo servir de testigo, y sin que le sea permitido hacer vejación alguna al comerciante ni á su comercio, bien entendido siempre que si los propios súbditos del dicho señore rey ó de cualquier otro príncipe, estado, nación ó ciudad fueren entonces ó despues tratados mas favorablemente tocante á esto, les súbditos de los dichos señores Estados generales lo serán de la misma manera.

Artículo 13º.

Los dichos súbditos de una parte y de la otra podrán tambien frecuentar con sus mercaderías y navios los países, tierras, ciudades, puertos, plazas y rios del uno y del otro estado, y llevar a ellos y vender dichas mercaderías indistintamente á cualquier personas; y comprar, y traficar y transportar toda suerte de mercaderías cuya entrada ó salida no sea prohibida general y universalmente á todos, así súbditos como extranjeros, por las leyes y ordenanzas de los estados del uno y del otro, pagando los derechos de entrada ó salida y otros que se pagaren por los propios súbdi—

tos, y por otras naciones amigas las más favorecidas; y así facilitarán -
recíprocamente la entrada y la salida de sus navios, sin más dilación ni
embarazo.

Artículo 14º.

Los dichos súbditos de una parte y de otra tampoco serán obligados
á pagar mayores ni otros derechos, cargas, gabelas ó impuestos, cuales—
quiera que sean, sobre sus personas, bienes, mercaderías, géneros, navios
ó fletes de estos, directa ni indirectamente bajo de cualquier nombre, ti
tulo ó pretesto que sea, sino aquellos que pagaren los propios y natura—
les súbditos de la una y de la otra.

Artículo 15º.

Yá fin de que los oficiales y ministros no puedan pedir ni tomar de
los comerciantes y súbditos respectivos mayores tasas, derechos ni sala—
rios de los que deben tomar en virtud de este tratado, y que los dichos -
comerciantes y súbditos puedan saber con certeza lo que estuviere mandado
sobre esto, ha sido convenido que haya aranceles ó tablillas en todos --
los parajes donde ordinariamente se pagan estos derechos, en las cuales -
se espresará cuánto se debe pagar por los derechos de entrada y de salida.
Y queriendo su Majestad católica poner remedio sobre lo que se le ha re—
presentado de que los inspectores, llamados comunmente vistas, favorecen
mucho á los arrendadores de la aduana, particularmente por los excesivos

avalúos de las mercaderías que no estan bastante especificadas en -
dichos aranceles, y que esto es en estreno perjudicial al comercio y trá-
fico; dará las órdenes necesarias para que estas quejas cesen enteramen-
te.

Artículo 16º.

Habiendo pagado una vez los dichos súbditos de una parte y otra los
derechos de entrada comprendidos en las tarifas y otras leyes, no serán -
obligados á pagar mas derechos, aunque trasporten por tierra sus mercade-
rías ó géneros de un reino ó provincia al otro dentro de España, debiéndo
se observar esto de la misma manera dentro del estado de las provincias -
unidas. En cuanto á los otros derechos, pagarán respectivamente los mis-
mos que pagan los propios súbditos ó las otras naciones más favorecidas.

Artículo 17º.

Los súbditos de dichos señores Estados generales no podrán asimismo
ser tratados en España, ni en los reinos y estados de su dependencia de -
otra manera ó menos favorablemente que la nación más privilegiada; y aun
gozarán en lo que toca al comercio y navegación, y generalmente en todo, -
sin escepción ni reserva alguna, de los mismos privilegios, franquezas, --
exenciones, inmunidades y seguridades de que han gozado antes de esta gue-
rra, y de que otras naciones y ciudades mercantiles las mas favorecidas --
puedan gozar ahora, ó podrán despues sobre esto, ya sea en virtud de tratao

dos de paz ó de comercio, ya por contratos, reglamentos ó actos particulares; de manera que los mismos privilegios, franqu^{ez}as, exenciones, inmunidades y seguridades que han sido concedidas ó se concedieren despues al - rey de Francia, á la reina de la Gran Bretaña, ó á cualquier otro reino, estado, nacion, ó ciudad, cualesquiera que sean, ó á sus súbditos, serán igualmente concedidas á dichos señores Estados, ó á sus súbditos con todas las cláusulas y circunstancias ventajosas que á ellas se añadirán; y lo mismo se observará tambien por lo que mira á los súbditos de dicho — señor rey, quienes en toda la estencion de los países de la obediencia de dichos señores Estados serán tratados tan favorablemente como la nacion más privilegiada.

Artículo 18º.

Los mercaderes, maestros de navío, pilotos, marineros, sus buques, mercaderías, géneros y otros bienes que les pertenecen no podrán ser embargados ni detenidos, ni en virtud de una orden general ó particular, ni por cualquier causa que sea de guerra ó otra; y menos con el pretesto de querer servirse de ellos para la conservación y defensa del país. Pero no se entienden ni comprenden en esto los embargos y secuestros de justicia por las vías ordinarias por causa de deudas propias, obligaciones y contratos válidos de aquellos á quines se hayan hecho los dichos embargos, en lo - cual se procederá según costumbre, por derecho y razón.

Artículo 19º.

Los navios cargados por los súbditos del uno de los altos contratantes que pasen por delante de las costas del otro y den fondo en las radas ó puertos por borrasca ú otra causa, no serán forzados á descargar allí, - ó á vender sus mercaderías en todo ni en parte, ni á pagar derechos algunos; á menos que por su gusto los capitanes no las descarguen, y vendan - alguna parte de su carga. Pero les será libre, obtenido antes el permiso de los que tienen la dirección de los negocios marítimos, descargar y vender una partida de la cargazon, únicamente, para comprar los víveres ó - las cosas necesarias para el reparo del navio; y en este caso no se podrán exigir los derechos por toda la carga, sino solamente por la pequeña par-tida que se hubiere descargado ó vendido; pero si ellos descargaren mas - de lo que incluye la licencia despachada pagarán por toda la cargazón.

Artículo 20º.

Los navios de guerra del uno y del otro hallarán las playas, rios, - radas y puertos libres y abiertos para entrar, salir y mantenerse al an- - cla todo el tiempo que necesiten sin poder ser visitados en su carga; con todo, deberán usar de este permiso con discrecion y no dar motivo alguno de recelo por el gran número de buques, por una larga y afectada deten- - cion, ni por otra cosa, á los gobernadores de las plazas y puertos, á los cuales los capitanes de los dichos navios darán parte de la causa de su -

arribada y detención. Pero por lo que mira á los navios mercantes de los súbditos del uno y del otro, les será permitido á los arrendadores ó oficiales de la aduana poner en ellos guardas luego que hayan entrado en los dichos puertos.

Artículo 21º.

Los navios de guerra de los dichos señores rey y Estados generales y los de sus súbditos que fueren armados en guerra, podrán con toda libertad conducir las presas que hubieren hecho de los enemigos adonde mejor les parezca, sin estar obligados á derechos algunos, sea de almirantes ó de almirantazgo ó de otro qualquiera, siempre que las dichas presas no descarguen; lo cual será permitido despues de haber obtenido permiso, en cuyo caso los derechos de entrada se pagarán respectivamente segun las leyes del pais; bien entendido que no será permitido el descargar mercaderías de contrabando ó prohibidas. Y los dichos navios ó las dichas presas que entraren en los puertos de dicho señor rey, ó de dichos señores Estados generales no podrán ser arrestados ó embargados, ni los oficiales de la tierra podrán tener conocimiento alguno en el valor de las presas, las cuales podrán salir y ser conducidas francamente y con toda libertad á los parajes señalados en las comisiones, lo cual los capitanes de dichos navios deberán hacer constar; y al contrario no se dará asilo ni retirada en los puertos de una y otra parte á los que hubieren hecho presas sobre

los súbditos de su Majestad católica ó de los señores Estados generales; y si entraran en ellos por fuerza de tempestad ó de peligro de mar se les hará salir lo mas presto que sea posible.

Artículo 22º.

Los cónsules que los dichos señores Estados nombraren en los reinos y estados de dicho señor rey para el amparo y proteccion de sus súbditos, tendrán y gozarán en ellos el mismo poder y autoridad en el ejercicio de sus cargos, y las mismas exenciones é inmunidades que haya tenido otro algun cónsul antes de ahora ó pudiere tener despues en los dichos reinos; y los cónsules españoles que residan en las Provincias unidas — tendrán y gozarán en ellas de todo cuanto haya tenido hasta aquí, ó podrá tener despues en las dichas provincias otro cónsul de otra cualquier ración.

Artículo 23º.

Los súbditos y habitantes de los Países Bajos podrán en todas partes de las tierras de la obediencia de dicho señor rey servirse de los — abogados, procuradores, escribanos, agentes y ejecutores que les pareciere, para lo cual recibirán estos comision de los jueces ordinarios cuando sea necesario y estos sean requeridos; y los dichos súbditos y habitantes de dicho señor rey que vengan á los países de dichos señores Estados, gozarán de la misma asistencia reciprocamente.

Artículo 24º.

Los mismos súbditos y habitantes de una parte y de otra no serán - compelidos á mostrar ni presentar sus registros y libros de cuentas á persona alguna, sino fuere para hacer prueba, evitar los pleitos y contestaciones; y no podrán ser embargados, retenidos ni tomados de entre sus manos con áningun pretesto. Y será permitido á los dichos súbditos de una - parte y de otra en los lugares respectivos donde vivieren el tener sus - libros de cuenta, de negocio y correspondencia en la lengua que gustaren, española, flamenca ó cualquier otra, por razón de lo cual no serán molestados, ni sujetos á pesquisa de persona alguna; y cualquier otra cosa que haya sido concedida por el uno ó el otro de los altos contratantes á al- guna otra nacion sobre este punto se entenderá igualmente por concedida - aquí.

Artículo 25º.

Los súbditos y habitantes de los países de los dichos señores rey y Estados generales, de cualquier calidad y condicion que sean, son declara- dos capaces de sucederse respectivamente los unos á los otros tanto — por testamento, como sin testamento, segun las costumbres de los países. Y si algunas herencias hubiesen recaído antes de ahora á algunos, serán - mantenidos y conservados en ellas.

Artículo 26º.

Los bienes, mercaderías, papales, escrituras, libros de cuentas y todo lo que pueda pertenecer á los súbditos de dichos señores Estados, - muertos en España, pertenecerán inmediatamente á sus herederos que estando presentes y siendo mayores de edad, ó bien ejecutores ó tutores, testamentarios ó sus apoderados, segun la exigencia del caso, podrán también tomar luego posesion de ellos, administrarlos y disponer de ellos libremente, conforme á derecho. Pero en caso que los herederos de los - dichos súbditos muertos en España esten ausentes ó sean menores, y que - el difunto no haya precaucionado por poderes; los bienes, mercaderías, - papeles, escrituras, libros de cuentas y todo el remanente del difunto - serán entonces inventariados por escribano público en presentía del juez conservador de la nacion; y en caso que no le haya, en presenencia del juez ordinario, acompañado del cónsul ó otro ministro de los dichos señores - Estados y de dos comerciantes de la nacion, y depositados en poder de - dos ó tres de estos que nombrará el dicho cónsul ó ministro para guardar los y conservarlas para los propietarios y acreedores; y en los parajes dpnde no hay ni cónsul ni otro ministro se hará todo esto en presenencia - de dos ó tres comerciantes de la misma nacion, para lo cual serán alegiados por la pluralidad de votos. Y esto mismo se observarán en igual caso por lo que mira a los súbditos del rey católico en las Provincias unidas

Artículo 27º.

Como está ya señalado en Cádiz un sitio conveniente para entierro - de los cuerpos de los súbditos de dichos señores Estados que mueren allí; el dicho señor rey dará cuanto antes la providencia necesaria para que en otras ciudades mercantiles se destinen tambien lugares decentes para ente^rrar los cuerpos de aquellos que de la parte de dichos señores Estados mu^rrieren en dominios de dicho señor rey.

Artículo 28º.

Y á fin de que las leyes de comercio que han sido obtenidas por la paz no puedan quedar infructuosas, como sucedería si los súbditos de di- chos señores Estados fuesen molestados por el caso de conciencia cuando - van, vienen ó residen en los dominios de dicho señore rey para ejercer en ellos el tráfico ú á otro fin; por esta causa, á fin de que el comercio - se haga seguro y sin peligro tanto por mar como por tierra, el dicho señor rey dará las órdenes necesarias para que los súbditos de dichos señores Es^tados no sean molestados contra y en perjuicio de las leyes del comercio; y que ninguno de ellos sea inquietado ni turbado por su creencia mientras no dieren escándalo ni cometieren ofensa pública, de lo que los dichos súb^ditos deberán abstenerse, conducirse y comportarse con toda modestia. Lo mismo se obser^vará respecto á los súbditos de dicho señ^{or} rey que residie^ren en las Provincias unidas.

Artículo 29º.

El dicho señor rey conservará á los súbditos de los dichos señores Estados generales en las ciudades mercantiles de su reino en donde han tenido jueces conservadores en tiempo del difunto rey Carlos II, la misma facultad, y la gozarán tambien en las demas ciudades donde otras naciones la gozan, ó podrán todavía gozar en adelante, todo de la misma manera y con la misma autoridad de que los jueces conservadores han usado durante el reinado del difunto rey Carlos II; y la apelación de las sentencias de estos jueces conservadores podrán tambien ser interpuesta y -proseguida conforme ha sido practicado en el mismo reinado: todo lo cual se observará á menos de que se convenga otra cosa sobre esto.

Artículo 30º.

Los derechos impuestos en las mercaderías y manufacturas de los súbditos de las Provincias unidas en tiempo y por causa de la guerra sobre los que se pagaban por los aranceles del tiempo del rey Carlos II, cesarán inmediatamente despues de firmada la paz; y asimismo cesarán los derechos que hubieren sido cargados en las mercaderías y manufacturas que salian de España en el curso y con motivo de la dicha guerra; pagando de aquí adelante los mismos derechos que las demas naciones las mas favorecidas.

Artículo 31º.

Su Majestad católica promete no permitir que nacion alguna estran-
jera, cualquiera que sea, por ninguna razón, ni bajo de cualquier pretes-
to envíe navío ó navios ó vaya a comerciar á las Indias españolas; antes
bien se obliga á restablecer y mantener despues la navegación y comercio
en estas Indias de la manera que estaba todo durante el réinado del difun-
to rey Carlos II, y conforme á las leyes fundamentales de España que pro-
híben absolutamente á todas las naciones extranjeras la entrada y el co-
mercio en estas Indias, y reservan uno y otro únicamente á los españoles
súbditos de su dicha Majestad católica. Y para el cumplimiento de este -
artículo, los señores Estados generales prometen tambien ayudar á su Ma-
jestad católica; bien entendido que esta regla no perjudicará al conteni-
do del contrato del asiento de negros hecho últimamente con su Majestad -
la reina de la Gran Bretaña.

Artículo 32º.

Todos los prisioneros de guerra de una parte y de otra serán pue-
tos en libertad sin pagar rescate alguno y sin distincion de lugares ni -
de banderas ó estandartes, en donde ó bajo de las cuales hayan servido, -
por quanto estos prisioneros estan en poder de los dichos señores rey y
Estados generales; y las deudas que los dichos prisioneros de guerra de
una parte y de otra hubieren contraído ó hecho serán pagadas, las de los

españoles por su Majestad católica, y las de los prisioneros de los señores Estados por el estado, respectivamente, y en el término de tres meses después del cambio de las ratificaciones de este tratado.

Artículo 33º.

Y para que el comercio y la navegación de una parte y de otra sea todavía más libre y segura se ha convenido en confirmar el tratado de marina hecho en el Haya en 17 de diciembre de 1650 entre el difunto rey - Felipe IV y los señores Estados generales, y que este tratado se observe y ejecute en todo como si estuviese inserto aquí palabra por palabra; escepto la prohibición comprendida en los artículos 3 y 4 de dicho tratado, que no tendrá lugar (3).

Artículo 34º.

Aunque se ha dicho en muchos de los artículos precedentes que los súbditos de una parte y otra podrán libremente ir, frecuentar, residir, navegar y traficar en los países, tierras, ciudades, puertos, plazas y - rios de uno y otro de los altos contratantes, se entiende no obstante — que los dichos súbditos no gozarán de esta libertad sino en los estados del uno y del otro en Europa, respecto de estar espresamente convenido - que por lo que mira á las Indias españolas no se hará la navegación y el comercio sino conforme al artículo 31 de este tratado; y que en las In— dias así orientales como occidentales que están bajo del dominio de los

señores Estados generales se continuará aquella navegación y comercio como se han hecho hasta ahora; y por lo que mira á las islas de Canarias, - la navegación y comercio de los súbditos de los señores Estados se harán de la misma manera que en el reinado del difunto rey Carlos II.

Artículo 35º.

Si por inadvertencia ó otra causa sobreviniere alguna inobservan—cia ó inconveniente al presente tratado por parte de los dichos señores rey ó Estados, ó sus sucesores, no dejará de subsistir en toda su fuerza esta paz y alianza, sin que por ello se llegue á romper la amístad y buena correspondencia, pero repararán prontamente las dichas contravencio—nes; y si estas procedieren de culpa de algunos particulares súbditos, - estos solos serán castigados; y se reparará el daño en el mismo paraje en donde hubieren cometido la contravencion, si fueren cojidos allí, ó - bien en el lugar de su domicilio; sin que puedan ser perseguidos en otra parte en sus personas ni bienes de ninguna manera.

Artículo 36º.

Y para asegurar mejor en adelante el comercio y la amistad entre - los súbditos de dicho señor rey y los de dichos señores Estados, ha sido acordado, que si acaeciére en lo sucesivo alguna interrupcion de amistad ó rompimiento entre la corona de España y los dichos señores Estados. (lo

que Dios no quiera), siempre se dará el término de un año y un día después de dicho rompimiento á los súbditos de una parte y de otra para retirarse con sus efectos y trasportarlos adonde mejor les parezca: lo que se les permitirá hacer, como tambien el vender ó trasportar sus bienes y muebles con toda libertad, sin que les puedan poner embarazo alguno, ni proceder durante el dicho término de un año y un día á embargo alguno de sus efectos, y menos aun al arresto de sus personas.

Artículo 37º.

Puesto que la feliz continuación de esta paz, como el reposo y la seguridad de la Europa, dependen, entre otras cosas, principalmente tambien de que las dos coronas de España y de Francia queden para siempre in dependientes la una de la otra, y sin que puedan jamás unirse en la cabeza de un mismo rey; y que su Majestad católica á este fin y de consentimiento del rey cristianísimo ha renunciado en 5 de noviembre del año de 1712 por sí mismo, sus herederos y sucesores perpétuamente y en los términos mas expresivos á todo derecho, título y pretension que pueda tener á la corona de Francia, y que de la otra parte, los principes de la casa real de Francia han renunciado tambien por si mismos, sus herederos y sucesores, para siempre y en los términos mas fuertes á todo derecho, título y pretension, cualquiera que sea, á la corona de España; y puesto que estas re nuncias y las declaraciones que han resultado de ellas en España y en Franci

cia han venido tambien á ser leyes fundamentales é inviolables del uno y del otro reino; su Majestad católica confirma todavía por este tratado, -- de la manera mas firme, su dicha renuncia á la corona de Francia; y promete y se empeña, tanto por sí como por sus herederos y sucesores, de cumplirla y hacerla cumplir religiosamente, sin permitir ni sufrir que directa ni indirectamente se contravenga en todo ó en parte, como tambien de -- emplear todo su poder para que las dichas renunciaciones de los principes de -- la casa real de Francia tengan su pleno y entero efecto; y que así las dos coronas de España y de Francia queden siempre de tal manera separadas la una de la otra que no puedan jamás unirse.

Artículo 38º.

En el presente tratado de paz y de alianza serán comprendidos todos los reyes, principes y Estados que serán nombrados de un comun y recíproco consentimiento y satisfaccion de una parte y otra, dentro de un tiempo conveniente.

Artículo 39º.

Y para mayor seguridad de este tratado y de todos los puntos y artículos en él contenidos, será publicado, comprobado y registrado de una -- parte y de otra en los consejos, cortes y plazas donde es costumbre hacer las publicaciones, comprobaciones y registros.

Artículo 40º.

El presente tratado será aprobado y ratificado por los dichos señores rey y Estados generales, y los despachos de ratificación se cambiarán en el término de seis semanas, ó antes si se puede, contando desde el día de la firma.

En fé de lo cual, nosotros los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de su dicha Majestad y de los señores Estados generales, en virtud de nuestros respectivos poderes, hemos firmado en sus nombres el presente tratado de nuestras manos, y sellado con el sello de nuestras armas. En Utrech á 26 de junio de 1714,-- El duque de Osuna.-- El marqués de Monteleon.-- B. Vander-Dussen.-- C. Sico-van Spambrock.-- F. baron de Reede de Renswoude.-- Graaf Van-Kniphuisen.

El señor rey católico D. Felipe V ratificó este tratado en el Pardo á 27 de julio; y los Estados generales en la Haya á 16 de agosto de dicho año de 1714.

Tratado de paz y amistad ajustado entre España y el Por-
tugal en Utrech á 6 de febrero de 1715 (17)

En el nombre de la Santísima Trinidad.

Sea notorio á todos los presentes y venideros, que hallándose la -
mayor parte de la cristiandad aflijida por una larga y sangrienta guerra,
ha sido Dios servido de mover los corazones del muy alto y muy poderoso
príncipe don Felipe V, por la gracia de Dios, rey católico de España, y -
del muy alto y muy poderoso príncipe don Juan V, por la gracia de Dios,-
rey de Portugal, á un ardiente y sincero deseo de contribuir al univer-
sal reposo y asegurar la tranquilidad á sus súbditos, renovando y resta-
bleciendo la paz y buena correspondencia que había antes entre las dos -
coronas de España y de Portugal, para cuyo efecto sus dichas Majestades
han dado sus plenos poderes á sus embajadores extraordinarios y plenipo-
tenciarios, á saber: su Majestad católica el excelentísimo señor don Fran-
cisco María de Paula Tellez, Jirón, Benavides, Carrillo y Toledo, Ponce -
de Leon, duque de Osuna, conde de Ureña, marqués de Peñafiel, grande de
España de primera clase, camarero y copero mayor de su Majestad católica,
notario mayor de los reinos de Castilla, claver mayor en la orden y ca-

(17) CANTILLO, A. "TRATADOS, CONVENIOS Y DECLARACIONES DE PAZ Y DE COMER-
CIO, que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas espa-
ñoles de la Casa de Borbón. Madrid, 1843. pág. 164 a 169.

balleria de Calatrava, comendador de ella y de la de Usagre en la de San tiago, general de los ejércitos de su Majestad, jentilhombre de su cáma- ra y capitán de la primera compañía española de sus reales guardias de - corps; y su Majestad portuguesa, á los escellentísimos señores Juan Gomez de Silva, conde de Tauroca, señor de las villas de Tauroca, Lalim, Laza- rim, Peñalva, Gulfar y sus dependencias, comendador de Villacoba, del — consejo de su Majestad y maestro de campo general de sus ejércitos, y don Luis de ACuña, comendador de Santa María de Almendra, y del consejo de su Majestad portuguesa: los cuales habiendo venido á Utrech, lugar destina- do para el congreso, y habiendo examinado recíprocamente sus plenos pode res, cuyas copias se insertarán al fin de este tratado, despues de haber implorado la divina asistencia, han convenido en los artículos siguien— tes.

Artículo 1º.

Habrá una paz sólida y perpétua y una verdadera y sincera amistad entre su Majestad católica, sus descendientes, sucesores y herederos, to dos sus estados y súbditos, de una parte; y su Majestad portuguesa, sus descendientes, sucesores y herederos, todos sus estados y súbditos, de - la otra; la cual paz será observada firme é inviolablemente tanto por — tierra como por mar, sin permitir que se cometa hostilidad alguna entre las dos naciones en ninguna parte y con ningun pretesto; y si, aunque no

se espera, se llegase á contravenir en alguna cosa al presente tratado, este quedará no obstante en su vigor, y la dicha contravención se reparará de buena fé sin dilacion ni dificultad, castigando rigurosamente á los agresores, y volviéndolo todo á su primer estado.

Artículo 2º.

En consecuencia de esta paz se olvidarán enteramente todas las hostilidades cometidas hasta ahora, de suerte que ningun súbditos de las — dos coronas tendrá derecho para pretender satisfaccion de los daños padecidos por las vias de justicia, ni por otra alguna; ni tampoco podrán — alegar recíprocamente las pérdidas que hayan tenido durante la presente guerra, y olvidarán todo lo pasado como si no hubiese habido interrup- — ción alguna en la amistad que se establece al presente.

Artículo 3º.

Habrá una amnistía para todas las personas, así oficiales como soldados y otros que durante esta guerra ó con motivo de ella hubieren mudado de servicio; escepto para aquellos que hayan tomado partido, ó que se hayan empeñado en servicio de otro principe que no sea su Majestad católica ó su Majestar portuguesa; y solo aquellos que hayan servido á su Majestad católica ó á su Majestar portuguesa serán comprendidos en este artículo, los cuales lo serán tambien en el artículo 11 de este tratado.

Artículo 4º.

Todos los prisioneros y rehenes serán restituidos prontamente y -
puestos en libertad de una parte y otra sin escepcion y sin pedir cosa al
guna por su trueque, ni por el gasto que hubieren hecho, como ellos satis-
fagan las deudas particulares que hubieren contraído.

Las plazas, castillo,s ciudades, lugares, territorios y campos --
pertenecientes á las dos coronas, así en Europa como en otra cualquier par
te del mundo se restituirán enteramente y sin reserva alguna; de suerte -
que los límites y confines de las dos monarquías quedarán en el mismo es-
tado que tenían antes de la presente guerra. Y particularmente se volue--
rán á la corona de España las plazas de Alburquerque y la Puebla con sus
territorios en el estado en que se hallan al presente, sin que su Majestad
portuguesa pueda pedir cosa alguna á la corona de España por las nuevas -
fortificaciones que ha hecho aumentar en dichas plazas; y á la corona de
Portugal el castillo de Noudar con su territorios, la isla de Verdejo y el
territorio y colonia del Sacramento.

Artículo 6º.

Su Majestad católica no solamente volverá a su Majestad portuque-
sa el territorio y colonia del Sacramento, situada á la orilla septentrio
nal del rio de la Plata, sino tambien cederá en su nombre y en el de todos

sus descendientes, sucesores y herederos toda acción y derecho que su Majestad católica pretendía tener sobre el dicho territorio y colonia, haciendo la dicha cesión en los términos mas firmes y mas auténticos, y con todas las cláusulas que se requieren, como si estuvieran insertas aquí, - á fin que el dicho territorio y colonia queden comprendidos en los dominios de la corona de Portugal, sus descendientes, sucesores y herederos, - como haciendo parte de sus estados, con todos los derechos de soberanía, - de absoluto poder y de entero dominio, sin que su Majestad católica, sus descendientes, sucesores y herederos puedan jamás turbar á su Majestad portuguesa, sus descendientes, sucesores y herederos en la dicha posesión. ¶ En virtud de esta cesión, el tratado provisional concluido entre las dos coronas en 7 de mayo de 1681 quedará sin efecto ni vigor alguno. Y su Majestad portuguesa se obliga á no consentir que otra alguna nacion de Europa, escepto la portuguesa, pueda establercerse ó comerciar en la dicha colonia directa ni indirectamente, bajo de pretesto alguno: prometiendo además no dar la mano ni asistencia á nacion alguna extranjera para que pueda introducir algun comercio en las tierras de los dominios de la corona de España: lo que está igualmente prohibido á los mismos súbditos de su Majestad portuguesa.

Artículo 7º.

Aunque su Majestad católica cede desde ahora á su Majestar portu—

guesa el dicho territorio y colonia del Sacramento, según al tenor del artículo antecedente; su Majestad católica podrá no obstante ofrecer un equivalente por la dicha colonia que sea á gusto y satisfaccion de su Majestad portuguesa, y señalar para este ofrecimiento el término de año y medio, - que empezará desde el día de la ratificacion de este tratado, con la declaración de que si este equivalente llega a ser aprobado y aceptado por su Majestad portuguesa, el dicho territorio y colonia pertenecerán á su - Majestad católica como si no lo hubiese jamás vuelto ni cedido; pero si el dicho equivalente no llegase á ser aceptado por su Majestad portuguesa, su dicha Majestar quedará en posesión del dicho territorio y colonia, como - está declarado en el artículo antecedente.

Artículo 8º

Se espedirán órdenes á los oficiales y otras personas á quien toca re para la entrega recíproca de las plazas tanto en Europa como en América. mencionadas en el artículo 5º. Y por lo que mira á la colonia del Sacramento, no solamente enviará su Majestad católica sus órdenes en derechura al gobernador de Buenos-Aires para hacer la entrega, sino que dará tambien - un duplicado de dichas órdenes, con una prevencion tan precisa al dicho - gobernador que no pueda bajo de pretesto alguno, ó caso no previsto, diferir la ejecución, aunque no haya recibido todavía las primeras. Este duplicado, como tambien las órdenes que miran á Noudar y a la isla de Verde-

jo se cambiarán con las de su Majestad portuguesa para la entrega de Alburquerque y la Puebla por medio de comisarios que para este efecto se hallarán en los confines de los dos reinos; y la entrega de dichas plazas, - así en Europa como en América la harán en el término de cuatro meses, contados desde el día del cambio recíproco de las dichas órdenes.

Artículo 9º.

Las plazas de Alburquerque y la Puebla se volverán en el mismo estado en que estan, y con igual cantidad de municiones de guerra, número de cañones y calibre de estos, como tenían cuando fueron tomadas, según los inventarios que de esto se hicieron: y los cañones, municiones de guerra y provisiones de boca que se hallaren de mas en dichas plazas, deberán ser conducidas á Portugal. Todo lo que se acana de decir tocante á la restitucion de las municiones de guerra y cañones se entiende igualmente por lo que mira al castillo de Noudar y á la colonia del Sacramento.

Artículo 10º.

Los habitantes de las dichas plazas y de todos los demas lugares ocupados durante la presente guerra que no quieran quedarse en ellos, tendran la libertad de retirarse y de vender y disponer a su gusto de sus bienes muebles é inmuebles, y gozarán de todos los frutos que hubiesen cultivado y sembrado, aunque las tierras y caserías sean traspasadas á otros poseedores.

Artículo 11º.

Los bienes confiscados recíprocamente con motivo de la presente guerra se restituirán á sus antiguos poseedores y á sus herederos, pagaNdo estos antes las mejoras útiles que hayan hecho en ellos; pero no podrán pretender jamás de las personas que han gozado hasta aquí los dichos bienes el valor de sus productos desde el tiempo de la confiscación hasta el dia de la publicación de la paz. Y á fin de que la restitución de la propiedad de los dichos bienes confiscados pueda ejecutarse, las partes interesadas estarán obligadas á presentarse en el término de un año ante los tribunales á quienes toque, en donde dichas partes litigarán sus derechos, y sus causas serán juzgadas dentro del término de otro año.

Artículo 12º.

Todas las presas hechas de una parte y otra durante el curso de la presente guerra, ó con ocasión de ella, serán juzgadas por buenas; y no quedará á los súbditos de las dos naciones algun derecho ni acción para pedir en tiempo alguno que dichas presas se les vuelvan, atento á que las dos Majestades reconocen las razones que ha habido para hacer las dichas presas.

Artículo 13º.

Para mayor seguridad y validación del presente tratado, se confirma de nuevo el que se hizo entre las dos coronas en 13 de febrero de 1668, el cual queda en su fuerza en todo lo que no fuere revocado por el presente tratado, y se confirma particularmente el artículo 8º de dicho tratado de 13 de febrero de 1668, como si estuviera inserto aquí palabra por palabra. (2) Y sus Majestades católica y portuguesa ofrecen recíprocamente dar sus órdenes para que se haga una pronta y entera justicia á las partes interesadas.

Artículo 14º.

Tambien se confirman y comprenden en el presente tratado les catorce artículos contenidos en el tratado de transaccion hecho entre las dos coronas en 18 de junio de 1701, los cuales quedarán todos en su fuerza y vigor, como si estuvieran insertos aquí palabra por palabra.

Artículo 15º.

En virtud de todo lo estipulado en la susodicha transaccion del asiento para la introduccion de negros, su Majestad católica debe á los interesados en el dicho asiento la suma de doscientos mil escudos de anticipacion que los interesados prestaron á su Majestad católica con los intereses á ocho por ciento desde el día del empréstito hasta el entero pago, lo que hace, contando desde 7 de junio de 1696 hasta el 6 de enero

de 1715 la sumadde doscientos noventa y seis mil escudos, como tambien - la suma de trescientos mil cruzados, moneda portuguesa, cuya reducción - asciende a cientoy sesenta mil escudos. Estas tres sumas se reducen por el presente tratado á una sola de seiscientos mil escudos, que su Majes- tad católica promete pagar en tres pagos iguales y consecutivos de dos- cientos mil escudos cada uno. El primer pagamento se hará al arribo de - la primera flota, flotilla ó galeotes que lleguen a España despues del - cambio de las ratificaciones del presente tratado; y este primer pago se rá aplicado á los intereses debidos por el capital de los doscientos mil escudos de anticipación; el segundo al arribo de la segunda flota, floti lla ó galeones, y este será por el capital de los doscientos mil escudos de anticipación; y el tercero al arribo de la tercera flota, flotilla, ó galeones, por los trescientos mil cruzados, valuados á ciento y sesenta mil escudos, y el resto de los cuarenta mil escudos de intereses. Las su mas necesarias para estos tres pagas podrán ser llevadas á Portugal en - moneda acuñada; ó en barras de oro ó de plata. mediante lo cual la suma de doscientos mil escudos de anticipación no llevará intereses despues - del día de la firma del presente tratado; pero si su Majestad católica - no paga la dicha suma al arribo de la segunda flota, flotilla ó galeones, los doscientos mil escudos de anticipación llevarán intereses al ocho por ciento desde el arribo de la segunda flota, flotilla ó galeones hasta el entero pago de esta suma.

Artículo 16º.

Su Majestad portuguesa cede por el presente tratado, y promete hacer ceder á su Majestad católica todas las sumas debidas por su Majestad católica en las Indias de España á la compañía portuguesa del asiento para la introducción de negros, excepto los seiscientos mil escudos mencionados en el artículo 15 de este tratado. Su Majestad portuguesa - cede tambien á su Majestad católica lo que los susodichos interesados - puedan pretender de la herencia de don Bernardo Francisco Marin (3).

Artículo 17º.

El comercio será generalmente abierto entre los súbditos de las dos Majestades con la misma libertad y seguridad que lo estaba antes de la presente guerra: y en muestra de la sincera amistad que desean, no so lamente restablecer, sino aumentar entre los súbditos de las dos coronas su Majestad católica concede á la nacion portuguesa, y su Majestad por tuguesa á la española todas las ventajas en el comercio, y todos los pri vilegios, libertades y exenciones que han concedido hasta ahora y conce derán en adelante a la nacion mas favorecida y más privilegiada de todas las que trafican en las tierras de los dominios de España y de Portugal, lo cual, no obstante, no debe entenderse sino por lo que mira á las tie rras situadas en Europa, respecto de que el comercio y la navegación de las Indias están únicamente reservados á las dos solas naciones en las -

en las tierras de sus respectivos dominios en América; excepto lo que -
ha sido estipulado últimamente en el contrato del asiento de negras con
cluido entre su Majestad católica y su Majestad británica.

Artículo 18º.

Y por que en la buena correspondencia que se establece se deben
preaver los daños que pueden ser recíprocos, respecto de que en la con
cordia hecha entre las dos coronas en tiempo del rey don Sebastian, de
gloriosa memoria, habiéndose declarado los casos en que los delincuen-
tes deben ser vueltos de una parte y otra, y la restitucion de los ro-
bos, no se pudo comprender el tabaco, que no conocían cuando hicieron -
dicha concordia; y que no obstante está tan introducido y en uso, así en
Portugal como en España, que se saca un gran producto de sus estancos;-
su Majestad católica se obliga á hacer que no puedan introducir en las
tierras del reino de España y en ningunas otras de sus dominios el tabaco
de Portugal, aunque haya sido trabajado ó molido en las dichas tierras
ó reinos ó en otras partes; y á dar sus órdenes á fin de que todas las
fábricas de tabaco portugues que se hallaren en los reinos y tierras de
los arriba dichos dominios se destruyan, como tambien las que se hagan de
nuevo, imponiendo graves penas á los culpables en estos delitos, y en-
cargando, no solamente á los oficiales del justicia, sino tambien á los
de guerra, que hagan observar y ejecutar lo que queda arriba dicho; Y su

Majestad portuguesa se obliga igualmente á mandar hacer las mismas prohi
biciones y con las mismas circunstancias que su Majestad católica por -
lo que mira al tabaco de España en las tierras de Portugal y otras cua-
lesquiera de sus dominios.

Artículo 19º.

Los navios de las dos naciones así de guerra como mercantes po-
drán entrar recíprocamente en los puertos de los dominios de las dos co
ronas donde tenían constumbre de entrar por lo pasado, con condicion de
que en los mayores puertos no haya á un mismo tiempo mas de seis naves
de guerra, ni mas de tres en los puertos menores. Y en caso que un ma-
yor número de naves de guerra de una de las dos naciones arribe delan-
te de algun puerto de la otra, estas no podrán entrar en él sin el per
miso del gobernador ó del magistrado. Pero si obligadas por la fuerza -
del temporal ó por alguna otra necesidad de jecutiva, dichas naves lle-
gasen á entrar en él sin haber pedido el permiso para ello, estarán obli-
gadas á dar luego parte de su arribada, y no podrán quedarse allí más -
tiempo que el que les fuere permitido, teniendo gran cuidado de no ha-
cer daño alguno ni perjuicio al dicho puerto.

Artículo 20º.

Deseando sus Majestades católica y portuguesa el pronto cumpli-
miento de este tratado, principalmente por el reposo de sus súbditos, se

ha convenido que tendrá toda fuerza y vigor inmediatamente despues de la publicación de la paz; y que se hará la dicha publicación en los lugares de los dominios de las dos Majestades lo mas presto que sea posible. Y si despues de la suspension de armas se hubiere cometido alguna contravencion, se dará satisfaccion de ella recíprocamente.

Artículo 21º.

Si por algun accidente (lo que Dios no quiera) hubiere alguna interrupción de amistad, ó rompimiento entre las coronas de España y - Portugal, en este caso se concederá a los súbditos de estas dos coro—nas el término de seis meses despues del dicho rompimiento para retirarse y vender sus bienes y efectos, á traspasarlos adonde mejor les pareciere.

Artículo 22º.

Y porque la difunta reina de Inglaterra, de gloriosa memoria, - habia ofrecido ser garante de la entera ejecución de este tratado, de - su firmeza y duración; sus Majestades católica y Portuguesa aceptan la - sobredicha garantía en toda su fuerza y vigor para todos los presentes artículos en general, y para cada uno en particular.

Artículo 23º.

Las mismas Majestades católica y portuguesa aceptarán tambien la

garantía de todos los otros reinos, principes y repúblicas que en el término de seis meses quieran ser garantes de la ejecución de este tratado; con condicion de que esto sea á satisfaccion de las dos Majestades.

Artículo 24º.

Todos los artículos arriba escritos han sido tratados, acordados, y estipulados entre los susodichos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de los señores reyes de España y Portugal, en nombre de sus Majestades; y prometen en virtud de sus plenos poderes que los dichos artículos en general y cada uno en particular serán inviolablemente observados, cumplidos y ejecutados por los señores reyes sus amos.

Artículo 25º.

Las ratificaciones del presente tratado dadas en buena y debida — forma se cambiarán de una parte y otra dentro del término de cincuenta — días, que empezarán desde el de la firma, ó antes si se pudiere.

En fé de lo cual, y en virtud de las órdenes y plenos poderes que nosotros los que abajo firmamos tenemos de nuestros amos el rey de España y el rey de Portugal, hemos firmado el presente tratado y hecho poner en — él los sellos de nuestras armas. Fecho en Utrech á 6 dias del mes de febrero de 1715 años.— El duque de Osuna, — Conde de Tarnuca.— Dñ Luis Darunha.

ARTICULO SEPARADO

Por el presente articulo separado que tendrá la misma fuerza y vigor que si estuviese inserto en el tratado de paz concluido hoy entre sus Majestades católica y portuguesa y que debe ser ratificado como el tratado mismo, se ha convenido por los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de ambas Majestades; que el comercio recíproco de las dos naciones se restablezca y continúe de la misma manera y con las mismas seguridades, libertades, exenciones, franquezas, derechos de entradas y salidas, y todas las demás dependencias como se hacía antes de la presente guerra, mientras no se arregle otra cosa, y se declare la conformidad en que debe correr el comercio entre las dos naciones. En fé de lo cual y en virtud de las órdenes y plenos poderes que nosotros los que abajo firmamos tenemos de nuestros años el reu de España y el rey de Portugal, hemos firmado el presente articulo separado y hecho poner en él los sellos de nuestras - armas. En Utrech á 6 días del mes de febrero de 1715 años.- El duque de - Osuna.- El conde de Tarouca.- Don Luis de Acuña.

Tanto el tratado como este artículo fueron ratificados por el se--ñor rey católica D. Felipe V en Buen Retiro á 2 de marzo de 1715; y por el señor rey de Portugal D. Juan Ven Lisboa el 9 de dicho mes y año.

Tratado explanatorio de los de paz y comercio ajustados entre
España e Inglaterra en el año de 1.713; concluido en Madrid en
14 de diciembre de 1.715. (18)

Habiendo quedado aún después de los tratados de paz y de comercio últimamente concluidos en Utrech en 13 de julio y en 9 de diciembre de 1.713 entre su Majestad Católica y la difunta reina de la Gran Bretaña, de gloriosa memoria, algunas pequeñas diferencias tocantes al comercio y curso de él, y hallándose sus Majestades católica y británica inclinados a mantener y cultivar una firme e inviolable paz y amistad, han hecho para lograr este saludable fin, concluir y firmar por los dos ministros, recíprocamente y en la debida forma á este fin calificados, los artículos siguientes:

Artículo 1º

Los vasallos ingleses no estarán obligados a pagar mayores ó otros derechos por las mercaderías que introducen y extraen de diferentes puertos de su Majestad católica, que los que pagaban por las mismas en tiempos del rey Carlos II, arreglados por cédulas y ordenanzas del referido rey o sus predecesores. Y aunque el pie del fardo no esté fundado en ninguna ordenanza real, no

(18) CANTILLO, A. "Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y de Comercio, que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón desde el año 1.700 hasta el día". Madrid, 1843, pág. 170 a 171.

obstante su Majestad católica declara, quiere y manda que se observe al presente y en lo venidero como una ley inviolable; los cuales derechos se exigirán y sacarán ahora y en adelante con las mismas ventajas y favores de los referidos vasallos.

Artículo 2º

Confirma su Majestad católica el tratado hecho por los comerciantes - ingleses con los majistrados de Santander el año de mil y setecientas.

Artículo 3º

Su Majestad Católica permite a los referidos vasallos recoger y tomar sal en la isla de Fortudos, habiendo gozado de esta licencia en tiempos del rey Carlos II sin interrupción alguna.

Artículo 4º

Los referidos vasallos no pagarán parte alguna más de mayores ó otros impuestos que los que pagan los mismos vasallos de su Majestad católica en el mismo paraje.

Artículo 5º

Gozarán los dichos vasallos de todos y cualesquiera derechos, privilegios, franquezas, exenciones é inmunidades de que gozaron antes de la última guerra en virtud de cédulas reales ó ordenanzas, y por los artículos del tratado de paz y comercio hecho en Madrid en el año de 1.667, el cual se confirma plenamente aquí (1); y los dichos vasallos serán tratados en España de la

(1) Se inserta en el de Utrech de 9 de diciembre de 1.715.

misma forma que la nación más favorecida y por consecuencia, pagarán todas las naciones los mismos derechos sobre las lanas y otras mercaderías que entraren o sacaren por tierra de estos reinos, que pagaren los dichos vasallos sobre las mismas mercaderías que entraren o sacaren por mar; y todos los derechos, privilegios, franquezas, exenciones e inmunidades que se concedieren ó permitieren a cualquier otra nación, se concederán y permitirán a los referidos vasallos, y lo mismo se concederá, observará y permitirá a los vasallos de España en los reinos de su Majestad británica.

Artículo 6º

Y pudiendo haber habido innovaciones en el comercio, promete su Magestad católica aplicar de su parte todo el cuidado posible para abolirlas y hacerlas evitar por todos los medios en lo venidero; e igualmente su Majestad británica promete aplicar todo el cuidado posible para abolir de su parte todas las innovaciones y evitarlas en lo venidero y por todos medios.

Artículo 7º

El tratado de comercio hecho en Utrech en 9 de diciembre de 1.713 que dará en su fuerza, a excepción de los artículos que se hallaren contrarios a lo que se ha concluido y firmado hoy, los cuales serán abolidos y de ninguna fuerza: y sobre todo los tres artículos llamados comunmente esplanatorios y el presente serán aprobados, ratificados y cambiados de una y otra parte en el término de seis semanas, o antes si fuere posible. En fe de lo cual, y en virtud de nuestros plenos poderes, firmamos el presente. En Madrid, a 14 de

diciembre de 1.715.- El marqués de Bedmar.- Jorge Bubb.

El rey católico D. Felipe V le ratificó en 24 de enero de 1.716; habiéndolo ya hecho en 23 de diciembre de 1.715 el rey británico.

LEY 3ª, TITULO 11, LIBRO 6º (NOVISIMA RECOPIACION)D. Felipe V, por resolución á consulta de la junta de extranjeros de8 de marzo de 1.716. (19)Circunstancias que deben concurrir en los extranjeros para considerar
se por vecinos de estos reinos,

Debe considerarse por vecino, en primer lugar cualquier extranjero que obtiene privilegio de naturaleza, el que nace en estos reinos; el que en ellos se convierte a nuestra Santa Fé Católica; el que viviendo sobre sí establece su domicilio; el que pide y obtiene vecindad en algún pueblo; el que se casa con mujer natural de estos reinos, y habita domiciliado en ellos; y si es la mujer extranjera, que casare con hombre natural, por el mismo hecho se hace del fuero y domicilio de su marido; el que se arraiga comprando y adquiriendo bienes raíces y posesiones; que siendo oficial viene a morar y ejercer su oficio; y del mismo modo el que mora y ejerce oficios mecánicos, o tiene tienda en que venda por menor; el que tiene oficios de concejo públicos, honoríficos, ó cargos de cualquier género, que solo pueden usar los naturales; el que goza de los pastos y comodidades que son propias de los vecinos; el que mora

(19) Códigos españoles concordados y anotados. Tomo 8º, Novísima Recopilación de las Leyes de España. Madrid, 1.850. La Publicidad, Tomo II, Libro VI, página 255-6.

diez años con casa poblada en estos reinos, y lo mismo en todos los demás - casos en que conforme a derecho común, reales órdenes y leyes adquiere naturaleza o vecindad el extranjero, y que según ellas está obligado a las mismas cargas que los naturales, por la legal y fundamental razón de comunicar de - - su utilidades; siendo todos estos legítimamente naturales, y estando obligados a contribuir como ellos; distinguiéndose los transeúntes en la exoneración de oficios concejiles, depositarías, receptorías, tutelas, curadurías, custodia de panes, viñas, montes, huéspedes, leva, milicias y otras de igual calidad; y finalmente, que de la contribución de alcabalas y cientos nadie esta libre; y que sólo los transeúntes lo estén de las demás cargas, pechos ó servicios personales, con que se distinguen unos de otros; debiendo declararse por comprendidos todos aquellos en quienes concurren cualquiera de las circunstancias que quedan expresadas.

Decreto de 3 de Noviembre de 1721 sobre la Junta de Extranjería. (20)

Teniendo presente lo útil, y provechoso que fue à la expedición de los negocios estrangeros, la Junta, que para la mas segura dirección de ellos se formò el año passado de 1714 y se intituló de Dependencias de Estrangeros, - compuesta de Ministros de los Consejos de Estado, Guerra, Castilla, Indias y Hacienda, hasta que con motivo de la ultima guerra quedò extinguida; y considerando, que la paz general que se va à establecer aumentará los mismos negocios estrangeros, que deseo tratarlos con la mayor justificación, y puntualidad en su expedición, por lo que importa mantener, y aumentar más, y más - la buena correspondencia con los Soberanos, y Países Estrangeros: he resuelto reestablecer, y formar de nuevo la referida Junta, que se ha de tener en la - misma pieza del Palacio de los Consejos, donde se tiene el de Guerra, y los - días que no son de él, que son tres en la semana, en la propia forma que se tuvo la vez pasada; y que sea compuesta de un Confejero de Estado, que la - presida, de dos Ministros de cada uno de los principales Tribunales de la Corte, y de un Secretario, y tres Oficiales, que sirvan debaxo de su mano para -

(20) OYA, Francisco. "Promptuario del Consejo de Guerra y Jurisdicción Militar".

poner un curso de Expedientes, y hacer las Consultas que se acordaren en -
ella; à cuyo fin he nombrado al marques de Grimaldo para que la presida, co
mo Consejero de Estado, à don Sebastián García Romero, y Don Pedro Joseph de
la Grava, Ministros del Consejo de Castilla; à don Joseph Munive, y à Don Se
bastián de Montufar, del Consejo de Guerra; à Don Thomás de Sola, y Don Pe-
dro Afán de Ribera, del de Indias; à don Juan Pérez de la Puente, y Don An-
tonio Romualdo de Lara, del de Hacienda; y por Secretario à don Juan Bautista
Orandain, mi Secretario, con exercicio de Decretos en la segunda Mesa de
la primera Secretaria de Estado, y del Despacho, por la fatisfacción que ten
go de su perfona, y de sus experiencias, y de sus méritos, para que sirva en
la propria conformidad que lo hizo en la antecedente Junta el Secretario Don
Francisco Diaz Román; y por Oficiales los tres, que de la Secretaria de Gue
rra quedaron, con los sueldos que gozaban quando se suprimió, para que cui-
dassen de los papeles de ella. Tendráse entendido en el Consejo de Guerra y
se prevendrá lo correspondiente à sus dos expressados Ministros, para que -
asistan à la referida Junta con el zelo y puntualidad que me prometo de sus
obligaciones. Está señalado de la Real mano de Su Magestad. En San Lorenzo à
3 de noviembre de 1721.

Real Decreto de 6 de Febrero de 1724: Jurisdicción del Consejo de Guerra. (21)

Supuesto esto en general, y descendiendo à lo particular, conoce este Consejo de las causas en que se atreviese la infracción, u observancia de los Capítulos de Paces, como yà se dixo por la Planta dl año de 717, y - en consecuencia de todas las civiles, y criminales de los Estrangeros, en - que sean reos convenidos: lo qual tienen también estipulado sus Principes - con su Magestad en los referidos Tratados de Paces: de forma, que por ellos tienen sus Jueces Conservadores, con los recursos, y apelaciones à este Consejo, unica, y privativamente; y donde por falta de Conservadores corran - de sus causas los Jueces Ordinarios, lo han de executar, como Subdelegados del mismo Consejo, y otorgar también para èl las apelaciones , y no para - otra parte.

(21) OYA, Francisco, "Promptuario del Consejo de Guerra y Jurisdicción Militar", en que se refieren al instituto, gobierno, y facultades de este Supremo Tribunal, y los casos en que compete, à fe limita el fuero militar, por razón de la causa, à personas, segun ordenanzas, y Reales resoluciones.

LEY IV.- Modo de proceder las Justicias ordinarias en los abintestatos de los Ingleses transeúntes que mueran en España y el inventado de sus bienes.

El mismo en Madrid, por dec. de 20 de noviembre de 1724. (22)

A resolución de consultas de la Junta de Dependencias y Negocios Extranjeros de 6 de Marzo de 1.723 y 9 de agosto de 724 declaró el Rey mi hijo que en los abintestatos de los súbditos del Rey de la Gran Bretaña, que muriesen en estos dominios, podían los Cónsules ó otros Ministros de aquel Reyno inventariar sus bienes y hacienda, papeles y libros de cuentas, y ponerlos en manos de dos otros mercaderes, para que los guardasen para sus propietarios y acreedores; observándose en todo literalmente el art. 34 de la paz ajustada con Inglaterra en Utrech, sin que se pudiese extender esto al caso de morir con testamento: y que todos los subditos de la Gran Bretaña — fuesen comprendido en él, mientras no constase estar avencidados y arraygados en estos mis Reynos con ánimo de perseverar en ellos, ó que el largo transcurso del tiempo lo tuviese así manifestado: y que esta declaración se debía entender salvando siempre el perjuicio de tercero, y sin prohibición a los aus

(22) Los Códigos Españoles concordados y anotados. Tomo 8º. Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VI, título XI, ley IV, La Publicidad, Madrid, 1850, pág. 256-7.

ticias de estos Reynos, para que precaviesen el expresado perjuicio; pues aun que los Cónsules ingleses hiciesen su inventario conforme al sentido expresada, no por eso se priva a las Justicias ordinarias, preservando el derecho de tercero, el hacer al mismo tiempo otro inventario del abintestato, para evitar ocultaciones, y preservan perjuicios de tercero; embargando al mismo tiempo en los mismos hombres de negocios, en quienes se hiciere el depósito por los Cónsules ingleses, los caudales, libros y papeles; y poniendo edictos públicos para que dentro del tiempo competente, conforme a los contratos del difunto - abintestato, compareciesen los acreedores a pedir sus créditos, o proponer las acciones que tuviesen: con declaración expresa, que no compareciendo dentro - de los términos asignados, se levantasen los embargos, para que los Cónsules libremente pudiesen remitir los bienes y papeles a los herederos del difunto abintestato, o à quien por Derecho se debieren: de cuya declaración he querido prevenir al Consejo para su inteligencia, y para que por él se expidan (como se lo manda) órdenes a todas las Justicias de los puertos, ciudades y parages donde hubiere Cónsules y Vice-Cónsules de la Nación Inglesa, a fin de que lo tengan entendido, y hagan executar y practicar así en los casos que en adelante se pudieren ofrecer (a)

(a) Véase la L. 18 y su nota tit. 20, lib. 10, sobre las herencias de los sóditos del rey de Cerdeña, y de los franceses transeúntes en España.

Tratado de comercio y de navegación entre el rey de España don Felipe V y el emperador de Alemania Carlos VI, — concluido en Viena el 1º de mayo de 1725. (23).

En el nombre de la Santísima é individua Trinidad. Amén.

Habiendo, por voluntad de Dios sumamente bueno y grande que rige á su arbitrio los corazones de los príncipes, llegado el caso de que se haya restablecido y firmemente asegurado la paz entre el serenísimo y muy poderoso príncipe y señor, el señor Carlos VI de este nombre, emperador — siempre augusto de romanos y rey de Alemania, de España, de las dos Sicilias, de Hungría, de Bohemia, de Dalmacia, de Croacia y de Esclavonia; archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante, de Milan, de Mantua, — de Estiria, de Carinthia, de Carniola, de Limburgo, de Luxemburgo, de Gueldres, de la Silesia alta y baja y de Wirtemberg; príncipe de Suabia; marques del sacro romano imperio, de Burgovia, de Moravia y de la superior é inferior Lusacia; conde de Habsburg, de Flandes, del Tirol, de Ferrete, de Quiburgo, de Goricia y de Namur; landgrave de Alsacia, señor de la Marca — de Esclavonia, del puerto Naon y de las Salinas, etc. etc.; y el ~~serenísi-~~

(23) CANTILLO, A. "TRATADOS, CONVENIOS Y DECLARACIONES DE PAZ Y DE COMERCIO, que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón". Madrid, 1843. Pág. 218 a 228.

mo y muy poderoso principe y señor, el señor Felipe V de este nombre, rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las Indias orientales y occidentales, islas y tierra firme del mar Océano; archidu—que de Austria, duque, de Borgoña, de Brabante, y de Milan; conde de Habsburg, de Flandes, del Tirol y de Barcelona; señor de Vizcaya y de Molina, etc. y entre sus reinos, estados y dominios: y pareciendo conveniente establecerla más amplia y firmemente con un tratado particular de navegación y comercio, en que decidiendo y resolviendo anticipadamente las controversias que de semejante tratado se pudiesen suscitar, se dé providencia con mas seguridad por este medio á la recíproca conveniencia y bien público — de los reinos, estados y súbditos de entrambos principes contratantes. Por tanto nos los infrascritos ministros, embajadores y plenipotenciarios de los sobredichos serenísimos contratantes, autorizados de pleno poder para ello, despues de haber tenida conferencias sobre lo que toca a la navegación y comercio libre, convenimos en los artículos siguientes, habiendo — permutado antes las plenipotencias.

Artículo 1º.

En virtud de la paz establecida entre su Majestad cesárea católi-

ca y su real Majestad católica, será lícito á todos los súbditos de entrambos, de cualquier estado, calidad y condición que sean entrar, salir ó morar en cualquiera reinos, provincias y dominios suyos con toda libertad y seguridad; sin que para ello se necesite de patente especial, salvoconducto, ni de otro particular permiso, bastando la sola publicación de la paz, con la cual se suplen semejantes requisitos; y gozarán recíprocamente por tierra y por mar de aquella misma protección pública así en sus personas como en sus dependencias de que por otra parte gozan en todo y por todo - sus propios naturales súbditos, sin ningún temor ni riesgo de perjuicio - ó daño alguno, segun por este tratado se ha convenido.

Artículo 2º.

Se permite desde luego plenamente á los navios, así de guerra como mercantes, pertenecientes á los sobredichos contratantes ó á sus súbditos, el que puedan recíprocamente frecuentar sus puertos, playas, ensenadas y provincias, sin necesidad de pedir antes otra alguna licencia; antes bien se les dará libre y amigable entrada en ellos, y se les suministrará por su justo precio todo lo que hubieren menester, así de bastimentos y víveres, como para reparo de navios ó otras necesidades, para que puedan con toda seguridad hacerse á la mar; sin que se les pueda pedir derechos algunos, ni impuestos bajo de cualquier nombre ó titulo que finalmente sea. Y esto mismo se ha de entender por lo que toca á las Indias orientales; pe-

ro con tal que no ejerciten comercio alguno en ellas, ni puedan comprar si no lo que puramente necesitaren de víveres, ó para reparos y pertrechos de sus navíos.

Artículos 3º.

Por lo que toca á los navíos de guerra, como pueden con mas facilidad ser ocasión de siniestra sospecha, se les prohíbe la entrada en los -- puertos y ensenadas menos fortificados, sino es que para librarse de alguna tormenta ó de caza de enemigos, se hallasen precisados á guarecerse en ellos; pero pasado el riesgo del enemigo, ó serenado el mar, y provistos de lo necesario, sin mas detencion partirán de allí. Tampoco enviarán de su escuadra muchos marineros juntos á tierra, sino tan solamente los que les permitiere el magistrado ó gobernador del lugar; y últimamente obrarán en todo de manera que aparten de sí cualquier justo temor ó siniestra sospecha que pudiesen ocasionar, lo que especialmente se ha de observar en las Indias -- orientales, en donde mas que en otras partes, suele haber mas desconfianza.

Artículo 4º.

No obstante lo referido, los navios de guerra ó armados en corso,-- podrán entrar con toda seguridad en dichos puertos con las presastomadas -- al enemigo, y volver de la misma manera á sacarlas sin pagar ningun portazgo ni tributo, á menos de que habiendo pedido antes y obtenido el permiso, quisiesen venderlas en todo ó en parte en aquel lugar; en cuyo caso habrán

de pagar los mismos derechos de que mas abajo se ha convenido por lo tocan te á merCaderías.

Artículo 5º.

Los navíos de trasporte ó mercantes, de cualquier porte que sean, - que ó por librarse del temporal, ó de la infestacion de enemigos, ó por - otro cualquier motivo, entraren en algun puerto, habrán de manifestar al gobernador del lugar sus pasaportes y sus pólizas de carga, concebidas en la fórmula abajo inserta: con la cual podrán salir y apartarse libremente de allí, sin molestia, estorsion ni oposicion alguna, y sin que se les pueda precisar por ningun motivo á descargar sus mercaderías, ni á que se las visiten.

Artículo 6º.

Pero se exceptúa el caso en que alguna de dichas naves fuese destinada para puerto enemigo, y por las cartas de fletamento constase estar cargada de géneros prohibidos; porque en semejante caso se ha convenido que - se registre la tal nave, pero que no se haga sin asistencia del juez conservador de la nacion, si acaso le hubiere, y del consul; y que sea con - tal moderacion y cuidado que no se derramen las mercaderías, ni reciban algun daño, ni rompan los lios ó envoltorios. Las mercaderías prohibidas que se hallaren a bordo serán confiscadas, escepto el buque con las demas gèneros; sin que por esto sea lícito exigir al capitan del navio multa pecuniaria.

ria ni costas, aunque fuese con pretesto de visita ó de autos formados.

Artículo 7º.

Pero para quitar las contiendas que podrían originarse sobre la pa
bra mercancías prohibidas, que vulgarmente se dicen de contrabando, ha pa
recido conveniente declarar, que bajo de este nombre se comprende á todos
los géneros ó materias, así labradas como por labrar, que sirven para la
guerra, como son cualesquier armas ofensivas ó defensivas, y con especia-
lidad cañones, morteros, falconetes, pedreros, petardos, salchichones con
azufre, granadas incendiarias y de mano, balas de artillería de fusil; y tan
bien pedreros, fusiles y escopetas largas ó pistolas, y ademas de esto es
padas, bayonetas, morriones, corazas y tahalíes, ó bridecues, pólvora, sa
litre, tablazon y maderaje para la construccion ó reparo de navios, alqui-
tran y jarcia: todo lo cual está sujeto á confiscacion; pero solo en el -
caso de que por la póliza de cargo, que se habrá de manifestar á los mi-
nistros, constase que van destinadas para socorro de los enemigos, ó diri-
gidas á algun puerto de estos. Bajo de esta prohibicion estan comprendi-
das tambien todas aquellas mercaderías de cada pais, cuya saca y estrac-
cion está vedada por sus propias leyes, excepto el trigo y todo género de
granos, vinos, tambien aceites y frutas, y todo lo comestible, ademas del
cobre, hierro y acero; y últimamente, todo lo que pertenece al uso de ves-
tidos de ambos sexos, y aun vestidos enteros, como no vayan destinados pa-

ra vestir regimientos ó compañías enteras.

Artículo 8º.

Si algun navío de guerra imperial se encontrase en alta mar con un navio mercante perteneciente á súbditos del rey de España, ó si sucediese lo contrario no se acercará el de guerra al mercante mas que á tiro de cañon, enviándole el bote con dos ó tres hombres tan solamente, á quienes el capitan del buque mercante tendrá que manifestar su póliza de carga, - por la cual se venga en conocimiento del lugar de donde salió, á cuál va destinado y de las mercaderías que lleva. Y en caso de constar que lleva entre ellas algunas de contrabando, destinadas para los enemigos del comandante del navio de guerra; en tal caso, y no de otra manera, los géneros prohibidos se adjudicarán al fisco, pero quedando salvos el buque, la tripulación y demas mercaderías. Se deberá dar crédito á las pólizas de carga que el capitan del navio exhibiere y donde pareciere necesario, se convendrá recíprocamente de cierta marca distintiva que se estampará en las pólizas, con la cual se dará á estas mayor fé.

Artículo 9º.

Ademas se ha convenido tambien que la libertad del comercio y de la navegación ha de ser tan ámplia y libre que en el caso de que alguno de los serenísimos contratantes estuviese en guerra con uno ó muchos principes ó estados, los súbditos del otro serenísimo contratante puedan sin em

bargo, y les sea lícito, proseguir sus navegaciones y comercio á aquellas partes con toda seguridad, y de la misma manera que antes de empezarse la guerra, sea que se continúe despues por via recta, ó de un puerto enemigo á otro tambien enemigo, y esto, así en la ida como en la vuelta, sin molestia, obstáculo ni impedimento alguno. Pero se exceptúa el caso de que el puerto adonde quisiesen entrar, estuviese actualmente sitiado ó bloqueado y cerrado por el mar. Y para quitar toda duda de lo que se ha de entender bajo de este nombre, se ha convenido que no se debe tener por actualmente sitiado ningun puerto, si no estuviese de tal manera cerrado con — dos navios de guerra á lo menos por mar, ó con una batería de cañones de batir por tierra, que no se pudiese intentar la entrada sin esponerse á los tiros de la artillería.

Artículo 10º.

Demas de esto se ha pactado y convenido en que todas las mercaderías de cualquier especie que sean, pertenecientes á súbditos de uno ó otro de los serenísimos contratantes que se encontraren en algun navio enemigo, — sean confiscadas juntamente con el buque, aunque no fuesen de la clase de las prohibidas.

Artículo 11º.

Los súbditos de los sobredichos serenísimos contratantes gozarán re

cíprocamente en los dominios de entrambos de aquellas exenciones de portazgos ó tributos de que estaban en pacífica posesión en tiempo del rey Carlos II, pero en los términos mas ampliamente esplicados abajo en el artículo 13.

Artículo 12º.

Cualquier navío que pertenciere á su Majestad cesárea, y con motivo de comercio entrare en los puertos de España, deberá hacer dos declaraciones de las mercaderías que hubiere resuelto descargar y vender allí, conviene á saber, la una para el arrendador de las rentas ó para el administrador de la aduana, y la otra para el juez de contrabandos; y no le será lícito abrir antes los escotillones del navío hasta que se le dé el permiso y hayan llegado los guardas de la aduana; ni podrá tampoco en ningún tiempo desembarcar cosa alguna de sus mercaderías sin que primero se le haya dado licencia por escrito de pasarlas á la aduana; antes bien se prohíbe á los jueces de rentas y á los dependientes de la aduana registrar balones, cajas, toneles ni fardo ó lío alguno que traigan mercaderías, ni en el navío ni en la playa, hasta que esten en la aduana; y aun despues de depositadas efectivamente en ella, no se han de abrir sin asistencia del dueño ó de su factor, para que pueda el mismo propietario atender mejor á sus intereses, pagar sus derechos y pedir sobre ello certificaciones y cartas de pago, y despues volver á recoger sus géneros y hacer

no solo en los puertos de Cadiz, Santa Maria y otros de la corona de Castilla, sino tambien en otros, como son los de Aragon, Valencia y Cataluña, esceptuadas solamente las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, en las cuales se pagarán los derechos de entrada y de salida en la misma forma y modo que hasta aquí se ha observado, y se observa el día de hoy con los franceses, ingleses y holandeses.

Pero los mercaderes, ó aquellos á quienes pertenecieren los géneros, pagando una vez el diez por ciento en la introduccion ó estraccion de España, los podrán trasportar libremente á cualquier parte por mar ó por tierra ó por los rios, á todas las partes de España, sin tener que — adeudar ningun otro derecho ó imposicion nueva en cualquier puerto ó parage adonde llevaren dichas mercaderías; y para esto bastará manifestar las certificaciones y despachos en que conste el primer pago y los fardos — con el plomo y marcas acostumbradas. Esceptúanse, sin embargo, los derechos de alcabalas, cientos y millones, sobre lo cual se ha hecho una transaccion separadamente (1).

Habiendo espresamente convenido la sacra cesárea Majestad y la sacra real católica Majestad que respectivamente los súbditos de uno y otro, en todossus estados, territorios y provincias existentes en cualquier — region del mundo, tengan y gocen todos los derechos, exenciones, gracias y libertades que fueron, son y fueren jamás concedidas á las naciones —

se les ponga el sello de la aduana del lugar. Y ejecutado así, podrá el -
dueño llevar seguramente á su casa sus mercaderías sin que esten sujetas
despues á nueva visita; y podrá asimismo trasportarlas de una casa á otra
y de un almacén á otro, como sea en el recinto de la poblacion y desde -
las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, habiendo participado
antes á los arrendadores de alcabalas y cientos si es con el fin de ven-
derlas, en cuyo caso se habrán de pagar los derechos que estuviesen por
pagar; ó si eran con intento de no venderlas, en cuyo caso se deberán -
dar al dueño la certificación y el testimonio acostumbrado.

Artículo 13º.

Demas de esto, como no hay cosa mas perjudicial al progreso recípro
co del comercio que la variedad de derechos con que están recargadas las
mercaderías; deseando su real Majestad católica remediar este mal en toda
la extensión de sus dominios de Europa, de algunos años á esta parte, á
favor de la nacion inglesa, consintió y determinó que suprimiendo los an
tiguos derechos de las mercaderías que en su introducción ó extraccion an
tes de ahora se solían cobrar, ó los que despues del fallecimiento de Car
los II se impusieron; todo género de derechos se reduzca en todas partes
á una suma determinada, hecha la regulación á razon de diez por ciento, -
la que se deberá pagar así por la introduccion como por la extraccion, he
cho el cómputo segun la estimacion y valor de ellas; y esto se verificará

mas amigas, y especialmente á los súbditos y habitantes de la Gran Bretaña, á los de las Provincias Unidas de los Países Bajos y á las ciudades anseáticas, por tanto su real católica Majestad promete y declara en estas que concede á los súbditos de su cesárea Majestad pleno y efectivo uso de todo lo que se contiene en este artículo; de suerte que no sean obligados á pagar, así por la entrada como por la salida ó tránsito de las mercaderías, otro derecho que el dicho diez por ciento, del mismo modo que lo han solido pagar los ingleses, escepto los derechos de alcabalas, millones y cientos, respecto de los cuales se ha tratado lo siguiente.

Artículo 14º.

Los súbditos de la sacra cesárea Majestad podran diferir la paga de alcabalas y de los llamados cientos todo el tiempo que tuvieren sus mercaderías con todo cuidado guardadas en los almacenes; pero si quisieren extraer de allí dichas mercaderías con el fin de trasportarlas á otro lugar del reino, ó de venderlas en aquel mismo, ó de llevarlas á su casa, les sea absolutamente permitido lo mismo, con tal que hechos los testimonios convenientes, afiancen la paga de los derechos, la que deberá hacerse dos meses despues de la venta; lo cual ejecutado, se les darán las guías con que puedan trasportar las mercaderías, marcadas y señaladas con el plomo, á otra parte, ó á cualquier lugar ó puerto de los do

minios de España en Europa, y venderlas por junto, ó como vulgarmente se dice por mayor. Y si algun dependiente destinado á la cobranza de dichos derechos, habiéndosele mostrado y visto los despachos de la primera paga, y reconocidas las marcas y el plomo, intentare cobrar otra vez los derechos, ó se opusiere al trasporte de dichas mercaderías, el tal pagará la multa de dos mil ducados aplicados al real erario: lo que se ha de entender solamente de la primera venta. Pero si el mercader quisiere vender sus géneros por partes ó por menudo, deberá igualmente pagar los derechos segun los particulares reales reglamentos; y los oficiales no les podrán pedir mas que quince reales de vellon por el despacho de las certificaciones ó cartas de pago, de que se habló arriba.

Artículo 15º.

La misma regla se ha de guardar respecto de los derechos de millones que se pagan por el pescado y demas víveres; de suerte que no se adeuden ni se puedan cobrar en su introducción todo el tiempo que sus dueños los tengan depositados en los almacenes públicos; pero en caso que las quieran trasportar á los pueblos interiores del reino, ó venderlas en aquel mismo, ó llevarlas á su casa, entonces se obligarán por escrito, dando la competente fianza, á la paga de dicho derecho de millones, que deberá verificarse á los dos meses de la fecha de dicha obligacion; lo cual ejecutado, se les concederán sin dilación los despachos necesarios por dichos colectores ó administrado—

res del referido derecho, entregándoles las mercaderías marcadas con el plomo y señaladas con los marchamos; y las podrán trasportar á cualesquier lugares donde se suelen gastar, y venderlas sin gravámen de nueva exacción de millones. Y si algun dependiente ó comisario recaudador de millones, despues de habérsele manifestado los debidos despachos, el plomo, las marcas y señales se atreviere á cobrar otra vez el mismo derecho, ó se opusiere al trasporte ó venta de las mercaderías, el referido pagará la multa de dos mil ducados aplicados, como se dijo arriba, al real erario.

Artículo 16º.

Por lo que mira á los puertos de Guipúzcoa y Vizcaya, no sujetos á — las leyes de Castilla, en ellos se guardará el arancel que se espresa en el artículo 15 en órden a los derechos prescritos á las demas naciones.

Artículo 17º.

Siendo mercaderías sumamente necesarias los mástiles de navío, bergas y palos para la construccion de bajeles mayores y menores; es nuestra voluntad esceptuarlas de la regla general, de tal suerte que su introducción sea libre de toda exaccion de derechos, por cualquier título ó motivo que fueren impuestos.

Artículo 18º.

Para quitar todo motivo de disputa que pueda sobrevenir entre los arrend

dadores de rentas y los dueños de las mercaderías con ocasión de tasarlas, se ha convenido que el arancel de los derechos, llamado vulgarmente tarifa, y el tratado de comercio entre su Majestad católica y el rey de la Gran Bretaña del año de 1716 en fuerza de la ejecución del artículo 3º. del tratado de Utrech se observe por verdadera regla en este punto entre los súbditos de su Majestad cesárea y los arrendadores ó administradores de rentas; de suerte que generalmente se pague el diez por ciento.

Artículo 19º.

Por razón de los diversos géneros que acaso no se hallen espresados - en dicha tarifa, ha parecido se esté a la antigua costumbre, segun la cual se deberá hacer el avaluo por el arrendador de rentas ó su sustituto; pero con esta ley y condicion, que sea libre al propietario de las mercaderías - cederlas al arrendador por el precio en que las evaluó, y este estará obligado á pagar luego incontinenti lo mismo en dinero efectivo.

Artículo 20º.

La sal de Hundraía pagará el mismo derecho que la sal de España, y lo mismo se observará con la sal de España en los dominios de su Majestad cesárea.

Artículo 21º.

Concede el rey católica á los súbditos de su Majestad cesárea que re-

sidieren en los puertos y ciudades de los reinos de Andalucia, Murcia, Aragon, Valencia, y Cataluña, y tambien en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, que arrienden las casas acomodadas para su habitacion, y tiendas en que guarden las mercaderías, y gocen de los mismos privilegios, libertades y gocen de los mismos privilegios, libertades e exenciones de que gozan en este punto los ingleses y holandeses: y el mismo derecho y privilegio recíproco concede su Majestad cesárea á los súbditos del rey de España en sus reinos y provincias.

Artículo 22º.

Entre los mencionados privilegios son los principales los siguientes: la facultad de mudar domicilio á su voluntad, sin que preceda licencia alguna: inmunidad en todo género de reconocimiento, visita y molestia en sus habitaciones y tiendas por razon de sus mercaderías, sino en el caso de haber alguna grave sospecha, ó de poderse probar algun fraude contra los derechos reales, en cuyo caso tendrá lugar la visita, con la prevención de que esta se haga con la asistencia del consul, que será espresamente llamado - para esto, no causando en lo demas otra molestia al mercader ó á sus mercaderías. Pero si el mercader fuere convencido de que introdujo fraudulentamente las mercaderías, se le confiscarán; y ademas de esto pagará las costas de la visita, quedando libre su persona y las demas mercaderías. De la misma suerte su Majestad cesárea promete á los súbditos de su Majestad recíproca

tólica las mismas libertades y privilegios en sus reinos.

Artículo 23º.

Los súbditos de los referidos serenísimos contratantes, que establecieren sus domicilios para sus negocios en los dominios de uno ó de otro, en ninguna parte estarán obligados á manifestar sus libros de cuentas, sino es para deducir alguna prueba; ni con pretesto alguno será lícito á nadie aprehender dichos libros, ó sacarlos de su poder:ellos que tambien podrán escribir en la lengua que quieran, sin que sean obligados á estenderlos en otra.

Artículo 24º.

Los súbditos de una y otra parte de cualquier calidad ó condición que sean, no podrán ser presos en sus personas, ni por los gobernadores y ministros de justicia por causas de deudas públicas ó privadas que no contrajeron ellos, ó de las cuales no hubiesen sido fiadores; ni tampoco por semejantes causas podrán ser embargados sus bienes y mercaderías durante la paz, ó sobreviniendo su rompimiento. Y en este artículo se comprende en particular á los capitanes de navio, oficiales de mar y marineros, y tambien á los buques mayores y menores con toda su carga.

Artículo 25º.

De la misma suerte las dichas naves, así de guerra como de comercio ó de trasporte, ó de qualquier especie que sean, por ninguna órden general ni

particular podrán ser embargadas, sea para el uso de la guerra ó para conducir víveres, sino es habiéndose tratado especial, libre y espontáneamente - sobre esto con los capitanes ó con los mismos dueños de las naves. Y mucho menos podrán ser obligados por fuerza los oficiales de mar ó marineros á dejar sus navíos para servir en alguna escuadra que se quiera tripular, ó en otra fuerza militar que se levante, aunque sea por breve tiempo y con muy urgente motivo; pero si de su voluntad se ofrecieran á servir, será libre - el alquilarlos.

Artículo 26º.

Por lo que toca á la inmunidad personal, concedida por el presente - tratado á todos los comerciantes de cada uno de las dos partes y á sus familias, se extenderá no solo á la exención del servicio militar, sino tambien á la de tutelas, curadorias y administraciones de cualesquier bienes, negocios ó personas, si no es que ellos por su voluntad quisiesen admitir semejantes cargos.

Artículo 27º.

Les será libre nombrar abogados, doctores, agentes y procuradores cuando tuvieren necesidad de ellos; y si quisieren tener propios y particulares corredores, podrán elegir uno ó dos de los que hubiere en el pueblo, los - cuales, presentados, serán recibidos y reconocidos por habilitados para procurar por sí solos los negocios que se les cometieren.

Artículo 28º.

En todos los puertos y principales plazas de comercio, en que pareciere bien al emperador y al rey, se establecerán cónsules nacionales que defiendan los mercaderes súbditos de una y otra parte, los cuales cónsules gozarán de los mismos derechos, facultades, libertades é inmunidades de que gozan los de las otras naciones más amigas.

Artículo 29º.

Tendrán estos cónsules particular facultad y autoridad en los pleitos entre mercaderes y capitanes de navíos, ó entre estos y sus marineros de conocer de ellos arbitrariamente y decidirlos, ya provengan de soldadas y salarios, ya de otra causa, de cuya sentencia no se podrá apelar á los jueces locales, sino á los que fueren constituidos por el principe cuyos súbditos son.

Artículo 30º.

Por lo que toca á los jueces conservadores que en los antecedentes reinados ejercian en España el oficio de un magistrado muy considerable, y que antiguamente era concedido por los reyes á las naciones más favorecidas, con potestad de conocer y juzgar privativamente sobre todas las causas de sus nacionales, así civiles como criminales; se ha convenido que si su Majestad real católica concediere en adelante este privilegio á otra nación, cualquiera que sea, se deba entender concedido igualmente el mismo á los —

súbditos de su Majestad cesárea. Pero en el interin se mandará severamente á todos los jueces ordinarios y magistrados que les administren pronta justicia, y la ejecuten sin dilación, parcialidad ni favor alguno. Además de esto, su Majestad católica consiente que de las sentencias en las causas pertenecientes á los súbditos de su Majestad cesárea se pueda apelar solamente al consejo de comercio y no á otro tribunal.

Artículo 31º.

El derecho de extrangería ó otros semejantes, de ningun modo se ha de ejercer con súbditos alguno de los dos serenísimos contratantes; sino antes bien, los herederos de los difuntos que fallecieren en cualquier parte, país ó provincia en que se hallaren, les sucedan sin impedimento alguno en todos sus bienes muebles é inmuebles, ya hubiesen muerto con testamento ó abintestado, según las leyes de suceder y heredar que rijan en la rierra donde se hallaren las herencias. Y en caso que dos ó muchos litigaren entre sí sobre la herencia, entonces los jueces del país determinarán el pleito por sentencia definitiva.

Artículo 32º.

Si alguna vez sucediere que un mercader ó súbdito de los referidos serenísimos contratantes muriere en los dominios del otro, entonces su cónsul ó algún ministro público de ellos que se hallare presente, irá á la casa — del difunto y tomará inventario de todas las mercaderías y efectos, y así—

mismo de sus papeles y libros, y los guardará fielmente para los herederos, según el poder que tuviere: pero si acaeciere que un mercader ó súbdito muera en camino ó en algun pueblo donde no haya cónsul, ni ministro público de su nacion, entonces el juez del lugar hará el inventario en presencia de testigos, con el mayor ahorro de gastos que fuere posible, y consignará y depositará los efectos inventariados en la cabeza de la casa ó en el dueño de ella para que los guarde con toda fidelidad; lo cual ejecutado, dará aviso de todo al ministro de la nacion que resida en la corte, ó al cónsul del pueblo donde estuviere la familia del difunto, para que los dichos puedan enviar persona que recoja los bienes inventariados y pague las deudas.

Artículo 33º.

Si una embarcacion de alguno de los dos serenísimos contratantes ó de algun súbdito suyo, naufragase en dominios de uno de ellos, en tal caso ni los oficiales del real patrimonio ni los de rentas podrán pretender derecho alguno sobre ella. Y se prohibirá severamente todo robo á cualesquier personas particulares; antes bien el señor, ó el magistrado del pueblo mas cerca no estará obligado á dar todo socorro y ayuda á los perdidos, y á salvar del buque naufragado todo lo que pudiere, y ponerlo en recaudo. Pero por el derecho de salvamento gozarán del cinco por ciento segun la estima de las mercaderías, y se les satisfarán los gastos hechos en tan piadosa obra. Pero si la embarcacion, aunque muy maltratada, quedase entera, y no hubieren

perecido los oficiales ni los marineros; á estos les tocará el cuidado de - salvar las cosas, á los cuales se dará pronto socorro y asistencia, suminis trándoles por su justo precio lo que necesitaren.

Artículo 34º.

Su Majestad católica no permitirá ni por policia ni por otro algun — pretesto se ponga limitacion alguna al precio de las mercaderías de los súbditos de su Majestad cesárea, antes les será lícito venderlas al precio que permite el uso comun del comercio; y de la misma libertad gozarán los súbditos del rey católico en los dominios de su Majestad cesárea.

Artículo 35º.

Si se confiscaren los bienes de algun mercader español ó de algun súbdito de su Majestad cesárea y se hallaren entre ellos algunos efectos pertenecientes á otro mercader ó á otra persona particular, en este caso los efectos se restituirán al dueño, aunque estuviesen vendidos, con tal que toda—vía no se haya pagado el dinero en todo ó en parte. Y en caso que dichas — mercaderías ó efectos que se hallaron en poder del mercader, cuyos bienes — se aprehendieron, esten solamente en depósito, y el depositario las hubiere vendido sin permiso del principal, entonces se considerará el valor de dichas mercaderías como verdadero depósito, y se pagará por derecho de antelación a dicho principal.

Artículo 36º.

Se permite á los súbditos y embarcaciones de su Majestad cesárea llevar todo género de frutos y mercaderías de las Indias orientales á cualquiera de los dominios y estados del rey de España, é introducirlas, con tal — que conste por los testimonios de la compañía de las Indias que se ha formado en la Flandes austríaca que son de los países adquiridos y de las colonias ó factorías de dicha compañía, ó que hayan provenido de ella; y bajo — de esta consideración lograrán los mismos privilegios concedidos á los súbditos de las Provincias-Unidas por las reales cédulas de 15 de junio y de 3 de julio del año de 1663, que se publicaron en 30 de junio y 4 de julio de dicho año. Además, su Majestad católica declara que concede á los súbditos de su Majestad cesárea todo lo que fué concedido á los Estados Generales de las Provincias-Unidas de los Países Bajos por el tratado del año de 1648, — tanto respecto de las Indias, como de todas las demás cosas que no siendo — repugnantes á este tratado, ni tampoco á la paz concluída entre ambas majestades fueren capaces de aplicarse á él.

Artículo 37º.

Por lo que mira al comercio de las islas de Canarias, los súbditos de su Majestad cesárea gozarán de las mismas exenciones que gozan los ingleses y holandeses.

Artículo 38º.

Los bienes y otras cualesquier cosas que se ocultaren por temor de - confiscacion en tiempo de guerra quedarán en pleno derecho á sus propieta- rios; y ninguno con motivo de que las ocultó contra la prohibicion será mo- leestado.

Artículo 39º.

Tambien las deudas de súbditos de una y otra parte contraídas por ra- zon de comercio ó por otro contrato, como no sean confiscadas en el tiempo intermedio, se pagarán íntegramente, mas sin los intereses, no obstante la guerra que sobrevino.

Artículo 40º.

Al contrario, no se restituirán las mercaderías ni los demas bienes - muebles ocupados por el fisco, de una y otra parte, antes de la conclusion de la paz, para evitar los infinitos pleitos que de ello podrían nacer.

Artículo 41º.

Las patentes de represalias concedidas en lo pasado por cualquier cau- sa, de una ó de otra parte, se declaran por nulas; y sus Majestades recípro- camente prometen que no las quieren conceder en adelante en odio y perjui- cio de sus súbditos, si no es en caso de manifiesta denegacion de justicia; lo que no se tendrá por probado sino despues de la demora y dilacion de dos

años corridos desde la presentacion de la primera demanda; pasados los cuales, el actor presentará la súplica á su principe para obtener la cédula de represalia, quien la comunicará al ministro del otro principe, si se hallare en la corte, ó al encargado de negocios. Y despues de estos oficios toda via se aguardará la sentencia definitiva otros seis meses, pasados los cuales, por último, se podrán espedir las letras de represalia.

Artículo 42º.

A los súbditos de su Majestad cesárea y á los de su Majestad católica estrechamente se les prohibirán las comisiones que llaman de armar, y pa tentes de represalias para hacer el corso como enemigos contra los súbditos de alguno de los dos, y que tambien las reciban de otro principe. Y si alguno contraviniere á este artículo, será tratado como pirata, no solo en las provincias contra las que recibió dicha comision, siendo cojido en el mismo hecho de su corso, sino tambien en todas las de aquel principe á cuyo dominio estuviere sujeto; y así á la primer queja se procederá contra el tal — criminalmente hasta la ejecucion.

Artículo 43º.

Siendo formal voluntad de las Majestades sacra cesárea católica y — — real católica, que se observe tan fielmente la paz, concordia y amistad de los súbditos de una y otra parte, que donde se ofrezca se den mútuo socorro

y auxilio; se ha convenido que si algun bajel perteneciente á súbditos de su Majestad cesárea fuere apresado por enemigo común, y el dicho bajel se recuperare otra vez por alguna nave de guerra ó escuadra de su Majestad católica, y esta recuperacion se hiciere dentro de las primeras cuarenta y ocho horas despues de hallarse en poder de los enemigos, cederá en premio al reapresador la quinta parte de la embarcacion y de su carga. Pero si dentro de otras segundas cuarenta y ocho horas fuere libertada la nave apresada, tendrá la tercera parte el que la reapresó. Y por último, si dentro de las terceras cuarenta y ocho horas se recobrare el bajel, se deberá la mitad del buque y de su carga al reapresador, volviendo la otra mitad á los propietarios. Lo mismo se observará si el navio recobrado perteneciere á súbditos de su Majestad católica, y el que lo reapresare fuese de guerra, ó escuadra de su Majestad cesárea.

Artículo 44º.

Y aunque se debe esperar que la paz nuevamente establecida entre su Majestad cesárea católica y su real católica Majestad y sus sucesores, reinos y dominios, con el favor de Dios dure muy dilatado tiempo, sin quebrantarse de una ni otra parte por algun pretesto ó ofensa: no obstante como todas las cosas humanas estan espuestas á alteraciones, se ha convenido, que si se originase nueva guerra entre sus Majestades (lo que Dios no permita), se conceda el espacio de seis meses á los mercaderes y súbditos que á la sa

zon se hallen en los puertos, ciudades, dominios y provincias del otro, dentro de los cuales, los dichos, con toda seguridad, así ellos como sus familias, sus bienes, muebles y mercaderías juntamente con sus navios, su carga, sus capitanes, oficiales de mar y todo lo que les perteneciere, puedan restituirse y volverse á su patria, y tambien cobrar sus deudas legitimamente contraídas para su utilidad y provecho, con sus demas derechos y acciones, sobre lo cual se les administrará pronta justicia.

Artículo 45º.

Y para que el precedente artículo no quede sujeto á escrúpulo alguno de ambigüedad, se declara en la forma siguiente, conviene á saber: que á — los dichos mercaderes, por espacio de dichos seis meses, se les permitirá — y concederá continuar su comercio, vender, comprar, permutar y trasportar — por mar y por tierra sus personas y todas sus mercaderías, sus familias, — las de sus factores y domésticos, sin la menor molestia ni embarazo, con la misma libertad que pudieran durante la paz, y como si no hubiese intervenido la guerra, con tal que se porten moderada y pacíficamente, y se abstengan de cualesquier ocultas maquinaciones contra el estado. Podrán demandar en — juicio á sus acreedores durante el término de dichos seis meses, y se les administrará tan pronta justicia que se pronuncie la sentencia antes de la — conclusion del término, y si fuere posible se ponga en ejecucion. Y si despues de hecha toda diligencia no se puidere pronunciar ó ejecutar la senten

cia definitiva antes de pasado dicho término, se permitirá á los referidos súbditos que estuvieren para ausentarse, ya sean actores ya reos, sigan por sus apoderados y demanden sus derechos y acciones á lo que se les debiere - en fuerza de la sentencia ya pronunciada; lo cual se les adjudicará, no obstante en este punto el motivo de la guerra encendida entre los principes.

Artículo 46º.

Tambien se ha convenido en favor de dichos súbditos respectivamente, y de los mercaderes y de los demas que en dicho término hayan de salir del país, que pidiendo pasaportes se les concedan, en los que especificará el - lugar de donde salen, aquel á que van, el número de personas, y las cosas - que llevan consigo, á los cuales pasaportes, por mar y por tierra, se les - guardará el debido honor y respeto por todo el tiempo señalado, el que se - estenderá al doble de lo que de otra suerte se necesitare para el viaje del lugar de donde salen al otro adonde se dirigen, aunque fuese cierto que no se les pueda poner algun impedimento ni obstáculo en su tránsito. En la misma forma se darán los pasaportes á las naves surtas en los puertos, para que con su carga puedan volver á su país libres y seguros.

Artículo 47º.

Ultimamente se ha convenido que todo lo que universalmente fue estipulado en favor de la nacion británica en los tratados de Madrid de $\frac{23}{13}$ de mayo

yo de 1667 y de $\frac{18}{8}$ de julio de 1670, y en los tratados de paz y de comercio de Utrech del año de 1713, y recientemente en el tratado ó convencion estipulado en que aquí se ha espresado solo de paso, ó no está suficientemente esplicado en favor de los súbditos de su Majestad cesárea, en cuanto se les puede aplicar, se tenga por especialmente espreso é inserto: entendiéndose tambien lo mismo de las ventajas que fueron concedidas á los súbditos de — las Provincias-Unidas por el tratado de paz de Munster el año 1648, por el tratado de navegacion del Haya año de 1650, y por el tratado de paz y comercio de Utrech de 1714; de suerte que si ocurriere duda en este ó aquel caso sobre lo que se hubiere de observar en España ó en los demas reinos de su Majestad católica respecto de los súbditos de su Majestad cesárea, los referidos tratados y lo que por los precedentes reyes de España y por su Majestad católica hoy reinante, fue concedido á las dos dichas naciones debajo — de las mencionadas fechas, deberán servir de norma y regla en los casos dudeos, ó en los omitidos en este instrumento.

Y el presente tratado se ratificará por la sacra cesárea católica Majestad, y la sacra real católica Majestad; y se entregarán recíprocamente — los instrumentos de las ratificaciones dentro de tres meses, á antes si se pudiere.

En fé de lo cual, nosotros lo infrascritos comisarios y embajadores — extraordinarios y plenipotenciarios de su cesárea católica Majestad y de su

real católica Majestad, firmamos de nuestra mano y sellamos con nuestro sello el presente tratado de navegación y comercio en Viena de Austria en 1º de Mayo de 1725.- Eugenio de Saboya.- Felipe Ludovico, conde de Sinzendorff. Gundacaro, conde de Starhemberg.- El baron de Ripperdá.

Su Majestad católica don Felipe V ratificó este tratado en Aranjuez - el 26 de mayo, y el emperador Carlos VI en su palacio de Laxemburgo á 16 de junio del citado año de 1725.

LEY 5ª. TITULO , LIBRO 6º DE LA NOVISIMA RECOMPILACION.

Felipe V, en Madrid, a 7 de Julio de 1727. (24)

Jurisdicción de los jueces conservadores de extranjeros.

Considerando muy conveniente (para obviar dudas e interpretaciones en los casos que cada día se ofrecen y pueden ocurrir en adelante sobre la jurisdicción de los jueces conservadores de las naciones extranjeras), que el consejo de guerra se hallen informado de lo que en este punto tengo resuelto desde el año 1716, que es conforme a lo que se declara y previene en la cédula - que desde entonces se les despacha para ejercicio de su ministerio, me ha parecido remitirle (como lo remito) las adjuntas copias de ella, y de un apuntamiento en que con toda distinción se expresan los dos fueros de transeuntes y avecindados extranjeros (ley 3ª), á fin de que esté prevenido de ello para su más clara comprensión y observancia y son las siguientes:

Cédula

Por cuanto los cónsules y hombres de negocios (de tal nación) me han representado, que siempre en aquella ciudad ha tenido su nación juez conservador, hasta que se declaró la última guerra; y respecto de necesitar los ingleses, -

(24) Los Códigos Españoles concordados y anotados. Tomo 8º. Novísima Recopilación de las leyes de España. Libro VI, Título XI, ley V. La Publicidad. Madrid 1850, pág. 257-8.

franceses ú holandeses de juez conservador, para que en sus negocios y dependencias tengan a quien recurrir, en conformidad del tratado de paces celebrado en Utrech, suplicándome, que en esta consideración tenga por bien de nombrarles juez conservador, y que lo sea uno de los alcaldes ú oidores (de tal parte); y habiendo condescendido en esta instancia; por tanto, atendiendo a las buenas partes de integridad e inteligencia, que concurren en vos F. alcalde ú oidor de la chancillería ó audiencia (de tal parte), en virtud de la presente os elijo y nombro por juez conservador de la nación (de tal parte) en la referida ciudad (de tal), y os ordeno y mando, que veais los tratados de paces, ajustados entre esta corona y aquellos estados, y hagais guardar y cumplir lo estipulado en ellos: bien entendido que únicamente habéis de conocer y conozcáis de los litigios que hubiere y resultaren entre sugetos de la propia nación (de tal parte), siendo comerciantes transeúntes, que habitan, van y vienen a estos reinos a comerciar por mayor, y no de los avecindados y arraigados en España; porque el privilegio que concedo á aquellos no ha de trascender a estos por ningún motivo, causa o razón que se ofrezcan, respecto de que las dependencias y litigios de los que están arraigados y avecindados en mis dominios tienen otra naturaleza, y deben seguir precisamente las mismas reglas que mis vasallos y súbditos sin diferencia alguna; en cuya observancia pondreis el mayor cuidado y aplicación, de suerte que no se incurra en la menor innovación de lo que viene expresado, pena de mi indignación, y nulidad de todo lo que actuaréis, para que por este medio se eviten los graves y perniciosos in-

convenientes que han resultado a mi real servicio; para lo cual, y para que conozcáis privativamente de todas las causas que se hubieren movido y movieren - entre los puramente comerciantes transeúntes que habitaren en la referida ciudad (de tal), y en las que estos fueren reos convenidos por otro cualquier nacional o súbdito mío; porque mi ánimo es, hayáis de conocer de todos los litigios, cuando sean entre los mismos comerciantes (de tal parte) actores y reos; y así mismo en lo que fueren reos convenidos por otro cualquiera; y os doy y concedo plena facultad y comisión, con inhibición de los de mi consejo, audiencias, chancillerías, corregidores, alcaldes mayores y demás justicias de cualquier calidad que sean, sin que puedan entrometerse en el uso y ejercicio de esta comisión en la primera instancia, ni por vía de exceso, recurso, apelación ni en otra forma alguna, porque á todos los inhibo, y he por inhibidos del conocimiento de tales causas, y los declaro por jueces incompetentes, sin que por ningún caso se pueda formar competencia en manera alguna contra el uso y ejercicio de esta comisión; y que vos solamente conozcáis (como viene referido) de todas las causas que se hubieren movido y movieren entre los comerciantes transeúntes que residieren en la expresada ciudad (de tal), procediendo voz en ella en primera instancia conforme a derecho; y que las apelaciones que se interpusieren, las otorguéis para mi consejo de guerra de justicia, donde se han de seguir y determinar en definitiva, excepto las que tocaren a mis rentas y derechos reales, por tener estas sus tribunales destinados; y mando al presidente y los de mi consejo, y á los demás ministros y justicias á quienes en

cualquier manera toque y pudiere tocar el cumplimiento de esta mi cédula, no vayan contra lo dispuesto en ella, antes bien guarden y hagan guardar inviolablemente lo contenido en ella, aunque sea contra las leyes, ordenanzas, estilo y costumbres de estos mis reinos, en que por esta vez dispenso, dejándolas para lo de adelante en su fuerza y vigor, que así procede de mi voluntad. (Aut. 22, tit. 4, libro 6 R.)

Decreto de 5 de febrero de 1730 sobre nombramiento para la

Junta de Extranjeria. (25)

Y de passo pre engo hallarse alterado el referido Decreto de la creación de la Junta, en quanto à los días, y horas de su despacho; porque ya no ay dia señalado en la femana para este fin y se hace quando avise el Secretario al Miniftro más antiguo de Castilla de los dos que de dicho Confejo han de concurrir, y este señala días; y de poco tiempo à esta parte se hace la Junta por la mañana à la salida del Confejo; y se ha nombrado también por Su Magestad para Relator de ella al Licenciado Don Lorenzo Alvarez, que lo es — del Confejo de Guerra, à quien por el Secretario se han remitido alguna vez Autos, y otros papeles, siendo de mucho volumen, para que haga relación de — ellos en la Junta.

(25) OYA, Francisco. "Promptuario del Consejo de Guerra y Jurisdicción Militar" en que se refieren al inftituto, gobierno y facultades de este Supremo Tribunal, y los casos en que compete, ò se limita el fuero militar por razón de la causa, ò personas, segun Ordenanzas, y Reales resoluciones.

Tratado de amistad, navegación y comercio, concluido en -
el real sitio de San Ildefonso entre las coronas de Espa-
ña y de Dinamarca el 18 de julio de 1742. (26)

Hallándose enteramente dispuestos los ánimos de los serenísimos y muy poderosos principes don Felipe V, por la gracia de Dios, rey católico de España y de las Indias, y Cristian VI, por la gracia de Dios, rey de Dinamarca y de Noruega á restablecer, cultivar y afianzar la antigua amistad y buena inteligencia que ha permanecido entre los reyes sus predecesores; y deseando estrecharla y perpetuarla mayormente entre ellos y sus herederos y sucesores, han tenido por mas conveniente y seguro al logro de tan saludable intento de restablecer una libre y perfecta correspondencia entre sus respectivos vasallos, arreglando sus intereses particulares, por lo que toca al comercio, con pactos y condiciones capaces de contribuir á un acrecentamiento de navegación y marina, y de prevenir las diferencias que pudieran ocurrir para cuyo efecto sus dichas Majestades han elegido y nombrado sus respectivas ministros, á saber: el rey católico de España y de las Indias al señor don José del Campillo y Cosío, caballero del Orden de Santiago, comendador de la Oliva, del consejo de su Majestad, gobernador del de Hacienda, su secretario de Estado y del Despacho universal de Guerra, Hacienda, -

(26) CANTILLO, A. "TRATADOS, CONVENIOS Y DECLARACIONES DE PAZ Y DE COMERCIO, que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón". Madrid 1843. pág. 360 a 367.

Marina é Indias, y superintendente general de todas las rentas. Y el rey de Dinamarca y de Noruega al señor Federico Luis, baron de Dekn, señor de Cohsefft, caballero del órden de Dannebrog y enviado estraordinario á la corte de España, dándoles sus plenos poderes para conferenciar un finítan ventajoso; y en virtud de ellos, despues de haber tenido diversas sesiones y ventí-ládose las materias, han convenido finalmente en los artículos siguientes.

Artículo 1º.

Habrá un comercio libre entre los súbditos de una y otra parte, y podrán ir y venir, así por mar y otras aguas, como por tierra (escepto los — países y mares de las Indias españolas cuyo comercio está prohibido á la na-cion mas amiga y favorecida) sin que necesiten de pasaportes ni de licencias particulares, detenerse, traficar y comerciar con sus propios bajeles, productos, efectos y manufacturas, y volver á sus puertos con las que cambiaren ó compraren, conduciéndolas y cargándolas de un pais á otro, pagando en cada parte los derechos acostumbrados, ó los que por sus Majestades católica y dinamarquesa ó sus sucesores se impusieren, y en la misma conformidad que estos derechos se pagaren por las naciones mas amigas y favorecidas, observando las leyes, estatutos, costumbres y derechos de los países respectivos; entendiéndose que de los estados de su Majestad dinamarquesa, puertos y rios de su dominacion, se esceptúan las tierras distantes del Norte, como son la Islandia, Forroe, las colonias que su dicha Majestad posse en la Groelandia,

Norland y la Finmarcken, puesto que las naciones amigas y favorecidas no — les es permitido de ir.

Artículo 2º.

Los súbditos de ambos reyes tendrán libre entrada en los puertos respectivos de uno y otro con sus navios para el tráfico y comercio, como tambien los bajeles de guerra de los dos reyes contratantes, y les será permitido hacer la mansion necesaria, pero de tal manera que cuando los bajeles de guerra entraren voluntariamente no podrán esceder del número de seis para no dar motivo alguno de sospecha, ni detenerse en dichos puertos mas — tiempo del que necesitaren para reparar sus navios y tomar provisiones, sin que durante su detencion puedan interrumpir la libertad del comercio y el — ingreso de otros navios pertenecientes á las naciones que se mantuvieren — en amistad con el uno ó el otro rey; y cuando por accidente algun número — inusitado de navios de guerra se acercase de uno de los puertos respectivos, no les será lícito de entrar ni en sus playas antes de haber conseguido la licencia del rey cuyos fueren los espresados puertos, y del gobernador que mandare; á menos de que se hallen obligados por tempestad ó cualquiera — otros accidente que les precise á buscar modo de evitar el riesgo; y en este caso deberán informar luego al gobernador ó corregidor del lugar, como tambien del motivo de su venida, sin que puedan amantenerse mas tiempo que aquel que pareciese conveniente á dicho gobernador ó corregidor, ni cometer

ningun acto de hostilidad en los tales puertos, que puedan ser perjudicia—
 les á uno ó á otro de los dos serenísimos reyes; advirtiéndose sin embargo
 de que en caso de ser atacados, ya sean navios de guerra ó mercantes, podrán
 no tan solamente defenderse, sino tambien abrigarse debajo del cañon de los
 puertos respectivos para librarse de la fuerza superior, en cuyo caso serán
 admitidos inmediatamente, sin permitir al navio ó navios enemigos que se —
 acerquen para combatirlos; y mientras se mantuvieren refugiados se les dará
 toda la proteccion y asistencia que tuviesen menester. Los navios marchan—
 tes podrán entrar libremente en todos los puertos, havras, bahias, enseña—
 das, golfos y rios, que no fueren prohibidos de uno y otro soberano (como —
 se ha dicho en el antecedente capítulo) sin ningun permiso, y sin que se —
 les pueda obligar á esperar fuera del puerto ó havra, en cualquiera parte
 que sea: pero entrarán sin ningun retardo ó oposicion; se quedarán todo el
 tiempo que tuvieren por conveniente; serán recibidos amigablemente y trata—
 dos del modo mas favorable, pudiendo descargar toda la cargazón ó parte de
 ella, segun les tuviere mas cuenta; guardar ó esponer en venta sus mercadu—
 rías sin pagar por sus navios ni carga mas peazgo, aduana, impositcion ó de—
 recho que aquel que correspondiese á la porcion de mercaderias que hubie—
 ran querido desembarcar ó vender; cargar otras; adovar sus navios; comprar
 las provisiones necesarias para su viaje, como tambien de todo género de —
 mercaderías de cualquiera especie que sea, y de tomar su carga en el todo ó

en parte; de volver, de ir ó hacerse fletar para otros parages, y para los que les tuviera mas cuenta; y ponerse así en mar sin ningun impedimento, - despues de haber satisfecho los derechos á que fuere obligado; y su Majestad católica no permitirá que bajo del pretesto del arancel ó cualquier — otro se impongan precios limitados á las mercaderías que pertenecieren á — los súbditos de su Majestad dinamarquesa; antes les será licito venderlas segun el curso ordinario de los comercios; de cuya libertad gozarán igualmente los súbditos de su Majestad católica en los estados de su Majestad — dinamarquesa.

Artículo 3º.

Las presas que pudieren hacer dichos navios de guerra ó otros de los súbditos de su Majestad dinamarquesa sobre los corsarios de Berberia ó cualquiera otros enemigos, podrán entrar en los puertos y habras de su Majestad católica, precediendo licencia de los comandantes ó gobernadores, que la — darán siempre que reconocieren que la tripulacion se halla en sana salud; — que sus géneros y mercaderías no vengan de parages sospechosos de contagio, y que no sean los navios apresados de principes amigos y aliados; y podrán volver y salir para seguir su destino; y en caso que pidan y obtengan el — permiso para la venta del todo ó de una parte de la carga de dichas presas, pagarán por lo que vendieren los derechos establecidos, ó los que se estable — cieren para los géneros de esta clase; y cuando por los navios de guerra ó

otros armados en corso por los súbditos de las respectivas Majestades se -
hiciere alguna presa perteneciente á algun otro principe, con el cual el uno
ó el otro se hallaren en guerra, podrán detenerse y volver á salir hacia su
destino, observando en todo las leyes y ordenanzas en los puertos respecti-
vos en la forma que estuvieren establecidas; y si quisiesen tambien vender
estas presas, sea en el todo ó en parte, lo podrán hacer públicamente, des
pues que la justicia ordinaria, con la concurrencia del cónsul, ó en falta,
del diputado y dos comerciantes de su nacion, como tambien de los ocupan-
tes, y ocupados, hubiese hecho el inventario de todo, pagado los derechos
establecidos ó que se establecieren para los efectos de esta clase: sin em
bargo, corroborando lo que arriba queda dicho, se vuelve á advertir, que -
los que hubiesen hecho presas sobre súbditos de potencias que fuesen alia-
das del uno ó del otro principe, y se sucediese el caso de que entrasen por
causa de tempestad ú otro peligro, se les obligará á salir lo mas presto que
sea posible.

Artículo 4º.

Para disponer y asegurar mayormente á los súbditos respectivos las -
utilidades y ventajas del comercio, que hacen el principal objeto del pre-
sente tratado, se estipula y acuerda que todos los efectos y mercaderías -
propias de la corona de Dinamarca y demas géneros que produce y que se tras
portaren hacia la de España, en conformidad de les precedentes artículos, -

deberán ser registrados, sellados y marcados del sello ó marca de la villa ó parages donde hubieren sido fabricados y cargados, acompañados de las — certificaciones relativas de los cónsules de España, donde los hubiese, y no viniendo con estos requisitos, el mercader, navíos y efectos estarán sujetos en España á la verificación y exámen competente; y donde no hubiese cónsul de su Majestad católica, las certificaciones de los magistrados de los pueblos de donde salieren serán admisibles en la forma espresada; y con estas circunstancias, las dichas mercaderías serán tenidas y reputadas por propias y permitidas á sus súbditos en el comercio; entendiéndose la misma cosa por lo que toca á los productos de España y sus dominios, que se trasportaren á Dinamarca y sus estados.

Artículo 5º.

Los navíos de una y otra parte tendrán licencia de echar la ancla, — cuando la necesidad lo requiera, en cualquier plàya perteneciente á uno ó otro soberano, sin que se hallen precisados de entrar en ninguno de los — puertos para donde no fuesen destinados; y en caso de que por borrasca, por huir de los enemigos ó por otro accidente se vieses obligados á ello, les serán libre de volver á la mar cuando quisiesen (como ya se ha dicho) sin abrir sus escotillas, ni esponer en venta su carga, con tal de que dichos navíos no vengán consignados á alguno de los puertos del enemigo, y que no les lleven cosas prohibidas en los reinos respectivos por ser de contraban

do, sobre que deberá haber suficientes pruebas; y cuando echaren el ancla ó entraren en los puertos, segun se ha espresado, no serán visitados ni molestados; bastando en tal caso de que manifiesten sus pasaportes, cartas de - mar y el inventario de la carga, los que reconociendo ser legítimos y arreglados por los oficiales de los dos soberanos respectivamente, para que puedan salir sin detencion.

Artículo 6º.

Para prevenir mayormente las diferencias que podrían resultar por lo que mira á la distincion de las mercaderías prohibidas y de contrabando, - se declara y estipula, que bajo de este nombre se comprenden todas las armas de fuego y demas aderezos, á saber: cañones, mosquetes, petardos, morteros, granadas, salchichones, arcos empegados, cureñas, horquillas, bandoleras, pólvora, cuerda, mecha, salitre; azufre y todo género de materiales, pertrechos y utensilios de guerra; entendiéndose asimismo bajo el nombre de mercaderías prohibidas y de contrabando todas las demas armas, á saber: picas, alabardas, chuzos, sables, espadas, morriones, cascos, corazas y otras semejantes; y bajo del mismo nombre se prohíbe de trasportar gente de guerra, caballos, sillas, cajas y fundas de pistolas, tahalíes y otros aparatos formados y compuestos para el uso de la guerra; sin que bajo del referido nombre de mercaderías de contrabando deban ser comprendidos el trigo, la cebada y otros granos y legumbres, ni sal, vino, aceite y todo lo demas que

puede servir al sustento y mantenimiento de la vida, lo que al contrario - quedará libre como todas las demas mercaderías que no van comprendidas en - este artículo, cuyo trasporte será permitido, aunque sea á países enemigos, escepto á las villas y plazas sitiadas, bloqueadas ó encerradas; advirtien- do no obstante, que este gñeros de mercaderías no podrán estraerse de los estados de uno de los principes contratantes para llevarlos á los de otro con el cual estuviere en guerra, debiéndose observar en este caso las orde- nanzas y prohibiciones publicadas; y en sacando algunos de estos gñeros, - estarán sujetos los vasallos de ambos soberanos á la práctica establecida en cada reino.

Artículo 7º.

Siempre que los navíos pertenecientes á los súbditos de los dos con- tratantes se encontraren en la mar con navíos de guerra, flota de uno ó -- otro, no podrán estos acercarse de los otros mas que á la sola distancia de tiro del cañon, y podrán enviar sus botes ó chalupas á bordo de los tales - navios, en donde no entrarán mas que dos ó tres hombres para reconocer los pasaportes y cartas de mar, que les mostrarán los capitanes ó patrones, es- pedidos segun el formulario que irá inserto al fin de este tratado; por las cuales debe constar, no solo su destino y carga, mas tambien el domicilio y residencia del capitan ó patron y aun del navio, á fin de que por este me- dio se pueda reconocer si trae ó no mercaderías de contrabando, y que se --

tenga suficiente noticia de la naturaleza y calidades del navío, como también del capitán ó patron; á los cuales pasaportes y cartas de mar, siendo legítimas, se deberá dar entera fé y crédito; y para que se pueda venir en conocimiento de su validacion, y no puedan ser falsificadas de ningun modo, se darán provisionalmente algunas contraseñas de parte de cada uno de los dos reyes respectivos; y en caso de que en los mencionados navíos se hallasen, por los medios citados, algunas mercaderías vedadas y del número de las que se llevan declaradas por de contrabando, serán descargadas, denunciadas y confiscadas ante el juez del almirantazgo ó cualquiera otro competente; sin que por esta razon el navío ó los demas efectos y mercaderías permitidas que hallasen, puedan ser detenidos ni confiscados.

Artículo 8º.

La navegacion y comercio se hará por los navios de los dos monarcas, de manera que si una de las dos coronas entra en guerra con uno o más principes ó estados, los súbditos del otro serenísimo contratante podrán continuar sin embargo con toda seguridad su navegación y comercio, como está dispuesto; á escepcion de que todo lo que se hallase cargado por los súbditos y moradores de los reinos y dominios de alguno de los altos contratantes - en navios enemigos del otro, aunque no fuesen mercaderías de contrabando, - seran comprendidas con las demas que se hallasen en los navios de los enemigos, siguiendo sin ninguna escepcion la misma suerte y paradero de la pre

sa ó presas que se hiciesen.

Artículo 9º.

Los capitanes, patrones de los navios marchantes que entraren en un puerto de alguno de los dos altos contratantes para hacer el comercio, darán ante todas cosas una declaracion de las mercaderías que quisiesen descargar ó vender, sin que puedan abrir sus escotillas hasta que hayan obtenido la licencia, y que los guardas de la aduana hayan pasado á bordo; y en presencia de ellos y con los conductores destinados descargarán las mercaderías contenidas en la declaracion, trasportándolas á la aduana para que los propietarios ó sus comisarios las despachen dentro de tres meses ó antes si quisiesen, pagando los derechos establecidos ó que se establecerán, como ya se ha dicho, y se les entreguen los efectos segun costumbre.

Artículo 10º.

Se ha acordado y convenido que los súbditos de ambos reyes tendrán y gozarán recíprocamente en las tierras, mares, puertos, playas y demas surgideros en Europa de todos los privilegios, seguridades, libertades é inmnidades que han sido concedidos y se concederán en lo venidero de una ó otra parte á la nacion mas amiga y favorecida.

Artículo 11º.

Satisfaciendo los súbditos de las dos coronas los derechos de aduana

y otras por las mercaderías, como se lleva expresado en los artículos 1 y 9 de este tratado, podrán retirarlas selladas y emplomadas, las que hubieran pagado segun se debe, para trasportarlas y vender por mayor en la villa ó paraje que pidieren; observando no obstante de pagar, sea en él ó en sus - tránsitos, lo que conviniese, en caso que fuese práctica exigir algo mas, - teniendo presente que el primer pago se hizo en un puerto ó lugar en el cual á causa de sus privilegios particulares no satisfizo todo lo que debia, en los parages hacia donde los dirigiese y trasportase para dar salida; observando lo mismo siempre que se hiciese trasporte por mar de un puerto á otro.

Artículo 12º.

Los palos de navios, antenas y otras maderas propias para la construccion de bajeles gruesos y pequeños, como tambien la brea, alquitran y cordaje que las súbditos de su Majestad dinamarquesa trajeren en navios de su -- bandera hacia los puertos de España, gozarán de libre entrada sin que pa-- guen derecho alguno; y en esta consideracion se ha dispuesto y convenido, - que su Majestad católica mandará se haga por sus ministros la primera compra de todos los géneros de esta naturaleza, que slos súbditos de su Majestad dinamarquesa traerán á España, sin que puedan vender á otros hasta que los ministros de España que se hallaren encargados de estas compras hayan declarado de que no necesitan mas; lo que deberán hacer seis dias despues - que dichos navios hayan llegado al puerto; y en caso de que no se reciban -

para el servicio de su Majestad católica, podrán, pasados los seis días, — venderlos inmediatamente á los particulares como quisieren, segun costumbre. Y se declara que los géneros espresados que se compraren para el servicio — de su Majestad católica se pagarán adonde se tomaren á satisfaccion de los propietarios que los vendieren, segun el concierto y ajuste recíproco; y — las dichas Majestades católica y dinamarquesa (cada una por su parte) harán que esto se observe y se cumpla. Concede á mas de estos el serenísimo rey — católico á favor de los súbditos dinamarqueses que cuando estos traigan en sus propios navíos pescados secos ó salados de sus propios países, y cogi— dos en los estados y sobre las costas del dominio de su Majestad dinamarquesa, y que fueren certificados por tales, no pagarán mas que la mitad de de— rechos que ya están arreglados para este género; y en caso de que estos pes— cados se hallasen á su arribo dañados por el mar ó por otro accidente, y — que los propietarios de estas mercaderías quisiesen arrojarlas al mar, al — rio ó quemarlas, no estarán sujetos á pagar cosa alguna de derechos: pero — siempre que su carga consista en pescado de mares que no son del dominio de Dinamarca pagarán por entero los derechos como las demas naciones.

Artículo 13º.

Como por los artículos precedentes de este tratado se ha dispuesto en general la forma en que se deberá hacer la saca y comercio recíproca de las mercaderías, se previene ahora que si llegase despues el caso que alguno de

los súbditos de los dos monarcas trajesen efectos ó género no conocidos se harán apreciar por el administrador de la aduana y dos comerciantes de la mayor integridad y esperiencia con la concurrencia de los mismos interesados, los cuales pagarán lo que los apreciadores hubiesen determinado y decido: pero si el propietario que trajese otros efectos ó géneros nuevos y - no conocidos se creyese perjudicado en la tasacion que se quisiese imponer, podrá abandonar y ceder su mercadería por el precio que se hubiese estimado, y los que hubiesen procedido al tanteo estarán obligados á pagárselo en dinero de contado.

Artículo 14º.

Los súbditos de los dos reyes contratantes establecidos en sus respectivos dominios para hacer comercio, no serán inquietados en sus casas y almacenes sino en el solo caso que haya prueba ó suficientes indicios de haber defraudado los derechos reales, los que deberán satisfacer; y en este caso y otros que pueden acontecer de semejante naturaleza, los jueces ó corregidores que entendieren de la percepción de estos fraudes, procederán con la concurrencia del consul donde lo hubiere, observando la costumbre establecida, segun las leyes y ordenanzas: y si hicieren pesquisa contra algun criminal que se hubiese refugiado á casa de algun consul ó comerciante, procederá el juez segun perteneciére á derecho y á la justicia que debe observar en tales casos.

Artículo 15º.

No podrán ser arrestados los súbditos de una y otra parte por la justicia por deudas particulares que no hubiesen sido contraídas por sí mismos, ó de su parte por aquellas en cuyas casas y comercio se hubieran subrogado y que no se hubiesen obligado determinadamente á pagar; ni por razon de esto se podrán embargar y secuestrar sus papeles; si bien podrá la justicia poner en arresto á tales sujetos por causas criminales, siempre que hayan incurrido en ellas, procediendo hasta la conclusion segun las leyes de los reinos respectivos, y en la conformidad que lo espresa el antecedente capítulo ó artículo.

Artículo 16º.

Los espresados súbditos de una y otra parte no podrán ser obligados á presentar sus libros y papeles de cuentas sino cuando convenga evidenciar alguna circunstancia, ó evitar pleitos y controversias; y para hacer las pruebas necesarias no se podrá detenerlos ni quitárselos á menos que milite una razon muy urgente; y les será licito tenerlos en la lengua que quisieren.

Artículo 17º.

No podrán los soberanos respectivos por ninguna órden general ó particular, ni por cualquier caso que sea, hacer embarcar ó detener, impedir ó -

tomar para su servicio en sus puertos á ningun mercader, patron de navío, - piloto ni marinero, como ni tampoco sus navios, mercaderías, vestuario ó — otros bienes pertenecientes á uno ó á otro, á menos de que los dueños de — los navios sean prevenidos de antemano y den su consentimiento; entendiéndose se siempre que esto no debe impedir ó interrumpir la vía ordinaria de la — ley y de la justicia en ningun pais, y que no se oponga á los embargos que se hiciesen judicialmente.

Artículo 18º.

Los súbditos de ambos soberanos serán exentos en los países respectivos de alojamientos, cargas personales ó patrimoniales, de toda imposición, curadoría, tributos ordinarios y estraordinarios, y de todo servicio militar por mar y tierra: pero esta exencion no se debe entender, sin embargo, con los de las artes mecánicas y gentes de tienda abierta; solo si á los comercialistas por mayor, súbditos de los dos soberanos respectivos.

Artículo 19º.

Los mercaderes y súbditos que se hallaren establecidos en los esta-- dos de los serenísimos reyes podrán servirse de abogados, procuradores, escribanos, agentes y corredores del número y aprobados á su voluntad; y encargarlos sus pleitos, negocios y diligencias con la asistencia de los jueces ordinarios en caso de necesidad y que la parte litigante lo pida. Y para mayor conveniencia de los enunciados súbditos, comerciantes en los rei-

nos y estados de uno y otro monarca, se podrán establecer cónsules en los parages y lugares, de comun acuerdo, y de la nacion de dichos súbditos: los cuales cónsules gozarán de todos los derechos, libertades y exenciones que pertenecen á este empleo con tal de que procedan de forma que ninguno de ellos bajo del menor p~~re~~testo no intente por sí mismo ó por interpuestas personas cosa que sea contraria al bien del Estado donde reside, ó perjudicial al servicio del rey; porque siempre que hicieren lo contrario estarán sujetos al castigo que merecen.

Artículo 20º.

Nombrados los cónsules en el modo explicado podrán conocer arbitral~~me~~mente de las diferencias que pudieran sobrevenir entre los comerciantes y los dueños de los navios de su nacion, ó entre los capitanes y patrones y sus propios marineros, ya sea á causa de sus viages, gastos y cuentas, ó ya por razón de sus salarios para ajustarlos amigablemente; pero sin embargo aquel ó aquellos que no quisiesen someterse á su arbitrio podrán recurrir á los jueces ordinarios del principe, cuyos vasallos fueren.

Artículo 21º.

No habiendo en España jueces conservadores para conocer y juzgar de las causas civiles y criminales de las naciones domiciliadas, las dos Majes^{ta}des han estipulado y convenido de dar las mas eficaces órdenes á todos —

los jueces de sus reinos que se hallan encargados de la administracion de -
la justicia para que en todas las causas que sobrevinieren y siguieren sus
respectivos súbditos, la administren y hagan ejecutar sin la menor dilacion,
inclinacion, favor y afecto para las partes concurrentes ante ellos, y se -
reciban las apelaciones en el consejo de justicia.

Artículo 22º.

Los bienes y efectos de los súbditos de un rey, que vinieren á morir
en los países, tierras y estados del otro, serán conservados para los legitim
os herederos y sucesores, salvo siempre y reservado el derecho de tercero.

Artículo 23º.

Se hará inventario de los bienes y efectos, como tambien de los papel
es, cartas, escritos, libros de cuentas de los súbditos del rey de Dinamarca
que fallecieren en los estados del rey católico ad intestato; y este inven
tario se hará ante el juez ordinario y su oficial, ó ante un escribano -
en presencia del consul en los parajes donde los hubiera, y donde no en pres
encia de diputado de la nacion y dos comerciantes, y en falta de todo esto
se pondrán los efectos muebles, y generalmente cuanto hubiere quedado, depo
sitados jurídicamente, á fin de que sean custodiados y conservados integramen
te para los propietarios en conformidad de lo espresado en el artículo -
precedente.

Artículo 24º.

Si llegase el caso de que un navio perteneciente á uno de los altos contratantes, ó á alguno de sus súbditos respectivos naufragase á par de las costas de uno ó otro reino, se dará por la justicia del país donde el caso sucediese todo socorro y asistencia á los que padeciesen este perjuicio para salvar, si fuese posible, el navio lastimado, y ponerle en seguro para entregárselo íntegramente al capitan, patron ó sobrecargo que se hallase, sin mas carga que la de pagar el trabajo y los gastos que se hubiesen hecho y causado para salvar las mercaderías y efectos: cuya entrega á las personas referidas se deberá hacer por inventario, del que dejarán recibo para que conste en todos tiempos: y en caso que el dicho capitan, patron ó sobrecargo haya perecido, entonces el depósito de los efectos salvados deberá hacerse formalmente por las justicias del territorio por su cuenta y riesgo bajo de fianza abonada, para entregarlos despues á los legítimos herederos ó interesados, en la forma enunciada.

Artículo 25º.

Siendo el verdadero ánimo de sus Majestades católica y dinamarquesa de que la paz, concordia y amistad se cultive por los súbditos de una y otra parte con tal sinceridad que se socorran, ayuden y auxilien mutuamente siempre que se presente ocasion, el rey católico ha convenido y dará las órdenes necesarias y correspondientes para que siempre que sus navios de —

guerra encuentren en el mar á los de los súbditos del rey de Dinamarca y si guieren un mismo rumbo y navegacion, los protejan y defiendan contra cualquier insulto de corsarios de Berberia; y que los navios dinamarqueses gozarán en las costas del continente de España de la misma seguridad y proteccion contra dichos corsarios que gozan los propios navios españoles en consecuencia de las medidas tomadas, ó que se podrán tomar todavía a tal efecto en adelante en dichas costas.

Artículo 26º.

Si aconteciese en lo venidero alguna diferencia entre los soberanos respectivos que pudiese poner en riesgo el comercio recíproco entre sus vasallos, se dará noticia y el término de seis meses para que puedan poner á cu cierto ó retirar sus navios, mercaderías y efectos sin que durante este tiempo se les pueda hacer molestia ó vejacion alguna, ni detener ó embargar sus personas ni bienes.

Artículo 27º.

Si con el tiempo se fuesen descubriendo algunos fraudes ó inconvenientes por lo que mira al comercio y navegacion, sus accidentes y dependencias que no se hubieren precavido bastantemente por estos artículos se podrán tomar sobre este punto en adelante otras providencias de una y otra parte segun parecieren convenientes; y en el interin el presente tratado quedará en su fuerza y vigor.

Artículo 28º.

El presente tratado será ratificado por los dos respectivos monarcas, y el cange de las ratificaciones se hará dentro del término de tres meses, - que empezarán á contarse desde el día de la firma de este tratado, ó antes si fuese posible. En fé de lo cual, nos los ministros de sus Majestades católica y dinamarquesa hemos firmado el presente tratado, y hemos puesto el sello de nuestras armas. En San Ildefonso á 18 de julio de 1742.- Don José del Campillo.- Don Federico Luis, baron de Dekn.

Sigue un largo formulario en latin de las cartas de mar ó pasaportes que debían espedirse en virtud del artículo 7º de este tratado. Le ratificó su Majestad católica el señor don Felipe V en dicha fecha de 18 de julio, y su Majestad el rey de Dinamarca en 17 de noviembre del citado año de 1742.

NOTAS

Este tratado aunque recibió la ratificación de las dos cortes, la de España se resistió á su ejecucion no obstante las vivas instancias de Dinamarca. En un despacho, que tiempos adelante escribía el ministro de estado - al encargado de negocios de su Majestad en Copenhague, explicando las razones del rompimiento de 1753 entre los dos gobiernos se decía lo siguiente:

"Durante la residencia de Wense en esta corte, una de sus solicitudes fue poner en práctica el tratado de comercio y navegacion que hicieron y --

firmaron año de 1742 Campillo y el conde Dahn, y casi siempre que han hablado los ministros de Dinamarca en París de volver á la buena correspondencia con nosotros, han insinuado su mira de que tenga efecto. Los ministros del rey padre, incluso el mismo Campillo, ni los de su Majestad en su reinado, han querido reconocer este tratado, suponiéndole perjudicial y alegando haber sido hecho por sorpresa, fuera de la via regular, jamás publicado ni -- llevado á efecto. En la secretaría de estado no se ha visto hasta que ahora se ha pedido á la de hacienda. En el artículo 12º hay una condicion impracticable: dice que los daneses no pagarian mas que la mitad de los derechos que otras naciones por los pescados secos que condujesen. Con las demas está pactado que han de ser tratadas como la mas favorecida; pretenderán por consiguiente que se les baje la mitad de derechos en los pescados, como á los daneses. Supuesto que se les conceda, solicitarán siempre los daneses -- pagar la mitad que los otros, y así jamás será practicable el pacto. En los demas artículos no hay cosa tan chocante á primera vista, pero merece examinarse bien el todo".

Tratado de indemnizaciones y comercio entre las coronas de España y de la Gran Bretaña; concluido y firmado en Madrid á 5 - de octubre de 1750 para la ejecucion del artículo 16 del tratado de paz de Aquisgran. (27)

Habiéndose establecido por el tratado definitivo de Aquisgran en el artículo 16 que gozaría la Gran Bretaña el asiento de negros y navío anual por los cuatro años que había dejado de gozarle por causa de la última guerra con las mismas ventajas y condiciones que le había gozado antes de ella, y teniendo los embajadores de su Majestad católica y de su Majestad británica hecha una convencion y firmada entre ellos en 24 de junio de 1748, de que se reglaría por una negociacion particular de ministros nombrados á este efecto por una y otra Majestad un equivalente que la España diese en consideracion del no goce de los años del dicho asiento de negros y navío - - anual acordados á la Gran Bretaña por el décimo artículo de los preliminares, firmados en Aquisgran en 30 de abril de 1748.

Sus Majestades católica y británica á fin de dar cumplimiento á las convenciones de sus ministros para afirmar mas y mas una armonía sólida y durable entre las dos coronas, han convenido de hacer entre ellos el presente tratado particular sin intervencion ó participacion de tercero, de suerte que cada una de las partes contratantes en virtud de las cesiones - que ella hace adquiere un derecho de compensacion en orden á la otra reci-

procamente. Para lo cual han nombrado por sus ministros plenipotenciarios, á saber: su Majestad católica á don José de Carvajal y Lancaster, su ministro de Estado y decano del consejo de él; y su Majestad británica á don — Benjamín Keene, su ministro plenipotenciario cerca de su Majestad católica, los cuales despues de examinadas y conferidos los asuntos los han concordado y convenido en la forma siguiente.

Artículo 1º.

Su Majestad británica cede á su Majestad católica su derecho al goce del asiento de negros y del navio anual durante los cuatro años estipulados por el artículo 16 del tratado de Aquisgran.

Artículo 2º.

Mediante la compensacion acordada por su Majestad católica á la compañía del asiento de cien mil libras esterlinas que su dicha Majestad se obliga á pagarla en Madrid ó en Londres en el tiempo de tres meses á mas tardar, contados desde la signatura del presente tratado, cede su Majestad británica á la misma Majestad católica todo aquello que puede deberse y deba á la dicha compañía del asiento por saldo de cuentas, ó que provenga en cualquiera manera que se pueda del dicho asiento, de tal forma que la di—

(27) CANTILLO, A. "TRATADOS, CONVENIOS Y DECLARACIONES DE PAZ Y DE COMERCIO, que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón". Madrid, 1843. pág. 409 a 410.

cha compensacion será estimada y mirada como una satisfaccion plena y entera de la parte de su Majestad católica, y extinguirá desde ahora para en adelante y para siempre todo derecho, pretension ó demanda que se pudiera formar en consecuencia del dicho asiento ó navio anual de permiso, directamente ó indirectamente de la parte de su Majestad británica ó de la de la dicha compañía.

Artículo 3º.

El rey católico cede á su Majestad británica todo aquello que él podría pretender ó demandar en consecuencia del dicho asiento y navio anual, tanto en orden a los artículos ya liquidados, como en orden á los que serían faciles ó dificiles de liquidar, de suerte que ni de una parte ni de otra, se pueda jamás hacer de ello mencion en adelante.

Artículo 4º.

Su Majestad católica consiente que los súbditos británicos no sean obligados á pagar mayores ó otros derechos, ni sobre otras valuaciones de las mercaderías que hacen entrar ó salir de diferentes puertos de su Majestad católica que los que ellos han pagado de las mismas mercaderías en el tiempo del rey de España Carlos II, reglados por cédulas y ordenanzas del dicho rey ó de sus predecesores. Y aunque el pie del fardo no esté fundado sobre ordenanza real alguna, su Majestad católica declara no obstante, que

re y ordena que sea observado ahora y en adelante como una ley inviolable y que todos los derechos serán pedidos y llevados ahora y en adelante con las mismas ventajas y favores a los dichos súbditos.

Artículo 5º.

Su Majestad católica permite á los dichos súbditos tomar y recoger - sal en la isla de Fortudos sin impedimento alguno como ellos lo han hecho en el tiempo del citado rey Carlos II.

Artículo 6º.

Su Majestad católica consiente que los dichos súbditos no pagarán en parte alguna mayores ni otros impuestos que aquellos que pagan los súbditos de su Majestad católica en el mismo lugar.

Artículo 7º.

Su Majestad católica consiente que los dichos súbditos británicos gozarán de todos los derechos, privilegios, franquicias, exenciones é inmunidades que ellos han gozado antes de la última guerra en virtud de cédulas ó ordenanzas reales y por los artículos del tratado de paz y comercio hecho en Madrid en 1667, y los dichos súbditos serán tratados en España de la misma manera que la nacion mas favorecida, y por consiguiente ninguna nacion pagará menos derechos de las lanas ó otras mercaderías que ella haga entrar ó salir de los reinos de España por tierra, que los dichos súbditos

pagarán por las mismas mercaderías que á ellos hagan entrar ó salir por mar. Y todos los derechos, privilegios, franquicias, exenciones é inmunidades — que se concedieren ó permitieren á cualquiera otra nacion serán tambien — acordados ó permitidos á los dichos súbditos británicos. Y su Majestad británica consiente que lo mismo sea acordado y permitido á los súbditos de — España en los reinos de su Majestad británica.

Artículo 8º.

Su Majestad católica promete aplicar de su parte todo el cuidado posible para quitar todas las innovaciones que se hayan introducido en el comercio, y para que se eviten en adelante. Su Majestad británica promete así mismo aplicar todo el cuidado posible para evitar toda innovacion y para — evitarla en adelante.

Artículo 9º.

Sus Majestades católica y británica confirman por el presente tratado el de Aquisgran y todos los otros que son confirmados por él, en todos sus artículos y cláusulas á escepcion de aquellos que quedan derogados por el presente, como tambien el tratado de comercio concluido en Utrech en 1713 á reserva de los artículos que se hallaren ser contrarios al presente tratado, los cuales quedan abolidos y de ninguna fuerza, y nominadamente los tres artículos del dicho tratado de Utrech, comunmente llamados esplanatorios.

Artículo 10º.

Todos los diferentes derechos, demandas y pretensiones recíprocas que podrían subsistir entre las dos coronas de España y de la Gran Bretaña (á las cuales cualquiera otra nacion, sea la que fuere, no tiene parte, interés ni derecho de intervencion) quedan así ajustadas y estinguidas por este tratado particular de compensacion recíproca: y así los dos dichos serenísimos reyes se obligan mútuamente á la ejecución puntual de este tratado, el cual será aprobado y ratificado por sus Majestades, y las ratificaciones cangeadas en el tiempo de seis semanas, contado desde la signatura, ó antes si se puede. En fé de lo cual, nos los dichos ministros plenipotenciarios, á saber: don José Carvajal y Lancaster, de su Majestad católica; y don Benjamín Keene, de su Majestad británica, en virtud de nuestros plenos poderes que mutuamente hemos reconocido en nombre de sus dichas Majestades hemos firmado el presente tratado, y le hemos hecho poner los sellos de nuestras armas. Dado en Madrid á 5 de octubre de 1750.- José de Carvajal y Lancaster. Keene.

El rey británico ratificó este tratado el 5 de noviembre, y su Majestad católica el 5 de diciembre de dicho año de 1750, por instrumento firmado en el Buen-Retiro, y refrendado por don Zenon Somodevilla, secretario - del despacho de la Guerra. Indias, Marina y Hacienda.

Real Decreto de 21 de diciembre de 1759, para que las causas de ilícito comercio de extranjeros transeuntes pertenezcan a la jurisdicción de rentas. (28)

En una resolución tomada por el señor D. Fernando VI, mi hermano, - en setiembre del año próximo pasado a consulta del consejo de guerra con motivo de cierta causa seguida ante el comandante general del campo de Gibraltar, sobre aprehensión de diferentes géneros de ilícito comercio, se previno que el conocimiento de la comisión que le estaba conferida por órden de 2 de setiembre de 1749 se entendiese en calidad de juez militar en todas las causas en que interviniese, como interesado extranjero transeúnte en estos dominios, aunque fuese de ilícito comercio o contrabando; y - que los recursos de apelaciónse admitiesen para el consejo de guerra, y no para otro tribunal alguno, comunicándose por la secretaría del despacho de la guerra circularmente a los capitanes generales y comandantes de las provincias. Noticioso de esta providencia el consejo de Hacienda y la junta del tabaco, consultaron en 10 y 28 de noviembre del propio año las razones que concurrían para considerarla perjudicial a mi servicio y a mis vasallos, y mal apoyada con el verdadero sentido de los tratados de paz, haciendo memo

(28) RIQUELME, A.: op. cit. pág. 319..

ria de una real cédula expedida por el señor Rey mi augustísimo padre en el año de 1716 para la jurisdicción de mis jueces conservadores de las naciones, en que mandó que las apelaciones de las causas de extranjeros transeúntes se otorgasen para el consejo de guerra con arreglo a los tratados de paz, excepto las que tocasen a las rentas y derechos reales, por tener éstas sus tribunales separados; la cual posteriormente fue renovada por decreto de 17 de julio de 1727, comunicado al mismo consejo de guerra para evitar dudas e interpretaciones en el ejercicio de su jurisdicción, y recordando también el real decreto del propio señor Rey mi augustísimo padre de 16 de junio de 1741, dirigido al consejo de guerra, en que se sirvió suprimir el juzgado de contrabando de mar y tierra, y resolver que el conocimiento de estas causas en primera instancia fuese del superintendente general de la real hacienda, y de sus subdelegados en todos los puertos donde le hubiese, y en su defecto las justicias ordinarias, otorgando las apelaciones para el consejo de hacienda, y que en su consecuencia pasasen las causas pendientes al superintendente general y sus subdelegados, y las que estuviesen en el consejo y junta de justicia del almirantazgo al consejo de hacienda, habiéndose verificado notoriamente su observancia en los asuntos de fraudes y de ilícito comercio que han ocurrido en muchos de mis puertos, y señaladamente en el mismo campo de Gibraltar. Habiéndome, pues, enterado de ello, y de lo demás que se me ha expuesto sobre la materia, he resuelto que se revoque y anule enteramente la resolución citada que tomó mi hermano

en setiembre del año próximo pasado, y que se observe el decreto del rey - mi augustísimo padre de 16 de junio de 1741, conociendo en su conformidad e el superintendente general y sus d elegados en primer instancia con las -- apelaciones al consejo de hacienda de todas las causas de contrabando, illicito comercio y fraudes de rentas de estos mis dominios, aunque los delin- cuentes sean extranjeros transeúntes; debiendo atribuirse al comandante - del campo de Gibraltar la comisión de 2 de setiembre de 1749 en calidad de tal subdelegado para celar el comercio olícito en cuanto tenga conexión con fraudes de mis rentas; pues lo que, según los tratados, corresponde en prima instancia a los comandantes de mis armas ó gobernadores de plazas, con apelaciones al consejo de guerra, es el conocimiento de los contrabandos de armas, municiones, pertrechos y otras cosas de esta naturaleza, que no de- ben equivocarse con los contrabndos de ilícito comercio y de rentas, suje- tos a la jurisdicción de hacienda. Tendráse todo entendido en ese consejo para su cumplimiento en la parque que le toca.- Señalado de la real mano - de S.M.= En Buen-Retiro a 21 de diciembre de 1759.- Al Marqués de Squila- ce.

Tercer pacto de familia entre los reyes de España y Francia, -
Carlos III y Luis XV; concluido y firmado en Paris el 15 de --
agosto de 1761. (29).

En el nombre de la Santísima é indivisible Trinidad, Padre, Hijo y -
Espíritu Santo. Así sea.

Los estrechos vínculos de la sangre que unen á los dos monarcas rei-
nantes en España y Francia, y la singular propension del uno para el otro,
de que se han dado tantas pruebas, empeñan á su Majestad católica y á su -
Majestad cristianísima en formar y concluir entre si un tratado de amistad
y union bajo el nombre de pacto de familia, cuyo principal objeto es hacer
permanentes é indisolubles, tanto para sus Majestades cuanto para sus des-
cendientes y sucesores, aquellas mútuas obligaciones que traen consigo na-
turalmente el parentesco y la amistad. La intencion de su Majestad católica
y de su Majestad cristianísima en los empeños que contraen por este tratado
es perpetuar en su posteridad el insigne modo de pensar de Luis XIV de - -
Francia, de gloriosa memoria, su comun y augusto bisabuelo, y que en él sub-
sista para siempre un monumento solemne del recíproco interés en que estri-
ban los deseos de sus corazones y la prosperidad de sus familias reales.

(29) CANTILLO, A. "TRATADOS, CONVENIOS Y DECLARACIONES DE PAZ Y DE COMERCIO,
que han hecho con las potencias extranjeras, los monarcas españoles de
la Casa de Borbón". Madrid 1843. pág. 468 a 473.

Con esta mira y para llegar al logro de un fin tan conveniente y salu
dable, sus Majestades católica y cristianísima han dado sus plenos poderes;
es á saber: su Majestad católica á don Gerónimo Grimaldi, marqués de Grimaldi
su gentil-hombre de cámara con ejercicio y su embajador extraordinario
al rey de Francia; y su Majestad cristianísima al duque de Choiseul, par -
de Francia, caballero de sus reales órdenes, teniente general de sus rea--
les ejércitos, gobernador de Turena, gefe y superintendente general de los
correos y postas de á caballo y coches, ministro y secretario de Estado, -
encargado de los despachos de Estado y de la Guerra; quienes informados de
las disposiciones de sus respectivos soberanos, y despues de haberse comu-
nicado sus dichos plenos poderes, han convenido en los artículos siguien--
tes.

Artículo 1º.

El rey católico y el rey cristianísimo declaran que en virtud de sus
estrechos vínculos de parentesco y amistad, y en consecuencia de la union
que contratan por el presente tratado, mirarán en adelante como enemiga co
mun la potencia que viniere á serlo de una de las dos coronas.

Artículo 2º.

Los dos monarcas contratantes se conceden recíprocamente en la forma
mas auténtica y absoluta la garantía de todos los estados, tierras, islas
y plazas que poseerán en cualquier parte del mundo, sin reserva ni excep--

cion alguna, cuando por primera vez, despues de este tratado, se hallen uno y otro en plena paz con las demas potencias, y tales cuales entonces estuvieren sus respectivas posesiones.

Artículo 3º.

Conceden su Majestad católica y su Majestad cristianísima la misma - absoluta y auténtica garantía al rey de las Dos Sicilias y al infante don Felipe, duque de Parma, para todos los estados, plazas y tierras que actualmente poseen; suponiendo correspondan de su parte, garantizando todos los dominios de su Majestad católica y de su Majestad cristianísima.

Artículo 4º.

Aunque la garantía mútua é inviolable que contratan sus Majestades católica y cristianísima debe ser sostenida con todo su poder y que lo entienden así, conforme al principio sentado que hace la basa de este tratado de que quien ataca á una corona ataca á la otra; sin embargo han juzgado á propósito las dos partes contratantes fijar los primeros socorros que la potencia requerida tendrá obligacion de suministrar a la potencia demandante.

Artículo 5º.

Se ha convenido entre los dos reyes contratantes, que la corona requerida de suministrar el socorro, tendrá en uno ó muchos de sus puertos, tres meses despues de la requisicion, doce navios de línea y seis fragatas arma-

dos, á la entera disposicion de la corona demandante.

Artículo 6º.

La potencia requerida tendrá en el mismo tiempo de los tres meses á disposicion de la potencia demandante, si fuese España la potencia requerida, diez mil hombres de infanteria y dos mil de caballeria; y si lo fuese la Francia, diez y ocho mil hombres de infanteria y seis mil de caballería. En cuya diferencia de número se mira solo á las que hay entre las tropas que mantiene la España y las que la Francia tiene actualmente en pie; pues si llegase á ser igual, entonces será tambien igual la obligacion. Y este número de tropas le ha de juntar y avocar la potencia requerida, sin salir desde luego de sus dominios en el parage de ellos que la demandante señale, para estar mas á la mano de la empresa ó del objeto con que las pida: y como haya de preceder á este objeto embargo y navegacion ó marcha de tropas por tierra, todo lo ha de costear la potencia requerida, dueña en propiedad del socorro.

Artículo 7º.

En cuanto á dicho diferente número de tropas, hace el rey católico la escepcion de que la necesidad de ellas, sea para defender los dominios del rey de las Dos Sicilias, su hijo, ó los del infante duque de Parma, su hermano; pues reconociendo la preferente, aunque voluntaria obligacion que

le impone su mas inmediato parentesco, ofrece acudir en este caso con los -
mismos diez y ocho mil hombres de infanteria y seis mil de caballeria, y -
aun con todas sus fuerzas sin exigir del rey cristianísimo mas que el mismo
número ya estipulado y los demas esfuerzos á que le moviere su amor á los
principes de su sangre.

Artículo 8º.

Hace tambien por su parte el rey cristianísimo la escepcion de las -
guerras en que pudiese entrar ó tomar parte en consecuencia de los empeños
contraídos por la paz de Westfalia y otras alianzas con las potencias de -
Alemania y del Norte. Y considerando que dichas guerras en nada pueden inte-
resar á la corona de España, su Majestad cristianísima promete no exigir so
corro ninguno del rey católico, á menos de que tomase parte alguna potencia
marítima en las espresadas guerras, ó que los sucesos de ellas fuesen tan -
funestos á la Francia que se viese atacada por tierra en su propio país; en
cuyo último caso, su Majestad católica acepta y ofrece á su Majestad cris-
tianísima, sin escepcion alguna, no solo dichos diez mil hombres de infante-
ria y dos mil de caballeria, sino tambien en caso necesario aumentar este -
socorro hasta los mismos diez y ocho mil hombres de infanteria y seis mil -
de caballeria que su Majestad cristianísima ha estipulado, no atendiendo su
Majestad católica para este caso á la desproporcion espresada de las fuer-
zas terrestres entre la España y la Francia.

Artículo 9º.

Será permitido á la potencia demandante enviar uno ó muchos comisarios que nombrarán de entre sus súbditos para que vayan á asegurarse por sí mismos de que con efecto, pasados los tres meses de requisicion ha juntado y tiene existentes la potencia requerida en uno ó muchos de sus puertos los doce navios de línea y las seis fragatas armadas en guerra y las tropas estipuladas, todo prontas á partir.

Artículo 10º.

Dichos navios, fragatas y tropas obrarán segun la voluntad de la potencia que los necesite y que los haya pedido, sin que sobre los motivos ó objetos que indicase para emplar estas fuerzas de mar y de tierra, pueda - hacer la potencia requerida mas que una sola y única representacion.

Artículo 11º.

Lo que se acaba de convenir se entiende siempre que la potencia demandante pidiese el socorro para alguna empresa de mar ó de tierra, defensiva ó ofensiva, de inmediata ejecucion: pero no para que los navios y fragatas de la potencia requerida vayan á fijarse en sus puertos ni las tropas en sus dominios; pues bastará que el requerido tenga dichas fuerzas de mar y tierra dispuestas y prontas en los parages de sus dominios, que prefiriese la potencia demandante por mas utiles á sus miras.

Artículo 12º.

La requisicion que uno de los dos soberanos hiciese al otro de los socorros estipulados por el presente tratado, bastará para probar la necesidad de una parte y la obligacion de la otra, de suministrarlos; sin que sea necesario entrar en esplicacion alguna, sea de la especie que se fue se, ni bajo de pretesto alguno, para eludir la mas pronta y mas perfecta - ejecucion de este empeño.

Artículo 13º.

En consecuencia del artículo precedente no tendrá lugar la discusion del caso ofensivo ó defensivo en órden á los doce navios, seis fragatas y tropas de tierra que se han de suministrar, debiendo mirarse estas fuerzas en todas ocasiones y tres meses despues de la requisicion, como pertenecientes en propiedad á la potencia que las hubiese pedido.

Artículo 14º.

La potencia que suministrare el socorro, sea de navios y fragatas, sea de tropas de tierra, las pagará en cualquier parte en donde su aliado las hiciese obrar, como si directamente para sí misma emplease estas fuerzas; y la potencia demandante estará obligada, sea que hagan corta ó larga mansion en sus puertos ó tierras dichos navios, fragatas ó tropas, á hacer las suministrar cuanto necesiten á los mismos precios que si fuesen propias, y —

guardarlas los mismos respetos y privilegios de que gozan sus tropas. Y se ha convenido que en ningun caso dichas tropas, navios ó fragatas causarán - gasto á la potencia en cuyo servicio se empleasen, y que permanecerán á dis-posicion de ella todo el tiempo que durare la guerra en que estuviese empe-ñada.

Artículo 15º.

El rey católico y el rey cristianísimo se obligan á tener completos y bien armados los navios, fragatas y tropas que sus Majestades se suministra-rán recíprocamente, de suerte que apenas la potencia ~~te~~querida hubiese sumi-nistrado los socorros estipulados en los artículos 5º y 6º del presente tra-tado, hará armar en sus puertos número suficiente de navios y fragatas para reemplazar sin pérdida de tiempo los que puedan perderse en los accidentes de la guerra ó del mar. Y la misma potencia tendrá igualmente preparadas -- las reclutas y reparaciones necesarias para las tropas de tierra que hubie- se suministrado.

Artículo 16º.

Los socorros estipulados en los artículos precedentes, segun el tiem- po y forma que se ha explicado, han de ser considerados como una obligacion inseparable de los vínculos del parentesco y amistad, y de la union íntima que desean los dos monarcas contratantes se perpetúe entre todos sus des- cendientes: y dichos socorros estipulados serán lo menos que la potencia -

requerida podrá hacer por la que los necesitare. Pero como la intencion de ambos reyes es que en empezándose la guerra por ó contra la una de las dos coronas, ha de venir á ser personal y propia tambien de la otra; se ha convenido que luego que los dos esten en guerra declarada contra el mismo ó - los mismos enemigos, cesará la obligacion de dichos socorros estipulados, y ocupará su lugar la de hacer la guerra juntos empleando para ella todas sus fuerzas; á cuyo fin establecerán entonces los dos altos contratantes - convenciones particulares relativas á las circunstancias de la guerra en - que se hallasen empeñadas; concertarán y determinarán sus esfuerzos y sus ventajas respectivas y recíprocas, así como los planes y las operaciones - militares y políticas; y adoptadas que sean las seguirán los dos reyes juntos, y de comun y perfecto acuerdo.

Artículo 17º.

Sus Majestades católica y cristianísima se empeñan y se prometen para el caso de hallarse ambos en guerra no escuchar ni hacer proposicion alguna de paz, no tratarla ni concluirla con el enemigo, ó los enemigos que tuviesen, sino de un acuerdo y consentimiento mútuo y comun, y comunicarse recíprocamente todo lo que pudiese acaecer á una ó á otra de las dos potencias, en particular sobre el objeto de la pacificacion; de suerte que tanto en - guerra como en paz cada una de las dos coronas mirará como propios los in-tereses de la otra su aliada.

Artículo 18º.

Siguiendo estos principios y los empeños contraídos en su consecuencia, han convenido sus Majestades católica y cristianísima que cuando se trate de terminar con la paz la guerra que hayan sostenido en comun, compensarán las ventajas que una de las dos potencias haya podido lograr con las pérdidas que haya padecido la otra; de forma que tanto sobre las condiciones de la paz como sobre las operaciones de la guerra, las dos monarquías de España y Francia, en toda la estension de sus dominios, han de ser consideradas y han de obrar como si no formase mas que una sola y misma potencia.

Artículo 19º.

Concurriendo en el rey de las Dos Sicilias los mismos vínculos de parentesco y amistad y los mismos intereses que unen intimamente á sus Majestades católica y cristianísima; estipula su Majestad católica por el rey - de las Dos Sicilias, su hijo; y se obliga á hacerle ratificar tanto por sí como por sus descendientes perpetuamente, todos los artículos del presente tratado: bien entendido que se determinarán en el acto de accesion de su - Majestad siciliana los socorros que haya de suministrar á proporcion del - poder de sus dominios.

Artículo 20º.

Sus Majestades católica, cristianísima y siciliana se obligan á concurrir, no solo á la conservación y esplendor de sus reinos en el estado en

que se hallan actualmente, sino tambien á sostener primero que cualquiera otro objeto y sin escepcion la dignidad y los derechos de su casa; de suerte que cada principe que tendrá el honor de venir de la misma sangre, podrá estar asegurado en cualquiera ocasion de la proteccion y asistencia de las tres coronas.

Artículo 21º.

Debiendo ser considerado el presente tratado, segun se anuncia en el preámbulo, como un pacto de familia entre todas las ramas de la augusta casa de Borbon, ninguna otra potencia que las que fueren de esta sangre podrá ser convidada ni admitida á acceder á él.

Artículo 22º.

La estrecha amistad que une á los monarcas contratantes y los empeños que toman por este tratado, los determinan á estipular que sus estados y súbditos respectivos participarán de las ventajas y de la alianza que se establece entre los soberanos; y sus Majestades se prometen que no sufrirán, por ningun caso ni bajo cualquier pretesto, que sus dichos estados y súbditos puedan hacer ni emprender nada contrario á la perfecta correspondencia que debe subsistir inviolablemente entre las tres coronas.

Artículo 23º.

Para cimentar mas esta buena inteligencia y ventajas reciprocas entre

los súbditos de las dos coronas de España y Francia; se ha convenido que no comprenderá en adelante á los españoles la ley de auvena (de estrangería) -- de Francia; y en su consecuencia ofrece su Majestad cristianísima abolirla por lo que á ellos toca, de suerte que podrán disponer por testamento, donacion ó de cualquiera otra manera, de todos sus bienes que posean en los dominios de Francia, sin escepcion, de cualquiera naturaleza que sean, y -- que sus herederos, súbditos de su Majestad, católica, habitantes fuera ó dentro de Francia, podrán recoger las herencias, aun cuando haya abintestado, por sus procuradores ó apoderados, aunque no esten naturalizados, y trasportarlos fuera de los estados de su Majestad cristianísima, no obstante las leyes, edictos, establecimientos, costumbres ó derechos que haya en contrario; pues todas y todos los deroga su Majestad cristianísima en cuanto sea necesario. Su Majestad católica ofrece por su parte hacer que gocen igualmente de los mismos privilegios en todos los estados y países de su dominio todos los franceses y súbditos de su majestad cristianísima por lo que toca á la libre disposicion de los bienes que posean en toda la estension de su monarquía española; de suerte que los súbditos de las dos coronas serán generalmente tratados en todo y por todo lo concerniente á este artículo, en los países que ambas dominan como los propios y naturales de la potencia en cuyo territorio residan. Todo lo dicho respecto á la abolicion de la ley -- de auvena en favor de los españoles en Francia, y á las demas ventajas concedidas á los franceses en los estados del rey de España (2), se entiende --

concedido á los súbditos del rey de las Dos Sicilias, que van comprendidos bajo las mismas condiciones en este artículo; y recíprocamente los súbditos de sus Majestades católica y cristianísima gozarán las mismas exenciones y ventajas en los estados de su Majestad siciliana.

Artículo 24º.

Los súbditos de los altos contratantes serán tratados, relativamente al comercio y á las imposiciones en los dominios de cada uno en Europa, como los propios súbditos del país adonde llegasen ó residiesen; de suerte - que la bandera española gozará en Francia los mismos derechos y prerogativas que la bandera francesa, así como la bandera francesa será tratada en España con el propio favor que la española. Los súbditos de las dos monarquías, en declarando sus mercaderías, pagarán los mismos derechos que pagarían si fuesen de naturales; y esta misma igualdad se observará en cuanto á la libertad de la importacion y esportacion, sin que deban pagarse de una y otra parte mas derechos que los que se perciban de los propios súbditos del soberano; ni ser materias de contrabando para unos las que no lo fuesen para los otros; y por lo que mira á estos objetos, quedan abolidos cualesquiera tratados, convenciones ó establecimientos anteriores entre las dos monarquías; bien entendido que ninguna otra potencia estrangera gozará en España ni en Francia privilegio alguno mas ventajoso que el de las dos naciones. Las mismas reglas se observarán en España y Francia con la bandera

y súbditos del rey de las Dos Sicilias; y su Majestad siciliana hará que - los gocen recíprocamente en sus dominios las banderas y súbditos de las dos coronas de España y Francia.

Artículo 25º.

Si los altos contratantes hiciesen en adelante algun tratado de comercio con otras potencias y les acordasen ó les hubiesen ya acordado el - tratado de la nacion mas favorecida en sus puertos ó estados, se prevendrá á dichas potencias que el trato de los españoles en Francia y en las Dos - Sicilias, el de los franceses en España y tambien en las Dos Sicilias, y - el de los napolitanos y sicilianos en España y Francia sobre el mismo obje - to es esceptuado en esta parte, y no debe ser citado ni servir de ejemplo, pues sus Majestades católica, cristianísima y siciliana no quieren que otra alguna nacion participe de los privilegios que hallan por conveniente ha - cer recíprocamente gozar á sus respectivos vasallos.

Artículo 26º.

Los altos contratantes se confiarán recíprocamente todas las alian - zas que pudiesen formar en lo sucesivo, y las negociaciones que pudiesen - seguir, sobre todo las que tuviesen alguna connexion con sus intereses comu - nes, y en su consecuencia sus Majestades católica, cristianísima y sicilia - na mandarán á los respectivos ministros que mantienen en las demas cortes estrangeras que vivan entre sí con la mas perfecta inteligencia y la mayor

confianza á fin que todas las operaciones hechas en nombre de cualquiera de las tres coronas, se encaminen á su gloria y á sus comunes ventajas, acrediten y sean una prenda constante de la intimidad que sus dichas Majestades - quieren establecer y perpetuar entre sí.

Artículo 27º.

El delicado objeto de la precedencia en los actos, funciones y ceremonias públicas es frecuentemente un estorbo para la buena armonia y estrecha confianza que conviene haya entre los ministros respectivos de España y Francia, porque estas especies de discusiones, cualquiera que sea el temperamento que se tome para cortarlas, indisponen siempre los ánimos. Estas disputas eran naturales cuando las dos coronas de España y Francia eran poseídas por príncipes de dos casas diferentes: pero actualmente y para todo el tiempo que haya determinado la divina Providencia mantener en ambos tronos soberanos de la misma familia, no conviene que subsista entre ellos — una ocasion continua de sinsabor y descontento. En consecuencia, sus Majestades católica y cristianísima han convenido en cortar dicha ocasion, fijando por regla invariable á sus ministros, revestidos de igual carácter — en las cortes estrangeras que en las de familia, como son al presente las — de Nápoles y Parma, preceda siempre en cualquier acto, funcion ó ceremonia al ministro del monarca cabeza de la familia; cuya precedencia se considerará como una consecuencia de la ventaja del nacimiento; y que en todas las

demas cortes, el ministro, sea de España, sea de Francia que hubiese llegado último, ó cuya residencia fuese mas reciente, ceda al ministro de la — otra corona y de igual carácter que hubiese llegado primero ó cuya residencia fuese mas antigua: de suerte que habrá desde hoy con respecto á esto — una constante y fraternal alternativa, á la que ninguna otra potencia deberá ni podrá ser admitida, en atencion á que esta disposicion (que es únicamente un puro efecto del presente pacto de familia) cesaria si los tronos de ambas monarquías dajasen de ser ocupados por principes de la misma casa; pues entonces cada corona haria revivir sus derechos ó pretensiones á la — precedencia. Se ha convenido tambien que si por alguna casualidad los ministros de las dos coronas llegasen precisamente á un mismo tiempo á una — corte que no sea de las de familia, el ministro del soberano, cabeza de la casa, precederá por este título al ministro del soberano, segundo de la misma casa.

Artículo 28º.

El presente tratado ó pacto de familia será ratificado y las ratificaciones cangeadas en el término de un mes, ó antes si fuere posible, contando desde el día de la firma de dicho tratado. En fé de lo cual, nos los infrascritos ministros plenipotenciarios de su Majestad católica y de su — Majestad cristianísima, en virtud de los plenos poderes que van copiados — literal y fielmente al pie de este presente tratado, le hemos firmado y —

y puesto en él los sellos de nuestras armas. En París á 15 de agosto de —
1761.— El marqués de Grimaldi.— Le duc de Choiseul.

El 20 de agosto de este mes y año lo ratificó su Majestad el rey de Francia; y el 25 su Majestad católica en san Ildefonso; habiendo refrendado el instrumento don Ricardo Wall, primer secretario de Estado y del Despacho.

Real Orden de 12 de diciembre de 1761, para que el goberna-
dor de Cádiz conozca de las causas de extranjeros transeúntes.

(30)

Habiendo dado cuenta al Rey de las tres dudas que V.E. propone en re presentación de 28 de octubre próximo pasado, ha resuelto S.M. que todas las causas de extranjeros transeúntes en estos dominios, ya intervengan en ellas como actores ó reos, corresponde a V.E. su conocimiento como gobernador militar con las apelaciones en segunda instancia al consejo de guerra, e reserva de las en que se trate de comercio olícito y de contrabando, las que tiene S.M. resuelto en 21 de diciembre de 1759 deber conocer el superintendente general de la real hacienda y sus subdelogados; y en esta inteligencia y para el curso de las mencionadas causas y en las demás que son por su naturaleza del fuero militar, y debe V.E. actuarlas ante el escribano de guerra y no otro alguno; pero podrá V.E. asesorarse para su curso y determinación con el abogado que sea de su satisfacción y distinción de aquellas en que conoce como corregidor y subdelgado del intendente de Sevilla, en que indispensablemente se ha de asesorar con los aldaldes mayores, arreglándose a lo mandado en el artículo 5 de la instrucción de intendentes del año de - 1749.

(30) RIQUELME, A.: "Apéndices al Derecho Internacional de España". Tomo II. Madrid, 1849. pág. 315.

Ultimamente ha declarado S.M. que aunque las causas de presas corresponden a los comandantes generales, teniendo consideración a no residir en esa plaza el del reino de Andalucía, debe V.E. conocer de las que ocurrieren en ese puerto, para que de ese modo no se experimente retardo en las prontas providencias que piden la delicadeza de sus asuntos; y manda S.M. que en el caso de hallarse en otros juzgados algunas causas de las que van declaradas, corresponden a V.E. como juez militar, las evoque al suyo por los medios prevenidos por derecho, reintegrando en la propia forma a la escribanía de guerra de todas las que se hallen extraviadas y sojuzgadas por la jurisdicción real ordinaria, en donde se mantendrán por inventario. Dios guarde, etc. Madrid 1º de diciembre de 1.761. Ricardo Wall.— Señor D. José Sanmanat, gobernador de Cádiz.

Real Orden de 10 de marzo de 1762, aclarando la inteligencia
de la resolución del año 16 sobre extranjeros transeúntes. (31)

Habiendo dado cuenta al Rey de la representación de V.E., de 11 de diciembre próximo, en que solicita aclaración sobre las calidades que deben concurrir en los extranjeros para calificarse o no de transeúntes, y también el que se nombre con real título un abogado para asesorar de los negocios de guerra, fundado en las razones que expone a este fin; ha resuelto S.M. que en cuanto a las calidades que deben tener los extranjeros para graduarse o no de transeúntes, se arregle V.E. por ahora a la real declaración expedida por punto general el año de 1716; entendiéndose el artículo respectivo al que mora diez años en casa poblada en estos reinos para no ser reputado por transeúnte, con la condición que no se halle afecto al pabellón y consulado de su nación, o no hay demostrado o hecho gestión para ello. Y quiere que para poder tomar resolución sobre este asunto remita V.E. todas las órdenes y resoluciones que se hallen en la secretaría de ese gobierno, expedidas por el Rey su augusto padre durante el gobierno del marqués de Rochena.

Y por lo que mira al nombramiento de asesor con real título no lo halla S.M. por conveniente, respecto de que V.E. puede valerse para las causas

(31) RIQUELME, A. "Apéndice al Derecho Internacional de España". Tomo II. Madrid, 1849, pág. 267.

militares de su jurisdicción, como se le previno en 10 de diciembre, del letra
do que fuere de su mayor satisfacción. Lo que de su real orden participo a V.E.
para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde, etc. Madrid, 10 de marzo de
1.762.= D. Ricardo Wal.= Sr. D. Josef Senmanat, gobernador de Cádiz.

Real cédula de 28 de junio de 1764 para que anualmente se forme una lista de los extranjeros, con expresión de los transeúntes y domiciliados (32)

EL REY,

Por cuanto me hallo informado vienen a mis dominios varios sujetos ex. tranjeros, unos que efectivamente se establecen en ellos, y otros por razón de su comercio o negocios temporales, y de los embarazos que suelen ocurrir sobre si deben o no gozar del fuero de los transeúntes o del de domiciliados en mis reinos; y para que en lo futuro cese toda disputa, y se sepa el fuero que deben tener todos los extranjeros que residan en mis dominios, - he resuelto que anualmente se forme en todos los puertos y lugares de comercio, una lista de los comerciantes y demás personas extranjeras que haya - en ellos; con separación de las naciones, firmando todos sus nombres con - expresión de si son transeúntes o domiciliados reputados como vasallos míos renovándola cada año con los que vinieren de las respectivas naciones, o entraren a ser nacionales españoles por alguna razón que les dá el derecho, remitiendo todos los años copia de ella por mano del secretario, que es o fuere de mi real junta de comercio por lo perteneciente a dependencias de extranjeros; que en las secretarías de mis capitanías generales, comandan-

(32) RIQUELME, A.: "Apéndice al Derecho Internacional de España". Tomo II. Madrid, 1849. pág. 268-9.

cias generales, y en las de las capitales de las demás provincias que no es tán sujetas a capitanicas ni comandancias generales, tengan un libro en don de firmen los que residan en ellas, y se ponga en él los que resulten de las relaciones, que deberán enviarles de los demás pueblos de sus distritos, fir nada como viene expresada, dejando en dicho libro una o dos hojas después del asiento de cada uno de los referidos extranjeros para la renovación - anual; y si se ofreciese duda en los que se deben alistar por transeúntes, y gozar de las exenciones que les compete y de los que han de reputarse co mo vecinos, y obtener los beneficios y cargas de mis vasallos, lo represen tarán a mi junta de comercio y moneda y dependencias de extranjeros, por - quien se decidirá y prevendrá lo que deba practicarse. Por tanto mando a - los capitanes generales, comandantes generales, gobernadores de plazas, in tendentes y demás personas y justicias a quienes pertenece, guarden y cimplan, hagan cumplir y guardar lo referido: que así es mi voluntad. Dada en Buen Retiro, a 28 de junio de 1764. Yo, el Rey.- Por mandado del Rey nues tro señor, D. Miguel de Carrichena y Borda.

LEY VI.- Reglamento sobre requisitos para el estableci-
miento de Cónsules y Vice-cónsules, exenciones y uso de
sus facultades. (a)

D. Carlos III, en el Pardo por dec. de 1º de Feb. de -
1765. (33)

Habiendo ocurrido varias dudas acerca de los requisitos, que han de tener los cónsules y Vice-Cónsules de las Potencias extranjeras, para servir es-
tos oficios en las plazas y fuertes de mis dominios, donde los haya habi-
do anteriormente con REal cédula de aprobación, como asimismo las exencio-
nes y privilegios que les están concedidos; ha tenido a bien aprobar el -
reglamento que sobre este asunto me ha propuesto la Junta de Comercio y -
Dependencias de Extrangeros en consulta de 30 de julio de 1763, cuyos -
puntos son los siguientes: que los Cónsules, para impetrar mi Real Aprobación, hayan de presentar la patente original con su traducción auténtica en español, y con estos documentos el memorial en que lo soliciten; que -
hayan de justificar ser vasallos nativos del Príncipe o Estado que los nom-
bre, sin que les aproveche tener carta o privilegio de connaturalización -

(33) Los Códigos españoles concordados y anotados. Tomo 8º. Novísima Reco-
pilación de las Leyes de España. Libro VI, título XI, Ley VI. La Pu-
blicidad. Madrid, 1.850, pág. 258.

en sus dominios, y no estar domiciliado en ninguno de los de España: que los mismo hayan de practicar y justificar los Vice-Cónsules, excepto la que se manda hacer a los Cónsules, de ser vasallos nativos del príncipe o Estado a quien hayan de servir, por estarles dispensada esta qualidad: - que así los Cónsules como los Vice-Cónsules hayan indispensablemente de impetrar la Real aprobación, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos al uso de sus empleos: que donde haya necesidad de establecerse Cónsules o Vice-Cónsules, por haberse aumentado el comercio de la Nación que les nombre, puedan hacer recurso a mi Real Persona, para que enterado de la necesidad pueda acordarles esta gracia si tuviese a bien dispensar el que no los haya habido por lo pasado: que por razón de Cónsules no tengan - otra graduación que la de unos meros agentes de su Nación, pues lo son - propiamente, y por tanto gozan el fuero militar, como los demás extrangeros transeúntes: que se entienda estar exentos únicamente de alojamientos y todas cargas concejiles y personales; pero que al mismo tiempo, si los Cónsules o Vice-Cónsules comerciaren por mayor ó menor, sean tratados como otro qualquiera individuo extranjero que haga igual comercio: que sus casas no gocen de inmunidad alguna, ni puedan tener en parte pública la insignia de las armas del Príncipe o Estado que los nombre; y que solo puedan en sus torres o azoteas, o en otros parages de sus casas, poner señal que manifieste a los de su Nación qual es la casa de su Cónsul; que no - puedan ejercer jurisdicción alguna, aunque sea entre vasallos de su propio

Soberano, sino componer extrajudicial y amigablemente sus diferencias; si bien las Justicias del Reyno deberán darles el auxilio que necesiten, para que tengan efecto sus arbitrarias y extrajudiciales providencias, distinguiéndolos y atendiéndolos en sus regulares recursos; y últimamente, - que en las vacantes de Cónsules o de Vice-Cónsules; o dónde no los haya, no se permita cobrar derechos algunos de Consulado: declarando, para quitar dudas, no ser facultativo a los Cónsules nombrar otros apoderados que los que necesiten para sus negocios personales y domésticos, pues los pertenecientes a sus Consulados o Vice-Consulados que pueden poner con mi Real aprobación donde les convenga (reñiendo facultad para ello), los deben practicar por sí mismos, y no por otra persona.

- (a) Sobre lo dispuesto en esta ley pueden verse la R.O. de 26 de setiembre de 1.804, las RR.OO de 8 de julio y 28 de setiembre de 1.818; la de 3 de junio de 1.819; la de 8 de mayo de 1.827; y particularmente - la de 7 de octubre de 1.842, según la cual, en el Regium Exequatur - que se expide por Estado a los Cónsules, vice-cónsules o agentes consulares, se declaran las exenciones, facultades y privilegios a que deben atenderse.

LEY XIV.- Exenciones y preeminencias del fuero militar; y declaracion de las personas que le gozan. (34).

El mismo en las ordenanzas Militares de 22 de Octubre de 1768, trat. 8 tit. 1.

1. Para atajar los inconvenientes que con atraso de mi servicio y competencia de Jurisdicciones detienen ó embarazan la buena administracion de justicia, así por solicitar el fuero militar muchos que no deben gozarle, como por sujetarse por ignorancia á otros Juzgados algunos á quienes les es tá concedido, y debieran defenderle; declaro, que el referido fuero pertenece á todos los Militares que actualmente sirven, y en adelante sirvieron en mis Tropas regladas, ó empleos que subsistan con actual ejercicio en — guerra, y que como tales Militares gocen sueldo por mis Tesorerías del Exército en campaña ó las provincias; comprendiéndose en esta clase los Militares que se hubieren retirado del servicio y tuvieran despacho mio para — gozar de fuero, pero con la diferencia y distincion que se expresará sucesivamente.

2. Las Tropas ligeras de Infanteria y Caballeria que existen hoy, y sucesivamente se formaren, gozarán del mismo fuero que las Tropas regladas de mi Exército.

(34) Los Códigos españoles concordados y anotados. Tomo 8º. Novísima Recopilacion de las Leyes de España. Libro VI, título IV, Ley XIV. La Publicidad. Madrid 1850. pág. 149-150.

3. A los Oficiales y soldados, que estuvieren en actual servicio, no podrán las Justicias de los parages en que residieren, apremiarlos á tener oficios concejiles ni de la Cruzada, Mayordomía ni tutela contra su voluntad: gozarán la excepcion de pago de servicio ordinario y estraordinario; y no podrá imponérseles alojamiento, repartimiento de carros, bagages ni - bastimentos, si no fueren para mi Real casa y Corte: y siendo casados, gozarán sus mugeres de las mismas preeminencias. Podrán traer carabinas y — pistolas largas de arzon, como las que se usan en la guerra, teniendo plaza viva, y estando actualmente sirviendo: y siempre que usaren de licencia, ó por comision de mi servicio se separen de sus destinos ó Cuerpos, podrán - traer estas armas por el camino para resguardo de sus personas; con calidad que mientras estuvieren en la Corte, ó en las ciudades, villas y lugares - de mis Reynos, no podrán andar con ellas, sino tenerlas guardadas en sus ca sas, para quando vuelvan á servir, y hacer su viage. Podrán tirar con arca buz largo, guardando los terminos y meses vedados: y si usaren de otras ar mas de fuegos de las prohibidas por bandos y pragmáticas, se les dará por incursos en los bandos publicados, y por perdidas las armas, sujetándose á la pena que se impusiere en dichos bandos.

4. No podrán los referidos Oficiales y soldados ser presos por la — Justicia ordinaria, por deudas que hayan contraído despues de estar sirvien do; ni se les executara por ellas en sus caballos, armas ni vestidos, ni -

en los de sus mugeres, á menos que la deuda proceda de alcances ó créditos, que mi Real Hacienda tenga contra ellos; pero en las deudas anteriores al tiempo en que el deudor entró en mi servicio, responderá segun la calidad de la obligacion en su persona y bienes raices, y muebles que no sean del uso militar.

5. No podrán conocer de las causas civiles ni criminales de Oficiales las Justicias ordinarias, sino solo el Capitan General, Consejo general, ó Comandante militar del parage donde residieren, segun la diferencia y circunstancias de los casos, en la forma que se explicará mas adelante.

6. Los Oficiales, sargentos, cabos y soldados que se retiraren de mi servicio con licencia, habiendo servido quince años sin intermision, gozarán cédula de premio correspondiente; y envirtud de ella, si se retiraren del Exército, estarán exentos del servicio ordinario y extraordinario: no podrán ser apremiados á tener oficios de Concejo ni de la Cruzada, Mayordomía ni tutela contra su voluntad; ni se les impondrá alojamiento, repartimiento de carros, bagages ni bastimentos, si no fueren para mi Real Casa y Corte (a); y las mismas preeminencias gozarán sus mugeres: y podrán tirar con arcabuz largo, guardando los términos y meses vedados; pero si usaren de armas prohibidas, se les dará por incursos en los bandos publicados.

7. Desde la clase de Alférez ó Subteniente inclusive arriba todos los Oficiales, que se hubieren retirado del servicio con licencia mía y cédula

de preeminencia, gozarán, además de las expresadas en el artículo antecedente, del fuero militar en las causas criminales; de suerte, que las Justicias ordinarias solo tendrán facultad para hacer la sumaria, que deberán formar en el término de quarenta y ocho horas, siendo la causa leve, y siendo grave, en el de ocho dias naturales, y remitirla al Capitán General de la provincia, en cuyo Juzgado se sentenciará, concediendo las apelaciones al Consejo Supremo de Guerra; y en las civiles y casos exceptuados los podrán procesar, sentenciar, y executar las Justicias ordinarias: pero los Oficiales agregados á Plazas, destinados á Inválidos, y los de Milicias Provinciales regladas, gozarán tambien del fuero civil, sacando la cédula de preeminencias correspondiente á su clase.

8. Las mugeres y los hijos de todo militar gozarán este fuero: y muerto aquel, le conservarán su viuda y las hijas, mientras no tomen estado; pero los hijos varones únicamente le gozarán hasta la edad de diez y seis años.

9. Todo criado de Militar con servidumbre actual y goce de salario tendrá, por el tiempo en que exista con estas calidades, el fuero en las causas civiles y criminales que contra él se movieren, no siendo por deudas ó delitos anteriores, en cuyo caso ni le servirá el fuero, ni se le apoyará con pretexto alguno; quedando responsables los amos y los Gefes de qualquiera omision en perjuicio de la buena administracion de justicia (b).

10. Todo individuo que goce fuero militar, deberá declarar, siempre que sea citado para ello por las Justicias ordinarias, precediendo el aviso de estas al Comandante natural de que dependa; pero en los casos criminales executivos in fraganti deberán declarar, aunque no se haya pasado el aviso á sus Gefes naturales: y reciprocamente se observará lo mismo por los dependientes de la Jurisdiccion ordinaria, siempre que la militar los necesite para declarar, con la diferencia de casos que este artículo previene.

(a) Por R.O. de 27 de setiembre de 1816 se mandó, de acuerdo, con la disposicion de esta ley, que los oficiales retirados del ejército no pudiesen ser nombrados contra su voluntad individuos de ayuntamiento; pero derogadas por el art. 113 de la ley de 8 de enero de 1815 todas las disposicio--nes anteriores á su promulgacion, los militares retirados no gozan en el --dia de esta exencion, con arreglo al art. 23, capítulo 2 de la misma.

Las exenciones de alojamiento han sufrido diversas vicisitudes, poste--riores á la Novísima Recopilacion. Las Cortes, por decreto de 10 de junio - de 1813, declararon á todos los españoles sujetos sin distincion alguna á --las cargas de alojamientos y bagajes, quedando por consiguiente abolidas --todas las exenciones; á consulta del Consejo de Castilla fueron restableci--das por circular de 19 de agosto de 1815; volviéronse á suprimir en RR.OO. de 22 de ~~enero~~ y 28 de octubre de 1816: renacieron otra vez mediante real - cédula de 18 de diciembre de 1816, en que se mandaron guardar, entre otras, á las que gozan de fuero militar; pero á consulta del Supremo Consejo de la Guerra se suspendieron los efectos de esta cédula por R.O. de 27 de enero - de 1817, disponiéndose que continuase el servicio de alojamientos sin escep--ciones: por R.O. de 10 de noviembre del mismo año, confirmada por otra de -

26 de enero de 1835, se ordenó que solo quedasen exceptuados del alojamiento material los reverendos obispos y los párrocos. Además de las disposiciones citadas, véanse la R.O. de 19 de marzo de 1837, la de 5 de marzo de 1838, y la de 8 de junio de 1841. Ultimamente, habiendo desaparecido con la terminación de la guerra las extraordinarias circunstancias que ocasionaron las alteraciones que ha sufrido este servicio, se ha vuelto á restablecer la observancia del art. 6, tratado 8, tit. 1 de la ordenanza del Ejército, de donde está tomada la disposición de esta ley, resultando, que en el día gozan de la exención de alojamiento los aforados de guerra, excepto cuando ocurran casos extraordinarios de guerra, en que todas las casas se hallen ocupadas, incluso las de los concejales, estando obligados á contribuir con el contingente que corresponda á su caudal por compensación ó equivalencia de tal servicio, donde se hallare establecido este método: R.R.OO. de 24 y 28 de febrero de 1845; y otra comunicada por Guerra, en 12 de setiembre de 1846; y por Gobernación, en 22 de abril de 1848.

(b) Además de las personas á quienes por esta ley se concede el fuero militar, se ha ampliado después por varias disposiciones á las siguientes: Secretarios de las capitánías ó comandancias generales, con sus familias y dependientes, aunque se hallen retirados ó jubilados, siempre que tengan sueldo; R.O. de 22 de agosto de 1788.— El auditor ó asesor, fiscal, escribano principal y un escribiente; procurador de pobres y alguacil mayor de todas las auditorías de guerra; R.O. de 25 de setiembre de 1765.— Los dependientes eclesiásticos ó seculares con plaza fija de los juzgados castrenses; R.O. de 14 de marzo de 1808.— Los cirujanos de ejército y hospitales militares; art. 9, tit. 22, tratado 2º de la Ordenanza.— Los intendentes, comisarios ordenadores y de guerra, y demás dependientes de la hacienda militar; L. 1, tit. 4, lib. 6, suplemento á la Novísima, y R.O. de 10 de julio de 1832.— Los asentistas de víveres y provisiones del ejército, y em—

pleados del ramo; Reglamento de 25 de julio de 1800, y R.O. de 10 de octubre de 1830.- Los extranjeros transeuntes; LL. 5 y 6, tít. 11, lib. 6 de la Novísima, y R.O. de 26 de setiembre de 1804.

Real ordenanza de 17 de marzo de 1773, adicional a la de reemplazos de 3 de noviembre de 1770, por la cual se sirve S.M. declarar varias exenciones y casos para la más fácil y exacta ejecución del alistamiento y sorteo, guardada equidad. (35).

(Los artículos 2º y 24 se insertan únicamente porque son los que se refieren a los extranjeros)

Don Carlos, por la gracia de Dios,, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, islas y Tierra firme del mar - océanos, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante y Milán, conde de Auspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, etc. Por mi real ordenanza de 3 de noviembre de 1770 tuve a bien establecer las - reglas que deben observarse inviolablemente para el anual reemplazo del ejército, con justa y equitativa distribución en las provincias de mis dominios de Europa, después de haber precedido un maduro y deliberado exámen; a cuyo establecimiento me movieron las urgentes y graves causas que en ella se refieren. Y para que mis pueblos entendiesen debidamente esta mi real deliberación, la hice comunicar al mi consejo por real decreto dirigido a él, en cuya puntual observancia se expidió mi real cédula de 24 de dicho mes y año, - para hacerla saber á los tribunales, corregidores y justicias del reino; ha-

(35) RIQUELME, A. "Apéndice al Derecho Internacional de España", Tomo II, Madrid, 1849, pág. 296-299.

biéndose participado por mi secretario de Estado del despacho de Guerra, no sólo a los oficiales generales e intendentes de las provincias, sino también a los superiores eclesiásticos, para que coadyuvasen en lo que les perteneciese, especialmente en lo tocante al artículo 31 de ella, y á que en todo se procediese con orden; escusando esenciones y competencias indebidass. El efecto correspondió perfectamente a la bondad de las reglas, y al amor y fidelidad de mis amados vasallos; haciéndose cargo de ser indispensable la fuerza constante del ejército, para sostener la dignidad de mi corona y las glorias de la nación. Deseando yo dar una prueba a mis vasallos de cuán gratos me son sus alivios, consiguiente a lo que ordené en el artículo 58 de la citada real ordenanza, luego que se halló pacífica la constitución de las potencias vecinas, no solo hice reducir algunas plazas en cada compañía de infantería española, sino también estendí igual minoración a la caballería y dragones con ahorro de mi erario, para invertir todas estas sumas en otros objetos de la felicidad pública; resultando a la labranza y artes, y aún a la población, este mayor número de brazos industriosos. Del propio modo, en consecuencia y conforme al espíritu de lo dispuesto en el artículo 50, se ha extendido a la mitad de los soldados de la infantería española el permiso de los cuatro meses, para poder pasar a sus provincias a emplearse en los meses más útiles a las labores del campo; habiéndome sido muy agradable la puntualidad de haberse restituido a sus banderas, cumplido el término de la licencia, con la honradez y constante fidelidad que caracteriza la nación. Esten-

diendose pues mis paternales cuidados a perfeccionar tan importante establecimiento, he hecho examinar por personas de mi confianza toda especie de recursos, dirigidos a la más puntual inteligencia de la ordenanza; y aunque en ella se encuentran los principios y reglas suficientes para su resolución, he tenido por conducente comunicar a mi consejo y demás á quienes corresponde, las sucesivas declaraciones. Y conviniendo á mi servicio evitar el que anden dispersas, y reunir las en una ordenanza adicional, dispuesta por la misma serie de los artículos de la primera, vengo en declarar y ordenar lo siguiente:

2º

1. Aunque para el servicio han de entrar únicamente los naturales de estos reinos y no otros; sin embargo, quiero se incluyen en el alistamiento los extranjeros; así los que van de paso, como los domiciliados y vecindados, con el fin de tener puntual razón de ellos; sus ocupaciones, oficios, y modos honestos de vivir; o los que por carecer de ellos sean vagos y gravosos al reino, con cuya indagación pueda proveerse a tiempo por las justicias del conveniente remedio: procediendo en todo conforme á las leyes.

2. Mi deliberada voluntad es, que para el sucesivo reemplazo anual, como dirigido al establecimiento de un cuerpo sólido y permanente de tropa nacional han de ser sorteados solamente mis fieles vasallos, que con esta calidad tengan la de naturales de estos mis reinos, Y aunque pudiera tomar en cuanto a extranjeros las providencias propias de mi soberanía o que exigiesen las circunstancias, he resuelto eximir las de los sorteos; porque con mayor facilidad pue-

dan fijar su residencia y vecindad en estos reinos, para gozar de las exenciones que les conceden las leyes, y señaladamente la 66, título 4, lib.2. - cap. 5, de la Recopilación. (1)

3. Mando que respecto á los portugueses, aunque sean desertores, se observe lo mismo que dejo declarado y prevenido en cuanto á los extranjeros en estos mis reinos, para que no se les incluya en los sorteos: bien entendido que así estos como los demás extranjeros, para permanecer en estas exención y demás que les conceden las leyes, se han de ocupar en la labranza, artes y oficios útiles, sin permitirseles vagar; por no ser mi ánimo consentir en mis

- (1) El capítulo de esta ley 66 dice a la letra: "Otrosí, permitimos, que los extranjeros de estos reinos (como sean católicos y amigos de la corona), que quieren venir a ella a ejercitar sus oficios y labores, lo puedan hacer: y mandamos que ejercitando actualmente algún oficio ó labor, y viviendo veinte leguas de la tierra adentro de los puertos, sean libres para - siempre de la moneda forera, y asimismo de las cargas concejiles en el lugar donde vivieran; y que sean admitidos como los demás vecinos de él a los pastos y demás comodidades. Y encargamos a las justicias los acomoden de casas y tierras, si las hubieren menester, y los demás extranjeros, aunque no sean oficiales ni laborantes, habiendo vivido diez años concasa poblada, y siendo casados con mujeres naturales de él por tiempo de seis años, sean admitidos a los oficios de la rep'ública, como no sean corregidores, gobernadores, alcaldes mayores, regidores, alcaldes, depositarios corcadores, ni otros de gobierno; porque en cuanto a éstos y a los beneficios eclesiásticos, dejamos en su fuerza y vigor lo dispuesto por nuestras leyes, y encargamos a las justicias los acomoden en todo lo que se pudiese de casas y tierras para labor, por el beneficio que se considere de su asistencia con estas calidades."

dominios extranjeros ociosos o perjudiciales: sobre que encargo a las justicias la mayor vigilancia y celo para favorecer a los aplicados, aunque se establezcan en los puertos y costas del mar; y para no tolerar los gravosos.

4. Declaro, que los criados extranjeros gozarán la misma exención del sorteo, por ser ventajosa a la caísa pública de mis reinos su permanencia, y que mis súbditos naturales se destinen a la agricultura, a las artes y á otros - oficios más útiles, honrados, y provechosos al Estado.

24.

Los fabricantes y oficiales extranjeros, sus hijos y aprendices, ú oficiales también extranjeros que se hallan establecidos de aquí en adelante en cualesquiera parages del reino, aunque sea en las costas marítimas ó islas, además de las exenciones que les conceden las leyes, gozarán inviolablemente de la exención del sorteo y servicio militar por mar y tierra; sin que en - ello se les pueda poner embarazo. Las justicia cuidarán mucho de que se les cumpla todo lo referido: en inteligencia de que no quedará sin grave escarmiento la menor contravención, o queja fundada, que sobre ello se verificare. A este efecto los recibo bajo de mi soberana protección y amparo; y mando a los de mi consejo, audiencias y chancillerías, les den sobre ello las providiones y despachos necesarios, y castiguen con la mayorseveridad cualesquier molestias, ó vejaciones que se les causaren; procediendo en ello de oficio y promoviéndolo mis fiscales, por lo que en todo esto interesa al fomento de la industria, y bien público del reino.

Real Orden de 15 de setiembre de 1775, para que el capitán general de Andalucía no se mezcle en las causas de extranjeros que corresponden al gobernador de Cádiz. (36)

En vista de carta de V.E. de 1º de este mes, y de la que recibo - con fecha de 8 del mismo, concerniente a la respuesta, que el gobernador de Cádiz ha dado a la orden que V.E. la comunicó con motivo de pasar a - aquella ciudad el auditor de esa capitanía general a inventariar indistintamente todas las causas civiles y criminales contencionas, correspondientes a la jurisdicción militar en fuerza de la aprobación que mereció V.E. en real orden de 18 de mayo de este año, debo decirle, que si V.E. la lee con reflexión, verá que esta solo se limita a las causas puramente militares detenidas con morosidad o competencias de jurisdicciones, y de ningún modo es extensiva a las de los extranjeros transeúntes, cuyo conocimiento por real resolución de 1º de diciembre de 1761 es privativo del juzgado - del gobernador de Cádiz sin que después acá la haya el Rey derogado; en - cuya inteligencia mandará V.E. a su auditor sobresea en tomar conocimiento alguno de las causas de esta naturaleza, debiéndose observar sobre es-

(36) RIQUELME, A.: "Apéndice al Derecho Internacional de España", Tomo II Madrid, 1849. Pág. 316.

te particular la práctica anterior interin S.M. no resuelva lo contrario.

Participolo a V.E. de la misma real orden para su noticia y gobierno.

Dios guarde, etc. San Ildefonso 15 de setiembre de 1.775.- El Conde de -

Ricla.= Señor Marqués de Waumark, capitán general de Andalucía.

Tratado de amistad, garantía y comercio ajustado entre las coronas de España y Portugal; y firmado en el Pardo el 24 de marzo de 1778. (37).

En el nombre de la Santísima Trinidad.

Por el artículo 1º del tratado preliminar de límites felizmente concluido entre las dos coronas de España y Portugal y sus respectivos plenipotenciarios en San Ildefonso á 1º de octubre del año próximo pasado de — 1777, se confirmaron y revalidaron los tratados de paz celebrados entre — las mismas coronas en Lisboa á 13 de febrero de 1668, en Utrech á 6 también de febrero de 1715, y en París a 10 del propio mes de febrero de 1763, como si se hallasen insertos palabras por palabra en el mencionado tratado de — 1777 en cuanto no fuesen derogados por él.

Los dos tratados de Lisboa y Utrech que van citados y se han renovado ahora, han sido, especialmente el primero, la base y fundamento de la — reconciliación y enlaces de las dos monarquías española y portuguesa para llegar al estado en que se hallan hoy una respecto de otra; y por causa tan relevante fueron ambos tratados garantidos por los reyes de la Gran Bretaña, estipulándose formalmente esta garantía en el artículo 20 del tratado de —

(37) CANTILLO, A. "TRATADOS, CONVENIOS Y DECLARACIONES DE PAZ Y DE COMERCIO, que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón". Madrid 1843, pág. 547 a 542.

Utrech de 13 de julio de 1713, celebrado entre la corona de España y la de Inglaterra. Pero así como el ya citado de París de 10 de febrero de 1763 - suscitó por las espresiones de su artículo 21 y otras, algunas dudas y dificultades, en cuya diversa inteligencia se han podido fundar muchas de -- las desavenencias ocurridas en América meridional entre los vasallos de am bas coronas; del propio modo otros artículos y espresiones de los dos tratados anteriores de Lisboa y de Utrech, y varios puntos que desde entonces quedaron pendientes y no se han esplicado hasta ahora, podrían producir en lo sucesivo iguales ó mayores disputas, ó á lo menos el olvido é inobser-- vancia de lo pactado, originándose motivos de nuevas discordias. Deseando, pues, sus Majestades católica y difelísima precaver para siempre aquellos riesgos, é impedir sus consecuencias, han resuelto por medio del presente tratado, para cumplir religiosamente el citado artículo 1º del tratado pre liminar de 1777, dar toda la consistencia y esplicacion que piden los tratados antiguos que se han confirmado, estableciendo así la mas íntima é in disoluble union y amistad entre ambas coronas, á que naturalmente las conducen la situacion y vecindad de ellas, los antiguos y modernos enlaces y parentescos de sus respectivos soberanos, la identidad de origen y el recí proco interés de las dos naciones. A fin, pues, de llevar á efecto tan -- plausibles, grandes y provechosas ideas, el muy alto, muy poderoso y muy -- excelente principe don Carlos III, rey de España y de las Indias, y la muy

alta, muy excelente y muy poderosa princesa doña Maria, reina de Portugal, de los Algarbes, etc. acordaron nombrar sus respectivos plenipotenciarios; es á saber, su Majestad católica el rey de España al excelentísimo señor - don José Moñino, conde de Florida Blanca, caballero de la real órden de Carlos III, su consejero de estado, su primer secretario de estado y del despacho, superintendente general de correos terretres y marítimos, y de las postas y renta de estafetas en España y las Indias; y su Majestad fidelísima la reina de Portugal al excelentísimo señor don Francisco Inocencio de Souza Coutinho, comendador en la Órden de Cristo, de su consejo y su embajador ~~cerca~~ de su Majestad católica; quienes enterados de las intenciones de sus respectivos soberanos, despues de haberse comunicado sus plenipotencias, y hallándolas estendidas en debida forma, han convenido en nombre de ambos monarcas en los artículos siguientes.

Artículo 1º,

Conforme á lo pactado entre las dos coronas en dicho tratado renovado de 13 de febrero de 1668, y señaladamente en sus artículos 3º, 7º, 10º, y 11º., y en mayor esplicacion de ellos, siguiendo otros tratados antiguos, á que se refieren dichos artículos, que se usaban en tiempo del rey don Sebastian, y los celebrados entre España é Inglaterra en 15 de noviembre de 1630, y 23 de mayo de 1667, que tambien se comunicaron á Portugal, declaran los dos altos principes contrayentes por sí y en nombre de sus herede-

ros y sucesores, que la paz y amistad que han establecido y que deberá observarse entre sus respectivos súbditos en toda la estension de sus vastos dominios en ambos mundos, haya de ser y sea conforme á la alianza y buena correspondencia que habia entre las dos coronas en el referido tiempo de los reyes de don Carlos I y don Felipe II de España, don Manuel y don Sebastian de Portugal, prestándose sus Majestades católica y fidelísima y sus vasallos los auxilios y oficios que corresponden á verdaderos y fieles aliados y amigos, de modo que los unos procuren el bien y utilidad de los otros, y aparten é impidan recíprocamente su daño y perjuicio en cuanto supieren y entendieren.

Artículo 2º.

En consecuencia de lo pactado y declarado en el artículo antecedente y de lo demas que espresan los tratados antiguos que se han renovado y otros á que ellos se refieren, que no fuesen derogados por algunos posteriores, prometen sus Majestades católica y fidelísima no entrar en uno contra el otro, ni contra sus estados en cualquier parte del mundo en guerra, alianza, tratado ni consejo, ni dar paso por sus puertos y tierras, auxilios directos ó indirectos, ni subsidios para ello de cualquiera clase que sean, ni permitir que los den sus respectivos vasallos: antes bien se avisaran recíprocamente cualquiera cosa que supieren, entendieren ó presumieran que se trata contra cualquiera de ambos soberanos, sus dominios, dere-

chos y posesiones, ya sea fuera de sus reinos ó ya en ellos, por rebeldes - á personas mal intencionadas y descontentas de sus gloriosos gobiernos; me diando, negociando y auxiliándose de comun acuerdo para impedir ó reparar recíprocamente el daño ó perjuicio de cualquiera de las dos coronas, á cu- yo fin se comunicarán y darán á sus ministros en otras cortes, como á los vireyes y gobernadores de sus provincias las órdenes é instrucciones que - tengan por conveniente formar sobre este asunto.

Artículo 3º.

Con el propio objeto de satisfacer á los empeños contraídos en los - antiguos tratados, y demas á que se refirieron aquellos y que subsisten en tre las dos coronas, se han convenido sus Majestades católica y fidelísima en aclarar el sentido y vigor de ellos; y en obligarse, como se obligan, - á una garantía recíproca de todos sus dominios en Europa é islas adyacen- tes, regalías, privilegios y derechos de que gozan actualmente en ellos; - como tambien á renovar y revalidar la garantía y demás puntos establecidos en el artículo 25 del tratado de límites de 13 de enero de 1750, el cual - se copiará á continuacion de este, entendiéndose los límites que allí se - establecieron con respecto á la América meridional, en los términos estipu- lados y esplicados últimamente en el tratado preliminar de 1º de octubre - de 1777, y siendo el tenor de dicho artículo 25 como sigue: "Para mas ple- na seguridad, etc. (v. pág. 408.

Artículo 4º.

Si cualquiera de los dos altos contrayentes sin hallarse en el caso de ser invadido en las tierras, posesiones y derechos que comprende la garantía del artículo antecedente, entrare en guerra con otra potencia, única—mente estará obligado el que no tuviere parte en la tal guerra á guardar y hacer observar en sus tierras, puertos, costas y mares la mas exacta y es—crupulosa neutralidad; reservándose para los casos de invasion ó disposi—ciones para ella en los dominios garantidos, la defensa recíproca á que estarán obligados ambos soberanos en consecuencia de sus empeños que desean y prometen cumplir religiosamente, sin falta á los tratados que subsisten entre los altos contrayentes y otras potencias de Europa.

Artículo 5º.

Siguiendo el concepto de los dos artículos inmediatos antecedentes,—aunque por el artículo 22 de dicho tratado de San Ildefonso de 1º de octu—bre de 1777 se pactó que en la isla y puerto de Santa Catalina y su costa —inmediata, no se consentiría la entrada de escuadras ó embarcaciones estrangeras de guerra ó de comercio en la forma que allí se contiene, así como el fin no fue faltar á la hospitalidad en los casos de necesidad absoluta y —de arribadas forzadas, evitando los abusos de contrabando, de hostilidad ó de invasion contra la potencia amiga, tampoco lo fue impedir á las naves —españolas el tocar en aquel puerto, ni en la costa del Brasil, cuando lo ne

cesitasen, ni dejar de darlas los auxilios y refrescos que corresponden á buenos amigos y aliados, guardando las leyes y prohibiciones del país á que arribasen: lo cual han tenido por conveniente declarar sus Majestades católica y fidelísima, para que por esta declaracion se entienda y regule todo lo estipulado en cualquiera otra parte sobre este punto.

Artículo 6º.

Se observará exactamente lo estipulado en el artículo 18 del tratado de Utrech de 6 de febrero de 1715, celebrado entre las dos coronas: y en mayor esplicacion de él, y de los tratados y concordias antiguas del tiempo del rey don Sebastian, declaran los dos altos principes contrayentes, que ademas de los crímenes especificados en dichos concordias, se comprenden - y han de comprender en las espresiones generales de ellas como si indivi—dualmente se hubiesen nombrado, los delitos de moneda falsa, contrabandos, de estraccion ó introduccion de materias absolutamente prohibidas en cual—quiera de los dos reinos, y desercion de los cuerpos Militares de mar ó tierra, entregándose los delincuentes y desertores; bien que de los castigos que se hayan de imponer á estos últimos se esceptua la pena de muerte á —que no podrán condenárseles, ofreciendo ambos monarcas conmutarla en otra que no sea capital. Para facilitar la pronta aprehension y entrega de unos y otros, han resuelto los dos altos contrayentes se ejecute, sin exigir —otro requisito, todas las veces que los reclamase el ministro ó secreta—

rio de estado de los negocios extranjeros de cualquiera de las dos potencias, mediante oficio que pase para ello, ya sea directamente, ó ya por los respectivos embajadores de ambos soberanos; pero cuano sean los tribunales — quienes soliciten la entrega de algun reo se observarán las formalidades — de estilo en las requisitorias establecidas desde el tiempo en que se ajus taron las mencionadas concordias. Finalmente, si sus Majestades católica y fidelísima tuviesen por conveniente hacer en lo sucesivo alguna nueva es plicacion sobre los particulares de que trata este artículo, especifican— do algun otro caso determinado, ofrecen comunicárselo y ponerse de acuerdo amistosamente, mandandd se observe lo que arreglen entre sí, como todo lo que aquí va estipulado, para cuyo cumplimiento espedirán desde luego las — órdenes conducentes.

Artículo 7º.

Por el artículo 17 del tratado de Utrech ya referido de 6 de febrero de 1715 se capituló que las dos naciones española y portuguesa gozarían re— cíprocamente en sus respectivos dominios de Europa de todas las ventajas en el comercio, y de todos los privilegios, libertades y exenciones que se habían concedido hasta ahora, y concederían en adelante á la nacion mas favo— recida y la mas privilegiada de todas las que traficaban en ellos: y ade— mas de lo contenido en dicho artículo, para no dejar incertidumbre alguna — en lo convenido, se pactó por otro artículo separado, que restableciéndome —

el comercio entre las dos naciones, y continuando en el estado que se hacia antes de la guerra que precedió al mismo tratado, subsistiría así hasta que se declarase la conformidad en que debía correr dicho comercio. En consecuencia, pues, de dichos artículos, y de haberse renovado, revalidado y ratificado en el artículo 1º del tratado preliminar de límites todo el tratado de Utrech, se han prometido sus Majestades católica y fidelísima cumplir y observar exactamente y en forma específica el contesto de los citados artículos 17 y separado, como literalmente consta de ellos.

Artículo 8º.

Para hacer la declaracion reservada en dicho artículo separado, de la conformidad ó del modo en que debería correr el comercio entre las dos naciones se han convenido sus Majestades católica y fidelísima en que se tomen por norma los artículos 3º y 4º del tratado celebrado entre las dos coronas en 13 de febrero de 1668, garantido por la gran Bretaña, y renovado ó ratificado igualmente en el artículo 1º del tratado preliminar de límites, en cuanto fueren adaptables; los cuales artículos son á la letra como se sigue: Artículo 3º "Los vasallos y moradores de las tierras poseídas por uno y otro rey, tendrán toda buena correspondencia y amistad sin mostrar sentimiento de las ofensas y daños pasados, y podrán comunicar, entrar y frecuentar los límites de uno y otro; y usar y ejercer el comercio con toda seguridad por tierra y por mar, en la forma y manera que se usaba en tiempo del -

rey don Sebastian.— Artículo 4º Los dichos vasallos y moradores de una y — otra parte tendrán reciprocamente la misma seguridad, libertades y privilegios que estan concedidos á los súbditos del serenísimo rey de la Gran Bretaña por el tratado de 23 de mayo de 1667, y otro del año de 1703, en lo — que no se deroga por este, de la misma forma y manera que si todos aquellos artículos en razon del comercio é inmunidades tocantes á él fuesen aqui expresamente declarados, sin escepcion de artículo alguno, mudando solamente el nombre en favor de Portugal. Y de estos mismos privilegios usará la nacion portuguesa en los reinos de su Majestad católica, segun y como lo practicaba en tiempo del rey don Sebastian".

Artículo 9º.

En consecuencia de lo pactado en el artículo antecedente será común á las dos naciones española y portuguesa todo el referido tratado de 23 de mayo 1667, celebrado con la Gran Bretaña, sin mas modificaciones ó esplicaciones que aquellas mismas que hayan ocurrido entre las dos coronas de España é Inglaterra, reservándose á las dos naciones española y portuguesa las ampliaciones que por privilegios antiguos de sus respectivos monarcas se las hayan concedido, y hayan gozado en el reinado del rey don Sebastian.

Artículo 10º.

Para complemento de los artículos antecedentes y de dichos tratados,

y para que haya la mayor exactitud y claridad en su ejecucion, se reconocen las listas y aranceles de 23 de octubre de 1668 y demas que se hubiesen formado para el cobro de derechos de los frutos y mercaderias que entrasen y saliesen de España para Portugal y de Portugal para España por sus puertos de mar y tierra, y de comun acuerdo se arreglarán, ampliarán ó modificarán segun el tenor de dichos tratados, guardando proporcion á las variaciones que puede haber causado el tiempo en los nombres y precios de dichos frutos y mercaderías, aumento ó disminucion de sus géneros y especies y — otras particularidades.

Artículo 11º

En dichas listas ó aranceles se especificarán tambien las prohibiciones que deban quedar subsistentes sobre introduccion de algunos géneros y frutos de cualquiera de las dos monarquías en los dominios de la otra; y desde luego se han convenido sus Majestades católica y fidelísima en que de tales prohibiciones se alzarán todas las que no sean absolutamente necesarias para el buen gobierno interior de las mismas dos monarquías, guardándose en este punto reciprocamente ambas naciones una consideracion igual á la que tuvieran y observaren con otras de las mas favorecidas; de modo que se aparte toda odiosidad particular, y se cumplan religiosamente los artículos de dichos tratados de 1667, 1668 y 1715, en que asi está capitulado y garantido.

Artículo 12º.

Asímismo se formará una coleccion de los privilegios de que han gozado las dos naciones en el tiempo del rey don Sebastian; y dicha coleccion autorizada con las debidas solemnidades se estimará y tendrá como parte de este tratado al modo que lo será tambien y se tendrá por tal lista ó arancel de derechos que se ha citado en el artículo antecedente.

Artículo 13º.

Deseando sus Majestades católica y fidelísima promover las ventajas del comercio de sus respectivos súbditos, las cuales pueden verificarse en el que recíprocamente hicieren de compra y venta de negros, sin ligarse á contratas y asientos perjudiciales, como los que en otro tiempo se hicieron con las compañías portuguesa, francesa é inglesa, las cuales fue preciso - cortar ó anular, se han convenido los dos altos principes contrayentes en - que para lograr aquellos y otros fines y compensar de algun modo las cesiones, restituciones y renunciaciones hechas por la corona de España en el tratado preliminar de límites de 1º de octubre de 1777 cedería su Majestad fidelísima, como de hecho ha cedido y cede, por si y en nombre de sus herederos y sucesores, á su Majestad católica y los suyos en la corona de España, la - isla de Annobon, en la costa de Africa, con todos los derechos, posesiones y acciones que tiene á la misma isla, para que desde luego pertenezca á los dominios españoles del propio modo que hasta ahora ha pertenecido á los de

la corona de Portugal; y asimismo todo el derecho y accion que tiene ó puede tener á la isla de Fernando del Póo en el golfo de Guinea, para que los vasallos de la corona de España se puedan establecer en ella, y negociar en los puertos y costas opuestas á la dicha isla, como son los puertos del rio Gaboon, de los Camarones, de Santo Domingo de Cabo feroso y otros de aquel distrito, sin que por eso se impida ó estorbe el comercio de los vasallos - de Portugal, particularmente de los de las islas del Principe y de Santo - Tomé, que al presente van, y que en lo futuro fueren á negociar en dicha - costa y puertos, comportandose en ellos los vasallos españoles y portugueses con la mas perfecta armonía, sin que por algun motivo ó pretesto se perjudiquen ó estorben unos á otros.

Artículo 14º.

Todas las embarcaciones españolas, sean de guerra ó de comercio de dicha nacion que hicieren escala por las islas del Principe y de Santo Tomé, pertenecientes á la corona de Portugal, para refrescar sus tripulaciones, ó proveerse de víveres ó otros efectos necesarios serán recibidas y tratadas en las dichas islas como la nacion mas favorecida: y lo mismo se practica--rá con las embarcaciones portuguesas de guerra ó de comercio que fueren á la isla de Annobon ó á la de Fernando del Pó, pertenecientes á su Majestad católica.

Artículo 15º.

Ademas de los auxilios que reciprocamente se habrán de dar las dos - naciones española y portuguesa en dichas islas de Annobon y Fernando del - Pó, y en las de Santo Tomé y del Principe, se han convenido sus Majestades católica y fidelísima en que en las mismas pueda haber entre los súbditos de ambos soberanos un tráfico y comercio franco y libre de negros; y en caso de traerlos la nacion portuguesa á las referidas islas de Annobon y de Fernando del Pó, serán comprados y pagados pronta y exactamente, con tal - que los precios sean convencionales y proporcionados á la calidad de los - esclavos, y sin esceso á los que acostumbren suministrar ó suministraren -- otras naciones en iguales ventas y parajes.

Artículo 16º.

Igualmente ofrece su Majestad católica que el consumo de tabaco de hoja que hiciere para dicho comercio en las referidas islas y costas inmedia- tas de Africa será por espacio de cuatro años del que producen los dominios del Brasil; a cuyo fin se arreglará contrata formal con la persona ó perso- nas que destinare la corte de Lisboa, en la que se especificarán las canti- dades de tabaco, precios y demas circunstancias que corresponden a este -- punto: y pasados dichos cuatro años, con mayor conocimiento se podrá tra-- tar de prorrogar ó no el contrato que desde luego se hiciese, y de ampliar modificar ó aclarar sus condiciones.

Artº Artículo 17º.

Pudiendo los artículos de este tratado ó alguno de ellos ser adaptables á otras potencias que los dos altos contrayentes tengan por conveniente convidar á su accesion, se reservan sus Majestades católica y fidelísima ponerse de acuerdo sobre este punto, y arreglar en todas sus partes el modo de ejecutarlo con respecto al interés recíproco de las dos coronas, y de aquella ó aquellas que hubieran de ser convidadas ó desearan acceder.

Artículo 18º.

Ambos principes contrayentes cuidarán de publicar en sus dominios y hacer saber á todos sus vasallos los pastos y obligaciones de este tratado, encargando la mayor exactitud en su observancia y ejecucion, y haciendo castigar rigurosamente á los contraventores.

Artículo 19º.

El presente tratado se ratificará en el preciso término de quince — días despues de firmado, ó antes si fuere posible. En fé de lo cual, nosotros los infrascritos ministros plenipotenciarios firmamos de nuestro puño, en nombre de nuestros augustos amos, y en virtud de las plenipotencias con que para ello nos autorizaron, el presente tratado, y le hicimos sellar — con los sellos de nuestras armas. Fecho en el real sitio del Pardo á 11 de marzo de 1778.— El conde de Florida Blanca.— Don Francisco Inocencio de —

Souza Coutinho.

Su Majestad católica ratificó el anterior tratado por instrumento es
pedido en el mismo sitio del Pardo el 24 de dicho mes y año, refrendado —
del secretario de estado y del despacho de las Indias, don José de Galvez.

LEY 7ª.- TITULO 11. LIBRO 6º.

D. Carlos III en San Lorenzo, por real orden de 20 de noviembre de 1.778. (38)

Registro de las casas de los comerciantes extranjeros por los dependientes de rentas, sin citación ni asistencia de su cónsul en los casos de fundada sospecha de contrabando.

Enterado de lo ocurrido en Cádiz con motivo del registro que los dependientes de rentas creyeron preciso hacer en la casa de un comerciante francés, me he servido declarar, que así como los cónsules ni sus propias casas no gozan de aquellos privilegios y exenciones que sólo corresponden a los ministros caracterizados por los soberanos, así los comerciantes extranjeros no tienen derecho más que a ser tratados con los mismos miramientos y consideración que se debe a un vasallo del Rey, nacional honrado, cuyo carácter y reputación están bien establecidos; de suerte que no se les moleste por ligeros motivos, sino precediendo una información semiplena, o en aquellos casos de vehemente y fundada sospecha, sin que sea necesaria la citación de su cónsul para que asista.

(38) Los Códigos españoles concordados y anotados. Tomo 8º. Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VI, título XI, ley VII. La Publicidad, Madrid, 1850, pág. 258-9.

Real orden de 15 de marzo de 1.781 para que el juzgado de extranjeros de Cádiz se conservase separado sin embargo - de haberse unido la capitanía general y el gobierno. (39)

Habiendo acudido al Consejo de Guerra el auditor de ese ejército D. Antonio Olivares pidiendo su determinación sobre corresponder a su empleo conocer de las causas de extranjeros transeúntes que ocurrían en esa plaza después de haberse unido el gobierno de ella a la capitanía general de Andalucía en la persona de V.E. y establecido allí su residencia, deduciendo fundamentos para la práctica de lo que comunmente se observa en otras - capitanías generales, y de lo que también previenen las reales ordenanzas; ya se atiende al respeto de Capitán general ó al de gobernador de Cádiz; y habiendo consultado el mismo tribunal lo que ha estimado justo en el asunto, con presencia de todo, y considerando el rey que el juzgado de las causas de esta clase le tiene cometido particular y privativamente al gobernador de Cádiz, que constituye total diferencia de lo que sucede en las demás capitanías generales, y que V.E. ejerce y desempeña ambos encargos, según la naturaleza de cada uno y con la distinción debida de sus asuntos; se ha servido resolver, sin variar el orden con que está establecido este

(39) RIQUELME, A.: op. cit. pág. 317.

juzgado atendiendo a su autoridad en la conse^{ra}ción de ministros que -
 sean propios de él; como si fuese separado, y al concepto que merecen a
 S.M. la actividad, celo e integridad de V.E. que en las causas de extran^{je}
 jeros transeúntes se asesore V.E. por ahora como tal gobernador con el -
 letrado que tenía su antecesor, y por su falta ó enfermedad con el que -
 sea de su satisfacción; que en los demás negocios relativos a la juris-
 dicción militar los actúe y determine V.E. con el auditor.

.

Lo que comunico a V.E. de orden de S.M. para su inteligencia y cum^{pl}
 plimiento. Dios, etc. El Pardo, 15 de marzo de 1.781.- Miguelde Muzquiz,
 Señor Conde de O'Reilly, capitán general de Andalucía, y gobernador de -
 Cádiz.

Tratado de paz, amistad y comercio entre España y la Puerta —
Otomana, firmado en Constantinopla el 14 de setiembre de 1782.

(40)

En el nombre de Dios.

Nos don Juan de Boutihny en virtuddde los plenos poderes con que he sido autorizado para tratar, ajustar y firmar la paz por su Majestad mi au gusto soberano (que Dios guarde) el serenísimo y potentísimo principe don Carlos, por la gracia de Dios rey de España, Castilla, Leon, Aragon, etc., etc., de las Indias orientales y occidentales etc. etc. etc. islas adyacen tes en el Mediterráneo y Océano etc. etc. etc. sus herederos y sucesores, - de una parte; y de la otra su Alteza el Hagi seid Muhammed Pashá, gran Vi sir, en virtud del pleno poder por su Majestad el serenísimo y potentísimo principe Abdulhamid, hijo del emperador Ahmed, hijo del emperador Muhammed, emperador de los Otomanos en la Meca y Medina etc. etc. etc.; en virtud de los plenos poderes respectivos, despues de haber examinado en diferentes - conferencias tenidas, los puntos sobre los cuales se debe establecer el -- tratado; por la misericordia divina se ha concluido y constituido tratado - de comercio y navegación entre ambas potencias, segun y como se declara en

(40) CANTILLO, A. "TRATADOS, CONVENIOS Y DECLARACIONES DE PAZ Y DE COMERCIO, que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón". Madrid, 1843, pág. 568 a 572.

los siguientes capitulos.

Capítulo 1º.

Entre la monarquía de España y el imperio otomano, por la voluntad - de Dios queda establecida la paz desde el arribo de la ratificación en la - forma y nomra de las otras potencias, como son la Francia, Sicilia, Ingla-- terra, Holanda, y Suecia: de modo que entre las provincias y estados de tierra firme, situados en cualquier parte de España, las islas adyacentes, los castillos, etc., como tambien todos los súbditos, dominios y provincias que en el tiempo podrá adquirir y unirse á la misma, é igualmente entre los súbditos, habitantes de los dominios y provincias, tierras é islas sujetas al imperio otomano, sea establecida y guardada esta paz por mar y por tierra; y sea lícito el comercio, traficando con la misma libertad y modo que comercian y trafican todas las otras potencias amigas, comprando y vendiendo sus mercancías, reparando sus naves de los daños que hubiesen recibido por las borrascas ó por cualquier otro accidente, comprando lo que necesiten para - su reparo y nutrimento.

Capítulo 2º.

Pagarán las naves y súbditos de su Majestad católica en todos los puertos y aduanas del imperio otomano tres por ciento de aduana por los efectos y géneros que desembarcaren, y cualquier otro derecho que pagaren las otras potencias amigas: y por contra, los súbditos y naves de la sublime puerta -

otomana pagarán en los dominios de su Majestad católica los mismos derechos que pagan las potencias amigas.

Capítulo 3º.

Será libre, por medio del ministro de su Majestad católica que residirá en la sublime puerta, establecer cónsules en todos los puertos y lugares marítimos convenientes del dominio otomano, y el poderlos mudar y establecer otros en su lugar. Se le concederán al dicho ministro, según su carácter, todos los firmanes y barates (1), y á los cónsules, intérpretes y sus dependientes los mismos privilegios que gozan los ministros, cónsules, intérpretes y criados de las otras potencias amigas.

Capítulo 4º.

En el ejercicio de la religion y peregrinacion de Jerusalem y otros lugares, los súbditos de su Majestad católica serán tratados del mismo modo que los demas de las potencias amigas; y en el caso que en cualquier lugar del imperio otomano viniese á morir un negociante ó otro súbdito de su Majestad católica, ó cualquiera otra persona que esté bajo su proteccion, sus bienes no estarán sujetos al fisco, ni nadie bajo pretesto de que tales bienes no tienen propietario podrá apropiárselos, ni mezclarse: y deben dichos bienes y efectos del difunto ser remitidos al ministro de su Majestad católica, ó á los cónsules, quienes cuidarán de ponerlos en poder -

de quienes pertenecieren segun el testamento del difunto: y en el caso que hubiese muerto abintestato, esto no obstante deberán ser puestos sus efectos y bienes en manos del predicho ministro ó cónsules, ó en las del socio del difunto que residiese en el mismo lugar; y en el caso que no se hallase en el lugar donde hubiese muerto ni cónsules ni socios suyos, el juez del lugar, vulgarmente llamado Gadi deberá en virtud de la ley hacer el inventario de los efectos y bienes dejados, y depositarlos en lugar seguro para conservarlos y entregarlos enteramente á la persona que mandase el ministro de su Majestad católica residente en la sublime puerta; sin ninguna pretension de la parte del Cadi que se le pague lo que se llama resmi-chismet (2); y del mismo modo se practicará en los dominios de su Majestad católica á favor de los súbditos y mercantes del imperio otomano.

Capítulo 5º.

En el caso de pleito ó controversia contra los cónsules ó interpretes de su Majestad católica, y que esta esceda la suma de cuatro mil aspros (3), en ningun tribunal de las provincias podrá oirse ó decidirse, deberá

-
- (1) Firman ó ferman es un decreto, despacho ó mandamiento del sultan. Barat llaman en Turquía á un decreto que da tambien el sultan sustrayendo en cierto modo de su dominio á algun súbdito propio, el cual queda durante su vida bajo la proteccion del ministro estrangero que se la concede.
- (2) Resmi-chismet equivale á ley ó decreto real de particion de bienes.
- (3) Aspro es una moneda de plata equivalente en su valor á diez maravedises.

remitirse al juicio de la sublime puerta. Igualmente si á los negociantes y otros súbditos de su Majestad católica y demas que estuviesen bajo su proteccion se les intentase algun pleito ó controversia de la parte de los mercantes y súbditos de la sublime puerta otomana ya sea por venta, compra ó negociación de mercancías ó por cualquier otra causa y se recurriese al — Juez, éste no podrá recibir la denuncia ni decidir la causa sin la presencia de su intérprete; y si el crédito ó garantía no fuese bien establecido con obligacion ó lista auténtica, no serán molestados por las pretensiones del pretendido débito, por ser contra derecho y justicia.

Naciendo alguna diferencia ó controversia entre los negociantes, súbditos de su Majestad católica, esta será examinada y terminada por sus cónsules é intérpretes, segun sus propias leyes y constituciones: y del mismo modo se procederá con los súbditos y mercantes del imperio otomano que se hallaren en los dominios de su Majestad católica.

Capítulo 6º.

Los gobernadores ni demas oficiales del imperio otomano no podrán hacer encarcelar ningun súbditos de su Majesztad católica, ni molestarle, ni injuriarle sin razon; y si algun súbdito de su Majestad católica fuese preso, á la primera reclamacion de su ministro ó cónsules, les será consignado para ser castigado segun lo mereciere.

Capítulo 7º.

Será lícito á la sublime puerto otomana para la tranquilidad y seguridad de sus súbditos y mercantes el establecer en los dominios de su Majestad católica un procurador, vulgarmente llamado Shegbender, para residir en la ciudad de Alicante, y los mencionados súbditos de la sublime puerta otomana serán respetados y privilegiados de la misma manera que lo serán los de su Majestad católica en el imperio otomano.

Capítulo 8º.

Los naturales y demas gente experta en el arte de navegar, de ambas partes, deberán socorrer las naves que echadas por los vientos ó borrascas naufraguen en los puertos ó costas de ambas partes contratantes; y todas las mercancías, naves y cualquier otra cosa perteneciente al naufragio, será consignado al cónsul más inmediato, para que pueda dar cuenta al propietario.

Capítulo 9º.

No podrán ser forzadas las naves de las dos potencias al transporte de tropas, artillería, ó cualquier otro servicio.

Capítulo 10º.

Las naves del imperio otomano serán recibidas en los dominios de su Majestad católica y tratadas de la misma manera que se admiten las de las

otras potencias amigas que llegan del imperio otomano, haciendo la cuarentena ordinaria.

Capítulo 11º.

Encontrándose las naves de guerra de su Majestad católica con las naves de guerra de la Puerta otomana, enarbolando bandera y saludándolas en signo de amistad, las de la sublime puerta corresponderán igualmente. De la misma manera las naves mercantiles de ambas partes, las unas y las otras enarbolando su bandera se tratarán amistosamente; y las naves de guerra de ambas partes encontrándose con las naves mercantiles, les dejarán proseguir su viaje sin molestia, y segun la necesidad se ayudarán. Si fuese necesario comunicarse, la nave de guerra enviará su bote con dos personas ademas de los marineros necesarios á la maniobra; y despues de haber examinado la patente y pasaporte, hallándolos válidos, sin dilacion se deberán volver á su bordo. Y para que se puedan reconocer las banderas y patentes de las naves, se deberá exhibir de ambas partes una copia sellada de la patente y figura de la bandera.

Capítulo 12º.

Cualquier súbdito ó dependiente de su Majestad católica pasando á la religion mahometana, y declarando ser mahometano en presencia de cualquier de sus cónsules ó dragomanes, esto no le relevará de pagar sus deudas; y si

ademas de sus propias mercancías se le probase tener pertenecientes á otros, deberán consignarse al ministro ó cónsul de su Majestad católica para que las puedan hacer entregar á su dueño.

Capítulo 13º.

A los bienes y mercancías de los negociantes súbditos y protectos de su Majestad católica, cuando estos no sean matriculados en el corso y saqueo con los corsarios enemigos del imperio otomano, no se les deberá hacer perjuicio, ni molestarles en su persona, y se les dejará en libertad con sus bienes. En el caso que cualquier nave con patente y bandera de su Majestad católicafuese apresada por los corsarios del imperio otomano, los mercaderes, súbditos, protectos y mercancías que se hallaren en dicha nave, como asimismo la nave, será devuelta á sus dueños; y dado caso que esta fuese se represada por enemigos del uno ó del otro dominio, en corroboracion de la establecida amistad y en el grado posible se deberá procurar de recuperarla y restituirla á las partes.

Capítulo 14º.

Los esclavos de la una y de la otra parte que se hallaren en los respectivos dominios de su Majestad católica y de la puerta otomana serán canjeados ó rescatados por sumas moderadas, por los respectivos comisionados que se nombraren á este efecto; y en el interin que esten canjeados ó rescatados providenciará por ambas cortes el que los propietarios los traten con

humanidad y caridad.

Capítulo 15º.

Si alguno de los súbditos de su Majestad católica fuese sorprendido en contrabando no podrá bajo que pretesto que sea ser castigado de otro modo que se castigan los súbditos de las otras potencias amigas. Los negociantes y mercaderes, súbditos de su Majestad católica se podrán valer de cualquier persona de que religion que sea para corredores en sus negociaciones de — cambios ó mercancías, sin que nadie pretenda, ni pueda estorbarlo; y quien lo intentare será severamente castigado. Las naves españolas que vendrán á las escalas, puertos, dardanelos, etc. del imperio otomano, no serán sujetas á otro registro ó visita que conforme lo son las naves de las potencias amigas.

Capítulo 16º.

Desde los lindes pertenecientes á los dominios de su Majestad católica hasta el lugar que se reconocen las naves, y de las naves hasta donde se verá la tierra, no se permitirá de la parte de su Majestad católica que las naves del imperio otomano sean perseguidas ni molestadas: y del mismo modo, las naves del imperio otomano, conforme queda expresado, no molestarán las naves de los amigos de su Majestad católica. De este capítulo se dará parte á los amigos de su Majestad católica, y declarando estar conformes, se dará parte por escrito á la sublime puerta Otomana, y del mismo modo quedará es—

tablecido.

Capítulo 17º.

Se mandarán y darán órdenes rigurosas para que ningun súbdito de la sublime puerta otomana, especialmente á los dulcinotas y á aquellos que es tan en Albania haciendo el corso y á cualquiera otra semejante gente, el - que no ejerciten ninguna hostilidad contra las barcas y naves españolas; y que cuando lleguen á sus estados sean recibidos amistosamente, prestándoles la ayuda que se acostumbra á las naves y barcos de las otras potencias amigas; y á las dichas naciones les será lícito el tráfico con los habitantes y estados de su Majestad católica con libertad de ir y venir y comerciar con arreglo á su deber. Y si hubiese quien contraviniese á los presentes capítulos será castigado; y todos los daños y perjuicios que se hicieren á las partes por los susodichos en conformidad y segun se concede á las otras naciones amigas se harán reintegrar. Y si hubiese quien contraviniese á los mandatos y órdenes del imperio Otomano y molestase los súbditos - de su Majestad católica esto es, ejercitando corso; el tal, encontrado que será en mar abierto, sin perjuicio á las capitulaciones del tratado, será - lícito castigarle; é igualmente será lícito á las naves del imperio Otoma- no de proceder del mismo modo.

La sublime puerta Otomana participará á las regencias berbericas Ar- jen, Tunez y Tripoli la presente paz felizmente concluida entre la corte -

de España y la sublime puerta Otomana: y como está en manos de las dichas regencias el arbitrio de hacer la paz, haciéndola ellas separadamente con - la dicha potencia, la sublime puerta Otomana lo mirará con placer y la aprobará; lo que demostrará, recomendándoles la amistad con eficacia y exortándoles á la paz con tres firmanes imperiales, los cuales serán emanados y - consignados al ministro de España, siempre que los pida, uno para cada una de las dichas regencias.

Capítulo 18º.

No se permitirá en los respectivos puertos ó escalas de la monarquía española y del imperio Otomano el que ningun enemigo de la una ó de la otra potencia arme naves en guerra, ni tampoco el que las que llegaren con bandera enemiga molesten las respectivas naves de ambas las dos potencias contratantes; antes bien se les dará todo el socorro, y no se permitirá que salga la nave de guerra del puerto hasta pasadas las veinte y cuatro horas de la salida de las naves de ambas partes: pero si por estratagemas del enemigo, y que sin poder dar socorro viniese alguna nave solapada, no se inculpará á la potencia en cuyo puerto hubiere sucedido el caso.

Item. No será lícito á las naves y barcos mercantiles de la una y de la otra potencia contratantes el tomar patente ó bandera enemiga, y siendo este apresado, el comandante de la nave ó barco será ahorcado á la entena

de su nave para ejemplo de los demas; su equipaje y mercancías de buena — presa, quedando en esclavitud del que lo prendiere.

Item. No será lícito á ninguna de las potencias contratantes el conceder su patente ó bandera á otros que á sus propios súbditos establecidos en su dominio.

Capítulo 19º.

Será lícito á los ministros ó cónsules de su Majestad católica el cobrar el derecho de consulado ordinario de todas aquellas mercancías que pagan duana y que vendrán bajo su bandera (como lo exigen las otras potencias amigas) de cualquiera súbdito de su Majestad. No se permitirá el que carguen sus naves con mercancías, excepto la pólvora, armas y otros géneros prohibidos.

Capítulo 20º.

Las compras y ventas de las mercancías que harán los súbditos y protectos de su Majestad católica se harán en la misma especie de moneda conforme la ejercitan y hacen los negociantes y protectos de las otras potencias amigas; no serán inquietados ni molestados por otra suerte de moneda que por aquella que generalmente se practica; y sobre la moneda que conduciesen no deberán pagar derecho de ningun modo fuera de lo que se practica.

Capítulo 21º.

Ninguna nave pronta á partir podrá ser detenida por causa naciente: la litis y su controversia será determinada y decidida sin dilacion por medio de su cónsul.

Los súbditos de su Majestad católica casados ó solteros no estarán sujetos á pagar ningun tributo de carach (1) ó otro. Si sucediese algun asesino, ó fuese herido alguno, ninguno de los súbditos de su Majestad católica, comportándose segun su deber, podrá ser molestado, á menos que en vigor de la ley no viniese bien probado que alguno de ellos fuese culpable en el delito. Y finalmente, se practicará con los súbditos de su Majestad católica en todos los casos, en el presente tratado espreso ó no espreso - todo aquello que se practica á favor de las otras potencias amigas. Y si se juzgase a propósito por ambas partes contratantes añadir á estos capítulos establecidos otros, estimándolos recíprocamente útiles y necesarios, será lícito el proponerlos y tratarlos; y puestos en órden añadirlos al presente tratado.

Conclusión.

Las capitulaciones de paz establecida entre el serenísimo y potenti-

(1) Carach ó Tarách es un tributo que pagan anualmente los súbditos del sultan, llamados rayas, que no profesan la ley de Mahoma.

simo monarca de España y el serenísimo y potentísimo emperador de los Otomanos serán inviolablemente conservadas y observadas y para hacer constar las pruebas de amistad y buena armonía se empezará desde este día la publicación y participacion en los respectivos dominios. Y hasta que el presente tratado no esté ratificado, lo que se hará en el término de ocho meses, ó antes si es posible, no se pretenderá de los respectivas súbditos resarcimiento de las presas que reciprocamente se hubiesen hecho. Y en cuanto á impedir el corso en el archipiélago de los malteses, romanos y genoveses, como aquellas potencias son libres, no rehusará su Majestad católica el pasar amistosamente sus buenas oficios, y de las resultas se dará parte á la sublime puerta Otomana en scriptis.

A fin de que se establezcan los sobredichos artículos y conclusion en la manera estipulada y convenida, haciendo el contrabambio, en el tiempo espresado, de la ratificacion del tratado, mediante la diligencia y sinceridad de ambas partes; el presente tratado ha sido firmado, con nuestro propio puño firmado, y con nuestro sello sellado y consignado en manos del antedicho su Alteza el gran visir el Hagi Seid Muhammed Paché. Fecho en Constantinopla 14 de setiembre de 1782.- Don Juan de Bouligny, plenipotenciario de su Majestad católica.

Certifico ser traslado igual del tratado de paz original, con el cual he canjeado el que he recibido de la puerta Otomana, de mano del supremo -

visir. En fê de lo cual, firmo esto de mi propio puño, y lo sello con mi -
sello. Constantinopla 21 setiembre, 1782.- Juan de Bouligny.

Este tratado se ratificó por parte de España el 24 de diciembre de -
dicho año de 1782; y por la de la puerta Otomana en 24 de abril del siguien
te de 1783.

LEY 8ª, TITULO 36. LIBRO 12 DE LA NOV. RECON.

D. Carlos III, por resolución a consulta de 1ª y cédula del
consejo de 24 de Octubre de 1782. (41)

Los extranjeros delincuentes en estos reinos, ó infractores de bandos públicos, sean procesados y castigados por las justicias, sin remitirlos a sus jueces.

Habiendo llegado a mi real noticia, que en diferentes países extranjeros, cuando algunos de mis vasallos, así soldados como paisanos, transeúntes ó domiciliados en ellos, delinquen contra sus leyes y bandos públicos, se les forman procesos por las justicias ordinarias sentenciándolos, é imponiéndoles las penas convenientes, sin remitir los delincuentes a los tribunales de España; fui servido manifestar al mi consejo la regla de reciprocidad, que estimaba conveniente se estableciese en estos mis reinos, en los que ocurren casos con los extranjeros transeúntes y residentes en ellos; y habiéndome hecho presente su parecer, con lo expuesto por mis fícales, en consulta de 1ª de este mes, conforme a él he venido en mandar, que todas las justicias de mis reinos y señoríos en sus respectivas jurisdicciones, siguiendo la regla de reciprocidad, procedan contra los extranjeros transeúntes o domicilia

(41) RIQUELME, A, op. cit. pág. 318.

dos, y de cualquiera nación, que delinquieren o infringieren los bandos - públicos; formándoles causa, é imponiéndoles las penas correspondientes conforme a las leyes del reino, reales pragmáticas, y bandos públicos, del mismo modo que se ejecuta con los naturales de estos mis reinos, sin permitir que se forme sobre ello competencia alguna.

Tratado definitivo de paz entre las coronas de España é Inglaterra firmado en Versalles el 3 de setiembre de 1783. (42).

En el nombre de la Santísima é individua Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así sea.

Sea notorio á todos aquellos á quienes pertenezca ó pueda pertenecer en cualquiera manera. El serenísimo y muy poderoso principe don Carlos III, por la gracia de Dios rey de España y de las Indias, etc.; y el serenísimo y muy poderoso principe Jorge III, por la gracia de Dios rey de la Gran Bretaña, duque de Brunswick y de Luneburgo, architesorero y elector del sacro imperio romano, etc., deseando igualmente hacer que cesase la guerra que de muchos años á esta parte afligia á sus respectivos estados, aceptaron la oferta que sus Majestades el emperador de romanos y la emperatriz de todas las Rusias les hicieron de su interposicion y mediacion. Pero sus Majestades católica y británica, animados del mútuo deseo de acelerar el restablecimiento de la paz, se comunicaron sus loables intenciones y las bendijo el cielo de tal manera que llegaron á sentar los fundamentos de la paz, firmando los artículos preliminares en Versalles á 20 de enero del presente año. Sus Majestades los dichos rey de España y rey de la Gran Bretaña, conside—

(42) CANTILLO, A. "TRATADOS, CONVENIOS Y DECLARACIONES DE PAZ Y DE COMERCIO, que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón". Madrid, 1843, pág. 586 á 590.

rándose obligados á dar á sus Majestades imperiales una prueba clara de su reconocimiento por la oferta generosa de su mediación, acordaron convidarlas á concurrir á la consumacion de la grande y saludable obra de la paz, - tomando parte como mediadores en el tratado definitivo que se habia de concluir entre sus Majestades católica y británica. Habiendo las dichas Majestades imperiales aceptado con gusto este convite, nombraron para representarles, es á saber: sus Majestades el emperador de romanos al ilustrísimo y escelentísimo señor Florimundo, conde de Mercy-Argenteau, vizconde de Loo, baron de Cricheguée, caballero del Toison de Oro, chambelan, consejero de estado intimo actual de su Majestad imperial y real apostólica, y su embajador cerca de su Majestad cristianísima: y su Majestad la emperatriz de todas las Rusias, al ilustrísimo y escelentísimo señor principe Iwan Bariatingkoy, teniente general de los ejércitos de su Majestad imperial de todas las Rusias, caballero de las órdenes de santa Ana y de la espada de Suecia., y su ministro plenipotenciario cerca de su Majestad cristianísima; y al señor Arcadio de Markoff, consejero de estado de su Majestad imperial de todas las Rusias y su ministro plenipotenciario cerca de su Majestad cristianísima, y en consecuencia de esto, sus dichas Majestades el Rey de España y el rey de la Gran Bretaña han nombrado y constituido por sus plenipotenciarios encargados de concluir y firmar el tratado definitivo de paz, es á saber: el rey de España al ilustrísimo y escelentísimo don Pedro Pablo Abarca de Bolea, -

Jímenes de Urrea, etc., conde de Aranda y Casteiflorido; marques de Torres, de Villanant y Rupit; vizconde de Rueda y Yoch; baron de las baronias de Gavin, Sietamo, Clamosa, Eripol, Trazmoz, la Mata de Castilviejo, Autillon, - la Almolda, Cortes, Jorva, San Genis, Rabullet, Orcau y Santa Coloma de Farnés; señor de la tenencia y honor de Alcalaten, valle de Rodellar, castillos y villas de Maella, Mesones, Tiurana y Viplana, Taradell y Villadrau, etc.; ricohombre por naturaleza en Aragon, grande de España de primera clase, caballero de las insignes Órdenes del Toison de Oro y del de Sancti-Spiritus, gentil-hombre de cámara de su Majestad católica con ejercicio, capitan general de los reales ejércitos, y su embajador cerca del rey cristianísimo; y el rey de la Gran Bretaña al ilustrísimo y escelentísimo señor Jorge, duque y conde de Manchester; vizconde de Mandeville; baron de Kimbolton, lord lugarteniente y custos rotularum del condado de Hingtindon, consejero privado actual de su Majestad Británica, y su embajador extraordinario y plenipotenciario cerca de su Majestad cristianísima. Los cuales, despues de haber cambiado sus plenos poderes respectivos, se han convenido en los artículos siguientes.

Artículo 1º.

Habrà una paz cristiana, universal y perpétua, así por mar como por - tierra, y se restablecerà la amistad sincera y constante entre sus Majestades católica y británica, y entre sus herederos y sucesores, reinos, estados,

provincias, países, súbditos y vasallos de cualquier calidad y condicion - que sean, sin escepcion de lugares ni de personas; de suerte que las altas partes contratantes pondran la mayor atencion en mantener entre sí mismas y los dichos sus estados y súbditos esta amistad y correspondencia recíproca, sin permitir que de ahora en adelante se cometa por una parte ni por otra - algun género de hostilidad por mar ni por tierra, por cualquiera causa ó - bajo cualquier pretesto que pueda haber; y evitarán cuidadosamente todo lo que pueda alterar en lo venidero la union dichosamente restablecida; dedi-- cándose, al contrario, á procurarse recíprocamente en todas ocasiones todo lo que pueda contribuir á su gloria, intereses y ventajas mútuas: sin dar - socorro ni proteccion alguna directa ó indirectamente, á los que quisieren causar algun perjuicio á la una ó á la otra de las dichas altas partes contra-- tantes. Habrá un olvido y amnistía general de todo lo que ha podido haberse hecho ó cometido antes ó desde el principio de la guerra que se acaba de fi-- nalizar.

Artículo 2º.

Los tratados de Westfalia de 1648, los de Madrid de 1667 y 1670, los de paz y de comercio de Utrech de 1713, el de Baden de 1714, de Madrid, de 1715, de Sevilla de 1729; el tratado definitivo de Aix-la-Chapelle de 1748, el tratado de Madrid de 1750 y el tratado definitivo de París de 1763 sir-- ven de basa y fundamento á la paz y al presente tratado; y para este efecto

se renuevan y confirman todos en la mejor forma, como asimismo todos los -
tratados en general que subsistían entre las altas partes contratantes antes
de la guerra, y señaladamente todos los que estan especificados y renovados
en el tratado definitivo de París, en la mejor forma y como si aquí estu-
viesen insertos palabra por palabra: de suerte que deberán ser observados
exactamente en lo venidero segun todo su tenor, y religiosamente cumplidos
por una y otra parte en todos los puntos que no se deroguen por el presente
tratado de paz.

Artículo 3º.

Todos los prisioneros hechos de una y otra parte así por tierra como
por mar, y los rehenes tomados ó dados durante la guerra y hasta este día -
seran restituidos sin cange dentro de seis semanas, lo mas tardar, contadas
desde el dia del cambio de la ratificacion del presente tratado: pagando ca
da corona respectivamente los gastos que se hayan hecho para la subsistencia
y manutencion de sus prisioneros por el soberano del pais donde hayan estado
detenidos, conforme á los recibos y estados que se hagan constar y otros do
cumentos auténticos que se exhiban por una y otra parte: y se darán recipro
camente seguridades para el pago de las deudas que los prisioneros hayan po
dido contraer en los estados donde se hayan hallado detenidos hasta su ente
ra libertad. Y todos los bajeles, así de guerra como mercantes, que hayan -
sido apresados desde que espiraron los términos convenidos para la cesacion

de hostilidades por mar, serán restituidos igualmente de buena fé con todos sus equipajes y cargazones. Y se procederá á la ejecucion de este artículo inmediatamente despues del cambio de las ratificaciones de este tratado.

Artículo 4º.

El rey de la Gran Bretaña cede en toda propiedad á su Majestad católica la isla de Menorca: entendiéndose que las mismas estipulaciones que se insertarán en el artículo siguiente tendrán lugar á favor de los súbditos británicos por lo respectivo á dicha isla.

Artículo 5º.

Su Majestad británica cede asimismo en absoluta propiedad á su Majestad católica la Florida oriental, igualmente que la occidental, constituyéndose garante de ellas. Su Majestad católica se conviene en que los habitantes británicos ó otros que hayan sido súbditos del rey de la Gran Bretaña - en dichos países, puedan retirarse con toda seguridad y libertad adonde - - bien les parezca: y podrán vender sus bienes y trasportar sus efectos del mismo modo que sus personas, sin que sean detenidos ni molestados en su emigracion con cualquier pretesto que sea, escepto el de deudas ó causas criminales: fijándose el término limitado para esta emigracion al espacio de diez y ocho meses, que se han de contar desde el dia del cambio de las ratificaciones del presente tratado; pero sí á causa del valor de las posesiones de los propietarios ingleses no pudiesen estos desembarazarse de ellas en el -

espresado término, entonces su Majestad católica les concederá prórogas proporcionadas á este fin. Tambien se estipula que su Majestad británica tendrá facultad de hacer trasportar de la Florida oriental todos los efectos que puedan pertenecerle, sean artillería ó otros.

Artículo 6º.

Siendo la intencion de las dos altas partes contratantes preoaver en cuanto es posible todos los motivos de queja y discordia á que anteriormente ha dado ocasion la corta de palo de tinte ó de campeche, habiéndose formado y esparcido con este preesto muchos establecimientos ingleses en el continente español; se ha convenido espresamente que los súbditos de su Majestad británica tendrán facultad de cortar, cargar y trasportar el palo de tinte en el distrito que comprende entre los rios Valiz ó Bellese y Rio Hondo, quedadno el curso de los dichos dos rios por límites indelebles, de manera que su navegacion sea común á las dos naciones, á saber: el rio Valiz ó Bellese, desde el mar subiendo hasta frente de un lago ó brazo muerto que se introduce en el pais y forma un istmo ó garganta con otro brazo semejante que viene de hacia Rio Nuevo ó New-river: de manera que la línea divisoria atravesará en derechura el citado istmo y llegará á otro lago que forman las aguas de Rio Nuevo ó New-River hasta su corriente; y continuará después la línea por el curso de Rio Nuevo descendiendo hasta frente de un riachuelo cuyo origen señala el mapa entre Rio Nuevo y Rio Hondo, y va á des—

cargar en Rio Hondo: el cual riachuelo servirán tambien de límite comun has ta su union con Rio Hondo; y desde allí lo será el Rio Hondo descendiendo - hasta el mar, en la forma que todo se ha demarcado en el mapa de que los - plenipotenciarios de las dos coronas han tenido por conveniente hacer uso - para fijar los puntos concertados, á fin de que reine buena correspondencia entre las dos naciones, y los obreros, cortadores y trabajadores ingleses no puedan propagarse por la incertidumbre de límites. Los comisarios respectivos determinarán los parajes convenientes en el territorio arriba designado, para que los súbditos de su Majestad británica empleados en beneficiar el palo puedan sin embarazo fabricar allí las casas y almacenes que sean necesarios para ellos, para sus familias y para sus efectos; y su Majestad católica les asegura el goce de todo lo que se espresa en el presente articulo; bien entendido que estas estipulaciones no se considerarán como derogatorias en cosa alguna de los derechos de su soberanía. Por consecuencia de esto, todos los ingleses que puedan hallarse dispersos en cualesquiera otras partes, sea del continente español ó sea de cualesquiera islas dependientes del sobredicho continente español, y por cualquiera razon que fuere sin escepcion, se reunirán en el territorio arriba circunscripto en el término de diez y ocho meses contados desde el cambio de las ratificaciones: para cuyo efecto se les espedirán las Órdenes por parte de su Majestad británica; y - por la de su Majestad católica se ordenará á sus gobernadores que den a los dichos ingleses dispersos todas las facilidades posibles para que se puedan

transferir al establecimiento convenido por el presente artículo, ó retirar se adonde mejor les parezca. Se estipula tambien que si actualmente hubiere en la parte designada fortificaciones erigidas anteriormente, su Majestad británica las hará demoler todas, y ordenará á sus súbditos que no formen otras nuevas. Será permitido á los habitantes ingleses que se establecieren para la corta del palo ejercer libremente la pesca para su subsistencia en las costas del distrito convenido arriba, ó de las islas que se hallen frente del mismo territorio, sin que sean inquietados de ningún modo por eso; con tal de que ellos no se establezcan de manera alguna en dichas islas (1).

Artículo 7º.

Su Majestad católica restituirá á la Gran Bretaña las ialas de Providencia y de Bahama, sin escepcion, en el mismo estado en que se hallaban — cuando las conquistaron las armas del rey de España. Se observará á favor de los súbditos españoles por lo respectivo á las islas nombradas en el presente artículo, las mismas estipulaciones insertas en el artículo 5º de este tratado.

Artículo 8º.

Todos los países y territorios que pueden haber sido conquistados ó —

(1) Por el convenio que estas dos coronas ajustaron en el año de 1786 se modificó en parte, y se amplió en otra lo dispuesto en el presente artículo.

ratificación del presente tratado.

Artículo 11º.

Sus Majestades católica y británica prometen observar sinceramente y de buena fé todos los artículos contenidos y establecidos en el presente - tratado, y no tolerarán que se contravenga á él directa ni indirectamente por sus respectivos súbditos; y las sobredichas altas partes contratantes se constituyen garantes general y recíprocamente de todas las estipulaciones del presente tratado.

Artículo 12º.

Las ratificaciones solemnes del presente tratado, espedidas en buena y debida forma, se cangearán en esta ciudad de Versalles entre las altas - partes contratantes en el término de un mes, ó antes si fuere posible, con tado desde el día en que se firme el presente tratado.

En fé de lo cual, nos los infrascriptos sus embajadores estraordinarios y ministros plenipotenciarios hemos firmado de nuestra mano en su nom bre, y en virtud de nuestras plenipotencias, el presente tratado definitivo, y hemos hecho poner en él los sellos de nuestras armas. Fecho en Versalles á 3 del mes de setiembre de 1783.- El conde de Aranda.- Manchester.

podrán serlo en cualquiera parte del mundo por las armas de su Majestad ca
tólica ó por las de su Majestad británica, que no están comprendidos en el
presente tratado con título de cesion ni con título de restitucion, se res-
tituirán sin dificultad y sin exigir compensacion.

Artículo 9º.

Luego que se cambien las ratificaciones, las dos altas partes contra-
tantes nombrarán comisarios para trabajar en nuevos reglamentos de comercio
entre las dos naciones sobre el fundamento de la reciprocidad y de la mútua
conveniencia: los cuales reglamentos deberán terminarse y quedar conclui-
dos en el espacio de dos años contados desde 1º de enero de 1784.

Artículo 10º.

Siendo necesario señalar una época fija para las restituciones y eva-
cuaciones que se han de hacer por cada una de las altas partes contratantes,
se ha convenido en que el rey de la Gran Bretaña hará evacuar la Florida —
oriental dentro de tres meses despues de la ratificacion del presente trata-
do, ó antes si pudiere ser. El rey de la Gran Bretaña volverá igualmente á la
posesion de las islas de Providencia y de Bahama, sin escepcion, en el espa-
cio de tres meses despues de la ratificacion del presente tratado, ó antes
si pudiere ser. En consecuencia de lo cual, se enviarán las órdenes neces-
rias por cada una de las altas partes contratantes, con los pasaportes reci-
procos para los bajales que las han de llevar inmediatamente despues de la

ARTICULOS SEPARADOS.

Artículo 1º.

Que no estando generalmente reconocidos algunos de los títulos que han usado las potencias contratantes en el curso de la negociacion y en el tratado no sirvan de perjuicio, ni puedan alegarse en lo sucesivo como fundados en este ejemplo.

Que tampoco sirva de perjuicio á la práctica que tenga establecida - cada una de las dos potencias el haberse estendido en francés este tratado.

Siguen dos declaraciones hechas en el mismo día por los plenipotenciarios de Austria y Rusia certificando que el anterior tratado y artículos separados se concluyeron con la mediación de sus respectivos soberanos.

Su Majestad británica Jorge III espidió el instrumento de su ratificación en san James el 10 del mismo mes de setiembre de 1783; y dos dias mas tarde espidió la suya en san Ildefonso el señor rey católica don Carlos III, refrendada del primer secretario de estado y del despacho don José Moñino; y el canje se hizo en Versalles el 19 del mismo mes de setiembre.

Declaracion.

El nuevo estado en que podrá hallarse quizá el comercio en todas las partes del mundo, exigirá revisiones y esplicaciones de los tratados existentes; pero una entera abolicion de ellos, en cualquiera tiempo que se hi-

ciere, introduciría en el comercio una confusión que le fuera infinitamente nociva.

En los tratados de esta especie, no solo hay artículos que son puramente relativos al comercio, sino tambien otros muchos que aseguran recíprocamente á los respectivos súbditos privilegios y facilidades en el manejo de sus negocios, proteccion personal y otras ventajas que no son ni deben ser de condicion alterable, como los pormenores que miran exclusivamente al valor de los efectos y mercancías, los cuales varían por circunstancias de cualquiera especie. En consecuencia, cuando se trabajare entre las dos naciones sobre el estado del comercio, convendrá se entienda que las alteraciones que pudieran hacerse en los tratados existentes recaerán únicamente sobre arreglos puramente comerciales, y que los privilegios y ventajas mútuas y particulares no solo se conserven por una y otra parte, sino que hasta se aumenten si pudiere ser.

En tal sentido se ha prestado su Majestad al nombramiento por una y otra parte de comisarios que trabajen únicamente en el indicado objeto. Hecho en Versalles á 3 de setiembre de 1783.- Manchester.

Contra-declaracion.

El objeto único del rey católico al proponer arreglos nuevos de comercio fue el rectificar segun las reglas de reciprocidad y mútua convenien-

cia los defectos que pudieren contener los tratados precedentes de comercio. El rey de la Gran Bretaña puede creer, por lo mismo, que la intencion de su Majestad católica no es de modo alguno el destruir todas las estipulaciones que comprenden dichos tratados: al contrario, declara su dicha Majestad católica desde ahora, que está dispuesta á mantener todos los privilegios, facilidades y ventajas enunciadas en los tratados antiguos, en tanto que sean reciprocas ó se reemplacen por ventajas equivalentes. Con el fin pues de llegar á este objeto, deseado por una y otra parte, se nombrarán comisarios que trabajen sobre el estado comercial entre las dos naciones, y se ha concedido un término dilatado para fenecer el trabajo. Su Majestad católica se lisongea de que este objeto se seguirá con la misma buena fé y con el mismo espíritu de conciliacion que han presidido á la redaccion de los demas puntos comprendidos en el tratado definitivo; y confia en que los respectivos comisarios emplearán toda la posible celeridad en la confeccion de esta importante. obra.

Hecho en Versalles á 3 de setiembre de 1786.- Es copia.- Aranda.

LEY 8, TITULO 13, LIBRO 6ºDon Carlos IV por real resolución y orden de 12 de julio de1.791, y cédula del consejo de 20 del mismo mes, (43)Formación de matrículas de extranjeros residentes en estos reinos, con distinción de transeúntes y domiciliados.

Conviniendo para la más exacta ejecución de las leyes de estos reinos y para el bien y tranquilidad del Estado, que se averigüe con claridad y sin tergiversación la calidad de los extranjeros que hay en ellos, distinguiendo los transeúntes de los domiciliados para que se guarden á unos y otros de los fueros y concesiones que comprenden así los tratados hechos con las diferentes potencias como las leyes españolas, está mandado á este fin repetidamente, que se matriculen tales extranjeros transeúntes; y se declara en las leyes y autos acordados los que se han de considerar por naturales o avocindados en estos reinos (ley 3ª); pero aunque se han practicado las matrículas en algunas partes de orden de la junta de extranjeros incorporada en la de comercio, se sabe que no han sido exactas ni se han formado en todos los pueblos en que los hay, como también que muchos o los más quieren usar y usan promiscuamente de

(43) Los Códigos Españoles anotados y concordados. Tomo 8º. Novísima Recopilación de las Leyes de España, Libro VI, título XI, ley VIII, La Publicidad. Madrid, 1.850. pág. 259-260.

los privilegios de transeúntes y de los de avecindados. Para aclarar e impedir las fatales consecuencias que resultan y pueden resultar de su confusión, he resuelto se ejecute y observe lo que contienen los puntos siguientes:

1. Que empezando por Madrid se vea si están ejecutadas las matrículas de extranjeros, con distinción de transeúntes y domiciliados, explicando los objetos y destino de cada uno de ellos en estos mis reinos, y particularmente en la corte, verificándose por medio de los alcaldes de cuartel y de sus respectivos barrios, si en las listas, registros o matrículas que han debido hacer, estas especificados todos los extranjeros y sus familias existentes en su distrito, con sus nombres, patria, religión, oficio o destino, y el objeto de permanecer en la corte; como también si han declarado y firmado ser su ánimo permanecer como avecindados y súbditos míos, ó como transeúntes; y en caso de que no se hallen ejecutadas las matrículas con todas las expresadas particularidades, se renovarén y rectificarán inmediatamente con puntual especificación de todas ellas; y el mi consejo, conforme se vayan ejecutando me dará cuenta en resúmen del número de extranjeros que haya en cada barrio con distinción de avecindados y transeúntes, de las naciones de que son, sus oficios y motivos de residir en la corte, sin esperar á que toda la operación se halle concluida.

2. Consiguiente al punto antecedente, se dirige áste á arreglar el modo de gobernarse con cada uno de los extranjeros, según sus diferentes calidades de avecindados ó transeúntes; pues los avecindados deberán ser católicos,

y hacer juramento de fidelidad a la religión y á mi soberanía ante la justicia, renunciando a todo fuero de extranjería; y á toda relación, unión y dependencia del país en que hayan nacido, y prometiendo no usar de la protección de él, ni de sus embajadores, ministros ó cónsules; todo bajo las penas de - galeras, presidio, ó expulsión absoluta de estos reinos, y confiscación de - sus bienes, según la calidad de las personas, y de la contravención; y los - extranjeros transeúntes serán notificados de no permanecer en la corte sin - licencia, que deberán obtener por la secretaría de Estado dentro del término que se les señale; lo que se harán según el motivo y calidad de las personas, aunque reduciéndolas a términos breves proporcionados a la necesidad, y perentorios. También deberá notificarse a los que se declaren transeúntes, que no pueden ejercer las artes liberales ni oficios mecánicos en estos mis reinos, sin avecindarse; y por consecuencia no pueden ser mercaderes de vara, ni vendedores por menor de cosa alguna, sastres, modistas, peluqueros, zapateros, ni médicos, cirujanos, arquitectos, etc., a menos que preceda licencia o mandato mío expreso; comprendiéndose en esta prohibición de ser criados y dependientes de vasallos y súbditos míos en estos dominios. A las personas de tales oficios y destinos se les darán quince días de término para salir de la corte, y dos meses para fuera de estos mis reinos, o habrán de renunciar en el mismo término de quince días el fuero de extranjería, avecindarse, y hacer el juramento que va explicado, con sujeción a las penas mencionadas.

3. Y ultimamente mando, se arregle la entrada de extranjeros en estos mis reinos y en la corte; pues dejando en su fuerza los tratados que deban su-sistir con las potencias extranjeras para los tráficos y los negocios de sus respectivos súbditos en estos mis reinos, se examinarán las licencias y pasa-portes con que vengan algunos a los puertos y plazas de comercio, y se impe-dirá la entrada por otras partes sin expresa licencia mía; y lo mismo se hará para venir a la córte señalando los Vireyes, capitanes generales y gobernado- res de las fronteras, para los extranjeros que vengan con pretesto de refugio asilo ó hospitalidad ó otro, las rutas o pueblos interiores en que se hayan de presentar lo que dieren motivos justos para obtener licencias, donde es- perarán la concesión o denegación de estas: jurando entretanto la sumisión y obediencia a mí, y a las leyes del país, con apercibimiento de iguales penas á las que van especificadas en el segundo punto, si usaren de otras rutas ó medios.

LEY 9ª. TITULO 11. LIBRO 6ª.Don Carlos IV por instrucción de 21 de julio de 1791. (44)

Reglas que deberán observar las justicias para la ejecución de lo dispuesto en la ley octava.

1. Se procederá desde luego a la ejecución de la cédula anterior ~~sindila~~—ción, escusa ni pretesto alguno en las capitales donde hay chancillerías y audiencias, y por consecuencia distribución de cuarteles y establecimiento de —alcaldes de barrio, por medio de los alcaldes del crimen, cada uno en el suyo, en la forma que para Madrid se dispone en el punto primero de la misma real —cédula; esto es, averiguar si en las listas, registros o matrículas que han de bido hacer, están especificados todos los extranjeros y sus familias existentes en su distrito con sus nombres, patria, religión, oficio o destino y el —objeto de permanecer en aquella ciudad; como también si han declarado y firmado ser su ánimo permanecer como avecindados y súbditos de S.M. católica ó como transeúntes; y en caso de que no se hallen ejecutadas las matrículas de extranjeros con todas las expresadas particularidades, se renovarán y rectificarán inmediatamente con puntual especificación de todas ellas.

(44) LOS CODIGOS ESPAÑOLES CONCORDADOS Y ANOTADOS. Tomo 8ª. Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VI, título XI, ley IX. La Publicidad, Madrid 1850. pág. 260-1.

2. En las ciudades en donde se hallen establecidos alcaldes de barrio, aun que no haya tribunal, ejecutará el corregidor por medio de ellos igual operación, y con la misma distinción y claridad; pero como puede ser que en estas no estén hechas dichas metrículas con el orden y exactitud que ahora deben constar, las harán de nuevo por barrios, especificando todos los extranjeros y sus familias existentes en cada uno con sus nombres, patria, religión, oficio ó destino, y el objeto de permanecer en el pueblo.

3. Del mismo modo lo ejecutarán los correjidores y justicias de las demás ciudades, villas y lugares de estos reinos en donde no hay división de cuarteles, ni alcaldes de barrio, por el método que observen en operaciones de otras clases para saber el total del vecindario; y valiéndose á este fin de los escribanos, alguaciles de su juzgado y demás personas de confianza, que todas sin distinción les auxiliarán para esta operación sin excusa ni pretexto alguno.

4. Así hecho, los tales extranjeros de ambos sexos, que consten matriculados, declararán formalmente ser su ánimo permanecer o no como avecindados y súbditos del Rey nuestro señor, y lo firmarán.

5. Los extranjeros que estén avecindados o quieran avecindarse, deben ser católicos, y unos y otros han de hacer ante la respectiva justicia el juramento en la forma siguiente: "Que jura observar la religión católica, y — guardar fidelidad a ella y al Rey nuestro Señor, y quiere ser su vasallo, su jetándose a las leyes y prácticas de estos reinos, renunciando, como renun—

cia, a todo fuero de extranjería, y á toda relación, unión y dependencia del país en que nació; y promete no usar de la protección de él, ni su embajador, ministro o cónsules; todo bajo las penas de galeras, presidio o expulsión absoluta de estos reinos y confiscación de sus bienes, según calidad de la persona y de la contravención.

Extendido el juramento en esta forma, que podrá ser a continuación de la declaración que debe preceder según el capítulo antecedente, se archivarán estas diligencias en los oficios de ayuntamiento, para ocurrir a ellas en los casos que ocurran de variación, alteración o contravención de las tales personas.

6. También se notificará a los que se declaran transeúntes que no pueden ejercer las artes liberales ni oficios mecánicos en estos reinos sin avecin darse, y por consecuencia, no pueden ser mercaderes de vara, ni vendedores - por menor de cosa alguna, sastres, modistas, peluqueros, zapateros, ni médicos, cirujanos, arquitectos, etc., a menos que preceda licencia o mandato ex oreso de S.M., comprendiéndose en esta prohibición la de ser criados y depen dientes de vasallos y súbditos del Rey en estos dominios.

7. A las personas de los oficios y destinos que refiere el capítulo antecedente, se les darán quince días de término para salir de la corte, y dos me ses para fuera de estos reinos, ó habrán de renunciar en el mismo término de quince días el fuero de extranjería, avecindarse y hacer el juramento que vá explicado en el capítulo quinto con sujeción a las penas mencionadas; y los

extranjeros que se declaren transeúntes, y no obtuvieren los oficios o destinos indicados en el mismo capítulo antecedente, serán notificados de no venir ni permanecer en la corte sin licencia, que deberán obtener por la primera - secretaria de Estado dentro de quince días, pues pasados sin obtenerla, saldrán de ella y de estos reinos.

8. Por lo respectivo a la entrada de extranjeros, dejando, como se deja, por la citada real cédula, en su fuerza los tratados que deban subsistir con las potencias extranjeras para los tráficos y negocios de sus respectivos - súbditos en estos reinos, se examinarán las licencias y pasaportes con que vengan algunos á los puertos y plazas de comercio, y se impedirá la entrada por otras partes sin expresa real licencia; y lo mismo se hará para venir a la corte, señalando los Vireyes, capitanes generales y gobernadores de las fronteras para los extranjeros que vengan como pretexto de refugio, asilo ó hospitalidad ó otro, las rutas y pueblos interiores en que se hayan de presentar los que dieren motivos justos para obtener licencias, donde expresarán la concesión o denegación de éstas, jurando entretanto la sumisión y obediencia al rey y á las leyes del país, con apercibimiento de iguales penas a las que van especificando en el segundo punto de la real cédula, y quinto de esta instrucción, si usaren de otras rutas ó medios.

9. En los pueblos donde hubiere fábricas de cualquier especie de manufactura, que sean establecidas de orden y por cuenta de S.M. o de particulares, en las cuales haya maestros ó oficiales que no profesen la religión católica

se formarán listas separadas con la especificación referida en esta instrucción, añadiéndose el tiempo de sus contratas ó empeños, que remitirán al consejo por mano de su presidente, para que se les prevenga lo que deban hacer, sin molestarle entretanto.

10. En las citadas matrículas y demás disposiciones de la real cédula de 20 de este mes, comprenderán las justicias a todos los extranjeros, aunque se hallen empleados en la real casa y servidumbre civil de S. M., en cumplimiento de sus reales intenciones manifestadas al consejo.

11. Concluida la operación de matrícula, declaración y juramento de los que estén avecindados, y de los transeúntes que por virtud de ellas se avecinden, pasarán las justicias noticia expresiva al corregidor del partido, y éste sucesivamente sin esperar á que estén completas, lo harán al consejo para que dé cuenta a S. M. como por lo respectivo a Madrid se previene en el capítulo primero de la real cédula.

12. Para que esta noticia sea con la distinción y claridad que conviene, se extenderá un testimonio conforme al estado o modelo adjunto.

LEY 10. TITULO 11, LIBRO 6º.

Don Carlos IV por real Resolución y cédula del consejo de -

29 de noviembre de 1791. (45)

Rectificación anual de las matrículas de extranjeros en todos los pueblos -
del reino.

Deseando que tengan continuo y cumplido efecto mis reales determinaciones en el asunto de extranjeros, según lo dispuesto por las leyes y autos acordados, y demás resoluciones que se hallan comunicadas, sin faltar a los tratados hechos con las cortes extranjeras en su verdadera y sana inteligencia, he resuelto que en los dos primeros meses del año próximo venidero, y en todos los siguientes perpétuamente, así en la corte como en los demás - pueblos del reino se recorran y rectifiquen, añadiendo o enmendando lo que convenga, conforme a las ocurrencias posteriores, las matrículas ejecutadas en el precedente año; anotando las justicias los extranjeros que hayan salido, los que hubieren entrado o contravenido a la cédula, órdenes y explicaciones publicadas, para proceder contra estos últimos sin negligencia ni contemplación, de que serán responsables; y de todo darán cuenta al mi consejo, que me avisará lo que resulte.

(45) Los Códigos españoles concordados y anotados. Tomo 8º. Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VI, título XI, ley X. La Publicidad, Madrid, 1850, pág. 262.

LEY XXIII - Reglas para evitar competencias entre las jurisdicciones ordinaria y militar.

El mismo por Real resolu, a cons. del Consejo de Guerra de 26 de Febrero, comunicada al de Castilla en 24 de Abril de 1796 (46).

Para cortar de raíz altercados entre las Jurisdicciones ordinaria y militar, se observen por punto general las reglas siguientes:

1. Que en las causas civiles ó criminales, cuyo conocimiento toque a la Jurisdicción ordinaria, siempre que los Jueces inferiores de ésta, ó los Tribunales superiores hayan de proceder contra los bienes de los Militares, deben mirar y tratar á sus jueces naturales, como mirarían y tratarían a los que en diverso territorio tuviesen los paisanos ó sus bienes, con quienes fue se preciso entenderse de resultas del conocimiento de las causas que pendiesen ante ellos.

2. Que por consiguiente para citarlos, emplazarlos, embargar, vender y hacer pago con sus bienes, y finalmente para todas las diligencias que de Juez a Juez inferior ordinario serían necesarias requisitorias o exhortos, y de Tribunal superior a otro igual certificaciones de los proveídos, ó que las -

(46) LOS CODIGOS ESPAÑOLES CONCORDADOS Y ANOTADOS. Tomo 8º. Recopilación de las Leyes de España. Libro VI, título IV, Ley XXIII. La Publicidad. Madrid, 1850. pág. 154.

provisiones se remitiesen a Gefes o Fiscales respectivos, para solicitar, y mandar despachos la auxiliatoria correspondiente, se use precisamente por - los jueves inferiores de requisitorias o exhortos con los insertos necesarios y por los Tribunales superiores de papeles ó oficios atentos, con los que se remitan los competentes documentos; quedando en arbitrio de estos el elegir el medio de dichos oficios, o el de mandar dar al interesado certificación del auto, o el de mandar dar al interesado certificación del auto ó proveído del Tribunal, con lo que podrá acudir al Juzgado militar para su cumplimiento.

3. Que dichos autos ó proveídos, aunque sean de Tribunales superiores, no deben contener voces preceptivas y conminatorias contra los Gefes Militares que son independientes enteramente; y si deben entenderse con las partes y sus bienes.

4. Que en los casos en que se presentan a los Jueces militares dichas requisitorias, exhortos, certificaciones, papeles ó oficios, y esté claro que el conocimiento es de la Jurisdicción ordinaria, no detengan el curso de la justicia, antes bien les den el más puntual y exacto cumplimiento; en la inteligencia de que los que faltasen á esta obligación por cabilosidad ó fines particulares, además de incurrir en mi Real desagrado, serán castigados con proporción a su exceso.

Real Orden de 6 de Julio de 1.807 sobre matrícula y juramen
to de los extranjeros (47)

El Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, primer secretario de Estado y del - despacho, comunicó al Ilmo. Sr. D. Arias Antonio Mon, decano gobernador inte- rino del consejo, con fecha 27 de mayo último, la real orden siguiente.

"Ilmo. Sr. Para evitar las cuestiones y dudas sobre el concepto y con- sideración con que deben ser tratados los extranjeros que existen en estos reinos, quiere S.M. que en los padrones que se están formando en cumplimen- to de las repetidas reales órdenes expedidas desde épocas muy distantes, se explore la voluntad de los extranjeros sobre si quieren ser mirados como - transeúntes o como naturalizados, a fin de que puedan ser considerados, así en lo favorable como en lo gravoso, con la distinción prescrita en las leyes del reino.

"Asimismo quiere S.M. que en las actuales matrículas se omitan los ju- ramentos y demás formalidades que se adoptaren en el año de 1792, por haber- lo exigido así las imperiosas e infaustas circunstancias de esta época.

Y como este acto de matrícula forma un preliminar indispensable, y - del cual deben resultar los derechos del extranjero á los favores del Gobier-

(47) RIQUELME, A. "Apéndice al Derecho Internacional de España". Tomo II. Ma- drid, 1849. Pág. 279.

no, y los de este sobre el extranjero, es la voluntad del Rey, que se sobre-
sea en toda coacción dirigida al alistamiento y sorteo de los extranjeros pa-
ra el servicio del ejército".

Publicada en el consejo esta real orden, y con inteligencia de lo ex-
puesto por los tres señores fiscales, ha acordado se guarde y cumpla lo que
S. M. se sirve mandar, y que se comunique a V. para que se arregle enteramen-
te a su tenor en la ejecución de la circular que le dirigí con fecha 4 de -
abril de este año.

Lo que participo a V. de orden del Consejo para su inteligencia y pun-
tual observancia y que al mismo fin lo circule a las justicias de los pueblos
de su partido, dándome aviso del recibo.

Dios guarde a V. muchos años, Madrid, 6 de julio de 1807. = D. Bartolo-
mé Muñoz.

Real Orden de 28 de julio de 1807 permitiendo a los franceses que al formarse la matrícula de extranjeros elijan la condición de avecindados ó transeúntes. (48)

Con fecha 6 de este mes se comunicó circularmente una real orden dirigida al consejo por la vía reservada de Estado en 27 de mayo último, en que S. M. se sirvió hacer varias declaraciones para el modo de proceder en la ejecución de las matrículas de extranjeros que se están formando a fin de evitar las cuestiones y dudas sobre el concepto y consideración con que deben ser tratados los que existen en estos reinos.

De resultas de esto y de un oficio que pasó á la misma vía reservada el señor embajador de Francia manifestando su concepto acerca de dicha real orden, se le ha contestado, entre otras cosas, que la mente de ésta es que en los empadronamientos se aclaren las dudas que haya con respecto á los franceses existentes en España sobre si son transeúntes ó naturalizados, dejando á su arbitrio en esta ocasión el que elijan el concepto bajo el cual quieren ser considerados, á fin de que previa dicha elección puedan ser tratados con la distinción correspondiente a la clase elegida, y según lo prescrito en las leyes de estos reinos, así en lo favorable, como en lo gravoso;

(48) RIQUELME, A, "Apéndice al Derecho Internacional de España", Tomo II. Madrid, 1849, pág. 280.

y que S.M. ha concedido esta elección a los franceses en obsequio de su intimo aliado, y ha suspendido la fuerza de las leyes de la materia hasta que se realice aquella elección en la presente matrícula.

De esta resolución se ha pasado aviso al consejo por la misma vía reservada de orden de S.M. para que lo circule adonde convega; y en su virtud ha acordado este supremo tribunal se guarde y cumpla y que se comunique á V. como lo hago, para que se halle enterado, y proceda con arreglo á su tenor en la ejecución de la referida matrícula de extranjeros, haciéndolo entender al propio efecto á las justicias de los pueblos de su partido; y dándome aviso del recibo.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 28 de julio de 1.807. = D. Bartolomé Muñoz.

Real orden expedida por la Secretaría de Estado y del despacho en 6 de julio de 1.815, expresa que los comerciantes extranjeros establecidos en España deben pagar las contribuciones ordinarias y extraordinarias como los demás de la nación. (49)

Conformándose el Rey nuestro señor con la consulta de la junta de comercio y dependencias de extranjeros en sala primera de gobierno del consejo de Hacienda, se ha servido resolver que todos los comerciantes extranjeros establecidos en España con casa de comercio paguen las contribuciones ordinarias y extraordinarias como los comerciantes españoles.

(49) RIQUELME, A. op. cit. pág. 286.

Circular del ministerio de Hacienda de 30 de octubre de -
1815: declara S.M. que la excepción en el pago de contribu
ciones sobre comerciantes extranjeros, es solamente a los
que se hallen inscritos en los pueblos en que residen en -
clase de transeúntes. (50)

Queriendo S.M. fijar el sentido de las órdenes relativas a la excepción de los comerciantes extranjeros en el pago de las imposiciones y cargas a que deben estar sujetos en los pueblos de su residencia, en el interín que por el consejo de hacienda se le consulta sobre el particular, como lo tiene mandado, se ha servido declarar S.M. que dicha excepción no debe comprender a los comerciantes extranjeros domiciliados en España, sino solamente a los que se cuentan o se hallen inscritos en los pueblos en que residen en clase de transeúntes.

Circular del ministerio de Hacienda de 10 de abril de 1817:
se manda llevar a efecto la real órden de 6 de julio de 1.815
en que se previno que todos los comerciantes extranjeros con
casa abierta de comercio en España, paguen todas las impo-
siciones ordinarias y extraordinarias como los demás comer-
ciantes españoles (51).

El Rey.

Habiendo oído el consejo pleno de hacienda, en virtud de la órden de 30 de octubre de 1.815, la cual excluía del pago de las imposiciones y cargas a los comerciantes extranjeros que se hallaban inscritos en clase de transeúntes en los pueblos donde residían, se ha servido resolver, conforme con la consulta de dicho supremo tribunal, que se lleve á efecto la órden de 6 de julio, circulada en 11 del mismo año, por la cual se mandó que todos los comerciantes extranjeros con casa abierta en España, paguen todas las imposiciones ordinarias y extraordinarias como los demás comerciantes españoles.

(51) RIQUELME, A, op. cit. pág. 298.

Real orden de fecha de 17 de julio de 1,819, comunicada por el secretario de Estado y del despacho al ministro de Gracia y Justicia: se manda que por todas las secretarías del despacho se expidan órdenes a todas las autoridades de sus respectivos ramos para que den el más puntual cumplimiento a - cuando previenen las leyes, en orden a los extranjeros (52)

A fin de evitar las repetidas reclamaciones que desgraciadamente muchas veces con fundados motivos dirigen á este ministerio de Estado los embajadores y ministros extranjeros para sostener los derechos y defender los intereses de los súbditos de sus respectivos gobiernos, se ha servido S.M. resolver que por todas las secretarías del despacho se circule orden a todas las autoridades de sus respectivos ramos, prescribiéndoles den el más puntual y exacto cumplimiento a cuanto previenen las leyes del reino, reales decretos y pragmáticas respecto a los extranjeros, sin permitir en su ejecución la menor arbitrariedad ni interpretación, pues lo contrarios nos expone a las expresadas reclamaciones, que además de quitar el tiempo, ofrecen compromisos desagradables, y a las veces exigen resarcimientos e indemnizaciones onerosas, y son causa de que sean desatendidas en el extranjero las reclamaciones justas de los ministros y agentes del Rey, con grave perjuicio

(52) RIQUELME, A. op. cit. pág. 289.

de los intereses y relaciones de los españoles en las naciones extranjeras,
y descrédito de decoro del Gobierno y de la buena fé en la observancia de los
tratados, que ha sido siempre característica de la nación española.

Real Orden de 14 de agosto de 1825, comunicada al señor secretario del despacho de Hacienda, en que mandando observar los tratados vigentes con las potencias extranjeras, se previene que para registrar por sospechas de contrabando la casa de un súbdito francés, se cuente con el cónsul respectivo, y así de los demás extranjeros que se hallen con igual derecho. (53).

He dado cuenta al Rey nuestro señor del oficio de V.E., de fecha 26 de mayo último, en el que informando acerca de las varias reclamaciones del encargado de negocios de Francia y ministro de Austria, contra la infracción de algunos artículos de los tratados existentes, y señaladamente contra la real orden de 22 de enero de este año, expedida por el ministerio del cargo de V.E., y en la que se mandó que las casas de los comerciantes extranjeros sean registradas en caso de sospecha de contrabando, sin previa citación de los cónsules, me comunico V.E., que S.M. se ha servido resolver que se lleve á efecto lo mandado, S.M., después de enterarse detenidamente del citado oficio de V.E. me ordenó ilustrar este expediente con todos los antecedentes datos y noticias posibles; y habiéndolo en este estado elevado nuevamente al

(53) RIQUELME, A. op. cit. pág. 290-1.

soberano conocimiento del Rey nuestro Señor, después de pesar en su alta sa
biduría cuanto de él aparece, si bien ha juzgado por una parte que no hay -
duda que las alteraciones ocasionadas por varios y complicados sucesos, y -
por el transcurso de los años, han hecho apetecible para la España, no menos
que para la Francia misma, el que los dos gobiernos se pusiesen de acuerdo
á efecto de dar más claridad y precisión á algunos de los artículos de los
convenios vigentes, y ponerlos en más perfecta armonía con los actuales mú
tuos intereses de ambos reinos; también ha reconocido por otra parte S. M. -
que la justicia, la buena fé y el derecho de gentes, prescriben la fiel ob
servancia de las estipulaciones entre los soberanos; en tanto que no se de
roguen de común consentimiento, y que debemos adherirnos con tanta más fuer
za á estos sanos principios, cuanto al gabinete español, que siempre se ha
distinguido por su lealtad, mal podrá apoyar en los tratados vigentes muchas
reclamaciones que tiene pendientes, si él fuese el primero a dar el ejemplo
de invalidar los convenios sin el asenso de los gobiernos con quienes se ha
llan ajustados. En consecuencia se ha dignado S. M. declarar y resolver que
por punto general se cumplan exactamente todos los tratados que rigen con la
potencias extranjeras; y que con arreglo a lo tratado en el de Viena de -
1725, se citen los cónsules de Francia, para que en los casos de grave sospe
cha de contrabando asistan al registro de las casas de los comerciantes súb
ditos de S. M. Cristianísima, que conservando realmente esta calidad pertenez
can á la clase indicada en los tratados, que es la que nuestra leyes desig-

nen con la denominación de comerciantes transeúntes; extendiéndose esta misma disposición en identidad de circunstancias á los súbditos de los demás soberanos que tengan el mismo derecho á esta prerrogativa, en virtud de las estipulaciones vigentes con la España, mientras que por el Gobierno de S. M. se examina si conviene entablar negociaciones con los gabinetes de las potencias interesadas, sobre el arreglo de nuevos tratados que estén exentos de las dudas e inconvenientes con que á cada paso se tropieza en la aplicación de los antiguos; de resultas de tantas y tan grandes alteraciones como han experimentado el sistema administrativo, y las relaciones comerciales de todas las naciones, en más de un siglo que ha transcurrido desde la formación de algunos de dichos tratados.

Real Orden de 20 de diciembre de 1836, mandando formar un padrón de todos los extranjeros que viajen y residan en la Península. (54).

Deseando el gobierno de S. M. formar un padrón de todos los extranjeros que residan y viajen por la Península, se ha dirigido a los señores embajadores y ministros existentes en esta corte, á fin de que por las respectivas cancillerías se faciliten listas de los que estuviesen inscritos en ellas; pero como hubiesen manifestado no serles posible dar con exactitud las noticias que se les pedían, ya porque unos no se presentan a ser matriculados, y ya porque otros no tienen obligación de hacerlo, se ha servido mandar S. M. que para llevar á cabo tan interesante operación se observen las disposiciones siguientes.

1. Todos los extranjeros residentes en las capitales de provincia presentarán á los gefes políticos respectivos, dentro del término que estos señalen, el certificado que se haya librado á cada uno, tanto por las cancillerías de las embajadas y ministerios, como por los consulados, del que se tomará la correspondiente razón, devolviéndolo al interesado.

2. Los que no se hallen provistos del indicado documento, presentarán no-

(54) RIQUELME, A. "Apéndice al Derecho Internacional de España", Tomo II, Madrid, 1849. pág. 281

ta expresiva de su nombre y apellido, del pueblo de su naturaleza, del de su residencia, y de la ocupación en que se ejerciten para comprenderlos en la matrícula.

3. Los que residan en pueblos que no sean capitales de provincia cumplirán con lo que se previene en los dos artículos anteriores ante el primer al calde constitucional, quien dará cuenta al jefe político remitiéndole la nota correspondiente.

4. Los jefes políticos luego que tengan reunidas todas las noticias que se les piden, formarán y remitirán una lista general de los extranjeros que existan en su provincia.

5. Se exceptúan de estas medidas los embajadores, cónsules y demás emplea dos que por derecho están dispensados de semejantes obligaciones.

Real Orden de 11 de agosto de 1837, por la que se clarifican
los extranjeros y se determinan sus fueros (55)

Excmo. Sr.- Desde que en las provincias del conocido el real decreto de 30 de agosto de 1836, relativo a la anticipación de doscientos millones por el repartimiento de cuotas que hicieron las diputaciones provincial a as asociados con las juntas de armamento a lo que consideraron con capacidad - efectiva para ser prestam tas, principiaron las reclamaciones de súbditos extranjeros establecidos en la Península, pidiendo la conservación de sus - exenciones y franquicias de extranjería, acudiendo unos en derecho y otros por medio de los representantes de sus cortes en la de Madrid por conducto de V.E. Por otra parte, las autoridades políticas y municipales de varias - provincias representaron á su vez, demostrando hasta la evidencia que muchos de los extranjeros que habían demandado la guarda de los derechos de pabellón ejercían industrias lucrativas, por sí y en sociedad con españoles, tenían - casa abierta y eran propietarios. Este cúmulo de instancias en tan diverso sentido hizo abocar en un expediente que data de tiempo antiguo, que en más de una ocasión ha sido revisado por iguales pugnas, y en el que están dilucidados con la mayor claridad los tratados de paz y de familia que fueron -

(55) RINUELME, A. "Apéndice al Derecho Internacional de España", Tomo II, Madrid, 1849, pág. 292-3.

siempre el tema de invocación. A pesar de estos antecedentes instruidos y comunicados, en su mayor número, por esa secretaría del despacho de Estado; S. M. que tanto anhela la conservación de la buena armonía é inteligencia con los aliados de su augusta hija la Reina Doña Isabel II, y que propende a la legal protección de los súbditos de gabinetes extranjeros, como circunstancia que envuelve la reciprocidad a favor de los españoles, estimó oír a diferentes autoridades de la hacienda pública, y por último á una ilustrada comisión de ministros del suprimido consejo real. Reconocidos los recientes informes y confirmándose en ellos los preindicados antecedentes, ha tenido a bien S. M. resolver:

1. Que los súbditos extranjeros puedan considerarse, ó domiciliados en España o traseúntes: que los primeros están obligados a sufrir las cargas y gravámenes, como los demás vecinos, cuyo punto está resuelto de un modo victorioso y con moderación por la nota que en 8 de noviembre de 1819, pasó el Ministerio de Estado al señor embajador inglés Sir Enrique Wellesley.

2. Que los extranjeros traseúntes están exentos del pago de contribuciones, más no de los derechos de aduanas, cientos, millones y de consumos, y también de las cargas concegiles.

3. Que por traseúntes se entenderán los que vienen de paso sin ánimo de permanecer.

4. Que los traseúntes no podrán ejercer las artes liberales ni los oficios mecánicos sin la competente autorización de los jefes políticos, som

tiéndose al pago del subsidio industrial o de la contribución que le sustituya.

5. Que los transeúntes que tuvieran tienda o taller abierto se considerarán como avecinados y pagarán todas las contribuciones que los naturales del país.

6. Que para evitar perjuicios a los interesados se formarán matrículas de todos los extranjeros hoy existentes, con expresión de domiciliados y transeúntes según se dispone en las leyes 8^a, 9^a y 10, tít. 11 de la Novísima Recopilación.

7. Que á todo extranjero que viniere a España se le dará por la autoridad, que en los puertos y fronteras haya de reconocerles el pasaporte, un billete en el cual conste el nombre y apellido, profesión, y si viene con la calidad de transeúnte; que con él se presentará a la autoridad municipal del pueblo en que haya de residir, para los efectos correspondientes.

Y 8. Que por V.E., se conteste á las notas de los señores Embajador de Francia y Ministro de S.M.B. poniéndoles de manifiesto lo que sobre el particular disponen nuestras leyes, y el ningún derecho que los súbditos de sus naciones respectivas tienen para reclamar la exención de contribuciones, — asegurándoles del vivo deseo que el gobierno de S.M. tiene de complacerlos.

De orden de S.M. lo comunico a V.E. para los efectos correspondientes. Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid, 11 de agosto de 1.837,= Juan Alvarez y Mendizabal,= Sr. secretario del despacho de Estado.

Ministerio de Estado.- Real Orden de 13 de Octubre de 1839
para que no se incluyan en quinta los súbditos franceses re-
sidentes en España (56)

El señor subsecretario del ministerio de la Gobernación de la Península con fecha 18 de octubre próximo pasado se ha servido comunicarme la -
real orden siguiente:

El señor ministro de Estado en 13 de este mes dice al de la Gobernación de la Península lo que sigue:

El señor embajador de Francia en esta corte con fecha 9 del actual -
se ha servido dirigirme la nota siguiente:

Ramón María Segura, súbdito español, natural de Fuenterrabía, vino en 1828 a establecerse en el cuartel marítimo de San Juan de Luz, en donde se casó con una francesa. Por estas circunstancias, y con arreglo a la legislación francesa, debía aquel ser asimilado a los marinos nacionales, y en consecuencia sujeto a las mismas cargas. Por esto recibió orden, durante los últimos alistamientos, de trasladarse a Rochefort para embarcarse allí en un buque de la marina real.

El señor embajador de S. M. C. en París reclamó contra dicha orden, ale

(56) RIQUELME, A.: "Apéndice al Derecho Internacional de España", Tomo II. Madrid, 1849. pág. 293-4.

gando que no habiendo solicitado Segura carta de naturaleza en Francia, había conservado su calidad de español y que de consiguiente no debía haber sido re-querido para el servicio del Estado sin una manifiesta violación de los dere-chos garantidos por los tratados á los españoles residentes en Francia. El mi-nisterio de Marina tenía derecho para sostener que la profesión de marino está exclusivamente reservada para los franceses, y que por consiguiente el extranjero que la ejerce por efecto de su libre albedrío, se debe considerar como habiendo repudiado su nacionalidad. Pero el gobierno del Rey, mirando - la cuestión desde punto más elevado, no se fijado en este argumento, y ha - creído que la dignidad nacional no permitía imponer en cierto modo la cali--dad de francés al extranjero que la esquivase, y que por otra parte importa--ba más que todo desviar hasta la más leve apriencia de infracción en los tra-tados.

Ha mandado, pues, que se borre el nombre del Sr. Segura de los regis-tros de la marina real. Me lisongeo que el gobierno de S. M.C. verá en este hecho una nueva prueba de la religiosa puntualidad con que ejecuta el del Rey los pactos que unen a ambos países, y un nuevo motivo de conservar intacta en España la nacionalidad de los franceses que residan en este último reino, sin haber explícitamente renunciado su calidad. De orden de S. M., lo traslado a V. E., a fin de que por ese ministerio de su digno cargo se hagan a los dependien-tes de él las comunicaciones oportunas, para que en justa reciprocidad obser--ven religiosamente la misma conducta respecto de los súbditos franceses esta

blecidos en este reino, cuidando mucho de no incluirlos en quinta, y de guardarles las consideraciones y derechos que les corresponden por su calidad de extranjeros.

De orden de S.M. comunicada por el expresado señor ministro de la gobernación, lo traslado a V.S. para su inteligencia, la de esa diputación provincial y pueblos de la comprensión de su mando, encargándole muy particularmente prevenga a todos el más puntual y exacto cumplimiento de la procedente real resolución.

Y lo transcribo a VV. a los efectos que se expresan. Cuenca a 4 de noviembre de 1.839.-: E.I.G.P.I. Antonio Villaralbo y Frías.- Señores alcaldes presidentes de los Ayuntamientos constitucionales de.....

Ministerio de la Guerra.- Real orden de 26 de abril de 1840,
declarando sujeto a quintas a un matriculado en la legación
mejicana, que se hallaba bajo potestad de su padre, vecino
de Madrid, con quien vivía (57)

Con esta fecha digo al señor secretario del despacho de la Gobernación de la Península lo que sigue.- He dado cuenta a la Reina Gobernadora de las reclamaciones que el encargado de la legación mejicana en esta corte hizo al ministerio de Estado contra la inclusión de D. José de la Villa del Valle en el alistamiento de esta capital en la última quinta, á quien cupo la suerte de soldado, á pesar de ser súbdito mejicano, empadronado como tan en aquella legación, y cuyas reclamaciones transmitidas á ese ministerio por el de Estado, me fueron dirigidas por V.E. en reales órdenes de 11, 12 y 30 de septiembre último. S.M. se ha enterado de este negocio detenidamente, como asimismo de todas las circunstancias que le caracterizan. Considera la importancia de dictar en él una resolución tan justa y arreglada que sin menoscabo del religioso respeto que se debe a los derechos legítimos de los súbditos de otras naciones residentes en España, no perjudique á los españoles y animada de este principio en fiel observancia del artículo 5º del tratado

(57) RIQUELME, A. "Apéndice al Derecho Internacional de España", Tomo II, Madrid, 1849. pág. 295-6.

de 28 de diciembre de 1838, entre su gobierno y el de aquella república, que daría reconocido en el espresado Villa del Valle el derecho a la exclusión del servicio militar que en su favor se reclama, si en él concurriese suficientemente acreditada la cualidad de súbdito mejicano, que no se justifica por aparecer, como aparece, hijo de un vecino de esta corte que vive en compañía y bajo la potestad de sus padres. En este concepto, oído el tribunal de guerra y marina, y conformándose con su dictamen en acordada de lo del actual se ha servido S. M. resolver se diga a V. E. como lo ejecuto, que la sola circunstancia de hallarse el enunciado D. José de la Villa del Valle matriculado en la legación mejicana como ciudadano de esta república, no es documento suficiente para que como tal se reconozcan las autoridades españolas en el presente caso, mientras no conste que reúne los documentos para ello necesarios. De real orden lo comunico a V. S. I. para conocimiento del tribunal y efectos que correspondan, consecuente á su citada acordada. Dios guarde a V. S. I. muchos años. Madrid 28 de abril de 1840. = Fernando de Norzagaray. =

Sr. Secretario del tribunal supremo de guerra y marina.

Ministerio de la Guerra.- Real Orden 12 de abril de 1.841, des-
estimando una medida propuesta por la diputación provincial
de Cádiz, sobre hijos de extranjeros y declarando cuando deben
considerarse españoles. (58)

Excmo. Sr.- He dado cuenta á la regencia provisional del reino de lo -
expuesto por la diputación provincial de Cádiz, proponiendo que para remover
toda duda acerca de la obligación al servicio militar de los hijos de padres
extranjeros casados con españolas, nacidos y avecinados en los mismos pueblos
en que sus dichos padres cuentan varios años de fija residencia, se les señale
la edad de 18 años para que elijan pabellón, ó la que según la legislación
de las naciones de sus respectivas procedencias, se consideran mayores los na-
turales de ellas. Examinado este asunto con el detenimiento que su gravedad -
reclama, y teniendo presente lo establecido en real orden de 19 de febrero de
1833, cuyas disposiciones y leyes anteriores en que se fundan no pueden ni de-
ben considerarse alteradas, ni en manera alguna modificadas por los princi-
pios proclamados en el artículo 1º de la Constitución política de la monar-
quía; oído el tribunal supremo de guerra y marina, y de conformidad con su dic-
tamen; se ha servido la regencia declarar, que no estando como con arreglo a -

(58) RIQUELME, A. "Apéndice al Derecho Internacional de España", Tomo II. Ma-
drid, 1849. Pág. 297-8.

Á las mimsas no están exentos de la obligación al servicio militar común, los hijos nacidos en España de padres que siendo extranjeros hubiesen obtenido - carta de naturaleza, ó que sin ella hayan ganado vecindad en cualquiera pueblo de la monarquía, con cualquiera de dichas circunstancias, naturalizados sus padres en España dejan de ser extranjeros, y con ellos sus hijos, cuyos derechos bajo la patria potestad son una derivación de los de aquellos; no es necesario, ni corresponde se fije la edad en que los referidos hijos de extranjeros hayan de hacer una elección de pabellón, ó adoptar una nacionalidad que no tienen acción para elegir. Ha resuelto igualmente la regencia que los expedientes particulares remitidos al tribunal con este motivo por el juzgado de extranjeros de aquella provincia, se le devuelvan como lo ejecutivo para que los efectos que en ellos sean consiguientes a la presente declaración de la misma, de cuya orden lo comunico a V.E. para su conocimiento y efectos correspondientes en el ministerio de su cargo, consecuente á las reales órdenes de 18 de agosto y 11 de setiembre de 1838 con que por el mismo fueron dirigidas al de mi cargo las precitadas exposiciones de dicha diputación. Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid, 12 de abril de 1.841.- Pedro Chacón.- Sr. Secretario del despacho de la Gobernación de la Península.

Ministerio de Estado, - Real Orden de 18 de abril de 1843,
para que no se incluya en las quintas ni en la milicia na-
cional á los individuos que, aunque nacidos en España, son
hijos de extranjeros. (59)

En 2 de abril del año próximo pasado trasladé a V.E. nota que en 31 de marzo anterior me pasó el encargado de negocios de Bélgica en esta corte, reclamando contra la inclusión que se había hecho en las quintas y milicia nacional de algunos individuos que, si bien nacieron en España, procedían de padres sardos. V.E. pidió informe a la diputación provincial de Cádiz y evacuado lo acompañó V.E. á este ministerio de mi cargo, en oficio de 27 del mismo abril. La diputación en él procede equivocadamente; supone que la vecindad impone á la fuerza el derecho de naturalización y ciudadanía, y partiendo de este falso principio hace españoles á los padres, y en su derivación á los hijos. El derecho público tiene establecidas reglas que pueden calificarse de máximas generales, y que solo por medio de los tratados se modifican o explican más o menos. Una de ellas, y acaso la principal, consiste en respetar en todo caso la naturalización de los extranjeros. Se les debe negar sí, que ejerzan actos de ciudadanía, y aún si los ejerciesen podría

(59) RIQUELME, A. "Apéndice al Derecho Internacional de España". Madrid, 1849. Tomo II, pág. 308-9.

por la tácita considerarse que habían renunciado su naturalización extranje
ra; pero cuando ni esta resulta, ni por actos previos consta que voluntaria
y espontáneamente renuncian aquella por la de España, obligarles á que acep-
ten la última y abandonen la primera, es acto que se reputa contrario á la
independencia de toda potencia libre. La legislación internacional es supe-
rior á cuantos códigos establecen para su gobierno interior todos los Esta-
dos; éstos, como de cosa de su peculiar inspección, alteran por sí solos sus
leyes conforme les conviene; no así mediando tratados ó convenios con otras
potencias, que entonces ni la menor alteración puede hacerse sino de común
acuerdo de las partes contratantes, sin que ninguna de ellas tenga derecho
de destruir la obra de todas. Por estas consideraciones en el año de 1836
se expidió por este Ministerio de Estado una circular que acalló y resolvió
numerosas reclamaciones sobre el particular; se explicó sólidamente la le-
gislación vigente sobre la materia sin ofensa ninguna de la Constitución, y
se cerró así la entrada á multitud de actos que en reciprocidad, y contra -
lo establecido, amenazaban á los hijos de españoles residentes en los países
extranjeros.- Por todo lo cual enterado el regente del reino, me encarga con-
testé á V.E. que para éste y todos los casos análogos se observe lo resuelto
por dicha circular, de la que acompaño á V.E. copia adjunta á los efectos -
oportunos.

De Orden de S. A, etc., = Madrid 18 de abril de 1843. = Almodovar. = Sr. MI
nistro de la Gobernación de la Península.

Real orden de 7 de noviembre de 1846, declarando comprendi-
dos en la clase de transeúntes, a los extranjeros refugiados
por delitos políticos. (60)

Ministerio de la guerra.- Núm. 21.- Circular.- Los emigrados portugue-
 ses D. Francisco Santos Cordosa y Cándido Martínez Negrao cuando pertenecían
 al depósito de Toledo, solicitaron se suspendiese la causa que se les siguió
 en averiguación de los insultos que le dirigieron al coronel, también emigra-
 do, D. César de Vasconcellos: ó que se les expidiera pasaporte y se les en-
 tregara al gobierno de su país. Al propio tiempo se ofreció la duda de si los
 referidos emigrados conservaban ó no las prerrogativas correspondientes á -
 los empleos militares que respectivamente desempeñaron en el ejército portu-
 gués, y si valuando tales categorías por sus semejantes en España, los pro-
 cedimientos judiciales y los tribunales que hubiesen de fallar, deberían ser
 los establecidos por la ordenanza general del ejército. La Reina (Q.D.G.) -
 dispuso que el tribunal supremo de guerra y marina diese sobre ambos puntos
 su parecer; y conformándose S.M. con el emitido en la acordada de 21 de octu-
 bre próximo pasado ha tenido á bien resolver, no hay para que tomar ya en -
 consideración la instancia de Cordosa y Negrao, pues que estos han regresado

(60) RIQUELME, A. Op. cit. pág. 282.

á su patria; y en cuanto al segundo punto, que se tenga por regla general para los casos que en adelante puedan ocurrir, que los emigrados que se refugien á España por causas ó motivos políticos, no pueden tener otra consideración que la de extranjeros transeúntes, cualquiera que sea su clase o condición; y por consiguiente que en los delitos que cometieren deberán ser juzgados por el capitán general con su auditor, o sea en el juzgado de guerra, puesto que las consideraciones o fuero que gocen en su país no pueden servirles en otro extraño. De real orden lo digo á V.I. para su inteligencia y gobierno. Dios Guarde á V.I. muchos años. Madrid 7 de noviembre de 1.846. = Sanz. =
Sr. secretario del tribunal supremo de guerra y marina.

R.D. de 17 de Noviembre de 1852, (61)

Condicion de los extranjeros en España: Domiciliados y transeuntes: Derechos y obligaciones de unos y otros: Buques extranjeros en puertos españoles: Arribada forzosa, naufragio, etc.: — Asilo y extradicion.

(ESTADO). "Entre las reformas ó aclaraciones que requiere el estado de nuestra legislacion, pocas habrá tan convenientes y aun tan parentorias como las que comprendan nuestras leyes sobre extranjeros.

En el sentido mas extenso, el proyecto debiera abrazar no solo cuanto concierne á los extranjeros que vienen al territorio de la Monarquía, ya de paso, ya para residir más ó menos tiempo, conservando siempre su nacionalidad, sino tambien cuanto se refiere á la naturalizacion de aquellos que quier~~an~~ obtenerla en estos Reinos y á las formas de obtener carta de naturaleza ó vecindad, medios únicos establecidos con este intento por la Constitucion del Estado para adquirir los derechos inherentes á los súbditos españoles. Pero estas disposiciones son en cierto modo peculiares de la legislacion interior de la Monarquía, en cuanto no se enlace con derechos que pueden reclamarse á nombre de otro Gobierno.

El Ministro que suscribe no ha intentado formar una ley nueva en este ramo, sino reunir en una sola disposicion cuanto se halla hoy prevenido res

pecto á los extranjeros. Sólo ha introducido aquellas alteraciones y modificaciones absolutamente indispensables para conseguir su designo por el medio más breve y expedito.

Por las disposiciones que se proponen no se dará á los tratados más fuerza que la que natural y legítimamente tengan en la actualidad, ni se levantará un obstáculo á las reformas que el Gobierno pueda tener por conveniente hacer en cualquier tiempo en todas sus leyes. De este modo se ha procedido á la formacion del proyecto de Real decreto sobre extranjería — que es adjunto. Respetando las bases establecidas en las leyes, se ha adoptado la clasificacion de los extranjeros en domiciliados y transeuntes.

En cuanto á las reglas que han de observarse para el ingreso y residencia de aquéllos en España, el proyecto se limita á reunir y regularizar lo que se hallaba prevenido en nuestra legislacion recopilada y disposiciones posteriores con las solas aclaraciones ó alteraciones que en el transcurso del tiempo y las reformas practicadas hacian indispensables.

Todavía quedará en esta parte algo que añadir; pero siendo exclusivamente pormenores para la ejecucion de los principios establecidos, deberá verificarse por medio de las instrucciones y reglamentos oportunos, etcétera, etc.

REAL DECRETO

Teniendo en consideración las razones que me ha expuesto mi primer secretario de Estado, de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

CAPITULO PRIMERO

De los extranjeros y su clasificación en España.

Artº. 1º Son extranjeros:

I. Todas las personas nacidas de padres extranjeros fuera de los dominios de España.

II. Los hijos de padre extranjero y madre española nacidos fuera de estos dominios, si no reclaman la nacionalidad de España.

III. Los que han nacido en territorio español de padres extranjeros ó de padre extranjero y de madre española, si no hacen aquella reclamación.

IV. Los que han nacido fuera del territorio de España de padres que han perdido la nacionalidad española.

V. La mujer española que contrae matrimonio con extranjero.

Como parte de los dominios españoles, se consideran los buques nacionales sin distinción alguna.

Artº. 2º Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza ó ganado vecindad, con arreglo á las leyes, son tenidos españoles.

Artº. 3º. Todos los demás que residan en España sin haber adquirido carta de naturaleza ni ganado vecindad, son extranjeros domiciliados ó transeúntes.

Artº. 4º. Se entenderán domiciliados, para los efectos legales, aquellos que se hallen establecidos con casa abierta ó residencia fija ó prolongada por tres años y bienes propios ó industria y modo de vivir conocido en territorio de la Monarquía, con el permiso de la autoridad superior civil - de la provincia.

Artº. 5º. Se considerarán transeúntes, los extranjeros que no tengan su residencia fija en el Reino del modo que expresa el artículo anterior.

CAPITULO II

De las disposiciones que han de observarse para el ingreso y residencia de los extranjeros en España.

Artº. 6º. Para ingresar en territorio español, deberá todo extranjero presentar en el primer puerto ó pueblo fronterizo adonde llegue el pasaporte visado por el agente del Gobierno español á quien corresponda; la autoridad local refrendará este pasaporte en los términos acostumbrados.

Artº. 7º. Ningún extranjero podrá viajar por el Reino con pasaporte de la Legacion, ó Consulado de su Nacion, sino cuando ingrese en el territorio español ó cuando salga del mismo.

Artº. 8º. El extranjero transeunte que desee domiciliarse, deberá solicitar la correspondiente licencia de la autoridad superior civil de la - provincia, haciendo constar que reúne las circunstancias prevenidas en el artº. 4º.

Artº. 9º. En los Gobiernos civiles de todas las provincias se formarán y llevarán matrículas ó registros en que se asienten los nombres y circunstancias de los extranjeros que residieren ó vinieren á residir en el - Reino, con separacion de las dos clases de transeuntes y domiciliados.

Artº. 10º. En los Consulados de todas las Naciones extranjeras establecidas en España, se formarán y llevarán igualmente matrículas ó registros de los súbditos de la Nacion respectiva.

Estas matrículas han de confrontarse con las de los Gobiernos civi-les, pues sólo cuando estén conformes con aquéllas y arregladas á las formas prescritas en España, podrán surtir efectos legales en el Reino.

Artº. 11º. Las matrículas de los Gobiernos civiles y las de los consules extranjeros, se confrontarán anualmente.

Artº. 12º. No tendrán derecho á ser considerados como extranjeros en ningun concepto legal, aquellos que no se hallen inscritos en las clases - de transeuntes ó domiciliados en las matrículas de los Gobiernos de las provincias y de los cónsules respectivos de sus Naciones. Las inscripciones se

renovarán en el caso de pasar el extranjero de la clase de transeunte á la de domiciliado.

Artº. 13º. El extranjero que, en contravencion á las disposiciones - que preceden, se introdujese en España sin presentar el pasaporte, podrá - ser castigado como desobediente á la autoridad con la multa de 100 á 1.000 reales y expulsado, además, del territorio español, si el Gobierno así lo determinase, en vista de lo que la autoridad civil informe por el Ministerio de la Gobernacion y se acuerde en su consecuencia por este mismo y por el Ministerio de Estado.

Artº. 14º. Cuando algún extranjero llegue á algun puerto ó pueblo de la frontera, sin el correspondiente pasaporte, será detenido por las autoridades españolas, que deberán inmediatamente dar cuenta al Gobierno por - el Ministerio de la Gobernacion, expresando las circunstancias del extranjero y si es vago ó si busca auxilio contra los procedimientos de sus jueces naturales. El Gobierno, con este conocimiento, y procediendo siempre definitivamente para estos asuntos, de acuerdo los Ministerios de Estado y Gobernacion, determinará la expulsion del extranjero, designará el punto de su residencia ó dispondrá lo que juzgue más conveniente.

Artº. 15º. Lo mismo se practicará cuando lleguen á España grupos ó - cuerpos de emigrados, hasta que el Gobierno designe punto de depósito y lo demás que juzgue conveniente, sin perjuicio que desde luego entreguen las

armas los que se hubiesen presentado armados.

Artº. 16º. El extranjero que desobedezca la orden para su expulsion del Reino, quedará sujeto á la pena designada en el art. 285 del Código, - considerándose al efecto la desobediencia grave y como asunto del servicio público la orden de la expulsion, sin perjuicio de que ésta se lleve á efecto después de ejecutada la pena.

CAPITULO III.

De la condicion civil de los extranjeros domiciliados y transeuntes; sus derechos y obligaciones.

Artº. 17º. Todos los extranjeros, así avecindados como transeuntes, tendrán derecho de entrar y salir libremente de los puertos y poblaciones de España y de transitar con igual libertad en su territorio, sujetándose á las reglas establecidas por las leyes para los súbditos españoles, así como á los reglamentos de puertos y policía.

Artº. 18º. Pueden tambien adquirir y poseer bienes inmuebles, ejercer las industrias y tomar parte en todas las empresas que no estén reservadas por las leyes y disposiciones vigentes á los súbditos españoles.

Artº. 19º. Los extranjeros domiciliados pueden ejercer el comercio - por mayor y por menor bajo las condiciones que para los españoles establecen las leyes y reglamentos, y tendrán derecho á disfrutar de todos los —

aprovechamientos comunes del pueblo en donde tengan su domicilio.

Artº. 20º. Los transeuntes podrán hacer el comercio por mayor, con sujecion á las leyes y disposiciones que rigen en el Reino.

Artº. 21º. Así los domiciliados como los transeuntes, están obligados al pago de los impuestos y contribuciones de todas clases que correspondan á los bienes raíces de su propiedad y al comercio ó industria que ejercieren con arreglo á las disposiciones y leyes generales del Reino.

Artº. 22º. Los domiciliados estarán sujetos, además, al pago de los préstamos, donativos y toda clase de contribucion extraordinaria ó personal de que estarán exceptuados los transeuntes, así como á los impuestos municipales, vecinales y provinciales.

Artº. 23º. Unos y otros estarán exentos de las cargas concejiles personales. Pero los domiciliados que tengan casa abierta por sí, estarán sujetos á las cargas de alojamiento y bagajes.

Artº. 24º. Así los domiciliados como los transeuntes y sus hijos, cuando no hayan optado por la nacionalidad española, estarán exentos del servicio militar.

Esta excepcion no alcanza á los nietos cuando sus padres han nacido ya en territorio español, aunque conserven la nacionalidad extranjera.

Artº. 25º. Ningun extranjero podrá profesar en España otra religion -

que no sea la católica, apostólica y romana.

Artº. 26º. No podrán tampoco participar de los derechos políticos pertenecientes á los españoles, ni obtener beneficios eclesiásticos de ninguna clase, ni pescar en las costas de España, ni hacer con sus buques el comercio de cabotaje.

Artº. 27º. Tampoco podrán los extranjeros ejercer los derechos municipales en las elecciones para los Ayuntamientos, ni obtener cargos municipales ni empleo en las diversas carreras del Estado, si no renuncian expresamente, por sí y por sus hijos, la exención del servicio militar y á toda protección extraña en lo relativo al servicio de sus cargos.

para hacer esta renuncia, que se verificará ante la autoridad civil superior de la provincia y de la cual se harán las anotaciones correspondientes en las matrículas respectivas, debe hallarse inscrito con anticipación en la clase de extranjero domiciliado.

Artº. 28º. En los abintestados de los extranjeros domiciliados y transeúntes, la autoridad local, de acuerdo con el cónsul de la Nación del finado, formará el inventario de los bienes y efectos y adoptará las disposiciones convenientes para que estén en segura custodia hasta que se presente el heredero legítimo ó la persona que legalmente le represente.

Así en este caso como en los de sucesiones testamentarias, sólo cono-

cerán los Tribunales de las reclamaciones que ocurran sobre embargo de bienes de acreedores y cualquiera otra que tenga por objeto, el cumplimiento de las obligaciones ó responsabilidades contraídas en España ó á favor de súbditos españoles.

Artº. 29º. Los extranjeros domiciliados y transeuntes están sujetos á las leyes de España y á los Tribunales españoles por los delitos que cometan en el territorio español y para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan en España ó fuera de España, siempre que sean á favor de - súbditos españoles.

Artº. 30º. Mientras que una nueva organizacion de los Juzgados y Tri**bu**nales del Reino y de las diversas jurisdicciones no lo impida, conocerán en primer instancia de los pleitos y causas contra los extranjeros domiciliados y transeuntes, los gobernadores de las plazas marítimas y los capitanes generales en los demás puntos, y en las segundas y demás instancias sucesivas, el Tribunal Supremo de Guerra y Marina y de extranjería.

Artº. 31º. El fuero de extranjería de que habla el artículo anterior, es meramente pasivo y no gozarán de él los extranjeros domiciliados y transeuntes, en los casos siguientes:

I. En los delitos de contrabando.

II. En los juicios que procedan de operaciones mercantiles.

II. En los juicios que procedan de operaciones mercantiles.

III. En los delitos de sedicion y los demás que deben ser juzgados -
acon arreglo á la ley de 17 de Abril de 1821.

IV. En los delitos cometidos á bordo y en alta mar y en los juicios
de presAs.

V. En las causas por tráfico de negros.

VI. En los juicios de faltas, en que, segun el Código penal, no lo -
gozan los españoles de ninguna condicion ni estado. En todos estos casos -
serán competentes para juzgar á los expresados extranjeros los Trinunales
y jueces establecidos respectivamente por las leyes.

Artº. 32º. Los extranjeros domiciliados y transeuntes, tienen derecho
á que por los Tribunales españoles se les administre justicia, con arreglo
á las leyes, en las demandas que entablen para el cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas en España ó que deban cumplirse en España, ó cuando -
versen sobre bienes sitos en territorio español.

Artº. 33º. En los negocios entre extranjeros ó contra extranjeros, -
aunque no procedan de acción real, ni acción personal, por obligaciones con-
traídas en España, serán, sin embargo, competentes los jueces españoles -
cuando se trate de evitar un fraude ó adoptar medidas urgentes y provisio-
nales para detener á un deudor que intente ausentarse, á fin de eludir el -

pago ó para la venta de objetos expuestos á perderse en almacenes ó para -
proveer interinamente de guardador á un demente ó otros análogos.

Artº. 34º. A los exhortos de los jueces extranjeros se dará cumplimiento
to en todo aquello que puede y debe ejecutarse en el Reino, con arreglo á
las leyes cuando vengan por el Ministerio de Estado con las formalidades y
requisitos de costumbre. Por el mismo Ministerio se remitirán los exhortos
para las autoridades extranjeras, estos exhortos, cuyo cumplimiento no ha
de hacerse por los cónsules españoles, se dirigirán precisamente á los Tribu
bunales, jueces y autoridades extranjeras que deban ejecutar las diligen—
cias que se encarguen.

Artº. 35º. Son válidos y causan ante los Tribunales españoles los —
efectos que procedan en justicia, los contratos y demás actos públicos ce-
lebrados fuera del Reino cuando concurren las circunstancias que expresa el
R.D. de 17 de Octubre de 1851.

CAPITULO IV

De los buques extranjeros.

Artº. 36º. Los buques pertenecientes á cualquiera de las Naciones ó
potencias extranjeras, podrán acogerse á los puertos españoles.

Cuando lleguen por arribada forzosa, serán auxiliados por las autori—
dades españolas sin más restricciones que las necesarias para evitar el —

fraude ó contagio.

No se privará á los buques de sus tripulaciones, antes bien serán — restituidos á su bordo los desertores, cuando fuere posible su aprehensión.

Artº. 37º. Los buques mercantes extranjeros no podrán servir de asilo á los criminales españoles, y cuando se refugiasen á bordo, las autoridades españolas, de acuerdo con el cónsul respectivo, podrán proceder á la extradición.

Artº. 38º. Respecto del asilo tomado por los criminales españoles en los buques de guerra extranjeros, se procederá á reclamar la extradición — por la vía diplomática, con sujeción á las leyes y tratados vigentes.

Artº. 39º. Cuando á bordo de un buque mercante anclado en puerto español ocurra algún exceso que pueda perturbar la tranquilidad pública ó atentar contra la seguridad interior ó exterior del Estado, la autoridad local competente tendrá derecho á intervenir y conocer para precaver y reprimir aquellos excesos. Si éstos atacan exclusivamente la disciplina interior — del buque, su capitán procederá según estime conveniente y obtendrá auxilio de las autoridades españolas si lo reclama.

Art. 4º. En los casos de naufragio de un buque extranjero, las autoridades de Marina, sin que por ninguna otra deba suscitarse competencia y dar ocasion á entorpecimientos, daños y reclamaciones trascendentales, an—

tes bien recibiendo aquella autoridad el auxilio de todas las demás, proveerán á todo cuanto fuere necesario para el salvamento de las personas del buque y de su carga, procediendo en todo de acuerdo con el capitán del buque y el cónsul de la Nación respectiva, si en aquel punto lo hubiere.

A falta de cónsul en el punto de naufragio, podrá el más inmediato nombrar persona que con poder bastante lo represente.

Los extranjeros están exentos, así como los súbditos españoles en la actualidad, de pagar cantidad alguna por razón de costas ó derechos procesales en las actuaciones, expedientes ó procedimientos que se formen con motivo del naufragio y salvamento.

Deberán satisfacer únicamente, como los súbditos españoles, los gastos que se causen por razón del salvamento del mismo.

En el caso de que se altere la legislación y disposiciones vigentes, ni en ningún otro, los extranjeros no tendrán obligación de pagar nunca por razón de salvamento derechos más crecidos que aquellos que paguen los súbditos españoles; pero podrá detenerse la entrega de los efectos salvados hasta que se satisfagan los derechos correspondientes ó se asegure el reintegro por medio de fianza bastante.

CAPITULO V

Disposiciones generales

Artº. 42º. Todas las disposiciones del presente decreto son únicamente aplicables á la Península é islas adyacentes, subsistiendo en su fuerza y vigor, en las provincias de Ultramar, las disposiciones que allí rigen - sobre extranjeros.

Artº. 42º. No alteran tampoco las leyes respecto de los Embajadores, Ministros plenipotenciarios y demás individuos dependientes de las Legaciones extranjeras.

Artº. 43º. Los súbditos de la Sublime Puerta, los moros de Marruecos y los de las regencias berberiscas, serán juzgados por los respectivos cónsules en los negocios que entre ellos ocurran, con arreglo á los tratados y disposiciones vigentes.

Artº. 44º. Los derechos de los extranjeros que adquirieran nacionalidad española por obtener carta de naturaleza ó ganar vecindad con arreglo á la Constitución, así como las formalidades y condiciones para obtenerla, se - fijarán en una disposición especial.

Artº. 45º. El extranjero que obtuviere naturalización en España, así como el español que la obtuviere en el territorio de otra potencia sin el conocimiento y autorización de su Gobierno respectivo, no se libertará de

las obligaciones que eran consiguientes á su nacionalidad primitiva, aunque el súbdito de España pierda en otro concepto la calidad de español, con arreglo á lo dispuesto en el párrafo 5º, art. 1º de la Constitución de la Monarquía.

En consecuencia de esta declaración, cuando un extranjero se haya - naturalizado en España sin autorización de su Gobierno y pretenda por este medio eximirse de las obligaciones del servicio militar ó otras que le correspondieran en su patria primitiva, el Gobierno español no sostendrá la exención, así como no la reconocerá en un español que alegase cambio de su nacionalidad sin haber obtenido la autorización expresada.

Dado en Palacio á 17 de Noviembre de 1852.

- Está rubricado por la Real mano.- El Ministro de Estado, Manuel - Bertrán de Lis". (C.L., t. LVII, pág. 479).

Real Decreto de la Unificación de Fueros de 6 de Diciembre de
1.868. (TITULO I) (62)

Apenas realizado en la nación un cambio político de tanta magnitud y tanta trascendencia como el del Septiembre de 1.868, cuando se publicó en 6 de diciembre siguiente un decreto, que después recibió carácter de ley y tuvo por objeto establecer la suspirada unidad de fueros. He aquí su texto literal:

TITULO PRIMERO

DE LA REFUNDICION DE LOS FUEROS ESPECIALES EN EL ORDINARIO.

Artículo 1º - Desde la publicación del presente decreto, la jurisdicción ordinaria será la única competente para conocer:

1º - De los negocios civiles y causas criminales por delitos comunes de los eclesiásticos, sin perjuicio de que el gobierno español concuerde en su día con la Santa Sede lo que ambas potestades crean conveniente sobre el particular.

2º - De los negocios comunes, civiles y criminales de los aforados de Guerra y Marina de todas clases, retirados del servicio, y de los de sus mujeres, hijos y criados, aunque estén en activo.

3º - De los delitos comunes cometidos en tierra por la gente de mar y por los operarios de los arsenales, astilleros, fundiciones, fábricas y parques de Marina, Artillería e Ingenieros fuera de sus respectivos establecimientos.

(62) ALONSO Y COLMENARES, E. "Jurisdicciones especiales". Tomo I, Madrid, 1884.
 de Marina, Artillería e Ingenieros fuera de sus respectivos establecimientos.

4º. De los delitos contra la seguridad interior del Estado y del orden público, cuando la rebelión y sedición no tengan carácter militar, de los de atentado y desacato contra la Autoridad, tumultos ó desórdenes públicos y sociedades secretas; de los de falsificación de sellos, marcas, moneda y documentos públicos, de los delitos de robo en cuadrilla, adulterio y estupro; de los de injuria y calumnia a personas que no sean militares; de los de defraudación de los derechos de Aduanas y contrabando de géneros estancados ó de ilícito comercio, cometido en tierra, y de los perpetrados por los militares antes de pertenecer a la milicia, estando dados de baja en ella, durante la desertión o en el desempeño de algún destino o cargo público.

5º. De las faltas castigadas en el libro III del Código Penal, excepto aquellas a las que las Ordenanzas, Reglamentos y bandos militares del Ejército y Armada señalan una mayor pena cuando fuesen cometidas por militares, que serán de la competencia de la jurisdicción de Guerra y la de Marina.

6º. De los negocios civiles y causas criminales de los extranjeros domiciliados o transeúntes.

7º. De los negocios de Hacienda y de los delitos de contrabando, defraudación y sus conexos, excepto el de resistencia armada a los Resguardos de costas.

8º. De los negocios mercantiles.

S U M A R I O

	<u>Pág.</u>
- ADVERTENCIA PRELIMINAR.....	1
- Capítulos de Privilegios concedidos a las ciudades con federadas de la Hansa Teutónica de 28 de Septiembre de 1607	2
- Transacción ajustada y convenida entre fu Magestad Ca- tholica y los diputados de las Ciudades Confederadas de la Hansa Teutónica de 7 de Noviembre de 1.607	15
- Ley 1ª, Título 11, Libro 6º. De los extranjeros domici- liados y transeúntes en estos reinos. Don Felipe IV en Madrid en los capítulos de reformatión de la prag- mática del año de 1.623.....	29
- Real Cédula de Felipe IV de 19 de Marzo de 1.645	31
- Real Cédula de Felipe IV de 26 de Junio de 1.645	42
- Real Cédula de Felipe IV de 9 de noviembre de 1645	46
- Tratado ajustado entre los Plenipotenciarios de S.M. - Catholica y los Diputados de las Ciudades Hanseáticas concluido en Muster a 1 de septiembre de 1647.....	54
- Tratado definitivo de paz y comercio, ajustado entre - S.M.C. y los Estados Generales de las Provincias Unidas en el congreso de Munster de Westfalia a 30 de enero de 1.648.....	82.
- Tratado de renovación de Paz, Alianza y Comercio entre las Coronas de España y de la Gran Bretaña de 23 de Ma- yo de 1.667	117

II.

- Tratado de Paz, ajustado entre los Reyes de España y Portugal por mediación de Carlos II, Rey de la Gran Bretaña, hecho en Lisboa en el Convento de San Eloy a 13 de febrero de 1.668	161
- Capítulos ajustados por la Justicia, Ayuntamiento, y Vecindario de la villa de Santander, con diferentes Comerciantes de la Nación Inglesa, de 12 de Septiembre de 1.700	179
- LEY II. Facultad de residir en estos Reinos los extranjeros católicos que tengan las calidades que se previenen y expulsión de los que se hallaren sin ellas. D. Felipe V en Madrid por bando de 16 de junio de 1.703	199
- Tratado de Comercio celebrado entre España y la Gran Bretaña en Madrid a 13 de julio de 1.713, como fundamento ó preliminar de los que se concluyeron en el mismo año entre las dos Coronas	201
- Tratado de comercio y amistad ajustado entre las coronas de España y de la Gran Bretaña el 9 de diciembre de 1713 en el Congreso de Utrecht.	229
- LEY I - Fuero militar y personas que deben gozar de él, con las limitaciones que se expresan, D. Felipe V, en Buen Retiro por dec. de 25 de abril de 1714, cap.6 y por otro de 25 de agosto de 1715 cap. 22 a 25, comprehensivos de nuevas plantas del Consejo de Guerra.....	255
- Tratado de Paz y amistad ajustado entre la Corona de España y los Estados generales de las Provincias unidas de los países Bajos en el Congreso de Utrecht el 26 de junio de 1.714	258

III.

- Tratado de paz y amistad ajustado entre España y el Portugal en Utrech a 6 de febrero de 1.715	284
- Tratado esplanatorio de los de paz y comercio ajustados entre España e Inglaterra en el año de 1.713 concluido en Madrid en 14 de diciembre de 1.715	300
- LEY 3ª. TITULO 11. LIBRO 6º (NOVISIMA RECOPIACION) D. Felipe V por resolución a consulta de la junta ~ de extranjeros de 8 de marzo de 1.716	304
- Decreto de 3 de noviembre de 1.721 sobre la Junta de Extranjería	306
- Real Decreto de 6 de Febrero de 1.724: Jurisdicción del Consejo de Guerra.....	308
- LEY IV. Modo de proceder las Justicias Ordinarias en los abintestatos de los Ingleses Transedntos que mueran en España y el inventado de sus bienes. Dec. de ~ 20 de noviembre de 1.724	309
- Tratado de comercio y de navegación entre el rey de ~ España don Felipe V y el emperador de Alemania Carlos VI concluido en Viena el 1 de mayo de 1725	311
- LEY 5ª. Libro 6º de la Novísima Recopilación. Felipe V en Madrid a 7 de julio de 1727. Jurisdicción de los ~ Jueces conservadores de extranjeros	341
- Decreto de 5 de febrero de 1731 sobre nombramiento pa~ ra la Junta de Extranjería	345
- Tratado de amistad, navegación y comercio, concluido en el real Sitio de San Ildefonso entre las Coronas de España y de Dinamarca el 18 de julio de 1742	346
- Tratado de indemnizaciones y comercio entre las Coro~	

nas de España y de la Gran Bretaña concluido y firmado en Madrid a 5 de octubre de 1750.....	368
- Real Decreto de 21 de diciembre de 1759 para que las causas de ilícito comercio de extranjeros transeúntes pertenezcan a la jurisdicción de rentas	374
- Tercer pacto de familia entre los reyes de España y Francia, Carlos III y Luis XV, concluido y firmado en París el 15 de agosto de 1.761	377
- Real Orden de 1º de diciembre de 1761, para que el gobernador de Cádiz conozca de las causas de extranjeros transeúntes.	394
- Real Orden de 10 de marzo de 1.762, aclarando la inteligencia de la resolución del año 16 sobre extranjeros transeúntes	396
- Real cédula de 28 de junio de 1764 para que anualmente se forme una lista de extranjeros, con expresión de los transeúntes y domiciliados	398
- Reglamento sobre requisitos para el establecimiento de Cónsules y Vice-Cónsules, exenciones y uso de sus facultades, Dec. de 1 de Febrero de 1.765	400
- LEY XIV, Exenciones y preeminencias del fuero militar y declaración de las personas que lo gozan, Ordenanzas militares de 22 de Octubre de 1768, trat. 8. tit. 1	403
- Real Ordenanza de 17 de marzo de 1773	410
- Real Orden de 15 de septiembre de 1775, para que el capitán general de Andalucía no se mezcle en las causas de extranjeros que corresponden al gobernador de Cádiz	415
- Tratado de amistad, garantía y comercio ajustado entre las coronas de España y Portugal, y firmado en el Pardo el 24 de Marzo de 1778	417

- Ley 7ª. TITULO II. Libro 6º. D. Carlos III en San Lorenzo por Real Orden de 20 de noviembre de 1.778	433
- Real Orden de 15 de Marzo de 1.781, para que el jugado de extranjeros de Cádiz se conservase separado sin embargo de haberse unido la capitanía general y el gobierno.....	434
- Tratado de paz, amistad y comercio entre España y la Puerta Otomana, firmado en Constantinopla el 14 de septiembre de 1.782	436
- Ley 8ª. Título 36. Libro 12 de la Nov. Recop. D. Carlos III, por resolución a consulta de 1ª y cédula del consejo de 24 de Octubre de 1.782	451
- Tratado de paz definitivo entre las coronas de España e Inglaterra firmado en Versalles el 3 de septiembre de 1.783	453
- LEY 8. TITULO II, LIBRO 6º. Don Carlos IV por real resolución y orden de 12 de julio de 1.791, y cédula del consejo de 20 de mismo mes	467
- LEY 9ª. TITULO II. Libro 6º. Don Carlos IV por instrucción de 21 de julio de 1.791.....	471
- LEY 10. TITULO 11. LIBRO 6º. Don Carlos IV por Real Resolución y cédula del consejo de 29 de noviembre de 1791	476
- LEY XXIII. Reglas para evitar competencias entre las jurisdicciones ordinaria y militar. Real Resol. a cons. del Consejo de Guerra de 26 de febrero comunicada al de Castilla en 24 de abril de 1796	477
- Real orden de 6 de julio de 1.807 sobre matrícula y juramento de los extranjeros	479

- Real Orden de 28 de julio de 1.807 permitiendo a los franceses que al formarse la matrícula de extranjeros elijan la condición de avocindados ó transeúntes	481
- Real orden expedida por la Secretaría de Estado y del despacho en 6 de julio de 1.815	483
- Circular del Ministerio de Hacienda de 30 de octubre de 1.815	484
- Circular del ministerio de Hacienda de 10 de abril de 1817	485
- Real Orden de fecha de 17 de julio de 1.819	486
- Real Orden de 14 de agosto de 1.825	488
- Real Orden de 20 de diciembre de 1836, mandando formar un padrón de todos los extranjeros que viajen y residan en la Península.....	491
- Real Orden de 11 de agosto de 1837, por la que se clarifican los extranjeros y se determinan sus fueros	493
- Ministerio de Estado.- Real Orden de 13 de Octubre de 1839 para que no se incluyan en quinta los súbditos franceses residentes en España	496
- Real orden de 28 de abril de 1.840	499
- Real Orden de 12 de abril de 1.841	501
- Real Orden de 18 de abril de 1.843	503
- Real Orden de 7 de noviembre de 1.846	505
- R.D. de 17 de noviembre de 1.852	507
- Real Decreto de la Unificación de Fueros de 6 de diciembre de 1.868 (Titulo I)	523